



Fernando González-Camino

Alta es la noche

Centroamérica ayer,
hoy y mañana



Fernando González-Camino nació en Santander, en 1936. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid e ingresó en la Escuela diplomática en 1962. Ocupó distintos cargos en las embajadas de Yaundé (1965), París (1968) y Rabat (1972). Ha sido director de Relaciones Económicas con América (1976), Ministro Consejero en México (1977), Ministro Consejero en Dublín (1980), y Embajador en Tegucigalpa (1984). En la actualidad es Embajador en Santo Domingo, cargo que ocupa desde 1988.

Desde la unidad de la vieja Capitanía General de Guatemala hasta la dispersión y la consumación de las cinco independencias; desde la autosuficiencia cultural y económica hasta la moderna dependencia, inestabilidad y estallido social, todo es descrito con indubitable conciencia por Fernando González-Camino. La reflexión sobre la lucha en Centroamérica entre el continuismo y el deseo de cambio, rupturista o evolucionista, especialmente analizada en la época actual, a partir de la década de los setenta, no es sino un intento de ilustración global de los actuales problemas de Centroamérica, explicación que se hace partiendo de la herencia de ayer y con acribos de las proyecciones de futuro.



La sociedad de la Colonia vivió a ritmo pausado y sin grandes cambios, hasta la llegada de los Habsburgo. Con la llegada de los Habsburgo al poder se produjo una etapa de profunda transformación social, económica y cultural, que se caracterizó por el auge de la cultura barroca en la América española. Tanto en literatura como en arte, se desarrolló una nueva estética que reflejó el esplendor de la monarquía de España durante el reinado de Felipe II y el declive de la potencia de España durante el reinado de Felipe III.

Esta época vivió la influencia que el pensamiento francés ejerció en la cultura del siglo XVIII, que se manifestó en la aparición de la Ilustración, un movimiento intelectual que buscaba el progreso a través de la razón y la ciencia.

Alta es la noche
Centroamérica ayer, hoy y mañana

Provincias como la Corona de Guatemala, la de México, La Habana, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Nueva Granada fueron también beneficiarias de los nuevos cambios.

Guatemala tuvo su primera imprenta en 1543, después de Nápoles, Puebla y Lima.

Los funcionarios españoles ejercieron diversas influencias políticas y económicas, tanto en la Administración de la Colonia, con la creación de nuevas instituciones, como en la vida social, respondiendo a las quejas de la metrópoli. —los impuestos no pagados por el pueblo—, de las castas indígenas —su participación en el gobierno de la Colonia—, y para prepararse también frente a la competencia extranjera.

Los primeros colonos comenzaron a poblar el valle de la Cumbre, los cerros de Guatemala, Guadalupe y otros territorios de Yucatán y otras zonas, con la Orden del Virreinato de Nueva España. Los franciscanos, Agustinos, Mercedarios y jesuitas crearon diversas instituciones educativas. Se comenzó a fundar el Colegio de San Carlos y se crearon otras instituciones de enseñanza que no tuvieron llegada a la ciudad adulta. Se establecieron escuelas para la infancia, particularmente en los parroquias indígenas, y se fundó el Colegio de San Carlos de Guatemala a la categoría de Archidiócesis en 1741. Los jesuitas ejercieron la educación de los jesuitas en 1763, que produjo la expulsión de los jesuitas de toda Centroamérica. Todas estas medidas lograron llevar al crecimiento de la población indígena, que había alcanzado proporciones importantes.

Desde el siglo XVI comenzó a introducirse el comercio en Centroamérica. En el siglo XVII, los jesuitas, y especialmente los jesuitas, introdujeron el comercio y comenzaron a vender directamente muchos productos en las zonas de Guatemala y Honduras. Los jesuitas lograron establecer relaciones comerciales con el Virreinato de Nueva España y pudieron realizar relaciones comerciales con los Indios Méxicos, desde donde realizaron operaciones con Huitzilacoatl y Costa Rica.

La respuesta de la administración española no fue solamente militar. Desde 1711 se inició una reorganización de la Casa de Contratación de Sevilla, que terminó con el monopolio del comercio de Sevilla y Cádiz. Se abrió el comercio cerrado a un amplio número de puertos y de mercancías, con la intención de buscar alternativas al

© Fernando González-Camino

EDICIONES DE CULTURA HISPANICA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL
Avda. Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid

Diseño de la colección y portada: Alberto Corazón

NIPO: 028-89-065-2

ISBN: 84-7232-516-4

Depósito legal: M. 11.076/1990

Impreso en Fernández Ciudad, S.L.
Catalina Suárez, 19. 28007 Madrid

INDICE GENERAL

«A Itos, siempre a Itos»

INDICE GENERAL

Aviso al lector a modo de prólogo	13
I. El país del posible la capitania y la audencia de los confines	19
II. De la mano a la disgregación y del cacique al castillo	41
III. La reforma cultural o el triunfo del liberalismo	53
IV. Del sistema azucarero a la dependencia	75
V. El cuadripartito depresivo	91
VI. La señal de alerta	119
VII. La receta: integración y desarrollo	125
1. El estado de desarrollo social	139
2. La ampliación del mercado mediante la integración	146
3. Desarrollar la Altierra para el Progreso	148
VIII. Seguridad Nacional o Seguridad Ciudadana	149
1. La Doctrina de la Seguridad Nacional	153
2. Los desechos fumados de Carrer	156
3. La tragedia de la liberación y la ecología del hecho	157
Guatemala, sociedad socialista	159
El Salvador, o la rebelión de los amos	164
Honduras, militares y transnacionales	167
Costa Rica, el hecho paraguasero	172
Nicaragua, desamortización de las tierras	174
Nota	176
IX. «No pasados»	181
1. La Doctrina Reagan	187
1.1. La iniciativa de la Comisión del Caribe	190
1.2. Ayuda militar y contraemergencia	194
2. La contra	195
2.1. Estructura de la contra	200
2.2. El papel de Honduras	203
2.3. Perspectivas	205

Aviso al lector a modo de Prólogo	13
I. El peso del pasado: la capitania y la audiencia de los confines	19
II. De la unión a la disgregación y del cacique al caudillo	41
III. La reforma cafetalera o el triunfo del liberalismo	53
IV. Del enclave bananero a la dependencia	75
V. El caudillismo depresivo	93
VI. La señal de alerta	119
VII. La receta: integración y desarrollo	135
1. El modelo de desarrollo «aditivo»	139
2. La ampliación del mercado mediante la integración	142
3. Desarrollo: la Alianza para el Progreso	145
VIII. Seguridad Nacional o Seguridad Ciudadana	149
1. La Doctrina de la Seguridad Nacional	155
2. Los derechos humanos de Carter	156
3. La teología de la liberación y la teología del éxito	157
Guatemala, «societas sceleris»	159
El Salvador, o la rebelión de las «masas»	164
Honduras, militares y transnacionales	169
Costa Rica, el faro parpadeante	172
Nicaragua, desamortización de «la finca»	174
Notas	178
IX. «No pasarán»	183
1. La Doctrina Reagan	187
1.1. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe	190
1.2. Ayuda militar y contrainsurgencia	194
2. La «contra»	195
2.1. Estructura de la «contra»	200
2.2. El papel de Honduras	203
2.3. Perspectivas	205

3. La solución iberoamericana: Contadora	209
4. La reticencia al endoso de Europa Occidental	213
Nota	218
X. ¡Tire la toalla!	219
Conflictos de baja intensidad	223
Nicaragua. ¿Nuevo Cuba o viejo Vietnam?	225
El Salvador. «En nombre de Dios, cesen la represión»	236
Guatemala, largo camino hacia la democracia	242
Honduras, portaaviones U.S.A.	245
Costa Rica. El faro se ladea	250
Factores de unidad y hechos nacionales diferenciales	252
Notas	253
XI. ¿Es posible la paz?	259
Resurrección de Contadora	263
Condiciones para un arreglo	267
Perfiles de un posible marco de paz	271
1. Estados Unidos	272
2. Nicaragua	273
3. Honduras	274
4. El Salvador	275
5. Guatemala	276
6. Costa Rica	276
XII. El Plan Arias o cómo es posible la paz	279
Crónica de un proceso de pacificación	283
La fijación antisandinista de Reagan y su precio hemisférico	307
La Paz se negocia en Managua	309
Cambio de actores: exit Reagan	321
Epílogo	327
Abreviaturas	343

**AVISO AL LECTOR A MODO
DE PRÓLOGO**

quiere.
Miguel Hernández

Si no hablara lo mucho que quiero,
me ahogaría.

Miguel Hernández

Este no pretende ser un libro desapaionado, ni un estudio de los que, en
segunda instancia, desfilan críticas y halagos a similitudes, pero
tal modo que al final no soy tanto de culpa, porque no soy culpable, ni tampoco por el
desafío— el mundo es perfecto— ni deseo de cambio. Para que, si lo cambio lo
ocupemos los de siempre.

Este es un libro comprometido. Con el sufrimiento, la ignorancia, la marginación
de tantos mujeres y hombres de la época. Cientos de los que, desde
hace años, se van al «bajo vientre» de este Indio del Occidente Latinoamericano,
Hernández, y quienes, en el mundo que más de: Comprometido con esos mártires
y hombres de Guatemala, es, signo de un refinado juego de sutiles política donde unos
realizan opuestas y otros, a través la ignorancia, el hambre y... los muertos.

Esto dicho, el presente estudio pretende describir en una obra geográfica homoge-
nea, Centroamérica, las vidas habitadas a través los cinco países: Inguapitán del
viejo traves de la Guatemala General de Guatemala fuera unificado en una
situación de progreso avanzado de su autonomía económica, cultura social y
independencia política, carácter de desarrollo como dependencia. Sin olvidar, organiza-
ción, la explotación, o en sus formas internas —falta de unión de los respectivos
ríos y/o de concurrencias. De los países— o entre —grupos pertenecientes de las
Fuerzas Unidas en sus zonas de interacción, fomentando y, por tanto, de su vida
económica y desarrollo económico—. No se trata de identificar a uno al a verlos
vistos—yo que tal concepto tiene es de difícil aplicar en un mundo que no pretende
analizar el complejo fenómeno de la transformación humana— ni mucho menos de
justificar el espacio tridimensional del mismo, sino en una revolución.

Simplemente, se trata de explicar cómo a partir de una historia de degradación de la
calidad de vida, de una progresiva desfuncionalidad del sistema actual, que no es capaz
de satisfacer las mínimas exigencias, y de una pérdida creciente de la capacidad de
reintegración de su estructura institucional, se producen desajustes internos y
externos que se acogen a una forma insostenible de movilidad social que es el populismo y
utilizan en gran medida como elemento potenciador del subdesarrollo y la corrupción y
mitos del sistema revolucionario. Enfrentando al mismo tiempo al enemigo interno
—el status quo— y al externo, aliado de las fuerzas conservadoras, buscando de cambio
que en otras latitudes habrían podido realizarse sin dramáticos sacrificios en sus

Éste no pretende ser un libro desapasionado, objetivo, neutral, de los que, con exquisita maestría, dosifican críticas y halagos a situaciones, personajes y épocas, de tal modo que al final no hay tanto de culpa, porque no hay culpable, ni margen para el desaliento —el mundo es perfectible— ni deseos de cambio. Para qué, si la cancha la ocuparemos los de siempre.

Éste es un libro comprometido. Con el sufrimiento, la ignorancia, la marginación de tantas mujeres y hombres de la «grácil cintura» del continente americano que, desde hace años, es más bien el «bajo vientre» de esa India del Occidente-Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, el nombre que más da. Comprometido con esas mujeres y hombres de Centroamérica, objetos de un refinado juego de «alta» política donde unos realizan apuestas y ellos aportan la ignorancia, el hambre y... los muertos.

Esto dicho, el presente estudio pretende describir en una área geográfica homogénea, Centroamérica, las etapas históricas a cuyo través las cinco ramas desgajadas del viejo tronco de la Capitanía General de Guatemala fueron encuadrándose en una situación de progresivo deterioro de su autonomía económica, cohesión social e independencia política conocida comúnmente como dependencia. Sin limitar, simplísticamente, la explicación, a un solo factor interno —falta de visión de las respectivas élites y/o de concienciación de las bases—, o externo —enorme participación de los Estados Unidos en sus cuotas de mercado, financiación y, por tanto, en su vida económica y deambular nacionales—. No se trata de identificar a uno ni a varios villanos —ya que tal categoría ética es de difícil encaje en un ensayo que no pretende analizar el complejo entramado de la tragicomedia humana— ni mucho menos de justificar el espinoso tránsito del «buen salvaje al buen revolucionario».

Simplemente, se trata de explicar cómo a partir de una evidente degradación de la calidad de vida, de una progresiva disfuncionalidad del aparato estatal, que no es capaz de satisfacer los mínimos exigibles, y de una pérdida creciente de la capacidad de interlocución de su andamiaje institucional, se producen desesperados intentos rupturistas que se acogen a esa fuente inagotable de movilización social que es el patriotismo y utilizan en gran medida como elemento potenciador del encuadramiento la simbología y métodos del marxismo revolucionario. Enfrentando al mismo tiempo al enemigo interior —el status quo— y el externo, aliado de las fuerzas conservadoras. Intentos de cambio que en otras latitudes hubieran podido realizarse sin dramatismo adquirieron un tono

claramente rupturista por la inamovible cimentación de fuerzas internas y externas empeñadas en mantener las cosas tal cual siempre estuvieron, y por desarrollarse en un marco geográfico —el anfiteatro Caribe-Centroamérica— conocido a veces como el Mediterráneo norteamericano, o su patio trasero, o su escuela primaria en hegemonía.

Es este, pues, un intento de explicación global de la problemática centroamericana de hoy partiendo de la herencia de ayer y con bosquejos esquemáticos de su brumoso futuro.

Se parte para ello de una perspectiva que pretende ajustarse en lo posible al modo de pensar y sentir latinoamericanos. Teniendo en cuenta la condición de español del autor, ello podría conducir a curiosas piruetas desdobladoras de la personalidad. Largos años de permanencia en tierras latinoamericanas, y viejas vinculaciones familiares con sus gentes, podrían ayudar a que la acrobacia no terminara en desconyuntamiento.

He utilizado, siempre que he podido, bibliografía centroamericana. Y me he esforzado por suplir el limitado caudal de fuente de que dispuse con un elevado número de contactos personales durante mis casi cuatro años de estancia en tierras morazánicas.

Y, si «alta es la noche, Morazán vigila».

I AVISO AL LECTOR A MODO
DE PRÓLOGO

**El peso del pasado: la capitania
y la audiencia de los confines**

El II Ahau Katún, primero que se cuenta, es el katún inicial.	11
Ichcaansiho, Faz del nacimiento del cielo, fue el asiento del katún	19
en que llegaron los extranjeros de barbas rubicundas, los hijos del sol,	41
los hombres de color claro. ¡ay! Entristezcámonos porque llegaron.	53
Profecía de Chumayel y Tizimin en los Libros de Chilán Balán.	75
V. El asedio de los extranjeros	93
VI. La señal de guerra	119
VII. La cuenta: la guerra y el desarrollo	135
1. El modelo de desarrollo indígena	136
2. La explotación del mercado mediante la inmigración	142
3. Desarrollo de México por el Progreso	145
VIII. Seguridad Nacional o Seguridad Ciudadana	149
1. La Estrategia de la Seguridad Nacional	153
2. Los límites humanitarios de Carter	154
3. La tecnología de la guerra y la tecnología civil	157
Cambio de tecnología militar	159
Cambio de la relación de las armas	161
Nuevas armas y transformaciones	161
Cambio de la tecnología	172
Nuevas transformaciones de las armas	174
Cambio de la tecnología	176
IX. El fin del mundo	181
1. El fin del mundo	181
2. El fin del mundo de la Guerra del Caribe	190
3. El fin del mundo y la tecnología	194
4. El fin del mundo	195
5. El fin del mundo	200
6. El fin del mundo	201
7. El fin del mundo	205

Con el fin de consolidar su dominio sobre las tierras indianas, la Corona española consideró conveniente estimular a los conquistadores y a quienes vinieron a poblarlas concediendo privilegios, pero con la obligación de establecimiento en los nuevos dominios. Se ahorró de esta manera las fuertes sumas que hubiera supuesto una conquista y colonización como empresa estatal. Pero, al mismo tiempo, se sentaron los antecedentes de lo que con el tiempo serían sociedades duales, con un pequeño núcleo dominante, todopoderoso, y una gran masa pasiva y al margen de los circuitos económicos y de poder.

Se inició además, apenas consolidada la conquista, una tensión entre los intereses de los colonizadores y los de la Corona. Un forcejeo constante entre los funcionarios y los criollos, y una serie inacabable de conflictos entre las Audiencias-representantes de los intereses de la Corona, y los Ayuntamientos-representativos de los criollos.

La Conquista como suceso histórico fue idealizada vehementemente por los criollos, ya que tenían conciencia de disfrutar una posición que otros habían conquistado. Una línea genealógica directa con un conquistador era la mejor garantía de estabilidad en una posición privilegiada. Pero el tiempo trabajaba contra los criollos. Especialmente en forma de nuevos inmigrantes españoles, quienes se negaban a aceptar la conquista como base de privilegios hereditarios.

La larga disputa entre el poder centralizador, la Corona, y el poder local, los criollos, se puede observar examinando el desarrollo de dos instituciones coloniales de importancia básica: la *encomienda* y el *repartimiento*. El repartimiento consistía en el reparto de tierras y de los indios necesarios para trabajarlas, con la obligación de atender a su cristianización. Por ello, inicialmente, repartir tierras e indios y encomendarlos fue la misma cosa. Esta situación dio lugar a la comisión de toda clase de desmanes, pues ninguna instancia superior controlaba el trato. En esta etapa, la Corona no aprueba los abusos que se cometen en su nombre y envía constantes recomendaciones para que se tratase a los indios con cristiana benevolencia. Pero al ser la fiscalización, en esta primera etapa, prácticamente inexistente, la situación de los indios durante la misma fue cercana a la de un esclavo.

El repartimiento y la encomienda incentivaban la prosecución de la conquista y la llegada de nuevos inmigrantes, pero también concedía excesivo poderío a los colonos.

En esta situación de pugna velada Corona-criollos aparecen las órdenes religiosas. Ellas pondrán una nota de humanismo en los momentos posteriores a la conquista, asumiendo decididamente la defensa de los indios. Destaca en esta labor la Orden de

Santo Domingo y, dentro de ella, Fray Bartolomé de las Casas. Tanto clamó contra los títulos de la Conquista, y contra el trato dado a los indios, que Carlos V, primero, y Felipe II, después, promovieron disputas teológicas y jurídicas en torno a sus motivos y acabaron por darle la razón. La defensa que los dominicos hacían de los indios coincidía con la intención real de sacarlos de las manos de los conquistadores y convertirlos en siervos del Rey. *«No conviene a la seguridad del Estado de Vuestra Majestad que en la tierra firme de las Indias haya ningún gran señor, ni tenga jurisdicción alguna sobre los indios, sino Vuestra Majestad...»*

En noviembre de 1542 son promulgadas las Leyes Nuevas con la clara intención de cortar los abusos con los indios y poner en su lugar a los conquistadores y colonos.

Los indios eran considerados vasallos libres, tributarios del Rey. Se establecía la pena de muerte para quien se atreviese a esclavizarlos. Como dice Severo Martínez Peláez¹, *«se le quitaban todos los indios a quien los tuviera sin título a la vista. A quien, teniendo títulos, dispusiese de muchos indios, se le reducirían a número razonable. A quien, también teniendo título, se le comprobase que les daba mal trato, se le quitarían todos sin más averiguación. Igualmente se le quitarían todos los indios encomendados a quienes ejercieran oficios de autoridad. Las encomiendas que subsistiesen después de esta drástica selección quedarían transformadas en algo muy distinto de lo que habían sido antes: ya no un dominio directo sobre los indios, sino solamente el derecho a recibir de ellos una tributación tasada por la autoridad real. Quedaban suprimidos los servicios personales y nadie podría obligar a trabajar a los nativos contra su voluntad. Las encomiendas que, así modificadas, fuesen vacando por muerte del beneficiario, pasarían a la Corona; se prohibía heredarlas.»*

La conmoción creada en las colonias fue indecible. Todos, salvo los indios, maldecían a Fray Bartolomé de las Casas. Pero la vida de los indígenas ya no fue la misma después de su promulgación.

Las Leyes Nuevas fueron publicadas en la ciudad de Santiago en mayo de 1544, e inmediatamente la Audiencia comenzó a presionar a los esclavistas, quienes en su gran mayoría crecían de títulos. El Presidente de la Audiencia, Alonso López de Cerrato, actuó con rapidez y sin contemplaciones, logrando devolver la libertad a un número tal de indígenas que su nombre perdura aún en la memoria colectiva de la población nativa como el de un salvador.

Se introdujo entonces la importación de esclavos africanos, recomendada por el propio Fray Bartolomé. La libertad de los indios suponía así la esclavitud de los africanos.

En la región de Nicaragua, los hermanos Contreras promovieron un levantamiento armado —sofocado por Pedro de la Gasca, de regreso del Perú después de reprimir el levantamiento de los Pizarro— y en el curso del cual un obispo partidario de las Leyes fue muerto a puñaladas. Y en Honduras, Juan Gaitán promovió disturbios similares, aunque menos graves.



¹ Severo Martínez Peláez, *La Patria del Criollo*, EDUCA. San José, 1983.

Nace así una institución diferente, aunque con el mismo nombre que la antigua *encomienda*, y esta institución perdura hasta bien entrado el siglo XVIII. Consistía en esencia en que la Corona se avenía a ceder a los conquistadores y primeros colonos parte de la tributación que le correspondía, siempre que aquellos se mostraran merecedores de recompensa. Tal privilegio no sería hereditario y no concedía dominio directo sobre el trabajo de los indígenas, sin que el encomendero tuviera autoridad sobre los indios del pueblo encomendado, donde tampoco podían tener su domicilio para evitar presumibles abusos.

La tasación de los tributos corría a cargo de comisionados que nombraba la Audiencia, y el cobro correspondía a los Corregidores. Al pertenecer éstos mayoritariamente a la clase criolla, es decir, a los encomenderos, se percibió en los mismos una tendencia continua hacia la exacción indebida.

La encomienda no guardaba conexión con la propiedad de la tierra, por lo que ha sido definida como una «concesión librada por el Rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización, consistente en percibir los tributos de un conglomerado indígena, tasados por la Audiencia y recaudados por los Corregidores o sus dependientes».

Esta nueva encomienda fue una transacción entre la dependencia directa de los indígenas de la Corona, con libre contratación del trabajo, y la necesidad que conquistadores y colonos tenían de mano de obra abundante y barata. Sin ésta, la tierra no valía nada y la política de poblamiento progresivo de las colonias carecía de incentivos para los eventuales colonos.

Al cerrarse el siglo XVI se calcula que en la Capitanía general de Guatemala había unas 200 encomiendas.

Si importante fue la nueva encomienda, el nuevo *repartimiento* de indios era la pieza clave del sistema económico de la colonia. Los nativos se veían obligados a trabajar por temporadas en las haciendas y labores de los españoles y sus descendientes criollos, regresando regularmente a sus pueblos. Este ritmo vital, que duró casi tres siglos, impregnó el pensamiento social de los criollos con tal fuerza que la institución superó la prueba de la Independencia y sobrevive hasta nuestros días, bajo la modalidad de relación entre peón y terrateniente.

Bajo el sistema de repartimiento, el indio estaba obligado a trabajar en las haciendas criollas obteniendo un real por día. Remisos a cumplir con tal obligación, sin embargo acudían voluntariamente al trabajo si se les pagaba dos reales al día. También aceptaban un real y medio si se les daba alimentos. Los «peseros» trabajaban voluntariamente por ocho reales a la semana más alimentos.

Una Real Cédula dada en Madrid el 21 de abril de 1574 organiza el sistema de repartimiento en base a tres principios: 1) la coerción y obligatoriedad para los indios de acudir a trabajar a las haciendas; 2) la rotación o prestación semanal de su trabajo; 3) la remuneración. Es decir, que se transformó en un sistema semanal rotativo que duraba desde el lunes a la hora de vísperas hasta el sábado a las cinco de la tarde.

En la Real Cédula dada en Valladolid el 24 de noviembre de 1601 y enviada al Capitán General y Presidente de la Audiencia de Guatemala, don Alonso Criado de Castilla, expresa el Rey que ha tenido noticias de los daños que reciben los indios a causa del servicio personal a pesar de haber sido éste prohibido, y ordena que los indios «trabajen y se ocupen en el ejercicio de la república por sus jornales, y que éstos sean acomodados y justos... porque mi intención no es quitar a dichas heredades y estancias el servicio que han menester para su labor y beneficio, sino que, teniendo todo lo necesario, los indios no sean oprimidos y detenidos en ellas como lo han sido...». Debían acudir por turnos, de modo que cada semana fuera la cuarta parte de cada pueblo, regresando durante tres semanas para atender su sementera. El salario era de un real de plata por día de trabajo, en moneda y propia mano, no en especie.

En el siglo XVII un real equivalía aproximadamente a cada uno de los siguientes bienes: la mitad de una gallina, un cuartillo de miel, siete onzas de pan de trigo, un octavo de litro de vino o aceite, un cuarto de fanega de maíz².

La clase criolla nunca fue, salvo en los primeros años de la Conquista, una clase estática. La presión de los inmigrantes provocó su renovación y, por ello, en el momento de la Independencia ya no aparecen en el anuario de la aristocracia terrateniente los nombres de las «grandes familias» de los siglos XVI y XVII —Chaves, Paredes, Dardón, Blanco, Holguín, Avalos, Cueto, Ordulá, Vivar, Girón, Páez, Marín—, sino otros nuevos, como Aycinena, Beltranena, Batres, Pavón, Álvarez, Asturias, Arrivillaga, Larrazábal, Melón, Palomo, Barrutia. Los criollos viejos, herederos de los conquistadores, fueron progresivamente desplazados por inmigrantes llegados de la Península, quienes se fueron insertando en la base del poder económico y social del tiempo: la propiedad de la tierra.

Los españoles llegaban aparentando un orgullo y una superioridad a la que los criollos respondían con invocaciones de su sangre española. Pero como el criollo había aprendido desde niño que su situación especial en la sociedad se debía a su origen español, la verdad es que sentía una gran inseguridad ante el peninsular. La clase criolla, acostumbrada desde la infancia al lujo y la molición, contrastaba con los inmigrantes, procedentes en su mayoría de las clases trabajadoras de una sociedad mercantilista, hombres jóvenes habituados a la lucha por el pan, tenaces y ahorrativos, dispuestos a triunfar.

Siendo la tierra la base de la estratificación social, la política agraria colonial se basó en cinco principios³.

El fundamental fue el del *señorío*, que ejercía la Corona por derecho de conquista sobre todas las tierras de las provincias conquistadas. Una vez consumada la conquista, tanto conquistadores como conquistados sólo podían recibir tierras de su verdadero propietario, el Rey. Por tanto, cualquier tierra no cedida por el Rey era realenga.

La Corona estimuló las empresas de conquista con el *aliciente* del premio de la tierra, como bien indica la Real Cédula de Fernando el Católico, fechada en Valladolid en 1513:

² Severo Martínez Peláez, *op. cit.*

³ Severo Martínez Peláez, *op. cit.*

«Es vuestra voluntad que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerías y peonías a todos los que fueren a poblar tierras nuevas.» Las tierras cedidas a los conquistadores y pobladores, cedidas en cantidades que la Corona no podía valorar, fueron los primeros latifundios. La tierra como aliciente se convertía así en el segundo principio.

A medida que el poblamiento de las nuevas tierras se consolidaba, la Corona comenzó a dictar órdenes para que los propietarios presentaran sus títulos y, en los casos en que había habido usurpación de tierras realengas, el Rey se avenía a cederlas legalmente siempre que los usurpadores consintieran una suma de dinero como *composición*, median-do en caso contrario el desalojo. La composición de tierras se convirtió así en fuente de ingresos. El 1 de noviembre de 1591, Felipe II despachó dos Reales Cédulas, en la primera de las cuales se dice que por haberse «ocupado la mejor y la mayor parte de toda la tierra, sin que los concejos e indios tengan lo que necesariamente han menester; habiéndose visto y considerado todo lo susodicho en mi Real Consejo de Indias y consultándose conmigo, ha parecido que conviene que toda la tierra que se posea sin justos y verdaderos títulos se me restituya, según y como me pertenece...». Pero en la segunda Cédula se dice que «he tenido y tengo por bien que sean admitidos a alguna acomodada composición, para que sirviéndome con lo que fuere justo para fundar y poner en la mar una gruesa armada para asegurar estos Reynos y esos, y las flotas que van y vienen de ellos... se les confirme las tierras y viñas que poseen, y por la presente, con acuerdo y parecer de mi Real Consejo de Indias, os doy poder, comisión y facultad para que, reservando ante todas cosas lo que os pareciera necesario para plazas, ejidos, propios, pastos y baldíos de los lugares y concejos... y a los indios lo que hubieren menester para hacer sus sementeras, labores y crianzas, todo lo demás lo podáis componer, y sirviéndome los poseedores de las dichas tierras... que tienen y poseen sin justo título, se las podáis confirmar y darles de nuevo título de ellas». Éste sería el tercer principio.

Desde la aparición de las Leyes Nuevas, es claro el interés de la Corona por conseguir que los pueblos de *indios* *tuvieran tierras suficientes* en forma de tierras comunales para sus siembras, ejidos o tierras de pastos y otros menesteres distintos de la siembra, o propiedad particular de los indios que quisieran adquirir tierras por composición y a quienes debía darse trato preferencial, hasta tal punto que, antes de componer tierras con los particulares españoles, se debían hacer averiguaciones en los pueblos indígenas cercanos para cerciorarse que no se estaba solicitando tierra usurpada a ellos. Este cuarto principio operó como un importantísimo factor de estabilización de las poblaciones indígenas dentro del marco de la tradicional economía de autosuficiencia.

El quinto principio es el del *bloqueo agrario a los mestizos*. La política de negación de tierras a «las castas», los ladinos, patió de un principio de defensa del indígena frente a la agresividad y depredación de los mestizos, pero a la larga, contribuyó a que la clase criolla constituyese una gran familia, obligando a los mestizos a ser arrendatarios y no propietarios de la tierra. Los criollos se convirtieron así en una clase social pequeña, muy compacta y entrelazada por vínculos familiares, dueña de grandes territorios.

Las *tierras de los indios* obedecían a tres categorías diferenciales:

1) Los *ejidos*, llamados ejidos o pastos, montes y pastajes, tierra de uso común en los alrededores de un pueblo para recolectar maderas y pastar los animales, cuya extensión se

calculaba representándose dos líneas rectas que se cruzaban en el centro del pueblo con una lengua de extensión cada una.

2) Las tierras *comunes*, de comunidad, comunes de sementera, comunes de labranza o de labranza y sementera, que eran las cedidas por el Rey desde el momento en que fueron creados los pueblos de indios y administradas por el cabildo o Ayuntamiento de indios.

3) Tierras que pertenecieron en forma *particular* a indios ricos, correspondientes a la capa media alta rural, que disponían de medios económicos para componer tierras con el Rey.

Los latifundios y las tierras comunales representaban el grueso del agro de la Capitanía. El problema agrario de nuestros días, especialmente en Guatemala y El Salvador, es producto de la reforma cafetalera del último tercio del siglo XIX, no una herencia del pasado colonial.

El indio debía pagar, además, una cuota tributaria al Rey como reconocimiento de su señorío y, desde finales del siglo XVI, quedó establecida la cantidad en dos pesos anuales, suma que permaneció inalterable hasta principios del siglo XIX. Pagaban los varones entre los dieciocho y los cincuenta años, quedando eximidos los caciques, sus primogénitos y los alcaldes indios. Las indias pagaban una cantidad menor —un tostón, o cuatro reales—. Estaban exentos los esclavos negros, los mestizos y los mulatos.

La visión del indio por el criollo era claramente negativa, y son constantes las referencias a su haraganería e irresponsabilidad en la obra magna de idealización de la patria del criollo por Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, «Recordación Florida». De esta manera, el criollo disponía de una apoyatura intelectual que justificaba la contratación no libre de la mano de obra indígena, concentrada en unos setecientos pueblos de indios.

La legislación española no sólo no prohibió el matrimonio entre indígenas y españoles, sino que lo alentó. Así se comprende cómo al llegar la Independencia, las castas, los ladinos, los mestizos o gentes «de color quebrado», constituían la tercera parte de la población del Reino. Su situación era intermedia entre los criollos y los indios, pues si no estaban obligados a tributar y gozaban de libertad para escoger su domicilio, pudiendo contratar libremente su trabajo, no tenían acceso a cargos públicos, les estaban vedadas ciertas ocupaciones y las penas por un mismo delito eran más duras si el reo pertenecía a una casta.

La imposibilidad de acceso a la propiedad agrícola por un lado, y su carencia de acceso a los cargos públicos por otro, hizo de los ladinos una clase inquieta y ágil, preferentemente urbana, en oficios manuales y artesanales, constituyendo la base de una clase media inferior con ramificaciones hacia el campo, donde tomaba en arriendo parcelas de tierra pertenecientes a los criollos.

La sociedad de la Capitanía vivió a ritmo pausado y sin apenas cambios durante la monarquía de los Habsburgo. Con la llegada de los Borbones al trono de España en 1700, se operó una rápida y profunda transformación en la mentalidad y aproximación a los temas económicos, políticos, religiosos y culturales, que tuvo repercusión directa en el Reino de Guatemala. Tanto *la Ilustración* como los avatares de la política exterior española y el declinar de la potencia de España afectaron intensamente a Centroamérica.

Nadie puede negar la influencia que el pensamiento francés tuvo en el despertar cultural que supuso la Ilustración. Pero tal pensamiento llegaba a Guatemala traducido, cuando no interpretado, por escritores españoles. Nombres tales como el Padre Feijóo, Bernardo de Ulloa, Jerónimo de Ustáriz, Bernardo Ward y Pedro Campomanes gozaron de una gran audiencia. Tanta como las obras de Rousseau, Voltaire, Smith, Quesnay o Condillac.

Publicaciones como la Gaceta de Guatemala, la de México, La Habana, el Diario de Lima, el Mercurio Peruano y el Pensador Mexicano fueron también vehículos de las nuevas ideas.

Guatemala tuvo su primera imprenta en 1660, después de México, Puebla y Lima.

Los funcionarios españoles ejercieron similares influencias ilustradas y aportaron notables cambios a la Administración de la Capitanía, con la intención última de recuperar el terreno perdido, responder a las quejas de la metrópoli —los impuestos no llegaban para cubrir los gastos—, de los centroamericanos —escasa participación en el gobierno de la Capitanía—, y para prepararse también frente a la competencia extranjera.

Los primeros esfuerzos intentaron reducir el poder de las *Ordenes religiosas*. Los Dominicos, dueños de inmensos territorios en Verapaz y otras zonas, eran la Orden más rica del Reino. Los Franciscanos, Agustinos, Mercedarios y Jesuitas también disponían de grandes propiedades. Se comenzó limitando su derecho a construir nuevos monasterios o aceptar novicios que no hubieran llegado a la edad adulta. Se abolieron ciertas tasas impuestas para la Iglesia, particularmente en las parroquias indígenas, y se favoreció al clero secular elevando Felipe V a Guatemala a la categoría de Archidiócesis en 1742. En esta línea ocurrió la expulsión de los Jesuitas en 1767, que supuso la marcha de unos veinte de toda Centroamérica. Todas estas medidas lograron limitar el crecimiento de la población eclesiástica, que había adquirido proporciones exageradas.

Desde el siglo XVI, *corsarios* franceses comenzaron a operar en Centroamérica. En el XVII, los holandeses, y especialmente los ingleses, introdujeron contrabando y comenzaron a explotar ilegalmente maderas preciosas en las costas de Guatemala y Honduras. Los bucaneros ingleses consiguieron establecerse en el XVIII en Belice y anudaron relaciones intensas con los indios Miskitos, desde donde realizaba operaciones contra Nicaragua y Costa Rica.

La respuesta de la administración española no fue solamente militar. Desde 1717 se inició una reorganización de la Casa de Contratación de Sevilla, que terminó con el monopolio del comercio de Sevilla y Cádiz. Se abrió el círculo del comercio, cerrado a un pequeño número de españoles y de americanos, con la intención de buscar alternativas al

contrabando. El sistema de flota o convoy fue abandonado. En 1778, reinando Carlos III, se estableció la libertad de comercio con España y ente las colonias directamente, y en 1803 los puertos del Pacífico comenzaron a recibir mercaderías asiáticas procedentes de Acapulco mediante el «navío de Filipinas». Las tasas a la exportación fueron reducidas con el fin de incentivar nuevas producciones y se estableció un monopolio sobre el tabaco y el licor para luchar contra el contrabando.

En el plano administrativo, el esfuerzo se concentró en la creación de cuerpos de funcionarios estables y técnicamente preparados en un esfuerzo de racionalización y ahorro. Los criollos comenzaron a constituir el grueso de la administración, quedando a favor de los peninsulares únicamente los puestos cúpula del armazón administrativo. La reforma administrativa más importante fue la creación de *los intendentes*, en 1786. Honduras, El Salvador, Nicaragua y Chiapas se constituyeron en intendencias. Guatemala continuó bajo la administración directa del Capitán General.

Como los Intendentes tenían amplias facultades fiscales y militares, el nuevo sistema aumentó la autonomía provincial y contribuyó de este modo a desarrollar una incipiente idea de nación en las diversas provincias beneficiarias de la reforma.

También se hicieron esfuerzos en el plano educativo, obligándose a las municipalidades con más de 100 contribuyentes a mantener una escuela de primeras letras. Y en el campo de la salud, una campaña de vacunación contra una epidemia de viruela en 1780 ahorró cientos de víctimas.

La comunidad comerciante de Guatemala consiguió en 1793 su propio Consulado, un tribunal donde los jueces conocerían de las disputas en materia comercial sobre la base de la igualdad de los mismos con sus socios peninsulares. Esta comunidad adquirió una gran fuerza política en los últimos años de la Capitanía, promoviendo el desarrollo económico pero coartando la mejora de puertos y carreteras que pudieran distraer las líneas tradicionales del comercio de la capital, Guatemala.

El panorama económico del Reino al final del siglo no era, sin embargo, halagüeño. La agricultura era fundamentalmente de subsistencia, incluso en los latifundios, siendo la producción destinada al consumo interno más que a la exportación. El crecimiento de la industria textil europea y consiguiente demanda de tintes dio a Centroamérica una oportunidad de recuperar lo perdido con el declive del cacao y el azúcar. La cochinilla en Guatemala, y el añil en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se transformaron en el último período de la Capitanía en las dos fuentes principales de obtención de recursos. El gobierno animó la producción promoviendo la construcción de carreteras y facilitando la fluidez del mercado de mano de obra, ayudando además a los plantadores mediante una política de estabilización de precios y animando a la creación del Montepío de Cosecheros de Añil en 1782.

La mayoría de los plantadores eran medianos productores pertenecientes a la casta ladina. Los comerciantes de Guatemala financiaban la producción mediante préstamos usurarios contra la cosecha. El Montepío fue creado con una donación real para luchar contra tal estado de cosas, pudiendo los plantadores obtener préstamos en condiciones de interés normal del Montepío. Esto explica las amargas disputas entre los comerciantes,

agrupados en el Consulado, y los grandes plantadores de un lado y los pequeños y medianos de otro.

Tanto las guerras en que se vio envuelta España a consecuencia de los Pactos de Familia, como la voracidad de corsarios y bucaneros holandeses, franceses e ingleses, y los grandes gastos de traslado de la capital de Santiago a la actual Guatemala, a consecuencia del enorme terremoto de 1773, e incluso plagas de «chapulines» o langosta al finalizar el siglo, contribuyeron a empeorar la situación financiera del Reino. Es muy posible que durante el último medio siglo de dominio español el Reino de Guatemala le costó más a la Corona de lo que la Capitanía aportó a las arcas metropolitanas. Anualmente se enviaba desde México el faltante para pagar sueldos.

La presencia británica en Belice, Roatán y la Mosquitia incentivó el contrabando, y Londres animó este tráfico desde 1766 creando puertos en las Indias occidentales a tal fin. En 1779, el Capitán General Matías de Gálvez logró expulsar a los británicos de Belice y Roatán, emigrando los pobladores ingleses hacia la Mosquitia, desde donde realizaron incursiones hacia el interior de Nicaragua y Costa Rica. Gran Bretaña fracasó sin embargo a la larga en su intento de dividir Nicaragua en dos, pues si el Tratado de París de 1783 permitía, al igual que en 1763, el establecimiento de pobladores británicos en Belice bajo soberanía española, tenían que abandonar la Mosquitia.

Entre 1793 y 1810 el comercio de procedencia no española en ambas costas aumentó considerablemente, pero los comerciantes del Consulado, aliados con sus socios españoles, impidieron una liberalización más completa. Sin embargo, el declive de la Flota española después de Trafalgar en 1805 impidió a España una protección efectiva del contrabando procedente de Jamaica y Belice.

Salvo la minería y el clero, donde el predominio peninsular era evidente, en todas las demás actividades el elemento criollo o ladino destacaba sin competencia.

El panorama de *la Capitanía a comienzos del siglo XIX*, en boca de Salvador Mendieta, era el siguiente:

«La Nueva Guatemala, a pesar de su reciente traslación, era la más grande ciudad del Reino con veinte mil habitantes más o menos...»

Era la que resumía la escasa cultura colonial...

Después de la capital estaban León, con su Obispo y seminario conciliar y que, después de las Cortes de Cádiz, logró tener Universidad; Granada, que con su activo tráfico lacustre, fluvial y marítimo y con su espíritu mercantilista lograba traficar —las más veces por contrabando— con Jamaica, Belice, Cartagena y La Habana, Comayagua, con su Obispo y su seminario conciliar; San Salvador, que ocupaba el centro de una región muy poblada y laboriosa, dando ya evidentes señales de lo que sería después por sus riquezas, sus aspiraciones de engrandecimiento y su valor cívico; Cartago, que aspiraba a fundar su Colegio de Santo Tomás, y que se hallaba enclavado en el valle del Guarco, sin comunicación con ninguno de los Océanos hasta que se habitaron Matina y Puntarenas en medio de la guerra que provocó Bonaparte; San José, que apenas daba los primeros pasos

de su desarrollo entre Heredia y Cartago, seguida muy despacio por Alajuela; Trujillo, que fue la única ciudad de importancia que logró mantenerse como española en nuestra Costa Atlántica, dominada por ingleses, misquitos y zambos; Quetzaltenango, todavía aldea que no anunciaba la importancia que pronto iba a tener; Tegucigalpa, con sus minas de plata, pero sin cultura y todavía sometida a Comayagua; Zacapa, que era un campamento provisional para los escasos viajeros que llegaban por el Golfo de Amatique; Sonsonate, con activo tráfico a causa de los barcos que arribaban a Acajutla. El Realejo, con un tráfico semejante, Santa Ana la Grande, apenas nacida y sin importancia ninguna; San Miguel, con su ferial del 21 de noviembre, creciendo y enriqueciéndose; Gracias, primera sede de la Audiencia de los Confines, o sea, primera capital del Istmo geográfico centroamericano, decadente después de la maldición de los mercedarios; San Vicente, con alguna cultura por ser residencia de familias distinguidas, que tenían grandes pretensiones de linajudas; Santa Rosa de Copán, llamada todavía Los Llanos, adormecida en su cuna, pero ya con ascendentes cultivos del mejor tabaco de nuestra patria; Chiquimula, restableciéndose de terremotos destructores y con vida rutinaria de aldea; Nueva Segovia, temerosa siempre de invasiones de caribes, zambos e ingleses, abrigando a gentes de pura raza española en un ambiente de profunda ignorancia y aislamiento; Juticalpa, centro de riquísimas haciendas de ganado, protegidas por la Virgen de Corona de Cuero, Matagalpa, Santa Bárbara y Cobán, aisladas en sus espléndidas tierras propicias a toda clase de cultivos y vegetando entre milpas, frijolares y algodones como pequeña agricultura; Choluteca, con sus minas de El Corpus de los Reales Tamarindos; Chinandega, sin otra importancia que su vecindad a El Viejo, traída por un hermano de Santa Teresa de Jesús, la doctora de Ávila; Managua, una miserable aldea de pescadores, especialmente de sardinas; Masaya, con sus indios industriosos, devotos de San Jerónimo y empezando a darse cuenta de sus derechos de ciudadanos mediante el liderato de O'Horan, Rivas, llamada todavía Nicaragua, comenzando a enriquecerse con sus magníficas tierras, sólo comparables a las de Chinandega y Suchitepéquez, y Nicoya, convertida en paupérrimo lugarejo, después de haber sido durante los años de la Conquista y de la primera obra colonizadora de Cavallón y Vázquez de Coronado, la sede de las más bellas indias del Reino.

La vida que se llevaba en todo el Reino de Guatemala era de sopor, de monotonía y de prácticas religiosas externas.

Los focos de difusión intelectual del nuevo clima de la Ilustración, propicio al cambio, fueron la Universidad de San Carlos en Guatemala y los tres seminarios conciliares existentes en el Reino. Durante mucho tiempo se ha acusado a la Universidad de San Carlos de haber sido un centro hermético, intransigente y de escasa valía. Los estudios de John Tate Lanning, quien analizó el contenido de las tesis de sus estudiantes, demuestra lo contrario: «Los estudiantes de Guatemala en 1785, tenían una ilimitada variedad y adecuados alcances a los problemas del mundo del conocimiento, mayor de los que cualquier científico con experiencia en la enseñanza puede esperar de los estudiantes avanzados de hoy. Desde la duda metafísica de Descartes o la ley de gravitación universal de Sir Isaac Newton, hasta los experimentos de Franklin sobre electricidad, o de los últimos avances de la hidráulica, había escasamente un problema que no fuera defendido o analizado en algún examen de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la última mitad del siglo dieciocho.»

Los seminarios también tuvieron importancia dentro del proceso innovador y renovador. El de Guatemala, llamado Seminario de Nuestra Señora de la Asunción, estaba

fuertemente vinculado, aunque opacado, por la Universidad. El de Comayagua tuvo menor importancia por la cercanía de la capital, y por esta misma razón, el de León, en Nicaragua, contribuyó a la animación de la vida intelectual autónoma de Nicaragua e incluso de Costa Rica.

Otro importante vehículo de la innovación fue la Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala, fundada en 1794 a instancias del Oidor de la Audiencia Jacobo Villaurrutia, quien siguió los modelos metropolitanos sobre la base de una absoluta igualdad protocolaria entre el español y el criollo, y que en 1797 tenía 86 miembros en la capital y 63 correspondientes en el resto de la Capitanía general⁴. El primer campo de actividad de la Sociedad fue la educación, reflejando el optimismo consustancial a los ilustrados en las posibilidades de mejoramiento a través del conocimiento. La Sociedad comenzó a publicar en 1797 la «Gaceta de Guatemala», importante órgano de difusión de las nuevas ideas. La segunda tarea fue de contenido económico, tratando de divulgar la introducción de nuevas plantas, el mejoramiento de los cultivos, nuevas técnicas, uso de maquinaria, selección de animales, laboreo de la lana, algodón, lino, mejoramiento del cuero, apertura de nuevos mercados, vías de acceso, etc. El tercer tema abordado fue el de las Artes, con especial atención a la artesanía y los oficios, creándose escuelas de pintura y grabado.

El espíritu pragmático y a la vez idealista que animaba la Sociedad Económica tuvo una gran influencia en la evaluación de la realidad centroamericana, y dio a la clase criolla una visión altamente optimista de sus posibilidades en el futuro, teniendo así de esta manera lateral fuerte impacto en la consolidación del sentimiento de autosuficiencia que dicha clase había venido incubando desde comienzos de siglo.

Las reformas no fueron aceptadas de manera uniforme en la Capitanía. Aquellas que pretendían una administración más eficaz y directa marchaban a contrapelo del espíritu de arbitrariedad que caracterizaba la mentalidad criolla, provocando tensiones entre la nueva disposición de la administración española y la «aristocracia» local. Los funcionarios españoles destinados en la Capitanía carecían de vínculos familiares o relaciones continuadas con la oligarquía criolla. Ésta constituía para ellos un hecho político y sociológico, digno de ser equilibrado con el peso creciente de los ladinos y las obligaciones asistenciales hacia la población indígena, en funciones que podríamos llamar de arbitraje.

La aristocracia criolla era, mientras tanto, constantemente renovada por la llegada de peninsulares, especialmente en la actual Guatemala y en Costa Rica. Y es curioso que fueran precisamente los dueños de las haciendas los que monopolizaban los cargos de la administración —salvo los superiores—, ocupaban las Audiencias y regentaban los Ayuntamientos, los que hicieron fructificar la semilla del descontento y rebeldía frente a la situación existente. Su actitud hacia España era doble. De idealización, cuando se refería a la España histórica, especialmente la de la Conquista, pues ésta en definitiva era de modo más o menos directo la justificación de su primer escalón en la pirámide social. De



⁴ Robert J. Schafer, «Ideas and Work of the Colonial Economic Societies», *Revista de Historia de América*, núm. 44, 1957, México D. F.

animosidad y distanciamiento, cuando la Metrópoli se presentaba en forma de administración que limitaba sus privilegios y hacía cumplir la ley particularmente cuando ésta comenzó a adquirir tonos progresistas en las postrimerías de la colonia, pero, en cualquier caso, recordando constantemente que el criollo podía gozar de todo menos de la autoridad suprema en el gobierno de la Capitanía. «Gachupín con criollo, gavilán con pollo.»

Los indios constituían la base de la *pirámide social*. Como clase permanecía al margen, pero los ladinos se introducían progresivamente en sus tierras y pueblos como artesanos, comerciantes e incluso propietarios. La encomienda y el repartimiento fueron dando paso a la contratación del trabajo mediante salario, y en algunos casos, a una virtual esclavitud por deudas o salarios adelantados. Se hizo frecuente el trabajo estacional por meses en las plantaciones de añil y cochinilla. Los caciques indios continuaron colaborando con los criollos en la explotación de sus hermanos de raza. Los sacerdotes, generalmente criollos o ladinos, eran con frecuencia la autoridad real en las comunidades indígenas. La actitud oficial criolla ante el indio consistía en «mantenerlos en su lugar» y asegurar que seguían constituyendo la base de la mano de obra, una especie de semoviente necesario para preservar la sociedad. Gradualmente se fue produciendo una ósmosis del indio con el ladino, con adopción del habla, vestimenta y forma de vida de éste. Solamente en las tierras altas de Guatemala y en núcleos aislados de las provincias subsistió el indio como tal, con su civilización y lengua.

El sector más dinámico a lo largo del siglo XVIII fue el ladino. Los terratenientes comenzaron a utilizar progresivamente más ladinos y menos indios, a los que únicamente contrataban en tiempo de recolección. Como ésta coincidía con la propia de los indios, el mercado comenzó a depender más de la producción criolla y ladina, mientras que la de los pueblos indios se encajaba progresivamente en el marco de la subsistencia. El dinamismo de los ladinos se transformó en una nueva amenaza para los pueblos indios. Ellos llegaron a ser la base de la producción de añil y, aunque eran explotados por los comerciantes, a menudo pertenecientes a la clase criolla, con la creación del Montepío de Cosecheros de Añil, adquirieron autonomía y fuerza. El Capitán General Gálvez y el Intendente de El Salvador, Barón de Carondelet, les ayudaron y animaron en la creación del Montepío.

Guatemala, San Salvador y León habían desarrollado una clase media de considerable importancia al finalizar el siglo XVII, fundamentalmente de extracción ladina, aunque también comprendía algún criollo venido a menos y cierto número de indios que, renunciando a las costumbres, hábitos y lengua de su pueblo, abandonaban de liecho su calidad de indios. Porque fueron la sumisión y la explotación las que hicieron al indio, más que la raza.

Las instituciones de promoción social utilizadas por los ladinos fueron la Universidad, el Ejército y la Iglesia, mientras que los artesanos y los trabajadores especializados se agruparon en gremios para la defensa de sus oficios.

Una clase media alta, compuesta de abogados, doctores, comerciantes, funcionarios, profesores de Universidad y sacerdotes y una masa desempleada o subempleada completaban el cuadro social de la vida de la Capitanía. Este último grupo era fácilmente movilizable y manipulable para cualquier algarada o manifestación, papel que sigue desempeñando en nuestros días.

Al finalizar el siglo, los indios representaban el 65% de la población, los ladinos el 31% y los peninsulares y los criollos el 4%. Las diferencias más notables acusaban una gran concentración de indios en Guatemala y de europeos en Costa Rica, mientras que en Nicaragua era ladina el 84% de la población, y en El Salvador, el 54%. Pequeños grupos de negros en las costas del Caribe, utilizando hablas derivadas del inglés, completaban el cuadro étnico del Reino.

La administración adoptó una actitud de apoyo hacia las clases medias emergentes, reconociendo la importancia de crear una base económica más amplia que la minúscula cúpula criolla, a la que por otra parte convenía limitar su casi omnimodo poder, especialmente en la capital Guatemala. La rivalidad entre la capital y las provincias adquiría así un nuevo punto de apoyo en el antagonismo suscitado en la larga lucha por el poder de los ladinos, quienes encontraban los caminos bloqueados por la aristocracia criolla capitalina.

* * *

La versión romántico-nacionalista, acuñada por los patriotas americanos al calor de la contienda, según la cual había sido la «tiranía» española la causa principal de la *Emancipación*, está hoy totalmente desechada⁵. La *Emancipación* traduce el mismo antagonismo entre absolutistas y liberales que tuvo lugar en la Península por los mismos años, por lo que puede decirse que el conjunto del mundo hispánico se comportó como una unidad.

Entre las múltiples causas de la independencia americana se tiende hoy a destacar dos. En primer lugar, la madurez alcanzada por las minorías criollas hispanoamericanas tras tres siglos de transculturización, y conciencia de su posibilidad de hacerse cargo del poder político. En segundo término, la crisis de poder político de la metrópoli como consecuencia de la invasión napoleónica, subsiguiente guerra de la Independencia y enfrentamiento entre liberales y absolutistas. La transición del reformismo político al separatismo será función en la Capitanía de Guatemala tanto del eco de los acontecimientos en la Nueva España y la Nueva Granada como de los temores suscitados en la clase criolla ante los vientos liberales y progresistas que recorrieron la metrópoli con la adopción de la Constitución de 1812.

A lo largo de tres siglos de dominio español en América, las diferencias entre metrópoli y colonia desde el punto de vista cultural fueron difuminándose en un largo proceso de traslado masivo y orgánico de la cultura española a las sociedades hispanoamericanas. España no creó en sus territorios americanos moldes culturales especiales o formas distintas de oscurantismo o de opresión política, distintas de las peninsulares, como tan frecuentemente han realizado las potencias coloniales, sino que sencillamente trasplantó a las provincias americanas los esquemas propios de la Contrarreforma primero y de la Ilustración más tarde.



⁵ *Introducción a la Historia de España*, Editorial Teide, Barcelona, 1963.

En el ocaso del Imperio español en América, los criollos viven emociones encontradas. La rebeldía de los colonos ingleses de América del Norte los fascina, pues, aspirando a ejercer todo el poder, a disfrutar todos los honores en lugar de tener que admitir la tutela en la cúspide de los funcionarios peninsulares, el ejemplo de la independencia norteamericana no les abandona. Pero, por otra parte, conscientes de ser los amos de grandes legiones de siervos, del resentimiento y dinamismo de los ladinos, y del peligro potencial de los negros, bárbaros y violentos, tienen sus dudas. La revolución de Haití mostró a la clase criolla desde 1791 la otra cara de la moneda de lo que podía ser una guerra social en una sociedad dual, una vez rotos los vínculos con la metrópoli y disueltos los hábitos de autoridad y servidumbre.

La independencia del Reino de Guatemala ofrece tres características que la diferencian en gran medida de las del resto de Hispanoamérica: fue una independencia reflejo o por impulso mimético de lo que estaba ocurriendo y ocurrió al Norte, la Nueva España, y al Sur, la Nueva Granada; el proceso que condujo a la separación fue pacífico, sin guerra civil, ni oposición seria por parte de las autoridades metropolitanas; finalmente, no se puede hablar de independencia sino de independencias, tres en concreto, de España, de México y de Guatemala, faltando aún, para algunos, una cuarta, la superación de la falta de control sobre el entorno económico y político conocido como dependencia.

El gran detonante de la Independencia fue la crisis de poder político en la Península tras la invasión de las tropas napoleónicas. Durante tres siglos, la Corona española fue la médula de la estructura política de las Españas. Las tropas francesas rompieron esta médula y los pueblos de las Españas se encontraron de repente sin Corona, hoy diríamos que sin Estado. «Prisionero el Rey, invadida y casi conquistada la península por las tropas del corso, las provincias indianas se sintieron acéfalas: los virreyes y gobernadores se miraron hechuras de Godoy, odiado y caído. En España, cada región y cada ciudad creó su Junta de Gobierno y guerras: en Indias no se creyeron menos, y rechazaron la Junta Central, en la que no veían títulos para regir el Imperio. Y crearon sus Juntas a la sombra de los Cabildos. Pero tales Juntas ni fueron separatistas ni Cabildos, ni se convocó todo el pueblo. A mucho, Cabildos abiertos, que no eran Cabildos en la significación legal, Juntas de Notables, lo que hoy se dice de fuerzas vivas⁶.»

El mecanismo de la rebeldía parece haber jugado del siguiente modo: un clan de criollos ilustres se constituye en Junta local para, bajo el estandarte de Fernando VII y fidelidad a la Corona, buscar la libertad absoluta de comercio y dar todos los puestos de gobierno a los criollos. Lo que comenzó bajo la «máscara de Fernando VII», con la intención de substituir el personal de gobierno y sostener los derechos del soberano legítimo contra el usurpador bonapartista, terminó en deseos de independencia pura y simple.

El Capitán general de Guatemala, José de Bustamante, quien tomó posesión de su cargo en 1811, absolutista de convicción, intentó equilibrar el poderío de «las familias», especialmente los Aycinenas, apoyándose en los comerciantes y proponiendo repartos de

◆
⁶ Constantino Bayle, *Los Cabildos Seculares en la América Española*. Madrid, Sapientia, 1952.

tierras así como trabajo asalariado en todo caso, proyectos que no podían menos que aterrorizar a la clase criolla. Bustamante escribía en 1812: «La clase de los que llaman principales ha sido, en efecto, la primera que manifestó ideas subversivas y principios dañinos, por el sistema de oligarquía a que aspira.»

En 1808 se abrió proceso en Guatemala contra Simón Bergaño y Agustín Vilches, por haber sugerido una Junta de Gobierno integrada sólo por criollos. En 1811 en Guanacaste y Nicoya se eligieron autoridades que no eran «chapetones». En 1810, en Granada, se constituye una Junta popular de apoyo a Fernando VII integrada por criollos. En 1811, los motines de San Salvador, presentados habitualmente como independentistas, crean una Junta Patriótica bajo el nombre de «nuestro amado Fernando VII» y en signo de repudio a José Bonaparte. En 1812, el motin de Tegucigalpa fue dirigido por un natural de Castilla, Julián Francisco Romero, contra el alcalde y los regidores criollos —que trataban de reelegirse—, contando en su lucha con el apoyo de ladinos y morenos. La única conjura claramente independentista fue la de Belén, en Guatemala, en 1812, promovida por Tomás Ruiz, y que fue abortada en embrión.

Parece ser que el único centroamericano condenado a muerte por independentista fue el guatemalteco Pascasio Ortiz de Letona, residente en Guadalajara, México, que colaboró con Hidalgo, por lo que fue fusilado en 1810⁷.

El Capitán General Bustamante, apoyado en la comunidad mercantil y propeninsular, los productores de textiles y los pequeños propietarios, mantuvo alejados de los puestos de poder a las «familias», cuyas fortunas se habían deteriorado con el declive del añil. Cuando en 1818, Bustamante fue trasladado y sustituido por Carlos Urrutia, la «familia» no perdió el tiempo en rodear al nuevo Capitán General, anciano y contemporizador, de atenciones y de persuasiones.

Mientras tanto, Fernando VII seguía indiferente a la marcha de las guerras al Norte y Sur de la Capitanía, impidiendo en todo momento el proyecto de «monarquías americanas». En 1820, la Corona había aplastado militarmente las fuerzas independentistas sudamericanas y al cura Hidalgo. Pero los liberales españoles se impregnaron de la idea emancipadora, pues tanto unos como otros aspiraban a la libertad. La Corona había perdido, mientras tanto, parte de su ascendiente moral, por los enfrentamientos entre Carlos IV y Fernando VII ante Napoleón. Fernando VII tuvo la virtud de conseguir en breve espacio de tiempo que los hombres pensantes de la Península añoraran los años de su permanencia en el destierro. El «Deseado», transformado en «indeseable». Los liberales, en lucha abierta contra el absolutismo restaurado.

En estas condiciones se produce la noticia del levantamiento del General Riego en Cabezas de San Juan, conocida en Guatemala a finales de abril de 1820, y que obliga al General Urrutia, jefe Político —cargo sustitutivo del de Capitán General—, a renunciar a favor del General Gáinza, realista pero liberal. Gáinza dirigió el tránsito de la dependencia de la Corona española a la independencia sin violencia ni solución de continuidad.



⁷ Constantino Láscaris, *Historia de las Ideas en Centroamérica*. San José, EDUCA, 1970.

Por primera vez aparecieron facciones políticas en Centroamérica. Los intereses de la oligarquía criolla, en especial de la familia Aycinena, fueron defendidos por el periódico «El Editor Constitucional», dirigido por Pedro Molina, partidario de la independencia. El sector más moderado fue representado por «El Amigo de la Patria», editado por José Cecilio del Valle, quien se oponía al cambio radical y al poder oligárquico de «las familias». Estas dos corrientes de pensamiento reclutaban adeptos entre los sectores de la alta clase media exclusivamente, representando vertientes distintas de los intereses criollos.

El Plan de Iguala de México provocó el desenlace de la independencia centroamericana en 1821. Las «familias» llegaron a la conclusión de que sus intereses se verían mejor protegidos mediante la separación de la Península, controlada ahora por el pensamiento liberal. Decisión lógica, pues el liberalismo criollo nunca había excedido los principios de la libertad de comercio. Los moderados, por su parte, mantuvieron durante todo el verano de 1821 sus posturas de lealtad a la Corona. El éxito del Plan de Iguala y las noticias de que un ejército mejicano acudía a «liberar» Centroamérica provocaron una declaración de Independencia el 15 de septiembre de 1821. La decisión fue tomada en una tormentosa sesión de una Junta extraordinaria en Guatemala, a la que acudieron casi exclusiva los representantes de «las familias», por un tanteo de 23 a 7.

Nada cambió en la práctica salvo la soberanía política. José Cecilio del Valle, quien había hecho campaña contra una independencia apresurada para la cual él pensaba que el Reino no estaba preparado, aun cuando en el fondo lo que temía era un dominio inmitigado de «las familias», redactó la declaración de Independencia y organizó el gobierno provisional, que continuó siendo prácticamente el mismo, con Gabino Gainza como jefe. Por cierto que el original del Acta de Independencia adoptada en tal Junta estuvo perdido hasta que en 1934 lo encontró el profesor Joaquín Pardo, Director del Archivo General del Gobierno de Guatemala⁸.

La independencia produjo inmediatamente una guerra con la provincia de El Salvador. En Nicaragua y Honduras, los Gobernadores Saravia y Tinoco, enemigos de Gainza, creyeron llegado el momento de la separación y acordaron adherirse a Méjico, siguiendo el Plan de Iguala. Chiapas ya se había separado de Guatemala, incorporándose a Méjico. En Costa Rica no se enteraron de que eran independientes hasta el 13 de octubre, cayendo la noticia como una bomba y siendo desaprobada.

El Reino, con el apoyo de Gainza, fuertemente influenciado por el clan de los Aycinena, que deseaba preservar el estado de cosas acogiéndose a un plan de gobierno netamente conservador como el del Emperador Agustín Iturbide, proclamó la anexión el 5 de enero de 1822.

Al haberse logrado la independencia de rebote, sin lucha y la capacidad aglutinadora en torno a una idea nacional que un esfuerzo bélico prolongado siempre ejerce, cundió el vértigo del fraccionamiento y el caciquismo. Las fuerzas políticas se agruparon en torno al partido de los Fiebres, partidarios de la libertad de comercio, del republicanismo y de la



⁸ Antonio Batres Jáuregui, *América Central ante la Historia*. Guatemala, 1949.

reforma de la Iglesia, mientras que los acusados de seguir siendo leales a las instituciones monárquicas y de oponerse a las reformas, fueron llamados los Serviles. Estas divisiones también reflejaban las tensiones crecientes entre Guatemala y las provincias, resentidas de las ventajas económicas de la capital, en especial en El Salvador, plaza fuerte del liberalismo.

Con la abdicación de Iturbide, en marzo de 1823, Centroamérica gana su segunda Independencia el 1 de julio del mismo año. Sólo Chiapas escogió Méjico. Los restantes cinco integrantes del Reino de Guatemala se constituyeron en las Provincias Unidas de Centroamérica.

Centroamérica, que durante siglos había exportado tinte, pimienta y sal, conoció en el momento crítico de la segunda mitad del período siglo por sus exportaciones de café. El color se abastecía por el tabaco, y la grana y el añil, por el café.

La reorganización conservadora dará cuenta al orden social y económico que se apoyó en el desarrollo de la agricultura de los exportantes. Pero el tallo del tallo tallo como tierras de propiedad agraria y, sobre todo, un tipo de propiedad que respaldaba la moralidad nueva. A partir de este hecho surgen modificaciones profundas sobre la estructura social y política de Centroamérica. Los cinco países experimentaron la influencia liberal en distinto grado y de forma diferente. El conflicto entre lo antiguo y lo nuevo fue resuelto de forma violenta en Guatemala y El Salvador, por vía en Costa Rica, e inconclusa en Honduras y Nicaragua.

En los países donde entre el fenómeno político y el hecho económico se produjeron cambios decisivos que la República Liberal correspondió a un modelo de desarrollo de las sociedades agroexportadoras dirigidas por una burguesía criollista de clara perfil burgués. La revolución liberal, que socialmente supuso el desarrollo de la clase criollista, se proyectó esencialmente como un movimiento que pretendió de la reforma de la tierra, creando el entorno cultural y político para la apropiación privada de grandes extensiones de terrenos de la Iglesia, de las comunidades indígenas, baldíos o realengos, y para el traspaso de parte de las propiedades de las comunidades a los liberales.

La apropiación de las tierras de conventos y abogadas monásticas y la privatización, puso en funcionamiento una mayoría de tierras del Estado. Sin embargo, el modelo de tierras comunitarias se vio afectado por la reforma. Se creó el Registro de la Propiedad Hipotecaria, creando las condiciones necesarias para que el crédito personal se transformara en crédito hipotecario, lo que facilitó la adquisición de capitales a los nuevos propietarios así como la realización de modificaciones rápidas y transformaciones del dominio de la tierra.

El modelo liberal llevó a los países, en efecto, las tierras destinadas en tiempos de la Colonia para el servicio de las monasterios a pueblos. La reforma liberal de los años setenta se transformó como una forma de tenencia colectiva de la tierra. Se relevó a los

II

De la unión a la disgregación y del cacique al caudillo

No, aún no seaban los vendados,
aún no dormían los soldados
cuando la libertad cambió de traje,
cuando se desmoronó la hacienda,
cuando se sembró la sembrada
de la caña, una cuadrilla
de ricos con estado,
que ganaba y que prisioneros.

Carta General, Pablo Neruda

III

La reforma
del liberalismo

Alta es la noche y Morazán vigila. ¿Es hoy, ayer, mañana? Tú lo Sabes. Cinta central, América angostura que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda: territorio, unidad, delgada diosa nacida en el combate de la espuma.

Morazán. Pablo Neruda

Con la declaración de independencia de Centroamérica por el Congreso en Méjico, y la convocatoria de un Congreso Federal en Guatemala el 1 de julio de 1823, comienza realmente la independencia. Este Congreso decretó: «que las provincias de que se componía el Reino de Guatemala eran libres e independientes de la antigua España, de México, y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no eran ni debían ser el patrimonio de persona ni familia alguna».

El nombre oficial del nuevo Estado fue el de «Provincias Unidas del Centro de América».

La Asamblea Nacional Constituyente ordenó el 2 de julio que todos los funcionarios públicos y corporaciones civiles, militares y religiosas jurasen el nuevo orden constitucional. El Obispo de Nicaragua, García Jerez, se negó, siguiéndole en tal actitud la mayoría de los religiosos regulares, quienes terminaron abandonando el país.

La Constitución, aprobada en 1824, establecía un sistema mixto entre federación y centralismo, con un parlamento unicameral y considerable autonomía para los Estados.

Las diferencias de criterio en torno a temas tales como relaciones Iglesia-Estado, política de aranceles, establecimiento de impuestos, fueron decantándose en dos bloques de opinión: los conservadores, partidarios del orden, la moderación, y los liberales, dispuestos a adoptar todas las innovaciones procedentes de Francia, Inglaterra o los Estados Unidos.

En el momento de la secesión de México existía consenso en torno a la idea de unificación, aunque los conservadores favorecían un sistema unitario y los liberales una Confederación. Los liberales representaban las provincias y su resentimiento, de raíces económicas y sociales, hacia la capital. Ellos controlaron el gobierno desde julio de 1823 y adoptaron la Constitución del 24.

Simón Bolívar había escrito en septiembre de 1815 en su Carta de Jamaica: «Los Estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizá una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares podrá ser, con el tiempo, el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia; traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo. ¡Acaso sólo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra, como pretendió Constantino que fuese Bizancio la del antiguo hemisferio!»

En las elecciones de 1825, y bajo acusaciones de un fraude que perjudicó al virtual ganador, José Cecilio del Valle, Arce fue impuesto como Presidente de la Federación por los liberales. Su gobierno fue un rápido camino al caos. Dice al respecto Carlos Pereyra¹: «La Constitución regía en las Provincias Unidas del Centro de América, desde el 15 de abril de 1825, en que fue jurada. No había una sola sílaba original en sus preceptos esenciales. Escrita sobre la copia de una copia, tenía la inconsistencia de las nubes. Las Provincias Unidas iban desvinculándose dentro del pacto quimérico que pretendía coordinarlas. Rápidamente fueron presentándose más independientes, más hostiles, más resueltas a mantener, ante todo, la incompatibilidad. Cada república, en efecto, era un cacicazgo, y cada uno de estos cacicazgos, un campo de luchas internas. Sobre lo inconstituido se establecía lo inconstituible. El problema planteado por el sistema federal era irresoluble de todo punto. Consistía en sostener un cacique máximo sobre los hombres agitados por cinco mandarines provinciales. Como el sumo imperante debía necesariamente salir de alguna de las provincias unidas, ésta tenía, lo mismo, que entrar en lucha contra las otras, para sostenerse. El hecho, por otra parte, de que Guatemala fuera centro de la Federación y provincia independiente, creaba en su seno una dualidad extraordinariamente peligrosa. El cacique máximo sería probablemente el mandatario local. Y así fue; los acontecimientos se encargaron de patentizar lo absurdo del sistema. Los otros Estados ya habían roto antes que Guatemala la Federación.

En Guatemala residía el Presidente, don Manuel José Arce. Allí estaba también el Vicepresidente, ejerciendo las mismas funciones de Presidente del Senado que tiene el titular de ese cargo en los Estados Unidos de América. Al principio todo parecía caminar en perfecta armonía, en el mejor orden de los mundos imitados. Hubo una circunstancia, sin embargo, y fue que Guatemala, Provincia Unida, tenía como jefe a don Juan Barrundia. No era posible que cupiesen un presidente y un jefe en la misma capital. Se produjo, pues, un conflicto sangriento entre Arce y Barrundia, o sea entre la Federación y el Estado Libre de Guatemala. El conflicto se extendió hasta El Salvador, con incidentes lamentables.»

La Federación empezó bajo malos auspicios y acabó peor. Fue su principio una guerra y su final una terrible anarquía.

Arce arrestó a Barrundia e hizo «elegir» en su lugar a Mariano Aycinena. Disolvió el Congreso Federal, invadió El Salvador y Honduras, donde depuso al liberal Herrera, iniciando así una guerra que duró de 1826 a 1829, mientras que en Nicaragua se desataba, una vez más, la guerra fratricida entre León y Granada. Aupado en el poder por los liberales, pero sin ideología propia y más ambición que la de sostenerse, Arce entregó a los conservadores el control de la Federación y del Gobierno de Guatemala, desencadenando con ello una guerra civil de proporciones serias desde el momento en que los liberales encontraron un líder en Francisco Morazán.

El Salvador había promulgado su Constitución como Estado en 1824; Costa Rica y Guatemala, en 1825; Nicaragua y Honduras, en 1826.

◆
¹ Carlos Pereyra, *Historia de la América Española*. Madrid, 1926.

En sesión de 1824, el diputado federal Francisco Córdova calculó la población de Centroamérica en millón y medio de habitantes, de los cuales novecientos mil indígenas se hallaban «en estado de idiotez»; medio millón de ladinos se hallaban igualmente atrasados; sólo considera en condiciones de participar de la vida ciudadana a los cien mil blancos, por tener alguna educación².

La victoria de las tropas de Morazán, que ocuparon Guatemala en 1829, estuvo salpicada de escenas de pillaje y de actos de venganza contra los conservadores. Al no sentirse seguro en Guatemala, no sólo por ser esta ciudad un bastión conservador, sino también por los odios despertados en gran parte de la ciudadanía guatemalteca, trasladó la capital a San Salvador en 1832, pero el gobierno del Estado salvadoreño decidió entonces separarse de la Federación para ahorrar gastos.

El Congreso Federal decretaba, mientras tanto, la expulsión del arzobispo y la supresión de las órdenes monásticas, salvo los hospitalarios belemitas; declaraba herederos forzosos a los hijos de los clérigos, legitimaba el matrimonio civil contraído por los sacerdotes, abolía el fuero eclesiástico y repartía los bienes agrícolas del clero.

La reacción no se haría esperar, y en 1837 las poblaciones campesinas de Guatemala se levantaron bajo Rafael Carrera, un caudillo natural de estirpe ladina, quien alteraría el curso de la historia centroamericana destruyendo las aspiraciones de los liberales durante más de veinticinco años.

La revuelta de Carrera no era un nuevo episodio de la continua lucha entre liberales y conservadores, sino una rebelión popular de las masas de indios y ladinos contra el reformismo revolucionario de Morazán. Éste estaba convencido de que el atraso de Centroamérica era el resultado del colonialismo español, y que destruyendo las instituciones heredadas del pasado y adoptando otras nuevas, importadas de Europa o Estados Unidos, el progreso quedaba asegurado. Pero tal progreso debía ser impuesto a una población acostumbrada a instituciones de corte paternalista y al respeto a la Iglesia. No es así extraño que los curas rurales estuvieran en la vanguardia del estallido que sacudió Centroamérica en 1837.

La imposición de un tributo per cápita, la obligación para todos los residentes de trabajar tres días al mes en la construcción de carreteras, la política de adquisición privada de la tierra baldía y comunal, que transformaba a masas de indígenas en aparceros o peones de latifundistas, la política de concesiones agrícolas a extranjeros en empresas colonizadoras, todos fueron elementos que coadyuvaron a la formación de un espíritu de rebeldía y rechazo conservadores.

La Federación de Centroamérica terminó legalmente en 1838 con el acuerdo del Congreso Federal de que los Estados podían constituirse del modo que tuvieran por conveniente. A partir de entonces, la Federación es puro formalismo o intentos de imponerla por la fuerza. En 1839, Morazán cesó como Presidente de la Federación y fue



² Constantino Láscaris, *Historia de las Ideas en Centroamérica*. San José, EDUCA, 1970.

electo jefe de El Salvador. Las guerrillas de Carrera mantuvieron en estado de constante alerta al ejército liberal, y en 1838 los conservadores ganaron el poder en Guatemala bajo Rivera Paz, quien se dedicó a deshacer todo lo hecho por los liberales. También en Honduras y Nicaragua llegaron al poder los conservadores.

Carrera entró en Guatemala en 1839 y Morazán toma la capital el 18 de marzo de 1840. Al día siguiente, las tropas de Carrera derrotaron completamente a los morazanistas o «coquimbos», como les decían, hasta el punto que Morazán abandonó la ciudad rumbo a Panamá sin haber negociado una capitulación de sus tropas, que quedaron a merced del vencedor.

Dos años más tarde se introdujo en Costa Rica, arrebatando el poder al conservador Braulio Carrillo, pero una revuelta popular anuló este nuevo intento de reunificación y un pelotón de fusilamiento puso fin a la vida de Morazán el 15 de septiembre de 1842 en la ciudad de San José.

La guerra civil expresa en última instancia la incapacidad de hacer viable un proyecto de desarrollo sustitutivo del heredado de España, y que fuera aceptable por las fuerzas políticas de la Federación.

El triunfo conservador en los cinco Estados revitalizó viejas instituciones de la época española. Se restauraron los órdenes religiosos, se invitó a retornar al Arzobispo exilado, se restauraron los gremios y cofradías, el cargo de corregidor, la educación bajo la supervisión de la Iglesia, el juicio de «residencia», se abolió el impuesto de capitación, se redujeron los impuestos sobre los alimentos básicos y se instauró el diezmo. Una nueva Declaración de los Derechos del Estado y de sus Habitantes marcaba un enfoque autoritario en el tratamiento de las libertades públicas e individuales. Igualmente se restauró la Universidad de San Carlos.

En 1857, Carrera restauró los colores rojo y gualda de la bandera española en la bandera nacional guatemalteca, donde permanecieron durante veinte años.

Salvo un breve período de unos meses en 1848, en los que fue desbancado por una reacción liberal, Carrera gobernó con mano de hierro hasta su muerte, en 1865.

Carrera y sus aliados conservadores representan una reacción popular contra los esfuerzos liberales de imponer por la fuerza el progreso económico, político y social en un cuerpo social impregnado profundamente por tres siglos de transculturización y no dispuesto a abandonar sus formas de vida por idealistas promesas de mejora. Los conservadores desecharon el idealismo liberal, nieto del espíritu reformista de la Ilustración, y adoptaron un romanticismo que glorificaba un pasado más brillante y recalca su común herencia Hispano-católica³. Su énfasis en un nacionalismo de Estado sobrevive hasta nuestros días como la gran victoria —pirrica, podría decirse— del



³ Ralph Lee Woodward, Jr., *Central America, a Nation Divided*. Oxford University Press, New York, 1985.

conservadurismo decimonónico. Ellos sentaron las bases del nacionalismo de los modernos estados centroamericanos.

En definitiva, podría decirse que la historia de la República Federal de Centroamérica expresa en su frustración los avatares del paso de una situación colonial a la consolidación de un Estado nacional que surgía sin fuerzas sociales internas ni suficiente autonomía para construir una autoridad sólida⁴.

* * *

El cultivo del añil, junto con el de la grana o cochinilla, continuó siendo la base de la exportación. Aquel requería una estructura de haciendas y obrajes, mientras que éste se basaba casi exclusivamente en la pequeña propiedad. Por ello, el añil suponía la migración estacional de mano de obra, el peonaje de hacienda, el mozo colono y otras formas de relación semiservil de trabajo.

La grana requería pequeñas explotaciones y escaso capital, utilizándose mano de obra casi exclusivamente familiar.

Ambos cultivos de colorantes no exigieron ajustes en las estructuras de la propiedad. Fueron los mestizos sus productores principales, en una especie de ensayo de lo que más tarde sería su fuerza social y política, cuando la reforma agraria liberal les abrió las puertas del acceso a la propiedad de la tierra, en plena época del café.

Los grandes propietarios, de extracción criolla, dedicaban la tierra a la ganadería o eran dueños de los ingenios u obrajes que procesaban, para la exportación, la producción de añil o grana. La producción se vendía a casas comerciales exportadoras que otorgaban los correspondientes créditos, con frecuencia usurarios, fijaban los precios internos y vendían a los compradores ingleses.

En Guatemala, el cultivo del nopal para la grana comprendía en 1840 más de 200.000 manzanas (una manzana es equivalente a 0,698 hectáreas). En esa década, el precio internacional llegó a alcanzar 150 pesos plata por el zurrón de 150 libras peso, equivalente al precio más elevado alcanzado por el café en el presente siglo. La cosecha más importante se logró en 1854, con un volumen de 2.587.200 libras y un precio de 1.757.300 pesos, extraordinario para la época⁵. En El Salvador y Nicaragua también se producía grana, aunque fue el añil el principal producto exportado.

Ambos colorantes murieron de muerte sintética hacia 1859, cuando los químicos alemanes inventaron las anilinas y otros tintes más baratos. América Central, que había sido grana y añil, pasaría a ser café en el transcurso de unos años.

* * *



⁴ Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. EDUCA, 1977.

⁵ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

Las esperanzas de construcción de un canal transoceánico, de las que por primera vez habló en el siglo XVII el monje franciscano Martín Lobo, transformaron la historia diplomática del istmo a lo largo del siglo XIX en una larga serie de intrigas cuyo desenlace consistía en saber quién conseguiría la concesión para la construcción del canal. Por ello Gran Bretaña jugó un papel de primera importancia en este tema, ya que, como primera potencia naval, imperial y comercial del mundo, la construcción de un canal entre el Atlántico y el Pacífico le favorecería más que a nadie.

El imperialismo británico, que se había mantenido en Belice después de la Independencia centroamericana, estableció una guarnición y colonos en las islas de la Bahía de Honduras en 1830. Desalojados por tropas de la Federación, atacaron de nuevo y las reocuparon en 1841. Los cónsules británicos, dirigidos por Frederick Chatfield, mostraron una actividad inusitada en la defensa de los intereses de sus compatriotas. Cuando las circunstancias lo exigían, aparecía en el horizonte una cañonera para reforzar la argumentación.

A partir de la independencia, Gran Bretaña había reducido los derechos de importación sobre los productos de exportación centroamericanos. La boyante industria textil del Imperio absorbía ávidamente todos los colorantes naturales, las pieles y caparazones de tortugas de Honduras, y en 1846 todos estos productos entraban en el mercado británico libres de arancel.

Los préstamos a los incipientes gobiernos bajo la garantía de un porcentaje de la renta de aduanas, las concesiones mineras y los proyectos de colonización, completaban el cuadro de los intereses británicos en el istmo.

El comercio entre cada uno de los cinco centroamericanos era, mientras tanto, insignificante. Tanto las corrientes comerciales como la disposición de las vías de transporte intensificó este rasgo y ayudó a crear en cada estado enclaves que tenían poca o ninguna relación entre sí. Las mejores carreteras partían de la capital y de las áreas productivas en dirección a los puertos, mientras que las comunicaciones interestatales eran prácticamente inexistentes o inabordables. En lugar de fomentar la interdependencia, tal situación consolidó la separación real entre los cinco.

España retuvo el reconocimiento oficial a los países centroamericanos hasta 1863, pero los nexos comerciales se mantuvieron y vemos así que, en 1840, el 15% de las importaciones de Guatemala procedían de España. Durante el dominio liberal, los conservadores pidieron ayuda al Gobernador español de Cuba y, tanto en Guatemala como en Nicaragua y Costa Rica, se produjeron insurrecciones proespañolas, llegando los realistas a conquistar el fuerte de Omoa, en Honduras, en 1832.

Los Estados Unidos comenzaron a interesarse en el istmo después de la adquisición de Oregón y California. El Tratado de Bidlack, firmado en 1846, garantizaba a los Estados Unidos el derecho de tránsito a través de Panamá y, de acuerdo con sus cláusulas, una compañía estadounidense construyó el ferrocarril panameño entre 1850 y 1855.

La competencia anglo-americana por conseguir garantías y concesiones se convirtió en un duelo entre el cónsul británico Chatfield y el americano Squier, asociados

respectivamente con los conservadores y los liberales. En 1848, los británicos se apoderaron de un establecimiento comercial en la desembocadura del río San Juan en Nicaragua, y los Estados Unidos apoyaron las protestas centroamericanas.

El Tratado de Clayton-Bulwer en 1850 supuso un empate anglo-americano en sus respectivas ambiciones de construcción de un canal transoceánico: ninguna parte podría fortificar, colonizar o ejercer dominio sobre ningún territorio centroamericano. Dos años más tarde, los británicos sonderaron la solidez de la resolución americana declarando colonia las hondureñas islas de la Bahía. La protesta de Honduras fue apoyada por los Estados Unidos, y Gran Bretaña finalmente se retiró en 1859, dejando una población negra, antiguos esclavos de la isla de San Vicente, que todavía utiliza un habla derivado del inglés, considera a Honduras como «el Continente» y pertenece a confesiones protestantes. Mediante un Tratado con Nicaragua en 1860, los británicos abandonaron la costa Mosquitia. Y en 1859, mediante tratado con Guatemala, ésta se comprometía a aceptar la soberanía inglesa sobre la colonia de Belice a cambio de una carretera del Caribe a la capital. Los británicos deseaban que la carretera finalizara en Belice como medio de revitalización de su antigua importancia comercial, y las conversaciones se prolongaron sin resultados. Finalmente, Guatemala construyó un ferrocarril, dejando el tema de Belice sin resolver.

Tampoco faltaron problemas con los vecinos. En 1824, Méjico ocupó Soconusco. Colombia ambicionaba terrenos hasta el Cabo Gracias a Dios, abandonando tal pretensión a expensas de Costa Rica, que tuvo que olvidar sus miras sobre las islas de San Andrés y Providencia. La Guerra de las Castas en Yucatán (1847-1855) produjo problemas graves de orden público y gran flujo de refugiados hacia Guatemala y Belice.

Pero las disputas entre los propios centroamericanos fueron más graves. La práctica de acoger exilados y complotadores contra otros Estados se hizo general, y constituye hasta nuestros días un rasgo característico de la historia política centroamericana.

El episodio más amenazador para la independencia centroamericana lo constituyó William Walker. El descubrimiento de oro en California en 1848 colocó a Nicaragua en el centro de la principal ruta hacia San Francisco y los yacimientos mineros. En 1849, Cornelius Vanderbilt había conseguido una concesión de Nicaragua para establecer una vía de comunicación a través del istmo vía el río San Juan y el lago Nicaragua. Vanderbilt montó una compañía que aseguraba al pasajero, tomando el vapor en Nueva York y transportado a San Juan del Norte, el traslado a través de Nicaragua a San Juan del Sur o Corinto y de aquí hasta San Francisco. La compañía estaba funcionando en 1851 y, como el ferrocarril panameño no se terminó hasta 1855, estos cuatro años de ventaja fueron dorados para Vanderbilt.

Pero volviendo a Walker, un doctor en medicina oriundo de Tennessee y convencido de la teoría del «destino manifiesto» con respecto a Latinoamérica, llegó a Nicaragua en 1855 y, aliado a los liberales, tomó Granada, provocando la desbandada de los conservadores. La administración del Presidente Pierce lanzó protestas de «neutralidad» en el asunto, pero no hizo nada para detener a Walker, y reconoció en 1856 el gobierno títere, montado por Walker, del Presidente Rivas. Hombres de negocios de Nueva York y San Francisco, con Morgan y Garrison a la cabeza, apoyaron financieramente a Walker, y

veteranos de la guerra de Méjico y Sudistas acudieron cual buitres al despojo a Nicaragua, aumentando las fuerzas de Walker hasta totalizar unos 2.500 hombres. Cundió la impresión entonces de que los Estados Unidos podrían anexionar Nicaragua como un Estado esclavista, a pesar de que la esclavitud había sido abolida en Centroamérica hacía un cuarto de siglo.

Los británicos azuzaron los temores centroamericanos, a pesar de que la aventura de Walker contaba con las simpatías de los liberales, quienes veían en él una posibilidad de reafirmar los valores republicanos y democráticos y de aplastar los partidos «aristocráticos».

En 1856, los cuatro Estados centroamericanos se pusieron de acuerdo para enviar tropas y liberar Nicaragua de los filibusteros. Gran Bretaña suministró gran parte de las armas, municiones y equipo. Mientras tanto, los agentes de Vanderbilt sembraban el descontento en Nicaragua contra la ocupación, y finalmente, Rivas, cansado de su papel de marioneta, dimitió, siendo sustituido por el propio Walker después de una «elección». Entre sus benéficas medidas, estableció el inglés como lengua oficial del Estado, legalizó la esclavitud e intentó interesar en su empresa a los Estados esclavistas del sur de la Unión.

Las tropas centroamericanas fueron dirigidas por el Presidente de Costa Rica, Mora, en una guerra conocida en Centroamérica como la Guerra Nacional. Después de varios meses de dura lucha y gran destrucción, Granada fue prácticamente destruida, y cuando ya Walker se encontraba sitiado, el Presidente Buchanan consiguió que se rindiera y el 1 de mayo de 1857, acompañado de sus ya escasas tropas, se embarcó en un barco de guerra norteamericano, siendo recibido en Nueva Orleans como un héroe. Después de dos intentonas fallidas de regreso a Nicaragua, en 1860 zarpó hacia la isla de Roatán, en las islas de la Bahía, y de allí embarcó hacia Trujillo, que capturó. Un regimiento de Infantería de Marina británico desembarcó, capturó a Walker y lo entregó al gobierno hondureño. Este personaje, que parece arrancado de las páginas de una novela de aventuras, fue inmediatamente juzgado, condenado y ejecutado.

El episodio Walker encendió por breves instantes la llama de la solidaridad centroamericana, desacreditó durante años a los liberales, que tan ingenuamente habían acogido y apoyado los sueños de grandeza del visionario esclavista, y retrasó los intentos norteamericanos de penetración en la región, siendo el sentimiento anti-Estados Unidos la causa de que Francia lograra un contrato con Colombia para construir un canal a través de Panamá bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, constructor del Canal de Suez.

En 1865, la identidad nacional de los estados centroamericanos estaba asentada, aunque la unión continuó siendo parte importante de la retórica liberal.

III

Alta es la noche y Morazan y él. ¡El hoy, ayer, mañana! Tú lo sabes. Cien años. América mestiza que los golpes de la fiebre maneja. El mundo es vivo del siglo.

La reforma cafetalera o el triunfo del liberalismo

Morazan. Pablo Neruda

II

De la unión a la disgregación
y del cacique al caudillo

No, aún no secaban las banderas,
aún no dormían los soldados
cuando la libertad cambió de traje,
se transformó en hacienda;
de las tierras recién sembradas
salió una casta, una cuadrilla
de nuevos ricos con escudo,
con policía y con prisiones.

Canto General. Pablo Neruda

Centroamérica, que durante siglos había exportado tintes, comienza a ser conocida en el mundo a partir de la segunda mitad del pasado siglo por sus exportaciones de café. El color es substituido por el sabor, y la grana y el añil, por el café.

La restauración conservadora duró mientras el orden social y económico pudo apoyarse en el dinamismo de la agricultura de los colorantes. Pero el cultivo del café exigía nuevas formas de propiedad agraria y, sobre todo, un tipo de propietario con rasgos y mentalidad nuevas. A partir de este hecho surgen modificaciones profundas sobre la estructura social y política de Centroamérica. Los cinco países experimentaron la influencia liberal en distinto grado y de forma diferente. El conflicto entre lo antiguo y lo nuevo fue resuelto de forma violenta en Guatemala y El Salvador, pacífica en Costa Rica, e incompleta en Honduras y Nicaragua.

Si los límites reales entre el fenómeno político y el hecho económico coincidieran plenamente, podría decirse que la República liberal corresponde a un modelo de desarrollo de una sociedad agroexportadora dirigida por una burguesía cafetalera de claro perfil oligárquico¹. La revolución liberal, que socialmente supuso el descenso de la vieja aristocracia terrateniente, se proyectó esencialmente como un movimiento reorganizador de la tenencia de la tierra, creando el entorno cultural y político para la apropiación privada de grandes extensiones de terrenos de la Iglesia, de las comunidades indígenas, baldíos o realengos, y para el traspaso de parte de las propiedades de los conservadores a los liberales.

La expropiación de las heredades de conventos y asociaciones monásticas y su parcelación, junto con extensiones aún mayores de tierras del Estado, fue acompañado de medidas complementarias para asegurar el reparto. Se creó el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, creándose las condiciones necesarias para que el crédito personal se transformara en crédito territorial, lo que facilitó la adquisición de capitales a los nuevos propietarios así como la posibilidad de movilización rápida y transferencia del dominio de la tierra.

El reparto también afectó a los ejidos, es decir, las tierras destinadas en tiempos de la Capitanía para el servicio de los municipios o pueblos. La reforma liberal de los años setenta arremetió contra toda forma de tenencia colectiva de la tierra. Su ideario aspiraba



¹ Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. EDUCA, 1977.

a la constitución de un grupo de propietarios individuales que fueran la conciencia de la nación, la plataforma de su economía y su base de sustentación. Todo ello por obra de la insaciable sed de café del mundo. De modo que la Reforma liberal se desarrolla en torno a una taza de café y, por la misma razón, puede calificarse de reforma cafetalera.

* * *

El cultivo del café se inició en Costa Rica en la época española. El Gobernador Tomás de Acosta introdujo las primeras plantas, y el Gobierno de Madrid, en un intento de estimular el desarrollo y la diversificación de la agricultura, eximió en 1805 del pago de derechos el café producido en la Capitanía. Los grandes productores americanos de café en el siglo XVIII fueron Cuba y Haití.

Hacia 1834, Costa Rica producía unas 50.000 libras anuales y realizaba embarques de grano desde Puntarenas a Valparaíso, en Chile, que se había convertido en una escala importante del tráfico marítimo entre Europa y América del Sur. Cuando se terminó el ferrocarril de Panamá, las exportaciones costarricenses hacia Europa encontraron una vía más rápida y barata.

Costa Rica abrió así la marcha. Guatemala le siguió, y hacia 1855, las fincas de café comenzaron a proliferar en Cobán, Antigua y Amatitlán. El valor del café en las exportaciones guatemaltecas subió de un 1% en 1860 hasta un 44% en 1870. El Salvador se sumó al cultivo en los años setenta y Nicaragua y Honduras en los ochenta, aunque de modo parcial, pues en ninguno de estos dos últimos países fue importante el café hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

La producción total de café de Centroamérica nunca ha sobrepasado el 15% de la mundial, pero su calidad siempre ha sido considerada de las más elevadas del Continente.

* * *

La serie de revueltas que transfirieron el poder de los conservadores a los liberales se inició en El Salvador por el General Gerardo Barrios, antiguo participante en la Guerra Nacional contra Walker. Imbuido de lecturas positivistas, inició una serie de reformas educativas, políticas y económicas que Carrera, desde Guatemala, vigilaba con celoso ojo de guardián de la ortodoxia conservadora. Cuando Barrios comenzó a tomar medidas anticlericales en 1863, Carrera invadió El Salvador y, tras varios altibajos le reemplazó por el conservador Dueñas.

En 1865 fallece el «Caudillo Adorado de los Pueblos», como sus lacayos llamaban a Carrera, víctima de una «diarrea pútrida», siendo «sucedido» por su heredero designado, Vicente Cerna. Mientras tanto, en Honduras, los liberales habían conseguido montar un Gobierno que se convirtió en refugio de exilados guatemaltecos. Éstos, unidos a las fuerzas hondureñas, consiguieron derrotar a Dueñas en El Salvador, instalando en su lugar al Mariscal Santiago González. El Salvador se negó posteriormente a indemnizar a Honduras por su participación en el desalojo de los conservadores, iniciándose así una larga y sórdida historia de intervenciones mutuas en asuntos internos.

La llave de la estabilidad hondureña y salvadoreña era Guatemala, ya que ningún gobierno liberal podía sentirse seguro en estos dos Estados mientras al Norte un gobierno conservador manejara los resortes del poder. En 1871, los liberales, bajo el mando de García Granados, militar y miembro de una de las familias importantes de Guatemala, apoyado en Justo Rufino Barrios y con ayuda de Benito Juárez, padre de la reforma liberal de México, derrocaron al Gobierno. Después de un breve período bajo García Granados, Barrios asumió el mando en 1873, viniendo desde entonces a protagonizar el prototipo de dictadura liberal o cafetalera de Centroamérica. Barrios llevó al poder en Honduras en 1876 al liberal Marco Aurelio Soto, y prestó un apoyo decisivo a la estabilidad de sucesivos gobiernos liberales de El Salvador.

Mientras tanto, en Costa Rica, iniciadora de la revolución cafetalera bajo el mando del conservador moderado Juan Rafael Mora, un golpe militar puso término a sus aspiraciones de acceder a un tercer período presidencial, siendo substituido por José María Montealegre. Éste inició una serie de reformas en el plano educativo y económico y preparó el camino para la entrada en escena, en 1870, de Tomás Guardia, un militar que gobernó el país dentro de los moldes de la nueva dictadura liberal hasta 1882, enraizando en este lapso la revolución cafetalera en Costa Rica.

Los liberales de Nicaragua habían quedado más contaminados que ningún otro grupo nacional por su asociación con Walker, lo cual puede explicar el largo mando de los conservadores en el país. Pero, en 1893, los ciudadanos de Granada se levantaron contra el Gobierno de Roberto Sacasa, de León, y consiguieron establecer el primer gobierno liberal bajo José Santos Zelaya, quien se mantuvo en el poder durante dieciséis años con el apoyo de los liberales hondureños.

Las diferencias entre los caudillos conservadores y los nuevos dictadores liberales eran más bien de estilo y tono, aunque reflejaban divergencias en cuanto a principios inspiradores y prioridad de intereses². Y si bien la revolución liberal fue incompleta, supuso el declive de la vieja oligarquía criolla, que en parte fue substituida por una élite ladina y permitió el nacimiento de un pequeño pero activo sector medio llamado a jugar un papel creciente tanto en política como en economía.

Las fuentes doctrinales donde bebieron quienes propiciaron el triunfo liberal se sitúan en el positivismo de Auguste Comte, el evolucionismo de Darwin y el utilitarismo de Herbert Spencer. Menos idealistas que sus antecesores de los días de Morazán, los nuevos liberales creían que el crecimiento económico y la prosperidad eran necesarios para establecer una democracia. Por ello, sus grandes temas fueron el desarrollo económico, el anticlericalismo, su ilimitada fe en la educación científica y técnica, su aceptación de lo que Comte llamó «dictaduras republicanas» mientras sentaban las bases para llegar a una democracia real, su imitación y admiración ilimitadas hacia ideas que habían triunfado en Europa y Estados Unidos, y su falta de consideración y sensibilidad hacia los sectores más desfavorecidos de sus nacionales.



² Ralph Lee Woodward, Jr., *Central America. A Nation Divided*, Oxford University Press, New York, 1985.

La dependencia centroamericana de mercados exteriores para la colocación de su producción agrícola y minera y para la inyección de capital, se inicia en esta época. El café, su producción y exportación, se convirtió en el gran tema de la revolución liberal. Se animó su cultivo con subsidios, exenciones fiscales y promesas de beneficios crecientes. Se entregó la tierra a sus plantadores en condiciones muy favorables y a costa del Estado, de las comunidades eclesiásticas, de los antiguos conservadores y de los municipios y pueblos de indios. Las leyes y los jueces aseguraban a los finqueros, mientras tanto, mano de obra abundante y barata. Todo se sacrificó al café.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el café era el principal producto de exportación centroamericano, suponiendo el 85,2% de las exportaciones de Guatemala, el 80,4% de las de El Salvador, el 63,3% de las de Nicaragua y el 35,2% de las de Costa Rica. Las bananas, que suponían más de la mitad de las exportaciones de Honduras y Costa Rica, eran el segundo producto de exportación centroamericano.

Para el crecimiento de una economía de exportación era indispensable el desarrollo de las comunicaciones. Puertos, carreteras y ferrocarriles eran muy costosos, y sólo podían construirse con crédito, la mayoría de las veces externo, lo que agravó durante muchos años los problemas financieros de Centroamérica. Pero no cabe duda de que éste es uno de los logros de la revolución cafetalera.

Los liberales creían que el aumento de la productividad en el cultivo del café, y el incremento de sus exportaciones, desencadenarían fuerzas económicas que transformarían las economías centroamericanas en economías modernas, comparables a las europeas o norteamericanas. Con mayores rentas de exportación, esperaban que aumentara el nivel general de vida y que surgiesen industrias secundarias para satisfacer las crecientes necesidades de la población. La realidad es que no se operó ninguna revolución industrial y que, salvo algunas textiles y cerveceras, poco o nada se avanzó en el terreno industrial, quizá porque el mercado nacional seguía siendo raquítico.

Los beneficios de la exportación no se derramaron sobre amplios sectores de la población, sino que quedó en un pequeño círculo de finqueros que gastó en importaciones de lujo más que en reinvertir y mejorar plantaciones. Las inversiones en el extranjero, una de las constantes centroamericanas, aparecen en este período por primera vez.

Aunque la legislación liberal daba toda clase de facilidades para la captación de inmigrantes, sus capitales y sus técnicas, muy pocos europeos se asentaron en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo, sin duda por la competencia de los Estados Unidos, Argentina y Brasil, grandes receptores de tal emigración. Sin embargo, un reducido número de empresarios y agricultores se instaló, llegando a crear, con el tiempo, una pequeña pero arrogante clase de comerciantes y finqueros con un peso determinante durante décadas en la dirección de la economía centroamericana.

Los «dictadores republicanos», según la denominación de Comte, crearon maquinarias políticas centralizadas, dependieron en gran medida del naciente instituto militar, amañaron las instituciones políticas, se apoyaron en una nueva élite de productores de café e intereses extranjeros que habían reemplazado el soporte social del caudillo conservador, es decir, la antigua aristocracia criolla, amaestraron al poder judicial y al

legislativo, generalmente unicameral, prorrogaron ilegalmente su presidencia a la expiración del mandato, corrompieron las elecciones populares y las restricciones constitucionales, no siendo por tanto su contribución excesivamente positiva para la consolidación de regímenes democráticos y republicanos.

Costa Rica comenzó a ser la excepción a partir de que en 1889 la oposición ganara, pero, incluso aquí, las elecciones no fueron siempre libres. En general, puede decirse que pocas diferencias hubo entre el conservadurismo de Carrera y el liberalismo de Barrios, por mencionar dos nombres paradigmáticos del caudillismo conservador y la dictadura liberal. Y a pesar del énfasis puesto por los liberales en atacar los privilegios de clase, muy a menudo las prebendas de la vieja aristocracia criolla fueron substituidas por las situaciones privilegiadas del nuevo sector emergente.

Los liberales centroamericanos, que llegaron al poder en el último tercio del siglo XIX, representaron un ensanchamiento del reducido grupo de familias que había monopolizado el poder político y económico de la región en los albores de la Independencia, pero más de una supo insertarse en la nueva balanza de poder y transitar del conservadurismo al liberalismo sin descender de status.

Tanto la Iglesia como el Ejército sufrieron cambios importantes. La Iglesia, punto de enlace de los conservadores y las masas, especialmente las indígenas, perdió poder e influencia. En cuanto al Ejército, que había sido una guardia pretoriana del caudillo conservador, canalla mal pagada y peor disciplinada, merecedora del temor y desprecio de la mayoría de la ciudadanía, se transformó en una organización profesional de naturaleza permanente. El Salvador tomó la delantera, pero la Escuela Politécnica de Guatemala llegó a ser el modelo centroamericano de profesionalismo.

La institución militar se convirtió en un medio privilegiado de ascensión social, especialmente para el sector más inquieto, el ladino, y paulatinamente se fue transformando en el soporte indispensable del dictador liberal, ganando prestigio en la población a través de servicios tales como la salud, la educación y las comunicaciones en forma de carreteras y puentes. A pesar de que el positivismo justificaba fácilmente la dictadura, las revueltas y asonadas militares, la intriga y conspiración continuas, se convirtieron en un rasgo característico de la vida política centroamericana.

Una segunda constante fue la intervención de cada país en los problemas políticos internos del vecino, lo que contribuyó a dar un tono altamente explosivo al istmo. Los Presidentes que conseguían completar su mandato presidencial eran la excepción. Sólo los más duros lo lograban, como Santos Zelaya en Nicaragua (1893-1911) y Estrada Cabrera (1899-1920) en Guatemala.

Otro elemento adicional de tensión fue el ideal unionista. Cuando un dictador se sentía suficientemente fuerte en su país, resucitaba el viejo sueño unionista morazánico. Barrios y Zelaya intentaron unificar el istmo por la fuerza y fracasaron.

Por toda esta serie de razones la vida ístmica durante el siglo XIX fue de naturaleza claramente sísmica.

Desde el punto de vista intelectual se instauró un período de imitación y plagio de cuanto sonaba en Europa o Estados Unidos. Al despreciarse oficialmente cuanto olía a entronque con la realidad histórica, puesto que la revolución cafetalera aspiraba a crear de la nada una nueva sociedad, se agostó en flor cuanto de creatividad e imaginación autóctona pudiera surgir.

Quienes menos mejoraron con la reforma fueron los indios y los campesinos. Abandonado por obsoleto el paternalismo de los conservadores, heredero de la mentalidad asistencial de la Corona española, las masas indígenas y campesinas recibieron tratamiento de peones. Ambas llegaron a una situación de virtual esclavitud bajo un régimen que predicaba el progreso material. Pero sólo para unos pocos.

Parece claro que los liberales lucharon por conseguir el poder de la antigua aristocracia criolla y sus mandaderos conservadores no con el deseo de reestructurar la sociedad desde sus bases, sino con la intención de nivelarse con los criollos. En la base de la Reforma encontramos así una *legislación de tierras* y una *legislación laboral*³.

La de tierras adoptó dos direcciones. La supresión gradual de las tierras comunales de los pueblos de indios fue la primera. El pretexto fue la filosofía liberal que recomendaba un propietario individual, responsable, innovador, que revalorizara la tierra. La realidad favoreció a una capa media alta rural compuesta por los ladinos de los pueblos y lanzó al mercado una masa ingente de indios desposeídos y anonadados. La multiplicación de latifundios cafetaleros a base de facilidades adquisitivas, con su añadido de rancherías de indios, fue el segundo.

La destrucción de los pueblos de indios, tal como habían sido éstos concebidos en tiempos de la Capitanía, es el cambio más importante de la Reforma. Fenómenos tales como la supresión de las tierras comunales, la aceleración violenta del proceso de multiplicación de latifundios, la supresión del poder local de los caciques indios, el control del gobierno municipal de los pueblos por núcleos ladinos, el desplazamiento estacional de masas de indios y campesinos a las haciendas cafetaleras, fueron su consecuencia.

La *legislación laboral* de la Reforma creó una servidumbre legal del indio a favor de los intereses de los finqueros. El Reglamento de Jornaleros de la época de Barrios y la Ley de Vagancia del último dictador cafetalero, Ubico, conformaron en Guatemala una realidad de auténtica opresión del indio: obligado éste a acudir a las fincas cuando el finquero le necesitara, vigilado por las autoridades locales, que exigían el cumplimiento del «mandamiento», privó la paga forzada bajísima, llamada «habilitación», y los finqueros dispusieron de medios para retener a los indios en las fincas el tiempo necesario mediante el expediente del endeudamiento forzoso y la retención por deudas.

La Ley de Vagancia enviaba a romper piedra en los caminos, sin paga alguna, a los indios que no demostraran haber cumplido cien jornadas por año en las fincas, cuando se



³ Severo Martínez Peláez, *La Patria del criollo*. EDUCA, 1983.

tratará de indios con alguna tierra, y ciento cincuenta jornadas si carecían de ellas. El «libreto de jornaleros» demostraba la solvencia del indio frente a su patrono.

La Reforma cafetalera rompió la vieja estructura de los pueblos de indios, pero lo hizo para ampliar la posibilidad de explotarlos a favor de una clase terrateniente más renovada y amplia⁴. Es decir, que si la independencia vino a realizar el sueño criollo de poder disponer del trabajo de los indios sin interferencias del poder metropolitano, la reforma amplió radicalmente tal disponibilidad al suprimir las tierras comunales y al reforzar, además, los mecanismos que impedían la contratación libre y mantenían el trabajo semigratuito. La formación de miles de rancherías de indios, y la retención de los mismos bajo el pretexto de deudas, fueron realizaciones de viejas ilusiones criollas frustradas durante siglos por el control monárquico del indio. Al igual que la titulación individual de grandes extensiones de tierras baldías —las antiguas realengas— para convertirlas en latifundios explotadas por una mano de obra abundante y barata.

Por ello, para Severo Martínez Peláez, las dictaduras cafetaleras fueron la realización plena y radicalizada de la patria criolla. Salvo en sus comienzos, no fue la sangre española ni el color de la piel lo que compactó *la clase criolla*, sino, más bien, la función acaparadora de la tierra y explotadora de la misma en régimen extensivo, gracias a una abundante y semiservil mano de obra. Con la reforma cafetalera, los mestizos, que se habían iniciado con la grana y el añil, lograron el status de terratenientes y la calidad de criollos.

El dominio criollo estableció unas estructuras de esencia tan colonial que es necesario remontarse a la época anterior a la promulgación de las Leyes Nuevas para encontrar parangón. Preparando de paso el empalme con futuros colonialismos, a los que es necesario colocar el prefiño de neo.

El gusto por el café en Europa y los Estados Unidos despertó el furor de la apropiación de tierras y la explotación de hombres. Y en una serie históricamente larga de contrasentidos, el latifundio en Centroamérica nació bajo la bandera de la libertad de trabajo, del mismo modo que la independencia se inició bajo el estandarte de Fernando VII y la protesta de fidelidad a la Corona. El proyecto de formación de estados nacionales se articuló, tras el paréntesis de la frustrada Federación, sobre programas de enlace con centros consumidores exteriores mediante una serie limitada de productos agrícolas de exportación. De una agricultura extensiva y bajos rendimientos, cuya rentabilidad sólo se explicaba por el bajo o nulo coste de adquisición de la tierra y el reducido salario que se pagaba a una mano de obra contratada forzosamente, al margen de las leyes del mercado. El café proporcionó las bases de una economía agraria estable en Costa Rica a partir de 1840, de 1860 en Guatemala y de 1880 en El Salvador. Nicaragua y Honduras se insertaron en el sistema mundial de mercado de manera refleja y casi por exclusión de modelos posibles.

La *economía agraria de exportación* fue así el cigüeñal que impulsó los diversos proyectos nacionales centroamericanos. De los modelos disponibles a mediados del siglo

◆
⁴ Severo Martínez Peláez, *op. cit.*

pasado —monarquía constitucional inglesa, imperio positivista francés o república democrática norteamericana—, fue este último el que más fuertemente impregnó la fachada jurídica de las nacionalidades nacientes de Centroamérica. Pero como el modelo carecía de la apoyatura socio-económica que le podía prestar viabilidad, las disputas políticas y la vida constitucional centroamericana se inician al vacío, al vacío social y cultural.

El injerto de un modelo de organización permanentemente desajustado en un cuerpo social sempiternamente desequilibrado por excrecencias señoriales es la base de la inestabilidad crónica de la república liberal, como expresión del abismo existente entre una realidad «señorial» y unas pretensiones liberal-burguesas de imposible cumplimiento.

La reforma liberal es tardía o parcial en Honduras y Nicaragua. En 1871, las exportaciones nicaragüenses de café representaban únicamente el 10% de la totalidad detrás del oro, la plata y los colorantes. En Honduras, en 1888, el añil ha desaparecido como rubro de exportación, ocupando los primeros lugares la plata, el banano y el cuero, mientras que el café sólo suponía un 2,7% del total⁵.

Lo decisivo para la consolidación del Estado liberal centroamericano es, en palabras de Edelberto Torres Rivas, el grado de compromiso que se establece entre el antiguo orden colonial y las fuerzas sociales que lo representan, y el nuevo orden capitalista que las nuevas fuerzas sociales pasan, sin saberlo, a representar⁶. Las alianzas entre facciones criollas mestizadas de la vieja y nueva clase terrateniente y comercial, fue posible a partir de los gobiernos de Barrios en Guatemala y Zaldívar en El Salvador, mientras que en Costa Rica debe hablarse de predominio de un reducido número de familias cafetaleras a partir del gobierno de Tomás Guardia. En Honduras y Nicaragua no se dieron las condiciones para tal predominio, por razones de falta de especialización en un modelo de economía agraria exportadora, en el primer caso, y por larga duración del predominio conservador, substituido por la intervención de la marinería norteamericana y por gobiernos al servicio de fuerzas extranjeras, en el segundo (1857-1888).

Con visión histórica es muy importante señalar que, tras la desaparición del poder imperial español y la influencia financiera inglesa, se atraviesa un período de independencia casi absoluta en la que los países centroamericanos fueron dueños de sus destinos. Y que es justamente en este tránsito de la antigua situación colonial a la futura situación dependiente cuando se forma la nacionalidad centroamericana.

La reforma cafetalera tuvo aspiraciones de belleza. Una de las más importantes es la perfección de sus leyes básicas. Lo que no debiera sorprender, pues, dado el espíritu plagario de los liberales centroamericanos, se tuvo el buen gusto de seleccionar los cuerpos legislativos más prestigiosos de la vieja Europa y la joven Norteamericana para confeccionar unas Constituciones tan perfectas y duraderas como, demasiado a menudo, puramente teóricas. La constitución guatemalteca de 1879 sobrevivió hasta 1945. La de El

⁵ Edelberto Torres Rivas, en *Centroamérica hoy*. Siglo XXI, 1975.

⁶ Edelberto Torres Rivas, en *op. cit.*

Salvador, de 1886 hasta 1945. La nicaragüense de 1893 subsiste hasta 1939. Y la de Costa Rica de 1871, hasta 1949, mientras que la hondureña de 1894 perdura hasta 1936.

Todas estas Constituciones, hermosas piezas jurídicas, reflejan una tensión ininterrumpida entre el poder de una burguesía rural con claras connotaciones oligárquicas, sustentada en una violencia política institucional instrumentada por las fuerzas del orden, y una democracia ritual que se sucede a sí misma periódicamente presentando al mundo el hermoso espectáculo de la renovación democrática.

Los casos límites de organización de un modelo político centroamericano son la república aristocrática de Costa Rica y la dictadura plebeya guatemalteca⁷. Revolución desde abajo la primera y por vía autoritaria la segunda. La experiencia salvadoreña es próxima a la guatemalteca, mientras que la hondureña y nicaragüense son especiales.

Costa Rica se organiza como una república aristocrática porque las grandes familias cafetaleras, o «las familias», por antonomasia, llegan a formar una élite que se sucede ininterrumpidamente en el poder no sólo por razón de su riqueza sino de su autoridad moral. Tal élite se forma en condiciones muy especiales en Centroamérica: ausencia de población indígena, falta de riquezas mineras, inexistencia por tanto de encomiendas y repartimientos, y ausencia de un sector latifundista beneficiario de mano de obra abundante y barata. La burguesía cafetalera costarricense se distinguió de sus colegas centroamericanas por conseguir asentar su poder no a través de grandes extensiones de cultivo con mano de obra semiservil, sino mediante el control del crédito rural, el dominio de las técnicas de preparado del café y la asociación temprana con los centros consumidores extranjeros gracias a una íntima vinculación con el capital comercial británico.

El dominio del «beneficio» del café es aquí más importante que la extensión de tierra cultivada o la misma producción. Hacia 1888 existían unos 257 beneficios para cerca de 8.000 fincas de café. De modo que la condición de plantador no fue la causa determinante del poder de la burguesía costarricense. Fue más bien su papel de agente comercial y financiero de la exportación del café.

Las administraciones anteriores a 1890 llegaron al poder substancialmente por los siguientes métodos: por la fuerza, 7; por nombramiento legal y breve periodo, 6; por elección esencialmente no competitiva (indirecta), 1; y por elección competitiva indirecta, 1, lo que da un total de 25 administraciones⁸.

En una república aristocrática, el modelo de democracia es censitario. Las elecciones a la Asamblea Electoral quedaban abiertas a los mayores de veinte años, sabiendo leer y escribir y con propiedades no inferiores a 500 colones o un ingreso anual no menor de 100. La tradición, basada en valía personal, más que hereditaria, dió a Costa Rica una estabilidad única en el panorama centroamericano en lo que se refiere al reclutamiento de



⁷ Edelberto Torres Rivas, en *op. cit.*

⁸ James L. Busey, *Notas sobre la democracia costarricense*. Ediciones Costa Rica, 1969.

su clase política. Descendientes de un pequeño grupo de familias de la época española se transformaron en cafetaleros, y, dominando las técnicas de su preparado y comercialización, se instalaron en el poder político demostrando moderación, eficacia y consiguiente legitimidad social. Treinta y tres de los cuarenta y cuatro primeros Presidentes de la República, desde la Independencia, pertenecieron a descendientes de tres familias —Vázquez de Coronado, González Oviedo y Acosta Arévalo—, y de solamente una de ellas, la Vázquez de Coronado, salieron 18 Presidentes y 230 Diputados. Extraordinario ejemplo de endogamia política encumbrada en el éxito.

En 1889 se realiza la primera elección popular en Costa Rica, cuando el poder burgués es vigoroso y el estilo oligárquico despliega sus mejores virtudes. Pero no será hasta 1913 cuando se inaugura el ejercicio del voto directo en la elección presidencial, dejando de estar la selección en manos de una junta de notables o del Parlamento de plantadores, abogados y comerciantes, que fue siempre el Congreso.

La hegemonía del sector cafetalero y comercial fue producto en Costa Rica de la eficacia con que lograron el desarrollo socioeconómico del país dentro del marco oligárquico de una democracia con participación limitada, sucesivamente ampliada a círculos humanos cada vez más intensos con la misma prudencia y sabiduría con que manejaron sus prósperos negocios.

Los intentos de fundar una república liberal, federal y progresista quedan frustrados en Guatemala cuando, en 1838, la rancia aristocracia criolla encontró en Carrera, porquero, mestizo, analfabeto, de veintidós años, el líder de un ejército de campesinos que no sabe muy bien por qué luchaban, pero que luchaban muy bien. El régimen conservador es derrotado después de la muerte de Carrera, en 1865, por otra insurrección militar dirigida por Justo Rufino Barrios, pequeño propietario rural, mestizo de treinta y seis años, modelo de dictadores liberales, quien de 1873 a 1885 establece un extraordinario progresismo. De 1899 a 1920, Estrada Cabrera estableció la forma más acabada de degeneración política del liberalismo en forma de atroz dictadura. Es decir, que no hubo en Guatemala una élite política que evolucionara y se adaptara a las nuevas circunstancias, sino, más bien, un constante reemplazo violento de la clase política.

Barrios gobernó al país arbitrariamente hasta 1880. Los intentos de varias asambleas constituyentes por legalizar el nuevo poder mediante una hermosa Constitución, a la usanza de la época, quedaron frustrados. Entonces, los ideólogos liberales justificaron la dictadura como un mal necesario de naturaleza transitoria, denominando el nuevo estilo despótico «dictadura democrática». Se alargaba así la ya larga serie de contrasentidos conceptuales.

El mayor éxito del régimen de Barrios fue el de convertir a Guatemala, en tan sólo doce años, en el primer exportador centroamericano de café. También debe ser contabilizado a su favor el desarrollo de la educación popular, la ampliación de la red de transportes, la creación del sistema financiero y la renovación del orden jurídico. En su pasivo debe anotarse el establecimiento de una dictadura que tuvo que librar tres guerras contra los países vecinos, sofocar cinco rebeliones internas, amén de dos complotos contra la vida de Barrios.

La Constitución de 1879, bella y longeva, creó un sistema de gobierno unitario, presidencial y representativo, que contrastaba con la práctica política de los sucesivos gobiernos liberales. Nunca hubo una elección libre y directa hasta 1944. El estilo áspero, autoritario de todos los gobiernos liberales de Guatemala contrasta con la experiencia costarricense, hasta tal punto que se ha llegado a decir que el pueblo de Guatemala nunca tuvo conductores, sino mayorales.

La situación semiservil de la gran masa indígena y campesina explica en parte el cerrilismo de la burguesía guatemalteca. La competencia de los plantadores extranjeros y la intermediación de las casas exportadoras europeas, que amenazan con convertirla en subsector de la economía cafetalera, explica su inseguridad como clase y sus reacciones violentas de temor.

La primera gran plantación de café se estableció en Guatemala en 1857 y se llamó «Concepción», en Escuintla, propiedad de los hermanos Du Teil, de origen belga. Julio Rosignon, también belga, Francisco Planas y José Guardiola, españoles, los hermanos Brama, franceses, los colombianos Ospina y Vázquez, los alemanes Nobiat, Edelman, Diesseldorf fueron nombres claves en el desarrollo y mejora de las plantaciones de café. El control de pestes y enfermedades, el uso de fertilizantes y abonos, y el esmero en el cultivo de los arbustos fueron creación de los extranjeros. Así lo fueron igualmente ciertos inventos reconocidos internacionalmente, como la secadora «Guardiola».

La innovación correspondió a los extranjeros. Los plantadores guatemaltecos no pudieron desprenderse de la costra del pasado —ausentismo, ritualismo, costumbrismo—, cayendo pronto en manos de los «beneficios» o las casas prestatarias alemanas e inglesas. En pleno gobierno de Estrada Cabrera, en 1913, el 10% de las empresas cafetaleras de Guatemala eran alemanas y su producción alcanzaba el 39% del total nacional. Es decir, que su productividad era casi cuatro veces superior a la media guatemalteca. Esta situación se mantuvo hasta 1944, en que el gobierno de Guatemala, accediendo a las presiones de Washington, expropió las propiedades alemanas, que pasaron al sector público en una primera etapa y a manos norteamericanas, en considerable medida, en una segunda fase.

La primera generación de cafetaleros nacionales fueron gentes de mérito. Pero sus herederos cayeron en las dulces redes de la tradición señorial guatemalteca, con una ética de encomenderos, vale decir, buscando el disfrute privado de la ganancia tanto más fácil o voluminosa cuanto más explotada coactivamente la fuerza de trabajo⁹.

La innovación y alta productividad pasaron a depender de grupos diferentes, plantadores alemanes especialmente en una primera etapa, y capitales americanos en la segunda. Estos intereses exigieron estabilidad, orden social y servicios públicos para el desarrollo de sus negocios, desentendiéndose de cualquier cuestionamiento moral o planteamiento político sobre la validez de la dictadura liberal imperante.

◆
⁹ Edelberto Torres Rivas, en *Centroamérica hoy*. Siglo XXI, 1975.

Guatemala refleja la forma más descarnada y pura de autoritarismo oligárquico gestionado por dictaduras «plebeyas», cuya fuerza social procede en última instancia de la supervivencia de la servidumbre rural.

La experiencia de *El Salvador* carece de las notas aristocráticas costarricenses o de las plebeyas guatemaltecas... El estilo oligárquico adquiere aquí rasgos propios.

Entre 1879 y 1903 se produce un proceso de gran concentración de la propiedad agrícola salvadoreña, que se agrupa en manos de unas cuantas familias de difuso origen español y convierte al país en el segundo productor de café de Centroamérica. El grupo dominante es aquí aún más reducido, sus haciendas cafetaleras son mayores y el control sobre una mano de obra elástica es similar al de la oligarquía de Guatemala. Los principales residentes de las ciudades —doctores, comerciantes, militares, artesanos ladinos—, consiguieron en menos de treinta años expropiar a la mayoría de la población y crear fincas cafetaleras con los terrenos de las comunidades.

El proceso no fue pacífico y numerosos pueblos se levantaron para defender sus tierras ejidales, dando a la historia salvadoreña unos rasgos únicos en la región centroamericana. En 1872, 1875, 1885, 1898, 1899, se producen levantamientos de campesinos desposeídos de sus tierras. Y en contrapartida, el cercado de tierras y las adjudicaciones prebendarias condujeron a formas de ejercicio de la autoridad claramente represivas. En 1886 se creó una fuerza pública armada en el campo para controlar la vagancia y el intrusismo, pero también para prevenir los numerosos saqueos, incendios, destrozos, causados por la sed de venganza de campesinos desposeídos.

La burguesía rural-comercial no forma aquí un grupo homogéneo, sino que se fractura constantemente como expresión del conflicto intra-oligárquico, lo que explica que en cincuenta años —1850-1900— hubiera 47 jefes de Estado.

A partir de la Constitución liberal de 1886 se inicia una serie regular de golpes de estado que se convierte en el mecanismo de ajuste de la oligarquía cafetalera; Francisco Menéndez (1885-1890), Carlos Ezeta (1890-1894), Rafael Antonio Gutiérrez (1894-1898) y Tomás Regalado (1898-1903), llegaron todos al poder por golpes de Estado y, después de una provisionalidad de facto, se autolegitimaron en «elecciones» sin competencia.

Sobresale igualmente *El Salvador* en la región por haberse creado aquí la burguesía rural más poderosa de Centroamérica, debido a que la concentración de la tierra fue más aguda, la mano de obra abundante y, aunque discol, más eficaz que la guatemalteca. Y finalmente, las haciendas cafetaleras pertenecían a salvadoreños, pues hasta 1940 las inversiones extranjeras directas eran prácticamente inexistentes.

El mito de las «catorce familias» se inicia con las leyes antiejidales de 1879, y se prolonga hasta final de siglo en un proceso de consolidación de una oligarquía que nunca llegó a tener el ascendiente social de la «aristocracia» costarricense, pero que sin duda llegó a controlar el país de modo mucho más completo y autónomo que la oligarquía guatemalteca. La familia Meléndez-Quiñónez ocupaba el primer lugar, seguida por los Regalado, los Dueñas, Álvarez, Guirola, Salaverria, Meza, Sola, Wriegh, Hill, Goldtrie, Freund, Daglio, Gadala, Safie, Sol, Canesa, Meardi, etc. Un grupo familiar cerrado que

controla al país con mentalidad de mayoral de gran hacienda, en cuyo interior se impone disciplina y se da frijol al peón¹⁰.

El rasgo más distintivo del proceso histórico salvadoreño no es el despojo de las propiedades ejidales y la apropiación de las baldías y comunales, notas éstas que se encuentran en mayor o menor medida en el resto de la región, salvo Costa Rica, sino la continua insurgencia campesina, que se rebela contra el expolio primero y la explotación después, hasta llegar a la rebelión masiva de 1932, punto final de un período histórico y comienzo de un nuevo capítulo de la historia nacional.

La inestabilidad interna de Honduras durante prácticamente sus primeros cien años de independencia no se debe a luchas entre liberales y conservadores, sino a disputas entre facciones internas del partido liberal. El Estado pertenecía a la facción que lograba el triunfo.

La agricultura de subsistencia se combinaba con formas de medianería-aparcería, y daba al propietario y a los dueños de las pulperías (comestibles) calidad de caudillos políticos y jefes militares.

No surgió en Honduras una clase terrateniente que se transformara en burguesía rural, aumentara sus propiedades y se dedicara al cultivo del café, enlazando de este modo con el mercado exterior y consolidando un modelo de sociedad. El desarrollo del capitalismo agrario fue realizado por capitales extranjeras a finales del XIX en la costa Norte y en forma de enclaves bananeros.

La inestabilidad política hondureña batió todos los récords en la región. De la Independencia a 1876, cuando llega al poder el liberal Soto, es decir, en cincuenta y seis años, hubo 85 gobernantes. El General José María Medina, por ejemplo, estuvo once veces en el poder entre 1862 y 1876, Crecencio Gómez, cuatro veces, Ponciano Leiva, cinco, y Luis Bográn, cuatro.

Las sucesivas Constituciones fueron los distintos bandos de la facción triunfante, reflejando la tendencia a redactar nuevas leyes fundamentales en vez de cumplirlas. Entre 1824 y 1950 surgieron 14 Constituciones, con una media de duración de once años y medio cada una.

Aquí, como en el resto de Centroamérica, la combinación de voto censitario de segundo grado junto con la violencia política, la falta de comunicación entre las distintas regiones y el caudillismo local, dieron un panorama confuso a la vida política. La racionalización y unificación no surgen hasta que llegan las inversiones norteamericanas en plantaciones bananeras. Las grandes compañías bananeras intervienen tan directamente en la lucha por el poder político que ponen y quitan Presidentes y mediatizan completamente la escenografía política hondureña.

¹⁰ Edelberto Torres Rivas, en *op. cit.*

Al enclave minero que fue Honduras en tiempos de la Capitanía, sucedía el enclave bananero, sin que una sociedad tal como la hondureña, endeble económicamente y desarticulada geográficamente, pudiera estructurar una fisonomía de auténtica sociedad nacional. El gobierno reformista de Soto realizó un esfuerzo de infraestructura que integró y comunicó el país. Pero como los terratenientes locales no habían roto los moldes de la ganadería extensiva y precapitalista, careciendo de capitales suficientes, el impulso hacia el desarrollo y la inversión no podía proceder sino del exterior. Esto podría explicar, en parte al menos, la política de amplias concesiones y exenciones hacia los inversionistas extranjeros, y por qué los terratenientes locales quedaron eliminados del juego económico. El Presidente Bográn en 1891 lo expresaba con claridad meridiana: «Para que el capital extranjero venga a radicarse en este país, desierto, inculto y anárquico, debe ser halagado con pingües ganancias.»

Un rasgo constante del sistema hondureño desde su articulación y enlace con el mundo exterior, a través del enclave minero primero y bananero más tarde, es la desnacionalización. Los grupos oligárquicos locales fueron desplazados hacia funciones económicas subalternas o, más bien, hacia funciones no económicas, como las políticas y administrativas, quedando encargadas de asegurar el orden político y la estabilidad social exigidos por los capitales extranjeros, especialmente norteamericanos.

Es decir, que a pesar de los esfuerzos modernizadores de Soto y Bográn, más que un Estado nacional sólo existía un endeble andamiaje administrativo que no ejercía un dominio y control efectivos sobre la totalidad del territorio nacional.

Pero, a diferencia de Guatemala y El Salvador, las comunidades indígenas eran escasas; los ejidos no fueron masivamente expropiados y la tierra, aunque de calidad deficiente en la mayoría del país, era abundante. Estos rasgos explican en parte la posterior historia de Honduras.

Una de las características de la vida política y económica en *Nicaragua* es la constante lucha entre los jefes liberales de León y los caudillos conservadores de Granada, dos comunidades autosuficientes, territorialmente aisladas y carentes de una burguesía con vocación nacional.

A una experiencia conservadora que duró de 1857 a 1888 le substituyó la llamada revolución y la dictadura de José Santos Zelaya de 1893 a 1911, a la que puso fin la intervención militar americana, que estableció un virtual protectorado en el país hasta 1933.

La construcción del canal de Panamá había revalorizado la importancia estratégica de Nicaragua, y al intento privado de colonizar el país sesenta años antes —William Walker— sucede ahora una intervención oficial norteamericana para asegurarse una concesión canalera, buscando una segunda alternativa de paso intraoceánico, vía Río San Juan y lago de Nicaragua.

Santos Zelaya abolió los diezmos religiosos y liquidó el sistema de manos muertas y latifundios conventuales. Pero, sobre todo, incorporó a la soberanía nicaragüense el territorio de la Mosquitia, expulsando a las tropas inglesas y terminando con los sueños

británicos de crear un reino «mosco» que abriera a Gran Bretaña la posibilidad de una vía interoceánica.

* * *

Los Estados Unidos de Norteamérica habían hecho acto de presencia en la América española en la primera mitad del siglo XIX. Méjico recibió su primera visita y perdió la tercera parte de su territorio. Y como los puertos de Tejas y de California apuntaban hacia la América española, durante todo el resto del siglo quedó en el aire la posibilidad de que Washington extendiera sus dominios hasta las tierras centroamericanas.

La segunda visita a tierras hispanoamericanas se produjo en Cuba y Puerto Rico, en 1898. El motivo aquí era humanitario, se trataba de poner fin a la guerra que España mantenía con los independentistas cubanos. Conseguida la victoria y la Independencia de Cuba, Washington estimó como justo precio de su intervención el establecimiento de un Protectorado sobre la Cuba independiente, mediante la enmienda Platt, la incorporación pura y simple de Puerto Rico, donde nunca hubo insurgencia ni guerra, y la instalación de otro protectorado sobre Filipinas.

En 1901, Teodoro Roosevelt llega a la Presidencia de los Estados Unidos convencido de que los «dagoes», como llamaba a los latinoamericanos, eran incapaces de gobernarse por sí solos o, lo que para su visión era más importante, de mantener el orden. Los Estados Unidos tenían, más que el derecho, el deber de no dejar solos a sus vecinos del Sur, transformándose en su «protector natural». Y, con mayor motivo aún, cuando se trataba de una zona tan cercana y estratégicamente importante como Centroamérica, destinada a servir de paso obligado entre los dos océanos. En 1903, Roosevelt no pudo negarse al «espontáneo y masivo» deseo de los habitantes de Panamá de separarse de Colombia e inmediatamente se inició la construcción del Canal. En 1905, Roosevelt anunció que a partir de entonces los Estados Unidos actuarían como policía para mantener el orden en el hemisferio.

Así surgió el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe en el área del Caribe. «Lo único que este país desea es que las demás repúblicas del continente sean felices y prósperas; y no pueden ser felices y prósperas a menos de que mantengan el orden dentro de sus fronteras y se comporten con la debida consideración en sus obligaciones hacia los extranjeros.»

La Doctrina Monroe surgió con la intención de proteger las nuevas repúblicas latinoamericanas de interferencias del exterior, Europa en aquellos años. El Corolario Roosevelt y su política de la «gran estaca» significaría que los Latinoamericanos debían ser vigilados por el exterior, los Estados Unidos.

* * *

El protagonismo de los cafetaleros en la etapa de vinculación de los países centroamericanos al mercado mundial entrañó su consolidación como oligarquía. La reforma liberal impulsó en el campo un nuevo reparto agrario que inyectó dinamismo al sistema económico pero a un coste social excesivamente elevado. Se dieron pasos en la vía de la

constitución de una estructura institucional y política a través de un poder unitario que se legitima por la integración de las distintas regiones nacionales a través de ferrocarriles, puertos, carreteras, telégrafos, legislación y primeros atisbos de administración a escala nacional.

La clase propietaria reconvertida al cultivo del café, estimulada por los precios crecientes de éste, y extendidas sus propiedades, se encontró con una situación doméstica de escasez de mano de obra, ligada en gran medida a la economía de subsistencia. La solución consistió en inventar mecanismos de transformación del latifundio colectivo (religioso, estatal o ejidal) en haciendas cafetaleras o latifundio individual, desenterrando al mismo tiempo viejas instituciones de servilismo en la relación de trabajo que databan de la primera época de la colonia. Las leyes contra la vagancia y las «habilitaciones» o reclutamiento forzoso de campesinos fueron formas de trabajo asalariado admitidas jurídicamente en nombre de la libertad de trabajo.

Hace aún pocos años se discutía si los antecedentes de la hacienda cafetalera se encontraban en la época española, precisamente en la institución de la encomienda. Parece claro hoy en día que dicha hacienda nada tiene que ver con la encomienda ni con ninguna otra de las instituciones de la Conquista, aunque las relaciones serviles establecidas con la peonada se asemejen al dominio personal ejercido por el encomendero en la época colonial¹¹. La Comisión Bipartita sobre Centroamérica o Comisión Kissinger explica simplísticamente en nuestros días la actual situación económica y social de Centroamérica como una consecuencia de las estructuras dejadas por España, que habrían permanecido inmutables, desafiando la historia, durante cuatro siglos. Pienso que se ha explicado suficientemente el origen del latifundio centroamericano, sus actores, beneficiarios y sujetos pasivos, no siendo por tanto necesario insistir en este «escapismo» de la Comisión Kissinger.

La hacienda cafetalera representó una estructura muy distinta a la hacienda colonial, de naturaleza extensiva, cultivada marginalmente por aparceros indígenas, y donde la encomienda y la comunidad indígena, con la excepción de Costa Rica, eran los elementos constitutivos. La verdadera estructura agraria de tipo colonial no floreció paradójicamente antes, sino después de la Independencia y muchos de sus rasgos señoriales aún perduran¹². La explotación de la mano de obra campesina conservó un sabor patriarcal mientras el mercado era únicamente local; es la época de la hacienda preindependentista o de los años inmediatamente posteriores. Pero cuando las economías centroamericanas quedaron ligadas al mercado mundial a través del café, la explotación alcanzó niveles inéditos hasta entonces.

La orientación hacia afuera de las economías cafetaleras, su total ausencia de desarrollo hacia adentro sellaron las pautas de crecimiento de la región. En Europa, el estado liberal fue creado por un grupo social potente y con arraigo, la burguesía, con aspiraciones de renovación del ámbito económico y social, mientras que en Centroaméri-

◆
¹¹ Edelberto Torres Rivas en *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. EDUCA, 1977.

¹² Edelberto Torres Rivas, en *op. cit.*

ca, consistió simplemente en la adaptación de la estructura institucional y jurídica a las necesidades de vinculación al mercado externo. Conduciendo además, en un rizar el rizo de los contrasentidos, a que regímenes liberales funcionaran de facto como una dictadura excluyente y autoritaria. A una distancia abismal entre la formalidad legal y la aplicación diaria, a una radical separación entre los ideales políticos y las prácticas reales, a un ejercicio cotidiano del más descarnado cinismo político.

Una masa de siervos, encerrados en economías de subsistencia, en países sin auténtico mercado nacional, no era precisamente el material humano más idóneo para reclamar la ejecución de la división de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, la garantía de los derechos individuales y políticos, la imparcialidad de las decisiones judiciales, la igualdad ante la ley.

La política pasó a ser monopolio casi exclusivo de pequeñas capas urbanas, con sus sucursales rurales, mundo de caciques y clientelismo político, mientras que la gran masa del país quedaba relegada a una marginalidad no sólo económica, sino también política.

El alcoholismo pasó a ser un problema grave entre los pobres. Obligados a trabajar para una economía que proporcionaba beneficios económicos y sociales únicamente para las clases altas y una minúscula capa media, el alcohol barato de caña, el «guaro», era no sólo un medio de evasión, sino uno de los pocos placeres que se podían pagar.

Las revoluciones cafetaleras o «liberales» zarparon en una singladura que debía conducir al puerto del progreso material y la prosperidad. Tal objetivo fue conseguido exclusivamente para un reducido segmento de la población. La prosperidad general quedó, eso sí, inscrita en el preámbulo de las hermosas Constituciones liberales como un objetivo inaplazable hasta... mañana.

No hay razones suficientes para dudar de la buena fe inicial de los padres de la reforma liberal. Se encontraron con países desvertebrados socialmente, desarticulados geográficamente, desnacionalizados psicológicamente, donde los poderes estatales carecían de los atributos de la legitimidad, acechados de una parte por el fantasma de la vieja Capitanía y acuciados de otra por la realidad cotidiana de caudillos y dictadores que desconocían las fronteras nacionales y querían reconstituir, por la fuerza de las armas, la vieja unidad de la época española.

Ante tal situación, los diseñadores de los distintos proyectos nacionales se empeñaron pura y simplemente en crear naciones. Para ello era necesario fijar una mínima base económica, y hacer entrar en el circuito las propiedades institucionales pertenecientes al Estado, la Iglesia o las comunidades indígenas, alejadas de las leyes del mercado. Y, ¿quién mejor que la nueva clase emergente de los cafetaleros para sacar provecho y crear prosperidad en estos latifundios abandonados o encerrados en los marcos arcaicos de la subsistencia? Además, era indispensable arrancar al campesino en general y al indio en particular de la contemplación pasiva del acontecer nacional elevándole a la dignidad de ciudadano, haciéndole participar en la vida nacional. ¿Qué más justo entonces que despojarle de los enclaves ejidales, donde ni producía ni contaba, solamente subsistía, y obligarle a entrar en los canales de la economía moderna, a ganar un salario, a trabajar, a

producir, con lo cual abandonaría el estadio cuasi-animal de la subsistencia y pasaría a disfrutar de las virtudes de la vivencia?

Evidentemente, el salario tenía que ser cuidadosamente calculado para impedir despilfarros y vicios —ya se sabe que el indio es como un niño—, y contrarrestar su innata tendencia hacia la molicie —es increíble cómo son capaces de sobrevivir sin apenas alimentos—. La hacienda cafetalera podía ser su entrada en la escuela, en el mundo moderno, preparar la educación de sus hijos, su inserción en la sociedad. Era así de todo punto necesario que no faltaran a la escuela, la hacienda cafetalera, que se dignificasen al contacto del hacendado, auténtico ejecutor del proyecto nacional.

Pero tal proyecto dejó de ser nacional con bastante rapidez. A comienzos del siglo XX era evidente que la oligarquía cafetalera había entregado en gran medida el control de sus países a plantadores extranjeros, así como a comerciantes y banqueros del exterior.

La nueva oligarquía cafetalera careció de generosidad para compartir mínimamente con la masa campesina los beneficios obtenidos de la exportación de café, y no tuvo la inteligencia de prever que sin un mínimo bienestar nacional, sin una masa consumidora, no era posible abordar un programa de industrialización o de producción de cualquier mercancía destinada al consumo.

Centroamérica tuvo pronto sus constituciones burguesas, barnizadas de liberalismo, pero no tuvo en cambio una burguesía creadora, al estilo europeo o norteamericano, que abordara con convicción el desarrollo de un capitalismo nacional, pues aquélla había nacido como simple instrumento del capitalismo internacional. Los burgueses de mostrador, usureros y comerciantes que acapararon el poder político no tenían el menor interés en impulsar el desarrollo de las manufacturas, cuya vida por otra parte hubiera sido bien difícil desde que el libre cambio abrió las puertas a una auténtica invasión de productos europeos, británicos la mayoría, a precios que hoy llamaríamos de «dumping». Y sus socios, los hacendados, que consolidaron sus latifundios sobre la base del despojo, creando con ello la cuestión agraria, poca o ninguna afición y menor preparación tenían a lo que no fuera lo único que sabían hacer: cultivo del café.

El siglo XIX vio a Centroamérica desprendiéndose de España entre esperanzas de prosperidad y desarrollo. El siglo XX, cuando aún no estaban borrados los recuerdos de la vieja Capitanía, observa a Centroamérica entrando en un nuevo recinto, los Estados Unidos. Un largo viaje desde la Independencia a la Dependencia.

La historia bananera de Guatemala no es muy diferente. Pequeños productores locales van recorriendo a ferrocarriles extranjeros para ser transportados a la costa atlántica norteamericana. Y al mismo tiempo del ferrocarril.

En 1881, el gobierno colabora con la UFCO al primer convenio para el transporte regular de la producción, desde Puerto Barrios a Nueva Orleans, comprando toda la producción local en banana y plátano empacados. Esto otorgaba a la UFCO el monopolio del transporte a través de la «Gran Pista Blanca», desde donde, el gobierno había estado con la Central American Improvement Co. Inc. la terminación de la vía férrea Atlántico al Pacífico. Con esto se pensaba terminar tal el tráfico que había sido para completar la línea cuando se firmó por el primer gobierno liberal y que había logrado la

IV

Del enclave bananero a la dependencia

estructuras e ideas de la vía, inversiones de impuestos y sobre explotación de materiales. La empresa terminó al ferrocarril en 1902. La compañía transportadora se transforma más tarde, mediante negociaciones, en productora, desarrollando a los locales. Y cuando la Intercolonial Railway of Central America paso a manos norteamericanas, el mismo ferrocarril nacional, la UFCO completó el proceso de monopolización de la producción bananera y del transporte nacional.

La creciente demanda de productos económicos de tipo, cuando los recursos de capital, los servicios de transporte mejor mediante vapores refrigerados, ferrocarriles para llevar al fruto a pie de tierra y la seguridad de un mercado en condiciones económicas hacen viable la cuestión inversiones necesarias para la explotación del negocio. Las condiciones técnicas de la producción, la naturaleza transportadora del producto, todo muestra que una sola empresa cultiva, transporta y distribuye la fruta en una integración vertical del negocio, organizada por un centro de decisión situado fuera del área productiva, — de más producción, aumentando el carácter de enclave de la plantación.

Por esto se pasó de la compra a los productores locales al control de la misma actividad del y a partir de esto, al transporte y comercialización. Pero el capital extranjero en esta etapa con una gran fuerza económica, con un período de prosperidad económica, aumentó influencia, las autoridades de los propios países locales son reducidas por la desproporción de fuerza en presencia. Pero más aún, porque los mercados, con su libertad le en las verdades progresistas del ferrocarril y el comercio expansionista con los mercados de la libertad del mercado, permitieron voluntariamente que los mercados norteamericanos fueran sus compradores de fruta en la zona del negocio.

La dependencia al extranjero en esta etapa había sido dada de mostrar evolución agroexportadora e hizo fundamentalmente, del café, de aumentar la construcción de ferrocarriles, de hacer banana. Questo agente de cambio vino en, a los reducidos márgenes de

La relación establecida por Centroamérica con el mercado mundial a través del café tenía a Inglaterra como cliente y banquero. Tal relación fue substituida desde finales del siglo pasado por una vinculación a través del banano en la que los Estados Unidos actuaban como socio mayor de una empresa, las diferentes naciones bananeras de Centroamérica, en la que ni siquiera los temas políticos internos quedarían a salvo del control y supervisión del socio capitalista.

El banano figura en el Corán entre las frutas que deleitan a los felices moradores del Paraíso. Para los países productores de Centroamérica no produjo, sin embargo, la felicidad, ni instaló el paraíso.

Hasta 1866, el banano era totalmente desconocido en los mercados de Estados Unidos y Europa. A partir de tal fecha comienzan a llegar a los puertos del Este norteamericano pequeñas cantidades a bordo de goletas que hacían la ruta del Caribe, Jamaica, Cuba y Santo Domingo. El éxito de la nueva fruta fue espectacular, hasta el punto de que, en 1898, la importación total norteamericana alcanzaba los 16 millones de racimos. Y no se importaba más porque no era posible conseguir más fruto¹. Asegurada la demanda, era imprescindible garantizar el suministro. Así llega el cultivo a Centroamérica: aprovechando el sueño liberal de progreso y desarrollo y su obsesión con las comunicaciones, en especial, los ferrocarriles. Todas las Repúblicas centroamericanas soñaron en alguna época con la construcción de ferrocarriles. Tal vez sea Froilán Turcios quien mejor lo expresara: «Quisiéramos ver a Centroamérica floreciendo mágicamente... Soñamos con ver sus campos, de un extremo a otro, cruzados de rieles en todas direcciones; llenos de los gritos de las locomotoras... Deseamos que sus puertos sean bosques de mástiles en los que floten los pabellones de todos los países y centros universales de negocios, en donde corra el oro en un ancho torrente»².

Costa Rica abrió la marcha bananera. En 1871, su Presidente, Tomás Guardia, decide la construcción de un ferrocarril que comunicara San José y la meseta central con un puerto atlántico, lo que suponía una extensión de 98 millas. Una compañía inglesa completa las obras en 1890. Ya desde los ochenta el banano, cosechado por los locales, era cultivado en pequeñas plantaciones que, en 1890, producían cerca del millón de racimos.



¹ S. May y Galo Plaza, *La United Fruit Company en América Latina*. México, National Planning Association, 1959.

² *Breve antología del discurso hondureño*. Tegucigalpa D. C. Banco Central de Honduras, 1975.

En 1884 se firma el contrato Soto-Keith, que concede a los hermanos Keith la explotación de las 98 millas de ferrocarril a cambio de construir las 53 restantes además de 800.000 acres de terreno que la compañía a establecer escogiera libremente en cualquier punto de la zona atlántica. Para financiar y dar ocupación al ferrocarril, la compañía constructora empezó por comprar y transportar banano a los cultivadores locales y terminó creando su propia compañía cultivadora. Keith trabajó con capital inglés, cediendo su concesión al capital norteamericano en 1889, año en que se organiza la United Fruit Co. en Boston, a consecuencia de la fusión de la compañía de Keith y la Boston Fruit Co.³

La UFCO creó un ferrocarril propio —la Northern Railway Co. y en 1905 el Ferrocarril Central fue dado en arriendo a la Northern, con lo cual casi todo el sistema ferroviario pasa a ser controlado por la compañía bananera, lo mismo que los muelles de Puerto Limón, en el Atlántico.

Honduras le prestó al término «República bananera» su sobreentendido de dependencia extrema del exterior, economía monoexportadora, inestabilidad política crónica y corrupción generalizada.

El banano comienza a ser cultivado hacia 1860 en la isla de Roatán, y los frutos son exportados en modestas goletas a los puertos de Mobile y Nueva Orleans. De la isla saltaron los cultivos al continente, en las inmediaciones de lo que con el tiempo sería la ciudad de La Ceiba.

Un grupo de inmigrantes italianos de Nueva Orleans comenzó a comprar a pequeños finqueros su cosecha, y en pocos años los insanos manglares de la costa atlántica se transformaron en plantaciones que, en 1892, exportaban por La Ceiba un millón de racimos de bananos. Se produce un desplazamiento del centro de gravedad económico que trajo consigo el del centro de gravedad político. Y se abre una nueva era, que durará medio siglo, en la que los intereses económicos del banano irán indiscutiblemente ligados a los destinos políticos de Honduras⁴. En 1896, el banano constituía ya el 23% de las exportaciones y cuatro buques tocaban mensualmente en La Ceiba. En 1903, el banano alcanza el 40% de la totalidad de las exportaciones, y en 1924 Honduras obtiene el dudoso honor de ser el primer exportador mundial de esta fruta, que llega a representar de 1925 a 1945 porcentajes entre el 85 y el 89% de todas sus exportaciones.

Llegó cierto grado de riqueza a la costa Norte, pero se ligó la economía del país a un solo producto de exportación para un solo mercado y en tierras de alta calidad que rápidamente quedaban esquilmas por la voracidad de la planta.

Los inicios del banano suponen un elevado número de pequeños productores, intermediarios y transportistas, pero la rapidez de llegada al mercado norteamericano, el

³ Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. EDUCA, 1977.

⁴ Luis Mariñas Otero, *Honduras*. UNAH, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 1983.

obligado estado perfecto del fruto, la aparición de los buques congeladores, todos ellos fueron elementos altamente competitivos que fueron reduciendo el número de actores en el negocio bananero a un escasísimo grupo de empresas gigantes, que fue precisamente en Honduras donde tuvieron sus primeros éxitos y consolidaron su imperio.

El grupo italiano de Nueva Orleans, los hermanos Vacarro en el centro de consumo y sus sobrinos los D'Antoni en el de cultivo en La Ceiba, inician sus negocios en 1899, disponen de ferrocarril en 1905 y se reorganizan en 1924 con el nombre de «*Standard Fruit Co.*».

Los orígenes del coloso del banano fueron más lentos. En 1885, Lorenzo Baker y Andrew Preston crean la «*Boston Fruit Co.*» con un capital inicial de medio millón de dólares y explotaciones bananeras y azucareras en Santo Domingo, Cuba y Jamaica. En 1899, la Boston se fusiona con la empresa de Minor Keith —a la que hemos visto instalada en Costa Rica— quedando constituida la *United Fruit Co.*

En 1906, la nueva compañía se instala en Guatemala y en 1912 en Honduras, que en diez años se transformaría en su centro principal de producción. En 1932, la UFCO controlaba las dos terceras partes del comercio bananero mundial. Exportaba veinte millones de racimos de Honduras, diez de Jamaica, siete de Colombia, cinco de Guatemala y casi dos de Canarias. Era propietaria de 17.000 kilómetros cuadrados, contaba con una flota de 100 buques —la gran Flota Blanca—, 3.000 kilómetros de ferrocarril, 24 estaciones de radio, 11 hospitales, hoteles, fábricas, etc., y había adquirido en consecuencia una gigantesca fuerza política⁵.

La tercera gran compañía fue creada por Samuel Zmuri, emigrante de la Besarabia, que en Nueva Orleans y Mobile compraba a precios reducidos la fruta dañada de la UFCO, recién creada, y la revendía con grandes beneficios. En 1907, Zemurray —así había americanizado su apellido original—, adquirió una plantación creada por un norteamericano en la frontera con Guatemala, y en 1911 creó la «*Cuyamel Fruit Co.*» con cinco millones de dólares de capital.

En 1907, un golpe más de la serie defenestró al Presidente hondureño Manuel Bonilla y colocó en su lugar a Miguel Dávila. Zemurray había conseguido prácticamente todo lo que había querido de Bonilla, y temía que Dávila pudiera favorecer a la competencia. Al mismo tiempo, Gran Bretaña comenzó a presionar para conseguir el reintegro del pago de la deuda, deuda que sólo sirvió para construir un minúsculo ferrocarril de 100 kilómetros y engrosar un principal que, tras años de impago de intereses, crecía inexorablemente. Al mismo tiempo, Dávila pareció establecer una cordial relación con el dictador nicaragüense Santos Zelaya, considerado entonces por el Departamento de Estado como el «coco» de la región —extraña premonición.

Coincidían los temores de Zemurray y del Departamento de Estado, aunque por razones diversas, y el Secretario de Estado, Philander Knox, contactó a J. P. Morgan y otros banqueros importantes para animarles a comprar, a precio de saldo, los bonos

⁵ Luis Mariñas Otero, *Ibidem*.

británicos, de modo que la propiedad de la deuda hondureña cambiara de manos. Morgan facilitaría un empréstito al Gobierno de Honduras que permitiese concluir el ferrocarril, y Dávila garantizaría el pago del empréstito entregando la administración de las aduanas del país a agentes fiscales de la empresa acreedora, que nombraría un recaudador general aprobado por el gobierno norteamericano; los aranceles no serían modificados sin consulta previa con el gobierno norteamericano.

El proyecto de Knox establecía sobre Honduras un virtual protectorado y legalizaba las intervenciones que la política del «big stick» pudiera ejercer sobre Honduras, al igual que las realizadas sobre Santo Domingo, Haití, Cuba y Nicaragua. Honduras evitará tal proyecto por dos tipos de razones.

Cuando Dávila envió el proyecto de protectorado al Congreso para su aprobación, turbas enfurecidas invadieron el recinto y prometieron matar a quien transformara su país en una «dependencia administrativa» de los Estados Unidos. Ante tan convincente argumento, los parlamentarios rechazaron unánimemente el proyecto. El Senado norteamericano también desaprobó el pacto y, finalmente, Morgan se retiró del tema.

Pero Zemurray, con la entrada en escena de poderes tan grandes como los de Morgan, que podían hacer peligrar el imperio que se estaba labrando en Honduras, ya no podía dormir tranquilo. El «Banana Man» decide financiar su propia revolución. En la Nochebuena de 1910 zarpa de Nueva Orleans el yate «Hornet», comprado por el general Bonilla con dinero de Zemurray, y una expedición que parece surgida de las páginas de «Tirano Banderas». Un soldado negro de fortuna, el «general» Lee Christmas, y su lugarteniente, «Ametralladora» Maloney, al frente de aventureros y mercenarios, desembarcan en Roatán, que capturan sin resistencia y el 10 de enero de 1911 capturan, también sin resistencia, el Puerto de Trujillo.

El Presidente Dávila solicitó a los Estados Unidos que pusieran fin a las hostilidades, y Knox ordenó a su Cónsul en Puerto Cortés, Thomas Dawson, que arbitrara un compromiso, después de que los marines norteamericanos establecieran una zona neutral que impedía el combate entre las fuerzas gubernamentales y revolucionarias. Dawson nombró entonces un Presidente provisional en la persona de Francisco Bertrand, y Dávila hizo mutis discretamente. Rara vez un Cónsul ha tenido mayores poderes que el señor Dawson. Ocho meses más tarde se celebraron unas elecciones que Bonilla, sin oposición, ganó limpiamente. Zemurray se convirtió en el hombre fuerte de Honduras. Como pago de su intervención obtuvo 10.000 hectáreas de terreno, la habilitación del Puerto de Omoa y la representación financiera oficial del Gobierno, a cuya cuenta intentó, sin éxito, obtener de la banca norteamericana un nuevo empréstito.

Zemurray comienza además a actuar como intermediario de la instalación en Honduras de la UFCO, con la cual competía por el mercado norteamericano. Con esta tarjeta de presentación, la UFCO se movió rápidamente. De 7.000 hectáreas en 1918 pasó a ser propietario de 40.000 en 1924. En 1929, Zemurray, finalmente, vendió su empresa a la UFCO por 32 millones de dólares. Y si Honduras dependía de las bananas de las compañías antes de 1912, después de tal fecha se produce una simbiosis entre las bananeras y el Estado. En 1918, el dólar se convierte en moneda legal en Honduras.

Honduras, con una geografía endiablada y una clase empresarial prácticamente inexistente, nunca pudo controlar su propia riqueza. A diferencia de El Salvador, donde unas pocas familias se hicieron ricas con el café a lo largo del siglo XIX, instalándose más tarde en el comercio y la banca, los hondureños no explotaron su riqueza. Las bananeras cultivaban en las mejores tierras, las tierras llanas y de abundante agua de la costa atlántica, construían ferrocarriles para el transporte del fruto a puerto y creaban una flota que lo colocaba en los mercados norteamericanos e incluso europeos.

DIAGRAMA NUMERO 1

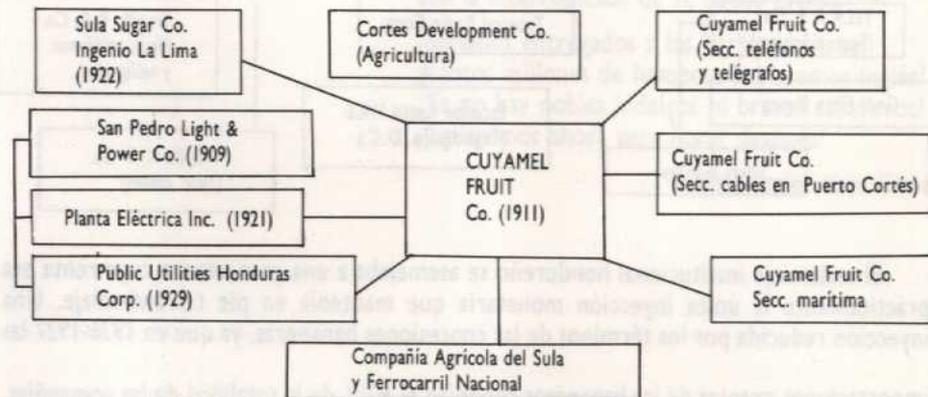


DIAGRAMA NUMERO 2

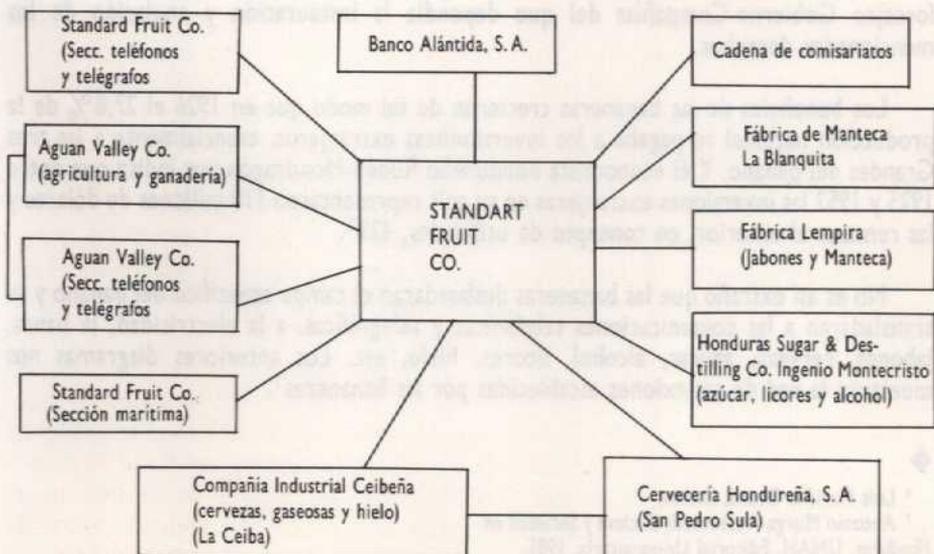
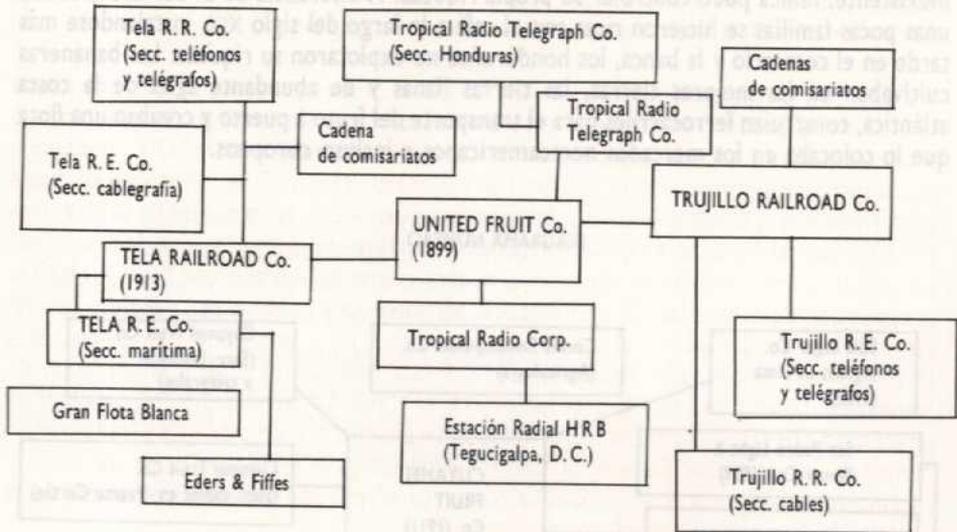


DIAGRAMA NUMERO 3



El andamiaje institucional hondureño se asemejaba a una gran aduana cuya renta era prácticamente la única inyección monetaria que mantenía en pie tal andamiaje. Una inyección reducida por los términos de las concesiones bananeras, ya que en 1926-1927 las

importaciones exentas de las bananeras suponían el 40% de la totalidad de las compañías. Y los ferrocarriles, los muelles y demás dependencias de la UFO, quedaban, según los términos de la concesión de 1912, exentas de todo impuesto nacional o municipal. Tal situación se prolongó, ya que en el año económico 1947-1948 el 38% de las importaciones hondureñas entraron sin pagar derechos, y en 1957, el 24%. El Gobierno intentó resarcirse fijando derechos consulares *ad valorem*, y este tema supuso un continuo forcejeo Gobierno-Compañías del que dependía la instauración y anulación de los mencionados derechos.

Los beneficios de las bananeras crecieron de tal modo que en 1926 el 27,8% de la producción nacional se pagaba a los inversionistas extranjeros, esencialmente a las tres Grandes del banano. Y el economista hondureño Rubén Mondragón nos indica que entre 1925 y 1952 las inversiones extranjeras en su país representaron 110 millones de dólares y las remesas al exterior, en concepto de utilidades, 428⁶.

No es así extraño que las bananeras desbordaran el campo específico del banano y se trasladaran a las comunicaciones telefónicas y telegráficas, a la electricidad, la banca, jabones, cerveza, azúcar, alcohol, licores, hielo, etc. Los anteriores diagramas nos muestran la red de conexiones establecidas por las bananeras⁷.

⁶ Luis Mariñas Otero, *Ibidem*.

⁷ Antonio Murga Frassinetti, *Enclave y Sociedad en Honduras*. UNAH, Editorial Universitaria, 1985.

La historia bananera de Guatemala no es muy diferente. Pequeños productores locales que recurren a fletadores extranjeros para su transporte a la costa atlántica norteamericana. Y el eterno sueño del ferrocarril.

En 1901, el gobierno suscribe con la UFCO el primer convenio para el transporte regular de la producción, desde Puerto Barrios a Nueva Orleans, comprando toda la producción local en forma y precios estipulados. Ello otorgaba a la UFCO el monopolio del transporte a través de su «Gran Flota Blanca». Meses antes, el gobierno había contratado con la Central American Improvement Co. Inc. la terminación de la vía férrea del Atlántico al Pacífico. Con ello se pensaba terminar las 61 millas que faltaban para completar la obra iniciada en 1874 por el primer gobierno liberal y que había logrado la construcción de 136 millas, Guatemala cedía por noventa y nueve años la explotación del servicio, otorgando además el muelle de Puerto Barrios y una franja de terreno para instalaciones a ambos lados de la vía, exenciones de impuestos y libre importación de materiales. La empresa terminó el ferrocarril en 1908. La compañía transportadora se transforma más tarde, mediante negociaciones, en productora, desplazando a los locales. Y cuando la International Railway of Central America pasó a hacerse cargo de todo el sistema ferroviario nacional, la UFCO completó el proceso de monopolización de la producción bananera y del transporte nacional⁸.

* * *

La inversión bananera se produce a comienzos de siglo, cuando los recursos de capital, las técnicas de transporte rápido mediante vapores refrigerados, ferrocarriles para llevar el fruto a pie de barco y la seguridad de un mercado en constante crecimiento, hacen rentable las cuantiosas inversiones necesarias para la explotación del negocio. Las condiciones técnicas de la producción, la naturaleza perecedera del producto, todo aconseja que una sola empresa cultive, transporte y distribuya la fruta en una integración vertical del negocio, organizada por un centro de decisión situado fuera del área productiva y del país productor, acentuando el carácter de enclave de la plantación.

Por ello se pasó de la compra a los productores locales al control de la misma producción, y a partir de ésta, al transporte y comercialización. Pero el capital extranjero no sólo llega con una gran pujanza económica, sino acompañado de presiones diplomáticas, intervenciones políticas, amenazas militares. Las posibilidades de los grupos políticos locales son reducidas por la desproporción de fuerzas en presencia. Pero más aún, porque los liberales, con su ilimitada fe en las virtudes progresistas del ferrocarril y su candoroso optimismo ante las excelencias de la libertad del mercado, piensan honestamente que los inversores norteamericanos serán sus compañeros de viaje en la ruta del progreso.

La clase empresarial centroamericana había sido capaz de montar economías agroexportadoras a base, fundamentalmente, del café, de acometer la construcción de ferrocarriles, de fundar bancos. ¿Quedó agotada de tamaño esfuerzo, o los reducidos márgenes de

⁸ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

capacidad de negociación son suficientes para explicar la falta de iniciativa empresarial ante el negocio bananero? Sea cual fuere la explicación, la realidad es que las plantaciones bananeras de propiedad norteamericana no se constituyeron en sectores de vanguardia de las diferentes economías centroamericanas, sino que, más bien, funcionaron al margen de aquéllas, como enclave.

Y ello a pesar de que los salarios de los obreros bananeros eran muy superiores a los del resto del país. Pero la economía local no se podía aprovechar de este incremento de capacidad consuntiva pues las «tiendas de raya» o «comisariatos» vendían al por menor artículos nacionales y extranjeros, éstos a precios más reducidos por no pagar derechos su importación. Es decir, que el sector mejor remunerado del país quedaba aislado del mercado nacional.

La exportación de utilidades es un segundo rasgo negativo del enclave bananero, ya que las inversiones de las compañías recibieron en el momento de la constitución un aporte decisivo de factores de producción locales, tales como tierras cedidas gratuitamente o arrendadas por largos períodos de tiempo, al igual que ferrocarriles o instalaciones portuarias. La proporción entre aporte nacional y estricta inversión extranjera fue puesta de manifiesto en 1930 cuando un balance del activo de la UFCO mostraba una «inversión» en Guatemala —El Salvador de 80 millones de dólares de los cuales la compañía sólo podía probar un 25%⁹.

La inversión fue, por tanto, tanto menor cuanto más amplia infraestructura tuviera el país. Pero los gobiernos locales participaron además en la financiación de las vías férreas. Es decir, que la producción bananera surge históricamente asociada a la construcción y/o administración de obras de infraestructura necesaria para establecer un servicio público. Pero éste queda supeditado *ab initio* a los intereses de la bananera extranjera.

La desconexión con la economía local se acentuaba porque el sector extranjero fue liberado del pago de impuestos, rasgo éste que refleja la debilidad o el entreguismo de los grupos de poder locales, incluso los de cierto peso, como el costarricense o el guatemalteco. Las compañías bananeras comenzaron a pagar impuestos a los Estados locales treinta o cuarenta años después de su implantación. A fines de los años veinte, el banano contribuía en Guatemala con el 1,9 por ciento de su valor total de exportación, contra un 8,7% para el café, mientras que en Costa Rica los respectivos porcentajes eran del 1,4 y el 11,8. De modo que las franquicias acordadas a las bananeras no sólo vulneraban el principio de la universalidad del impuesto para un sector muy considerable de las economías nacionales, sino que también limitaban la soberanía al reducir su capacidad de distribuir las cargas entre los sujetos de la comunidad nacional¹⁰.

Otro elemento negativo lo constituye el control monopolístico que ejercieron las bananeras en la fijación de las tarifas de transporte marítimo o por ferrocarril, de tal modo que el transporte local resultaba siempre más caro que el internacional. El empresario local quedaba desanimado ante el diferencial de costos.

⁹ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

¹⁰ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

La libre exportación de utilidades, y la libertad de importación-exportación, son dos rasgos que caracterizan en Centroamérica el funcionamiento de la economía de enclave. Disponiendo de canales propios y ajenos a los del Estado, no le es posible a éste conocer el volumen exacto de las importaciones ni determinar las ganancias ni controlar las inversiones netas o las desinversiones de las compañías. Durante muchos años no fue posible en Honduras contabilizar su comercio exterior o elaborar una balanza de pagos.

El Estado local carece, en tales condiciones, de las herramientas necesarias para controlar la marcha de la economía nacional, no puede, por tanto, ejercer su soberanía dentro de su territorio, pues ésta se encuentra parcialmente enajenada.

La inserción del enclave en economías agroexportadoras como las centroamericanas, dependientes hasta entonces del café, refuerza la orientación hacia afuera y acentúa la naturaleza agrícola, con escaso o nulo valor añadido, de la producción nacional, consolidando la dependencia de los mercados mundiales. Los intereses bananeros recurrieron a medidas extraeconómicas de las más variada naturaleza, recordemos a Sam Zemurray, bien para asegurarse ventajas en la fase inicial competitiva de asentamiento o en la fase monopolista de consolidación. Tales medidas contribuyeron al vacío político, al desorden institucional, a las luchas al margen de los intereses nacionales. En el plano político interno contribuyeron a la consolidación de la oligarquía terrateniente y a la creación de una mentalidad de comisionista en la clase política, con intereses subordinados a los de las bananeras, cuyas funciones de mantenimiento del mínimo orden institucional, necesario para el desarrollo normal de los negocios, le transformaba en una clase parasitaria del presupuesto del Estado y mendicante de las migajas bananeras.

El hondureño J. J. Callejas describe la nueva mentalidad: «Despojados así el hondureño de su tierra y desplazado del comercio, de la banca y de la industria, ha quedado clasificado como simple empleado subalterno, o como jornalero y sirviente. Ha sido designado para desempeñar en su propia tierra iguales funciones que el individuo de color en el sur de los Estados Unidos. Se han rebasado las aspiraciones de nuestros altos políticos; no sólo el 80 %, sino el 100 % de los hondureños del norte puede, si así se digna disponerlo el empresario norteamericano, servirle de jornalero o de criado»¹¹.

El banano y su cultivo exigían grandes cantidades de mano de obra para el acondicionamiento de las tierras, manglares en muchos casos, y el cuidado de los plantones. Las compañías, ante la escasez inicial de mano de obra, importaron «morenos» de Jamaica y otras islas del Caribe, determinando así una composición racial muy peculiar de la costa atlántica centroamericana. Se suponía que los morenos resistirían al paludismo, la fiebre amarilla y otros parásitos que amenazaban entonces la costa caribeña. No fue así, y las bananeras tuvieron que acometer un importante esfuerzo de erradicación mediante programas de inoculación y construcción de dispensarios. Desección de terrenos y erradicación de enfermedades pasarían así, lateralmente, al activo del balance bananero centroamericano. Al igual que el desarrollo del transporte ferroviario y marítimo.



¹¹ J. J. Callejas en *Enclave y Sociedad en Honduras*. UN, 1985.

La Literatura universal se enriquecería con la experiencia bananera. John Dos Passos, en «El paralelo 42», trazó la biografía de Keith y de su empresa: «En Europa y Estados Unidos la gente había comenzado a comer plátanos, así que tumbamos la selva a través de América Central para sembrar plátanos y construir ferrocarriles para transportar los plátanos, y cada año más vapores de la Great White Fleet iban hacia el norte repletos de plátanos, y ésa es la historia del imperio norteamericano en el Caribe y del canal de Panamá y del futuro canal de Nicaragua y los marines y los acorazados y las bayonetas...» Y Miguel Ángel Asturias, en «El papa verde», que era Minor Keith, rey sin corona de la región entera: «Tenemos muelles, ferrocarriles, tierras, edificios, manantiales; corre el dólar, se habla el inglés y se enarbola nuestra bandera.» «Chicago no podía menos que sentir orgullo de ese hijo que marchó con un par de pistolas y regresaba a reclamar su puesto entre los emperadores de la carne, reyes de ferrocarriles, reyes del cobre, reyes de la goma de mascar»¹².

Toda una serie de literatura antiimperialista se rebela contra el mundo de las bananeras. Las mejores obras de esta serie quizá sean: «Paludismo» de B. Mata Brito; «Puerto Limón» de Joaquín Gutiérrez; «Mamita Yunai», de Carlos Luis Falla; «Canal Zone», de Demetrio Aguilera; y «Prisión Verde», de Ramón Amaya Amador. Sin olvidar, por supuesto «El Señor Presidente» de Miguel Ángel Asturias, o «Cien años de Soledad», de García Márquez.

* * *

Nicaragua y El Salvador no disfrutaron del banano. Pero, en contrapartida, gozaron respectivamente de los marines y de la oligarquía cafetalera más poderosa de Centroamérica.

La operación norteamericana iniciada en 1909 en *Nicaragua* condujo a veinte años de ocupación militar ininterrumpida, reemplazada por una dictadura familiar de cuarenta y cinco años de duración.

En 1893, José Santos Zelaya arrebató el poder a los conservadores e inició una larga lucha por la reunificación centroamericana, bajo su liderazgo, resucitando los viejos sueños morazánicos y los ideales históricos del Partido Liberal. Pero Zelaya se preocupaba menos de ideología que de la pura fuerza militar, amenazando con convulsionar la zona en un momento en que los intereses norteamericanos, ya establecidos, no podían soportar los sobresaltos.

Pocas personas odiaban y temían a Zelaya más que «el señor Presidente» de Guatemala, Estrada Cabera, impregnado de la tradición de supremacía guatemalteca en la región. Entre los dos enemigos, Honduras, que en 1903 había sufrido tres diferentes Gobiernos, era mitad sandwich mitad puerta giratoria. Zelaya se introdujo por tal puerta

◆
¹² Eduardo Galeano, *Las venas abiertas de América Latina*. Siglo XXI, 1985.

y exigió fidelidad a los sueños morazánicos. El Salvador y Costa Rica fueron convencidos más tarde de la necesidad de invadir Guatemala.

El verano de 1906 fue caliente y toda Centroamérica se encontró de pronto en guerra. Guatemala resistió el embate. Roosevelt convenció al dictador Porfirio Díaz, de Méjico, de que tenían que parar la guerra antes de que toda Centroamérica fuera un caos, y envió el buque de guerra «Marblehead» para mostrar que no estaba bromeando y también para servir de mesa de conferencias. Guatemala, Honduras y El Salvador abandonaron la lucha, pero Zelaya se negó a ello, indicando además a Roosevelt que Centroamérica no era asunto suyo. Tras una nueva invasión de Honduras y gestiones de Roosevelt y don Porfirio, Zelaya aceptó la mediación y una reunión en Washington con los otros cuatro centroamericanos para instrumentar un mecanismo que asegurara la paz en la región.

La Conferencia de Washington, en 1907, diseñó una red de acuerdos que buscaban la interdependencia y cooperación entre los cinco sísmicos países del istmo. Un Tribunal de Justicia centroamericano y un Tratado de Paz y Amistad, así como un proyecto de conexiones ferroviarias serían sus instrumentos.

El Tribunal, creado en gran parte gracias al empeño norteamericano, fue vaciado de contenido cinco años más tarde por Washington al negarse a aceptar sus decisiones, contrarias a sus intereses nicaragüenses. Cuatro años después, en 1916, rechazaron una nueva decisión del Tribunal, también sobre Nicaragua.

La oportunidad para intervenir en Nicaragua surgió en 1909, cuando un grupo de conservadores, a las órdenes de Emiliano Chamorro y Juan Estrada, se instala en Bluefields, en la costa de la Mosquitia, e inicia una revolución. El Cónsul norteamericano en Bluefields estaba tan al corriente del plan que avisó a Washington con tres días de anticipación a la fecha del estallido¹³. Dos norteamericanos que se unieron a la revolución fueron descubiertos colocando minas en el Río San Juan y fusilados. El Presidente Taft envió entonces marines para proteger a los rebeldes de Bluefields y exigió la retirada de Zelaya. Después de que éste renunciara y marchara al exilio, el Congreso nicaragüense eligió Presidente al doctor José Madrid, pero el Secretario de Estado, Knox, se negó a reconocerle por sus supuestas simpatías hacia Zelaya y Méjico y enemistad hacia los Estados Unidos. En estas condiciones, el grupo rebelde de Bluefields ganó varias victorias, y finalmente se alzó con el poder en 1910.

La Secretaría de Estado estaba encantada. Sin embargo, el nuevo Presidente Estrada fue violentamente atacado por Guatemala, El Salvador y, especialmente, Costa Rica. Vendepatrias era el calificativo más empleado. Y el Ministro norteamericano en Managua informaba, a comienzos de 1911, que los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses eran de antagonismo hacia los Estados Unidos. En mayo de 1911, Estrada decidió dejar la presidencia a otro hombre de los Estados Unidos, Adolfo Díaz.

◆
¹³ Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions*, W. W. Norton Co. New York-London, 1984.

Díaz inició inmediatamente negociaciones para la obtención de un empréstito norteamericano de 15 millones de dólares que fue concedido a cambio del control del Banco Nacional, 51% de los ferrocarriles y la recaudación de la renta de aduanas. El descontento por la presencia norteamericana crecía mientras tanto y cuando una revolución estalló en 1912, 2.600 marines restablecieron la situación. El Tribunal Centroamericano, creado con las bendiciones de Roosevelt en 1907, condenó la intervención, pero Washington desconoció la decisión y dejó 100 marines en Managua para proteger su Legación. Éste fue el inicio de una presencia militar permanente durante veinte años. Díaz conservaría la presidencia hasta 1916.

El Tratado Bryan-Chamorro formalizaba en 1916 el status de protectorado de Nicaragua, al tiempo que saboteara el balbuceante movimiento de unificación. Ese Tratado concedía a los Estados Unidos el derecho exclusivo y perpetuo a construir y operar un canal transoceánico vía el Río San Juan y el Lago Nicaragua, y noventa y nueve años de arriendo sobre la isla del Trigo y sobre una base naval en el Golfo de Fonseca. Nicaragua recibía a cambio la ridícula cifra de tres millones de dólares. Ante las reticencias del Senado a ratificar el Tratado, se sacaron de éste las cláusulas que reconocían el derecho de los Estados Unidos a intervenir para mantener la independencia de Nicaragua o para proteger vidas y propiedades norteamericanas, prohibiendo a Nicaragua firmar Tratados que pusieran en peligro su independencia o integridad territorial (colmo de las ironías), el declarar la guerra sin consentimiento de Estados Unidos o el contraer deudas que sobrepasaran su capacidad de pago. Así modificado, el Senado ratificó el Tratado.

Costa Rica, El Salvador y Honduras protestaron, y los, dos primeros países recurrieron ante el Tribunal de Justicia centroamericano, quien en 1917 dictaminó a su favor. Nicaragua y los Estados Unidos se negaron a aceptar el veredicto. Nicaragua se retiró del Tribunal y éste pasó a mejor vida. El espíritu de 1907 desapareció, y los intentos por resucitarlo en una segunda conferencia en Washington en 1923, creando un Tribunal de arbitraje, carecieron de éxito.

Knox justificó la política norteamericana en Nicaragua y en Honduras en base a la doctrina Monroe, que responsabilizaba a los Estados Unidos del orden en Centroamérica, y a la vecindad del canal de Panamá, que obligaba a preservar la paz en sus cercanías.

El control norteamericano del país no sólo comprendía el sistema bancario y aduanero sino los intercambios comerciales, ya que la mitad de las exportaciones nicaragüenses y casi el 40% de sus importaciones se destinaban a/o procedían de los Estados Unidos.

La antigua influencia británica sobre Nicaragua, intentando crear un reino «mosco» como vía de penetración para un futuro canal transoceánico, quedaba completamente olvidada. Al igual que en Honduras, la única presencia exterior, omnipresente, sería la norteamericana.

El siguiente cuadro muestra el espectacular crecimiento de las inversiones directas norteamericanas en la región.

INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN CENTROAMERICA

(En millones de dólares)

PAIS	1897	1908	1914	1919	1924	1929
Costa Rica	3,5	17,0	21,6	17,8	13,0	20,5
El Salvador	—	1,8	6,6	12,8	12,2	24,8
Guatemala	6,0	10,0	35,8	40,0	47,0	58,8
Honduras	2,0	2,0	9,5	18,4	40,2	80,3
Nicaragua	—	1,0	3,4	7,3	6,8	17,3
Centroamérica	11,5	31,8	76,9	96,3	119,2	201,7
América Latina	304,4	748,8	1.275,8	1.977,6	2.779,3	3.645,8
% de Centroamérica sobre América Latina	7%	5,1%	7%	5,8%	5,1%	6,9%

Fuente: Naciones Unidas. *El financiamiento externo de América Latina, 1964.*

La Constitución de 1875, bella y hermosa, creó un sistema de gobierno unitario, presidencial y representativo, que contrastaba con la práctica política de los sucesivos gobiernos liberales. Hasta luego con elección libre y directa hasta 1944. El estilo impero, autoritario de todos los gobiernos liberales de Guatemala contrasta con la experiencia democrática, hasta el punto que se ha llegado a decir que el pueblo de Guatemala nunca tuvo constitución, sino emperador.

La situación económica de la gran masa indígena y campesina explica su parte al lado de la burguesía guatemalteca. La competencia de los plantadores extranjeros y la importación de las cosechas exportadas en Europa, que amparada con convertibles en sectores de la economía exterior, explica su inseguridad como clase y sus reacciones.

El caudillismo depresivo

La primera gran plantación de café se estableció en Guatemala en 1857 y se llamó «Inocencio», en recuerdo, propiedad de los hermanos De Teff, de origen belga, Julio Enrique, también belga, Francisco Plaza y José Guardado, españoles, los hermanos Bienna, franceses, los colonizadores Ospina y Vasquez, los alemanes Nobilitz, Eudimar. Caudillismo fueron nombres clave en el desarrollo y mejora de las plantaciones de café. El control de peajes y enfermedades, el uso de fertilizantes y abonos, y el control en el cultivo de los árboles, fueron acciones de los extranjeros. Así lo fueron igualmente hechos similares realizados internamente, como la creación «Guardado».

La inversión extranjera y de patrones. Los plantadores guatemaltecos se retiraron después de haberse la cosecha del café —desastrosa, sucesivos cosecheros—, dependió primero en manos de los dueños de las fincas o los cosecheros locales e ingleses. En plena gestión de Federico Cárdenas, en 1917, el 16% de las empresas cafetaleras de Guatemala eran extranjeras y su producción alcanzó el 75% del total nacional. La crisis, que su productividad era casi cuatro veces superior a la media guatemalteca. Esta situación se mantuvo hasta 1944, en que el gobierno de Guzmán, acudiendo a las presiones de Washington, expulsó los propietarios extranjeros, que pasaron el sector político a una praxista etapa y a manos restringidas, en considerable medida, en una segunda fase.

La primera generación de caudillos nacionales fueron grupos de interés. Para sus caudillos se crean en los países ricos de la tradición señorial guatemalteca, con un énfasis de empoderamiento, más tarde, basados al disfrute privado de la ganancia por el fin o explotación directa más explícita, aumentando la fuerza de trabajo³.

La inversión y alta productividad pasaron a depender de grupos diferentes, rurales y urbanos especialmente en una primera etapa, y capital extranjero en la segunda. Estas inversiones supieron estabilidad, orden social y certidumbre política para el desarrollo de sus negocios, desentendiéndose de cualquier involucramiento social o involucramiento político salvo la utilidad de la actividad laboral importante.

Salvador, de 1888 hasta 1940. La nicaragüense de 1893 sustituye hasta 1959. Y la de Costa Rica de 1871, hasta 1949, mientras que la hondureña de 1894 perdura hasta 1936.

Todas estas Constituciones, variando su vida jurídica, reflejan una tensión indisoluble entre el poder de una burguesía rural con claras connotaciones oligárquicas, sustentada en una violencia política institucionalizada por las fuerzas del orden, y una democracia ritual que se ofrece a sí misma periódicamente presentando al mundo el aspecto espectacular de la renovación democrática.

«Los Estados Unidos, que parecen destinados por la Providencia a plagar América de miserias en nombre de la libertad...»

Simón Bolívar

Costa Rica se organiza como una república aristocrática porque las grandes familias oligárquicas, a sus familias, por sucesión, llegan a formar una élite que se beneficia institucionalmente en el poder no sólo por razón de su riqueza sino de su ancestralidad rural. La élite se sitúa en condiciones muy especiales en Centroamérica: ausencia de población indígena, falta de recursos mineros, monopolios por tanto de alimentación y repatriaciones, y ausencia de un sector industrial beneficiario de estado de parte del Estado y del extranjero. La burguesía oligárquica costarricense se benefició de sus ventajas oligárquicas por conseguir el poder en a través de grandes cantidades de dinero con ayuda de otros sectores, pero mediante el control del crédito rural, el dominio de la familia de propietarios del café y la asociación benévola con los sectores oligárquicos extranjeros gracias a una intensa vinculación con el capital comercial extranjero.

El dominio del oligarquía del café es una más importante que la existencia de ciertos sectores o la misma producción. Hasta 1930 existían unas 257 haciendas para cerca de 4.000 ha de café. De modo que el mecanismo de plantación en fin de cosas determinante del poder de la burguesía oligárquica fue más bien su papel de agente comercial y fomento de la exportación del café.

Las administraciones autoritarias a 1930 llegaron al poder institucionalmente por los apoyos militares de la fuerza y por el reconocimiento legal y formal periodico. Se por razones esencialmente de naturaleza oligárquica, pero por razones de naturaleza política, lo que da un total de 25 administraciones.

En una república aristocrática oligárquica se demuestra al no tener. Las elecciones a la Asamblea Legislativa quedaban desvirtuadas por la existencia de un sector rural y oligárquico y con propiedades de más de 100 ha a 200 hectáreas o un ingreso anual no inferior de 100. La institución, basada en una propiedad que era hereditaria, dio a Costa Rica una constitución con un al principio, esencialmente legal que se refiere al reclutamiento de

1. Véase el libro de Simón Bolívar, "El poder en América", editado por el Fondo de Cultura Económica, México, 1960.

Las reformas de los liberales y su alianza con los intereses extranjeros contribuyeron a una rápida urbanización de Centroamérica. Y como la pobreza era consecuencia irremediable del proyecto elitista liberal, los bolsones de miseria, hasta entonces perdidos en el campo, hicieron su aparición en las ciudades en forma de chabolismo. Aprisionados en la revolución de expectativas crecientes y sin oportunidades para satisfacerlas, los ciudadanos de los barrios marginales se convirtieron en un omnipresente testigo del fallo liberal en la creación de una base general de prosperidad y progreso.

Ninguno de los centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, disponía de una clase media dominante, aunque durante la primera mitad del siglo XX los sectores sociales medios hicieron su aparición en todas las capitales como elementos diferenciados de la población. Estos sectores adoraban los logros materiales de la civilización, en especial aquellos que proporcionaban comodidad doméstica, teniendo siempre en mente los avances paulatinos del sistema de vida norteamericano.

Mientras tanto, las clases superiores comenzaban a perder su papel de suministradores de las pautas de cultura y elegancia, pues sus formas de vida, producto de sus frecuentes estancias, estaban más vinculadas a las existentes en Europa.

Los diarios comenzaron a proliferar a partir de 1890 y, aunque su tirada era muy limitada por el elevado índice de analfabetismo, jugaron un papel de primera importancia en la articulación del pensamiento centroamericano. Hacia 1920, el líder era «La Prensa» de San Salvador, con una circulación de unos 5.000. Le seguían «Nuestro Diario» de Guatemala y «El Diario de Costa Rica», con 4.000 de tirada. En Tegucigalpa y Managua, «El Cronista» y «El Comercio», respectivamente, circulaban unos 3.000¹.

Nuevos pasatiempos, como el baseball, introducido por las bananeras, se añadían a los antiguos, como el fútbol, o los sustituían, como a las corridas de toros. La plaza de toros de Guatemala, destruida por un terremoto en 1918, nunca fue reconstruida. El baloncesto y el boxeo se debieron también a la influencia norteamericana. Pero la afición por las peleas de gallos, con fuertes apuestas, perduraba.

Desde el punto de vista de la creación artística, se mantiene alerta la tradición de vivo amor por la poesía y la retórica. Rubén Darío y Miguel Ángel Asturias, nicaragüense y

◆
¹ Ralph Lee Woodward, Jr., *Central America A Nation Divided*, Oxford University Press, New York, 1985.

guatemalteco, son las dos grandes estrellas rutilantes de comienzos de siglo en el panorama centroamericano.

Las instituciones gubernamentales servían los intereses de quienes controlaban la economía a través de sistemas que contradecían las frases constitucionales y la retórica política sobre la democracia y la libertad. Los grandes patronos políticos tenían las llaves del sistema, y entre ellos se reclutaban los Jefes del Estado. Jueces venales, funcionarios con nombramiento político, ayudaban a manejar la maquinaria gubernamental de acuerdo con los deseos del establecimiento, y quien quisiera hacer carrera tenía que aprender muy pronto el juego de la «mordidita», de la influencia y de los contactos. Elecciones amañadas e intimidación de la oposición ayudaban a consolidar la posición de los grandes patronos. El Ejército, en estos primeros años del siglo XX, era un elemento más del equilibrio de fuerzas, pues carecía aún de la profesionalidad y del armamento necesarios para ascender a la categoría de árbitro de la contienda política.

La urbanización progresiva de la población y la concentración de grandes masas asalariadas hicieron inevitable la aparición de movimientos sindicales. La escasa industrialización, la pequeñez de las capitales centroamericanas y la ausencia de inmigración europea obrera con tradición sindical, configuró un sindicalismo muy tardío, incluso comparado con el latinoamericano en general, pues hasta los años cincuenta no se consolida. El caudillismo que se extendió por Centroamérica como salida de la crisis provocada por la Gran Depresión de 1929, no era el mejor caldo de cultivo para la aparición de movimientos obreros. Estrada Cabrera, en Guatemala, y Santos Zelaya, en Nicaragua, consideraban las organizaciones de obreros como núcleos subversivos y suprimieron las huelgas y las manifestaciones empleando el Ejército.

La presión de la Sociedad de Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo, así como el ejemplo de la revolución mejicana, motivó la introducción de reformas legislativas limitando la jornada de trabajo, estableciendo las vacaciones pagadas, construcción de casas a bajo precio para trabajadores, etc.

El énfasis liberal en la educación y las posibilidades de promoción social anejas a la misma fue creando un pequeño pero activo cuerpo de estudiantes universitarios. La reforma universitaria iniciada en Córdoba, Argentina, en 1917, estableciendo la autonomía, tuvo una gran influencia en Centroamérica, y contribuyó a vivificar unos claustros que vegetaban a un ritmo artesanal. Las revoluciones mejicana y soviética comenzaron a ejercer un auténtico hechizo sobre los sectores estudiantiles nacionalistas, a quienes ahogaba la omnipresente presencia norteamericana. Un nacionalismo que intentaba rescatar la herencia cultural y política y que se manifestaba de modo furioso como expresión del resentimiento, la frustración y el complejo de inferioridad ante el «gringo» dominante.

El nivel de escolarización era dramáticamente bajo. Salvador Mendieta estimaba que, en 1926, solamente 150.000 de los cinco millones y medio de centroamericanos sabían leer y escribir².

◆
² Citado por Ralph Lee Woodward en *op. cit.*

Costa Rica inició el camino de la escolarización desde 1828, cuando la asistencia escolar fue declarada obligatoria, prosiguiendo el esfuerzo a lo largo del siglo XX como demuestra el hecho de que el presupuesto de educación fue tradicionalmente el más elevado del gobierno. En 1940 se organizó la Universidad de Costa Rica que, en 1960, serviría de sede para una experiencia editorial conjunta de todas las Universidades centroamericanas (EDUCA).

Mientras que la vida en las capitales y escasas ciudades con auténtica vida urbana conoció un período de cambio acelerado a comienzos de siglo, el campo permaneció dentro de los moldes seculares de la vida centroamericana. Los métodos de cultivo continuaron inalterables salvo los dedicados a exportación, bananas y café, donde las innovaciones fueron constantes. La cooperación entre finqueros y gobierno para mantener una mano de obra dócil y barata abortó todo intento de cambio social y significó la explotación de los campesinos en todo Centroamérica. La explotación fue más dura en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, mientras que en Honduras los minifundios y la economía de subsistencia proporcionaron un colchón protector. En Costa Rica, el panorama variaba por la existencia de una numerosa clase de pequeños finqueros, aunque, incluso aquí, el índice de analfabetismo era muy elevado. El campo centroamericano a comienzos del siglo XX, con la excepción costarricense, no conocía más clases que los hacendados y los peones.

* * *

La *crisis económica mundial* iniciada en 1929 se manifestó inmediatamente en Centroamérica mediante un espectacular descenso de los precios y la demanda de café. Se inicia así en la región un ciclo depresivo económico y social, con efectos directos sobre el sistema político. La rigidez del sistema político, la escasa o nula diversificación del sistema económico y la ausencia de grupos sociales de reemplazo, prolongaron durante más de quince años la crisis, de tal modo que los niveles de actividad económica de los años veinte no se vuelven a alcanzar hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

En el período entre 1930 y 1945, los precios del café sufrieron el descenso más violento de toda su historia. Costa Rica exportó en 1926 por valor de 42,4 millones de colones de café y 23,6 en concepto de bananos, mientras que en 1932 tales ingresos bajaron respectivamente a 23,7 y 10,7 millones. En El Salvador, Nicaragua y Guatemala, las exportaciones descendieron un promedio de un 55% en un período de cuatro años a partir de 1929. Los precios del café en todo el área centroamericana sólo recuperaron su nivel en 1946. Para un país como El Salvador, donde el café representaba el 90% del total exportado, el efecto fue desastroso.

La depresión paralizó en gran parte la actividad económica de la región. La crisis agraria se tradujo en abandono temporal del cultivo cafetalero, desalojo de tierras y desocupación campesina. Las clases medias urbanas se vieron igualmente afectadas, al igual que el comercio y la administración pública. La economía bananera se comportó de manera diferente, pues, en 1930, Honduras obtiene su producción más elevada, compensando el mayor volumen la baja de los precios. Por esta circunstancia, la economía hondureña aguantó mejor la crisis, aunque como la economía del sector bananero forma parte de la nacional de modo marginal, el producto interno hondureño creció un

promedio del 0,7% en quince años, y hasta 1946 no se iguala el ingreso per cápita de 1930³.

En El Salvador, el más poblado y pequeño país centroamericano, no había tierra sin cultivo donde pudieran refugiarse los campesinos desempleados creando líneas de supervivencia desde el autoabastecimiento. A comienzos de 1932 estalló un levantamiento campesino en la región de Izalco que se extendió por el país, y el gobierno militar de Herández Martínez liquidó la insurgencia rural a un costo de 30.000 campesinos y una represión que se extendió a todo el país.

La rebelión campesina de El Salvador fue una movilización de masas que, por primera vez en la historia reciente de la región, intentó demostrar potencialidad política. Su repercusión fue tan grande a nivel campesino como hacendado. En Nicaragua eran los años de Sandino, quien había iniciado la lucha por motivos distintos, pero terminó prestando una atención muy preferente a las reivindicaciones agrarias. En Guatemala, el Gobierno militar de Ubico reprimió la agitación social fusilando a un centenar de líderes sindicales, estudiantiles y políticos, dictando además leyes contra la «vagancia» para castigar toda forma de descontento. En Costa Rica se produjo, en 1934, un fuerte movimiento huelguístico en la zona bananera, resuelto institucionalmente.

Los gobiernos centroamericanos impulsaron políticas deflacionarias reduciendo presupuestos, disminuyendo salarios y sueldos hasta un 40% y aminorando el gasto. Pero lo curioso de tal política conservadora fue que, a partir de 1939, se produjeron constantes superávits fiscales, en especial durante la Segunda Guerra Mundial⁴.

Al contraerse la actividad económica del Estado, el sector público no jugó ningún papel decisivo a lo largo de la crisis. Mientras en Costa Rica se implantaba en 1933 el salario mínimo en el campo, en el resto de la región se trató más bien de salvar a los hacendados entrampados mediante leyes de moratorias, dilatando el pago de las deudas contraídas a partir de la crisis, o se crean Bancos Hipotecarios para limitar el crédito usurario, o Asociaciones Cafetaleras, como en El Salvador, u Oficinas del Café en Guatemala, con el fin de prestar asistencia técnica y financiera a los cafetaleros.

En ningún país centroamericano se aplicó a la crisis un tratamiento que cuestionara el *status quo*. Las fuerzas sociales que lo hubieran podido intentar tendrían que esperar hasta la década de los cincuenta.

Con la crisis se suspendieron los pagos de la deuda exterior y al término de 1935 estaban en mora el 100% de los bonos en dólares de Guatemala, El Salvador y Costa Rica y el 77% del total de 23,6 millones de dólares en poder de los tenedores norteamericanos. También se retrasó el pago de la deuda inglesa, cuyo valor en circulación en 1939 ascendía a 7,3 millones de libras esterlinas. Pero los saldos favorables acumulados por los países de la región durante la guerra mundial sirvieron para pagar gran parte de la deuda.



³ Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. EDUCA, 1977.

⁴ Edelberto Torres Rivas, en *op. cit.*

En la década de los treinta se produce, además, una desinversión de cerca del 50% del capital norteamericano, debido en gran parte al traslado de las bananeras de Guatemala y Costa Rica a la Costa del Pacífico.

El cierre del mercado europeo a consecuencia de la guerra marcó un rumbo irreversible al comercio exterior. Centroamérica emergió de la guerra, como dice Torres Rivas, vendiendo a un mismo mercado comprador un solo producto y dependiendo del mismo para cubrir sus necesidades manufactureras. En el quinquenio 1930-1934, Centroamérica vendía a Estados Unidos un 19,6 del total de su cosecha cafetalera contra un 75% a Europa; en el quinquenio siguiente, el mercado norteamericano absorbió el 39,8 y en los primeros cinco años de la década del cuarenta llegó al 87,2%.

El estancamiento económico provocado por la crisis provocó una equivalente crisis de legitimidad del sistema oligárquico liberal y, por extensión, de la república cafetalera. Con la excepción de Costa Rica, una vez más, se recurrió a agudizar el estilo de dominio oligárquico, pero la élite política tuvo que acudir a líderes militares de clase media para ejercer por su intermedio el dominio. Los generales suceden así a los abogados y se constituyen en factor decisivo de poder.

Las dictaduras militares de Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944); de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1935-1944); de Tiburcio Carías Andino en Honduras (1931-1949); y de Anastasio Somoza en Nicaragua (Jefe de la Guardia Nacional desde 1929 y Presidente varias veces de 1937 a 1956), reflejan la nueva situación. Todos ellos generales de clase media, salvo el primero, y derribados por movimientos nacionalistas populares, con excepción del último.

Fue ésta una época de acumulación de tensiones sociales y postergación de soluciones. El estancamiento económico retrasó la alteración de los patrones tradicionales de comportamiento, quedando potenciado el modelo autoritario del finquero y marginados importantes sectores campesinos en antiguas fórmulas de autosuficiencia. La solución autoritaria fue el expediente para hacer pagar el precio de la contracción económica a los sectores populares.

Se pusieron de manifiesto las limitaciones de la reforma cafetalera o liberal, y la imposibilidad de modernizar el sistema mediante la renovación de su clase política y empresarial, reforzándose la pauta de dependencia de las sociedades nacionales.

* * *

La historia de Costa Rica es peculiar por diversas razones. Carente de metales preciosos y aislada por la lejanía de la Capitanía General, accede a la independencia como el más pobre y despoblado de los cinco centroamericanos. Sin embargo, su homogeneidad racial —un 1% de población indígena— y la inexistencia de latifundios, favorecieron rápidamente la aparición de una numerosa clase de pequeños propietarios que comenzó a participar activamente en la vida política y a desarrollar instituciones políticas más igualitarias que en el resto del istmo. A pesar de que la aristocracia cafetalera estableció una democracia censitaria que, junto a la obligación de saber leer y escribir para ejercer el

voto —lo que excluía al 90% del ejercicio del sufragio—, y al sistema de designación de cargos por voto indirecto, le aseguraba el control de la política.

De 1824 a 1899, la media de duración de las presidencias fue de 2,4 años, un 37% de los Presidentes renunciaron antes de la expiración de su mandato, y un 20% fue depuesto por golpes de Estado. Casi la mitad del tiempo entre 1835 y 1899, Costa Rica se encontró bajo regímenes militares, presididos casi siempre por miembros de la aristocracia cafetalera⁵.

Costa Rica inició la marcha del cultivo del café con productores nacionales, y la del banano, con compañías americanas. También inició la imposición de los beneficios de la UFCO y exigió la construcción de mayor kilometraje de vías férreas. El éxito costarricense en conseguir ferrocarriles a cambio de las concesiones bananeras contrasta claramente con la experiencia de Honduras, y demuestra la habilidad de su clase política para imponer límites al dominio económico extranjero. El ferrocarril a Puerto Limón desarrolló el tráfico en dirección al Caribe y disminuyó la importancia de Puntarenas, en el Pacífico. La bananera absorbió mucha mano de obra, se transformó en campo abonado para la proliferación de sindicatos de inspiración marxista e introdujo en el país negros caribeños y chinos que diversificaron el mapa racial, llegando a constituir minorías apreciables (en torno al 5% y el 2% de la población total).

La crisis económica producida por la Primera Guerra Mundial impuso fuertes medidas de austeridad bajo el Presidente González Flores, y la aristocracia cafetalera promovió un golpe militar de los hermanos Tinoco, incapaces de resolver la crisis económica y además represivos. El descontento popular y una invasión de ticos refugiados en Nicaragua desalojaron del poder a los Tinoco y consolidaron el poder civil en el país.

A partir de entonces comienzan a surgir grupos comunales, cooperativas, sindicatos, asociaciones profesionales y comerciales, grupos escolares, y otros tipos de organizaciones populares y gremiales que exigen a los sucesivos gobiernos la satisfacción de sus necesidades de grupo.

El Estado e instituciones privadas y religiosas construyeron una red de hospitales, asilos y orfanatos, y se creó una Compañía Nacional de Seguros. Hacia 1950, Costa Rica disponía de un doctor por cada 2.700 habitantes, mientras que, en Guatemala, el tanteo era de uno por cada 6.300; en El Salvador uno por cada 5.400, en Honduras uno por cada 4.800 y uno por cada 2.900 en Nicaragua.

El Partido Comunista, bajo el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, había sido fundado en 1931, y su oportunidad surgió en 1934, cuando encabezó una huelga contra la UFCO en las plantaciones bananeras. Por primera vez en su historia la compañía cedió y otorgó mejores salarios y condiciones de trabajo. Los trabajadores de la bananera se afiliaron en masa al nuevo partido. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial y de la

◆
⁵ Steve C. Ropp y James A. Morris, *Central America, Crisis and Adaptation*. University of New Mexico Press, 1984.

alianza norteamericana con la Unión Soviética, el Bloque cambió su nombre por el de Vanguardia y entró en una coalición con fuerzas de inspiración cristiana. El Presidente Calderón pudo así establecer en 1943 la legislación más progresista en la historia de Centroamérica: igualdad de salario para hombres y mujeres, jornada laboral de ocho horas, seguridad social, derecho a la libre sindicación y a la huelga, tribunales laborales y contratación colectiva.

Ante la prohibición constitucional de dos mandatos consecutivos, Calderón dejó la presidencia en 1944 a Teodoro Picado y se colocó a la espera para reclamar la presidencia en 1948. Mientras tanto, la clase media y parte de los agricultores pasaron al contraataque acusando a Calderón de estar en manos de los comunistas, y un nuevo partido, Unión Nacional, seleccionó al periodista Otilio Blanco Ulate para oponerse a Calderón en 1948.

Los calderonistas añadieron a su historial de corrupción un flagrante fraude que robó el triunfo a Blanco Ulate en 1948. Surge en ese momento José Figueres Ferrer, hijo de padres españoles, nacido en Costa Rica en 1906. Crítico implacable del régimen de Calderón, el Presidente le expulsó del país, refugiándose en Méjico. Figueres fundó la Legión del Caribe con otros grupos de exilados con la esperanza de utilizar Costa Rica como plataforma para derribar las dictaduras centroamericanas. Después de varios ataques terrorista dentro de Costa Rica en 1945 y 1946, acudió en petición de ayuda al Presidente Juan José Arévalo, de Guatemala, quien tenía el prestigio de líder liberal en toda la región centroamericana. Arévalo deseaba una nueva Centroamérica en la que no tuvieran cabida personajes como Somoza, Figueres le convenció de que el primer paso debía darse derribando a Picado.

En la primavera de 1948, las protestas contra el fraude electoral degeneraron en conflicto armado entre la Legión del Caribe de Figueres y el Ejército, leal a Picado, y el resultado se inclinó rápidamente a favor de los revolucionarios. La ayuda de Arévalo fue inestimable. Como también lo fue la actitud norteamericana, al poner en estado de alerta las tropas del Canal y manifestar públicamente que intervendrían unilateralmente para impedir el «triunfo comunista» de Vanguardia Popular. En la misma línea, los Estados Unidos impidieron a Somoza ayudar a Picado. Este rogó al Embajador norteamericano en San José, Davis, que el gobierno legítimo de Costa Rica tenía derecho a solicitar ayuda de un vecino dispuesto a prestarla, pero el Embajador le recordó «nuestra bien conocida política de no intervención»⁶. Picado amenazó con recurrir a las Naciones Unidas, y el Embajador aludió a la lentitud de sus decisiones y al derecho de veto de que disponían los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. A Picado no le quedó más salida que la renuncia. La revolución costó al país dos mil vidas humanas.

Obtenida la victoria, la Junta de Liberación Nacional de Figueras disolvió varios sindicatos, declaró fuera de la ley al Partido Comunista y decretó una serie de medidas económicas, como la nacionalización de todos los bancos y una reforma fiscal que establecía un impuesto sobre la riqueza. La Junta gobernó durante dieciocho meses y

◆
⁶ Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions. The U. S. in Central America*. W. W. Norton and Co. New York, London, 1984.

revisó la Constitución de 1871, estableciendo medidas para asegurar la honestidad de las elecciones, disolviendo el Ejército, que había perdido la guerra civil, y concedió derechos políticos plenos a las mujeres y a los negros.

Figueres traspasó en 1949 los poderes al ganador de las elecciones de 1948, Blanco Ulate, y transformó su movimiento en un partido político, Liberación Nacional, cuya plataforma incorporaba muchas de las reformas de Calderón desarrollando el intervencionismo estatal en la economía.

«La salud de la democracia en Latinoamérica exige que los hombres que han tomado el poder por la fuerza se vayan a su casa cuando la normalidad ha sido reestablecida. Yo reestablecí la normalidad y me voy a mi casa.» Con estas palabras se despidió Don Pepe.

La victoria de Liberación Nacional supuso un relevo de la élite política mediante la incorporación de amplios sectores de clase media.

Las elecciones celebradas en Nicaragua en 1924, que las tropas norteamericanas no supervisaron por primera vez durante su ya larga estancia en el país, fueron ganadas por una coalición que fue rápidamente derribada por Emiliano Chamorro, el «viejo león». Pero el Vicepresidente depuesto, Juan B. Sacasa, con la ayuda del Méjico revolucionario, se alzó con el poder. La Secretaría de Estado dedujo que la revolución mejicana, excesivamente radical para su gusto, aspiraba a extenderse por todo Centroamérica.

El Presidente Coolidge y el Secretario Kellog enviaron más marines y a un diplomático con experiencia, Stimson, quien pronto se dio cuenta de que los Estados Unidos podían enviar tropas, restablecer la calma, desarraigar cualquier influencia mejicana y mediar entre Chamorro y Sacasa. Pero, también, que las tropas tendrían que permanecer un largo período. Stimson forzó la retirada de Chamorro, desempolvó a Adolfo Díaz, nombrándole Presidente en funciones, y neutralizó de este modo a Sacasa y su Ejército, mandado por José María Moncada.

Todos los oficiales de Moncada depusieron las armas, menos Augusto Sandino, hijo ilegítimo de un pequeño propietario y nacionalista con vagas ideas reformistas que le identificaban con las masas campesinas, pero sin que pudiera llamársele socialista o, mucho menos, comunista. Sandino expulsó de sus fuerzas a Agustín Farabundo Martí, líder del levantamiento campesino de 1932 en El Salvador, porque Martí era comunista. Sandino era además, un magnífico guerrillero que mantuvo en jaque por todo el país a los marines, retirándose en 1927 a la región montañosa fronteriza con Honduras.

*Sandino con sus guerrilleros,
como un espectro de la selva,
era un árbol que se enroscaba
o una tortuga que dormía
o un río que se deslizaba.*

«Canto General». Pablo Neruda.

Stimson consideró pacificado el país, anunció la repatriación de los marines y declaró que el orden sería mantenido en adelante por la Guardia Nacional, cuya oficialidad había sido entrenada por los norteamericanos.

En 1932 no quedaban en Nicaragua más de 1.000 marines. Mientras tanto la figura de Sandino había crecido no sólo en Nicaragua, sino en todo Centroamérica y Latinoamérica en general, y su carisma entre los campesinos, que nada habían obtenido de la larga ocupación de los marines, se extendía incluso a los hondureños, en cuyos ranchos se refugió un considerable número de sandinistas huyendo de la Guardia y los marines. El sentimiento antigringo de los nicaragüenses se exacerbó al observar cómo tropas norteamericanas cazaban y mataban nicaragüenses en su propio país. Ante la mirada complaciente del Presidente Moncada, que había ganado unas «elecciones» supervisadas por los norteamericanos en 1928.

La oposición a la presencia de los marines en Nicaragua crecía mientras tanto en el Congreso norteamericano, que se negaba a gastar en tiempos de depresión casi un millón de dólares anuales. Stimson aleccionó a Moncada y en 1932 se celebraron elecciones bajo la supervisión de los 400 marines que quedaban en el país, gaando la presidencia Juan Sacasa. Los marines abandonaron definitivamente el país el 2 de enero de 1933 y Sandino ofreció negociaciones a Sacasa. Después de un encuentro entre ambos en 1934, Sandino se dirigió a Managua cuando fue capturado por soldados de la Guardia y fusilado con dos de sus acompañantes. El Comandante de la Guardia, General Anastasio Somoza, elegido para el puesto por los norteamericanos en 1932, admitió haber transmitido la orden de ejecución después de haber recibido luz verde del Ministro de la Legación norteamericana, Arthur Bliss Lane⁷.

Anastasio Somoza se convirtió en el regalo más duradero de los Estados Unidos a Nicaragua. En 1936, a pesar de que como Comandante de la Guardia se suponía que no podía participar en política, ya aspiraba claramente a la presidencia. El Presidente Sacasa era a partir de ese momento un personaje secundario. La mujer de Sacasa y un grupo de partidarios del Presidente planearon un ataque por sorpresa contra la residencia de Somoza en La Loma, que domina Managua, pero Bliss Lane los desanimó⁸. Somoza, además de la Guardia, contaba con el apoyo de una organización paramilitar de corte fascista llamado los Camisas Azules. Con tales poderes de persuasión no encontró dificultades en ser escogido candidato de los liberales para las elecciones de diciembre de 1935, que naturalmente ganó. Desmovilizó entonces a sus azules encamisados, se instaló en la presidencia y acumuló los puestos de Jefe director de la Guardia y de Presidente. De los dos puestos, el primero era, evidentemente, el más importante.

Somoza se convirtió en el típico dictador al estilo de Ubico en Guatemala, Martínez en El Salvador o Trujillo en la República Dominicana. En su doble papel de Presidente y Jefe de la Guardia controlaba no sólo el aparato militar y policial, sino las aduanas, migración, servicios postal, telegráfico y por radio, licencias para el porte de armas e incluso el Departamento de Salubridad.

Nada se opuso a que Somoza alargara su mandato presidencial por cuatro años más, en un primer momento, e indefinidamente más tarde. Una Asamblea Constituyente por él convocada redactó en 1939 una Constitución que preveía un mandato presidencial de seis

⁷ Walter LaFeber, *op. cit.*

⁸ Steve C. Ropp y James A. Morris, *op. cit.*

años salvo para el Presidente en ejercicio en el momento de la votación. Somoza olvidó rápidamente sus veleidades fascistoides y se convirtió en el buen amigo de su vecino, Franklin D. Roosevelt, quien en cierta ocasión se refirió a él del siguiente modo: «Es un hijo de p... pero es nuestro hijo de p...»

Un Comandante norteamericano se encargó de dirigir la Academia Militar, de donde anualmente salía la oficialidad de la Guardia que, en su último año, debía acudir a la Escuela de las Américas de Panamá.

A la muerte de Roosevelt en 1947, su sucesor, Harry Truman, se empeñó en blanquear la descolorida fachada democrática del país y exigió el mutis a Somoza. En el mes de febrero y tras unas elecciones claramente fraudulentas, Leonardo Arguello ganó la presidencia bajo los colores liberales. Somoza desalojó La Loma y se instaló en un nuevo palacio, La Curva, construido simbólicamente más arriba de La Loma. Arguello cometió la equivocación de tomarse en serio su papel, creyendo que él era realmente quien mandaba. En mayo, es decir, tres meses más tarde, Somoza le sacaba de su error al encontrar un lacayo y pariente, Benjamín Lacayo Sacasa, a quien instaló en La Loma para desempeñar funciones protocolarias. Pero tampoco el lacayo sirvió, y en septiembre fue despedido por Somoza, ocupando La Loma un nuevo inquilino, Román y Reyes. El «viejo león» Emiliano Chamorro rugió de rabia, pero de nada le sirvió, pues hasta 1950 Somoza no le permitió regresar a Nicaragua, después de tres años de exilio, para concurrir a unas elecciones que naturalmente perdió.

Stimson y Roosevelt encontraron en la Guardia Nacional la respuesta al complicado problema de mantener el orden sin tener que mandar constantemente a los marines. Pero, como cínicamente comentó un diario de México en 1939, la política de la «Buena Vecindad» de F. D. Roosevelt se había transformado en una sociedad de dictadores mestizos destinada a garantizar la esclavitud de los pueblos centroamericanos⁹.

Tacho Somoza superó en avidez a todos sus colegas dictadores. Nicaragua se convirtió prácticamente en el único país del mundo inscrito en el Registro de la Propiedad. A nombre de Tacho, su familia y una tupida red de compañías. No mentía Tacho al referirse a Nicaragua en los siguientes términos: «Esta es mi finca.»

La concentración de riqueza en manos de los Somoza tuvo el efecto lateral de contribuir al crecimiento de Managua, destruida por un terremoto y fuego en 1931. Mientras tanto, León y Granada entraban en la paz y el decaimiento provinciales.

De la caótica herencia política que el siglo XIX legó a Honduras, emergieron lentamente dos partidos políticos. Bajo el liderazgo de Policarpo Bonilla, Presidente de 1894 a 1899, nacería el Partido Liberal que gobernaría el país ininterrumpidamente hasta 1932. Una facción conservadora disidente fundó en 1916 el Partido Nacional.

La crisis mundial del 29 afectó profundamente a la administración del Presidente Mejía Colindres. La UFCO rebajó los jornales y despidió a varios centenares de braceros,



⁹ Recogido por Walter LaFeber en *op. cit.*

lo que provocó la primera huelga en la historia de Honduras. La pobreza era general y el país se encontraba descontento. Ante este panorama se convocan las elecciones para el Congreso en 1930. Los resultados fueron favorables al Partido Nacional, dirigido por el General Carias, frente al liberal liderado por Zúñiga Huete. El Presidente Mejía se aprestaba a entregar el poder al partido ganador cuando estalló una sublevación que fracasó, y el 1 de febrero de 1933 el General Carias accedía a la presidencia.

Carias era un dictador más bien del tipo «Facundo», de Sarmiento, que del «Tirano Banderas» de Valle Inclán, o «Señor Presidente» de Asturias, o incluso «El otoño del patriarca» de García Márquez. De extraordinarias dimensiones, en especial para la media hondureña, 130 kilos de peso y cerca de dos metros de altura, había sido veterano de todas las guerras civiles hondureñas desde 1892. Nunca llegó a los extremos de crueldad de Estrada Cabrera, ni a la locura psicópata de Martínez, ni a la rapiña descarada de Somoza. Y su mando, de 1933 a 1949, significó el gobierno más largo de Honduras en toda su historia política.

Don Tiburcio Carias Andino gobernó utilizando toda una red de lealtades personales y mantuvo excelentes relaciones con las compañías bananeras. Su dominio del Congreso le permitió el «continuismo», es decir, continuar en el poder sin necesidad de elecciones. Para qué, decía don Tiburcio, si de todas maneras las voy a ganar.

En 1949, Carias, agobiado por el peso de las responsabilidades, la edad, y sus 130 kilos, decidió convocar elecciones. Regresa del exilio el líder liberal Zúñiga Huete, quien a última hora decide no concurrir a la pugna y se asila en la Embajada de Cuba. Sin contrincantes, el nacional Gálvez sale elegido Presidente.

Gálvez modernizó las covachuelas administrativas, liberalizó el clima social y político y emprendió la transformación financiera del país, así como el fomento económico. Se creó un Banco Nacional de Fomento para proporcionar financiación a la agricultura.

En estas condiciones, en abril de 1954 tiene lugar un acontecimiento histórico: los braceros se niegan a cargar de bananos los barcos de la UFCO a menos de que se les pague el doble. Rechazada la petición por la compañía, a la que da por supuesto la razón un tribunal local, la huelga se extiende a los campos bananeros y al otro gigante del banano, la Standard Fruit. El primer movimiento huelguístico de importancia en la historia del país, al que se sumaron 40.000 obreros, surgía de la nada en cuanto a liderazgo se refiere, con ausencia de organizaciones sindicales, alimentado únicamente por una clara conciencia de bajos salarios y malísimas condiciones de trabajo. (El sulfatado de los plantones de banano provocaba a medio plazo gravísimas dolencias pulmonares; de ahí la denominación de los campos de banano como «el infierno verde».)

La huelga ocurría cuando los hermanos Dulles se aprestaban al lanzamiento de su operación contra el Gobierno de Arbenz en Guatemala. Ésta fue una razón suplementaria para convencer a las compañías a conceder aumentos entre el 4 y el 8% y a mejorar las condiciones de trabajo, así como dos semanas anuales de vacaciones. El bracero del banano descubría así lo que eran las vacaciones.

Dos sindicatos surgirían de la huelga: el Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) y el Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruit Company (SITRASFCO).

El 20 de mayo de 1954, la Administración Gálvez firmó el Convenio Bilateral de Ayuda Militar entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras. La ratificación corrió a cargo del Gobierno de facto de Julio Lozano el 15 de abril de 1955 y sería el secreto mejor guardado por el Embajador norteamericano Whiting Wiclaer, firmante del Convenio, en sus idas y venidas de Tegucigalpa a Washington, para acelerar y agilizar los requisitos constitucionales hondureños pues tenía el temor, con el casi seguro triunfo del doctor Villeda, de que el nuevo Congreso no lo ratificase a menos de que se corrigiesen excesos tales en su redacción que más bien parecía un diktat impuesto a un vencido que una alianza entre países teóricamente iguales.

En 1954 se convocaron elecciones y la victoria correspondió al Partido Liberal, pero al no obtener mayoría absoluta su candidato, doctor Villeda Morales, tal como exigía la Constitución, correspondió al Congreso la designación. La retirada de los diputados nacionalistas impidió el quórum, surgiendo entonces el fantasma de la guerra civil. Gálvez se retiró y el Vicepresidente Julio Lozano se proclamó Jefe del Estado el 5 de diciembre de 1954 y montó un gobierno de concentración nacional.

El 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y establecieron una Junta Militar que convocó elecciones en las que volvió a triunfar el Partido Liberal. La Asamblea eligió al doctor Villeda Morales primero Presidente de la misma y, más tarde, Presidente de la República, cargo que comenzó a desempeñar el 21 de diciembre de 1957.

El «Villedismo» aportó una nueva Constitución, un Código de Trabajo, la seguridad social y una incipiente reforma agraria.

El cultivo del café se dobló entre 1945 y 1959, el de algodón creció veinte veces y la cabaña nacional se duplicó. Tal extensión de la agricultura comercial significó el desalojo de un considerable número de aparceros y agricultores sin título lo que, unido a la inmigración de miles de salvadoreños en búsqueda de tierra, supuso una presión acentuada sobre el campo y la emigración a la ciudad de miles de hondureños, con la aparición de terribles cinturones de pobreza.

Villeda intentó establecer una sociedad más plural pero las resistencias al cambio de las élites tradicionales y los inversores extranjeros bloquearon el desarrollo de tales aspiraciones.

La historia de El Salvador se caracterizó desde la Reforma cafetalera por la concentración de la riqueza en manos de un reducido número de familias, cuatro, catorce o cuarenta, qué más da, y la escasez de tierras disponibles, por la pequeñez del territorio nacional. Datos que crearon respectivamente una clase oligárquica estrechamente cohesionada por vínculos familiares, y una masa campesina que destacaba singularmente entre sus vecinos hondureños y guatemaltecos por su laboriosidad e ingenio.

▣ Londres había sido tradicionalmente el cliente e intermediario del café salvadoreño, así como su banco, pero tras la Primera Guerra Mundial, San Salvador no pudo pagar los intereses de la deuda británica y acudió a Nueva York. Un grupo financiero norteamericano concedió un préstamo de 20 millones de dólares, exigiendo como garantía del reembolso el control del ferrocarril y el nombramiento de un agente fiscal que supervisara la recolección de los impuestos de importación-exportación. Los salvadoreños, poco acostumbrados a tales ingerencias, se juraron que nunca más aceptarían una influencia directa norteamericana y de hecho así lo lograron hasta la década de los sesenta. Durante los siguientes años, ni bancos norteamericanos ni compañías fruteras ejercieron en El Salvador un poder semejante al que desplegaron sobre el resto de los países centroamericanos.

El Presidente Pío Romero Bosque, elegido en 1927 como miembro de la oligarquía, estaba decidido a abrir el sistema y organizó en 1930 las elecciones municipales y presidenciales más libres de la historia salvadoreña. Éstas se celebraron con un telón de fondo de depresión económica, movimientos políticos de masas y reorganización del clan cafetalero en la Asociación Cafetalera de El Salvador. A finales de los años veinte, Alberto Masferrer, el crítico social más prestigioso del país escribía: «La conquista del territorio por la industria del café es alarmante. Ya ha ascendido a las tierras altas y está ahora descendiendo a los valles, desplazando al maíz, arroz y frijoles. Se ha extendido como el conquistador, irradiando hambre y miseria, reduciendo a los antiguos propietarios a las peores condiciones —¡ay del que vende!—. Aunque es posible demostrar matemáticamente que éstos cambios enriquecen al país, de hecho significan muerte. Es verdad que los costos de importación de maíz son reducidos comparados con los beneficios de la exportación de café, pero ¿se entrega a los pobres el maíz importado? ¿O se les hace pagar su adquisición? ¿Es la renta del campesino que ha perdido su tierra suficiente para procurarse maíz, arroz, frijoles, vestimenta, medicinas, doctores, etc.? Por tanto, ¿cuál es el beneficio de hacer dinero con la venta de café cuando deja a tanta gente en la miseria?»¹⁰.

Ganó las elecciones Arturo Araujo, formando en 1932 un gobierno en el que el General Maximiliano Hernández Martínez era Vicepresidente y Ministro de la guerra. Araujo, un reformista con ideas de justicia social, cometió la equivocación de intentar sortear la depresión económica, ante la caída vertical de los precios y demanda de café, mediante una reforma fiscal que ensanchaba la base impositiva y disminuía el presupuesto militar. En diciembre del mismo año, un grupo de jóvenes oficiales dio un golpe, colocando en el poder a Martínez. Levantamientos campesinos ocurrieron inmediatamente en las áreas productoras de café, donde las condiciones eran más duras. Martínez había permitido a los comunistas participar en elecciones locales pero, después de su triunfo en varios pueblos, el Ejército les impidió tomar posesión.

El líder del movimiento era Agustín Farabundo Martí, quien había trabajado en Nueva York con grupos opuestos a la intervención norteamericana en Latinoamérica, integrado las filas de Sandino en Nicaragua y adherido al Partido Socialista Centroameri-

◆
¹⁰ Recogido por Steve C. Ropp y James A. Morris, op. cit.

cano creado en Guatemala en 1925, cuna de los partidos marxistas del istmo. El levantamiento de 1932, mal preparado, fracasó ante las fuerzas regulares de Martínez, y los campesinos, armados con machetes, se dispersaron rápidamente. Martínez pensó que era necesario dar una lección y 30.000 campesinos, rodeados por el Ejército, fueron asesinados a sangre fría. Martí, capturado, fue fusilado. Los indios, que participaron muy activamente en la revuelta, fueron especialmente castigados. Después de la masacre se vendían en San Salvador tarjetas postales mostrando cómo los jefes indios eran ahorcados, y a partir de entonces el indígena dejó de usar su ropa y utilizar sus costumbres tradicionales, desapareciendo prácticamente del paisaje del país.

La tragedia de 1932 es una sombra siempre presente en el subconsciente de la política salvadoreña, abriendo un foso de odio del campesino hacia el terrateniente y de temor de éste ante la posibilidad de un nuevo «machtetazo».

Martínez, «el brujo», es un personaje comparable a Papa Doc, de Haití, o a Macías, primer Presidente de la Guinea Ecuatorial. Teósofo, aficionado a las ciencias ocultas, pensaba que era mayor crimen matar a una hormiga que a un hombre, porque éste tenía una segunda oportunidad mediante la reencarnación. Quizá por ello aplastó a los campesinos como a hormigas.

Después de su victoria, Martínez fue el héroe de la oligarquía, y los Estados Unidos, que tenían sus dudas en cuanto a su reconocimiento antes de la masacre, le admitieron informalmente después de ella. En 1934, tras comprobar lo efectivo que el General era manteniendo al país perfectamente en orden, Roosevelt le aceptó con todos los honores del reconocimiento formal.

Los terratenientes entregaron a los militares la parte del león en cargos gubernamentales y políticos, reteniendo el prestigio social y la riqueza. La alianza era inestable, pues los oligarcas miraban a los militares de clase media por encima del hombre, mientras que los uniformados despreciaban a los oligarcas por su incapacidad para gobernar, como demostraba el hecho de que fueran ellos quienes les sacaran las castañas del fuego.

Políticamente se inaugura una pauta de promesas rotas. Un grupo de jóvenes oficiales pertenecientes a una o dos «tandas» (promociones) se comprometen a romper con el pasado poniendo en marcha las reformas que postergó el régimen anterior, que gradualmente adquirió un carácter claramente represivo. Una vez en el poder, los progresistas se apoltronan y los conservadores marcan la orientación del nuevo régimen, postergando las prometidas reformas para mejor ocasión. El proceso, reproducido repetidamente, es conocido como «derechización». Derechización de la derecha, habría que añadir.

La alianza oligarquía-oficialidad dependió paulatinamente de la capacidad de la primera para «motivar» a la segunda. Y la corrupción, la fortuna de la noche a la mañana, se instaló en el Ejército, proporcionando altos rendimientos políticos a la oposición y económicos a la oligarquía.

Sus compañeros de armas descargaron a Martínez de sus funciones presidenciales en 1944, mediante el procedimiento del golpe. Una junta cívico-militar se atreve a sugerir reformas y es derribada en 1945 por el Coronel Aguirre, quien organiza unas elecciones a

la medida de su colega y amigo, General Castañeda. Así llegamos a la rebelión de los comandantes de diciembre de 1948. Se va Castañeda. Catorce meses más tarde, el Teniente Coronel Osorio llega a la presidencia con un programa desarrollista, a base de incentivar el nacimiento de un sector industrial y la diversificación de la agricultura. También prometía la potenciación de la infraestructura del país mediante la construcción de carreteras, presas, puentes. El modelo desarrollista no menoscabó el control oligárquico sobre la economía. Más bien, permitió a aquella aumentar su riqueza. Los altos precios del café proporcionaban a la oligarquía cafetalera unos beneficios que tenía que invertir, y el naciente sector industrial fue un campo de inversión alternativa altamente incentivado por el esquema de sustitución de importaciones. Sin embargo, la expansión industrial estaba condenada a un crecimiento muy limitado, pues el mercado local, constituido básicamente por campesinos con escasísima capacidad de consumo, no lo permitía. Y el aumento de tal capacidad de consumo mediante una reforma agraria era sistemáticamente postergado mediante el mecanismo de las promesas rotas.

Desde que Guatemala se liberó de «El Señor Presidente», Estrada Cabrera, en 1920, el país vivió una serie de desórdenes y algaradas que sólo terminaron cuando el General Ubico llegó al poder mediante elecciones en 1931. El panorama general del país se puede resumir diciendo que el 2% de la población, dueña del 60% de la tierra cultivada, utilizaba una mano de obra semiservil, que en su 50% era indígena.

Ubico pertenecía al 2% privilegiado. Después de una carrera rápida en el ejército, manejando al mismo tiempo las fincas familiares, organizó su propio partido político. Una caída de caballo le volvió impotente, pero su uniforme militar y su creencia de que se parecía a Napoleón le daban el suficiente aspecto machista para triunfar en el medio político. Las tres fobias del nuevo Presidente eran los intelectuales, los comunistas y, hasta que llegó al poder, los ladrones¹¹.

En 1932 sentó las primeras bases de su sistema de paz y seguridad. Mandó fusilar a diez líderes comunistas y encarceló a los refugiados salvadoreños que huían de la matanza en su país. Cuando descubrió un complot contra su régimen, en 1934, montó una campaña de detenciones masivas y de ejecuciones sumarias tal que el semanario «Time» pudo citar una frase suya que reflejaba la realidad de Guatemala: «No tengo amigos, sólo enemigos domesticados.» Los sindicatos fueron desmantelados y sus líderes encarcelados. Sólo sobrevivieron las asociaciones mutualistas y los gremios profesionales.

Sus grandes logros se encuentran en la política de obras públicas, en especial las carreteras, que permitieron el acceso a regiones hasta entonces al margen del circuito económico. Una generosa política de concesiones a los intereses extranjeros y de incentivos para la instalación en el país de agricultores foráneos completaba un cuadro reflejado por el hecho de que transfiriera el Ministerio de Trabajo del Departamento de Desarrollo al de Policía.

Los agricultores alemanes ocupaban en 1939 un tercio de la tierra cultivada, y producían casi la mitad del café exportado por Guatemala. Sus relaciones familiares con la

¹¹ Walter LaFeber, *op. cit.*

élite guatemalteca potenciaban un poderío que se expresaba a través de varios bancos, supermercados y la única escuela alemana en Centroamérica. Ubico admiraba a Mussolini y a Franco, y cuando Italia se retiró de la Sociedad de Naciones, en 1936, también se retiró Guatemala, a la que pronto seguirían El Salvador y Honduras. Las propiedades alemanas serían expropiadas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y un Coronel americano se encargó de la dirección de la Academia Militar, hechos ambos que despejaron en Washington cualquier temor de contagio fascista. La UFCO tenía propiedades que, en Centroamérica, sólo sobrepasaba Honduras, y en 1936 regaló a Ubico un millón de dólares a cambio de reducciones masivas en su carga fiscal. La Pan American gozaba de derechos exclusivos de aterrizaje en varias ciudades clave.

A medida que Ubico cambió la legislación para mantenerse indefinidamente en el poder su cooperación con los Estados Unidos fue aumentando. Los norteamericanos controlaban el transporte y las comunicaciones, compraban el café y producían las bananas, suministrando la financiación requerida. Una situación en suma de dependencia casi completa.

En 1944, Ubico fue nuevamente descabalgado, esta vez por sus colegas militares, y un triunvirato militar encabezado por Federico Ponce se hizo cargo del poder, mientras que Ubi marchaba al exilio a Nueva Orleans. Miami no estaba aún de moda.

Ponce era potencialmente tan dictatorial como Ubico, pero una fuerte corriente de opinión le movió a restablecer garantías constitucionales, prometer elecciones a corto plazo y permitir la existencia de partidos políticos y sindicatos. Ponce acuarteló un destacamento de indios armados de machetes en las inmediaciones de la capital como «prueba» del apoyo indígena y como medio de romper las manifestaciones. En octubre, el respetado director del diario «El Imparcial», Alejandro Córdova, fue asesinado, y a los veinte días, el 20 de octubre, un grupo de estudiantes y obreros, bajo el mando del Comandante Aranas, tomó la fortaleza de la Guardia de Honor, repartiendo armas a la población. El mismo día por la noche, los revolucionarios eran dueños de la capital, y al día siguiente una junta revolucionaria compuesta por Arana, el Capitán Jacobo Arbenz y Jorge Toriello, un comerciante respetado, tomó el poder.

Las elecciones celebradas en diciembre, las más libres jamás en Guatemala, dieron el triunfo a Juan José Arévalo, con un 82,5% de los votos contra un 8 de su rival, Adrián Recinos, candidato de la oligarquía tradicional. Arévalo, de cuarenta años, profesor en la universidad argentina de Tucumán, proyectaba una ideología que él calificaba «socialismo espiritual», cuya aspiración era devolver al hombre toda la integridad espiritual y psicológica que le había negado el conservadurismo y el liberalismo. Crítico igualmente del marxismo y del capitalismo individualista, había conseguido en su largo exilio argentino convertirse en un símbolo de la oposición a la tiranía. Su campaña la hizo bajo las siglas del Partido de Acción Revolucionaria. Falto de experiencia política, Arévalo estaba decidido, sin embargo, a gobernar bajo principios de justicia. Dio derecho de voto a los indios y a los analfabetos, estableció un esquema de seguridad social, creó una red de escuelas rurales, animó la constitución de cooperativas rurales, siguiendo en general una línea de reformismo moderado que resumía muy bien su Ley de Arrendamiento Forzoso, que obligaba a los terratenientes a arrendar tierras en barbecho a bajo precio.

La Ley Anti-vagancia o de trabajos obligatorios fue abolida, dificultándose el «enganche» o trabajo en pago del adelanto de salarios. Pero el sistema subsistió bajo el nombre de «fincas de mozos». Tal era el peso de la tradición que el Presidente Lucas García, depuesto en 1982, era propietario de una de esas fincas de mozos y alquilaba peones a sus vecinos a bajo precio todavía en los años ochenta.

El Censo Agrario de 1950 revelaba que el 96,4% de las propiedades rurales eran menores de 45 hectáreas y representaban un 27,9% de la tierra cultivada, mientras que el 3,5% de las propiedades restantes representaban el 72,1%. Las haciendas de extensión superior a 2.250 hectáreas representaban más de un cuarto de la tierra cultivada de Guatemala, mientras que el 57% del campesinado no poseía tierra¹².

Arévalo también fue favorable a los trabajadores urbanos, y el Código de Trabajo de 1947 ofrecía protección contra el despido. Se reconocía el derecho de huelga, salvo para los funcionarios, y se podía crear una rama sindical en todo lugar de trabajo donde el 25% así lo solicitara. La Confederación General de Trabajadores de Guatemala se convirtió en un grupo con poder negociador. Al carecer de competencia, los comunistas jugaron un papel desproporcionado a sus fuerzas en el campo sindical, hasta el punto de que, para 1950, controlaban prácticamente la CTG.

Los terratenientes inversores extranjeros no tardaron en calificar a Arévalo de comunista. El etiquetado de comunista a toda reforma del régimen concedió un protagonismo a todas luces exagerado al poderío y actuación del partido comunista en el país. El partido se denominaba Vanguardia Nacional en 1944, cambiando más tarde su nombre por el de Vanguardia Democrática y, en 1949, Partido Comunista de Guatemala.

Durante sus cinco años en la presidencia, Arévalo capeó veintidós revueltas militares, aumentó los salarios en más de un 80%, elaboró una nueva Constitución en 1945, fuertemente influenciada por la mejicana, y desconcertó al Departamento de Estado hasta el punto de que éste declaraba en 1948 que aunque sus reformas no eran prueba absoluta de comunismo, tampoco significaban que carecieran de inspiración comunista.

La plataforma básica de apoyo al régimen de Arévalo era la clase media. Los intelectuales, pequeños propietarios, artesanos, comerciantes, estaban ante todo interesados en mejorar su nivel de vida y obtener una parcela del poder que la oligarquía había tradicionalmente manejado como cosa propia. Pero sus afinidades eran mayores con la clase dominante que con los campesinos. Por ello, gradualmente, se fue produciendo en esta clase media un paulatino rechazo de las «ideas exóticas» y una búsqueda inútil de inexistentes «soluciones internas».

En 1949, un movimiento encabezado por el Coronel Arana comenzó a tomar posiciones con vistas a las elecciones. Arana sería asesinado varios meses más tarde, y aunque nunca se supo el autor, circularon rumores sobre la posible participación de Jacobo Arbenz, Ministro de la guerra.

¹² Steve C. Ropp y James A. Morris, *op. cit.*

Las relaciones con los Estados Unidos conocían momentos de tensión. Varios empleados de la UFCO fueron arrestados por intentar destruir la rama sindical de la compañía, y el Embajador Patterson fue trasladado a Washington, a petición de Arévalo, por «razones médicas». Allí se convirtió en un furioso oráculo de los peligros comunistas que amenazaban a Guatemala.

Cuando estalló la guerra de Corea, Arévalo encarceló inmediatamente a los comunistas más conspicuos, pero a pesar de este gesto, el Departamento de Estado suspiró de alivio cuando en marzo de 1951 Arbenz llegó a la presidencia tras haber ganado un 65% de los votos en unas elecciones en las que contendió con el candidato de las clases dominantes, Ydígoras Fuentes. La Embajada norteamericana en Guatemala calificó a Arbenz de «realista», y pronosticó que viraría hacia el centro y se desharía de la influencia comunista.

* * *

Hemos visto repetidamente cómo la vida de las Repúblicas centroamericanas se desarrolla desde finales del pasado siglo en el marco de una especial relación con los Estados Unidos. Relación que ha sido definida como dependencia, la cual resulta de, y la suscita al mismo tiempo, una relación circular de causación —la alienación de las élites y la marginación de las masas¹³—. La trayectoria hegemónica norteamericana en Centroamérica, consecuencia tanto como causa del poder estadounidense y la debilidad centroamericana, se produce sin que el pueblo norteamericano sea consciente de la misma, ya que juzga que lo bueno para los Estados Unidos es bueno para el mundo.

Las diferentes etapas que ha recorrido tal trayectoria están representadas por la Doctrina Monroe y sus corolarios de la estaca de Teodoro Roosevelt, la Diplomacia del Dólar de Taft, el Panamericanismo de Wilson y la Buena Vecindad de Franklin D. Roosevelt.

Cuando en 1823 Francia invadió España para terminar con el «peligro» liberal que Fernando VII se había visto obligado a aceptar, se pensó que el siguiente paso sería intentar colocar a Hispanoamérica, de nuevo, bajo el mando del Rey de España. Los temores británicos, compartidos por los norteamericanos, fueron la base de la *Doctrina Monroe*, manifestación unilateral de intenciones del ejecutivo norteamericano en el mensaje anual del Presidente al Congreso. La doctrina se contiene textualmente en las siguientes palabras: «Los continentes americanos, en vista de la condición libre e independiente que han asumido y que mantienen, no podrán de ahora en adelante ser considerados objeto de una colonización futura por ninguna potencia europea... El sistema político de las potencias coaligadas (la Santa Alianza) es esencialmente diferente del americano... Consideraremos cualquier intento de extender su sistema a cualquier parte del Hemisferio (Occidental) como peligroso para nuestra paz y seguridad... (a la vez) no interferiremos con las colonias o dependencias existentes.»



¹³ Helio Jaguaribe, en *La Dependencia Política-Económica de América Latina*. Editorial Siglo XXI, 1978.

La última oración de la doctrina reconocía que los Estados Unidos no estaban en capacidad de retar a la poderosa flota británica, dueña de los mares, pero contenía una petición de principio a cierta titularidad sobre la totalidad del hemisferio occidental.

Sólo Simón Bolívar, en agudo destello, alcanzó a ver más allá de las palabras: «Los Estados Unidos, que parecen destinados por la Providencia a plagar América de miserias en nombre de la libertad...»

En 1905, Teodoro Roosevelt recomendaba como receta mágica para tratar con los «nidos de pequeños bandidos de género malvado e inútil», hablar suavemente y llevar siempre el argumento de *una gran estaca*. Para asegurar las inversiones, proteger el Canal, mantener el orden, los Estados Unidos debían actuar como el «protector natural» de los latinoamericanos. El primer país donde se aplicó la estaca fue la República Dominicana en 1905. Varios países europeos amenazaban con intervenir para cobrar deudas morosas, y Washington se interpuso designando un interventor de las aduanas que distribuyera el 55% de lo recaudado entre los acreedores extranjeros e ingresara al tesoro dominicano el 45% restante.

Con el Canal en juego y un estado de desorden crónico en las márgenes del Caribe, los Estados Unidos no deseaban que se repitiera la historia de lo ocurrido en Venezuela en 1902, cuando barcos de guerra alemanes, británicos e italianos se presentaron amenazadoramente ante las costas del país para vencer las resistencias al pago de la deuda.

En su mensaje al Congreso en 1904, Roosevelt explicaba su corolario a la doctrina Monroe: «Una mala conducta crónica, o ausencia de orden (suele) causar la intervención (en esos países) de los Estados civilizados... En el Hemisferio Occidental, nuestra adhesión a la Doctrina de Monroe podría obligarnos, contra nuestras inclinaciones, en casos flagrantes de tal mala conducta o de impotencia (de los gobiernos), al ejercicio de un poder político internacional.»

Desde entonces hasta 1965 se produjeron 20 intervenciones de los marines en las naciones del Caribe¹⁴. La textura de las sociedades caribeñas, dividida su élite en facciones en sempiterna lucha por acceder al poder, favorecía las intervenciones.

Incluso una pluma como la de Rubén Darío escribía en 1906, en su «Salutación al Águila»:

«Bien vengas, mágica Águila de alas enormes y fuertes
a extender sobre el Sur tu gran sombra continental,
a traer en tus garras, anilladas de rojos brillantes,
una palma de gloria del color de la inmensa esperanza,
y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz.
Ciertamente, has estado en las rudas conquistas del orbe.
Ciertamente, has tenido que llevar los antiguos rayos.

¹⁴ Helio Jaguaribe, en *op. cit.*

Si tus alas abiertas la visión de la paz perpetúan,
 en tu pico y tus uñas está la necesaria guerra.
 E pluribus unus! ¡Gloria, victoria, trabajo!
 Tráenos los secretos de las labores del Norte,
 y que los hijos nuestros dejen de ser retores latinos,
 y aprendan de los yanquis la constancia, el vigor, el
 carácter.
 Dinos, Águila ilustre, la manera de hacer multitudes.
 Águila, existe el Cóndor. Es tu hermano en las grandes alturas.
 Los Andes le conocen y saben que, cual tú, mira al Sol.
 May this grand Union have no end!
 Puedan ambos juntarse en plenitud, concordia y esfuerzo.
 ¡Salud, Águila!
 ¡Que la Latina América reciba tu mágica influencia...»

Quizá Rubén conocía que en el escudo norteamericano figuraba la divisa virgiliana *Novus Ordo Seclorum* como anuncio de una nueva era, del retorno de la edad de oro. Y quizá ignorara la afición que el Águila tomó a su país, en forma de prolongada estancia de marines norteamericanos.

El sucesor de Teodoro Roosevelt en la Casa Blanca, William Taft, pensó que podría substituir la estaca por el dólar, y elaboró la llamada «*diplomacia del dólar*», es decir, la zanahoria de las inversiones, más la ensalada de los empréstitos, aderezadas ambas con la salsa de la intervención de las aduanas pues, al no quedar fondos que robar, disminuiría el incentivo de las constantes revoluciones. Obsesionado con encontrar un auténtico derecho a la intervención, volvió locos a los expertos del Departamento de Estado quienes al fin arrojaron la toalla declarando que tal derecho no existía.

A su llegada a la Presidencia en 1913, Woodrow Wilson rechazó la estaca y el dólar pero, a la larga, su política en Centroamérica no funcionó pues, como Presidente de un sistema que funcionaba, y muy bien por cierto, intentó imponer el beneficio de tal sistema a otros pueblos sin contar con su parecer. La obsesión de Wilson eran los concesionarios, los intereses extranjeros, que buscaban en Centroamérica una posición privilegiada, pues ellos eran los verdaderos culpables de los gérmenes revolucionarios y de la inestabilidad ambiente. Esto ocurría especialmente cuando los intereses extranjeros no eran norteamericanos, pues el *Panamericanismo* transformaba en prácticamente nacionales las inversiones norteamericanas en Centroamérica. La retórica antiimperialista quedaba contradicha por una doctrina que conducía a un protectorado «de facto» sobre Centroamérica. Cuando los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917 los marines estaban estacionados en Haití, Nicaragua y República Dominicana.

Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos eran una gran potencia, Europa ya no presentaba ninguna amenaza a su hegemonía sobre Centroamérica y, por tanto, la doctrina Monroe se tornó innecesaria. Además, el envío de los marines creaba sentimientos anti-yanquis en la región y dolores de cabeza en el Departamento de Estado.

La Política de la Buena Vecindad de Franklin D. Roosevelt, entre 1933 y 1939, ajustó el sistema en tres tiempos. En primer lugar se aceptaron las dictaduras en Nicaragua,

Guatemala, Honduras y El Salvador, siempre que las mismas mantuvieran el orden y respetaran la propiedad. La estabilidad significaba mantener en pie un sistema socioeconómico en el cual el 2% de la población de cuatro de los cinco países centroamericanos controlaba la tierra y, por tanto, las vidas del 98% restante. Este dato era evidentemente penoso, pero «Centroamérica había tenido la mala suerte de padecer una colonización española que dejó establecidas unas estructuras tan malignas como duraderas». Al contacto con las inversiones y obras civilizadoras de los Estados Unidos, la región iría mejorando paulatinamente.

El segundo tiempo ocurrió cuando el New Deal hizo que el Gobierno reemplazara a los banqueros privados, inmersos en la Gran Depresión, como fuente de financiación a los Gobiernos centroamericanos. A partir de 1934, el Export-Import Bank comenzó a proporcionar crédito comprador a los países del área, contribuyendo de ese modo a la exportación hacia la zona. Con lo cual se ampliaban los mercados de los productores norteamericanos y se daba un paso de rosca a la dependencia de la región con respecto a los Estados Unidos.

El último ajuste tuvo lugar en el terreno militar. A partir de 1938 comenzó a funcionar en Washington un Comité de enlace para estrechar las relaciones, formación y suministros militares. La Escuela de las Américas en la Zona del Canal de Panamá se convirtió en el alma mater de la oficialidad centroamericana, como demuestra el siguiente cuadro de asistencias en el período 1949-1964:

Argentina	259	Costa Rica	1.639	Honduras	810
Bolivia	1.124	El Salvador	358	México	178
Brasil	165	Guatemala	958	Nicaragua	2.969

Nicaragua envió a la Escuela mayor número de oficiales que ningún otro país del Hemisferio. Eran los tiempos de Somoza. Y Costa Rica, a pesar de carecer de Ejército desde 1948, ocupa el segundo lugar¹⁵.

En la secuencia de las distintas modalidades de la política norteamericana sobre Centroamérica se puede apreciar un movimiento pendular entre el realismo y el idealismo que caracteriza el dualismo de la política exterior de los Estados Unidos. El lenguaje del poder alterna con el de cooperación y solidaridad, como si el águila del emblema en su escudo pudiera llevar en una garra las flechas y la rama de olivo en la otra. Este rasgo, que por supuesto no es exclusivo de la acción exterior de Washington, ha sido descrito por Huntington como un patrón cíclico cuya etapa inicial es el moralismo, transformado más tarde en cinismo, substituido a su vez por la complacencia y cerrándose el círculo con la hipocresía. El modelo cíclico funcionaría de manera autosostenida mediante un mecanismo de «feed-back»¹⁶.



¹⁵ W. F. Barber y C. N. Ronning en *Internal Security and Military Power: Counterinsurgency and Civic Action in Latin America*. Columbus, Ohio, 1966. Cit. por Walter LaFeber.

¹⁶ Samuel P. Huntington, *American Politics: The Promise of Disharmony*. Cambridge, Mass. The Belknap Press of Harvard University Press, 1981.

En 1912 no quedaban en Nicaragua más de 1 000 marinos. Mientras tanto la figura de Sordani había crecido no sólo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica y Latinoamérica en general, y la crítica entre los campesinos, que nada habían obtenido de la larga ocupación de los marinos, se extendió incluso a los hondureños, en cuyos ranchos se refugió un considerable número de soldados huyendo de la Guardia y los marinos. El sentimiento antigranero de los nicaragüenses se exacerbó al observar cómo tropas hondureñas atacaban y mataban nicaragüenses en su propio país. Ante la inerte complicidad del Presidente Morales, que había ganado unas elecciones supervividas en noviembre de 1912.

VI

La señal de alerta

La oposición a la presencia de los marinos en Nicaragua creció mientras tanto en el país. En 1912 se celebraron elecciones para el gobierno en tiempos de depresión con un millón de votos. En 1913 se celebraron elecciones bajo la supervisión de los 400 marinos que quedaban en el país, dando el gobernador Juan Sacap. Los marinos desafiaron definitivamente al país el 2 de enero de 1913 y Sordani ofreció amparo a Sacap. Después de un acuerdo entre ambos en 1914, Sordani se dirigió a Europa, pero cuando fue capturado por soldados de la Guardia y juzgado con diez de sus compañeros, el Comandante de la Guardia, General Anastasio Somoza, viajó para el extranjero y fue arrestado en 1915, aunque había transmitido la orden de ejecución antes de haber recibido la orden del Ministro de la Legación norteamericana, Arthur Bliss Lane.

Anastasio Somoza se convirtió en el regalo más deseado de los Estados Unidos a Nicaragua. En 1916, a pesar de que como Comandante de la Guardia se suponía que no podía participar en política, se nombró claramente a la presidencia. El Presidente Sacap era a partir de ese momento un personaje secundario. Después de Sacap y un grupo de partidarios del Presidente, primero en un ataque por sorpresa contra la residencia de Sacap en La Loma, que fue la Matanza, pero sólo Lane lo permitió. Somoza, además de la Guardia, contó con el apoyo de una importante porción de la fuerza local basada en Capatzen Amalio. Capatzen profirió la declaración de guerra a las autoridades de los Estados Unidos por la liberación de los liberales por los militares de noviembre de 1915, que naturalmente pudo. Desembarcó entonces a un estado independiente, se volvió en la presidencia y acumuló los poderes de jefe de la Guardia y de Presidente. De los dos puestos, el primero era, evidentemente, el más importante.

Somoza se convirtió en el tercer dictador al estilo de Tiburcio en Guatemala, Mariano en El Salvador y Trujillo en la República Dominicana. En su primer papel de Presidente y jefe de la Guardia controlaba en todo el aparato militar y policial, con los aliados, algunos servicios postales, telegráficos y por radio. Sus ojos para el parte de unirse a unirse al Departamento de Seguridad.

Nada se opuso a que Somoza dijera en mandatos presidenciales por cuatro años más, en un primer momento, e indefinidamente más tarde. Una Asamblea Constituyente por el momento existió en 1917 con Constitución que prevé un período presidencial de seis

antes no reconocidos por la Unión Soviética. Al Furore cambió su nombre por el de Vanguardia y entró en sus filas con fuerzas de inspiración cristiana. El presidente Calderón pudo así sustituir en 1942 la legislación más progresista en la historia de Centroamérica (cantidad de horas para hombres y mujeres, jornada laboral de ocho horas, seguridad social, derecho a la libre sindicación y a la huelga, tribunales laborales y definir un colectivo).

Ante la prohibición constitucional de dos mandatos consecutivos, Calderón dejó la presidencia en 1944 a Teodoro Picado. «La miseria no es un designio de Dios, sino fruto de sistemas sociales injustos. Si no hay justicia para todos, no habrá paz para nadie.» En 1948, mientras tanto, le dio un golpe de estado, y al mismo tiempo, Unión Nacional, seleccionó al periodista Óscar Arias Ulate para oponerse a Calderón.

Juan Pablo II

Los conservadores apelaron a la historia de corrupción en el gran fraude que robó la victoria a blanco Ulate en 1948. Surge en ese momento José Figueres Ferrer, hijo de padres españoles, nacido en Costa Rica en 1906. Crítico implacable del régimen de Calderón, el Presidente le expulsa del país, refugiándose en México. Figueres funda la Legión del Caribe con miles de exiliados en exilio con la esperanza de volver a Costa Rica como plenarios para combatir los dictadores centroamericanos. Después de varios ataques terroristas de otro de Costa Rica en 1945 y 1946, acudió en petición de ayuda al Presidente Juan José Arévalo de Guatemala, quien tenía el prestigio de líder liberal en toda la región centroamericana. Arévalo desea una nueva Centroamérica en la que no convenga más personas como Figueres. Figueres se convenció de que el primer paso debía darse en El Salvador y Pinaro.

En la primavera de 1948, los grupos contra el fraude electoral degeneraron en un ejército armado contra el Legión del Caribe de Figueres y el Ejército Real a Picado, y el resultado se inclina decisivamente a favor de las revoluciones, con ayuda de Arévalo fue inabordable. Como resultado de las luchas centroamericanas, el sucesor de estado de guerra de grupos del Canal y resultó políticamente que intervinieron unilateralmente para impedir el ataque comunista de Anastasio Somoza. De la misma línea, los Estados Unidos insistieron a Somoza volver a Pinaro, otra región del Caribe norteamericano en San José, Costa, que el gobierno Figueres de Costa Rica tenía derecho a solicitar ayuda de su mayor supuesto enemigo, pero el embajador le recuerda muestra bien consciente política de no intervención. Picado anunció que renunciar a los Estados Unidos, y al embargo de armas a la Legión del Caribe y al derecho de veto de que dependen los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. A Picado no le quedó más remedio que la renuncia. La revolución costarricense se volvió una victoria humana.

Después de la victoria, la Junta de Liberación Nacional de Figueres diseñó varias reformas, declaró la ley de la ley al Partido Comunista y decretó una serie de medidas económicas, como la nacionalización de varias las ferrocarriles y una reforma fiscal que redujeron los impuestos sobre la riqueza. La junta gobierno durante dieciocho meses y

La población centroamericana creció de 1930 a 1950 a un ritmo de 3,5% anual, dando un salto de cuatro millones a casi ocho. Y, por otra parte, su índice de urbanización se acentuó paulatinamente, como muestra el siguiente cuadro:

PAISES	1940	1945	1950	1955	1960	1965
<i>Costa Rica</i>						
Urbana	22,4	25,7	29,0	32,3	37,8	40,8
Rural	77,6	74,3	71,0	67,7	62,2	59,2
<i>El Salvador</i>						
Urbana	24,7	26,2	27,7	29,2	32,6	36,4
Rural	75,3	73,8	73,3	70,8	67,4	63,6
<i>Guatemala</i>						
Urbana	20,6	20,8	24,0	27,8	31,0	34,0
Rural	79,4	79,2	76,0	72,1	69,0	66,0
<i>Honduras</i>						
Urbana	15,3	15,9	17,3	19,5	22,5	26,7
Rural	84,7	84,1	82,7	80,5	77,5	73,9
<i>Nicaragua</i>						
Urbana	26,1	27,1	28,1	30,8	33,9	37,0
Rural	73,9	72,9	71,9	69,2	66,1	63,0 ¹

Van surgiendo nuevos actores sociales tales como los empresarios industriales, los sectores financieros ligados al sistema bancario en expansión, los gestores de la reciente agricultura moderna de exportación y grupos de la clase media urbana en proceso creciente de tecnificación y burocratización.

Estos nuevos actores comienzan a jugar un creciente papel económico y político. Dentro del esquema del desarrollismo, los nuevos grupos de interés anudan pronto una alianza con los sectores terratenientes tradicionales, auspiciada por los militares partida-



¹ Antecedentes cuantitativos referentes al desarrollo de América Latina. ILPES, Santiago, Chile, 1966, recogido por Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. EDUCA, 1977.

rios del nuevo credo desarrollista. Uno de sus puntos esenciales es la intangibilidad de las estructuras agrarias que pudiera agilizar, vía reforma, el acceso a la propiedad de las masas campesinas. El bloqueo agrario impide la entrada en el circuito económico de las grandes masas campesinas y condena a priori cualquier proyecto industrial a subsistir sobre la endeble base de un mercado raquítico. Provocando además una serie constante de conflictos sociales y una erosión continuada sobre los cimientos legitimadores del sistema político.

Ésta es la década del nacimiento de los movimientos sindicales, con un desarrollo especialmente lento, como muestra el porcentaje de sindicación de la población económicamente activa del área en 1960:

PAIS	Población económicamente activa	Sindicados	Porcentaje Sindicación
Costa Rica	398.000	23.000	5,7
El Salvador	807.000	36.012	4,7
Guatemala	1.306.500	16.000	1,2
Honduras	869.400	18.500	3,0
Nicaragua	460.000	16.000	3,4 ²

El tipo de industrialización iniciada, que debía producir una substitución de importaciones, no consigue este objetivo, pues su desarrollo se basa en el uso de componentes manufacturados en el exterior que presionan sobre la balanza comercial y no consiguen reducir los precios.

La única novedad agrícola de la década consiste en la apertura de nuevas líneas de producción con el azúcar, el algodón y la carne. La diversificación del mercado lograda mediante los mismos es reducida.

Las inversiones extranjeras se localizan en nuevos renglones productivos tales como fertilizantes, refineries de petróleo, neumáticos y cámaras, insecticidas, papelerías, bombillas eléctricas, etc. Y se produce una desnacionalización de rubros tradicionales como las fábricas textiles, los productos farmacéuticos y las actividades ligadas al incipiente turismo como hoteles y restaurantes. Pero si la empresa extranjera simplemente reemplaza la importación de productos acabados por la importación de sus componentes semiterminados, o aún sin esta coartada al valor agregado, si producen artículos con precios recargados, pagando salarios corrientes a la fuerza de trabajo nacional, remitiendo los intereses sobre su capital y la renta sobre su tecnología, el país receptor no gana nada.

El Estado comienza a abandonar las pautas de inhibición ante el control hegemónico ejercido tradicionalmente por la oligarquía terrateniente, e interviene de modo creciente en la ordenación del sistema productivo. Encuentra, sin embargo, tres obstáculos en el camino de su mayor protagonismo. En primer lugar, el modelo de dominación oligárquica

² CEA, *América en cifras*. Washington, 1963.

basado en el monopolio de la actividad política y la exclusión del juego a la representación de importantes grupos sociales produce paulatinamente un debilitamiento de la base social del poder político, una erosión de la legitimidad del sistema, a la que no se encuentra más respuesta que el uso creciente de la violencia. El desarrollo económico sin ampliación de la base de participación política acaba por limitar las posibilidades de crecimiento cualitativo y por generar violencia y represión.

Además, la burguesía reclama el protagonismo —y el beneficio— de la expansión económica, pide que sean las leyes de la economía de mercado las que regulen la actividad económica, pero exige al mismo tiempo protección estatal. Es decir, libre empresa pero no en condiciones de libre competencia sino bajo la tutela del Estado para el establecimiento de formas monopolísticas de producción y distribución. Tales exigencias quedan reforzadas por las de los inversores extranjeros, quienes reclaman igualdad de trato con los industriales nacionales.

Finalmente, el progresivo deterioro de los ingresos fiscales limita la participación del Estado en la inversión nacional y provoca al mismo tiempo un creciente endeudamiento interno y externo. El endeudamiento de las finanzas públicas viene a ser como la última prueba de las limitaciones de la intervención estatal en el sistema económico a la vez que un procedimiento substitutivo de una reforma fiscal que, al aumentar la base impositiva y elevar los tipos de imposición, introdujera un elemento de mayor independencia económica a favor del Estado al igual que un reparto más equilibrado de la carga pública.

La dependencia económica de los Estados Unidos alcanzaba límites peligrosos. En 1948, de cincuenta millones de dólares que exportaba Guatemala, cuarenta y cinco los absorbía el mercado norteamericano. Las cifras comparadas de El Salvador eran treinta y cinco millones de un total de cuarenta y seis. Las de Honduras, catorce millones de un total de veinte. Las de Nicaragua, veinte de veintisiete. Y Costa Rica, veinticinco de treinta y dos. El crecimiento en la dependencia de las exportaciones era especialmente dramático para países como Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que históricamente habían encontrado importantes mercados en Europa.

En cuanto a importaciones, en 1948 los Estados Unidos suministraron el 82% a Guatemala (contra un 40% en 1938), el 70% a El Salvador (un 44% en 1938), y casi el 80% a Costa Rica (comparado con un 46% en 1938)³.

Las exportaciones beneficiaban a un reducido sector nacional, y sólo este grupo tenía dinero para adquirir las importaciones. La oficina de investigación de información del Departamento de Estado se preguntaba en 1949 por qué la mayoría de los países latinoamericanos eran incapaces de «establecer sistemas políticos estables y democráticos». Las razones eran: falta de ruptura con el autoritarismo de la era colonial; habilidad de la Iglesia, los militares y los terratenientes para defender sus intereses; fracaso en la integración del indio en la economía de mercado. Más adelante insinuaba retazos de lo que con el tiempo sería conocido como teoría de la «dependencia» al observar que «el

◆
³ Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions*. W. W. Norton and Co. New York, London, 1984.

desarrollo económico de estos países, adaptado al mercado siempre cambiante de los países industrializados del hemisferio Norte y limitado por un sistema de extensas propiedades agrícolas, es de un desequilibrio tal que impide el nacimiento de una clase media económicamente fuerte y políticamente consciente».

* * *

Jacobo Arbenz llega a la Presidencia de Guatemala el 15 de marzo de 1951, a los treinta y siete años, con la promesa de transformar el país «de una nación dependiente con una economía semicolonial en un país económicamente independiente». El 65% del electorado votó por Arbenz, quien contendió contra otros ocho candidatos, entre los cuales Ydígoras Fuentes, ex ministro de Comunicaciones de Ubico.

Arbenz no perdió tiempo. Bajo el Decreto 900, la tierra en barbecho que excediera las 400 hectáreas sería repartida en lotes de 20 y entregada a los campesinos sin tierra, quienes la pagarían, a razón de un 5%, de su producción anual. Los propietarios serían resarcidos con bonos del Estado pagaderos a veinticinco años y con un interés del 3% anual. Para compañías como la UFCO, que disponía de cerca de 300.000 hectáreas, y sólo cultivaba 43.000, el golpe era duro. Además, en 1951 se le intervinieron a la UFCO 10.000 hectáreas como garantía de los pagos atrasados a 4.000 obreros despedidos. Y en 1952, 10 haciendas propiedad de alemanes fueron igualmente expropiadas.

Pronto se lanzaron acusaciones de comunista a Arbenz. El Arzobispo de Guatemala, Mgr. Rossell y Arévalo, le denunció desde el púlpito, y en esta ocasión, la prensa norteamericana reflejó la acusación de un Obispo católico como prueba indudable de la veracidad de los cargos. Era cierto que la mujer de Arbenz, la salvadoreña María Cristina Villanova, era comunista, y que comunistas eran personalidades importantes del gobierno, como José Manuel Fortuny, un líder del PAR, y Víctor Manuel Gutiérrez; que el presupuesto militar fue rebajado de un 17% en tiempos de Ubico, a un 10; que el Partido Comunista, rebautizado en 1952 Partido Guatemalteco de los Trabajadores, comenzó a mostrarse activo en los países vecinos, a través de sus ramas sindicales, apoyando, por ejemplo, la huelga de los obreros bananeros hondureños en 1954; y que el nuevo gobierno se permitió criticar la intervención norteamericana en Corea y empleó al Che Guevara en la reforma agraria.

A pesar de todo, Guatemala, en 1954, no era un Estado comunista, y no era necesario ser comunista para iniciar una reforma agraria que podía contribuir al desarrollo económico y social del país.

Pero en los tiempos más fríos de la guerra fría, el espectro del comunismo tenía una pegada asegurada. El hecho de que el Secretario de Estado, Foster Dulles, fuera socio de la firma de abogados que redactó el contrato de la UFCO en 1936, en tiempos de Ubico, y que su hermano Allen, jefe de la CIA, fuera miembro del consejo de la misma compañía, fue pasado por alto como una casualidad.

La oposición al gobierno aumentaba mientras tanto en el plano interno, pero nunca hasta el punto de que, por sí sola, hubiera sido capaz de derribarle. La CIA contactó entonces a Ydígoras y, ante sus reticencias, al Coronel Castillo Armas, a quien Arbenz

había perdonado un anterior intento de levantamiento ofreciéndole el exilio, generosidad que sin duda lamentaría más tarde. Un embarque de armas checas fue mientras tanto confiscado por el Ejército en Puerto Barrios. Arbenz pensaba al parecer armar milicias de campesinos como contrapeso al dudoso Ejército. Este hecho fue considerado en la prensa norteamericana como la prueba irrefutable del marxismo de Arbenz.

Castillo Armas lanzó una invasión con menos de 200 hombres desde Honduras, pero la CIA había despachado un B-26, que despegó de un aeropuerto de Nicaragua y preparó el terreno. La invasión tuvo éxito porque el Ejército se cruzó de brazos después de haberse negado a la entrega de las armas checas. Arbenz se asiló en la Embajada de Méjico y Castillo Armas se hizo cargo del poder.

El Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era Henry Cabot Lodge, Jr., y aunque Guatemala había pedido una reunión urgente el mismo día de la invasión, el 18 de junio, Lodge no lo convocó hasta el 25, y el Comité de Paz Interamericano no se reunió hasta dos días después de la renuncia de Arbenz, es decir el 29 de junio.

El nuevo Presidente Castillo Armas llegó a Guatemala en un avión norteamericano, y el Embajador Peurifoy comunicaba jactanciosamente al Departamento de Estado que la victoria de la contrarrevolución se había retrasado cuarenta minutos sobre el plan previsto.

Guatemala mostró al resto de los países centroamericanos, y al mundo en general, el escaso margen de autonomía a la disposición de un pequeño país caribeño que pretendía una política exterior con independencia de Washington y que osaba cuestionar los intereses económicos norteamericanos. «Y así, desconociendo completamente la libertad y libre determinación del pueblo de Guatemala, los Estados Unidos añadieron una nueva página a su larga historia de intervenciones en los asuntos latinoamericanos bajo el pretexto de los más nobles ideales, cuando lo que básicamente perseguían era la perpetuación de los intereses económicos norteamericanos a costa de los más pobres de los guatemaltecos»⁴.

En la reunión de la OEA en Caracas en marzo de 1964 Dulles venció las resistencias latinoamericanas a endosar la condena de Guatemala introduciendo en el proyecto de resolución una reforma que hablaba de los peligros procedentes de fuera del hemisferio. Y aun así, Costa Rica se negó a asistir a la reunión y Méjico y Argentina se abstuvieron. Y cuando, después del embargo de armas checas, Dulles intentó montar una intervención latinoamericana bajo la resolución de Caracas, solamente Somoza y Trujillo se declararon dispuestos a salvar Guatemala bajo la batuta norteamericana.

La historia de Guatemala regresaba con Castillo al año 1944, y aunque Eisenhower y Dulles salvaron el sistema temporalmente, la revolución tomaría un sesgo más violento y radical en el futuro.

◆
⁴ Marjorie Melville, *The Politics of Land Ownership*. New York, F. Press, 1971.

Castillo inauguró su régimen anulando el Decreto 900 y devolviendo sus tierras a los propietarios expropiados. Más de 9.000 activistas fueron asesinados durante los primeros meses, miles de campesinos huyeron a través de las montañas hacia Belice, Méjico, Honduras y El Salvador, y cientos de personas buscaron asilo en las Embajadas de Méjico, Costa Rica y Chile. La violencia en el campo alcanzó tal grado que el gobierno tuvo que pedir a los grandes terretenientes que detuvieron la represión campesina pues de otro modo se quedarían sin mano de obra para cultivar sus tierras.

Un Estatuto Político anuló la Constitución de 1945, legalizó el régimen militar de Castillo y declaró fuera de la ley al Partido Comunista. Y un Estatuto Agrario intentó neutralizar políticamente a los campesinos entregándoles las plantaciones confiscadas en 1945 a los alemanes y estableciendo colonias en las regiones remotas de la jungla. La Constitución de 1956, una nueva Ley de Reforma Agraria ese mismo año y una Ley del Derecho al Trabajo fueron los más importantes elementos de maquillaje legal del nuevo régimen. Castillo procedió a gobernar rodeado de un entorno que ha sido descrito como una banda de «corruptos y asesinos»⁵.

En julio de 1957, Castillo sería asesinado. Tras varios meses de forcejeos y una elección altamente fraudulenta Ydígoras Fuentes llegó a la Presidencia. Su mandato fue tormentoso. La violencia comenzó a hacerse endémica y siempre que se convocaban elecciones libres a nivel municipal los candidatos de la izquierda resultaban vencedores, como las celebradas para la Alcaldía de la ciudad de Guatemala en mayo de 1959.

En 1960, Ydígoras ofreció cooperación para el plan de invasión de Bahía de Cochinos, después de que la Revolución Cubana de 1959 se transformara en factor considerable de concienciación revolucionaria entre sectores de la clase media y de los estudiantes de secundaria y universitarios. Un grupo de jóvenes oficiales progresistas se levantó en noviembre de 1960 contra los planes de cooperación en la invasión y, aunque derrotados, se echaron al monte y sembraron las semillas de un movimiento guerrillero que aún hoy en día perdura. El Teniente Marcos Aurelio Yon Sosa formó el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, mientras que Luis A. Turcios Lima creó las Fuerzas Armadas Rebeldes, que colaboraban con el proscrito Partido Comunista de Guatemala.

La oportunidad para el cambio social inaugurada por Arévalo y Arbenz, a pesar de sus defectos, no se volvería a presentar. La vieja oligarquía cafetalera, con sus añadidos extranjeros y su apoyatura militar, se reinstalaba en el poder. Pero en una tierra ensangrentada por la violencia revolucionaria y las bandas asesinas de la contrarrevolución, «Mano Blanca» y «Ojo por ojo».

Una clara señal de alerta al sistema.

La única novedad de la vida económica en *El Salvador* durante la década de los cincuenta consiste en la aparición del algodón, que junto al tradicional café comienza a constituir la base de la economía agroexportadora. En toda Latinoamérica, sólo Venezue-

◆
⁵ This week *Central America and Panama*, 16 June 1980.

la, con su crudo, era tan dependiente como El Salvador de la exportación de un solo producto, el café. Ya en 1948, el Embajador norteamericano, Albert Nufer, había indicado que las tierras fértiles estaban siendo arruinadas por la dependencia del monocultivo, y que el desarrollo del café, algodón y azúcar a tierras que antes producían frijoles y maíz, creaba una creciente desnutrición en el campesinado. Ello, unido al hecho de que la mayoría de la población sobrevivía a nivel subsistencia, creaba condiciones favorables a los disturbios políticos, añadía el Embajador⁶. El país se encontraba así inmerso en una profunda dependencia de alimentos básicos.

La vía de escape del hambre para miles de salvadoreños fue Honduras. Ya en los años treinta, cerca de treinta mil se habían instalado en la zona bananera hondureña, llegando a constituir casi el 10% de los obreros de la UFCO y de la Standard. Para 1949, su número había ascendido a los cien mil, y en los años sesenta, a trescientos mil, casi el 10% de toda la mano de obra hondureña. Tal emigración fue auspiciada a nivel gubernamental salvadoreño y acogida muy favorablemente por la clase terrateniente, pensando que con ella la reforma agraria se convertía en un problema menos acuciante. Es decir, que, en su pensamiento, Honduras se transformaba en sustitutivo de la reforma agraria.

La política desarrollista iniciada por la «revolución» de Osorio no creó fuentes de empleo. Ni la naciente industrialización ni la diversificación agrícola ofrecieron oportunidades. Dos ejemplos lo ilustran. En el campo industrial, antes de la llegada en los cincuenta de la fábrica de zapatos ADOC, propiedad de seis familias de la oligarquía (Palomo, Simán, Dueñas, Hill, Álvarez Meza y Meza Ayau) la industria del zapato ocupaba a miles de personas. ADOC dio empleo a varios cientos pero condenó a la desaparición a miles. En el sector agrícola la expansión del algodón de 9.800 hectáreas en 1942 a 19.000 en 1951 y 43.000 en 1960, tomó lugar a expensas de bosques, dehesas de ganado y agricultura de subsistencia, mientras que miles de aparceros e intrusos eran desalojados de las tierras que les habían permitido sobrevivir⁷.

La teoría del «goteo» del desarrollo careció así de tanto contenido como las promesas del régimen de mejoramiento de los niveles de vida. La agitación laboral y política creció medida que avanzaba la década. Osorio amañó su sucesión a favor de José María Lemus en 1956, quien intentó acabar con la agitación acentuando la represión. Temerosos de que Lemus estaba bipolarizando el país y, con el precedente de la revolución en Cuba en 1959, un grupo de militares y civiles progresistas tomó el poder mediante golpe en octubre de 1960. La nueva junta prometía elecciones libres y la eliminación del analfabetismo, durando exactamente tres meses, pues tal programa alarmaba a los sectores más conservadores. En enero de 1961 tiene lugar el contragolpe que instalaría en el poder un régimen similar al que gobernó Guatemala durante los sesenta.

⁶ Cif. por Walter LaFeber en op. cit.

⁷ Tommie Sue Mongonogery, «El Salvador: The Roots of Revolution», cit. por Steve C. Ropp and James A. Morris en *Central America Crisis and Adaptation*. University of New México Press, 1984.

La década de los cincuenta presencia el fin de la sumisión del campesinado salvadoreño y un fermento de agitación urbana cuya punta de lanza serán los estudiantes y la Universidad. Nueva luz roja que se enciende para la estabilidad del sistema.

En 1950, Honduras era el menos desarrollado y el más tranquilo de los países centroamericanos. Considerado tradicionalmente como el modelo de la «banana republic», a partir de los años cincuenta comienza a recuperar el tiempo perdido bajo el régimen político del «villedismo».

El Presidente Villeda Morales, caracterizaba a su país como el del 70%. 70% de analfabetismo, 70% de hijos naturales, 70% de población rural y 70% de muertes evitables con adecuado tratamiento médico. Los 2,2 millones de habitantes crecían a un ritmo superior al 3% anual, sólo superado en la región por El Salvador. El país disponía aún de grandes zonas deshabitadas, pero escasa o nulamente aptas para la agricultura. Sólo una cuarta parte del territorio se prestaba al laboreo. La pobreza y el primitivismo imperaban, especialmente en el campo, donde sólo uno de cada cuatro campesinos realizaba la labor con un arado. La mortalidad infantil era de las más elevadas del mundo, y más de la mitad de las parejas vivían simplemente «arrimadas».

Para un país semejante, la huelga bananera de 1954 fue como un despertar. A partir de entonces, las estructuras de la sociedad parecieron distenderse, y las tendencias hacia el cambio y la innovación, acentuarse. La liberalización sería conocida como «villedismo», en honor del Presidente Villeda, quien inauguró su mandato en 1957. El Código de Trabajo, el establecimiento de la Seguridad Social, la creación del Instituto Nacional Agrario fueron concreciones del nuevo clima. Villeda se consideraba inscrito dentro del reformismo liberal de Arbenz en Guatemala y de Figueres en Costa Rica. Estos valores le convirtieron en un aliado natural de la Alianza para el Progreso diseñada por John F. Kennedy. Después de la reunión de la Alianza en Punta del Este en 1961, Villeda se tomó tan en serio el nuevo clima que redactó un proyecto de ley de reforma agraria que amenazaba los extensos barbechos de la United Fruit y la Standard Fruit. Inmediatamente, el Embajador norteamericano en Tegucigalpa le pidió a Villeda que no enviara el proyecto al Congreso hasta que el Departamento de Estado diera su vista bueno. Al atreverse a desobedecer la sugerencia, la UFCO comenzó a trabajar al ralenti y a generar despidos. Villeda acudiría posteriormente a Miami a negociar con la UFCO y la reforma agraria no afectaría sus propiedades. La compañía triunfo donde el Embajador y el Departamento de Estado habían fracasado. Honduras, básicamente, continuaba siendo una república bananera⁸.

La huelga de 1954 fue el origen del movimiento sindical hondureño. Inmediatamente surgieron el SITRATERCO, sindicato de asalariados de la Tela Railway Co., creado en agosto de 1954 con el apoyo de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), y el Sindicato de Trabajadores de la UFCO, el SITRASFRUCO, en abril de 1955.

La primera federación obrera del país, la Federación Sindical de Trabajadores Norteños de Honduras, FESITRANH, fue fundada en abril de 1957. En 1958 se funda en

⁸ Walter LaFeber, en op. cit.

Tegucigalpa la Federación Central de Sindicatos Libres de Honduras, FECESITLIH, con el apoyo de la ORIT y de Villeda, como una alternativa a la Federación Sindical del Centro, creada el mismo año y que contaba con el apoyo de la izquierda capitalina aglutinada en el Partido Comunista de Honduras y en la Federación de Estudiantes Universitarios.

La primera central sindical se crearía bajo los auspicios de la ORIT, en 1964, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).

Las primeras organizaciones de campesinos fueron auspiciadas por la Federación de Estudiantes Universitarios y se crearon a nivel de aldea. En 1962 se constituiría una federación de alcance nacional, la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH).

La década de los cincuenta introduce así un elemento de cambio social en un país como Honduras, hasta entonces aparentemente alérgico a toda transformación.

Uno de los rasgos sociales de importancia en *Nicaragua* durante la década consistió en la rápida urbanización de la población. Tal proceso fue en parte inducido por la extensión en el cultivo del algodón, que rentabilizó tierras arrendadas o simplemente ocupadas y desalojó masas campesinas que acudían a la ciudad en busca de sustento. Entre 1950 y 1977 el ritmo de crecimiento demográfico fue del 2,8%, mientras que el de urbanización entre 1950 y 1963 alcanzó el 6,2%. Además, la población se concentró geográficamente en un pequeño triángulo entre las ciudades de Granada, León y la costa del Pacífico, con Managua en el centro, es decir, en el 7% del territorio. Tal urbanización facilitó la movilización social y la apetencia por una mayor participación en la vida política. Al estar ésta monopolizada por la dinastía, Somoza se producía una consecuente frustración entre los círculos políticamente motivados.

Otro rasgo importante fue la progresiva industrialización promovida por el pequeño grupo de empresarios asociados a la familia Somoza o al capital extranjero. Este grupo, que se convirtió en el más firme partidario de la dinastía familiar, realizó beneficios cuantiosos y altos grados de capitalización sobre la base de salarios reducidos y sustitución de importaciones. Pero como la producción industrial no satisfacía las necesidades de consumo del lumpenproletariado, por falta de posibilidades de acceso a la misma, y por otra parte su crecimiento no guardaba proporción con el de la mano de obra urbana, la industrialización produjo un cierto nivel de frustración popular.

El poder somocista se asentaba sobre el control personal de la Guardia Nacional, la manipulación del Partido Liberal Nacionalista, la íntima vinculación con el Gobierno y los intereses norteamericanos, la corrupción, que cumplía el papel que en otras sociedades más abiertas ejerce la cooptación, la represión selectiva contra la oposición no legalizada y el control de la legal. A medida que el aparato estatal se fue perfeccionando y sus capacidades de control social aumentaron, las posibilidades de corrupción y ejercicio de la violencia institucionalizada se fueron igualmente potenciando y la estratificación social acentuando.

El Partido Conservador, que en 1950 intentó apoderarse del poder mediante un golpe que fracasó por el carácter elitista y consecuente falta de arrastre popular de sus

postulados, proporcionaba a la dictadura una apariencia de democracia política mediante una oposición de carácter puramente simbólico.

En 1956, un año antes de las elecciones que Tacho Somoza hubiera sin duda vuelto a ganar, un poeta, Rigoberto López Pérez, hería mortalmente al dictador. El Presidente Eisenhower envió su médico personal al hospital americano de la Zona del Canal, donde, dada la poca atención que su gobierno había dedicado a la dotación hospitalaria en Nicaragua, Tacho Somoza fue transportado en un intento fallido de salvar su vida.

Somoza dejó una fortuna calculada en unos 150 millones de dólares, pequeña cantidad si la comparamos con las fortunas «afanadas» posteriormente por personajes como Baby Doc y Ferdinand Marcos, pero nada despreciable en un país donde la renta per cápita no alcanzaba los 300 dólares. El mayor de sus hijos legítimos, Luis Somoza Debayle, anteriormente Vicepresidente, fue nombrado inmediatamente candidato presidencial del Partido Liberal, resultando, naturalmente, elegido Presidente. Y el hijo menor, Tachito (West Point) no pudo protestar, pues, como regalo de graduación, había recibido el mando de la Guardia Nacional, asistido en tales menesteres por su medio hermano, el Comandante José Somoza.

Los Somozas no tuvieron mayores dificultades en asentar su poder. La pequeña molestia de Emiliano Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Director del Diario conservador «La Prensa», fue pronto superada.

Luis y Tachito compartían con su padre la corpulencia, el libertinaje y la rapacidad, pero carecían de sus «habilidades». Luis no se interesaba excesivamente en la «cosa propia», más que pública, y aflojó un tanto los resortes del mando, lo que no fue obstáculo para que otro Chamorro, Pedro Joaquín esta vez, intentara un golpe en 1959 y tomara la ruta del exilio.

En 1960 se constituiría el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un tipo de reto radicalmente distinto a la tradicional oposición conservadora.

Ulate, desde su toma de posesión de la Presidencia de Costa Rica en noviembre de 1949, disminuía el ritmo de las reformas sociales, pero sin truncarlas. Obsesionado por las finanzas del país, economizó la costosa política de prestaciones sociales y obras públicas de Figueres, redujo los gastos públicos —rebajando su propio sueldo en un 23%— al tiempo que aumentaba los impuestos sobre las exportaciones y mejoraba la función pública. El sistema bancario nacionalizado proporcionaba mientras tanto el mejor sistema de crédito de Centroamérica. Ulate trató con dura mano a los comunistas, suprimiendo todos sus intentos por organizar grupos de trabajadores y empleando la violencia contra los agitadores izquierdistas.

Las relaciones con Nicaragua eran tensas. Ya desde los tiempos de Figueres se había declarado una «guerra» a muerte entre Somoza y Don Pepe, que no amainó con el sucesor de éste. En una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, celebrado en Nueva York a comienzos de 1949, y al que asistieron pesos pesados del calibre de Nelson Rockefeller y Adolf Berle, el Presidente del encuentro, Francis Adams Truslow, diferenció entre una dictadura como la de Somoza, que suponía un gobierno autocrático, y

el «totalitarismo», que significaba un gobierno igualmente autocrático además de un control total de la vida económica y social como, «por ejemplo, el comunismo». Con el totalitarismo no se podía cooperar, pero no había inconvenientes para mantener relaciones normales con las dictaduras. La misma distinción sería empleada casi cuarenta años más tarde por la Embajadora de la Administración Reagan ante Naciones Unidas, señora Jeanne Kirkpatrick.

Don Pepe creó en 1952 el Partido de Liberación Nacional, ganando las elecciones ese mismo año. A pesar de que durante su campaña había atacado duramente la explotación de riquezas nacionales por la UFCO y otras empresas norteamericanas, después de su triunfo se limitó a negociar un nuevo contrato con la bananera que casi triplicaba las ganancias estatales sobre los beneficios de la compañía, además de comprometerse ésta a respetar las reglas nacionales sobre salarios mínimos. Lo que, teniendo en cuenta el entorno geopolítico y la desproporción de fuerzas entre los negociadores, no fue un triunfo escaso. Nunca, es verdad, hubo amenazas de expropiación como las de Arévalo en Guatemala.

A pesar del anticomunismo demostrado por los hechos, el Departamento de Estado nunca las tuvo todas consigo en lo que a clasificación de Figueres se refiere. Socialdemócrata fue el término utilizado para definir su posición política, pero, privadamente, el calificativo usado era el de «oportunista». Por otra parte, el reformismo de Figueres daba preferencias en la financiación al capital nacional, de extracción individual o familiar, dificultando cuanto le fue posible la entrada a las grandes corporaciones extranjeras. Ello representaba un peligro, pues la meta final era claramente la liberación de la dependencia y la potenciación del poder negociador frente al control extranjero, constituyendo por ello un ejemplo nocivo para el resto de los centroamericanos.

De 1953 a 1958, el papel del gobierno en el área económica creció considerablemente a través de la nacionalización de la banca, de las compañías de seguros, de los ferrocarriles, y de la financiación conjunta del sector público y privado de muchas empresas. Una serie de programas de asistencia pública satisfacía la atención médica, la seguridad social, primas de vivienda y otros servicios.

El nivel de participación popular en las sucesivas elecciones alcanzó altas cotas. Los grupos de presión y de intereses se acostumbraron a canalizar sus peticiones y a exigir la satisfacción de sus necesidades particulares. Y las organizaciones populares proliferaron extraordinariamente trabajando por el mejoramiento social en campos como la salud, la nutrición, la educación, la vivienda.

La honestidad en el cómputo de votos se institucionaliza en estos años cincuenta, contribuyendo a asentar una democracia representativa y con un elevado índice de participación.

Durante los últimos años de la presidencia de Figueres abundaron las acusaciones de cohecho, corrupción, tendencias izquierdizantes y demagogia. El Partido de Liberación Nacional se escindió bajo el peso de los cargos, y ello permitió al conservador Partido de Unión Nacional y a Mario Echandi Jiménez, ganar las elecciones de 1958, inaugurándose así una pauta de rotación entre gobiernos progresistas y conservadores.

VII

La receta: integración y desarrollo

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aprietan la garganta.

Vientos del Pueblo me llevan. Miguel Hernández

Los años cincuenta fueron para Centroamérica la señal de alerta. El agotamiento del sistema elitista de conducción de los asuntos públicos y de reparto de los escasos recursos nacionales, reflejo de una paralela erosión del nivel de aceptación popular y de una crisis de legitimidad, se traduce en un progresivo crecimiento del descontento y la protesta popular, quienes a su vez generan un mayor grado de radicalización del modelo autoritario.

La llegada de Fidel Castro al poder en 1959, sus primeros pasos y choques con los Estados Unidos, las dificultades iniciales y tensión posterior, significaron para una parte considerable de la juventud estudiante y fuerzas sociales progresistas de Centroamérica algo así como una catarsis de sus históricas frustraciones. Fidel Castro se atrevió a realizar la ambición secreta que vive en el corazón de cada latinoamericano: desafiar a los Estados Unidos, adquirir cotas de mayor independencia en sus tratos con «los gringos», hacerles incluso morder el polvo en situaciones límite. Todavía Cuba no había intercambiado la antigua dependencia de los Estados Unidos por la futura «solidaridad internacionalista» con la Unión Soviética. Y el ejemplo de Fidel, el nombre de Fidel, circulaba en términos encendidos en boca de un considerable número de centroamericanos.

Se pensó entonces que la respuesta al desasosiego popular debía efectuarse a través de la magia del desarrollo, del crecimiento económico que, como una cascada, iría irrigando los diferentes escalones sociales y repartiendo beneficios. Los norteamericanos habían bautizado este fenómeno de reparto cuasinatural como la teoría del goteo. Denominación acertada, pues a los últimos escalones de la pirámide social les llegaba un caudal de agua tan escaso que bien podía llamarse gota.

1. El modelo de desarrollo «aditivo»

Los países centroamericanos experimentaron a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente a lo largo de los sesenta y de los setenta, el período de crecimiento económico más importante de su historia. El producto interno bruto creció un 5,3% anual en términos reales entre 1950 y 1978 en el conjunto de la región¹,

¹ *La Crisis en Centroamérica: orígenes, alcance y consecuencias.* Documento preparado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, México, 27 de mayo de 1983.

correspondiendo las tasas más altas a Nicaragua y Costa Rica y las más bajas a Honduras. El ingreso real por habitante se duplicó prácticamente durante este período.

Todos los países de la región supieron aprovechar la favorable conyuntura internacional de crecimiento sostenido: el valor de sus exportaciones extrarregionales se multiplicó por trece entre 1950 y 1978, pasando de 250 a 3.200 millones de dólares. El auge del sector exportador tradicional creó además la holgura suficiente para adoptar el libre comercio recíproco intrarregional. La industrialización se constituyó en un segundo foco dinámico. Y un intenso proceso de modernización de la región creó patrones de consumo en los estratos superiores de la población que imitaban las de sociedades más avanzadas, acentuando la demanda de bienes importados.

A pesar de todo, durante este período de crecimiento y transformación persistió la característica esencial de las pequeñas economías agroexportadoras centroamericanas: la dependencia exterior. El sector externo condicionaba el comportamiento económico global de la economía.

La influencia del sector externo no se limitaba al ámbito económico. La explotación de uno o dos productos básicos de exportación influyó decisivamente en la división del trabajo, debido al carácter intensivo y estacional del uso de la mano de obra para dichos cultivos, determinando el carácter dual e interdependiente de la agricultura de exportación y la de subsistencia, lo que a su vez explica en gran medida la desigual estructura de distribución del ingreso.

Se produjo además una relación simbiótica entre los grupos económicos dominantes, agroexportadores y comerciantes, y los distintos gobiernos, consolidándose así los sistemas políticos autoritarios y no participativos.

Mientras el producto interno bruto de Centroamérica pasó de 1950 a 7520 millones de dólares (precios de 1970) entre 1950 y 1980, la población creció de ocho a más de 20 millones de habitantes. Cualitativamente hablando, aparece un estrato de ingresos medios atribuibles en parte a la progresiva urbanización —16% en 1950 comparado con un 43% en 1980—, se refuerza la importancia de las actividades secundarias —del 14,6% al 24,1% entre ambos períodos— el aparato productivo se moderniza y diversifica, al tiempo que las mejores comunicaciones integran en mayor medida las distintas regiones geográficas de los cinco.

Éstas fueron las únicas transformaciones toleradas por quienes, al amparo del patrón agroexportador, obtuvieron el poder económico y el control político. Por ello las nuevas capas económicas y sociales se fueron yuxtaponiendo a las antiguas dentro de un proceso de cambio y modernización que no amenazó, en su esencia, la estructura económica preexistente². Al no quedar alteradas las estructuras anteriores el desarrollo adquirió un carácter «aditivo».

El progreso económico causó un cambio social importante, el ascenso de grupos en la escala de ingresos, y la formación de reducidas clases medias, pero el mantenimiento del

² CEPAL, doc. cit.

patrón histórico de desarrollo determinó un avance lento y titubeante en las instituciones políticas y en el grado de participación popular. El creciente foso entre el mayor grado de desarrollo económico y el reducido índice de participación política constituye sin duda una de las claves de la posterior inestabilidad centroamericana.

En lugar de transformaciones en profundidad, los gobiernos recurrieron al expediente de los substitutivos. El financiamiento externo substituyó la reforma de la base impositiva. El reparto de tierras del Estado, en programas de «colonización», substituyó la reestructuración de los sistemas de tenencia de la tierra. Y el ahorro externo substituyó los deficientes mecanismos de captación del ahorro nacional.

La capacidad de participación de los Estados en el circuito económico fue muy reducido al no crecer la captación de ingresos fiscales al mismo nivel que el producto interior bruto. Por ello, el crecimiento del gasto público se financiaba en proporción creciente acudiendo al endeudamiento, especialmente de origen externo. La participación limitada del sector público en el producto interior bruto centroamericano encajaba con la posición «antidirigista» de los grupos dominantes. En los años cincuenta y sesenta, el Estado comenzó a controlar actividades como la generación y distribución de electricidad, las comunicaciones telefónicas, el transporte ferroviario y el manejo de los puertos, al tiempo que se creaban bancos públicos de fomento e instituciones de regulación de precios de productos básicos. Se evitó cuidadosamente la participación del sector público en actividades que interesaran a la iniciativa privada. La principal excepción sería el sistema de intermediación financiera costarricense.

Las tradicionales actividades agroexportadoras carecían de un grado importante de integración hacia adelante o hacia atrás, disminuyendo en consecuencia su contenido de valor añadido. Las nuevas exportaciones —el algodón, el azúcar y la carne— reiteraron el antiguo patrón por su escaso eslabonamiento con otras actividades productivas. Es decir, los productores tradicionales se diversificaron poco y el Estado participó escasamente en el excedente generado por ellos. El cambio resultó insuficiente para responder a las expectativas crecientes.

Pese al dinamismo económico de la región en los treinta años de la posguerra, no se mejoró significativamente la distribución del ingreso ni se redujo el número de centroamericanos en situación de pobreza extrema. Más bien, el crecimiento económico profundizó el foso entre los grupos extremos en la escala de ingresos, de tal modo que a finales de los setenta el 20% de la población más pobre disponía de un 4% del ingreso nacional mientras en el otro extremo, el 20% de los grupos de mayores ingresos obtenía más del 55%. En cifras absolutas, del total de más de 20 millones de centroamericanos (1980), unos 13,2 millones (64%) vivían en estado de pobreza, y más de 8,5 millones (41%), ni siquiera disponía de ingresos suficientes para cubrir el valor de la canasta mínima de alimentos que se considera necesaria desde el punto de vista biológico-nutritivo³. La situación, mucho más grave en el área rural que en la urbana, presentaba notables diferencias de país a país. En Costa Rica menos del 25% vivía bajo el umbral de la pobreza, mientras que en Guatemala esa proporción pasaba del 70%.

³ CEPAL, doc. cit.

El estilo de desarrollo fue, pues, concentrador y de carácter más bien excluyente favoreciendo a los diferentes estratos de forma notoriamente desigual y acentuando el grado de concentración de los ingresos. Este patrón excluyente no se limitó al ámbito económico. El espacio político se caracterizó por la ausencia de una amplia participación popular y la virtual exclusión de las mayorías, especialmente las campesinas, del quehacer público, reservado a un reducido grupo de profesionales inamovibles y omnipresentes. Ni la industrialización, ni la urbanización, ni el crecimiento económico, modificaron el carácter esencialmente agrícola de las sociedades centroamericanas ni el papel de observadoras pasivas de sus masas rurales.

La falta de participación de las nuevas clases sociales emergentes contribuía a agravar las tensiones entre el desarrollo social y el escaso o nulo cambio en la esfera política.

Debemos así concluir que la interacción política en Centroamérica durante los años sesenta y setenta fue elitista, y no supuso la eliminación gradual de los factores de autoritarismo ni la satisfacción de las legítimas aspiraciones de participación de los núcleos excluidos de los beneficios del desarrollo. Costa Rica fue, una vez más, la excepción.

2. La ampliación del mercado mediante la integración

El hecho más sobresaliente en la región centroamericana durante la década del sesenta lo constituye el proyecto de Mercado Común y la política integracionista.

Cuando a partir de 1951 los países centroamericanos se plantearon la posibilidad de ampliar los vínculos económicos, teniendo presente su deficiente participación en el mercado mundial y la defectuosa constitución de su mercado local, las motivaciones eran fundamentalmente de política económica. No se pensó en la reconstitución de la vieja República Federal.

El sentimiento unionista, revitalizado después de la Segunda Guerra Mundial, favoreció la firma por parte de los cinco países del istmo de la Carta de San Salvador, el 14 de octubre de 1951, creando la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA. La coincidencia se encontró en aspectos generales tales como el propósito de buscar solución conjunta a problemas comunes y promover el desarrollo económico, social y cultural mediante la acción solidaria.

La política integracionista de desarrollo responde a una visión moderna de los grupos sociales que emergen más acusadamente en la década del cincuenta, especialmente los ligados al sector comercial-financiero y al comercial-industrial, que comienza a compartir el liderazgo y la dirección política del Estado junto a la tradicional burguesía agrario-exportadora⁴. El proyecto de integración y sus proyecciones desarrollistas no correspondía a la tradición cultural y política de la oligarquía primario-exportadora, cuya gestión se



⁴ Edelberto Torres Rivas, *Interpretación del Desarrollo social centroamericano*. EDUCA, 1971.

había circunscrito tradicionalmente al mejoramiento de precios y ensanchamiento de cuotas para sus productos.

Corresponde a la CEPAL el mérito de haber inspirado el proceso integrador. En 1951, a solicitud de los gobiernos centroamericanos, aprobó la Resolución 9-IV, que constituye el fundamento de la posterior integración. Hasta 1957 sólo actuaron mecanismos diplomáticos y asesoría técnica en estudios preliminares, pasándose más tarde a una etapa de tratados bilaterales de comercio que condujeron, en 1958, a la subscripción del primer instrumento multinacional de comercio. Bajo el nombre de Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración, liberó los productos originarios de la región conforme una lista anexa y señaló un período de diez años para completar la constitución de una Zona de Libre Comercio. El proceso culminó con la firma del Tratado General de Integración Económica que estableció el libre comercio como regla general y creó los organismos de gestión: el Consejo Económico, de máximo nivel decisorio; el Consejo Ejecutivo, de nivel técnico y la Secretaría Permanente (SIECA), encargada de coordinar y vigilar la aplicación de los tratados y compromisos asumidos. Posteriormente se crearon el Banco Centroamericano de Integración Económica, con sede en Tegucigalpa, con aportaciones de los gobiernos de la región, BID y algunos bancos europeos; el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, la Escuela Superior de Administración Pública, el Consejo Monetario y otros organismos sectoriales.

Se intentó que el proceso de integración económica se realizara a través de los mecanismos de sustitución de importaciones y, dentro de ellas, de los bienes de consumo inmediato en una etapa de «desarrollo hacia adentro». La nueva zona de libre comercio de manufacturas de consumo inmediato consolidará a la burguesía local como clase, pero aliada y penetrada por el capital extranjero, de tal modo que la situación histórica de dependencia no queda debilitada.

Los empresarios salvadoreños destacaron entre los centroamericanos como los más capitalizados y emprendedores, en parte por el tradicional dinamismo de su exportación, la agudísima desigualdad en la distribución del ingreso y la política de creación de una infraestructura básica abordada por el Estado desde 1948. Las ganancias generadas por la exportación del café y el algodón, que se quedaban en gran parte en el extranjero, comenzaron a orientarse hacia la inversión manufacturera y el ahorro interno, produciéndose un cierto elemento de ósmosis entre el capital agrario y el nuevo capital industrial. Mientras que el empresariado guatemalteco también supo reconvertirse, Honduras y Nicaragua, que nunca contaron con una agricultura de exportación, se resintieron por la falta de grupos que consolidaran el sistema interno.

Todo el esquema de la integración adolecía de una debilidad congénita: no puede haber integración supranacional con estancamiento nacional. Y no puede haber dinamismo de las economías locales sin introducir una serie de transformaciones en su estructura social, política y económica. Los grupos dirigentes centroamericanos creyeron evitar el cambio a través de la experiencia desarrollista del Mercado Común⁵. Con lo cual sólo lograron crear un mercado de «mendigos» a escala centroamericana.

◆
⁵ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

El comercio intrazonal creció entre 1950 y 1968 de 8,6 millones de dólares, es decir un 4% del comercio centroamericano, a 258,3 millones, que representaba un 27,3% de la totalidad del comercio de la zona. Pero Centroamérica seguía exportando casi las mismas cosas y en la misma proporción que antes de la integración. El 98,2% en 1900 y el 94,8% en 1965 correspondía a materias primas y alimentos de origen agrícola.

La tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 1960 a 1968 alcanzó un 6%, mientras que la producción industrial aumentó a una tasa del 9%. Nicaragua creció a partir de 1961 al 8,1%, Honduras al 7%, Guatemala y El Salvador crecieron de forma sostenida al 6% anual. Costa Rica, con un producto per cápita del 33% superior a sus vecinos, tuvo una tasa de expansión del 65 al 68 del 8%.

La participación del capital extranjero en la producción industrial fue muy importante, aprovechando fácilmente las ventajas ofrecidas por la ampliación del mercado, las medidas de estímulo y la protección arancelaria. Entre 1950 y 1967, Centroamérica recibió 614,8 millones de dólares de inversión extranjera, la mayor parte de origen norteamericano, de los cuales Guatemala 177, Honduras 152, Costa Rica 111,8, Nicaragua 91,4 y El Salvador 80,7.

Los planes de industrialización se basaron en el mecanismo aditivo consistente en sumar cinco mercados diminutos, y el consumo de productos manufacturados se limitó a las áreas urbanas y ciertas regiones de reciente modernización. En su conjunto, el Mercado Común no superó la cifra de tres millones de personas de eventuales consumidores.

El objetivo de creación de empleo tuvo resultados muy modestos. Mientras que la tasa de crecimiento demográfico se situó en el 3,5%, una de las más altas del mundo, el número de personas empleadas en el sector manufacturero pasó del 10,8% en 1950 al 11,4% en 1965, mientras que la tasa de desocupación para toda la región aumentó en el mismo periodo del 1,4 al 5,1%.

En cuanto a elevación del nivel de vida de la población, segundo objetivo del Mercado Común, los promedios nacionales esconden una brutal asimetría. Se calcula que durante estos años, en El Salvador, el 8% de la población recibió el 50 del ingreso total, lo que suponía que un campesino sobrevivía con 118 dólares anuales. Costa Rica tenía 352 dólares per cápita, el ingreso nacional más alto de la región, contra 194 dólares para Honduras en 1965, y 286 para Guatemala. Se ha calculado que, durante la década del sesenta, el 1% de la población centroamericana absorbió el 25% del PIB, el 25% obtuvo un 50% y el 74% restante consiguió a duras penas obtener un 25%⁶.

Respecto al tercer objetivo comunitario, la disminución de la dependencia externa, el tipo de industrialización iniciado se basó en la utilización de componentes producidos en el extranjero, con un creciente contenido importado de la inversión, lo que produjo una substitución de importaciones antiguas por nuevas, sin disminuir los precios de las manufacturas así «nacionalizadas». Y la tendencia decreciente de los precios de productos

⁶ Edelberto Torres Rivas, *op. cit.*

agrícolas aumentó el déficit comercial de 190 millones de dólares en 1965 a 284 en 1967. La financiación de este déficit se operó con empréstitos e inversión extranjeras, pasando la deuda externa de 120 millones de dólares en 1950 a 430 en 1966. Según informe del BIRF, la carga de la deuda pública externa como porcentaje del PIB en la región fue la siguiente durante dos años:

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Nicaragua	Honduras
1967	9,1	2,6	9,6	6,0	2,0
1968	10,1	2,8	7,4	6,9	1,7

La industrialización abordada por la región supuso una cierta diversificación económica, pero no se convirtió en pivote de un crecimiento autosustentado ni generó una corriente de modernización hacia el sector agrícola, verdadero «talón de Aquiles» del sistema. Qué duda cabe que el Mercado Común produjo un cierto crecimiento económico, pero sin equivalente desarrollo social ni alteración de las pautas de reparto de los nuevos beneficios. Los pequeños estratos superiores tenían la posibilidad de comprar productos que antes eran importados. Pero el Mercado Común tenía muy poco que ofrecer a la mayoría de la población. Ni siquiera empleo, pues las nuevas industrias suponían concentración de capital y uso limitado de mano de obra.

Aunque los planteamientos iniciales preveían un reparto equilibrado en el asentamiento de las nuevas industrias, Guatemala y El Salvador partían con la ventaja de una mejor infraestructura y atrajeron una importante cuota de las nuevas inversiones. Este factor produjo irritación y constantes quejas de los menos favorecidos, en especial Honduras. Por otra parte, la emigración de salvadoreños hacia tierras hondureñas alcanzaba a finales de la década la cifra de 300.000 personas, instaladas en oficios artesanales, oficios de cierta especialización y el campo. Debido a la presión de sus agricultores, el gobierno hondureño decidió iniciar una reforma agraria y disponer de la tierra propiedad de los salvadoreños. La élite salvadoreña, que había encontrado en tal emigración un sustituto de la reforma agraria, alcanzó niveles de paroxismo cuando miles de salvadoreños comenzaron a regresar al país procedentes de Honduras. Éste fue el trasfondo de la mal llamada «guerra del foot-ball» en 1969, que en tres días causó la muerte a cuatro mil personas, la mayor parte campesinos hondureños. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas, Honduras prohibió la entrada de mercancías o vehículos salvadoreños, se negó a suscribir uno de los convenios necesarios para el funcionamiento de la integración económica y decidió organizar su comercio exterior a base de acuerdos bilaterales, retirándose de los organismos comunitarios.

Éste fue el fin del Mercado Común centroamericano y el comienzo de una rivalidad entre El Salvador y Honduras que aún hoy perdura.

3. Desarrollo: la Alianza para el Progreso

A los dos meses de su instalación en la Casa Blanca, John F. Kennedy anunció la Alianza para el Progreso. De 1960 a 1970, cien mil millones de dólares serían invertidos en América Latina, de los cuales veinte mil millones serían norteamericanos y los ochenta mil

restantes serían movilizadas por los propios latinoamericanos. Con el fin de rentabilizar la inversión se introducirían reformas fiscales, agrarias y socioeconómicas. Se aspiraba a un crecimiento anual del PIB del 5,5%, lo que suponía un incremento neto de los niveles de vida del 2,5, teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico era del 3% anual. Kennedy, en su característico estilo, lanzó el proyecto con las siguientes palabras: «Transformemos el hemisferio de nuevo en un vasto crisol de ideas y esfuerzos revolucionarios.»

Los orígenes de la Alianza estuvieron muy influenciados por el contexto internacional: la toma del poder por Fidel Castro en 1959, la negativa de Khrushchev a aceptar la validez de la doctrina Monroe en 1960 y las declaraciones soviéticas de 1961 en el sentido de que las revoluciones del Tercer Mundo serían inaplazables en el futuro. Quizá por ello la Alianza adquirió desde sus comienzos una mentalidad antirrevolucionaria al tiempo que un objetivo desarrollista. Las urgencias revolucionarias recibirían el tratamiento evolutivo del desarrollo económico. Y las fuerzas democráticas de la izquierda que se habían ido acuerpando, tales como la Democracia Cristiana o la Social Democracia, serían los principales aliados de la Alianza.

Los detalles operativos aliancistas fueron diseñados en agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay. Y una de sus primeras decisiones consistió en un plan quinquenal de estabilización del precio del café, puesto en marcha en 1962.

Un mes más tarde de que Kennedy anunciara el programa aliancista, en marzo de 1961, ocurre Bahía de Cochinos, y en octubre de 1962, la crisis de los cohetes de Cuba. La ayuda militar norteamericana a Latinoamérica aumenta considerablemente, contingentes cada vez mayores de oficialidad latinoamericana acude a la Escuela de las Américas en la Zona del Canal de Panamá, y las fuerzas nacionales de policía, bajo la supervisión de la Agencia para el Desarrollo Internacional norteamericana (AID), aprendieron métodos de lucha antisubversiva. De 1961 a 1966, los militares derrocaron nueve gobiernos latinoamericanos y la Escuela de las Américas se ganó el nombre de Escuela de los Golpes.

En 1963 y bajo auspicios de Washington, los centroamericanos crean el Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA) con el objetivo de preservar la seguridad de la región. Sólo Costa Rica se negó a integrarse en el nuevo organismo.

Mientras tanto, la clase media latinoamericana, en la que la filosofía de la Alianza pensaba encontrar su más firme defensor, se iba radicalizando. El lenguaje del Presidente norteamericano fomentaba la confusión. En 1962, Kennedy declaraba: «Quienes imposibilitan la revolución pacífica hacen inevitable la revolución violenta.» La revolución pacífica era un concepto nuevo en América Latina, donde revolución siempre significó tiros y sangre. En 1964, la CIA indicaba que la Alianza estaba propiciando un polvorín en Latinoamérica, ya que los grupos organizados estaban exigiendo a unas estructuras atrasadas e injustas cambios positivos y radicales en un breve plazo, los partidos políticos y los candidatos que alcanzaban el poder mediante elecciones, e incluso aquellos que se apropiaban del poder por métodos extralegales, prometían lo imposible y, debido a la tradición paternalista latinoamericana, la masa desengañada por las promesas no cumplidas arremetía contra los Gobiernos en una loca búsqueda de víctimas propiciatorias.

Un hecho es cierto. Mientras que la Alianza prometía la «revolución», los Estados Unidos entrenaban a los Ejércitos y policía latinoamericanos para impedir revoluciones⁷.

Con la llegada a la presidencia de Lyndon B. Johnson en noviembre de 1963, las contradicciones de la Alianza y su costo económico eran evidentes. Johnson nombró a Thomas Mann Director de la Alianza con el objetivo de dismantelar y vaciar de contenido sus programas. El Congreso destinó 500 millones de dólares a la Alianza en 1967, 469 en 1968 y 336 en 1969⁸. Mann y Johnson borraron dos de los objetivos de la Alianza, la democratización y el cambio estructural, concentrándose en una línea de desarrollo económico y anticomunismo. Se regresaba así a los tiempos de la Administración Eisenhower, con la diferencia de que se habían despertado muchas esperanzas, realizado numerosas promesas y entrenado las fuerzas del orden en contrainsurgencia. Bien es verdad que las necesidades de Vietnam crecían desmesuradamente en los mismos años.

En la primavera de 1965, Johnson recordó a los países caribeños y centroamericanos que la diplomacia de la cañonera y el recurso a los «marines» no eran cosa del pasado. La República Dominicana recibió la visita de 22.000 soldados norteamericanos, y los países de la zona, el anuncio de que los Estados Unidos no permitirán cambios radicales. El Ejército latinoamericano, reclutado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), contaba con fuerzas de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras que Argentina, Colombia y Venezuela se negaron a participar. Cuando catorce años más tarde Carter intentó reclutar una fuerza de la OEA para impedir la consolidación sandinista en el poder, ningún país latinoamericano aceptó la invitación.

A finales de los sesenta, la Alianza había quedado reducida a colocar el énfasis en la inversión privada, al apoyo indiscriminado a los militares que mantenían el orden en las cada vez más agitadas sociedades latinoamericanas y a promesas que aumentaban las expectativas. El entonces Senador por Nueva York, Robert Kennedy, resumió así la situación: «Estos pueblos latinoamericanos no aceptarán esta clase de existencia en la próxima generación. Nosotros tampoco lo aceptaríamos. Se aproxima una revolución, una revolución que será pacífica si somos suficientemente sabios; incruenta si nos preocupamos suficientemente; afortunada si tenemos suerte. Pero una revolución está llegando, nos guste o no. Podemos influenciar su curso. No podemos alterar su inevitabilidad»⁹.

◆
⁷ Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions. The United States in Central America*. W. W. Norton Company Inc. New York London, 1984.

⁸ Walter LaFeber, *op. cit.*

⁹ Walter LaFeber, *op. cit.*

VIII

Seguridad Nacional o Seguridad Ciudadana

Es más,
estáis de acuerdo con los asesinos,
con los jueces,
con los legajos turbios de los ministerios,
con esa bala que de pronto puede hacernos morder el sabor
de las piedras,
esas celdas oscuras de humedad y de oprobio
donde los cuerpos más útiles se refuerzan o mueren.
Estáis,
estáis de acuerdo,
aunque a veces algunos de vosotros pretendáis ignorarlo.

De un momento a otro. Rafael Alberti

La guerra entre Israel y Egipto, en octubre de 1973, cuadruplicó los precios del petróleo en cuestión de meses. Tal aumento tuvo un efecto devastador en Centroamérica. La factura petrolera de la región, 189 millones de dólares en 1973, saltó a 1.500 en 1980. La balanza comercial de los cinco durante los cuatro años siguientes al aumento refleja el impacto:

(En millones de dólares)

	1972	1973	1974	1975
Costa Rica	-100	-112	-251	-217
El Salvador	+ 12	- 44	-134	-104
Guatemala	- 12	+ 8	-103	-112
Honduras	- 9	- 36	-107	-135
Nicaragua	- 6	- 37	-257	-108

Las élites centroamericanas intentaron entonces diversificar su red de intercambios y penetrar áreas poco explotadas hasta entonces, tales como el Japón, Argentina, Europa, Méjico y Venezuela, nuevos millonarios del petróleo.

El ejemplo de la OPEC estimuló a los centroamericanos productores, menos a El Salvador, a establecer un cartel en 1974 junto con Panamá, Colombia y Ecuador. La UPEB aspiraba a repetir con el banano la historia de alzas de la OPEC con el petróleo. O, al menos, a impedir que de cada dólar consumido por los mercados norteamericanos y europeo, sólo 17 centavos fueran para el país productor. La UPEB se proponía como primera medida establecer un impuesto a la exportación de 1 dólar por cada caja de bananos exportada de 40 libras.

Pero el comercio del banano, la fruta con mayo cifra de negocios en el mundo, estaba monopolizada por 3 compañías norteamericanas: la United Brands, la Standard Fruit y la Del Monte Corporation. Éstas se negaron a negociar un plan de fijación de precios con la UPEB. Ecuador pronto renunció al establecimiento del nuevo impuesto. Daniel Oduber, Presidente de Costa Rica, se conformó con un impuesto de 25 centavos por caja. Y en 1975, las investigaciones posteriores al suicidio en Nueva York del Presidente de la United Brands descubrieron que la compañía había pagado 1.250.000 dólares al Presidente de Honduras, General López Arellano, para que todo siguiera igual. Todo un «banana gate». López Arellano dimitió. Ecuador se negó a sumarse al coro que pedía la nacionalización de las tres transnacionales del banano. Guatemala y Nicaragua también se echaron para atrás. El cartel de la UPEB se esfumó. Hasta 1981 no se establecería el ambicionado impuesto de 1 dólar sobre caja exportada. Y sólo en un país, Costa Rica.

La diversificación no tuvo éxito. Más de la mitad de las exportaciones de la región se encaminaban a los Estados Unidos. Y la industrialización, que tantas esperanzas había suscitado como elemento reductor de importaciones, incrementaba diabólicamente éstas a través de la forzada compra en el exterior de componentes esenciales de las nuevas industrias.

Centroamérica parecía destinada por fuerzas superiores a transitar permanentemente por el círculo de la dependencia. Y a escoger entre la doctrina de la Seguridad

Nacional, operante y efectiva en Sudamérica, con su secuela de inseguridad ciudadana, y el respeto a los derechos humanos como medio de lograr un Estado de dignidad nacional.

Conexos entre sí, examinaremos brevemente dos cuerpos de doctrina que dominaron el debate centroamericano de los setenta, y una línea de conducta a la que Washington comenzó a prestar atención a partir de 1977. Nos referimos a la Doctrina de la Seguridad Nacional, al respeto a los derechos humanos propugnado por el Presidente Carter, y a la Teología de la Liberación.

I. La Doctrina de la Seguridad Nacional

La Doctrina de la Seguridad Nacional surge en Latinoamérica en la intersección de un nacionalismo exacerbado con una ideología tecnocrática y un pensamiento católico integrista, y se manifiesta como un cuerpo ideológico y político que aspira a establecer un modelo de liderazgo nacional para el cual seguridad y desarrollo son las dos caras de la misma moneda. Sólo las Fuerzas Armadas poseían la visión globalizadora que permitía integrar mundos tan diversos como la protección frente a la agresión y la promoción del desarrollo. Fuerzas Armadas que, además, ocupaban el poder en la mayoría de los países latinoamericanos.

Las fuentes ideológicas más remotas de la DSN se encuentran en el pensamiento geopolítico de R. Kjellen, F. Ratzel y K. Haushofer. En el modelo organicista aplicado a la sociedad por Herbert Spencer y Emile Durkheim, punto de partida de la Sociología Funcionalista. Y en las teorías filosófico-jurídicas de C. Schmitt de los años veinte. La primera experiencia en el continente latinoamericano la encontramos a raíz del golpe militar de Brasil en 1964.

En toda sociedad se encuentran elementos que contribuyen a mantener su estabilidad, que son funcionales, y elementos anómalos o patológicos que la alteran y son por tanto disfuncionales. Estos últimos son «desviados», pues han roto con las normas del grupo social, y deben ser «tratados» de tal modo que acepten jugar de acuerdo con las reglas del juego. En caso de rechazo, y si ello es necesario, debe procederse a la «extirpación».

Quien se presente como una amenaza a la estabilidad del grupo debe ser considerado como enemigo, y en la cruzada nacional contra el enemigo no cabe la disidencia. Toda la vida institucional debe quedar supeditada al imperativo de la seguridad. El poder civil debe por ello subordinarse al militar. La autoridad judicial no debe ser obstáculo para la extirpación de los elementos disfuncionales. Y las antiguas fronteras geográficas nacionales deben ser substituidas por unas nuevas fronteras ideológicas imprecisas y fluctuantes, en función de las modalidades de ataque del enemigo.

Para ser efectiva, la DSN debe enriquecerse mediante un proceso de socialización entre los políticos, empresarios y población en general. Por ello es preciso controlar los medios de transmisión de valores y difusión ideológica tales como la escuela, la iglesia, el sindicato, la cooperativa, la familia, los partidos políticos. Se debe fomentar la disposición innata de la ciudadanía a defender la seguridad de su grupo fomentando la delación de

cualquier elemento o movimiento «subversivo» mediante un sabio uso de medidas dosis de miedo, como elemento que invita a la «cooperación», y de terror, como mejor aliado de la disuasión. Nadie puede quedar inmune al miedo o al terror. La DSN debe conducir deliberada e irremediamente a una ciudadanía insegura, a veces aterrorizada.

La DSN nació en las álgidas temperaturas de la guerra fría que se instaló tras la Segunda Guerra Mundial. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947, condiciona la formación profesional de las Fuerzas Armadas latinoamericanas instruidas en Panamá o en los propios Estados Unidos. Los militares no sólo aprendían nociones militares, sino enseñanzas de sociología, economía, gestión empresarial, planificación. Se les preparaba conscientemente para asumir un papel rector en la dirección de los asuntos nacionales. Y es bien sabido que ninguna sociedad nacional puede progresar sin un mínimo de orden y estabilidad, pues sólo bajo tal clima se puede luchar contra el subdesarrollo, explotado y manipulado por el «enemigo interno», quinta columna de la subversión marxista.

Tales son los rudimentos de la DSN, que comienza a ser interiorizada por los militares sudamericanos en los sesenta y que se instala en Centroamérica al final de los sesenta.

El Presidente Nixon y su consejero áulico para asuntos latinoamericanos, Nelson Rockefeller, llegaron pronto a la conclusión de que la fuerza esencial para un cambio social «constructivo» en el mundo hispano era la fuerza armada. Y que Estados Unidos debía tratar realísimamente con los regímenes militares imperantes en toda Centroamérica, salvo Costa Rica. La doctrina Nixon de 1969 anunciaba que los Estados Unidos no podían seguir actuando como sheriff del mundo y que seleccionarían aliados para actuar como policía local.

Los militares centroamericanos instalados en el poder no cabían en sí de gozo. El armamento les llegaba generosamente de los Estados Unidos, y el honor y las prebendas copiosamente de sus propios países. Lo mejor de ambos mundos. Hubo militares que exageraron la nota. Como el número tres salvadoreño que en 1976 fue sorprendido en Nueva York tratando de vender 10.000 ametralladoras a los gangsters locales¹.

2. Los derechos humanos de Carter

Cuando Jimmy Carter ocupó la Presidencia, en 1977, intentó promocionar un trato preferencial para aquellos países que respetaran los derechos humanos individuales, manejando para ello el instrumento de la ayuda. Tal doctrina, solicitada por contradictorias consideraciones morales y de orden estratégico, no podía ser de aplicación fácil. Cuando el Departamento de Estado informó de graves violaciones de derechos humanos en 1977 en El Salvador y Guatemala, ambos países —al igual que Brasil, Argentina y Uruguay— indicaron que no querían más ayuda militar norteamericana y comenzaron a

¹ Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions*. W. Norton and Co. London, New York, 1984.

aprovisionarse en Europa Occidental e Israel. Pero, además, como la política de exigencia de respeto a los derechos humanos cuestionaba la legitimidad de ambos gobiernos, éstos respondieron aumentando el nivel de represión preventiva contra las organizaciones populares que podían erosionar aún más tal legitimidad.

La política de Carter, para ser consecuente, debiera haber contribuido al aislamiento de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, cuya brutalidad contribuía a la radicalización de las aspiraciones de cambio y cuya represión añadía leña al fuego del espíritu insurgente. No podía existir respeto a los derechos humanos sin cambios radicales en la pirámide de poder centroamericana. Y, como mínima exigencia, sin gobiernos civiles en el poder.

Por ello, tal política se convirtió en el equivalente moral de la Alianza para el Progreso de Kennedy². Ambos deseaban sociedades más democráticas en Centroamérica tan pronto como fuera posible, pero sin los cambios indispensables para ello. Y ni uno ni otro deseaba indisponerse con las élites cívico militares, a través de las cuales se había mantenido el poder y la influencia en los Estados Unidos en la región. Ambos hombres, indica W. LaFeber, deseaban una transformación en Centroamérica, pero temían la revolución.

3. La teología de la liberación y la teología del éxito

La teología de la liberación, producto de la reflexión cristiana latinoamericana a partir de la II Conferencia Episcopal de Medellín (1968), resalta la necesidad de una transformación social, humana, histórica, utópica, promovida por la fe y difundida entre el pueblo pobre y creyente del Tercer Mundo³.

La Jerarquía católica en Centroamérica, como en el resto de Latinoamérica, había legitimado con su autoridad religiosa las sucesivas autoridades políticas, pudiéndose incluso hablar de una alianza entre militares, terratenientes e Iglesia. Este modelo de Iglesia sufre un cambio en la década de los sesenta a consecuencia de la crisis de todos los proyectos políticos-económicos de las élites: populismos, desarrollismos, etc.; pero también influye el establecimiento de los Estados de Seguridad Nacional por las dictaduras militares y la consiguiente radicalización de los movimientos populares, que pronto derivarían en numerosos casos hacia posiciones de insurgencia. La publicación de la obra de G. Gutiérrez, «Teología de la Liberación. Perspectivas», en Lima, en 1977, marca toda una época en el panorama cultural latinoamericano. Los dictadores no encuentran con tanta facilidad obispos que les presidan sus «Te Deum», las relaciones Iglesia-Estado comienzan a ser conflictivas en muchos países, y los regímenes de Seguridad Nacional empiezan a hablar de infiltración comunista en la Iglesia.

Según la teoría de la dependencia, elaborada en Latinoamérica en los sesenta por H. Cardoso, E. Faletto, A. G. Franck, T. Dos Santos, el subdesarrollo latinoamericano es un

² Walter LaFeber, *op. cit.*

³ Mario Boero, «La Teología de la Liberación», *Cuadernos hispanoamericanos*, núm. 420, junio 1985, Madrid.

proceso histórico, económico y político inherente al desarrollo del capitalismo y a su necesaria explotación económica del Tercer Mundo, estableciéndose de este modo una relación causal «centro-periferia». La liberación se opone a la dominación de la periferia por el centro. Medellín pone de relieve el papel liberador que trae Cristo al mundo y a los oprimidos, contrastando con la importancia que el Concilio Vaticano II había concedido al desarrollo integral del hombre y al crecimiento económico de las sociedades, recogiendo un optimismo humanista en el progreso socio-económico que parecía anunciar una «teología del desarrollo».

Desacreditado el lenguaje desarrollista, la teología de la liberación entiende los procesos de liberación tanto en el plano individual como en el social. El pecado es considerado de un modo particularmente social, es «ruptura de la amistad con Dios y con los otros, causa última de la miseria, de la injusticia, de la opresión en que viven los hombres». La liberación es por tanto un problema individual, pero también social. Surgen así las comunidades eclesiales de base, una Iglesia «popular», e incluso una Iglesia de los «pobres». El Papa Juan Pablo II se mostraría especialmente crítico ante tales desarrollos durante su visita a Nicaragua en 1983.

La política exterior norteamericana, tradicionalmente poco interesada en el papel de la Iglesia católica en Latinoamérica, comienza a prestar atención a la nueva doctrina, llegando incluso a considerar el «Documento de Santa Fe», elaborado por los asesores de R. Reagan durante la campaña presidencial de 1980, que «la política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar (y no simplemente a reaccionar con posterioridad) la teología de la liberación tal como es utilizada en América Latina por el clero de la teología de la liberación. El papel de la Iglesia en América Latina es vital para el concepto de libertad política. Lamentablemente, las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como arma política contra la propiedad privada y el sistema capitalista de producción, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas».

El Salvador fue el primer campo de pruebas de la nueva teología en Centroamérica. Después de Medellín, y aunque la jerarquía se dividió entre conservadores y liberales, la Iglesia comenzó a presionar por una reforma agraria. En 1972, la policía arrestó al párroco de una comunidad campesina. Al día siguiente, su cuerpo mutilado fue encontrado en medio de una calzada. Y cuando en 1977, Óscar Romero llega al Arzobispado de San Salvador, uno de sus colaboradores, el Jesuita Rutilio Grande, es asesinado por grupos de la extrema derecha armados con rifles gubernamentales. Uno de tales grupos, los «Guerreros Blancos», amenazó con asesinar a los restantes 47 Jesuitas residentes en El Salvador. «Sea patriota. Mate un cura.» Esta curiosa invitación al desarrollo de las virtudes cívicas refleja con meridiana claridad el carácter de «societas sceleris» que se instala a medidados de los setenta no sólo en El Salvador, sino también en Guatemala. La presa favorita de los grupos de la extrema derecha en tierras guatemaltecas fueron los curas rurales que trabajaban en las comunidades indígenas.

Era necesario reaccionar contra la amenaza liberadora de la nueva teología de un modo más civilizado y práctico. Se debía ofrecer al pueblo opciones religiosas diferentes a la católica. Que insistieran en valores religiosos más manipulables e introdujeran una división entre los sectores más activos y comprometidos del cristianismo. La extraordina-

ria penetración protestante en Centroamérica, a partir de los setenta, no es en absoluto ajena a este orden de consideraciones. Iglesias fundamentalistas y pietistas se reparten con sectas de tipo pentecostal y milenaristas los nuevos conversos. De un anticatolicismo fundamentalmente religioso se ha pasado a ataques netamente políticos. Las nuevas iglesias dependen en gran medida de la ayuda económica norteamericana, centran sus esfuerzos en las zonas socialmente más conflictivas y se manifiestan terriblemente conservadoras en lo político y social.

Los barrios marginados capitalinos, verdaderas bombas de tiempo, son terreno favorito de apostolado y captación. Largas discusiones sobre el fin del mundo, la bestia del Apocalipsis —identificada con el comunismo—, las «sanaciones» (hasta el lenguaje tienen que importar) por la fe, lo corrupto y malo que es este mundo, son temas favoritos. Los refugiados salvadoreños, en la frontera hondureña con El Salvador, son otra zona privilegiada. Las zonas de concentración campesina, debido a proyectos cooperativos, son también muy trabajadas en el sentido de predicar las excelencias del agricultor individual y los peligros de corrupción que entraña la gestión colectiva.

En el área económica predicán un modelo de desarrollo individual. Si uno se convierte a Dios, trabaja, se aparta de los vicios y ahorra, el éxito está asegurado. En lo político patrocinan un completo acriticismo con respecto a los poderes establecidos, desaconsejando la participación en organizaciones populares y, en general, en actividades políticas. Reflejan una visión negativa de la historia y tienden a sembrar una especie de terror religioso ante todo lo que se salga del orden establecido. Identifican socialismo con comunismo y lo condenan como una realidad no sólo mundana, sino de invención diabólica.

Todas estas sectas fundamentalistas y pentecostalistas están vinculadas en Estados Unidos a los sectores más conservadores del gran capital y a instituciones que tienden a interferir directamente en actividades políticas. Frente a las tentativas de liberación colectiva surgió así una teología del éxito individual.

Con tales antecedentes, no es casualidad que, mientras la Iglesia Católica sufría toda clase de dificultades e incluso asesinatos, a las sectas protestantes se les brindara facilidades y protección.

En el círculo de la dependencia centroamericana faltaba por cerrar el espacio correspondiente a la manifestación de las creencias religiosas. Las sectas «californianas» se van apoderando de lotes cada vez más amplios de tal espacio. Como si el problema de Centroamérica, evangelizada hace más de cuatro siglos, fuera la ausencia de fe.

* * *

Guatemala, «societas sceleris»

Durante los años sesenta parecía que *Guatemala*, no Nicaragua ni El Salvador, era el país más amenazado con caer bajo control de las fuerzas revolucionarias. Ydígoras había establecido un régimen ideológicamente conservador, descaradamente corrupto y consis-

tentamente errático. Su apariencia de estabilidad y su fachada de legitimidad, con episodios tales como aceptar la invitación de Eisenhower en 1960 para el establecimiento de bases de entrenamiento para la invasión de Cuba, no satisfacía a un considerable número de sus compañeros de armas a los que, después de una revuelta en noviembre de 1960, tuvo que contentar concediéndoles nueve de las diez carteras de su gobierno. En 1962, una nueva revuelta del Ejército del Aire tuvo que ser sofocada por el Ejército de Tierra.

El régimen caería en marzo de 1963, cuando el Ministro de Defensa, Coronel Enrique Peralta, colocó sus tanques ante el palacio presidencial, disolvió el Congreso y abolió todo cuanto se interponía en la adquisición de un poder absoluto. Ydígoras había tenido el atrevimiento de permitir el regreso de Juan Arévalo para participar en las elecciones presidenciales programadas para el mes de diciembre. Y Arévalo, para el Ejército y la oligarquía, significaba reforma agraria y sindicación libre.

El nuevo dictador lanzó la operación «honestidad», acabando con parte de la corrupción del periodo Castillo-Ydígoras, pero al mismo tiempo consolidó la tradición de gobiernos militares. El estamento militar recibió en la época de Peralta una media de millón y medio de dólares anuales de los Estados Unidos. Construyó carreteras, administró un programa de almuerzos escolares, promocionó la salud y alfabetización rurales pero, al mismo tiempo, reprimió duramente al campesinado bajo el pretexto de su campaña antiguerrillera. Las organizaciones empresariales, como la Asociación Nacional del Café, la Asociación Guatemalteca de Productores de Algodón y la Cámara de Comercio, comenzaron a exigir un mayor papel político al tiempo que los Estados Unidos insistían en un retorno a la democracia. Las elecciones se celebraron en marzo de 1966. El Partido Revolucionario, versión renovada de la escuela de Arévalo y Arbenz, presentaba como candidato a Mario Méndez Montenegro. Después de su asesinato, su hermano Julio César, rector de la Universidad de San Carlos, ganó la mayoría de los 450.000 votos emitidos. Evidentemente aún perduraba la memoria de Arévalo y de Arbenz.

Méndez, antes de asumir la presidencia, tuvo que prometer a los militares que ni interferiría en su organización interna ni investigaría sus actuaciones. Borrón y cuenta nueva. Guatemala tenía, por fin, un gobierno civil. Pero en manos de los militares. Programa del nuevo Gobierno: la supervivencia. Objetivo cumplido, pues Méndez fue el segundo Presidente en la historia de Guatemala que completó su mandato Presidencial.

Los Estados Unidos parecían empeñados en demostrar que la contrarrevolución de 1954 había creado una Guatemala mejor. De 1962 a 1966, cincuenta millones de dólares de ayuda. Y la inversión privada, 131 millones de dólares en 1960, saltó a 186 millones de dólares en 1970. Pero el analfabetismo subió de un 72% en 1950 a 74,5% en 1960. Y la mitad de la tierra cultivada del país, la mejor, estaba en manos de 1.100 familias.

El movimiento guerrillero iniciado por los Tenientes Yon Sosa y Turcios Lima bajo el nombre de Movimiento Revolucionario del 13 de noviembre, en recuerdo al golpe abortado de tal fecha, inició una campaña de hostigamiento bajo una inspiración ideológica vagamente marxista (1).

El Ejército respondió con la creación de unidades tipo comando, los Kaibiles, y con grupos de policía paramilitar como la Policía Militar, la Policía Nacional, la Policía Regional, la Policía Judicial y la Policía de Hacienda (2).

Surgen igualmente multitud de grupos terroristas anticomunistas, como la Mano Blanca, la Nueva Organización Anticomunista y el Comando Anticomunista de Guatemala, verdaderos escuadrones de la muerte especializados en la técnica del «desaparecimiento». De simples sospechosos, en la mayoría de los casos.

El llamado «matrimonio entre los militares y los empresarios a través del control del Gobierno» (Edelberto Torres Rivas), era en realidad un matrimonio tan mal avenido que ambas partes se observaban con la mano en el gatillo. Para la oligarquía, el Estado era la garantía de conservación de su riqueza. Pero para los militares, que desde 1966 gobernaron ininterrumpidamente durante veinte años, el Estado era una fuente de riqueza y de promoción social. La lucha entre ambos grupos, con frecuencia a través de bandas a sueldo y resultados mortales, contribuyó a la desestabilización del orden establecido y al clima de inseguridad general que se instala en los setenta.

Los empresarios no sólo no invertían, sino que evadían sus capitales a Miami. Las inversiones extranjeras se localizaban en unas cuantas compañías cuya producción se destinaba a la exportación, no al mercado local. Los sindicatos, destrozados después de 1954, habían caído bajo la batuta de la Organización Interregional Americana de Trabajadores (ORITI), cuya filosofía era escasamente combativa. Y mientras tanto, los fondos de la Alianza para el Progreso se dirigían a programas que la oligarquía, vía impuestos, hubiera debido financiar.

La ayuda norteamericana fue particularmente importante para operar una transformación del Ejército guatemalteco en un ente capaz de manejar las armas modernas. Pero no para asimilar tácticas humanas y eficaces de lucha contra la guerrilla. Los militares guatemaltecos querían armas, pero no consejos; ellos sabían cómo llevar a cabo su campaña. El Pentágono gastó más de 12 millones de dólares anuales al final de la década de los sesenta, y envió a cerca de mil boinas verdes para adiestrar los 6.000 hombres del Ejército guatemalteco. Por las mismas fechas, la guerrilla de Ton Sosa contaba con tan sólo varios centenares de combatientes.

Para 1968, los intereses particulares de los oficiales enriquecidos y terratenientes, coincidentes con los de la oligarquía, no guardaban sintonía con los propósitos y designios de Washington, cuyo «monstruo» se hacía progresivamente más incontrolable.

Las elecciones presidenciales de 1970, a las que la izquierda y las fuerzas liberales acudieron en solitario, fueron ganadas por el nuevo héroe de la oligarquía, el «chacal de Zacapa». Más de 2.000 asesinatos políticos tuvieron lugar durante el primer año del mandato de Arana Osorio. Los 17 miembros de la Ejecutiva del Partido Comunista fueron «desaparecidos» en septiembre de 1972. Los grupos clandestinos de la derecha, en muchos casos organizaciones pantalla del Ejército y la Policía, trabajaban a pleno rendimiento. La Universidad Nacional fue ocupada y tres profesores asesinados. La ley marcial permitía toda clase de «excesos de celo».

Arana había prometido que acabaría con la guerrilla aunque fuera necesario «transformar el país en un cementerio». La guerrilla campesina no acababa de despegar; la urbana, espectacular en sus golpes, carecía de eco político. Para 1973, la mayoría de los grupos se habían desmovilizado. El sistema de gobierno militar parecía asegurado. Las elecciones se centraban en un ambiente tal de intimidación, con una prensa tan servil, que se obtenían los resultados electorales apetecidos por el Ejército. En 1970, el candidato militar era Arana y el Movimiento de Liberación Nacional su instrumento. El Partido Institucional Democrático y su candidato, Roberto Alejos, se sumaron al MLN en un frente anti-comunista. Mientras, el Partido Revolucionario, desacreditado por la experiencia del «tercer gobierno de la revolución» de Méndez Montenegro, presentó su candidato sin formar coalición con la Democracia Cristiana. La campaña electoral de 1974 se inició con el asesinato de 12 miembros del Partido Demócratacristiano. El Ejército no sólo liquidaba a la izquierda, sino a los que ocupaban el espacio entre la derecha y la izquierda. Los candidatos civiles perdieron interés en la campaña. Los tres candidatos presidenciales eran militares. El ganador fue el candidato del MLN-PID, General Kjell Laugerud. El General Ríos Montt, candidato perdedor, protestó, pero acabó plegándose a las reglas del juego.

Kjell Laugerud se encontró con el campo limpio. El trabajo sucio ya había sido realizado por Arana. Laugerud permitió un lento renacer del movimiento sindical. Para 1976 se calculaba que unos 80.000 trabajadores estaban sindicados. En 1953 habían llegado a la cifra de 100.000. Promocionó el movimiento cooperativo campesino y se interesó por los Indios del Altiplano. El terremoto de febrero de 1976, en el que perdieron la vida unas 25.000 personas alteró el curso relativamente moderado de los acontecimientos. Al igual que el terremoto de 1972 en Nicaragua marcó el inicio de una época en el régimen de Somoza, las cosas cambiaron en Guatemala. A la menor protesta sindical, Laugerud respondió acusando a los sindicatos de «delincuencia política» y acusándoles de ser «enemigos de la reconstrucción nacional». Comenzó la ronda de asesinatos de líderes sindicales. Y en junio de 1977 fue asesinado el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, López Larrave (3).

En mayo de 1978 tiene lugar la espantosa matanza de Panzós, en el Quiché. Más de 100 campesinos fueron ametrallados —hombres, mujeres, niños— cuando una multitud de indios llegó a Barzós para protestar porque no se les reconocía la propiedad de su tierra. El Ejército había excavado dos días antes de su llegada tumbas gigantes con bulldozers. Este detalle fue divulgado por Amnesty International.

En las elecciones de 1978, el candidato oficial era el General Romero Lucas García, apoyado por el PID y el PR, lo que indica el largo camino recorrido por el partido portaestandarte de la Revolución de Arévalo y Arbenz. El candidato del MLN era el General Peralta Azurdia. Su sobrino, Coronel Peralta Méndez, era apoyado por la Democracia Cristiana y el pequeño Partido Socialista Democrático.

De los 1,8 millones de inscritos en el censo sólo votó un 40%. Las elecciones se iniciaron en un ambiente de auténtica farsa y el recuento final, que poco importaba, fue un verdadero pucherazo. El General Peralta marchó hacia la capital al frente de su ejército privado y ocupó el Tribunal de Elecciones. A punto ya del estallido Peralta renunció al tremendismo y al poder y Romeo Lucas ocupó la presidencia.

Las actividades de la guerrilla se iba extendiendo a nuevos Departamentos mientras tanto. Hacendados y militares eran sus objetivos. Somoza caía y la guerrilla salvadoreña crecía. Romeo Lucas decidió la guerra sin cuartel. En dos años el Ejército liquidaba más de 3.000 personas, 27 líderes sindicales desaparecían, 18 estudiantes de la Universidad de San Carlos eran ametrallados y 15 periodistas caían bajo las balas (4).

Los Estados Unidos habían preparado la toma del poder por el Ejército en 1954. Pero nunca pudieron prever los excesos de los gobiernos militares que se sucedían en Guatemala. Y mucho menos imaginar que la fiera resultaría incontrolable. Cuando la Administración Carter condenó los escuadrones de la muerte de Lucas García, en 1977, el Ejército guatemalteco rechazó la ayuda norteamericana acusando a los Estados Unidos de interferencias en asuntos internos. En 1980, la guerrilla y los militares compartían un común odio y desconfianza hacia los Estados Unidos. Todo un éxito. Benditos los tiempos de Jacobo Arbenz, debió pensar entonces más de un funcionario del Departamento de Estado.

El poder del Ejército bajo Lucas se consolidó hasta el punto de que un Decreto de 1979 concedía a su Jefe de Estado Mayor el derecho de supervisión de todos los nombramientos de la burocracia civil y el de convocar a los Ministros del Gobierno a su despacho. El Instituto armado disponía cada cuatro años de un Presidente intercambiable por otro nuevo mediante el expediente de unas elecciones «democráticas». Nadie podía acusar al régimen guatemalteco de dictadura personal. El régimen era en realidad una dictadura institucionalizada del Ejército bendecido por los santos óleos de las elecciones cuatrianuales (5).

En mayo de 1980 fueron asesinados tres líderes de la Democracia Cristiana y, en febrero de 1981, su Secretario General, Vinicio Cerezo, fue emboscado y se salvó gracias a su coche blindado. Sus guardaespaldas, que respondieron al ataque disparando contra el coche agresor, fueron más tarde arrestados por disparar contra un coche de la policía.

Ser líder sindical en Guatemala durante este período suponía arriesgar la vida. El sacerdocio también se convirtió en profesión de alto riesgo. En 1980 serían asesinados un sacerdote filipino, un belga y un español. Ante la actitud pasiva del Cardenal Casariego, siete obispos amenazaron con renunciar (6).

En enero de 1980, un grupo de campesinos del Quiché tomó la Embajada de España para protestar contra la represión y la usurpación de sus tierras. La toma tuvo lugar después de una semana de protestas por el mismo grupo, que previamente había ocupado temporalmente una estación de radio para transmitir su protesta. El Embajador, Máximo Cajal, habló varias veces por teléfono con funcionarios de Relaciones Exteriores y con las autoridades de Policía indicando que no existía ninguna amenaza contra el personal de la Embajada, que estaba seguro de conseguir el abandono pacífico de la misma y que, en ninguna circunstancia, daba autorización para el desalojo violento de los ocupantes. El Jefe de la Policía, Chupina, pensaba dar una lección y ordenó la ocupación de la Embajada. Cuando la policía asaltó el recinto disparando sus armas, a uno de los 30 campesinos se le cayó el «cocktail molotov» que llevaba y en el incendio perdieron la vida 39 personas, entre ellas el Secretario de la Embajada, Ruiz del Árbol, el ex Vicepresidente, Cáceres Lenhof, y el antiguo Canciller, Molina Orantes, que se encontraban de visita en la

Embajada. Se salvaron milagrosamente el Embajador y un campesino, quien esa misma noche fue sacado del hospital donde se reponía de las quemaduras y asesinado. Desafortunadamente para el Gobierno hubo un superviviente, el Embajador, testigo de excepción de lo ocurrido. España rompió inmediatamente sus relaciones diplomáticas con Guatemala.

Este acto de salvaje barbarie reflejaba al mundo la calidad moral y la catadura criminal de la clase gobernante guatemalteca. Pero también indicaba el creciente temor a las guerrillas del FAR y del EGP, quienes habían unido fuerzas en septiembre de 1979, creando la Organización del Pueblo en Armas (OPRA). Las zonas de operaciones preferidas de la guerrilla eran el Quiché y la Alta Verapaz y, a pesar del uso de helicópteros y material moderno por el Ejército, no se conseguía extirparla. En octubre de 1979, Jorge Raúl García Granados, hijo del líder de los hacendados, sobrino del jefe del PR y del Presidente Lucas, fue secuestrado por la guerrilla y liberado en enero de 1980 después del pago de varios millones de dólares. El EGP, en venganza por la matanza de la Embajada de España, emboscó y mató a 13 soldados en el Quiché y atentó sin éxito contra la vida del tristemente célebre Jefe de la Policía, Chupina. El Partido Comunista, PGT, se incorporó al movimiento guerrillero asesinando al Presidente de la cúpula empresarial.

La sociedad guatemalteca se había deslizado paulatinamente por la pendiente de la violencia, y parecía saturada de instintos homicidas. Una auténtica «societas sceleris».

El Salvador, o la rebelión de las «masas»

El Salvador, que en los años sesenta fue el escaparate de la Alianza para el Progreso, llegaría a los años ochenta desgarrado por una revolución, devastado por la destrucción y sujeto a un tratamiento gota a gota de ayuda norteamericana que permitía la supervivencia del enfermo a gran coste y no menores dificultades. Un cambio radical se instaló en el país en el espacio de tan sólo quince años.

En octubre de 1960, el Coronel Lemus, quien como Presidente de la República no había cesado de alertar sobre los peligros del comunismo, fue informado por sus compañeros de armas de que sus servicios ya no eran requeridos. Una junta de oficiales moderados y profesores de Universidad, que prometía elecciones para 1962, y un reformista moderado, despertó las suspicacias de la oligarquía y de los Estados Unidos, que demoraron su reconocimiento oficial. Para el mes de enero de 1961 quedaron despejadas las suspicacias, cuando un grupo de oficiales claramente «ortodoxos», bajo el Coronel Julio A. Rivera, desalojó a la junta estableciendo un Directorio reconocido con vertiginosa rapidez por el recién inaugurado Gobierno de John F. Kennedy.

Rivera tenía en mente el ejemplo del PRI mejicano al crear el Partido de Conciliación Nacional. Cada cinco años el PCN presentaría sus candidatos oficiales y se encargaría de asegurar la victoria. El sistema funcionaría de una manera impecable hasta 1979, ganando las elecciones sucesivamente los Coroneles Sánchez Hernández, Armando Molina y el General Romero.

Se permitió la existencia de varios partidos de oposición a los que se concedía cierto número de Alcaldías y de asientos parlamentarios, ofreciéndose así el ejemplo de una democracia pluralista. El más importante era el Partido Demócrata Cristiano, cuyo líder, José Napoleón Duarte, fue Alcalde de San Salvador de 1964 a 1970. Le seguía el Movimiento Nacional Revolucionario, fundado por un grupo de socialistas moderados y profesores de Universidad y que en los setenta sería dirigido por Guillermo Ungo. El Partido Comunista, proscrito desde la matanza de 1932, creó la Unión Democrática Nacionalista. Y en la extrema derecha, un grupo de empresarios descontentos fundó el Partido Popular Salvadoreño.

El Salvador recibió, de 1962 a 1965, 63 millones de dólares de fondos de la Alianza para el Progreso, más que ninguno de sus vecinos, y un millón de dólares de ayuda militar anual, mientras que las inversiones privadas norteamericanas, un 65% de las inversiones extranjeras, eran decisivas en sectores como transporte, refinerías y energía eléctrica. Cientos de nuevas industrias, especialmente textiles, químicas y procesadoras de alimentos, se crearon en los sesenta. El país crecía a un ritmo sostenido, un extraordinario 12% en 1964 y 1965, era el modelo de la Alianza y llevaba camino de convertirse en la Bélgica de Centroamérica.

La oligarquía, que se había opuesto inicialmente a los planes de la Alianza, tildándola de estar inspirada por ideas marxistas, y que protestó violentamente cuando el Gobierno estableció centros de salud, aprendió pronto cómo darle la vuelta a los programas aliancistas —hay que reformar todo para que todo siga igual—, y cómo aumentar su poder económico insertándose en el nuevo abanico de posibilidades empresariales. Nombres como los Álvarez, los Regalado y los Quiñones, de la oligarquía cafetalera del pasado siglo, aparecían en los puestos de dirección de los nuevos bancos, las nuevas industrias, las nuevas agencias de representación. La oligarquía salvadoreña tenía motivos para sentirse orgullosa de su autosuficiencia y su poder todavía en la década de los sesenta. El sector manufacturero creció impresionantemente de 1961 a 1971: un 24%.

Las elecciones de 1967 fueron ganadas, como estaba previsto, por el candidato del PCN, Coronel Sánchez Hernández. La tensión fronteriza con Honduras exacerbó el entusiasmo promilitar y ayudó al triunfo. La guerra de 1969 entre ambos países encendió una hoguera de fervor patriótico, proporcionó la ocasión para un espléndido desfile de la victoria y supuso el regreso de casi 100.000 salvadoreños de los 300.000 asentados en Honduras. Las consecuencias de la guerra fueron menos brillantes (7).

Ante el creciente descontento, el Gobierno reaccionó aumentando la represión, sin hacer caso de las recomendaciones del Congreso Nacional de Reforma Agraria que, en 1970, había concluido que la expropiación de los latifundios era la única solución de los males del país. Es justamente en 1970 cuando aparecen los primeros brotes de rebelión armada.

El país que había sido el modelo para sus vecinos de cómo podía funcionar provechosamente la Alianza para el Progreso, iba a transformarse en unos pocos años en modelo de cómo armar una revolución violenta en Centroamérica.

Ante las elecciones presidenciales de 1972, la oposición del PDC, el MNR y el UND decidió la creación de un frente unitario llamado la Unión Nacional Opositora (UNO) presentando la candidatura única del líder del PDC, José Napoleón Duarte. El recuento demostró que Duarte sobrepasaba al incoloro Coronel Molina, pero un nuevo y cuidadoso escrutinio descubrió errores y concedió la mayoría al Coronel. La Asamblea, dominada por el PCN, declaró ganador a Molina. «El Coronel sí tiene quien le vote.»

Un grupo de oficiales descontentos ante el fraude electoral, sensibles al descontento popular y ulcerados por el despilfarro e inutilidad de la guerra de 1969, montó un golpe en el mes de marzo que estuvo a punto de triunfar. Cuando los rebeldes depusieron las armas, quien pagó las consecuencias fue Duarte, encarcelado, torturado y embarcado rumbo a Guatemala, de donde pudo escapar antes de que fuera asesinado por órdenes de Molina, instalándose en Venezuela durante los siguientes siete años (8).

En agosto de 1976, Molina propuso un plan de reforma agraria que afectaría 57.000 hectáreas, un 3,7 de la tierra cultivable, con la intención de parcelarlas y entregarlas a 20.000 familias campesinas sin tierra. La Asociación Nacional de la Empresa Privada y el Frente Agrario de la Región Oriental pusieron el grito en el cielo y Molina se olvidó del proyecto.

En las elecciones presidenciales de 1977, el candidato escogido por el PCN fue el Ministro de Defensa General Romero. Sus mayores méritos eran haberse visto relacionado con el intento de venta de ametralladoras a los gangsters de Nueva York y, sobre todo, ser jefe de la organización ORDEN (Organización Democrática Nacionalista). ORDEN controlaba una banda paramilitar de matones e informadores de la policía especializada en reprimir el descontento rural. Sus métodos, los usuales: desaparición y tortura. La oposición agrupada en UNO no perdía las esperanzas, a pesar de conocer en su propia carne los mecanismos de la farsa electoral. Su candidato fue el Coronel Claramount, héroe de la guerra con Honduras (9).

Las elecciones de 1977 arraigaban la idea de que nada podía esperarse de una oposición legal que participara en el carnaval electoral. Los grupos revolucionarios fueron los beneficiarios. Las Fuerzas Populares de Liberación fueron fundadas por Jorge Handal, en 1970. En 1972 surge el Ejército Revolucionario del Pueblo, bajo el poeta Roque Dalton. Tras el asesinato de éste por sus correligionarios, aparecen las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. La ideología de estos grupos oscilaba del maoísmo al guevarismo con influencias trostkistas. Pero el más importante y ortodoxo marxista era el Farabundo Martí de Liberación Nacional, fundada en 1972 por Cayetano Carpio, el Ho Chi Minh de Centroamérica (10).

El año 1977 fue de la más alta importancia. Entre las elecciones de febrero y la toma por Romero de la Presidencia, seis meses más tarde, una especie de locura se apoderó del país. Como la guerrilla no ofrecía un blanco fijo, la atención de las fuerzas del orden se fijó en las organizaciones populares y en la Iglesia.

Las principales organizaciones populares eran de extracción campesina. Los sindicatos campesinos estaban prohibidos desde la matanza de 1932. En 1974 se crea una organización cúpula, el Frente de Acción Popular Unido (FAPU), y la Federación Nacional Sindical de

Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), segunda organización sindical del país. En 1975, la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños y la Unión de Trabajadores del Campo crean el poderoso Bloque Popular Revolucionario (BPR), al que se asocian la más importante organización de profesores (ANDES), y varios sindicatos. El Bloque llegó a contar con 80.000 miembros.

Los movimientos populares surgieron radicalizados ante la negativa del Gobierno a realizar un programa mínimamente reformista y desencantados de la farsa constitucional que suponían las elecciones rituales con pucherazo asegurado.

La respuesta represiva de Molina y Romero corría a cuenta del Ejército, cuyos efectivos sumaban 8.000 hombres, más unos 5.000 policías divididos en varios cuerpos: Policía Nacional, de Aduanas y de Hacienda. Además, inspirándose en el ejemplo guatemalteco, un grupo de salvadoreños prominente creó un escuadrón de la muerte llamado la Unión Guerrera Blanca (UGB). Notemos entre paréntesis la obsesión de la oligarquía guatemalteca y salvadoreña en recordar su origen «blanco», lejana fuente, como sabemos, de su prestigio social y riqueza.

El campesinado relacionado con el BPR y el FAPU era blanco preferido de la represión. Pueblos enteros eran rodeados, sus habitantes investigados, y cuando el Ejército se iba se llevaba un cierto número de hombres que nunca regresaban. Para 1979, la lista de desaparecidos era impresionante.

La Iglesia Católica fue otro blanco preferido. El Jesuita Padre Rutilio Grande fue asesinado en marzo de 1977. En mayo, Alfonso Navarro, cura párroco. En total siete sacerdotes fueron asesinados por la UGB y las fuerzas de seguridad entre 1977 y 1979⁴ (11).

El General Romero tardó tres semanas desde que asumió la presidencia en darse cuenta de que el asesinato de sacerdotes tenía su precio. Las protestas internacionales eran agobiantes, Washington seguía ejerciendo presiones y «Monseñor» había dado el espectáculo negándose a asistir a las ceremonias de inauguración. Carter dejó bien sentada su posición retrasando el nombramiento de nuevo Embajador y enviando a San Salvador a Patricia Derian, Jefe del Departamento de Derechos Humanos. Puesto que Molina había rechazado la ayuda militar sólo quedaba como elemento de presión la ayuda económica. Y Carter retrasaba la aprobación de un préstamo de 90 millones de dólares a otorgar por el Banco Interamericano de Desarrollo, necesario para la construcción de un urgente proyecto, hasta que mejorara el historial de derechos humanos. Pero la oligarquía se mostraba inflexible. A la menor petición de los campesinos o de las organizaciones populares, sacaba a relucir el espectro de 1932 y comenzaba a hacer cálculos sobre cuántos campesinos sería necesario liquidar para restablecer la calma. Las cifras siempre oscilaban entre 50.000 y 100.000.

Romero levantó el estado de sitio y, en noviembre, hizo aprobar una Ley para la Defensa y Garantía del Orden Público que legalizaba un estado permanente de sitio.

◆
⁴ Thomas P. Anderson, *Politics in Central America*. Stanford University, 1982.

Carter aceptó el señuelo aprobando los 90 millones de dólares retenidos y nombrando un Embajador, Frank J. Devine, cuyas credenciales mostraban que no era precisamente un obseso del reformismo ni de los derechos humanos. Las desapariciones continuaron pero hasta noviembre de 1978 no volvió a caer asesinado otro sacerdote, el Padre Barrena.

Los miembros de las organizaciones populares respondían ocasionalmente a la represión de que eran objeto asesinando miembros de ORDEN o de la Policía Nacional. Y los secuestros de las organizaciones guerrilleras, razonados y publicitados como campo pagado en la prensa centroamericana, e incluso por el New York Times, eran moneda corriente y proporcionaban tan cuantiosos ingresos que el FML llegó a prestar al FSLN de Nicaragua 10 millones de dólares en estos años. Miembros de FAPU ocuparon en 1978 las oficinas de la Cruz Roja y de la Embajada de México, y el BPR ocupó en 1979 las Embajadas de Venezuela, Costa Rica, Panamá y Suiza. El Secretario General del BPR, Facundo Guardado, fue arrestado junto con varios líderes del movimiento y sus seguidores se encerraron en la Catedral, nuevo episodio de la guerra entre los dos Romeros, el Presidente y «Monseñor». Veinticuatro simpatizantes del BPR fueron ametrallados por la Policía Nacional en las gradas de la Catedral en mayo, matanza filmada por corresponsales extranjeros de TV y mostrada a todo el mundo. El BPR ocupó de nuevo las Embajadas de Venezuela, Francia y Costa Rica, evacuándolas, junto con la Catedral, en junio siguiente.

Los militantes del Bloque, progresivamente atraídos por las soluciones violentas y las ideas revolucionarias, establecieron vínculos con el FPL, el FAPU con las FARN y las Ligas Populares 28 de Febrero —en recuerdo de una de tantas masacres— comenzaron a utilizar el ERP como su brazo armado.

La venganza no se hizo esperar. El FPL asesinó en mayo al Ministro de Educación, Herrera Rebollo. El gobierno decretó treinta días de estado de sitio y convocó un diálogo nacional al que no fueron invitados ni los partidos de la oposición ni las organizaciones populares. El Salvador se parecía cada vez más a Nicaragua en 1978, y Romero perdía evidentemente el control del país.

Grupos cada vez más numerosos de empresarios, hacendados y altos funcionarios se instalaban mientras tanto en Miami, donde hacía ya tiempo habían depositado sus activos. Esta «fuga hacia adelante», o vuelo a Miami, parecía la otra cara de la moneda del lema sandinista «Patria libre o muerte», que se transformaba para un anónimo en «Patria esclava o Miami» en el siguiente estribillo:

PATRIA ESCLAVA O MIAMI

Cuando el zopilote,
harto de carroña,
levanta su vuelo
rumbo a Miami
queda en tierra,
cual despojo,
un arca vacía
un sueño roto

y flotando al aire,
 como interrogante.
 ¿Cómo fue posible
 que cual triste mueca
 nuestra historia patria
 saliera tan chueca?

Somoza cae en julio de 1979. Se pone de moda nuevamente la teoría del «dominó», aplicada ahora no a Indochina, sino a Centroamérica. Brezezinski, desde el Consejo Nacional de Seguridad norteamericano, enfoca el problema en términos de confrontación Este-Oeste y recomienda la reanudación inmediata de la ayuda militar. William Bowdler y Viron Vaky, Subsecretario de la Secretaría de Estado, acuden a San Salvador y piden a Romero que realice reformas, aunque sean cosméticas, para permitirle a Carter reanudar la ayuda. Al igual que en Nicaragua, el Presidente norteamericano propugnaba el respeto a los derechos humanos hasta que una revolución —creada en parte por la ausencia de tales derechos—, amenazaba con instalar un régimen que cuestionara los intereses norteamericanos en el país. Romero no escucha. Desecha la idea de anticipar elecciones. Su propio hermano cae asesinado en septiembre.

Un grupo de jóvenes oficiales, conscientes de la situación, había mientras tanto sondeado al Embajador norteamericano Devine, a los profesores de la Universidad Católica (UCA), al Provincial de los Jesuitas y a «Monseñor». Nadie quería a Romero. El golpe, totalmente incruento, fue dado el 15 de octubre de 1979 y acogido con la idea generalizada de que cualquier cambio sería para mejorar. La historia se encargaría de verificar o invalidar esta impresión.

Grupos cada vez más numerosos de campesinos y de sectores ligados a las organizaciones populares, despectivamente denominados por la cúpula civico-militar las «masas», se habían introducido en la dinámica revolucionaria. Una verdadera «rebelión de las masas».

Honduras, militares y transnacionales

Alguien con mentalidad poética dijo que la historia de Honduras podía escribirse en una lágrima. Pensaba sin duda en el atraso, la pobreza, la falta de una élite al estilo guatemalteco o salvadoreño, la desnacionalización de sectores claves de la economía e incluso de la cultura, la sucesión ininterrumpida de golpes que calificaba a su capital como «Tegucigolpe», la preeminencia del estamento militar sobre la clase política y la falta de estímulos e incluso proyectos nacionales. Características todas ellas que transformaban al país en modelo de «Banana republic».

Para 1963, los minúsculos sectores empresariales, los poderosos ganaderos, las compañías bananeras, la Embajada norteamericana, tenían serias dudas con respecto a iniciativas del Gobierno de Villeda Morales, tales como hablar insistentemente de reforma agraria y establecer la obligatoriedad de libros de texto en las escuelas donde se intentaba destilar un mínimo de espíritu patriótico. Pero quienes más dudas sentían eran los militares, ante la creación de una Guardia Civil de 2.000 hombres que proporcionaba al

Presidente un mínimo de independencia frente al Ejército, y constituía por tanto un reto al poder del instituto armado. Villeda no podía presentarse a la reelección. Su candidato liberal era conocido como partidario decidido de asentar la primacía del poder civil. Temiendo su victoria, el Ejército golpeó diez días antes de las elecciones, liquidó una parte considerable de la Guardia Civil e instaló en el poder al Coronel del Ejército del Aire, Oswaldo López Arellano.

Kennedy se enfureció. El golpe hondureño ocurría después del peruano, del guatemalteco y el de la República Dominicana. A pesar de que López prometía una nueva constitución y elecciones, las relaciones fueron colocadas en el congelador. Ricardo Zúñiga, jefe del conservador Partido Nacional y principal asesor político del nuevo Presidente, no se inmutó. Ya volverán, dijo, refiriéndose a los norteamericanos. Como en efecto, así ocurrió, tras un breve paréntesis de unos meses. López se hizo elegir Presidente de la República en 1965, otorgando una representación minoritaria en el Congreso a los liberales y concediendo a los nacionales el Poder Judicial y la maquinaria administrativa del Estado. Las decisiones se tomaban a nivel Presidente y su Secretario, Zúñiga.

Los militares, que tradicionalmente habían sido bandas de soldados desharrapados y jefes políticamente ambiciosos, a sueldo de caciques locales, se habían venido transformando en un cuerpo profesional al mismo tiempo que tanto el Partido Liberal como el Nacional se anquilosaban y carecían de capacidad de análisis y respuesta. La primera intervención política del nuevo Ejército ocurrió en 1957, cuando, inseguros aún de su creciente poder, ayudaron a Villeda a instalarse en la presidencia. El precio del apoyo fue la Constitución de 1957 que establecía el filtro del Jefe de las Fuerzas Armadas para que las órdenes presidenciales fueran obedecidas al igual que una total autonomía frente al poder civil en cuanto a nombramientos y política estrictamente militar se refería. Para 1963, el Ejército se consideraba suficientemente preparado para tomar directamente el poder. De hecho, se había transformado en la institución más preparada para hacerlo y también la más motivada para su manejo.

La profesionalización del Ejército hondureño fue tarea casi exclusiva de los Estados Unidos, a través de la Escuela de las Américas de Panamá y los cursos de perfeccionamiento en el territorio de la Unión. La relación militar quedaba establecida en los acuerdos de Asistencia militar de 1954, que recordaban aspectos del Tratado de 1903 con Panamá.

A medida que López anulaba el reformismo y las medidas sociales de Villeda el capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, se instalaba en el país. El paquete de inversiones norteamericanas en Honduras aumentó del 4,6% del Producto Interno Bruto en 1943 al 32% en 1971 (12).

El poder de las transnacionales tenía una gran tradición en Honduras. En 1890, la Rosario Mining pagaba el sueldo del Presidente Marco Aurelio Soto. En 1974, la United Brands pagó a López 1,25 millones de dólares para impedir la aprobación de un impuesto de 1,50 dólares por caja de banano. En 1976, la investigación de la Securities and Exchange Commission reveló que la Standard Fruit (más tarde la Castle and Cook) pagó más de 6,2

millones para obtener protección de los militares hondureños⁵. Mientras tanto, la Embajada norteamericana coordinaba el reconocimiento de los nuevos sindicatos por la ORIT (organismo internacional de la AFL-CIO), y organizaba la instalación en Tegucigalpa de oficinas del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre como correa de transmisión de una mentalidad sindical claramente conservadora.

El símbolo del «villedismo» fue la frustrada reforma agraria. El 0,3% de la población poseía el 27% de la tierra, mientras que el 67% poseía el 12%. A finales de 1972, miles de campesinos organizaron una «marcha del hambre» sobre Tegucigalpa. López, mientras tanto, había organizado unas elecciones presidenciales en 1971 a las que los Partidos Liberal y Nacional acudían con un esquema de reparto del poder, el Pacto, tal como fue denominado. Los nacionales ganaron la presidencia bajo Ramón Ernesto Cruz, con Ricardo Zúñiga como Ministro del Interior y Justicia y control sobre la maquinaria burocrática. Este Gobierno falló, cayó en la mera supervivencia, a la que pondría fin el General López, mediante nuevo golpe, en el mes de diciembre, pero esta vez presentándose como líder reformista. López favorecía la reforma agraria, pero la oposición de los propietarios, agrupados en la poderosa Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), dilató tal reforma. Sin embargo, López nacionalizó la industria de exportación de madera, garantizó la contratación colectiva del trabajo, estableció una escala de sueldos mínimos y estableció controles sobre las industrias mineras. El General comprendió que la conjunción del desencanto tras la guerra del 69 con El Salvador, la efervescencia de los países vecinos, y la subida vertiginosa de los precios del petróleo, le obligaba a tomar ciertas medidas que contentaran a campesinos y sindicatos. Tales propósitos reformistas crearon un cierto número de organismos paraestatales para la estabilización de los precios de productos básicos (IHMA), comercialización de la madera (COHDEFOR), promoción de inversiones industriales (CONADI), etc. La oposición de los sectores conservadores agrupados en torno al COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) y la FENAGH fue montando de tono. El estallido del escándalo del «bananagate», los 1,25 millones de dólares recibidos de la United Brands, obligó a López Arellano a presentar la dimisión.

Su sucesor, Coronel Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978), gobernó en un clima de creciente intranquilidad hasta que una facción netamente conservadora del Ejército, dirigida por el Coronel Policarpo Paz, de quien se había hablado en relación con una cadena de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, tomó el poder en agosto de 1978. Melgar, representante moderado del sector modernizante del mundo empresarial, era sucedido por un representante de los grandes terratenientes tradicionales.

Durante el período reformista de 1972 a 1975, los dos partidos políticos importantes, el Nacional y el Liberal, habían estado pidiendo a gritos el retorno al poder civil. El Partido Nacional, aliado tradicional de los militares, y el ala conservadora del Partido Liberal, veían el retorno a la constitucionalidad como un medio para recuperar el control del aparato gubernamental, detener el reformismo populista de López y beneficiarse personalmente de una corrupción tan sólida como históricamente arraigada en las

⁵ Honduras: Pieza clave de la Política de Estados Unidos en Centroamérica. Centro de Documentación de Honduras. Tegucigalpa, 1986.

costumbres políticas de la República. Curiosamente y mientras tanto, diversas organizaciones obreras y campesinas apoyaban el régimen militar, pues la práctica les mostraba que éste era más sensible a sus metas reformistas que las cúpulas de los dos partidos tradicionales.

A finales de 1979, el Subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, Viron Vaky, declaraba que la geografía «concedía a Honduras un papel central en la prevención de un conflicto regional». El problema consistía en saber si un país tan pobre y atrasado como Honduras podía desempeñar sin riesgo de descoyuntamiento un papel geopolítico tan importante.

En la década de los ochenta, con el ascenso del ala derechista de los militares, se esfumaron las esperanzas de una reforma conducida por el sector castrense. Puesto que el reformismo de los años sesenta había generado en los vecinos un claro radicalismo en los setenta, el primitivismo dependiente sería preferido al desarrollo inestable y la tranquilidad de la pobreza a la inestabilidad del crecimiento.

Costa Rica, el faro parpadeante

La construcción del sistema político por Don Pepe y su Partido de Liberación Nacional había establecido desde 1948 una democracia liberal que funcionaba cual faro solitario en el panorama centroamericano.

Las elecciones presidenciales de 1962 fueron ganadas por el candidato de Figueres, Francisco Orlich, quien extendió el vasto sistema de prestaciones sociales que el Estado ya proporcionaba. La población crecía al escalofriante ritmo del 4,5% anual, quizá el más alto del mundo, mientras que los precios del café y del azúcar descendían. Cuando Kennedy aumentó la cuota azucarera costarricense para la cosecha de 1961, los plantadores creyeron que no la reduciría para el año siguiente. Muchos pagaron su error. Las posibilidades de exportación del Mercado Común centroamericano incentivaron la creación de una industria ligera, que junto al aumento de los precios del café y el banano produjo una bonanza a lo largo de los sesenta.

A finales de la década era ya evidente que la economía agroexportadora estaba cambiando el tradicional y equilibrado sistema de tenencia de la tierra, una de las claves de la estabilidad política. Los cafetales habían seguido tal proceso de concentración que el 2% de los cultivadores producía el 50% de la cosecha. Las grandes haciendas cafetaleras recordaban peligrosamente las guatemaltecas o salvadoreñas, y las plantaciones bananeras se triplicaban entre 1963 y 1967 hasta sobrepasar las 20.000 hectáreas. El cultivo de granos básicos contaba cada vez con menos explotaciones y el país tenía que importar lo que antes producía, dos veces y media más en 1968 que en 1960. La Balanza comercial reflejaba peligrosamente esta nueva dependencia alimentaria.

El proceso de concentración aumentó el número de campesinos sin tierra y las ocupaciones ilegales hicieron aparición. El gobierno intentó instalar campesinos en terrenos públicos, pero al ser éstos de difícil acceso, el plan tuvo poca incidencia. Las autoridades intentaron asumir entonces un papel arbitral entre los hacendados y los

campesinos, pero la ocupación ilegal continuó a lo largo de los setenta ensombreciendo el clima de tranquilidad pública.

El sistema electoral, a base de distritos plurinominales y representación proporcional, favorecía la supervivencia de pequeños partidos, pero en la práctica el poder alternaba entre el Partido de Liberación Nacional y el Partido de la Unidad, coalición electoral de varios partidos. El tercer gran actor del juego electoral era una coalición de izquierda, conocida como el Partido Pueblo Unido, formada por el Partido Vanguardia Popular, comunista, el Partido Socialista y el Partido Revolucionario del Pueblo. La fuerza electoral de la izquierda procedía de las regiones bananeras, la clase obrera de San José y de círculos intelectuales y universitarios. Este partido, mantenía estrechas relaciones con las organizaciones sindicales y sus demandas eran de naturaleza reformista más que de contenido revolucionario (13).

A finales de los sesenta parecía claro que Costa Rica estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Los programas de alfabetización y el bajo índice de analfabetismo se conseguían, por ejemplo, a base de que la educación absorbiera la mitad del presupuesto nacional. Por estas mismas fechas, la deuda pública por habitante era la más alta de Centroamérica.

El PLN de Figueres sufrió en 1968 la presión de la joven guardia, que se orientaba hacia el socialismo, frustrada por una economía al ralenti y progresivamente dominada por una élite. Figueres controló la rebelión amenazando con abandonar el PLN, crear su propio partido, y presentarse de este modo a las elecciones presidenciales de 1970. La amenaza surtió efectos y Don Pepe, por tercera vez, llega a la presidencia en 1970.

Los fondos de la Alianza para el Progreso estaban agotados y el Mercado Común centroamericano liquidado. Don Pepe intentó diversificar la exportación y en 1972 vendió 30.000 toneladas de café a la Unión Soviética, después de lo cual estableció relaciones diplomáticas con Moscú, el único entre los centroamericanos. Y después de la crisis petrolera de 1973, Venezuela se transformó en un importante suministrador de crudos y en un mercado considerable.

El sucesor de Figueres, Daniel Oduber (1974-1978) cambió la legislación fiscal y aduanera con el fin de reglamentar la inversión extranjera y restringir los privilegios de los casi 10.000 pensionados norteamericanos retirados en Costa Rica. A pesar de que los precios del café se recuperaron a mediados de los setenta, la economía del país no se agilizaba. El déficit comercial en 1977 llegaba a 100 millones de dólares. Los programas de asistencia social combinados con el altísimo índice de crecimiento demográfico devoraba las partidas presupuestarias.

Costa Rica, al igual que el resto de los centroamericanos, había dependido durante más de un siglo de los mercados exteriores para su economía agroexportadora. Y se había hecho igualmente dependiente del exterior para el suministro de alimentos, al mismo tiempo que disminuía la tierra disponible para sus campesinos. Un censo de 1974 mostraba que el país disponía del sexto sistema más desequilibrado de distribución de la tierra de

un grupo de 54 países⁶. Oduber intentó corregir este desequilibrio organizando asentamientos campesinos en tierras estatales y expropiando 20.000 hectáreas, propiedad de la United Brands. Pero la violencia y las ocupaciones ilegales de tierras no amainaban. En los años setenta, la combinación de altos precios petroleros, alto crecimiento demográfico, déficits comerciales, disminución de la inversión extranjera tras los intentos de reglamentación, habían colocado la economía costarricense en una peligrosa encrucijada. O se limitaban los gastos de asistencia social, una de las bases de la tradicional estabilidad política del país, y se intentaba amortiguar el control que las Compañías norteamericanas habían ejercido sobre importantes sectores económicos del país, o el país tomaba la senda de la bancarrota y la dependencia irreversible.

Rodrigo Carazo (1978-1982), no encontró más receta que la del endeudamiento exterior, y, al abandonar la presidencia, el Gobierno se encontraba técnicamente en quiebra. Aparece un movimiento guerrillero, las FAC, mientras que las ventas de armas para uso privado aumentaron cifras récord. El faro democrático centroamericano comenzaba a lanzar insistentes parpadeos de petición de auxilio. Pero los intentos de regulación de la inversión extranjera y el apoyo a los grupos sandinistas, no eran buenas tarjetas de presentación en Washington.

Nicaragua, desamortización de la «finca»

En 1963, Luis Somoza, que había sucedido a su asesinado padre en 1957, abandonó la presidencia por imperativo constitucional a favor del antiguo Ministro de Relaciones Exteriores René Schick. Los Somoza seguían manejando el poder real. Schick murió en 1966, siendo sucedido por otro liberal amaestrado, Lorenzo Guerrero, quien desempeñaría la presidencia hasta enero de 1967.

Anastasio Somoza, «Tachito», fue nombrado candidato del Partido Liberal a las presidenciales de 1967. Para ello tuvo que renunciar a su puesto de Jefe Director de la Guardia Nacional, formalmente por supuesto. La oposición conservadora, de los liberales independientes y los cristianodemócratas, estableció una Unión Nacional Opositora bajo la candidatura de Fernando Aguero. La campaña fue violenta. Pedro Joaquín Chamorro montó una manifestación de unas 50.000 personas, a la que respondió Somoza encarcelando a Chamorro, y la Guardia, disparando contra los manifestantes. Cuarenta personas perdieron la vida. Restablecido el orden, Tachito, ganador como estaba previsto, asumió la presidencia. Su hermano Luis moriría a los pocos meses (14).

Entre 1961 y 1967, los préstamos de la Alianza sumaron 50 millones de dólares, y los del Banco Interamericano de Desarrollo otros 50. Y la inversión directa norteamericana pasó de 18 millones de dólares en 1960 a 75 en 1970. Con tales inyecciones el PIB creció un espectacular 6,2% como media entre 1960 y 1970, el tercero más alto en Latinoamérica. Las exportaciones aumentaron un 20% anual entre 1960 y 1965, pero las importaciones lo hicieron a un ritmo más elevado, la deuda exterior comenzó a crecer y las presiones sobre el córdoba surgieron por primera vez en años. Mientras tanto, a medida que se

◆
⁶ Walter LaFeber, op. cit.

abandonaba el cultivo de granos básicos a favor de la agroexportación, la dependencia alimentaria aumentaba. En 1967, el progreso económico, asimétrico como era, se esfumó y aparecieron los primeros síntomas de crisis.

En 1959, un grupo de estudiantes, desilusionados de las posibilidades de cambios por la vía legal, había fundado el Frente de Liberación Nacional para intentarlo a través de las armas. En 1961, tal grupo se transformó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), bajo la dirección de Carlos Fonseca Amador. El FSLN intentó, sin demasiado éxito, montar una campaña de guerrillas. En 1969, varios de sus líderes murieron en Managua en un enfrentamiento con la Guardia y Fonseca fue arrestado en Costa Rica acusado de asalto a bancos. El sandinismo parecía acabado con tales golpes. Mientras tanto, el Pentágono otorgaba 1,2 millones de dólares anuales, un 13% del presupuesto militar de Somoza, y mantenía 25 asesores militares en Nicaragua lo que, unido a la obligatoriedad de los oficiales de la Guardia de pasar un año en la Escuela de las Américas, en la Zona del Canal, transformaba las relaciones militares norteamericanas con Nicaragua en las más estrechas del Continente (15).

Cuando un terremoto arrasó Managua en diciembre de 1972 y 10.000 nicas perdieron la vida, la ayuda extranjera llegó en grandes cantidades, pasando a engrosar en buena medida los bolsillos de la oficialidad de la Guardia. El centro nunca fue reconstruido y la ciudad se extendió hacia zonas que, ¡qué casualidad!, pertenecían a Somoza y su círculo de amigos.

Como Tachito no podía presentarse constitucionalmente a la reelección en 1972, era necesario reformar la Constitución (16).

Somoza ganó las elecciones por un margen de 20 a 1. Los resultados, dice Walter LaFeber, sólo impresionaron a quienes creían que las estadísticas generadas por una votación en un país autoritario centroamericano eran golpes asestados en nombre del mundo libre⁷. Chamorro, la Iglesia y la comunidad empresarial, que no perdonaba a Somoza su frenesí acaparador después del terremoto, constituían la punta de lanza de la oposición pacífica a Tachito. El 27 de diciembre de 1974, el FSLN apresó a 40 de los invitados al cock-tail de despedida del Embajador Shelton. Entre los rehenes se encontraban el Alcalde de Managua, el eterno Embajador de Nicaragua en Washington, Sevilla Sacasa, y varios íntimos del círculo presidencial. Después de una mediación de Mgr. Obando los secuestrados recobraron su libertad y el FSNL cinco millones de dólares, 15 prisioneros políticos y un vuelo a La Habana.

Somoza respondió decretando un estado de sitio durante todo el año 1975 y encargando a la Guardia Nacional, que compensaba sus deficiencias con lujo de brutalidad, una mayor actividad represora. En noviembre de 1976, el FSLN recibió dos duros golpes: la muerte en combate de Eduardo Contreras, cerebro del secuestro antes mencionado, y la de su Secretario General, Carlos Fonseca Amador. El movimiento sandinista se escindió en tres facciones. La tendencia proletaria preconizaba la insurrección masiva en las ciudades. La guerra popular prolongada favorecía una guerra de desgaste a través de

7 Walter LaFeber, *op. cit.*

guerrillas en las zonas rurales. Un tercer grupo, al que pertenecían los hermanos Daniel y Humberto Ortega, trataba de mediar entre los dos anteriores presentándose más abierto y pluralista y abogando por la lucha tanto en la ciudad como en el campo.

En 1978, La Prensa publicó un informe sobre la venta de plasma sanguíneo a los Estados Unidos por la Compañía Plasmaferesis, propiedad de Somoza. Tachito se vio inmediatamente acusado de Drácula a escala industrial. A escasos días de la aparición del «scoop», Pedro Joaquín Chamorro era asesinado por la Guardia Nacional. Treinta mil personas acudieron a su entierro y diversas agrupaciones sociales se pusieron de acuerdo para convocar una huelga general. De las más importantes destacaron el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Confederación General de Trabajadores Independientes y la Central de Trabajadores de Nicaragua. La huelga general se esfumó en la primera semana de 1978, pero las fuerzas aglutinadoras de la misma continuaron trabajando.

El asesinato de Chamorro había roto las reglas no escritas del juego político nicaragüense. Que la Guardia entrara en remotos pueblos y matara, violara y robara, era parte del juego, como lo era la prisión y tortura de los sandinistas y otros opositores al régimen. Pero que la represión llegara al restringido círculo de las familias destacadas del Partido Liberal o del Conservador era intolerable⁹. Si Pedro Joaquín Chamorro podía ser asesinado, nadie podía dormir tranquilo y había que extirpar la raíz del insomnio. Así pensaba la élite de Nicaragua (17).

La política de promoción de los derechos humanos de Carter sufría en Nicaragua de las mismas contradicciones que en el resto del istmo. Carter partía del supuesto de que un cambio en los métodos políticos del régimen debilitaría la revolución. La segunda contradicción consistía en que, puesto a escoger entre el FSLN y Somoza, Carter se quedaba con este último. Por ello se vio atrapado entre el deseo de ayudar a Somoza y las ganas de imponerle reformas. La vía utilizada fue mantener la ayuda militar, 2,5 millones de dólares de armamento a finales de 1977, y retener la económica. Somoza jugó el juego concediendo una amnistía a cierto número de prisioneros políticos y accediendo a una investigación de la OEA en cuanto al estado de los derechos humanos.

La oposición, en la estela de la huelga general, había formado el Frente Amplio de Oposición, compuesto de tres sindicatos, cuatro facciones del Partido Conservador, dos partidos socialistas, el Partido Liberal independiente, los Doce y el Movimiento Democrático Nicaragüense. Los Doce, figuras del exilio la mayoría, contaban con el sacerdote de Maryknoll Miguel D'Escoto y con el hombre de negocios Sergio Ramírez. El MDN fue creado por Alfonso Robelo, un líder de la COSEP y organizador de la huelga general.

William Jorden, enviado especial de Carter, llegó a Managua en septiembre de 1978 con la misión de buscar un compromiso entre Somoza y el FAO. El Frente amplio insistía en la marcha de Somoza y la desmovilización de la guardia. Fracasada la misión de Jorden, en noviembre llega William Bowdler, con idéntica encomienda y similar fracaso.

Los levantamientos anti-Somoza se generalizaban espontáneamente, las fuerzas del FSLN llegaban a 7.000 miembros, y Venezuela, México, Costa Rica y Panamá comenzaron a

⁹ Thomas P. Anderson, *op. cit.*

aprovisionar a los insurgentes. Costa Rica permitió al Frente el establecimiento de un gobierno provisional en San José. Las tres facciones decidieron enterrar sus diferencias bajo liderazgo tercerista en febrero de 1979, estableciendo un Gobierno de Reconstrucción Nacional.

A partir de septiembre de 1978, los sandinistas abandonaron la guerra de guerrillas apoderándose de la ciudad de Estelí, que abandonaron más tarde ante la superior potencia de fuego de la Guardia. La lucha llegó a León y a Masaya, destruida, como Estelí, en la recuperación por la Guardia.

El frente de la oposición comenzó a disgregarse entre la tendencia al compromiso, preconizado por Adolfo Calero, pariente político de Somoza, y la línea de quienes exigían la marcha de Somoza. Sergio Ramírez y los Doce abandonaron la FAO, que pronto sería reemplazada por el Movimiento Pueblo Unido. Tras la adhesión a éste de los Doce, se crea el Frente Patriótico Nacional, estrechamente ligado al FSLN. Éste, una vez superadas sus diferencias, había creado un directorio de nueve miembros: Tomás Borge, Henry Ruiz y Bayardo Arce, de la tendencia GPP; Carlos Núñez, Luis Carrión y Jaime Wheelock, de la tendencia proletaria; los hermanos Ortega y Manuel Tirado, de los terceristas. Todos menores de cuarenta años, salvo Borge.

En medio de esta confusión de grupos y coaliciones, los Estados Unidos parecían incapaces de desarrollar una política coherente que aceptara lo inevitable o se opusiera con energía a la caída libre del régimen somocista. En junio de 1978, Carter felicitaba a Somoza por la mejoría en el tema de los derechos humanos, cuando las desapariciones y las torturas eran moneda corriente del régimen. En otoño del mismo año, Carter se encargó de que el FMI retuviera un crédito de 65,7 millones de dólares que Somoza necesitaba desesperadamente. A comienzos de 1979, Carter trató de presionar cortando la ayuda militar y la económica; Argentina e Israel ocuparían el vacío mediante suministros militares durante los últimos meses de Tachito. La única línea consistente de la Administración Carter fue el intento constante de alejar a los moderados del FSLN y el de mantener a Somoza o, al menos, a la Guardia, hasta las elecciones de 1981.

El FSLN anunció la ofensiva final en mayo de 1979, al tiempo que México rompía relaciones diplomáticas con Somoza. Jinotega y Masaya fueron tomadas y más tarde abandonadas a la superior fuerza de la Guardia. Somoza se refugió en su bunker preparando la guerra hasta el último Guardia Nacional. En junio, coincidiendo con la llegada del nuevo Embajador norteamericano, Pezzullo, los sandinistas comenzaron a infiltrar Managua por el este y el oeste. Somoza mandó bombardear a sus tanques y aviación los barrios de la capital. La Guardia volvió a ocupar el terreno perdido en una semana y los sandinistas se retiraron a Masaya el 27 de junio, donde establecieron su cuartel general a 18 kilómetros de la capital.

Carter y Brzezinski recurrieron entonces a una táctica infalible en el pasado. Alertando sobre los peligros de la implicación cubana en la revolución sandinista, convocaron una sesión de emergencia de la OEA con la intención de organizar una fuerza interamericana que parara la guerra y estableciera un régimen «acceptable». La derrota fue humillante. Por primera vez desde su nacimiento en 1948, la OEA rechazó la invitación a

intervenir en los asuntos internos de un Estado americano. La delegación mexicana llevó la voz cantante de la oposición al proyecto.

Cuba había apoyado a los sandinistas desde 1961, pero en los últimos meses de somocismo, Venezuela, Panamá, Costa Rica y México concedieron más apoyo material y moral que Cuba. La ayuda cubana se hizo importante durante la ofensiva final de mayo-junio, cuando cerca de 150 toneladas de municiones, transportadas en aviones pilotados por panameños y costarricenses, llegaron a manos de los sandinistas procedentes de Cuba (18).

Somoza debía irse. Pero había que intentar el «somocismo sin Somoza». Ésta fue la misión encomendada a Pezzullo. Misión imposible. Una vez completo el cerco de la capital con la caída en manos sandinistas de Jinotepe el 5 de julio, el directorio sandinista nombró un gobierno en el exilio consistente en una junta de cinco miembros: Sergio Ramírez, Alfonso Robelo, Violeta Barrios de Chamorro (viuda de Pedro Joaquín), Moisés Hassan y Daniel Ortega (19).

Pezzullo contó con el firme apoyo de Mgr. Obando en la instrumentación de la marcha de Somoza. Hasta el punto de que Tachito juraba que antes de su partida le ajustaría las cuentas al «Comandante Miguelito».

La Guardia, con efectivos de 10.000 hombres, gozaba con su fama de dureza y el temor que inspiraba a la población. Pero su oficialidad, acostumbrada a la arbitrariedad de un mando despótico y a la molición de una corrupción escandalosa, no era enemigo para los hombres del FSLN, revolucionarios dedicados y endurecidos en la lucha de guerrillas en la sierra. El 16 de julio de 1979, Somoza aceptó la inexcusable invitación del Embajador Pezzullo a abandonar el país. En la madrugada del día 17, acompañado de su hijo Anastasio, su círculo íntimo y, «last but not least», su despampanante amiga, Dinora Sampson, tomó el avión en el aeropuerto de Managua y abandonó Nicaragua para siempre. La Guardia se dispersó tomando el rumbo de los cuatro puntos cardinales. El aeropuerto de Managua conoció escenas de pánico que recordaban la caída de Saigón. Todo un mundo acababa. Y otro nuevo aparecía (20).

La «finca», tal como su padre Tacho se había referido en una ocasión a Nicaragua, había quedado desamortizada.

NOTAS

(1) Turcios Lima pronto se escindió formando su propio grupo, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). En 1966, Turcios moriría en un accidente de automóvil, y Yon Sosa sería muerto por una patrulla mejicana de fronteras en 1970. En 1965, la guerrilla asesinó al Coronel Hauser, jefe de la Misión militar norteamericana, y en 1968, el propio Embajador norteamericano, Gordon Mein, sería asesinado durante un intento de secuestro. En 1970 sería el turno del Embajador alemán.

(2) En las operaciones antiguerrilleras se distinguió el Coronel Arana Osorio, pues en el solo Departamento de Zacapa, entre 1966 y 1970, ayudado por asesores norteamericanos, consiguió liquidar cerca de 15.000 «guerrilleros», obteniendo el título de «chacal de Zacapa». Nunca la guerrilla guatemalteca ha tenido más de 3.000 hombres en armas.

(3) Los sindicatos respondieron a la campaña de eliminación física uniendo fuerzas. La Central Nacional de Trabajadores, de inspiración Cristiano-Demócrata y afiliada a la Confederación Latinoamericana del Trabajo se unió a la Federación Autónoma Sindical de Guatemala, vinculada al Partido Comunista de Guatemala, para crear el Comité Nacional de Unidad Sindical.

Los campesinos adquirieron una nueva militancia aprovechando el movimiento cooperativo originalmente fomentado por Laugerud, ya que la sindicación les estaba prohibida. Bajos salarios, el sistema de contratación del trabajo, que ponía en manos del contratista peones que habían recibido anticipadamente su salario y que eran alquiladas por aquel a los hacendados del café, algodón y azúcar, y la expropiación de sus tierras, fueron los elementos que movilizaban a los campesinos. Los indios consideraban la tierra como propiedad colectiva del pueblo. Recordaban los tiempos de la Capitanía General. Pero carecían de títulos de propiedad. Quien pagara a un abogado para realizar la inscripción se convertía en dueño de la tierra. Y el Ejército o las bandas armadas de los hacendados le protegían.

Laugerud intentó remediar el problema de la escasez de tierras iniciando la carretera Transversal que, desde el Atlántico, debía enlazar con la frontera mejicana del Estado de Chiapas, y abrir al cultivo y colonización el Petén, prácticamente inaccesible. A medida que avanzaba el proyecto, la alta oficialidad del Ejército se iba apropiando de la tierra a lo largo de la carretera. De defensor de los terratenientes, el instituto armado pasaba a convertirse él mismo en terrateniente. Los indios eran, mientras tanto, reasentados en cooperativas que funcionaban bajo un régimen cuartelario y donde la distribución de comida era cuidadosamente controlada. Progresivamente grupos de indios comenzaron a cooperar con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). El EGP lanzó una ofensiva a finales de 1976 en el Departamento de Quiché y en la misma capital, donde dinamitó el Hotel Sheraton, propiedad del conocido jefe de bandas de extrema derecha Jorge Kong. En 1977 secuestró al Embajador de El Salvador, y en 1978, al ex Ministro del Interior de Arana.

(4) Nadie escapaba del terror. Guatemala se transformaba en una verdadera «societas sceleris». Miembros de la élite también desaparecían. A medida que la crisis económica se instalaba —desplome de precios del café y azúcar, ascenso imparable del petróleo y alimentos, desaparición del turismo— auténticas mafias de militares y empresarios declararon la guerra a verdaderas bandas de gangsters de empresarios y militares. Exportadores de productos agrícolas contra importadores de alimentos o productos terminados. Banqueros contra industriales acostumbrados a producir en régimen de monopolio. Rebatía general para apropiarse de las tierras posibles yacimientos de petróleo, tungsteno, níquel. La oligarquía guatemalteca comenzó a matarse con fruición. Dado su historial, nada de extraño. La avaricia rompía el monolitismo militar. Esto era más grave. Los generales, al frente de ejércitos privados, se disputaban los puestos y los despojos. Como auténticos zopilotes.

(5) En enero de 1979, el conocido político de tendencias centristas, Fuentes Mohr, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores, secuestrado por la guerrilla una vez y por el Ejército otra, fue asesinado. En junio, otro conocido político, Colom Argueta, cae bajo las balas. Ambos asesinatos cancelaron cualquier posibilidad de diálogo del gobierno con la izquierda moderada, especialmente porque se sabía que el General Cansinos Barrios, Jefe de Estado Mayor, estaba detrás de los mismos. Cuando le llegó el turno a Cansinos, emboscado y muerto en junio de 1979 por el EGP, la organización guerrillera declaró que se trataba de una venganza por los asesinatos de Fuentes y de Colom.

Doscientas mil personas salieron a la calle en el entierro de Colom Argueta en claro rechazo del terrorismo de Estado y los crímenes políticos. El Jefe de la Policía, Chupina, encarceló a Guillermo Colom Argueta por intentar obtener justicia en el asesinato de su hermano. Una vez liberado optó por refugiarse en la Embajada de Venezuela y abandonar el país.

(6) En junio de 1980 se atentó con la vida del líder estudiantil Manuel Valvert en el interior de la Universidad de San Carlos. Dos de los tres asaltantes fueron capturados por los estudiantes y

resultaron ser un número de la policía de Hacienda y un soboficial del servicio de información del Ejército. Los estudiantes sacaron este último a la puerta de la Universidad, lo rociaron con gasolina y prendieron fuego. A finales de año, 86 profesores de la Universidad, 389 estudiantes y varios trabajadores del recinto universitario habían sido asesinados. El rector, Saúl Osorio, huyó del país.

(7) Los refugiados aumentaron las filas de los indigentes. Se perdió el importante mercado hondureño. Y el país se encontró frente a sus viejos problemas sin nuevas ideas. Uno de aquéllos consistía en que, en medio de una floreciente agricultura de exportación de café, algodón y azúcar, la población tenía una de las cinco dietas más pobres del mundo, sólo superior en el Continente a la de Haití. Otro, también paradójico, que en medio de una acelerada industrialización, no disminuía el paro, ya que las nuevas industrias empleaban abundante capital y escasa mano de obra. A comienzos de los setenta el desempleo alcanzaba al 20% de la población y la inflación llegaba al 60% en 1974. Tan desesperada era el ansia de tierra que se sembraban hasta los solares de la capital con la esperanza de poder recoger el maíz antes de la expulsión por el propietario.

(8) Cuando a Molina se le ocurrió la brillante idea de promocionar el turismo organizando la elección de Miss Universo en San Salvador en 1975, gastándose cerca de dos millones de dólares, y los estudiantes protestaron por el dispendio, la Guardia Nacional disparó sobre los manifestantes dejando 12 muertos y muchos heridos. De 1972 a 1975 desaparecieron 150 profesores sospechosos de realizar actividades sindicales. Varios párrocos eran también asesinados.

(9) Norteamericanos que residían en San Salvador grabaron en cassette las conversaciones entre el cuartel general del PCN y los diferentes colegios electorales, guardados por los hombres del ORDEN, dando instrucciones de cuántas papeletas de voto debían introducir en favor del General Romero. A la protesta por el previsible resultado del recuento, celebrada en la Plaza de la Libertad, frente al Palacio Nacional y la Catedral, respondió el Gobierno con fuego de ametralladora contra los manifestantes. Doscientas personas perdieron la vida y Claramount fue invitado a tomar la ruta del exilio.

(10) Los asaltos a bancos y empresas así como los secuestros proporcionaban a la guerrilla abundancia de numerario. Y los asesinatos, publicidad. El Secretario de la Presidencia en 1974, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Director de Turismo, el ex Presidente Aguirre, el Rector de la Universidad Nacional, impuesto por el Gobierno, todos ellos caían asesinados en 1977.

(11) El asesinato del Padre Grande tuvo lugar en un momento en el que el Congreso norteamericano estaba celebrando una sesión dedicada al examen de la violación de derechos humanos en El Salvador. Y con un nuevo Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, mucho más enérgico y valiente que su predecesor. Molina protestó por la «interferencia» en asuntos internos del Congreso norteamericano y, en marzo de 1977, «por razones de dignidad nacional» renunció a toda ayuda militar de los Estados Unidos. Monseñor Romero, por su parte, convocó manifestaciones, a pesar del estado de sitio, dirigió una carta al Presidente Molina exigiendo una investigación, indicó que dejaría de asistir a todo acto oficial hasta que los crímenes fueran aclarados, y anunció que las Escuelas Católicas cerrarían durante tres días y los alumnos serían enviados a sus casas con notas para reflexionar sobre la persecución de la Iglesia*. La oligarquía gritó «sacrilegio», y para el común de los salvadoreños el Arzobispo se convirtió en «Monseñor». Una oficina permanente en el Obispado para seguir la violación de los derechos humanos y un artículo en el semanario Orientación, de la Archidiócesis, junto con la transmisión por radio de sus sermones, se convirtieron en factores importantes en la lucha por recuperar dignidad y seguridad.

* Robert Armstrong-Janet Shenk, *El Salvador. The face of revolution*. South end Press, Boston, 1982.

(12) La producción se tornaba mientras tanto claramente agroexportadora. De 1952 a 1965, la producción de frijoles y arroz, ambos alimento básico de la dieta nacional, declinó en un 8% y un 18% respectivamente, mientras que en el mismo periodo la de café aumentó en un 256%, el banano en un 163% y el algodón en un 2.440%.

El 70% de las principales empresas hondureñas fueron creadas entre 1950 y 1968 y para 1969 la inversión norteamericana en este tipo de empresas era de 200 millones de dólares de un total de 500 millones. A pesar de esta inversión, las compañías norteamericanas sacaron más del país después de 1963 de lo que en él invirtieron: en 1968, 22,4 millones de dólares, y en 1969, 17,7 millones de dólares. Los Estados Unidos continuaban controlando la industria del banano, la minería y los dos mayores bancos, el Banco de Honduras y el Banco Atlántica. A mediados de los setenta, el 80% de las exportaciones se encontraba en manos de extranjeros.

(13) El Gobierno de Costa Rica cuenta con una larga tradición de respuesta a la gran cantidad de grupos de presión que, en forma de organizaciones sociales, proliferan en el país. La táctica seguida inicialmente por tales organizaciones es la de persuasión y, si ésta falla, la confrontación en forma de actos de desobediencia civil, demostraciones públicas y huelgas. El Gobierno ha respondido tradicionalmente buscando un compromiso y rechazando la represión.

Los sindicatos son el grupo de presión más importante. Tres son las grandes confederaciones sindicales. La Federación Cristianodemócrata, con un 4% de la fuerza laboral organizada del país. La Confederación Democrática de Trabajadores, afiliada a la ORIT, de inspiración socialdemócrata, con un 16% de los trabajadores sindicados; su rama desgajada, la CATD, con un 8%, ambas ligadas al Partido de Liberación Nacional. Y la Confederación General de Trabajadores, de inspiración comunista y con un 33% de la fuerza de trabajo, especialmente fuerte entre los trabajadores de las bananeras y los funcionarios públicos.

Otros sindicatos importantes son los de maestros y empleados del sistema telegráfico y telefónico. Los colegios profesionales actúan como cadena transmisora de los sectores medios. Y las asociaciones empresariales, tales como la ACOGE, ANFE, las Cámaras de Comercio e Industria, defienden los intereses de la empresa privada y se oponen al intervencionismo estatal en la economía.

(14) Nicaragua era dependiente de sus exportaciones de café y algodón y del mercado norteamericano, que absorbía el 40% de sus exportaciones y suministraba la mitad de las compras nicas en el exterior. La mayoría de las exportaciones procedía de latifundios gigantes. El 2% de las haciendas ocupaba prácticamente la mitad de la superficie cultivable. La mecanización de los latifundios había reducido la población agrícola de un 67% en 1950 a un 60% en 1963. El resultado fue el crecimiento de las «villa miseria» en las ciudades y la ocupación ilegal de tierras en barbecho. Sin títulos para defenderse de los propietarios, los ocupantes ilegales caerían pronto en la órbita de los movimientos revolucionarios.

(15) Para 1970 se calculaba que la familia Somoza tenía una fortuna de unos 500 millones de dólares, la mitad de la producción agrícola del país y vastas proporciones de su industria. Pero mientras los líderes del Tercer Mundo pedían y protestaban, Somoza siempre hacía lo que agradaba a Washington. Era un descanso. Quizá por ello, Nixon envió como Embajador a Managua a un amigo, Turner B. Shelton, famoso por su servilismo y porque el fin de su larga estancia en Nicaragua (1970-1975) se produjo a consecuencia de artículos de prensa publicados bajo la conocida firma de Jack Anderson. En 1972, Nixon recompensó a Somoza con el simbólico acto de dar por expirado el Tratado Bryan-Chamorro de 1916, que había concedido a los Estados Unidos el derecho exclusivo a construir un canal interoceánico a través de Nicaragua.

(16) En mayo de 1972 se hace cargo temporalmente del poder una junta que contaba con el acuerdo del líder del Partido Conservador, Aguero, a cambio de su presidencia. El nuevo Arzobispo de Managua, Obando, denunció el arreglo y boicoteó las ceremonias de transferencia del poder.

Una Asamblea Constituyente preparó las modificaciones necesarias para que Somoza pudiera presentarse de nuevo a las presidenciales de 1974. A medida que éstas se aproximaban se enjuició a quienes predicaban el boicot y se declaró ilegales a nueve pequeños partidos. El diario La Prensa, de Pedro Joaquín Chamorro, publicó artículos sobre la corrupción después del terremoto y los Obispos publicaron una carta pastoral denunciando los intentos de voto obligatorio.

(17) La huelga general y el asesinato de Chamorro reactivaron la moral sandinista y una serie de ataques contra la Guardia en Jinotepe, Masaya y San Marcos, así como en la frontera con Costa Rica, demostró que el FSLN no estaba acabado y que la disensión interna no impedía la acción. El 22 de agosto de 1978, 25 sandinistas disfrazados con uniformes de la Guardia se apoderaron del Palacio Nacional y de 70 rehenes, entre los cuales el Ministro del Interior. El líder, Edén Pastora negoció a través de Mgr. Obando la libertad de más de 60 prisioneros políticos, un rescate de medio millón de dólares y un vuelo a Panamá con parte de los rehenes. Uno de los prisioneros liberados era Tomás Borge, que durante más de un año había sido sometido a tratamiento de conversión en vegetal humano, y que se transformaría en el más firme partidario de la tendencia guerra popular prolongada.

(18) El 20 de junio de 1979, el reportero de la cadena de TV ABC, Bill Stewart, fue obligado a descender de su coche por soldados de la Guardia Nacional, forzado a arrodillarse y disparado en la cabeza. La cámara de Stewart filmó el asesinato y a las pocas horas el mundo pudo observar con sus propios ojos la brutalidad que los nicaragüenses habían padecido durante años.

(19) La junta rechazó partes esenciales de las propuestas de Carter. Aceptó que no hubiera ejecuciones masivas después del triunfo sandinista, como así ocurrió, permitiendo la salida de conocidos somocistas hacia Honduras y los Estados Unidos. Rechazó que la Guardia «purgada» de sus miembros más notorios jugara ningún papel en el futuro político del país. E igualmente rechazó la incorporación a la junta de dos elementos «moderados» a elegir entre Adolfo Calero, el General Julio Gutiérrez, el Conservador Emilio Álvarez, los liberales Ernesto Fernández y Mariano Fiallos y Jaime Chamorro, del diario La Prensa. Ante la insistencia de México y Venezuela, a los que acudió Carter en petición de ayuda, los sandinistas aceptaron el nombramiento de un Gobierno de 18 miembros con un solo sandinista, mientras que el resto eran profesionales y hombres de negocios.

(20) Después de varias escalas, Somoza y la señora Sampson se instalaron en una auténtica fortaleza en el Paraguay, un país que Somoza había descrito premonitoriamente en cierta ocasión como «el último lugar de la tierra para la peor gente del mundo». Un «contrato», o la solidaridad revolucionaria, fue sin duda la causa de que su Mercedes blindado, con él dentro, volara hecho pedazos por un tiro de bazzoka en Asunción en 1980.

IX

«No pasarán»

«¿Es que soy acaso el guardián de mi hermano?»

Génesis 4

La doctrina latinoamericana es así rigurosamente sus conclusiones. Su candidato había triunfado. En El Salvador y Guatemala, los estados de los países se concluyeron con el apoyo de las armas de fuego, apuntando el cielo. La campaña a favor de los derechos humanos parecía a la historia. Ahora se le iba a celebrar las conmemoraciones de lo que era el momento del orden.

Reagan llegó a la Casa Blanca con una idea de preparar y argumentar por poderes instructivos. Internacionalmente volvió a ser el número uno. Se esperaba un tipo irreprochable el experimento político a través de su agente cubano. «Eis»

La entrada de los sandinistas en Managua, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos y la ofensiva general de la guerrilla salvadoreña contra San Salvador son tres acontecimientos que se producen en el intervalo de dos años (1979-1981) y que influyen decisivamente en el rumbo tomado por los países centroamericanos en la década de los ochenta.

La personalidad del Presidente Reagan, y su especial manera de entender el papel de los Estados Unidos en el mundo, a modo de cruzado de la libertad frente a las «fuerzas de la opresión», es quizá el dato causal de mayor importancia. Su proyección hacia Centroamérica se produce, sin embargo, en un contexto de crecientes dudas y oposición de los países latinoamericanos, y de reticencias de los socios europeos de la Alianza Atlántica a endosar importantes aspectos de la política norteamericana en el área.

Parece, pues, conveniente estudiar sucesivamente la que se ha dado en llamar Doctrina Reagan para Centroamérica, contrastándola con la solución latinoamericana, es decir el proceso pacificador de Contadora, y con la negativa al endoso de Europa Occidental.

I. La Doctrina Reagan

El fin de la guerra del Vietnam, la invasión de Afganistán y la ocupación de la Embajada norteamericana en Teherán, crearon el entorno adecuado para que llegara a la presidencia norteamericana quien prometía el triunfo de las pasadas glorias de la nación sobre las amenazas del futuro.

Ninguna área de política exterior parecía más urgente que la de Centroamérica, y en ninguna sería tan visible el tradicionalismo de las fuerzas que apoyaron la candidatura republicana en 1980. Durante la campaña, Reagan había deplorado la «toma del poder en Nicaragua por los Marxistas Sandinistas», así como sus intentos de desestabilización de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y Richard Allen, quien más tarde sería asesor del Presidente en el Consejo Nacional de Seguridad, había añadido que la nueva Administración pararía los pies a las «bandas de merodeadores en Centroamérica, armadas y financiadas por un Fidel Castro teledirigido por la Unión Soviética»¹.



¹ LaFeber, *Inevitable Resolutions*. W. Norton and Co. London, N. York, 1984.

La derecha latinoamericana sacó rápidamente sus conclusiones. Su candidato había triunfado. En El Salvador y Guatemala, los estallidos de los petardos se confundieron con el detonar de las armas de fuego, apuntando al cielo. La campaña a favor de los derechos humanos pasaría a la historia. Ahora sí se iban a enterar los «comunistas» de lo que era el «respeto al orden».

Reagan llegaba a la Casa Blanca con una idea fija preparada y argumentada por poderosas instituciones. Norteamérica volvería a ser el «number one»². Se excavaría un foso infranqueable al expansionismo soviético a través de su agente cubano. «No pasarán».

De los principales organismos que racionalizaron los principios básicos de la nueva política destacan el Center for Strategic and International Studies de la Universidad de Georgetown de Washington, de donde procede Jeanne Kirkpatrick, primer Embajador de Reagan ante Naciones Unidas; el Council for Inter-American Security; el Comité de Santa Fe; la Heritage Foundation; el American Enterprise Institute, y el Hoover Institution on Peace, Revolution and War.

No estaba apenas aún sentado Reagan en el despacho oval de la Casa Blanca cuando su Secretario de Estado Haig declaró a los aliados europeos de la OTAN que una «campaña bien orquestada con la intención de transformar la crisis interna de El Salvador en una confrontación progresivamente internacionalizada» se estaba llevando a cabo. No se repetirían los errores del Vietnam. En lugar de resolver los problemas de cada país centroamericano uno por uno, la Administración pensaba atacar el problema de raíz. La raíz se encontraba en Cuba, estado vasallo de la Unión Soviética. El Subsecretario para Asuntos Interamericanos, Thomas Enders, acusó repetidamente a Cuba de unir las facciones revolucionarias, como había ocurrido con los diversos grupos constitutivos del FSLN, con el fin de establecer más regímenes marxista-leninistas en el hemisferio. No le faltaba razón a Enders al afirmar que Cuba había apoyado con entregas de armas a los sandinistas. Pero callaba que otros países, como Venezuela y Panamá, también habían apoyado, y en mayor cantidad, a los sandinistas.

El mayor esfuerzo de la Administración Reagan para vender su versión de los acontecimientos centroamericanos salió a la luz en febrero de 1981 mediante un «White Paper» publicado por el Departamento de Estado en el que se trataba de demostrar la intervención de Cuba y la Unión Soviética en El Salvador. El documento no convenció a nadie. El Departamento de Estado preparó entonces un segundo documento, corrigiendo los errores del primero, y que corrió su misma suerte. Nadie dudaba que tanto Cuba como la Unión Soviética estaban muy interesados en el proceso revolucionario centroamericano. Pero muy pocos creían que la mayoría de las armas de los guerrilleros fueran proporcionadas por el bloque soviético, ni que el comunismo internacional fuera el principio aglutinante en torno al cual se agrupaban las guerrillas. La definición de la crisis centroamericana de Reagan-Haig no explicaba por qué la Iglesia Católica, México, Venezuela y varias otras organizaciones contrarias al comunismo se oponían a la operación de cirugía militar que la nueva Administración deseaba aplicar.



² P. Schori, *El desafío europeo en Centroamérica*. EDUCA, 1982, San José.

En mayo de 1981 tuvo lugar ante el Pentágono la manifestación más grande contra la guerra desde la época del Vietnam. Varias decenas de miles de personas se concentraron para protestar contra la política centroamericana de la Administración Reagan. El ex congresista Bela Abzug resumió el sentimiento de los manifestantes en las siguientes palabras: «Los mismos locos que nos arrastraron a la guerra de Vietnam, dirigen ahora la guerra en El Salvador»³. Una organización a escala nacional, la «Coalición para una nueva política exterior y de seguridad», copiada del antiguo movimiento contra la guerra del Vietnam, comenzó a trabajar como grupo de presión ante Congresistas y Senadores.

Dado el calibre de las resistencias internas e internacionales a la nueva política centroamericana, se podría preguntar la razón por la que la Administración norteamericana se empeñó en el «sostenella y no enmendalla». La razón sería bien simple. Tanto su historial como su ideología había producido un autoconvencimiento en la nueva Administración de que los soviéticos eran la causa de la mayoría de los problemas del mundo, incluido Centroamérica. Y si los Estados Unidos no podían resistir la agresión comunista en su propio «patio trasero», ¿quién los iba a tomar en serio, confiar en su poderío, sentirse protegido con su alianza? El mundo tenía que percibir que al «débil, errático y abandonista» Carter, había sucedido un Presidente dispuesto a utilizar a fondo la inmensa potencia del Estado más poderoso de la Tierra. La negociación con las fuerzas revolucionarias demostraba falta de convicciones o de seguridad. El despliegue del poder sería preferido a la mesa de negociación.

Tal lenguaje y forma de pensar reproducen fielmente el Documento de Santa Fe, en el que se leen cosas como «las Américas se encuentran bajo un ataque externo e interno... los Estados Unidos están comprometidos en la III Guerra Mundial... la distensión es la muerte».

Cualquier tendencia hacia el pensamiento político procedente del Departamento de Estado fue abortada. Una purga de grandes proporciones afectó a una parte considerable de los diplomáticos con experiencia en asuntos latinoamericanos mientras que los puestos vacantes eran tomados por oficiales del Ejército o personas ligadas profesionalmente a los temas de seguridad. Fiel reflejo de la tendencia de la nueva política. Los nuevos puestos serían para el Teniente General Gordon Sumner, el General Vernon Walters, Robert McFarlane, antiguo oficial de Marina. Y las Embajadas para personas, como Dean Hinton, Embajador en El Salvador y ex Director de la AID en Guatemala, cuando los Estados Unidos financiaban a las fuerzas guatemaltecas en actividades antiinsurgentes; o John Negroponete, Embajador de Honduras, que se señaló como «halcón» durante las negociaciones de paz de Vietnam; o Anthony Quainton, Embajador en Nicaragua, previamente jefe de la oficina en Washington para combatir el terrorismo.

Además de enfocar el problema centroamericano a través del prisma de la guerra fría, la nueva ideóloga de la Casa Blanca, la señora Jeanne Kirkpatrick, la Juana de Arco de Occidente⁴, intentó racionalizar la nueva línea de acción acudiendo a la distinción entre regímenes autoritarios y totalitarios. Los autoritarios trataban de preservar sociedades

³ Citado por P. Schori, *op. cit.*

⁴ Así definida por P. Schori.

tradicionales y mantenían sistemas de economía abierta, capitalista. Los totalitarios intentaban controlar cada parcela de la vida social, incluida la económica. Por ello eran nocivos. En palabras de Walter LaFeber, una graduación en anticomunismo y una actitud de calurosa acogida a la inversión extranjera se constituían en la piedra de toque de la ayuda o de la hostilidad de Washington hacia los diferentes gobiernos. La defensa de las reglas del juego del libre mercado era lo esencial. «Volveremos al principio fundamental de tratar a un amigo como a un amigo, y como enemigos a los que se hayan designado como tales.»

Thomas Enders delinó la política centroamericana de la nueva administración en dos audiencias ante el Congreso norteamericano el 1 y el 2 de febrero de 1982. No existía ni una sola referencia a los derechos humanos ni una declaración de intenciones en favor de los sistemas democráticos. El punto esencial era la «defensa de los intereses de la seguridad nacional»⁵.

A finales de 1981, Washington estaba embarcado en tres líneas de acción en Centroamérica. La primera consistía en aumentar la ayuda militar a la Junta de El Salvador, al Gobierno de Honduras y a los Generales de Guatemala, los mismos a los que Carter había suspendido la ayuda por el peculiar estilo guatemalteco de «tratar» no sólo la insurgencia, sino también la disidencia. La segunda consistía en una táctica de acoso al régimen de Managua, vía económica mediante el embargo y vía militar mediante la «contra», no quedando claro si los fines estratégicos perseguidos eran forzar a Managua a abandonar la consolidación de su revolución o, más sencillamente, derribar el nuevo régimen nicaragüense. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) era la tercera línea.

1.1. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe

El propio Presidente Reagan anunció ante la OEA que los Estados Unidos habían preparado un programa de ayuda económica basado en el comercio y la inversión, y que funcionaría a partir de la magia del mercado creando las condiciones bajo las cuales la creatividad, la empresa privada y la autoayuda podrían florecer. Examinemos brevemente los tres elementos fundamentales de la iniciativa: el comercio, la inversión privada y la ayuda.

De ellos, el más importante es una llamada zona de libre comercio entre los Estados Unidos y la Cuenca del Caribe, consistente en la eliminación de las barreras arancelarias a todos los productos exportados desde los países de la Cuenca hacia el mercado norteamericano durante un período de doce años, con la excepción de las fibras textiles, confecciones textiles y el azúcar. Se trataría así de una zona de libre comercio unidireccional (one way free trade).

Conviene, sin embargo, señalar que el 87% de las exportaciones de la región hacia los Estados Unidos ya estaban libres de aranceles en virtud del Sistema Generalizado de

⁵ P. Shori, *op. cit.*

Preferencias (SGP), de modo que sólo el 13% de las exportaciones tenían posibilidades de favorecerse de las nuevas facilidades.

Las barreras arancelarias no son, por otra parte, los únicos instrumentos de política comercial. La UNCTAD ha identificado aproximadamente más de 700 barreras no arancelarias, entre las cuales las subvenciones gubernamentales y las normas técnicas y sanitarias. Por otra parte, la libre entrada al mercado norteamericano no era automática, sino que operaba después de una negociación bilateral y quedaba sujeta a un mecanismo de salvaguardia. Además, siendo las economías de los países de la Cuenca, economías de «postre», dependientes de un reducido número de productos primarios de exportación y de sus oscilaciones en el mercado mundial, la ICC no ofrecía ninguna solución para amortiguar las caídas desastrosas de los precios.

Los Estados Unidos exportaron a los ribereños de la Cuenca unos 6.000 millones de dólares en 1982 e importaron 10.000. Las posibilidades de incrementar las exportaciones al mercado norteamericano a base de productos no tradicionales y con un límite en cuanto a posibilidades de beneficiarse del desarme arancelario, reducido a un 13% sobre la totalidad, no parecían muy halagüeñas.

El segundo elemento de la ICC, otorgamiento de incentivos fiscales para la inversión, trataba de estimular al capital privado norteamericano para instalarse en la zona.

La ICC ofrece el estímulo de un crédito fiscal por cinco años consistente en exceptuar del pago de impuestos hasta el 10% del total de activos fijos en la inversión de capital. También enfatiza la importancia de una compensación rápida y adecuada en caso de nacionalización, la repatriación irrestricta de las ganancias y un tratamiento a los inversionistas norteamericanos con cláusula de nación más favorecida.

Se prevé, además, un mayor apoyo del gobierno norteamericano a la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), organismo de cobertura del riesgo a las inversiones norteamericanas, en países subdesarrollados mediante seguros hasta un 90% contra riesgos políticos y financieros.

A pesar de todos los incentivos, no parecía posible un amplio movimiento inversionista en Centroamérica dado el auge de la lucha revolucionaria por las mismas fechas. La maximización de las ganancias es sin duda un incentivo, pero la ausencia de garantías políticas constituyó un elemento disuasor de importancia.

Según datos ofrecidos por el gobierno norteamericano, hacia 1980 las inversiones norteamericanas en la Cuenca sumaban 12.000 millones de dólares que, incrementados con la inversión financiera en centros internacionales como las Bahamas, Islas Caimán y Panamá, alcanzaría aproximadamente 22.474 millones de dólares⁶. La relación entrada-salida de capital por cada dólar invertido en la Cuenca para los años 1979-1980 supuso la

◆
⁶ Lia Añé Aguiloché, «Análisis Crítico de la ICC»,
 Revista Centroamericana de Economía, núm. 15,
 UNAH, Tegucigalpa.

remisión de 2,24 dólares en concepto de ganancias, calculándose que las transnacionales obtuvieron en estos países una tasa de ganancia del 23% respecto al capital desembolsado.

El tercer elemento de la ICC es la ayuda financiera. Reagan presentó al Congreso un programa de ayuda de emergencia de 350 millones de dólares para el año fiscal 1982 con la finalidad prioritaria de financiar importaciones del sector privado y corregir desequilibrios de balanza de pagos a corto plazo.

Según la CEPAL, para resolver los problemas económicos de Centroamérica en esas fechas serían necesarios no menos de 20.000 millones de dólares en ayuda para el desarrollo, lo que significaba un flujo anual no menor de 2.000 millones dólares anuales. Por otra parte, la deuda externa de los países de la Cuenca en 1982 alcanzaba los 22.000 millones de dólares, y el servicio de la deuda alrededor de los 2.500 millones dólares, es decir aproximadamente el 25% de sus ingresos por exportación.

Los 350 millones de ayuda financiera adquieren, a la luz de las cifras antes señaladas, su verdadera dimensión.

El programa de ayuda hacia la región se inició en 1980, con un total de 324 millones de dólares, llegando a 419,6 millones dólares en 1981 y 474,6 millones de dólares en 1982. Sin embargo, a medida que la crisis centroamericana fue agudizándose, la ayuda se fue concentrando en los países donde peligraba la situación estratégica de los Estados Unidos. La distribución propuesta al Congreso de la ayuda complementaria de 350 millones de dólares para el año 1982 fue la siguiente:

	Millones de dólares
El Salvador	128
Costa Rica	70
Honduras	35
Jamaica	50
República Dominicana	40
Caribe Oriental	10
Belice	10
Haití	5
Instituto Americano Desarrollo	
Sindicalismo Libre	2

La mayor parte de la ayuda (el 40%) está concentrada en un solo país, El Salvador, pese a lo cual, y según estudio de la CEPAL, en 1982, y por tercer año consecutivo, la actividad económica salvadoreña experimentó un descenso, del 2% del PIB esta vez.

Por otra parte, la ayuda militar a la Cuenca para el año fiscal 1983 alcanzó la cifra de 388 millones dólares, aproximadamente el 90% del total asignado al resto del continente. Y la concentración en El Salvador (166 millones de dólares frente a los 62 millones para Jamaica, 60 para Costa Rica, 40 para Honduras, 38 para el Caribe Oriental y 10 para República Dominicana) representa un elevadísimo 43%. Al mismo tiempo, mientras las

ventas de armamento a los países centroamericanos y del Caribe fueron de 9,2 millones dólares en 1980, llegaron a 101,3 dólares en 1983⁷.

Desde que en 1981 se comienza a especular en torno a la ICC, queda claro que la misma es un instrumento para canalizar ayuda preferente a países como El Salvador y aislar económicamente a otros, como Cuba, Nicaragua y Granada. En tal sentido, las discusiones más fuertes se presentaron entre los gobiernos de Méjico y Estados Unidos, al indicar el primero que el proyecto no debía tener un carácter discriminatorio y que los aspectos económicos debían quedar desvinculados de los ideológicos y militares. Durante las conversaciones preliminares al lanzamiento del proyecto el 24 de febrero de 1982 Estados Unidos realizó grandes esfuerzos para que el mismo se convirtiera en un proyecto conjunto de Canadá, Méjico y Venezuela, y en la reunión de Nassau de estos tres países con los Estados Unidos se evidenciaron las diferencias de criterio respecto a las características que debía tener un verdadero proyecto de ayuda a los países centroamericanos y del Caribe.

Finalmente, la ICC se presenta como un programa unilateral, mientras que los países del llamado «grupo de Nassau» decidieron ofrecer su ayuda de forma diferenciada. Canadá se comprometió a proporcionar una ayuda económica de 105 millones de dólares durante los siguientes cinco años. Méjico y Venezuela firmaron con los países centroamericanos y del Caribe el Acuerdo de San José el 2 de agosto de 1980, por el cual se comprometían a proporcionar 320.000 barriles diarios de petróleo. El suministro se ha llevado a cabo mediante contratos comerciales por separado con nueve países —Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Jamaica, Haití, Panamá y República Dominicana— quedando establecido que el 30% de sus facturas petroleras se transformaba en crédito a una tasa de interés del 4%, y en el caso de que estos créditos fueran utilizados para generar fuentes alternativas de energía, el plazo se alargaba hasta veinte años a una tasa del 1%.

Según cálculos preliminares⁸, el mantenimiento de dicho acuerdo cuesta a Méjico y Venezuela aproximadamente 700 millones dólares anuales, exactamente el doble de la ayuda de emergencia ofrecida por el Presidente Reagan en 1982.

La ICC ha sido objeto de fuertes críticas por parte de algunos países de la Cuenca, de la central obrera norteamericana AFL-CIO y por parte de algunos sectores del Congreso. Éste aprobó finalmente el proyecto en julio de 1983 después de introducir numerosas excepciones —además del azúcar, las fibras y las confecciones textiles, el petróleo y sus derivados, el calzado, carteras, maletas, otras manufacturas del cuero, relojes y piezas de repuesto para relojes, etc.

Parece claro que pretender resolver los problemas del subdesarrollo mediante una reducida liberación arancelaria, algunos incentivos fiscales a favor de las inversiones privadas y la atracción de la inversión extranjera, es un modo parcial de atacar el problema.

◆
⁷ Isabel Jaramilo, *Variaciones Intervencionistas en la Cuenca del Caribe*. CEA, 1983.

⁸ Lia Añé Aguiloche, *op. cit.*

La ICC recuerda de lejos la ambiciosa «Alianza para el progreso» de Kennedy, una alianza para el progreso de vía estrecha. No hay en la iniciativa de Reagan la más tímida referencia a los necesarios cambios para la región más pobre del Continente americano. En su lugar, las fuerzas del mercado aparecen rodeadas de una aureola mágica, a modo de moderno «bálsamo de Fierabrás».

1.2. Ayuda militar y contrainsurgencia

Para 1980, la política norteamericana, acentuaba progresivamente los perfiles militares de la crisis regional.

Durante los años treinta, después de haber usado profusamente de la estaca recomendada por Teodoro Roosevelt, los Estados Unidos, el Buen Vecino, comienza a utilizar preferentemente la presión económica en lo que se llamó la Diplomacia del Dólar. En los cincuenta, la Alianza para el Progreso intentó poner al día y extender la política del Buen Vecino; su resultado fue más bien de tipo «boomerang» ya que, al aumentar las expectativas de las masas y el poder y la riqueza de las oligarquías locales, debilitó los sistemas que se pretendía reforzar.

Los grupos revolucionarios proliferaban, y la respuesta siempre consistía en aumentar el nivel de los compromisos militares. A una escasa o nula preocupación por atajar las verdaderas causas de la revuelta social sucedía un tratamiento quirúrgico de emergencia que arriesgaba la vida del paciente. Al que previamente convenía acicalar mediante una operación de encalado de la fachada democrática. Militarización. Pero legitimada mediante regímenes remozados de purísimo blanco a través de elecciones. Los militares eran un ingrediente vital en la «revolución democrática» que debía operarse en la región. Pero el Gobierno debía ser civil, y las Constituciones respetadas. Los Gobiernos militares debían dejar el paso a los civiles. Aunque, por supuesto, el instituto castrense siguiese, entre bastidores, manejando los resortes del poder. Los civiles, satisfecho el ritual de las elecciones, tendrían a su cargo la liturgia del aparato estatal. Los militares, el poder. Además, al ser formalmente responsables de la gestión pública, los civiles se quedaban con los problemas y con la responsabilidad ante los fracasos. Se respondía así de un solo golpe a las exigencias de legitimación y a las urgencias de eficacia. Golpe maestro.

Los Estados Unidos proporcionaron a Centroamérica más ayuda militar entre 1980 y 1983 que durante los treinta años anteriores combinados. El Salvador, Honduras y Costa Rica no podían vivir en esos mismos años sin la ayuda norteamericana. Guatemala comenzaba a recibirla en 1983, después de seis años de interrupción. Y Nicaragua, sujeta a ataques cada vez más profundos de las crecientes fuerzas de la «contra», se acercaba a Cuba y al Bloque Soviético, iniciando una dependencia que la política de Reagan intentaba precisamente evitar.

La respuesta puramente militar a los movimientos insurgentes no contenía la marcha ascendente de la revolución. Las guerrillas salvadoreñas pasaban de unos 3.000 efectivos en 1981 a cerca de 10.000 en 1984. Y el Ejército sandinista ascendía en los mismos años de 25.000 a 50.000 hombres, al tiempo que se armaban milicias civiles que sumaban los 100.000 encuadrados.

Los esfuerzos de la Administración Reagan por convencer a su opinión pública de lo ajustado de su actuación en Centroamérica no tenían excesivo éxito. Las Iglesias, la comunidad intelectual, grandes sectores con el «síndrome del Vietnam», incluso militares del Pentágono, aireaban sus dudas. En agosto de 1983, Reagan trata de desarmar la creciente oposición del Congreso nombrando una Comisión Bipartidista Nacional sobre Centroamérica bajo la dirección de Henry Kissinger. En enero de 1984, la Comisión publicó un Informe recomendando un programa de ayuda económica de 80 millones de dólares a lo largo de cinco años, reconociendo que las condiciones de vida de las grandes masas centroamericanas eran tan miserables que suponían propicios caldos de cultivo de la revolución, y recetando un sensible incremento de la ayuda militar a Honduras, Guatemala y, en especial, a El Salvador. Destacando la importancia de Gobiernos «legitimados», la Comisión recomendó elecciones, sin mencionar la posibilidad de encontrar una salida negociada ni en el interior de El Salvador ni en Nicaragua, donde veladamente se aconsejaba mantener la ayuda a la «contra».

Según Walter LaFeber, el informe combinaba ideas del tratamiento militar iniciado por Reagan, con la Alianza para el Progreso de Kennedy, y el uso de la CIA en gran escala por Eisenhower.

Mientras tanto, la deuda exterior en Centroamérica crecía más aprisa que los dólares de la ayuda norteamericana, acercándose a los 20.000 millones de dólares en 1984. Para este mismo año se calculaba que la oligarquía centroamericana había evadido unos 5.000 millones de dólares, es decir la cuarta parte de la deuda exterior regional. Y los grados de varios Ejércitos centroamericanos incorporaban una nueva categoría: Teniente, Capitán, Comandante, Coronel y Millonario. Raramente llegaba la ayuda en su totalidad a los fines o destinatarios previstos.

La Administración Reagan escogió la vía militar con el fin de asegurar una rápida victoria frente a las fuerzas de la revolución. Pero al término de seis años, en 1986, las perspectivas de victoria parecían aún lejanas. Y mientras tanto, en Centroamérica, «la noche sigue alta y Morazán ya no vigila».

2. La «contra»

La historia de la «contra» es ya antigua. La resistencia armada al nuevo régimen sandinista es, en su origen, consecuencia del descontento de un sector de la población nicaragüense ante el nuevo régimen sandinista o ante la marcha de la revolución. Pero la «contra» es un fenómeno distinto. Es resultado de la organización, financiamiento, preparación, aprovisionamiento y dirección de esa resistencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Una pública y notoria «operación encubierta» transforma los rebeldes de Managua, dispersos grupos de dudosa combatividad y reducidas posibilidades, en un Ejército guerrillero de dimensiones semejantes al Ejército de Honduras.

— Los grupos sociales nicaragüenses que alimentan originalmente la contra son cuatro. Los guardias somocistas fugitivos de Nicaragua, estimados por los sandinistas en unos 10.000, se instalaron primero en El Salvador o los Estados Unidos, más tarde en

Guatemala y, finalmente, en Honduras. Al ser los primeros grupos armados antisandinistas, su influencia fue y sigue siendo muy importante en el organigrama de la contra, a pesar de la existencia de diversas cúpulas civiles que tratan de mantener formalmente la distinción con los sectores que apoyaron a Somoza y aunque posteriormente se hayan incorporado a la resistencia armada personas que proceden de otros sectores. Pero Enrique Bermúdez, jefe del brazo militar del FDN, es un Coronel de la antigua Guardia. Y ex guardias eran personas decisivas en el nacimiento de la resistencia armada como Pedro Ortega, Noel Ortiz, Mario Morales, Justiniano Pérez y Pablo Emilio Salazar (el ex Comandante «Bravo», asesinado en Tegucigalpa en octubre de 1979 por un comando dirigido al parecer por Lenin Cerna, actual Director de Seguridad del Estado de Nicaragua). También destaca entre los «fundadores» Ricardo Lau Castillo, «el chino Lau», creador de la Legión 15 de Septiembre en 1980 en Guatemala, donde se relacionó con los escuadrones de la muerte locales, y que más tarde llegaría a Tegucigalpa para ocupar el cargo de Jefe de Inteligencia del Coronel Bermúdez. Coincidiendo con su asentamiento en Honduras, eran los tiempos del General Álvarez como Jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, aparece el fenómeno de las «desapariciones» en la escenografía política hondureña. Su nombre aparece también relacionado con el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Mgr. Romero. Lau sería expulsado de Honduras en enero de 1985, aunque al parecer regresa ocasionalmente a sus antiguos lares de Tegucigalpa.

— El segundo grupo procede del sector burgués, un sector que en algunos casos había luchado contra Somoza pero que, progresivamente, se fue desencantando del régimen sandinista. Este grupo no se exilió inmediatamente después de la llegada de los sandinistas al poder, sino que en varios casos colaboró con el nuevo régimen en sus momentos iniciales. Su incorporación a un grupo que ya venía funcionando y constituido fundamentalmente por ex guardias somocistas adiestrados por la CIA explica su reducida influencia ante los «comandantes» de la contra. Su papel es más bien legitimador ante la opinión norteamericana y mundial, y su función, la de servir de caja de resonancia de las decisiones tomadas a nivel de «comandantes».

— Los indígenas miskitos, a los que se agrupan otras dos reducidas etnias, los sumos y los ramas, constituyen el tercer grupo de resistencia armada. Estos indígenas siempre habían vivido al margen de los blancos y ladinos de Managua. Cuando el FSLN trató de integrar a estas poblaciones a la vida nacional, desarrollando una campaña de alfabetización, los miskitos solicitaron que fuera en su propia lengua y no en castellano; y cuando se intentó desde Managua alterar el tradicional sistema de tenencia de la tierra, decidido por los Consejos de Ancianos, comienzan los incidentes que producen muertes, encarcelamientos de pastores de la Iglesia Morava, y éxodo hacia la Mosquitia hondureña. En 1981, el líder Steadman Fagoth crea la organización guerrillera Misura, mientras que Brooklyn Rivera se convierte en jefe de la organización de sumos Misurasata. La Misura instala sus campamentos en Rus Rus, cerca del río Coco, y desde allí realiza funciones de hostigamiento en la Mosquitia nicaragüense, zona de selva casi virgen y prácticamente des poblada.

— El cuarto sector vendría constituido por quienes consideran que la revolución no ha aportado más que escasez, limitación de las libertades (especialmente después del régimen de excepción establecido en 1982), campesinos expropiados o maltratados por sospechas de colaboración con la contra, jóvenes que se niegan a un servicio militar

obligatorio en una situación de guerra de guerrillas de la contra, activistas católicos descontentos con el régimen, etc.

La transformación de todos estos grupos en un Ejército guerrillero de dimensiones similares a las de cualquier país centroamericano se debe a la acción de Washington. Cuando el General Álvarez Martínez llega a la jefatura de las Fuerzas Armadas hondureñas en la primavera de 1981, Enrique Bermúdez y Ricardo Lau fueron autorizados a trasladar el cuartel general de la Legión 15 de Septiembre de Guatemala a Tegucigalpa. Los primeros campamentos de guerrillas antisandinistas se habían establecido en Honduras en 1980 en Danlí, San Marcos de Colón y Choluteca, y sus operaciones en la región fronteriza con Nicaragua eran de naturaleza muy limitada.

Tras la llegada de Reagan a la Casa Blanca y del General Álvarez a la Jefatura de las Fuerzas Armadas de Honduras se constituye un «core group» o grupo central dirigido por Thomas Enders, quien, desde los Estados Unidos, planifica conjuntamente con la CIA —Duane R. Claridge («Dewey»)—, el Departamento de Defensa —Néstor Sánchez— y el Consejo Nacional de Seguridad —Coronel Oliver North— los objetivos de la «contra».

La tarea fundamental era definir el contenido de la nueva política de presión norteamericana sobre Nicaragua, sobre todo después del fracaso del viaje de Thomas Enders a Managua en agosto de 1981.

El punto de vista que prevaleció fue el del Director de la CIA, William Casey, amigo personal de Reagan, que recomendó el inicio de operaciones secretas paramilitares.

La National Security Decision Directive número 17, firmada por Reagan en noviembre de 1981 asignaba 19 millones de dólares a un conjunto de operaciones, algunas abiertas y otras secretas, encaminadas a forzar a los sandinistas a cambiar su rumbo político. El documento preveía aumentar la ayuda militar y económica a los países aliados en Centroamérica, el inicio de una cadena de maniobras militares norteamericanas en la región, y una serie de actuaciones encubiertas realizadas fundamentalmente a través de terceros Estados, como Argentina (que proporcionaría el entrenamiento a las guerrillas) y Honduras (que aportaría su territorio). Entre estas últimas se incluía la creación de un frente nicaragüense de oposición al FSLN de corte «nacionalista y antisandinista»; el entrenamiento de personal para operaciones paramilitares y de inteligencia; y el uso posible de agentes de la CIA en operaciones paramilitares, generalmente oriundos de países iberoamericanos, y que recibían el nombre, difícil de igualar, de «Elementos Latinos controlados unilateralmente» (Unilaterally controlled latin assets).

La primera tarea consistía en la creación de un frente sólido de oposición nicaragüense. La FDN se fundó en octubre de 1981, mediante la fusión de la Legión 15 de Septiembre de Bermúdez y Lau con la Unión Democrática Nicaragüense, cuyo líder era José Francisco («Chicano») Cardenal. La fusión fue planeada por los norteamericanos, que dijeron a los líderes civiles de la UDN que necesitaban el brazo militar de la Legión 15 de Septiembre, y a éstos que necesitaban las credenciales democráticas y antisomocistas de la UDN. Y el suministro se aceleró cuando Estados Unidos envió armas nuevas a las Fuerzas Armadas de Honduras y éstas les pasaron sus viejas armas a los «contras».

Con todo ello, la operatividad de las guerrillas dio un salto cualitativo. El 14 de marzo de 1982 volaron dos puentes, uno sobre el río Negro y otro sobre el río Coco; la operación había sido concebida por la CIA como un golpe psicológico y político contra los sandinistas, quienes así lo entendieron: al día siguiente de las voladuras, declararon el estado de emergencia, transformando radicalmente el panorama político interno de la revolución, acentuando la represión y provocando reacciones contrarias de amplios sectores de la población nicaragüense. Comenzaron los ataques contra ciudades (como el ataque a Jalapa, en noviembre de 1981) y los actos de sabotaje económico, orientados sobre todo a impedir la cosecha de café, un producto de exportación cuyas divisas son fundamentales para Nicaragua. Aunque no consiguieron ocupar ninguna población de importancia, los «contras» empezaron a recibir un mayor apoyo popular, debido tanto al aumento de la represión política en Nicaragua como al establecimiento del servicio militar obligatorio y a la escasa fidelidad a la revolución de los campesinos de la zona fronteriza con Honduras. Las fuerzas del FDN crecieron desde más de 600 en 1982, a 4.000-5.000 en marzo de 1983, y a más de 12.000 a comienzos de 1985, aparte de los que seguían a Edén Pastora en el frente sur, y de la guerrilla indígena de la costa atlántica. En 1982, la CIA ya tenía al menos 125 agentes trabajando en la clandestinidad en Honduras, 15 de los cuales entrenaban a los «contra» en tareas de demolición y guerra de guerrillas en la base de Lepaterique, situada muy cerca de Tegucigalpa.

El crecimiento en la dimensión de la guerra secreta contra Nicaragua multiplicó los problemas para sus patrocinadores. La esperanza inicial de Washington, un levantamiento popular en Nicaragua entre los sandinistas propiciado por los apuros económicos, la represión interna, y la existencia de una alternativa de poder personificada por los «contra», nunca pudo realizarse, en buena medida a causa de la incapacidad de los rebeldes para obtener el suficiente apoyo y popularidad entre la población.

La guerra de Las Malvinas debilitó los fundamentos de la operación tripartita —financiación y planificación norteamericana, entrenamiento militar y gestión directa argentina, territorio hondureño—, que había sido inicialmente concebida por la CIA. La Administración Reagan tuvo que hacerse cargo del peso fundamental de la guerra sucia, y ni siquiera en el seno del grupo central existía consenso sobre los objetivos que debían ser perseguidos. Thomas Enders defendía una doble vía —presión militar y voluntad de negociar con los sandinistas—, y cuando se fue imponiendo en la Administración la tesis de que la negociación no era posible salvo si los sandinistas se avenían a realizar concesiones que equivalían a una claudicación ante las presiones norteamericanas, Enders tuvo que dejar su puesto de Secretario de Estado Adjunto por la Embajada en Madrid.

El Congreso, por su parte, estaba empezando a hacer preguntas. El Comité de Inteligencia había aprobado la operación en 1981 —en sesión a puerta cerrada— como parte de una estrategia destinada a forzar a los sandinistas a interrumpir el flujo de ayuda a los rebeldes salvadoreños, pero los ataques contra objetivos económicos en el interior de Nicaragua los hacía aparecer cada vez más como un esfuerzo para derrocar el régimen sandinista, y no sólo para impedirle exportar la revolución.

A lo largo de 1982 surgieron las primeras filtraciones a la prensa sobre la participación norteamericana en la guerra encubierta contra Nicaragua. En diciembre de 1982, la Cámara de Representantes aprobó, por 411 a 0, la enmienda Boland, que prohibía el

financiamiento de operaciones destinadas a derribar al gobierno de Nicaragua, permitiendo sólo las destinadas a interrumpir la ayuda sandinista a los rebeldes salvadoreños. En noviembre de 1983 el Congreso puso un techo de 24 millones de dólares a la ayuda que la CIA estaba autorizada a enviar a los «contras».

Para recuperar la iniciativa política, el grupo central decidió que era necesario renovar la cúpula del FDN para darle una mayor imagen democrática. También se recomendó estrechar los lazos con Edén Pastora. A finales de 1982 se nombró una nueva Dirección Nacional del FDN, seleccionada por la CIA, y formada por Adolfo Calero, Enrique Bermúdez, Alfonso Callejas (antiguo Vicepresidente de Somoza), Edgar Chamorro, Indalecio Rodríguez, Lucía Cardenal de Salazar (viuda de Jorge Salazar) y Marco A. Zeledón. El Estado Mayor del FDN quedó formado por Bermúdez, máximo dirigente militar; el Comandante Echeverry «Fiero», Jefe de Estado Mayor; Tomas «Tito» Fernández, Jefe de Personal; Edgar Hernández, Jefe de Inteligencia; Hugo Villagrán «Visaga», Jefe de Operaciones; Mario «El Diablo» Morales, Jefe de Intendencia; Cáceres, de operaciones psicológicas. En realidad la guerra era dirigida por un Estado Mayor unificado, formado por el Jefe de la estación de la CIA en Tegucigalpa y el oficial norteamericano encargado de las operaciones paramilitares y de entrenamiento realizada por los Estados Unidos con los «contras»; el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, General Gustavo Álvarez; Bermúdez y Echeverry representando al FDN; y Ribeira y Villegas por los argentinos, que todavía no habían desaparecido totalmente de la escena, aunque estaban a punto de hacerlo.

Pero esta reorganización no dio los resultados apetecidos. A lo largo de 1983, la eficacia de las tropas rebeldes fue dudosa, mientras que la imagen de sus dirigentes políticos seguía siendo deplorable. Mientras tanto, la capacidad operativa del Ejército Popular Sandinista (EPS) iba en aumento, tanto por la larga experiencia guerrillera de los sandinistas como por la ayuda del General cubano Arnaldo Ochoa, el cerebro de la guerra de Angola, llegado a Managua en junio de 1983 como asesor militar del EPS.

Ante esta situación, la reacción norteamericana fue intentar hacer directamente lo que los «contras» parecían incapaces de realizar por sí mismos. A partir del verano de 1983, la CIA se involucró en la guerra secreta de una forma mucho más intensa. En agosto de 1983, los sandinistas capturaron documentos de un Comandante de la «contra» que implicaban abiertamente a la CIA y a las Fuerzas Armadas hondureñas en la guerra sucia y los hicieron públicos. El 2 de enero de 1984, un agente de la CIA en Tegucigalpa entregó a Edgar Chamorro una declaración de prensa que afirmaba que el FDN había minado los puertos nicaragüenses. Quienes lo habían hecho habían sido «Elementos Latinos Controlados Unilateralmente» de la CIA. Francia ofreció sus dragaminas a Managua y éste llevó el caso al Tribunal de La Haya, cuya jurisdicción Estados Unidos se negó a aceptar, y que acabaría por fallar a favor de Managua. Ocho barcos extranjeros, incluido un petrolero ruso de 22.000 toneladas, resultaron dañados a consecuencia del minado del puerto de Corinto, cuya refinería fue destruida por Comandos de la CIA a fines de 1983.

A lo largo del año 1983, un cierto número de militares y agentes de inteligencia norteamericanos murieron en Centroamérica, algunos de ellos al parecer mientras intervenían en misiones de combate en territorio nicaragüense. Miembros de la Fuerza de

Tareas 160 de la 101 División Aerotransportada se encontraban entre los muertos, así como agentes contratados por la CIA.

El 20 de septiembre de 1983, George Shultz había conseguido que el Congreso renovara los fondos para las operaciones encubiertas dejando de lado el viejo argumento de la necesidad de interrumpir el flujo de ayuda a la guerrilla salvadoreña y señalando que la guerra sucia continuaría hasta que los sandinistas renunciaran expresamente a apoyar a la «subversión» en otros países. La cadena de incidentes producidos en 1983 y 1984 restó toda credibilidad a los ojos del Congreso a la postura de la Administración, y en octubre de 1984 aquél congeló los fondos para operaciones encubiertas contra Nicaragua. 1985 fue un año en el que las operaciones militares de la «contra» fueron mucho menos eficaces y de menor envergadura que las realizadas en 1983 y 1984. El EPS parecía estar ganando la guerra.

La ayuda sólo pudo renovarse, en condiciones mucho más estrictas, en la primavera de 1985, cuando el viaje a Moscú de Daniel Ortega y la orientación represiva, cada vez menos ambigua, del régimen sandinista, hicieron cambiar de opinión al Congreso norteamericano. Los 27 millones de «ayuda humanitaria», sin embargo, no incluían fondos para ayuda militar, y no debían ser administrados por la CIA, sino por el Departamento de Estado (en concreto por la Oficina para la Ayuda Humanitaria a Nicaragua, NHAO), lo que transformaba sustancialmente la forma de intervención de los Estados Unidos en la guerra. La aprobación en 1986 de 100 millones de ayuda, que incluyó el envío de material militar y el levantamiento de la prohibición a la CIA para intervenir en operaciones encubiertas, nos lleva a una situación a la que luego nos referiremos.

2.1. Estructura de la «contra»

La «contra» tiene una estructura civil y una estructura militar.

A) El núcleo de la estructura *civil* sigue siendo el FDN, pero existen otros grupos, como KISAN, ARDE o BOS a los que nos referiremos después.

El problema del FDN ha seguido siendo su escasa credibilidad democrática, tanto por la personalidad de sus líderes como por el comportamiento de sus tropas en el campo de batalla. Los personajes claves en la Dirección Nacional del FDN eran justamente los «directores» cuya imagen está bien teñida de somocismo: Adolfo Calero, Indalecio Rodríguez, Aristides Sánchez, Enrique Bermúdez. El Grupo Central y la CIA llegaron a la conclusión que la mala imagen política de los rebeldes, tanto dentro como fuera de Nicaragua, constituía un obstáculo insuperable para la consecución de los objetivos de la Administración mediante la guerra sucia. Así nació la Unión Nicaragüense Opositora (UNO), plataforma conjunta formada por la FDN (Calero), La Alianza Democrática Revolucionaria (ARDE, de Pastora) y la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN, de Cruz). La nueva organización nació con la vocación de convertirse en la gran plataforma común de toda la oposición civil a los sandinistas, aunque los brazos armados eran diversos y, de ellos, el más importante, el FDN.

Un documento de la Oficina de Contabilidad General del Congreso de Estados Unidos, revelado en una sesión del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de

Los indígenas de la Costa Atlántica —miskitos, sumos y ramas— se encuadraron en un principio en la organización *MISURA*, cuyo líder indiscutible era el antiguo agente somocista Steadman Fagoth. Tras la expulsión de Fagoth de Honduras en 1985 —donde *MISURA* tenía sus campamentos—, la operatividad de la guerrilla descendió mucho, a lo que contribuyó también un cierto giro político en la actividad de Managua hacia los miskitos, que permitió un *modus vivendi* entre éstos y las autoridades sandinistas a lo largo de 1985. Sin embargo, los antiguos líderes de *MISURA* que no estaban conformes con este *modus vivendi* fundaron en septiembre de 1985 *KISAN*, cuyos líderes carecen del carisma de Fagoth, y que es considerada por muchos indígenas como una organización «colaboracionista» con el FDN, que al fin y al cabo era un instrumento de los viejos enemigos de los indígenas, los blancos y mestizos de Managua. *KISAN* no representaba una amenaza militar para el EPS, sino la materialización de un problema político, el del trato a la población indígena de la Costa Atlántica, que los sandinistas no han sabido resolver todavía, a pesar de que ya no cometían las barbaridades de 1980 y 1981. Mientras no resuelvan ese problema político *KISAN* seguirá existiendo.

B) La estructura militar de la «contra». Las guerrillas antisandinistas contaban en 1986 con cerca de 20.000 hombres. El grupo guerrillero más importante era el FDN, con unos 12.000 hombres (sus líderes afirmaban tener unos 21.500) lo que suponía un fuerte aumento si se tiene en cuenta que en 1982 tenían 600 y entre 4.000 y 5.000 en 1983. Al parecer existían en 1986 muchos voluntarios que no podían alistarse porque el FDN no podía absorberlos. El flujo de voluntarios se debía tanto al impulso político recibido por el FDN tras la votación de los 100 millones como al dinero de que disponía éste para pagar a sus voluntarios. En el frente sur combatían unos 1.000 hombres, integrados no en el BOS de Pastora, sino en los FARN de Fernando «el Negro» Chamorro. La organización indígena *KISAN* tenía más de 2.000 combatientes, a los que había que unir los 500 de la *MISURASATA* de Brooklyn Rivera. También existía una pequeña organización guerrillera de los pobladores de color de la región atlántica, llamada Pueblo Independiente de la Costa Norte, con unos 200 combatientes. Con la partida de Pastora, se pudo considerar a todas estas fuerzas guerrilleras como más o menos vinculadas al UNO, aunque la tradición de señores de la guerra de muchos de sus líderes hizo que a menudo su comportamiento fuera totalmente independiente.

En la cúpula de la «contra» se encontraba un Estado Mayor, formado por las siguientes personas: Jefe de Estado Mayor, Enrique Bermúdez; Jefe de Personal, Comandante Harold Rosario Duarte; Jefe de Inteligencia, Comandante Ampí Luvisible; Jefe de Operaciones, Comandante Dennis Pineda «Benny»; Jefe de Logística, Comandante Armando López Ibaquén.

Estas fuerzas tienen sus bases en una cadena de campamentos situados en Honduras a lo largo de la frontera con Nicaragua, en los Departamentos de Choluteca, El Paraíso y Olancho. Los principales campamentos se encuentran en la zona de Yamales, cerca del llamado Triángulo de las Vegas, donde la frontera crea una cuña dirigida hacia el interior de Nicaragua. Las fuerzas de *KISAN*, por su parte, tienen sus campamentos a lo largo del Río Coco, que forma la frontera entre Nicaragua y Honduras en la región de la Moskitia, concretamente en las cercanías de la población de Rus Rus. El FDN estableció en 1986 un nuevo campamento en la región, en la zona de Auasbila. Los campamentos de FARN se hallan en la zona oriental de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, a lo largo del río San Juan.

Las zonas en las que fundamentalmente opera la «contra» son el Departamento de Nueva Segovia, en torno a Jalapa y San Fernando; el Departamento de Jinotega, en torno a San José de Bocay, Wina, Yali y Waslala; el Departamento de Madrid en torno a San Juan del Río Coco y San José de Losmapa. En la Moskitia la escasez de ciudades hace difícil señalar zonas de operaciones muy definidas, porque en ningún caso la «contra» ha podido operar cerca de poblados de una mínima importancia. En 1985, los rebeldes operaron en más de la mitad de los 16 departamentos de Nicaragua.

Los mejores éxitos de la «contra» procedieron de operaciones ejecutadas en realidad por la CIA, como el ataque a la refinería de Corinto y el minado de los puertos. Pese a sus repetidos ataques contra ciudades fronterizas, la única vez en que la «contra» consiguió tomar una ciudad de mínima importancia fue en abril de 1984, cuando Pastora consiguió retener durante dos días el control de San Juan del Norte, junto a la frontera costarricense, hasta que fue expulsado de ella por el EPS. A diferencia del FMLN salvadoreño, la «contra» no ha conseguido tampoco tomar un cuartel militar. Básicamente, se ha dedicado a atacar patrullas sandinistas, dificultar las cosechas del café y del tabaco y realizar otras acciones de sabotaje económico. 1983 y 1984 constituyen los años de mayor actividad guerrillera, mientras que en 1985 se produjo una disminución importante de su eficacia debido al corte de la ayuda encubierta de la CIA en octubre de 1984 y a la acusada mejora del EPS en su lucha antiguerrillero; el EPS, con asesoría cubana, transformó sus tácticas, y la disposición de sus unidades, le incorporó nuevo equipo militar, como los helicópteros soviéticos MI-8 y MI-24, verdaderas bestias negras de la «contra».

2.2. El papel de Honduras

Honduras colabora con la guerra encubierta fundamentalmente prestando su territorio para que los «contras» instalen allí sus bases y desde ella desplieguen sus operaciones en el interior de Nicaragua. Ello implica además permitir el suministro de las bases rebeldes y mantener una relación estratégica especial con Estados Unidos gracias a la cual éstos pueden ejercer desde Honduras una presión militar sobre el régimen nicaragüense, en forma de maniobras e instalaciones militares más o menos permanentes. Por otra parte, las Fuerzas Armadas hondureñas prestan, a cambio de un precio, determinados servicios logísticos y militares a la «contra» que facilitan considerablemente las cosas a la guerrilla. Finalmente, la Cancillería hondureña toma debidamente en cuenta los puntos de vista norteamericanos a la hora de negociar las condiciones de una posible pacificación centroamericana, comportándose así también en el plano diplomático como el más fiel defensor de la política de Estados Unidos en el área.

El nacimiento de la «contra» coincidió con la llegada a la Comandancia de las Fuerzas Armadas hondureñas del General Gustavo Álvarez.

La «contra» instaló en Tegucigalpa sus oficinas políticas, una emisora de radio, y un cuartel de entrenamiento que servía también como centro logístico, la Quinta Escuela, que estaba situada en medio de un complejo de instalaciones militares del Ejército de Honduras.

Además de dar cobertura política y militar a la «contra» —cuya presencia en el país siguen todavía negando oficialmente las autoridades hondureñas— las Fuerzas Armadas de Honduras prestan otro tipo de servicios a los rebeldes: alquiler de camiones, helicópteros y aviones; suministro de uniformes y otro material no letal; en la época de Álvarez, existió una coordinación entre el servicio de inteligencia de la «contra» del Chino Lau y los servicios especiales del Ejército encargados de desaparecer a las personas incómodas al régimen, algunas de ellas incómodas precisamente por su actitud hacia la «contra». La militarización general de la situación derivada de la ayuda directa de la CIA y el Pentágono a la «contra» hizo aumentar el índice de represión política en Honduras, donde reaparecen en 1986 los Escuadrones de la Muerte.

Las Fuerzas Armadas hondureñas tienen de hecho acordonada la zona fronteriza en la que se encuentran los campamentos de la guerrilla, una zona inaccesible para los hondureños —y por supuesto para los extranjeros— y en la que, según informaciones de periodistas que consiguieron introducirse en ella, prácticamente no se ven ni autoridades ni ciudadanos hondureños.

La «nueva Nicaragua», como la llaman los rebeldes, se encuentra en un trozo de territorio de Honduras en el que los pocos soldados hondureños que en ella se encuentran exigen a quienes viajan por las carreteras documentos de identificación firmados por los comandantes guerrilleros. Los campesinos y cafetaleros hondureños que en ella vivían han sido expulsados —hay unos 12.000 desplazados que tuvieron que abandonarla, y viven hoy en otras zonas del país—. La nueva Nicaragua se encuentra en la llamada por los hondureños «zona recuperada», que después de largos años de ocupación nicaragüense fue devuelta a Honduras tras la resolución del conflicto fronterizo mediante el laudo arbitral del Rey de España, Alfonso XIII.

La «contra» se ha convertido para Honduras en un negocio. Implica la entrada en el país de un número considerable de millones de dólares de ayuda directa norteamericana a los rebeldes y a las propias Fuerzas Armadas hondureñas. Su situación central en la política norteamericana en Centroamérica le asegura al país un papel que, indirectamente, equivale a mejor ayuda económica y militar. Y finalmente, supone para las Fuerzas Armadas la prestación de servicios diversos a la CIA y a la «contra», que también son remunerados, y que en concreto permiten el enriquecimiento personal de determinados líderes militares, que incluso se benefician a veces del cambio en el mercado negro de los dólares que entran en el país gracias a la «contra».

En junio de 1986, la oficina general de contabilidad del Congreso de Estados Unidos, al presentar un informe sobre el empleo dado a los 27 millones de ayuda humanitaria concedidos el año anterior a la «contra», indicó que entre los pagos registrados había uno de 742.939 dólares en noviembre a las Fuerzas Armadas hondureñas, y de 450.000 en enero, a su Comandante en Jefe.

Los hondureños son conscientes de los costes de su actitud de colaboración en la política centroamericana de Reagan: no sólo a efectos de su imagen exterior, sino del peligro que supone la existencia de un ejército extranjero en su territorio, tan numeroso casi como las Fuerzas Armadas hondureñas y en pie de guerra. Este peligro hace que hayan manifestado varias veces su apoyo a que Estados Unidos continúe su ayuda a la «contra»,

tanto por motivos ya citados como porque no saben qué pasaría si de repente se queda en su territorio un ejército extranjero de esas características sin ninguna guerra que pelear.

2.3. Perspectivas

La ayuda norteamericana es el soporte fundamental de la acción política y militar de la «contra». Si esa ayuda desapareciera, la «contra», tal como entendemos el término en este momento, no podría seguir existiendo: posiblemente mantuviera una presencia residual durante algunos meses, pero desprovista de la mordiente política y operativa que le da el respaldo norteamericano.

Entre 1985 y comienzos de 1986, la CIA tuvo prohibido por el Congreso su participación directa en la guerra sucia, por lo que la mayoría de los instructores de los «contras» fueron contratados por la red de ayuda privada organizada en Estados Unidos y a la que luego nos referiremos. A partir de la aprobación de los 100 millones, sin embargo, tanto norteamericanos como hondureños y «contras» coincidían en que el entrenamiento directo de los guerrilleros rebeldes por boinas verdes norteamericanos sería un aspecto central de la intervención de Washington en el conflicto. En el análisis de las causas del declive militar de la «contra» en 1985 se dio una importancia relevante a la falta de preparación militar. En consecuencia se preveía la llegada a Honduras de Fuerzas Especiales norteamericanas las cuales, bajo la cobertura de entrenar al Ejército hondureño, entrenarían también a los «contras». En todo ello correspondería una función central al nuevo C.A.E.M., en las cercanías de Juticalpa (Olancho), y que costaría 6,5 millones de dólares. El C.A.E.M venía a reemplazar al famoso CREM, en el que los norteamericanos forzaron a los hondureños a entrenar en su territorio a sus enemigos mortales, los militares salvadoreños, hasta que las autoridades de Tegucigalpa decretaron su cierre. El lugar alejado en que se estableció el nuevo CAEM, cerca de la frontera nicaragüense, y las insistentes declaraciones norteamericanas en el sentido de que sólo se utilizaría para entrenar tropas hondureñas, hacía pensar que los instructores norteamericanos no tendrían allí alumnos salvadoreños, pero sí nicaragüenses.

Las maniobras militares de Estados Unidos en Honduras cumplen diversas funciones: mejorar la preparación de los soldados hondureños y asegurar el control norteamericano de la doctrina táctica y de la forma de actuar de las Fuerzas Armadas hondureñas; permitir a los norteamericanos un conocimiento directo del terreno en el que se desarrollaría una eventual invasión de Nicaragua; construir una infraestructura militar que facilitaría esa invasión y que, mientras tanto (como en la pista de aterrizaje de Aguacate) pueda ser utilizada por la «contra»; y fundamentalmente, mantener la presión política y militar sobre Managua. En 1986, la larga lista de maniobras militares incluyó las denominadas «Cabañas 86», «Terencio Sierra 86», «General Tosta» y «Lempira».

Durante el periodo de prohibición por el Congreso de la ayuda militar directa a los rebeldes, los funcionarios norteamericanos encargados de dirigir la estrategia de apoyo a los «contras», se encargaron de contribuir a establecer toda una red de *financiación y apoyo privados* a los «contras», fundamentalmente en Estados Unidos. El Coronel Oliver North, del Consejo de Seguridad Nacional, fue al parecer encargado por el anterior Consejero de Seguridad Nacional Robert Mc Farlane, de trabajar en estrecho contacto con el General retirado John Singlaud, cabeza visible de dicha red.

La red de financiadores incluyó a los elementos más derechistas de la sociedad norteamericana: el Reverendo Moon, Terry Falwell, Pat Robertson y su Christian Broadcasting Network, High Frontier (un grupo de presión favorable a la Guerra de las Galaxias), organizaciones como Friends of the Americas (que dirige los campamentos «independientes» de ACNUR de refugiados miskitos junto a la frontera nicaragüense, contiguos a las bases guerrilleras de KISAN) revistas de mercenarios y fabricantes de armas como Soldiers of Fortune, Iglesias fundamentalistas protestantes. También contribuyeron en esta tarea Fuerzas Armadas de países como Taiwán y El Salvador, y entidades privadas de Israel, Corea del Sur, Europa Occidental y América del Sur.

Robert Leiken calcula en 26 millones de dólares los fondos que han ingresado en las arcas de la «contra» procedentes de estas ayudas privadas. El centro neurálgico de esta red de apoyo se encuentra en Miami, donde está el centro de operaciones real de la «contra» y el domicilio de casi todos los líderes contras (menos Alfonso Robelo, que vive en Costa Rica). La fuerte y ultraconservadora comunidad de exilados cubanos en Miami suministra un apoyo importante a los rebeldes nicaragüenses, que envía a sus heridos graves en combate a un hospital de la ciudad que les da tarifas muy reducidas.

¿Quiénes son los organismos concretos que dirigían la guerra sucia norteamericana contra Nicaragua? Fundamentalmente han sido los siguientes:

— El grupo central interministerial ha desaparecido, pero en su lugar hay reuniones periódicas de un grupo de personajes, entre los que destacaron William Casey, Director de la CIA y amigo íntimo de Reagan, Elliot Abrams (Departamento de Estado), Oliver North (Consejo de Seguridad Nacional), Néstor Sánchez (Departamento de Defensa) y posiblemente Fred Ikli, también del Departamento de Defensa.

— La Oficina de Asistencia Humanitaria a Nicaragua (NHAO), dependiente del Departamento de Estado, dirigida por el Embajador Robert Duemling, y cuyo personaje central es su segundo jefe, Crescencio Arcos, hasta 1985 Jefe de la Oficina de Información (USIS) de la Embajada norteamericana en Tegucigalpa.

— La estación de la CIA en Tegucigalpa, de las más importantes del mundo, y cuyo papel en la marcha de la Embajada en Tegucigalpa tiene cada vez más peso.

La aprobación en 1986 de los 100 millones (que pudieran ser todavía bastantes más al no renovarse la prohibición que impedía a la CIA usar en su campaña de Nicaragua sus abundantes fondos de emergencia) introdujo una serie de perspectivas nuevas para la política norteamericana en la región, para el Gobierno hondureño, para Nicaragua, y para la propia «contra».

Una de las enseñanzas derivadas por los norteamericanos de la incursión nicaragüense a los campos de la «contra» en Honduras en marzo de 1986, y durante la cual las Fuerzas Armadas hondureñas rehuyeron abiertamente una confrontación directa con el EPS, fue la certeza de que los militares hondureños no quieren verse arrastrados a un conflicto armado con Nicaragua (salvo que en él participen también directamente los norteamericanos) (1).

Por tanto, los militares norteamericanos se verían obligados a realizar por sí mismos tareas que hubieran deseado asignar a los hondureños. Ello sugería que posiblemente incrementarían su presencia militar permanente en Honduras en teoría 1.000 hombres, aunque las maniobras constantes hacen que en la realidad sean unos 5.000, que aumenten las maniobras y que cambie sustancialmente la naturaleza de su participación militar, haciéndose cualitativa y cuantitativamente más importante. Ello, unido a la también mayor participación de la CIA, podría producir un efecto de bola de nieve en el que militares y agentes de inteligencia norteamericanos, actuando cada vez más independientemente del Departamento de Estado, contribuyeran a arrastrar a Washington a una intervención armada directa en Centroamérica.

Esta última consecuencia, sin embargo, dependía en último término del objetivo político de la Administración Reagan en Centroamérica. Los norteamericanos comenzaron racionalizando la guerra «sucia» convirtiéndola en parte de una estrategia dual: presión y negociación. El endurecimiento de la política centroamericana con Reagan llevó a confiar más en la primera que en la segunda, y Washington se retiró de las conversaciones de Manzanillo. Estados Unidos ya ha conseguido en lo fundamental la meta con la que convenció al Congreso para que aprobara los fondos de la guerra sucia: evitar que Nicaragua siguiera exportando activamente la revolución al resto de Centroamérica.

El objetivo parece haber cambiado a partir de 1986. Por una parte se hablaba de presionar a Managua para dialogar con la oposición interna y establecer los mecanismos políticos democráticos prometidos por la revolución de 1979. Pero otros miembros de la Administración, como el Subsecretario Adjunto de Estado para Asuntos Centroamericanos —curiosamente llamado William Walker, como el filibustero que se apoderó del Gobierno de Nicaragua a mediados del siglo pasado— declaró que derribar a los sandinistas se había convertido en una posibilidad real.

Los sandinistas aducen que lo que realmente interesa a Washington no es la instauración de una democracia real en Nicaragua, sino la garantía de que Managua no se saldrá radicalmente de la línea de política exterior y de seguridad tradicionalmente observada por los países iberoamericanos, es decir, que no pondría en cuestión un sistema de relaciones interamericanas que otorga un papel dominante a los Estados Unidos. La política de Estados Unidos en Centroamérica no tendría un objetivo ideológico —defender la democracia—, sino un objetivo político —defender la estructura del poder norteamericano en la región. Éste sería el criterio que determina claramente lo que resulta aceptable e inaceptable o «antiamericano» en el comportamiento internacional y en la política de seguridad de las naciones del hemisferio occidental. Managua considera esta actitud imperialista y se niega a plegarse a ella en nombre de su soberanía nacional. Por otra parte, el éxito de esta política de presión norteamericana sobre Nicaragua significaría, de una forma u otra, que Managua tirara la toalla y aceptara el papel dominante de Estados Unidos en Centroamérica, lo que equivaldría a reconocer la dependencia exterior de Managua con respecto a Washington.

Reagan, ya próxima su salida del poder, tendrá que elegir entre la aceptación como inevitable de la necesidad de coexistir con el régimen sandinista en Centroamérica y la intervención directa. Dada la idea que tiene Reagan de su propio papel histórico (corregir la tendencia histórica hacia la decadencia del poder norteamericano en el mundo, de la

que la consolidación del régimen sandinista sería a sus ojos síntoma evidente) y su habilidad para imponer su punto de vista sobre el Congreso y la opinión pública norteamericanos, parecía difícil que aceptara la primera opción.

Los hondureños, desde siempre, han aceptado con una mano la presencia de los «contras», mientras con la otra han intentado reducir el nivel de su confrontación política con Nicaragua y, sobre todo, evitar verse arrastrados a cualquier tipo de choque armado con el EPS.

A medio plazo, el desprestigio internacional de Honduras, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores se ve obligado a mentir todos los días sobre los «contras» y cuya política de seguridad se ha plegado a los deseos de Washington —y a los intereses financieros de algunos coroneles de sus Fuerzas Armadas— podría llevar a un intento de cambio de timón por parte de oficiales más progresistas y «torrijistas» en el seno del Ejército.

La situación era perfectamente aceptable para amplios sectores de la «contra». Algunos líderes viven muy a gusto en Miami, y, han llenado sus bolsillos gracias a la ayuda humanitaria y a los fondos de apoyo de origen privado. Tampoco desagradaba a parte de los 50.000 a 60.000 personas, entre combatientes y familiares, que viven en la llamada Nueva Nicaragua, franja de territorio hondureño donde se encuentran los campos de la «contra», alimentados con cargo al presupuesto nacional norteamericano, y al margen de todo control real por el Gobierno de Tegucigalpa. No podía descartarse, por tanto, que los «contras», cuya preparación militar y política es altamente cuestionable, demostraran poco interés por aumentar sensiblemente su operatividad militar y aceptaran la continuación indefinida de una guerra de desgaste contra los sandinistas, argumentando ante sus patronos norteamericanos que ese tipo de guerra sirve perfectamente el objetivo de Washington de mantener la presión sobre Managua para obligarle a realizar concesiones políticas. Naturalmente, ello obligaría a Washington a elegir entre apretar más los tornillos al FDN o renunciar a seguir apoyándolo.

La nueva capacidad aérea de la «contra» a partir de 1986 le permitía operar en zonas más distantes de la frontera hondureña durante más tiempo, con los consiguientes problemas para el EPS, el cual tenía que prepararse para una guerra de desgaste en la que la batalla política sería tan importante al menos como la militar. Ahora bien, ese factor político introducía límites a determinadas medidas (mayor represión interna, evacuaciones, aumento de la participación de hombres y material cubanos, y de Europa Oriental) que en un análisis estrictamente militar el FSLN podría verse tentado a adoptar.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para el FSLN, la presencia de la «contra» tiene diversas consecuencias. Unas son lógicamente negativas: la guerra, las muertes, el sabotaje económico, la necesidad de asignar fuertes reservas presupuestarias a la defensa. Pero otras podrían no ser tan nocivas. Si partimos de la hipótesis de que resulta difícil concebir que el grupo del FSLN en el poder en Nicaragua esté dispuesto a compartirlo de buen grado con otros elementos del espectro político civil nicaragüense, la presencia de la «contra» ofrece una perfecta justificación ante el mundo no sólo para explicar su endurecimiento en el control del poder, sino también los errores cometidos en su ejercicio.

Managua en ocasiones ha considerado a la «contra» como una válvula de escape para los impulsos intervencionistas de Washington, una solución al fin y al cabo mucho más conveniente para ella que una invasión directa norteamericana. Sin embargo, a no ser que el FSLN realice concesiones reales e importantes a la oposición civil interna, la percepción dominante en el exterior es que puede que esté ganando la batalla militar, pero está perdiendo la política: en este caso, el ganador no es tanto la «contra» como los Estados Unidos. No existían ya en 1986 tantas esperanzas en amplios sectores de la opinión pública internacional sobre la sinceridad de la voluntad democrática de los sandinistas.

El cierre de «La Prensa» constituyó para Managua una derrota política mucho más grave que la votación en el Congreso norteamericano de ayuda a la contra.

El apoyo exterior que todavía recibía el Gobierno de Managua se debía no tanto a la fe en su proyecto político como a la deficiente presentación de la política norteamericana, consistente en presionar abierta y militarmente a Nicaragua para obtener una serie de concesiones que garantizasen la seguridad nacional de Estados Unidos. Por todo ello, el posible fracaso militar de la «contra», unido a una progresiva rigidez del régimen sandinista, podía conducir en 1986 a una peligrosa situación en la que los Estados Unidos se verían obligados a hacer algo por la conjunción de inoperatividad «contra» y merma del capital de solidaridad internacional con Nicaragua —uno de los obstáculos principales a la intervención militar directa.

3. La solución iberoamericana: Contadora

Contadora, como iniciativa de superación del conflicto centroamericano, surge mediante una serie de iniciativas de Méjico y Venezuela.

El primer paso sería dado por el Presidente mejicano, López Portillo, al romper relaciones en 1979 con el Gobierno de Somoza tras conversaciones con Castro y con el Presidente costarricense Carazo. En estos momentos, tanto Cuba como Costa Rica, la Panamá de Torrijos y la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, coinciden en la necesidad de ayudar al derribo del régimen somocista.

Estos mismos países bloquean, en junio de 1979, una iniciativa de los Estados Unidos en la OEA encaminada a constituir una fuerza interamericana de paz para restablecer el orden, asegurar elecciones y establecer un somocismo sin Somoza.

Con el triunfo de la revolución sandinista, Nicaragua se compromete ante la OEA al pluralismo democrático a través de elecciones, al no alineamiento y a un sistema de economía mixta. A partir de este momento los tres puntos calientes del conflicto regional son la progresiva radicalización de la revolución nicaragüense, la agudización de la guerra civil en El Salvador, y el crecimiento de la oposición guerrillera en Guatemala.

Las transformaciones nacionales más importantes afectarían a Venezuela, donde el gobierno cambia en 1979, y se adopta una línea más crítica hacia Nicaragua y de claro apoyo a Napoleón Duarte en El Salvador; y a Costa Rica, donde también se produce un

cambio electoral en mayo de 1982, cuando las fuerzas de ARDE se han instalado en su territorio y comienzan las dificultades fronterizas con Nicaragua.

López Portillo, en el curso de una visita oficial a Managua, el 21 de febrero de 1982, propone un pacto de no agresión entre Estados Unidos y Nicaragua, una reducción equilibrada de los efectivos militares de Honduras y Nicaragua, el desarme de los ex guardias somocistas, el cese de la ayuda norteamericana a la contra y una solución negociada para El Salvador. Cuba y Nicaragua reaccionan favorablemente. Duarte califica la propuesta como acto de intromisión. Y los Estados Unidos expresan reticencias por no examinarse el tema de la ayuda nicaragüense a los insurgentes salvadoreños.

López Portillo y Herrera Campins envían el 16 de septiembre de 1982 una carta a los Presidentes de Estados Unidos, Nicaragua y Honduras, expresando su preocupación por la alarmante escalada bélica en Centroamérica y manifestando deseos de explorar las vías de solución pacífica de la crisis. Washington ignora el llamado y, en su lugar, convoca el 4 de octubre en San José, un Foro pro Paz y Democracia, al que no se invita a Nicaragua, a Guatemala ni, por supuesto, a Cuba. México, invitado, no asistió. Panamá asistió como observador, pero no firmó. Y Colombia asistió y firmó el documento.

La formación del grupo de Contadora se debe, como hemos visto, a los pasos previos dados por Méjico y Venezuela. Para la incorporación de Colombia sería decisiva la llegada al poder de Betancur el 7 de agosto de 1982. Y en cuanto a Panamá, el Presidente Royo sugeriría su propio plan de paz para Centroamérica el 30 de marzo de 1982.

A principios de 1983, un nutrido grupo de aliados de los Estados Unidos, regionales y europeos, coincidían en considerar la política del Presidente Reagan como una amenaza para la paz en Centroamérica. Parecía llegado el momento de lanzar una iniciativa diplomática que no podía contar con el entusiasmo de los Estados Unidos.

Las tensiones fronterizas entre Nicaragua y Honduras habían venido alcanzando a lo largo de 1982 y 1983 un punto de crisis, y los gobiernos de Méjico, Venezuela, Colombia y Panamá firmaron el 8 de enero de 1983 una Declaración en la que se invoca el diálogo y la negociación como eficaces instrumentos para reducir tensiones y establecer las bases de una convivencia pacífica entre los Estados centroamericanos. Así nace el grupo de Contadora.

La cumbre de Jefes de Estados de los países integrantes produce el 15 de julio de 1983 la Declaración de Cancún, un programa de ideas básicas apuntando hacia la reconciliación, y el 19 de julio, Managua acepta la multilaterización de la negociación. Contadora transformó tales ideas en un Documento de 21 objetivos el 9 de septiembre, y las cinco naciones centroamericanas lo suscribirían. A partir de entonces se crean tres comisiones encargadas de transformar en normas de acción los compromisos del documento de objetivos. Surgen así las normas para la ejecución de los Compromisos Asumidos en el Documento de Objetivos, que sirvieron de base para la elaboración del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica en junio de 1984, fundamento a su vez del Acta Revisada de Contadora, obtenida en Panamá el 7 de septiembre de 1984. Lo que en la primera acta figuraba como recomendaciones o declaraciones quedaban consignadas en el nuevo documento como compromisos de carácter vinculante y, en tal

sentido, constituía el documento de mayor importancia producido en dieciocho meses de negociaciones y siete reuniones de los Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro contadorinos y los cinco centroamericanos. El 20 de octubre de 1984, los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Honduras presentan en Tegucigalpa una serie de observaciones y sugerencias a los temas de verificación y control de los compromisos asumidos. Y en 1985 se celebran dos nuevas reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica y Contadora, la primera en Brasilia, el 16 de marzo, y la segunda en Panamá, el 12 de septiembre.

A medida que iba avanzando el proceso de concreción de obligaciones, se hicieron patentes las reticencias de los Estados Unidos y de Nicaragua. Para los Estados Unidos, que habían tenido que aceptar la iniciativa de Contadora para no quedarse aislados del sentir casi unánime latinoamericano, del de sus socios europeos de la Alianza Atlántica, e incluso del de amplios sectores de su propia opinión interna, Contadora presentaba el problema de limitar su libertad de acción frente a Nicaragua. La presión sobre Managua vía contras quedaría descartada. Y las posibilidades de congelar o abortar la revolución sandinista, muy limitadas. Mientras, en Nicaragua, se había llegado a la conclusión de que Contadora nunca sería garantía suficiente para impedir las acciones desestabilizadoras norteamericanas o incluso la intervención directa. Por ello Managua intentó a lo largo de 1985 conseguir una solución bilateral al conflicto mediante conversaciones directas con Costa Rica, Honduras y con los Estados Unidos. Consolidando entretanto su revolución y «legalizándola» a través de las elecciones de 1984.

Se llega así en mayo de 1986 a una situación en la que los Estados Unidos declaran estar decididos a suspender la ayuda a la contra si Nicaragua firma el Acta de Paz de Contadora, mientras que Nicaragua proclama estar lista para dicha firma si los Estados Unidos se comprometen formalmente a suspender la ayuda a la contrainsurgencia. Un auténtico juego del ratón y el gato en el que la desconfianza mutua parecía ser la única regla.

Juego acentuado a medida que se acercaba la fecha límite para la firma del Acta, el 6 de junio: por Estados Unidos declarando el portavoz presidencial, Speakes, el 14 de mayo de 1986, que la firma del Acta de Paz no sería suficiente para el cese de la ayuda a la contra, exigiéndose además avances en el terreno de la «reconciliación interna», es decir acceso de los contras al proceso político nicaragüense. Tal postura suponía un paso de rosca en las exigencias anteriores y en el tono de la carta que el enviado especial para Centroamérica, Philip Habib, había enviado a los países contadorinos en abril de 1986, afirmando que tal ayuda sería suprimida tras la firma del Acta por Nicaragua. A su vez, por las mismas fechas, Nicaragua comienza a exigir no ya sólo el cese de la mencionada ayuda, sino el del bloqueo económico norteamericano y la reanudación del diálogo bilateral con Estados Unidos interrumpido en Manzanillo en 1985.

Contadora se enriqueció en noviembre de 1985 con la formación de un grupo de apoyo (Brasil, Argentina, Uruguay y Perú), con lo cual el 80% de América Latina respalda soluciones pacíficas al conflicto centroamericano. En enero de 1986, ambos grupos lanzan desde Caraballeda (Venezuela) un mensaje subrayando la urgencia en tomar medidas simultáneas como la conclusión de las negociaciones sobre el Acta, el cese de apoyo a las fuerzas irregulares y a los movimientos insurrectos, la congelación en la adquisición de

armamentos y su posterior reducción, procesos de reconciliación interna y pleno goce de derechos humanos y libertades individuales. La declaración de Guatemala, firmada el 14 de enero de 1986 por los cinco Cancilleres centroamericanos, expresaba apoyo a tales objetivos y principios.

Los días 24 y 25 de mayo de 1986 se reúnen en Esquipulas (Guatemala) los Jefes de Estado centroamericanos. Después de afirmar su apoyo a las gestiones mediadoras de Contadora, declararon que la paz en América Central sólo puede ser instituida mediante un proceso auténticamente democrático, pluralista y participativo, que asegure la promoción de la justicia social y el respeto de los derechos humanos, la soberanía y la integridad territorial, así como el derecho para cada Estado de escoger sin ingerencias externas su propio modelo económico, político y social. También apoyaron la iniciativa del Presidente Vinicio Cerezo de crear un Parlamento centroamericano, elegido directamente por sufragio universal, como foro democrático de cooperación e integración regional.

Contadora presentó el 7 de junio de 1986 el proyecto revisado final de Acta de Paz. Después de un período de estudio de su contenido, ninguno de los cinco centroamericanos se mostró dispuesto a su firma.

Se abría así un paréntesis de inactividad contadorina que duraría durante el resto del año. La gira realizada por las capitales centroamericanas en enero de 1987 por los grupos de Contadora y Apoyo, acompañados por los Secretarios Generales de la ONU y de la OEA, encendería de nuevo la llama de la esperanza en un arreglo pacífico.

* * *

Contadora surgió después del fracaso mediador de Francia y México en el conflicto interno de El Salvador y del escaso éxito de varios países europeos en hallar un acomodo entre los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región y las aspiraciones al cambio político y social del gobierno revolucionario de Nicaragua. Los países de Contadora empezaron a sospechar que el conflicto de Centroamérica, sin tener sus orígenes en la confrontación global entre las superpotencias, estaba deslizándose al peligroso terreno Este-Oeste, terreno en el que poco podía decir y proponer Iberoamérica. Desechados los mecanismos multilaterales del sistema interamericano de la OEA después de la guerra de las Malvinas, Contadora partía del supuesto de que el conflicto centroamericano tenía que ser visto en su perspectiva regional y no en la dimensión Este-Oeste. Por tanto, la paz era responsabilidad prioritaria de los centroamericanos, ayudados en tal empeño por los países vecinos de la región.

Contadora partía igualmente de la premisa de que los Estados centroamericanos son Estados soberanos, con capacidad de establecimiento de criterios propios, concurrir a una mesa negociadora y asumir compromisos. Esta premisa era en el fondo muy importante, pues si Contadora hubiera tomado como punto de referencia que los centroamericanos no eran dueños de sus propias decisiones soberanas, que el conflicto no era regional, sino Este-Oeste, la solución no podría venir sino del entendimiento entre las superpotencias.

La realidad contradice en parte el último supuesto. Los Estados Unidos ejercen de manera directa y pública una influencia tan determinante sobre tres de los países de la

zona —Costa Rica, Honduras y El Salvador (el llamado Grupo de Tegucigalpa), que la actitud de éstos en todo el proceso negociador ha reflejado en numerosas ocasiones la huella de Washington. Pero a pesar de esta contradicción parcial entre los supuestos y la realidad, Contadora rescataba la idea de que la lucha política en la región está inscrita en la historia de Centroamérica, en la desigualdad de sus estructuras socioeconómicas, en la confrontación de ideas y en los deseos de transformación auspiciados por los propios centroamericanos.

Hay un dato en la labor de Contadora, a veces olvidado, pero que siempre operó a modo de handicap en su penoso caminar. Algunos de los gobiernos centroamericanos desconfiaron desde un principio de las intenciones de los contadorinos. Para nadie es un secreto la desconfianza de El Salvador y Honduras respecto a las intenciones de México. Y son bien conocidas las dudas y temores de Nicaragua respecto a algunas de las posturas asumidas por Venezuela.

Contadora no ha impedido la militarización progresiva de la región a cargo, fundamentalmente, de los Estados Unidos y de Nicaragua. Pero incluso los Estados Unidos han tenido que acomodar en más de una ocasión su estrategia en el área a las condicionantes creadas por la simple existencia de Contadora. La inocultable coincidencia entre la postura de los Estados Unidos y las objeciones suscitadas en momentos estratégicos por los gobiernos de Honduras, Costa Rica y El Salvador, ha planteado además el reto de que los países más directamente interesados por la crisis regional, los propios centroamericanos, sean capaces de diseñar una política autónoma que no sea instrumento de intereses extrarregionales.

Más allá de los logros concretos del Grupo, quizá el mayor éxito de Contadora haya sido el esfuerzo de varios países periféricos de oponerse a la inclusión del conflicto centroamericano en la dinámica frustrante del antagonismo Este-Oeste, el de retardar o alejar el estallido bélico en el área y el haber obtenido el respaldo de la Comunidad Internacional en su conjunto.

4. La reticencia al endoso de Europa Occidental

El interés europeo por Centroamérica no es actual, como frecuentemente se repite. Particular y especialmente para España, Gran Bretaña y Alemania, la región fue la antigua Capitanía General de Guatemala, zona de dominio económico y de pretensiones hegemónicas durante toda la primera mitad del siglo XIX y lugar de asentamiento de fuertes colonias, especialmente en Guatemala y Nicaragua, a partir del final del pasado siglo. Pero es cierto que, salvo el permanente interés de España, el resto de Europa comienza a activar su presencia en la zona cuando la recuperación económica creó una creciente necesidad de intercambios y de inversiones. También influyó el interés de ciertos partidos políticos, en especial el Socialista y el Cristianodemócrata, en desarrollar contactos con partidos y grupos de similar ideología fuera de Europa. Ambas circunstancias se producen en la década de los setenta.

El aumento de la presencia europea en Centroamérica, tanto económica como cultural y política, no significaba un desacuerdo con los puntos de vista de los Estados

Unidos sobre la región. La discrepancia no surgiría hasta 1981, cuando el sandinismo había adquirido un perfil más radical y había intentado abiertamente apoyar la instalación en El Salvador de las fuerzas insurgentes durante la «ofensiva final», al cerrarse el año. Coincidiendo con estas fechas, los partidos socialistas llegan al poder en varios países europeos y lo que no había pasado de seminarios críticos sobre aspectos de la política de los Estados Unidos en la región se convierte en la Declaración Franco-Mexicana de agosto de 1981, en la que se cuestiona la solución militar para El Salvador prevista por la política de Reagan. La llegada al poder en 1982 en España de Felipe González, sin duda el político europeo con un mayor caudal de conocimientos y amistades en Iberoamérica, daría mayor profundidad y credibilidad a la voz de Europa. Una voz de acentos y tonalidades distintos a la norteamericana.

Desde el punto de vista de muchos europeos, incluidos buen número de conservadores, el análisis norteamericano de la crisis centroamericana peca de excesivo simplismo. La crisis regional no es solamente una manifestación del conflicto Este-Oeste, sino que tiene unos componentes internos, propios, causales, con claras proyecciones hacia el mundo de las relaciones Norte-Sur. Lo que no significa indiferencia hacia las preocupaciones estratégicas de los Estados Unidos o desconocimiento de los riesgos de manipulación por intereses contrarios al mantenimiento del equilibrio global entre el Este y el Oeste.

Durante más de un siglo, los Estados Unidos fueron el único jugador internacional en la cancha centroamericana. Europa estaba entonces demasiado ocupada dividiendo y repartiendo territorios y pueblos africanos y asiáticos.

Los centroamericanos no se encontraban en posición de desafiar las apetencias hegemónicas norteamericanas; quienes lo intentaron fueron una y otra vez alejados de los circuitos del poder. De tal modo que progresivamente se instala en la región y se fija en la mente de sus clases dirigentes la idea-fuerza de que es inútil oponerse a la penetración norteamericana. A la que, después de todo, se le podían sacar beneficios. Y las repúblicas centroamericanas se transforman al paso de unas décadas en el «patio trasero» de los Estados Unidos.

Mientras que Europa había perdido sus posesiones coloniales al llegar el año sesenta de este siglo, los Estados Unidos mantenían casi intactas sus relaciones hegemónicas con los países caribeños y centroamericanos. Casi, porque Cuba, en 1959, inicia una aventura independentista que conduce en un largo y doloroso proceso a una nueva dependencia.

Europa occidental, que tan decisivamente se benefició de la ayuda norteamericana después de las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial, comienza a preguntarse cómo los Estados Unidos no fueron capaces de crear prosperidad y estabilidad, después de más de un siglo, en una región tan próxima a sus fronteras⁹.

Por otra parte, después de la experiencia descolonizadora, nadie en Europa cuestiona el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al pleno desarrollo nacional y social, a

◆
⁹ Declaraciones del Embajador Johan Ferth ante un Comité de encuesta del Congreso. The Miami Herald 3-1-19.

establecer la forma de gobierno que libremente se escoja, al respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Del mismo modo que toma cuerpo la idea de que mientras el poder económico continúe concentrado en manos de una oligarquía más dispuesta a vivir de los intereses de sus dólares depositados en Miami que a invertir en sus propios países, mientras las grandes mayorías permanecen alejadas del poder político y los ejércitos absorben crecientes recursos nacionales y manejan los resortes del poder, las necesarias reformas siempre adquirirán un tinte radical y casi revolucionario¹⁰.

El problema de Centroamérica no es, para muchos europeos, reducible únicamente a Nicaragua. El Salvador, donde se enfrentan la Democracia Cristiana y la Social Democracia en sus respectivos apoyos a Duarte y a Ungo, es considerado igualmente problemático, incluso después de las elecciones de mayo de 1984. También Guatemala, donde toda tentativa de cambio fue bloqueada por la represión, o incluso Honduras, donde a pesar de que nunca conoció niveles represivos comparables a los de sus vecinos, la democracia no supera caracteres netamente ritualísticos.

El éxito de los movimientos guerrilleros en los setenta no puede explicarse únicamente por la «mano de Moscú», ni por la estructura asimétrica de las sociedades centroamericanas. No se puede olvidar el componente nacionalista incubado en un caldo de cultivo con regustos semi-coloniales. Un deseo de reafirmar las señas de identidad nacional. La prueba más palpable de este componente nacionalista la encontramos en las siglas adoptadas por varios de los movimientos guerrilleros: Sandinismo, Farabundo Martí, Morazán. Nombres todos ellos ligados a respectivas historias nacionales y que indicarían que el enemigo es más bien externo que interno. Es fácil comprender que el nacionalismo centroamericano sea exclusivamente antinorteamericano. La potencia hegemónica en la región, durante el último siglo, han sido los Estados Unidos. El deseo de reafirmación nacional no puede orientarse hacia un pasado ya lejano, España, sino frente a una realidad omnipresente y omnipotente.

Europa occidental no niega a los Estados Unidos un especial papel en Centroamérica. Por razones geográficas, históricas y, sobre todo, prácticas. Del mismo modo que estima conveniente reducir la presencia de Cuba en Nicaragua y limitar sus posibilidades de explotar la crisis regional. Pero tiene serias dudas en cuanto a lo acertado del análisis en términos Este-Oeste y sobre lo apropiado del tratamiento militar para obtener una solución duradera.

La solución, según el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernando Morán, tendrá que encontrar vías para liberar el potencial de desarrollo económico, lo que a su vez requerirá reformas sociales y políticas cuasirrevolucionarias, particularmente si el Occidente continúa valorando el respeto a los derechos humanos. Y tendrá que encontrar fórmulas que salvaguarden el equilibrio global de poder, que no amenacen la seguridad de ningún Estado de la región, no sólo la seguridad de los Estados Unidos, y que

◆
¹⁰ F. Morán en *Third World Instability. Central America as an European American Issue*. Council on Foreign Relations, New York, 1985.

garanticen el ejercicio real de la soberanía por los centroamericanos así como la satisfacción de las aspiraciones de sus pueblos¹¹.

La crisis centroamericana es así vista por amplios sectores europeos como la crisis de la posición hegemónica de los Estados Unidos en la región, como síntoma del agotamiento del modelo de desarrollo desde arriba y desde el exterior predominante en el área. La actual política norteamericana, que ofrece a los centroamericanos la elección de un mundo bipolar, minimiza las posibilidades europeas de jugar cualquier tipo de papel entre las fuerzas de un orden a menudo represivo, potenciadas por el masivo respaldo norteamericano, y las promesas de salvación que intermitentemente canta la sirena oriental.

En el fondo, lo que Europa occidental cuestiona es la relación patrono-cliente mantenida por los Estados Unidos durante un siglo. Y lo que defiende es el derecho de esos países a la democracia, al libre comercio y al ejercicio irrestricto de su soberanía. Los Estados Unidos difundieron la ideología anticolonial después de la Segunda Guerra Mundial, y acabaron con los mercados y pueblos cautivos a la influencia europea. Hoy en día, Europa, al declarar su respaldo a la democracia y a la capacidad soberana de los países centroamericanos no cree romper ninguna regla del juego limpio entre aliados.

La motivación prioritaria de la política de la Administración Reagan en Centroamérica, según su propia presentación, consiste en la defensa de la democracia frente a la agresión totalitaria. Pero la crisis centroamericana no es una crisis de la democracia sino, más bien, una crisis suscitada por sus carencias. No es fácil entonces comprender el énfasis puesto en la defensa de un sistema que, en el mejor de los casos, se encuentra en estado embrionario. Porque lo lógico en tal situación sería potenciar los elementos de progreso social, económico y de ampliación de la base de participación, para que la democracia deje de ser una crisálida y tome su vuelo, pasando de ser en gran medida liturgia y ritualismo a transformarse en vivencia cotidiana.

Europa occidental es socio de los Estados Unidos en la Alianza Atlántica y por ello se siente con derecho a pedir coherencia con los principios democráticos que le unen a los Estados Unidos. En todas las áreas, incluida la centroamericana.

El Vietnam fue la primera crisis de «legitimidad». América Central podría representar una fisura más profunda con respecto a una Europa donde los gobiernos encuentran crecientes dificultades en convencer a sus opiniones públicas, más exigentes de coherencia y transparencia que la norteamericana, sobre la conveniencia de coincidir con los Estados Unidos en áreas no cubiertas por el Tratado del Atlántico Norte¹².

Tratando de resumir los mínimos de coincidencia de Europa occidental, en cuanto a la crisis centroamericana, llegaríamos a tres puntos: 1) Restringir el comunismo en

¹¹ F. Morán, *op. cit.*

¹² Heinrich W. Krumwiede, en *Alternativas europeas a la crisis centroamericana*. Seminario organizado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, julio de 1984.

América Central está en línea con los intereses de Europa occidental, pero el origen de la crisis enlaza con los problemas de convivencia Norte-Sur y, por tanto, la estrategia a aplicar debe buscar la conciliación entre los países occidentales industrializados y los movimientos de masas de América Central. 2) La solución militar no sería sino aparente y temporal. 3) Se deben potenciar todos los elementos de cambio y modernización de las arcaicas estructuras políticas y productivas centroamericanas con el fin de operar una transformación pacífica y gradual de tal modo que los que no comen, dispongan de un decente mínimo vital, y los que no duermen por temor a los que no comen, puedan dormir tranquilos.

Tales ideas han tenido manifestación práctica en el comunicado final de la reunión de San José, el 29 de septiembre de 1984. Los diez Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea, más los de España y Portugal, junto con los Ministros de Asuntos Exteriores contadoreños y centroamericanos, coincidieron en un análisis básico de los problemas de Centroamérica y excluyeron la vía militar como posible solución de tales problemas.

Por otra parte, la ayuda económica de la Comunidad Económica Europea a Centroamérica es comparable a la ayuda civil norteamericana a los países de la zona. En la reunión de Luxemburgo de noviembre de 1985, celebrada como seguimiento a la reunión ministerial de San José, se intentaba conseguir un doble objetivo: expresar el apoyo político de Europa a los esfuerzos del grupo de Contadora para la solución pacífica de la crisis centroamericana y por otra, sentar las bases de una mayor cooperación económica entre Europa y los países del istmo centroamericano.

El Canciller colombiano, Ramírez Ocampo, indicó en tal foro que América Latina cometió el grave error de considerar que la Doctrina Monroe era la culminación de su proceso de independencia ignorando que, al aislarse del mundo, el Continente quedaba sujeto a una sola potencia. En tal contexto, añadió, tanto San José como Luxemburgo apuntaban al declinar de la Doctrina Monroe por decisión de una Europa madura. En noviembre de 1985 se celebraba en Madrid el llamado «Contadora Sanitario», reunión de responsables sanitarios comunitarios y centroamericanos donde se programó la ayuda europea a Centroamérica en un área donde las carencias y deficiencias son causa evidente de tensión social e inestabilidad.

El 9 y 10 de febrero de 1987 se celebró en Guatemala una nueva reunión CEE-Centroamérica, quedando potenciado el diálogo político y asegurada la cooperación económica de las Comunidades para cualquier proyecto de desarrollo económico regional, sin exclusiones ni condicionantes.

Tanto San José como Luxemburgo y Guatemala han supuesto un importante respaldo a las gestiones mediadoras del grupo de Contadora, han consolidado unas relaciones entre Centroamérica y las Comunidades Europeas que antes eran eventuales y ahora se dotan de un marco jurídico institucional y, finalmente, han manifestado la voluntad europea de mantener una creciente presencia en una zona que no considera «patio trasero ni cuarto delantero» de nadie.

NOTA

(1) La Administración Reagan aprovechó esta incursión presionando al Gobierno de Honduras para que éste solicitara una ayuda militar de emergencia de 20 millones dólares y, mediante esta vía lateral, animar al Congreso, que había votado el 20 de marzo en contra de la ayuda de 100 millones de dólares a la contra, a su aprobación. Elliot Abrams voló a Tegucigalpa el 21 de marzo y convenció al reticente Azcona a pedir tal ayuda. El Congreso aprobaría finalmente los 100 millones de dólares para la contra en el mes de octubre. Tegucigalpa, dentro de su línea oficial de negativa a aceptar la presencia contra en Honduras, no quería dar publicidad a una incursión sandinista en su territorio que indirectamente demostraba tal presencia.

X

¡Tire la toalla!

Hans Morgenthau: «El problema clave de la política exterior norteamericana no es cómo conservar la estabilidad ante la revolución, sino cómo crear la estabilidad después de la revolución.»

La acción esencial de las fuerzas armadas en la democracia de que el empleo masivo de una fuerza militar superior contra un adversario compuesto de fuerzas irregulares y populares no constituye una forma de victoria. Debido esencialmente a que la conducta, en tales circunstancias, es fundamentalmente política.

Se impone, por tanto, reevaluar la doctrina de la contención de las revoluciones a la categoría de imperativo estratégico. Especialmente a la luz de los casos que no pueden negarse a ser ejemplos de esta primera forma de guerra. En los ejemplos de la guerra de Vietnam, la alta intensidad puede verse en el suceso de una guerra convencional. La baja intensidad comprende aspectos repetidos desde el momento de la guerra convencional y entre las fuerzas armadas gubernamentales y

Conflictos de baja intensidad

A medida que avanza la década de los ochenta, se hace más evidente que los grandes problemas de Centroamérica se llaman Nicaragua y El Salvador. Problemas de aceptación o rechazo de la convivencia con un nuevo régimen de estirpe y vocación revolucionarias, y problemas de legitimación democrática de un gobierno civil que surge entre juntas militares, escuadrones de la muerte y una insurgencia que, por controlar casi una tercera parte del territorio, reclama el derecho a ser reconocido como «beligerante».

Una nueva Administración, de signo republicano, ha llegado al poder en Washington. Y el nuevo inquilino de la Casa Blanca promete que les «arreglará las cuentas» a los marxistas-sandinistas de Managua y sentará firmemente en el solio presidencial, a modo de baluarte, al Presidente Duarte. Asistimos así a un proceso de «satanización» progresivo del régimen sandinista y a una paralela «sacralización» del gobierno de San Salvador, que va succionando irresistiblemente a los demás países de la zona, tensando al mismo tiempo sus estructuras institucionales.

En unos pocos años, Centroamérica asciende en la escala de valores de interés internacional del poco envidiable papel de «patio trasero» de los Estados Unidos al escasamente recomendable primer plano de la atención mundial. Y como la vida íntima de un patio es tan impenetrable como la complicada amalgama de amor-odio con que normalmente se construyen los peldaños de una escalera vecinal, el inicial vacío informativo y su consecuente falta de instrumentos de comprensión sólo fue superado al calor de un acontecer en el que el nivel de las pasiones, la importancia de los intereses en juego y el dramatismo humano del conflicto, dejan poco margen al desinterés y escaso espacio a la equidistancia.

Centroamérica se encuentra en guerra. O, mejor dicho, en varias guerras. Guerra encubierta, guerra revolucionaria, guerra ideológica, guerra sin fronteras. La sombra de Caín proyecta su siniestro manto sobre la frágil cintural del Continente americano. Bajos en campaña, caídos de la retaguardia, desaparecidos de la vida, desplazados, refugiados, emigrados. Toda una letanía de desgracias personales se acumula en los ochenta sobre Centroamérica. La equidistancia es difícil. El desinterés, imposible.

El marco conceptual bajo el cual la Administración Reagan aborda la problemática de guerra civil en El Salvador y la convivencia con el nuevo régimen de Managua es el conocido como conflicto de Baja Intensidad (C.B.I.). De progenie británica, su adopción por el Ejército norteamericano tiene lugar tras la guerra de Vietnam.

La lección esencial de tal guerra consistió en la demostración de que el empleo masivo de una fuerza militar superior contra un adversario compuesto de fuerzas irregulares y populares no constituye una garantía de victoria. Debido, esencialmente, a que la contienda, en tales circunstancias, es fundamentalmente política.

Se imponía, por tanto, reevaluar la doctrina de la contrainsurgencia elevándola a la categoría de importancia estratégica. Especialmente a la vista de los retos que un poder hegemónico a escala planetaria podría encontrar en los amplios confines del Tercer Mundo. La alta intensidad queda reservada al supuesto de una guerra convencional. La baja intensidad comprende supuestos desde la desobediencia civil hasta la confrontación entre fuerzas armadas gubernamentales y movimientos insurgentes o contra-revolucionarios.

La intensidad se mide, pues, por el empleo de factores meramente militares. Y es a partir de la interpretación socio-política de la desobediencia, movimiento popular, insurgencia o revolución, como se elabora el cuerpo de doctrina del C. B. I. La identificación correcta del reto debe generar la respuesta adecuada. Lo esencial es usar en cada reto la misma táctica que el grupo a quien se trata de vencer asegurando una política operativa en los distintos planos donde tiene influencia y encuentra apoyo tal grupo: plano local, nacional o internacional.

El enemigo, muy posiblemente, empleará una combinación de medidas políticas, económicas, psicológicas y militares. Y el Gobierno deberá responder con una sabia y dosificada utilización de tales medidas. Sin perder de vista que el enfoque político debe centrar la respuesta global.

El objetivo esencial no debe perseguir la eliminación física del enemigo, sino su deslegitimación y aislamiento hasta el punto que deje de ser una alternativa política atractiva o un modelo exportable. La población civil se transforma así en el objetivo estratégico de la guerra, no para eliminarla, sino para alejarla física y anímicamente del grupo enemigo. Ello exige una guerra total al nivel de bases (total war at the grass roots level), incorporando al Ejército a tareas sobre tal población al margen del quehacer puramente militar, con un mayor grado de politización. Y entraña un cambio en la naturaleza intrínseca del soldado.

La respuesta al reto debe ser integral, comprendiendo todos los aspectos de la vida que puedan influir en la percepción de la población involucrada. Frente a la percepción de que el cambio es deseable o inevitable, por ejemplo, los teóricos del C.B.I. señalan que la victoria será para quien lleve la iniciativa, influya o explote tal proceso de cambio. Disputando de tal modo la bandera a la revolución se disminuye su base social de apoyo. El reformismo, enriquecido con una política de represión selectiva, que no enajene a las masas, es la receta más eficaz.

La profesionalización de las Fuerzas Armadas y policiales y su integración es una consecuencia inmediata. Lo cual implica, en el caso de Centroamérica, la incorporación de los sistemas nacionales de seguridad al sistema de seguridad norteamericana.

En esta clase de conflictos no existe la noción de victoria militar sino política. Bien sea una guerrilla o un gobierno su objetivo, el C.B.I. es una guerra de desgaste, programada para producir efectos graduales a lo largo de un período dilatado de tiempo. Las principales facetas del desgaste son el diplomático, neutralizando la solidaridad internacional, el económico, al minar la estructura productiva del enemigo, y finalmente, el militar.

Al no buscarse una victoria rápida ni una eliminación física del enemigo, el elemento tiempo cobra una nueva dimensión.

La política contra-insurgente supone, igualmente, una readaptación de los Ejércitos nacionales, los centroamericanos en esta ocasión. Nacidos como brazos ejecutores del autoritarismo criollo, los institutos armados del istmo fueron incorporando sectores institucionalistas y hasta progresistas, lo que garantizaba la permanencia de un cierto nivel de nacionalismo. Pero su conversión en fuerzas contra-insurgentes tiende a romper no sólo sus antiguos vínculos con las oligarquías criollas, sino todo vestigio de nacionalismo, transformándose gradualmente en apéndice de las fuerzas armadas norteamericanas, en Ejércitos subsidiados por los Estados Unidos y, sin embargo, incapaces de crecer y modernizarse a un ritmo compatible con el incremento de su dotación presupuestaria.

Dentro del esquema del C.B.I. no hay lugar para las aventuras golpistas. En su teatro centroamericano el C.B.I. debe perseguir una democratización que excluye a los militares del poder. Los militares a los cuarteles y a la guerra. De C.B.I. por supuesto.

Se celebran así elecciones regulares, con aceptables índices de participación. Los pueblos votan, aunque no deciden. La clase política se renueva, pero siempre dentro de un reducido círculo. Y un Presidente civil, de terno azul y corbata, substituye a un Coronel de gorra de plata y uniforme kaki. Hay democracia.

Estos «procesos de democratización» son el talismán con el que hacer retroceder a las tinieblas las fuerzas del mal representadas por el «totalitarismo sandinista». Al presentarse el conflicto centroamericano como una lucha entre democracia y totalitarismo, queda olvidada la vieja y siempre presente contradicción entre independencia-dependencia de Centroamérica.

El injerto de la doctrina del C.B.I. en sociedades con una gran tradición autoritaria como las centroamericanas, Costa Rica aparte, produce esquemas de democracia restringida o ritual, donde el poder real, apenas disimulado, permanece en manos militares. Difícil marco para iniciar con buen rumbo una transición democrática. Y para complicar aún más las cosas, una parte considerable de las fuerzas populares centroamericanas nunca tuvo la ocasión de valorar lo democrático, y ha puesto por tanto sus esperanzas en lo revolucionario.

Nicaragua. ¿Nuevo Cuba o viejo Vietnam?

El pueblo de Nicaragua había ganado la guerra de liberación de la dinastía Somoza. Pagando un elevado precio: 50.000 muertos, 10.000 heridos, 40.000 huérfanos; unos daños

de guerra estimados en 1.300 millones de dólares se añadían a una deuda heredada de 1.600 millones de dólares que los sandinistas prometían pagar.

El gobierno que debía abordar la reconstrucción nacional era la junta de cinco miembros, de los cuales dos no eran sandinistas. Pero el órgano realmente decisorio era el Directorio de nueve miembros del FSLN, quien daba órdenes a través de la mayoría sandinista en la Junta. Las tres tendencias se repartían el Directorio con tres miembros cada una. Daniel Ortega era el único miembro del Directorio que participaba en la Junta y actuaba de correa de transmisión entre ambos grupos.

Dos Ministros en el primer gobierno eran miembros del Directorio: Borge, en el Interior, y Wheelok, en Agricultura. El Sacerdote de Maryknoll, Miguel D'Escoto, era Ministro, al igual que el monje Trapense Ernesto Cardenal, con lo cual Nicaragua adquiría la particularidad de ser el único país del mundo con dos sacerdotes católicos en el Gabinete.

Entre los problemas políticos a la espera de solución, el más urgente era el destino de los antiguos guardias somocistas (1).

Las propiedades de la familia Somoza y de los somocistas más conspicuos fueron confiscadas, pero como no era fácil trazar la frontera de lo que era un somocista, se produjeron abusos por motivos de venganza personal, y, a finales de noviembre de 1979, el gobierno suspendió la aplicación de su decreto de expropiación.

El calibre de los problemas económicos era tal que la declaración del nuevo gobierno, en el sentido de que se pagaría la deuda y se mantendrían los vínculos económicos con el mundo occidental y la comunidad financiera, demostraba una gran dosis de optimismo y valentía. El Banco Mundial otorgó un crédito de emergencia de 35,9 millones de dólares, y el Banco Interamericano de Desarrollo, 88,5 millones de dólares en créditos y dos millones de dólares de subvención. Cuba donó barcos para la reconstitución de la flota pesquera y prometió maestros y doctores. La Administración Carter concedió 8,8 millones de dólares en ayuda de emergencia y envió al Congreso una propuesta de crédito de 75 millones de dólares que serían aprobados en septiembre de 1980, cuando Carter dio seguridades de que Nicaragua no estaba ayudando a los insurgentes salvadoreños.

Los préstamos ayudaron a Nicaragua a mantenerse a flote. Pero la deuda de 1,6 billones de dólares, equivalente al PIB de un año y a tres años de exportaciones, era aparentemente insalvable. El gobierno renegó la parte de la deuda a favor de bancos privados, unos 700 millones de dólares, a través de una estabilización de los tipos de interés, alargamiento de los pagos y señalamiento de una fecha límite para la liquidación, establecida en 1990 (2).

El papel de la empresa privada en las tareas de reconstrucción de la economía era vital. Pero las expropiaciones por vinculaciones somocistas y las exigencias de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), que no se limitaban a la escala de salarios sino se extendían a exigencias de cogestión, alimentaban un estado de ánimo progresivamente suspicaz por parte de los empresarios (3).

Las primeras manifestaciones de crecimiento del sector público se llevaron a cabo en la minería y la agricultura. Las propiedades de la Norana, canadiense, y de la Rosario Mining, norteamericana, fueron expropiadas. El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INTRA), que había adquirido casi la cuarta parte de la tierra de labor nacional de la familia Somoza y su círculo íntimo de colaboradores, intentó mantener las haciendas como unidades productivas, y para septiembre de 1979 cerca de 50.000 campesinos habían sido instalados por el Ministerio de Agricultura, dirigido por Jaime Wheelock, en las cooperativas creadas al efecto. El gobierno controlaba así el 12% de la producción total de café, la mitad de la producción de azúcar, un tercio del arroz y una cuarta parte de la de algodón.

El pequeño agricultor independiente fue ayudado mediante cooperativas de extensión agraria y cooperativas de servicios, al tiempo que se limitaba el precio del arrendamiento de la tierra. Continuaban existiendo grandes propiedades agrícolas, especialmente en el área de algodón y el azúcar, pero inseguras ante la posibilidad de medidas expropiatorias.

Hemos visto hasta este momento al gobierno de Managua tratando de hacer frente a los acuciantes problemas de reconstrucción de un país semidestruido por la guerra y arruinado por la deuda. Ante problemas tan graves, el Directorio consideró conveniente acudir a la movilización popular.

Las Organizaciones de Masas nacieron como reflejo del ejemplo de la revolución cubana y como respuesta espontánea del pueblo durante el período de lucha. Dependientes del Directorio, tales organizaciones eran instrumentos políticos del FSLN (4)

El mayor éxito de los CDS fue la masiva campaña de alfabetización, realizada durante el verano de 1980, y que en varios meses redujo el índice de analfabetismo de un 54 a un 12%.

En febrero de 1980 se crea la Milicia Popular Sandinista, a las órdenes de Edén Pastora, como respuesta a las acciones de la contra desde sus bases hondureñas.

En el campo informativo, «La Prensa», cuya rotativa había sido destruida por Somoza, reanudó la edición bajo la familia Chamorro. El FSLN lanzó su propio diario, «Barricada», y los sectores troskistas, «El Pueblo», que sería clausurado por el gobierno en febrero de 1980 debido a su militancia y a sus constantes ataques contra el sistema. El gobierno tenía el monopolio de la Televisión.

Robelo, pronto seguido por Violeta Barrios, dimitió de la Junta en abril de 1980 ante las escasas perspectivas que veía en una próxima celebración de elecciones. Ambos serían sucedidos por otros dos no sandinistas, Arturo Cruz, Presidente del Banco Central, y Rafael Córdoba, juez del Tribunal Supremo. Una vez fuera de la Junta, Robelo comenzó a trabajar en la organización de una coalición de partidos ajenos al marxismo (6).

El gobierno contraatacó lanzando el Frente Revolucionario, coalición del FSLN, el Partido Liberal Independiente, el Partido Socialista Nicaragüense y el Partido Popular Cristiano Social.

El Directorio había decidido que el Consejo de Estado, de 43 miembros, y de carácter consultivo, se reuniría en mayo de 1980. Diversos grupos gubernamentales y no gubernamentales, tales como las organizaciones de masas, el COSEP, los partidos políticos, designarían sus componentes. Después de muchas dudas el MDN y el COSEP se decidieron a participar en un organismo que carecería de facultades legislativas y donde la mayoría estaba a favor de las fuerzas afines al FSLN con el fin de «criticar los errores y los abusos de los líderes revolucionarios».

En el campo exterior, la habilidad del gobierno para enfriar sus relaciones con los antiguos amigos demostraba grandes dosis de inexperiencia, enormes lagunas de sensibilidad y carencias en la definición de un marco de prioridades. La tensión con Honduras, base de la contra, era lógica. El enfriamiento con Venezuela, defensor del bando contrario en el conflicto interno de El Salvador, explicable. Pero disputarle a Costa Rica un puesto en el Consejo de Seguridad sin posibilidades de obtenerlo no parecía lo más conveniente con un vecino que tanto había ayudado en la lucha contra Somoza. Distanciarse de Omar Torrijos, en Panamá, parando en seco sus deseos de ayuda y sus consejos y, sobre todo, reclamar a Colombia las islas de San Andrés y Providencia, dando lugar a la retirada del Embajador colombiano en febrero de 1980, suponía una torpeza inexcusable. Al igual que la abstención en el voto de condena a la Unión Soviética por su intervención en Afganistán.

En agosto de 1980, Humberto Ortega anunció que no habría elecciones hasta 1985, y que la propaganda y las campañas partidistas quedarían prohibidas hasta 1984. «Éstas no serán elecciones para decidir quién maneja el poder, pues el pueblo tiene el poder a través de su vanguardia, el Frente Sandinista.» Esta frase reflejaba claramente la idea que los nuevos gobernantes tenían del sistema democrático (7).

En noviembre de 1980, un grupo de la Juventud Sandinista saqueó la sede del MDN en Managua, y a los pocos días varias sedes de otros partidos de la oposición fueron asaltadas ante la pasividad de la policía. Jorge Salazar, Presidente en funciones de la COSEP, era muerto por la policía en un confuso incidente, tras el cual Tomás Borge declaró que Salazar estaba en tratos con la contrarrevolución, encarcelando a continuación a su hermano Alejandro y a Leonardo Somarriba, Vicepresidente de la Cámara de Comercio, acusados de conspiración para derribar al gobierno. Una manifestación de 100.000 componentes de las «turbas divinas» de Borge cerraba el episodio con una denuncia de los contrarrevolucionarios.

Once miembros del Consejo de Estado, representantes de la oposición, renunciaron en señal de protesta en medio de rumores de que el jefe de la Policía, Lenin Cerna, había preparado una trampa a los hermanos Salazar y mantenía una prisión secreta donde se practicaba regularmente la tortura.

En el mes de septiembre de 1980 se produce un levantamiento de los indígenas del área de Bluefields, en el Caribe. La chispa fue una campaña de alfabetización realizada en castellano, apenas usado por los 200.000 indios miskitos, sumos y ramas que aparte de sus dialectos indígenas, utilizaban el inglés, y el temor de que los sandinistas pensaban alterar sus tradicionales sistemas de tenencia de la tierra y, en general, su género de vida.

Al cerrarse los dos primeros años de la revolución sandinista los logros en materia de reconstrucción nacional, de alfabetización, de atenciones sanitarias, construcción de viviendas y reasentamiento de campesinos a través de la reforma agraria, eran impresionantes. El FSLN había sabido articular el fervor patriótico liberado por la guerra civil en torno a un programa de reconstrucción nacional que contaba con el apoyo de una clara mayoría del país.

Los 75 millones de dólares de ayuda de los Estados Unidos comenzaron a llegar a Nicaragua en septiembre de 1980, pero cuando Reagan llegó a la presidencia suspendió el flujo de la parte no desembolsada del préstamo, 15 millones de dólares en total. Tal decisión, tomada en marzo de 1981 y justificada sobre la base de que Nicaragua apoyaba a la insurgencia salvadoreña, privaba a Washington de la zanahoria y le dejaba únicamente con la estaca.

Entre los Estados Unidos y Nicaragua se había instalado la desconfianza. El entonces Embajador norteamericano en Managua, Pezzullo, asegura que en abril de 1981 había conseguido persuadir a los nicaragüenses a reducir el flujo de ayuda a la insurgencia salvadoreña a cantidades insignificantes, pero que la Administración norteamericana no restauró la ayuda económica.

En agosto de 1981, Thomas Enders, Subsecretario para Asuntos Interamericanos, pasó dos días en Managua. Las discusiones debían tener un seguimiento mediante el intercambio escrito de peticiones para una normalización de las relaciones. Entre las exigencias norteamericanas figuraba que Nicaragua debía devolver su armamento pesado a Cuba, la Unión Soviética y demás países de origen. El seguimiento fue interrumpido en octubre de 1981. La administración norteamericana indicó que Managua había evadido una respuesta «substancial» a las preocupaciones de Washington. El viaje de Enders es el único esfuerzo serio por parte norteamericana en la búsqueda de una solución diplomática a la crisis con Managua hasta el verano de 1984, cuando el Secretario de Estado, Schultz, visitó Managua de cara, fundamentalmente, a la galería del Congreso norteamericano, inquieto por saber si el arreglo político recibía toda la atención que se merecía (8).

A medida que la hostilidad de la nueva administración norteamericana es más evidente, surge el temor en Managua de que las fuerzas contrainsurgentes en el exterior puedan coordinar su acción con la oposición interna y crear un frente sólido opuesto a la revolución sandinista. En agosto de 1981, el Gobierno promulga la Ley de Emergencia Económica y Social, y, en marzo de 1982, la Ley de Emergencia Nacional. Ambas representan un esfuerzo por eliminar las posibilidades de desarrollo de un frente interno, preámbulo necesario a una intervención militar. Al mismo tiempo, el FSLN promueve una movilización popular sin precedentes, incrementando el número de las milicias populares, organizando la vigilancia revolucionaria de fábricas, puentes y vías de comunicación, y la instrucción de la población en métodos de defensa. Tales medidas provocaron un notable desgaste económico cuyos efectos comienzan a ser visibles a partir de los últimos meses de 1982.

Al cerrarse gradualmente el espacio político a la oposición, las organizaciones empresariales y políticas comienzan a aprovechar las instancias de denuncia de la jerarquía católica, en actos de religiosidad masivos, para promocionar sus posturas opositoras.

En junio de 1981, los obispos presentan un ultimátum a los sacerdotes que ocupan cargos públicos para que los abandonen. Monseñor Obando es condecorado por el Gobierno de Venezuela y se fotografía junto con Adolfo Calero y Alfonso Robelo, futuros dirigentes de la contra. La Conferencia Episcopal denuncia el reasentamiento de los miskitos del río Coco, Monseñor Obando viaja a los Estados Unidos, dos capuchinos y tres religiosas de la Costa Atlántica son expulsados y, más tarde, la orden es revocada como un error por el Ministerio del Interior.

El distanciamiento del COSEP y de los sectores más politizados de los empresarios lleva a la revolución a estrechar relaciones con los productores medianos del sector agrícola y del mundo empresarial (9).

Observamos cómo el acoso norteamericano provoca respuestas de signo distinto en el campo político y el económico. En el primero, restricción de las libertades y limitación del espacio político a la oposición. En el segundo, búsqueda de fórmulas de escaso contenido dogmático e intento de ensanchar la base participativa en el diseño y ejecución de los programas económicos, intentando lograr un consenso sobre las grandes líneas de desarrollo del país.

La campaña de «satanización» de la Administración Reagan conocía los primeros reveses. La propuesta de paz del Presidente López Portillo, en marzo de 1982, es apoyada por una larga lista de gobiernos democráticos, por la Comunidad Económica Europea, por la Internacional Socialista y por 106 miembros del Congreso norteamericano. El fracaso de la campaña de Hay, mostrando fotografías de miskitos quemados por sandinistas, que resultaron ser de la época de Somoza, o las declaraciones de Orlando Tardencilla, sandinista arrepentido, desmintiendo en el propio Departamento de Estado las vinculaciones de Nicaragua en el conflicto salvadoreño, fueron el segundo traspies. La victoria de las tesis anti-intervencionistas de Nicaragua en el Consejo de Seguridad por 12 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra —el de los Estados Unidos— constituyó el tercer golpe. El apoyo a Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas significó el fin de la colaboración argentina y el distanciamiento de Venezuela.

La Administración Reagan centra su ofensiva acusando a Managua, sin presentar pruebas, de ser responsable del abastecimiento de armas a la guerrilla salvadoreña, al tiempo que fortalece a las fuerzas de la contra en Honduras y a las de Edén Pastora en Costa Rica. A un año del inicio de la nueva estrategia, más de 3.000 contras invaden las zonas fronterizas del norte, organizados en fuerzas de tarea de 500 hombres que operan con tácticas guerrilleras y de hostigamiento de la población civil, mientras que buques de guerra norteamericanos patrullan constantemente las costas nicaragüenses. Y se acentúa la presión diplomática entre los centroamericanos, con notable éxito en el Panamá del General Noriega y en Honduras, donde Suazo Córdova se opaca ante el «hombre fuerte» del momento, el General Álvarez.

El hostigamiento conduce a un círculo vicioso: agresión militar —desgaste económico— lucha contra el frente interno —nuevos pretextos para la campaña antisandinista... En medio de este clima, la invasión de Granada hace pensar que se estuvo muy cerca de la intervención directa norteamericana en Nicaragua en noviembre de 1983 (10).

Hasta mediados de 1983, la defensa había tenido carácter voluntario, corriendo a cargo de los «muchachos» del FSLN. La intensificación de las acciones de la contra llevó al gobierno a promulgar la Ley del Servicio Militar Patriótico, que se convertiría en una prueba política para el FSLN. La falta de hábitos culturales para aceptar en Centroamérica un servicio militar obligatorio y la tarea de organizar desde cero la nueva institución, provocaron dificultades y no pocas resistencias a nivel popular.

Robelo, Cruz, y tantos otros empresarios, abandonan el país pasando a integrar las filas de la oposición armada. Pero al mismo tiempo, las acciones de la contra son aprovechadas por el Gobierno para consolidar la movilización popular en torno a la defensa de la patria.

En mayo de 1982, varios empresarios del COSEP y miembros del Partido Comunista, encarcelados por violar la Ley de Emergencia Nacional, son puestos en libertad antes de cumplir su condena. Durante el resto del año se inicia la discusión de la Ley de Partidos Políticos, en la que participan todos los partidos de la oposición agrupados en la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa, que también participa en la discusión de la Ley Electoral. Se liberaliza progresivamente la censura sobre «La Prensa». Se aumentan los precios del azúcar, de la carne, el banano, el algodón y el ajonjolí, así como una lista de productos manufacturados, medidas que benefician a los empresarios.

La cercanía de las elecciones combinada con las medidas escasamente populares que el hostigamiento de la contra impulsó a tomar, son la explicación de esta apertura de espacios políticos a la oposición y de incentivos a los agricultores y empresarios.

Las relaciones Iglesia-Estado seguía empeorando. El Papa Juan Pablo II enviaba, en junio de 1982, una carta a los obispos nicaragüenses instándoles a la unidad y condenando la llamada «Iglesia popular». El FSLN consideró la carta como una clara postura contraria a la revolución. La visita del Papa en 1983 consolidará la tensión creciente debido en gran parte a la actuación de las «turbas divinas» que, torpemente, intentaron trasladar la imagen de un pueblo unánimemente aglutinado detrás de sus líderes. Sin embargo, el Papa se declaró nitidamente partidario de las soluciones pacíficas y manifestó un apoyo explícito a las gestiones mediadoras del grupo Contadora (11).

Durante 1982 se realizó un esfuerzo de descentralización y regionalización de la administración del país que, aunque pensada para facilitar una mejor resistencia militar en caso de intervención norteamericana, dividiendo al país en nueve regiones autónomas, aportó mayor participación popular y eficacia a la gestión económica. En 1983, excelente año cafetalero, el PIB creció al 5,3%, siendo ésta la tasa más alta de América Latina, donde se registró en conjunto un decrecimiento del 3,2%. El producto agrícola subió un 14% y el manufacturero un 13%, lo que significaba que la redistribución de recursos no eliminaba los incentivos productivos.

Sin embargo, los sectores terciarios sufrieron una aguda crisis, en especial la actividad comercial, aprisionada por la escasez de divisas, el contrabando y el mercado negro. Y los salarios de los trabajadores no fueron reajustados en función del índice de inflación. Además, el servicio de la deuda exterior, en gran parte heredada, era el más alto del hemisferio en relación a las exportaciones.

Si los Estados Unidos habían exigido en 1981, como condición para la normalización de relaciones, el cese de la ayuda al FMLN salvadoreño (visita de T. Enders a Managua en agosto), en abril de 1982, a través del Embajador Quainton, exigían pluralismo político con elecciones libres, economía mixta y no alineamiento, así como la reducción de los efectivos militares y la retirada de asesores extranjeros. Quainton leyó tales peticiones sin dejar ningún documento escrito, y, ante la insistencia nicaragüense, envió posteriormente un «no papel», es decir sin encabezamiento ni firma. No estaba claro en este momento si el objetivo de la diplomacia norteamericana era promover la democracia o simplemente derribar el régimen sandinista. Después del reemplazo de Thomas Enders por Langhorne Motley, Reagan se refería en julio de 1983 al Gobierno nicaragüense como una «dictadura de falsos revolucionarios». La escalada del lenguaje presidencial era evidente en 1984, cuando el gobierno de Managua se había transformado en un «reino de terror comunista» y en una «mazmorra totalitaria» (12).

Para 1983 era ya evidente que la Administración norteamericana actuaba progresivamente en respuesta a presiones internas más que de acuerdo con una estrategia coherente. La decisión de nombrar un negociador especial en abril de 1983 y la creación de una Comisión Nacional Bipartita en julio del mismo año fueron respuestas al manifiesto descontento de amplios sectores de la opinión pública y del Congreso ante el seso militar de la Casa Blanca. El malestar del Congreso se manifestó bloqueando por 228-195 votos la ayuda encubierta a los contras.

Después de la invasión de Granada, el 25 de octubre de 1983, Nicaragua anunció estar lista para la firma de cualquier documento que prohibiera la exportación de la revolución, pero Washington no respondió hasta enero de 1984, cuando Harry Schlaudeman había sustituido a Stone como enviado especial para Centroamérica. Schlaudeman se reunió con el Viceministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Tinoco, y rechazó la propuesta. Y, en enero igualmente, Nicaragua aceptó, junto con los otros cuatro estados centroamericanos, el Documento de Objetivos de Contadora. Pero la atención estaba puesta en Washington en la operación de minado de la bahía de Corinto, dirigida por la CIA.

Las negociaciones con Nicaragua servían a la Administración norteamericana para privar a los demócratas de una bandera electoral, tranquilizar a los países de Contadora y Europa Occidental y, finalmente, para respaldar al Presidente salvadoreño, Napoleón Duarte. Éste había prometido durante su campaña negociaciones con el FMLN, pero después de obtener una cuantiosa ayuda militar de Washington y de llegar a un acomodo con ARENA y el Ejército, no parecía tener ninguna prisa en iniciar el diálogo con la guerrilla. El minado de puertos nicaragüenses provocó protestas de una gran cantidad de países, incluidos aliados de los Estados Unidos, de amplios sectores de la opinión pública norteamericana, y el bochorno de tener que rechazar la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia para evitar una segura condena.

La política norteamericana parecía tener por estas fechas como único objetivo el hostigamiento y acoso del sandinismo, no la negociación con el mismo. Nicaragua respondió endureciendo los términos para un arreglo regional, por lo que las acciones norteamericanas representaban en última instancia dificultades suplementarias para el proceso de paz de Contadora. Incluso el Senado norteamericano, controlado por los republicanos, archivó en junio de 1984 una petición de ayuda a los contras.

Tales acontecimientos, unidos a la advertencia del Presidente de la Madrid durante su visita a Washington en mayo de 1984 de no caer en la «ilusión de la eficacia de la fuerza», añadiendo que «un estilo uniforme de vida democrática no puede ser impuesto a nadie», fueron la causa del viaje del Secretario de Estado Schultz a Managua el 1 de junio de 1984 y de la primera sesión de negociaciones de Manzanillo, México, entre Schlaudeman y Tinoco.

El Gobierno sandinista intentaba, mientras tanto, desarmar a la oposición armada mediante el instrumento del perdón. En diciembre de 1983 se decretó una amnistía para los miskitos alzados en armas y para los contrarrevolucionarios, con garantías para la repatriación y reinserción. En el 50 aniversario del asesinato de Sandino la Junta de Gobierno anunció la celebración de elecciones para noviembre de 1984. El COSEP y los partidos de la oposición agrupados en la Coordinadora Democrática exigieron condiciones entre las cuales figuraba la participación en las mismas de los contrarrevolucionarios. Si la contrarrevolución era en gran medida la antigua Guardia somocista, verdadera piedra angular de la dictadura familiar, no parecía congruente exigir la participación de los restos dispersos de la antigua médula dictatorial para operar un supuesto regreso a la democracia. El que la coordinadora asumiera la defensa de una causa tan escasamente popular no tiene otra explicación que los poderes de persuasión de Washington. Una segunda condición para la participación electoral, el fin del estado de emergencia, parecía más lógica. Pero observadores del Partido Social-Cristiano y Social-Demócratas que acudieron a las elecciones salvadoreñas de marzo y mayo 1984 no protestaron, porque el «estado de sitio» sólo fue levantado veinticuatro horas antes de las elecciones y siguió en vigor después de la toma de posesión de Duarte.

En los primeros meses de 1984 se constituyó el Consejo Nacional de Partidos Políticos y el Consejo Supremo Electoral, aprobándose, además, la Ley Electoral. Todo con vistas a las elecciones a celebrar el 4 de noviembre. Éstas serían de carácter presidencial y para la Asamblea Constituyente y Legislativa, eligiéndose un total de 90 parlamentarios. La participación del Ejército en las elecciones, la cedulación de los votantes y el acceso de las diferentes formaciones políticas a los medios de comunicación constituyeron los puntos más conflictivos de la campaña electoral (13).

Desde el inicio de la campaña se pusieron de manifiesto las dudas de los partidos conservadores, agrupados en la Coordinadora Democrática, en cuanto a la conveniencia de acudir a las elecciones. Dado el amplio apoyo popular de que gozaba el FSLN y el efecto favorable que internacionalmente supondría para el sandinismo un triunfo electoral, la rentabilidad de una abstención, regateando así al FSLN legitimidad internacional, parecía mayor que la ventaja de obtener una posición minoritaria en la Asamblea.

El 22 de abril de 1984, la Conferencia Episcopal hizo un llamado al gobierno para que dialogara incondicionalmente con los «alzados en armas», planteamiento que, por coincidir con los enfoques de la Administración Reagan y con los de la oposición conservadora, provocó una respuesta airada del FSLN y enfrió aún más las relaciones Iglesia-Estado.

La actividad económica, mientras tanto, se encuadraba progresivamente en pautas de economía de guerra, registrándose por primera vez fuertes alzas inflacionistas en los 23 productos básicos y un deterioro en el acceso a los antiguos patrones de consumo que afectaba mucho más sensiblemente a las capas acomodadas que a las populares.

La mediación del Presidente Betancur entre la Coordinadora Democrática y el FSLN, a lo largo del verano de 1984, afinó las condiciones de aquella para participar en las elecciones, que quedaban reducidas a seis requisitos: libertad de prensa, derecho de reunión, libre acceso al proceso de cómputo de votos, observación y verificación internacional del proceso electoral, alejamiento de las urnas de los cuarteles y retraso de las elecciones para permitir al menos noventa días de campaña (14).

Mientras tanto, tras cinco reuniones en Manzanillo entre Schlaudeman y Tinoco, Nicaragua había ofrecido a cambio de una garantía formal norteamericana de no agresión: 1) retirar asesores militares extranjeros; 2) dar facilidades para que se investigase la supuesta conexión nicaragüense con la guerrilla salvadoreña; 3) no admitir bases extranjeras en su territorio, y 4) no realizar ningún tipo de maniobra conjunta. En el campo interno, Nicaragua se mostraba dispuesta a congelar el proceso revolucionario pero sin renunciar a lo ya conseguido: un Ejército competente y una gran capacidad de movilización de masas. El anuncio en septiembre de 1984 por Nicaragua de que estaba dispuesta a firmar la versión revisada del Acta de Contadora, tomó a contrapié al Departamento de Estado, pues éste siempre había partido de la base de que Nicaragua jamás aceptaría el Acta, y no había considerado seriamente la postura a adoptar ante una aceptación. La reacción norteamericana fue de inmediato rechazo, sentenciando de paso los contactos de Manzanillo.

Washington tomó dos direcciones: explicar sus objeciones a la versión revisada del Acta, basadas en la supuesta asimetría en el tratamiento de los temas de seguridad, y presionar a sus aliados centroamericanos para que presentaran las suyas. En el fondo, la mayor objeción norteamericana consistía en no aceptar una modificación a su política por un Acuerdo en cuya elaboración no había participado y del que no era parte.

El 19 de octubre de 1984 se reúnen en Tegucigalpa los Cancilleres de Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. La reunión de Tegucigalpa supuso un éxito para los intentos de Washington de diluir el peligro de una aceptación del Acta revisada de Contadora: se aislaba a Nicaragua de sus vecinos (Guatemala se desmarcó negándose a la firma del documento final e indicando que asistía a título de observador) y se desvirtuaba el proceso de Contadora ya que se desautorizaba directamente la labor mediadora del grupo al proponer los tres centroamericanos sus propias modificaciones fuera del contexto de mediación hasta entonces seguido.

Las elecciones del 4 de noviembre dieron el triunfo al FSLN con un 63% de los votos emitidos, demostró la escasa fuerza de los partidos a la izquierda del Frente (PSN, PCN y MAP, en total 3%) y la existencia de una corriente considerable de moderación que apoyaba a la CDN o a los partidos a la derecha del FSLN. El índice de abstención fue del 24% y el de votos nulos de 7%. El Frente ganaba con una proporción del 60-40, lo que reflejaba con bastante realismo las opciones políticas de la población.

Ronald Reagan había sido reelecto el 6 de noviembre, y su reacción no se hizo esperar. Tras calificar las elecciones nicaragüenses de farsa, el día 7 se interceptan barcos mercantes con destino a Nicaragua, se aumenta la presión de la contra, se envían aviones espía que rompen la barrera del sonido sobre Managua, se traslada a Honduras el batallón aerotransportado utilizado en la invasión de Granada.

La mediación del Presidente Betancur entre la Coordinadora Democrática y el FSLN, a lo largo del verano de 1984, afinó las condiciones de aquella para participar en las elecciones, que quedaban reducidas a seis requisitos: libertad de prensa, derecho de reunión, libre acceso al proceso de cómputo de votos, observación y verificación internacional del proceso electoral, alejamiento de las urnas de los cuarteles y retraso de las elecciones para permitir al menos noventa días de campaña (14).

Mientras tanto, tras cinco reuniones en Manzanillo entre Schlaudeman y Tinoco, Nicaragua había ofrecido a cambio de una garantía formal norteamericana de no agresión: 1) retirar asesores militares extranjeros; 2) dar facilidades para que se investigase la supuesta conexión nicaragüense con la guerrilla salvadoreña; 3) no admitir bases extranjeras en su territorio, y 4) no realizar ningún tipo de maniobra conjunta. En el campo interno, Nicaragua se mostraba dispuesta a congelar el proceso revolucionario pero sin renunciar a lo ya conseguido: un Ejército competente y una gran capacidad de movilización de masas. El anuncio en septiembre de 1984 por Nicaragua de que estaba dispuesta a firmar la versión revisada del Acta de Contadora, tomó a contrapié al Departamento de Estado, pues éste siempre había partido de la base de que Nicaragua jamás aceptaría el Acta, y no había considerado seriamente la postura a adoptar ante una aceptación. La reacción norteamericana fue de inmediato rechazo, sentenciando de paso los contactos de Manzanillo.

Washington tomó dos direcciones: explicar sus objeciones a la versión revisada del Acta, basadas en la supuesta asimetría en el tratamiento de los temas de seguridad, y presionar a sus aliados centroamericanos para que presentaran las suyas. En el fondo, la mayor objeción norteamericana consistía en no aceptar una modificación a su política por un Acuerdo en cuya elaboración no había participado y del que no era parte.

El 19 de octubre de 1984 se reúnen en Tegucigalpa los Cancilleres de Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. La reunión de Tegucigalpa supuso un éxito para los intentos de Washington de diluir el peligro de una aceptación del Acta revisada de Contadora: se aislaba a Nicaragua de su vecinos (Guatemala se desmarcó negándose a la firma del documento final e indicando que asistía a título de observador) y se desvirtuaba el proceso de Contadora ya que se desautorizaba directamente la labor mediadora del grupo al proponer los tres centroamericanos sus propias modificaciones fuera del contexto de mediación hasta entonces seguido.

Las elecciones del 4 de noviembre dieron el triunfo al FSLN con un 63% de los votos emitidos, demostró la escasa fuerza de los partidos a la izquierda del Frente (PSN, PCN y MAP, en total 3%) y la existencia de una corriente considerable de moderación que apoyaba a la CDN o a los partidos a la derecha del FSLN. El índice de abstención fue del 24% y el de votos nulos de 7%. El Frente ganaba con una proporción del 60-40, lo que reflejaba con bastante realismo las opciones políticas de la población.

Ronald Reagan había sido reelecto el 6 de noviembre, y su reacción no se hizo esperar. Tras calificar las elecciones nicaragüenses de farsa, el día 7 se interceptan barcos mercantes con destino a Nicaragua, se aumenta la presión de la contra, se envían aviones espía que rompen la barrera del sonido sobre Managua, se traslada a Honduras el batallón aerotransportado utilizado en la invasión de Granada.

Daniel Ortega inicia inmediatamente el Diálogo Nacional con los partidos participantes en las elecciones y con las agrupaciones sindicales, empresariales y religiosas. Su objetivo declara era «institucionalizar la democracia» y señalar pautas para la redacción de una nueva Constitución. También anunciaba la desaparición de la Junta de Reconstrucción Nacional y la remodelación de la dirección del FSLN de 9 a 5 Comandantes —los dos Ortega, Wheelock, Bayardo Arce y Borge—, de la que el propio Ortega saldría reforzado. Estas medidas se tomaban con un trasfondo de moderación por parte de la Iglesia y de disposición de Arturo Cruz de abrir un compás de espera para que Ortega pudiera asumir el «reto histórico de recuperar los objetivos originales de la revolución». El Diálogo Nacional sería suspendido definitivamente el 1 de diciembre siguiente ante la insistencia del FSLN por obtener de los partidos participantes una condena de la agresión norteamericana y la negativa de aquellos sobre la base de que dicho tema no debía figurar en la agenda de trabajo, y que los acuerdos logrados debían ser vinculantes para la Asamblea Nacional.

El juramento de toma de posesión de Daniel Ortega el 10 de enero de 1985 fue realizado ante el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Vega. Ortega ofreció a los «alzados en armas» que depusieran éstas ante las autoridades de Costa Rica y Honduras con supervisión de la Cruz Roja, a cambio de lo cual se les concedería una amnistía. También se comprometió al mantenimiento de la propiedad privada y al respeto de las libertades públicas, declarando irreversible el régimen parlamentario. Los principios originarios de la Revolución serían mantenidos y el no alineamiento constituiría el principio rector de la política exterior, así como la búsqueda de la paz.

Conseguido el objetivo de ofrecer una imagen dialogante antes de las elecciones, la Administración Reagan suspende las conversaciones de Manzanillo consciente del prestigio internacional que las mismas proporcionaban a Managua y del mal disimulado temor de Honduras y, en cierto modo, Costa Rica, de que se pudiera llegar a un acuerdo a sus espaldas.

La esperanza suscitada por el discurso de investidura de Ortega sobre la posible incorporación a las tareas constituyentes de las demás fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias se vio pronto desmentida por la política de apisonadora seguida por el Frente, apoyado en su mayoría en la Cámara. El FSLN abordaba decididamente una doble política de acercamiento y búsqueda de la coexistencia con el COSEP y MISURASATA, y de fomento de la división de la oposición, tanto la armada como la no armada.

Cruz, Robelo y Calero llegaban mientras tanto, en San José, a un frágil acuerdo de colaboración, y el deseo norteamericano de formar un Frente cívico-militar, al estilo del FDR-FMLN salvadoreño, en aplicación del principio de la «simetría» entre ambas naciones, no parecía tener el camino fácil (15).

En mayo de 1985, y al día siguiente de que el Congreso norteamericano rechazara la concesión de ayuda a la contra, Ortega inicia un viaje a la Unión Soviética y países del Este en una nueva manifestación de desafortunada coincidencia de calendario. Aunque posteriormente el viaje fue prolongado a algunas capitales de Europa occidental, la reacción norteamericana fue decretar un embargo económico que produjo daños a la economía nicaragüense calculados en unos 30 millones de dólares (16).

En enero de 1986, el Gobierno sandinista toma una serie de medidas en el área de la reforma agraria, ampliando la lista de propiedades susceptibles de expropiación, de los salarios, donde las subidas van del 40 al 100%, y de la paridad monetaria, operando una fuerte devaluación de la moneda. Las mismas suponían en su conjunto un fuerte golpe para la empresa privada y un paso adelante hacia una economía socializada. Por las mismas fechas, las perspectivas del diálogo interno eran bien limitadas ante el clima de presión militar y económica. Y el Arzobispo de Managua, Obando, elevado al Cardenalato el 24 de abril de 1985, se había convertido en la auténtica «bestia negra» del FSLN.

El 21 de febrero se presenta a la Asamblea Nacional el anteproyecto de Constitución que, aunque se ratifica en los principios de pluralismo político, economía mixta, no alineamiento y latinoamericanismo, concede amplísimas facultades al Presidente en materias tales como la aprobación de presupuestos o la declaración de guerra, con un claro predominio del ejecutivo sobre el judicial y el legislativo. El EPS es definido como «instrumento estratégico de la defensa de la patria y de las conquistas revolucionarias».

En el plano económico, la situación era catastrófica. Un 400% de inflación, alzas de precios de productos básicos de hasta un 300%, unos gastos de defensa que absorbían la mitad del presupuesto, un sector privado incapaz de hacer frente a las subidas salariales, eran indicadores de tal situación.

Las autoridades de Managua, que consideraban que no tenían ya nada que ganar a los ojos de Washington, y no veían lo que podían perder ante el resto del mundo, parecían consolidar la vía de la intransigencia y la confrontación. En marzo de 1986, cerca de 1.500 soldados del EPS penetran hasta 20 kilómetros en territorio hondureño y atacan bases de la contra. Mientras, los préstamos de la Unión Soviética se acercaban a los 100 millones de dólares.

A lo largo del verano de 1986, las autoridades de Managua deciden el cierre del diario «La Prensa» y la expulsión del Obispo Vega. Ambas medidas combinadas asestaban un duro golpe a la credibilidad democrática del régimen sandinista en las menguantes filas de las amistades nicaragüenses en el mundo.

La continua presión norteamericana iba produciendo dosis cada vez más perceptibles de intransigencia nicaragüense.

Preguntado en una ocasión el Presidente Reagan sobre el objetivo del acoso y hostigamiento al régimen sandinista, respondió que buscaba obligarle a «tirar la toalla» (say uncle), lenguaje boxístico muy apropiado al estado de las relaciones Washington-Managua. Pareciera que la toalla no fuera del agrado de Managua y que la dirigencia sandinista prefiriera «liarse la manta a la cabeza».

El Salvador. «En nombre de Dios, cesen la represión»

El Salvador, a diferencia de Nicaragua, no había tenido un tirano, sino 17 gobiernos militares de 1932 a 1979.

El golpe de los jóvenes oficiales, que derribó a Romero el 15 de octubre de 1979, inició una pauta de creciente implicación por parte de los Estados Unidos. Los Coroneles Gutiérrez y Majano aceptaron tres civiles para dar un mínimo de legitimidad al nuevo Gobierno: Román Mayorga, de la Universidad Católica; Guillermo Ungo, representante de fuerzas moderadas de inspiración socialista, y Mario Andino, Director de la filial de una transnacional norteamericana del cobre, Phelps Dodge, aceptaron participar en una Junta que prometía dismantelar la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), fachada de varios escuadrones de la muerte, liberar los prisioneros políticos, nacionalizar la exportación del café, fijar sueldos mínimos e iniciar un programa de reforma agraria. Pero el temor de parte de la oficialidad, implicada en la corrupción y las atrocidades, hizo que desde su comienzo la Junta dudara entre la reforma y la victoria militar sobre la guerrilla. Por otra parte, Andino, cuya empresa tenía íntimos contactos con los militares, siempre votaba con los dos Coroneles anulando las iniciativas reformistas. En la primera semana de existencia de la Jnta, 160 personas murieron a manos de la policía, y los miembros militares de ORDEN se integraron en otras bandas terroristas una vez disuelta su organización.

Mientras tanto, la guerrilla acentuaba su actividad, temerosa en un primer momento de que la política reformista prometida pudiera destruir su base política y, más tarde, cuando el reformismo cedió paso a la represión pura y simple, como respuesta a la violencia institucionalizada.

La Administración Carter se encontraba atrapada por el Gobierno que ella misma había propiciado. La manera de escapar de la trampa fue celebrar «elecciones libres». La Iglesia y la izquierda moderada pensaban que unas elecciones sólo podían consolidar la situación de hecho. Ungo intentaba obtener un arreglo político como alternativa al baño de sangre. Pero en vano.

En enero de 1980, los tres civiles abandonaron la Junta, y parte de los militares reformistas que habían participado en el golpe abandonaron el país. Sus vidas corrían peligro. Gutiérrez y el Ministro de Defensa, Coronel García, tomaron el poder. Ante la insistencia norteamericana la nueva Junta contaba con dos cristianodemócratas que generosamente extendían su manto de respetabilidad. La Democracia Cristiana ya no era la misma que en 1972, cuando Duarte y Ungo debieran haber ganado las elecciones presidenciales. Su clara orientación a la derecha le había distanciado de la Iglesia y de la izquierda moderada.

El Departamento de Estado consolidó rápidamente las relaciones con la nueva Junta prometiendo 36 consejeros militares para que la guerra contrainsurgencia fuera más limpia. Uno de los dos miembros civiles de la Junta presentó la dimisión, siendo reemplazado por Duarte, recién desembarcado de sus siete años de exilio en Venezuela.

Las organizaciones populares crean el mismo mes de enero una organización cúpula, la Coordinadora Revolucionaria de Masas y organizan una demostración masiva el 22 de enero para conmemorar el 48 aniversario de la matanza de 1932. Sesenta y siete muertos y 250 heridos fue el saldo de la demostración. Las organizaciones populares abandonaban progresivamente los cauces legales y se incorporaban a la guerrilla, que no daba abasto para la incorporación de tan numerosos contingentes.

Parecía que los únicos amigos de los cristianodemócratas eran extranjeros. Sus partidos hermanos de Venezuela, Costa Rica, Alemania, Italia y, especialmente, círculos interesados de Washington, los consideraban la última esperanza para evitar la guerra civil en El Salvador (17).

El 23 de marzo de 1980, el Arzobispo Romero, después de declarar en un sermón que la Coordinadora tenía su parte de culpa, pero que podría ser la solución del conflicto si maduraba y era capaz de comprender las aspiraciones del pueblo, se dirigía en éstos términos al gobierno: «En nombre de Dios, les suplico, les pido, les ordeno, cesen la represión.» Al día siguiente «Monseñor» era asesinado mientras oficiaba la misa. Era un secreto a voces que D'Aubuisson y Ricardo Lau —jefe de inteligencia de la «contra» en Honduras— intervinieron en este asesinato, pero el juez encargado de la investigación, Ramírez Amaya, sufrió un atentado, abandonó el país, y todo quedó como antes. D'Aubuisson se paseaba mientras tanto por los cuarteles con una cassette en la que un discurso grabado aplaudía el asesinato del Arzobispo y llamaba al golpe.

La ayuda norteamericana no cesaba, a pesar de todo. El Congreso aprobaba una ayuda militar de 5,7 millones de dólares para reforzar el papel clave del Ejército en la política de «reformas» (18).

El Ejército, en operación de pinza combinada con el Ejército hondureño, atrapaba a cientos de campesinos que huían de la violencia en las riberas del río Sumpul y mataba a sangre fría a 600, la mayoría mujeres y niños. Era el 14 de mayo de 1980 (19).

La política reformista de Carter ahuyentaba el capital necesario para llevar a cabo las reformas. Y en abril de 1980 se crea el Frente Democrático Revolucionario (FDR) a base de las organizaciones de la Coordinadora Democrática y 16 organizaciones populares, entre las cuales el 90% de los trabajadores sindicados. El FDR consideraba la guerrilla como su brazo armado y la lucha antioligárquica y antiimperialista como su objetivo. El hecho de que importantes figuras políticas, como Ungo, Zamora, Álvarez Córdoba, integraron el FDR, asestó un duro golpe a la credibilidad del Gobierno y a las esperanzas de un acuerdo. En octubre, los cinco grupos de la guerrilla formaron el Frente Nacional de Liberación Farabundo Martí (FMLN) como contraparte militar del FDR. Ambas organizaciones se diferenciaban por sus orígenes e ideología, pero la oposición a la oligarquía y al gobierno militar proporcionaba el cemento de la unión.

A finales del verano, Carter intentó separar al FDR del FMLN ofreciendo a los elementos más moderados gobernar en coalición con los militares. Pero la Administración norteamericana no se decidió a dar el paso esencial: obligar al Ejército a compartir el poder con la izquierda moderada. En noviembre de 1980, las fuerzas de seguridad asesinaron a Enrique Álvarez, jefe del FDR, que fue substituido por Ungo.

Ese mismo mes, Ronald Reagan ascendía a la presidencia de los Estados Unidos. Un mes más tarde, tres monjas norteamericanas de Maryknoll eran salvajemente asesinadas.

En diciembre, el FMLN anunció una «ofensiva final», de tal modo que Reagan encontrara una situación irreversible cuando llegara a la Casa Blanca. La ofensiva falló fundamentalmente porque los campesinos, atraídos por las promesas de reforma agraria o

intimidados por las amenazas, se negaron a participar en un levantamiento generalizado. Se calcula que en 1980 se cometieron 10.000 asesinatos, la mayoría de los cuales por las fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte.

Reagan apostó inmediatamente por una victoria militar. En un país minúsculo, en el que 4.000 guerrilleros se enfrentaban a un Ejército de 17.000 hombres, armados y entrenados por los Estados Unidos, la apuesta parecía fácil. Para quien no conociera la historia salvadoreña. La guerra se empantanó y la Casa Blanca admitía en marzo de 1981 que amplios sectores de la opinión pública norteamericana se oponían a su política (20).

Como no había manera de ganar la guerra, Reagan pensó en una victoria electoral en marzo de 1982. Una Asamblea Constituyente electiva redactaría una nueva Constitución y designaría un Presidente interino —Duarte actuaba como Presidente en funciones desde enero de 1980— hasta la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales en 1984. Duarte ofreció a la guerrilla una participación en las elecciones si deponía las armas, pero a la vista de la lista de 100 nombres de dirigentes guerrilleros que los escuadrones de la muerte hicieron circular, no es extraño que la guerrilla declinara el ofrecimiento.

Las elecciones eran urgentes, porque en agosto de 1981 Francia y México habían declarado que el FMLN-FDR era una «fuerza política representativa» y que el conflicto debía ser resuelto mediante la negociación. El 28 de marzo de 1982 se celebraron elecciones, salvo en las áreas controladas por el Frente. El porcentaje de participación electoral fue grande a pesar de la campaña del FDR por la abstención. Pero a medida que los votantes introducían la papeleta en la urna sus tarjetas de identidad y sus índices eran marcados con tinta indeleble, las papeletas eran numeradas y las urnas eran transparentes. El gobierno indicó que tales medidas trataban de impedir el fraude, pero dada la campaña de intimidación para los abstencionistas, el porcentaje de votación voluntaria es muy difícil de calcular.

Una coalición de las fuerzas de la extrema derecha, ARENA, bajo la dirección de D'Aubuisson, sacó 36 de los 60 escaños de la Asamblea Constituyente, mientras que los cristianodemócratas de Duarte obtenían sólo 24. Y ello a pesar de que el Director de la CIA, William Casey, reconoció que la agencia había proporcionado «información y facilidades» a los hombres de Duarte.

Las elecciones debían ser la pieza maestra de la política norteamericana en El Salvador, acallando críticas y proporcionando legitimidad. Pero, dados estos funestos resultados, los funcionarios norteamericanos presionaron al Ejército para que se nombrara un moderado en la presidencia. El grupo de D'Aubuisson paralizó entonces el programa de reforma agraria y cuatro meses más tarde de las elecciones varios líderes cristianodemócratas, incluidos cuatro alcaldes, fueron asesinados por los escuadrones de la muerte (21).

En febrero de 1983, Jeane Kirkpatrick anunció la victoria en El Salvador porque la guerrilla, según ella, no estaba ganando. Pero también predijo que sin una ayuda militar multiplicada no sólo El Salvador, sino todo Centroamérica caería bajo regímenes de orientación castrista. Tales predicciones coincidían con la caída bajo el FMLN de nuevas áreas geográficas y el anuncio rebelde de que en un año se obtendría la victoria militar.

Tanto Kirkpatrick como el asesor del Consejo Nacional de Seguridad, Clark, convencieron a Reagan de que la solución radicaba en mayor ayuda militar y un número superior de asesores militares. Pero a medida que la guerra adquiría tonos progresivamente norteamericanos, la guerrilla del FMLN podía asegurar con mayor veracidad que estaba librando una guerra de liberación nacional contra un invasor extranjero que actuaba a través de un gobierno local completamente dependiente. De hecho, el Ejército salvadoreño había llegado a una situación de dependencia tal que un simple anuncio de apertura de negociaciones entre la guerrilla y los Estados Unidos hubiera producido una auténtica desbandada.

No existía, sin embargo, ningún peligro para el Ejército salvadoreño. Reagan había escogido la vía de la victoria sobre una guerrilla que, según la versión oficial, era abastecida, vía Nicaragua, por Cuba y la Unión Soviética. Sin embargo, a pesar de las enormes sumas de dinero gastadas en equipos de escucha y en patrullajes en el Golfo de Fonseca por soldados hondureños, salvadoreños, la «contra», y soldados norteamericanos, nunca se presentó la prueba irrefutable de que la guerrilla salvadoreña se abasteciera en Nicaragua. Sus fuentes eran el mercado libre de armas y los ejércitos salvadoreño y hondureño. La guerrilla, es cierto, recibió fuertes contingentes de armas durante la ofensiva general de enero de 1981. Cuba y Nicaragua fueron los grandes suministradores. Pero el flujo quedó reducido a partir de entonces.

Sin embargo, la ironía del episodio consistía en que la Administración Reagan no podía vanagloriarse de tal disminución porque necesitaba del flujo de armas para justificar su hostilidad hacia Nicaragua y para explicar la supervivencia de la guerrilla salvadoreña.

En mayo de 1983, Duarte consiguió su meta al vencer en las elecciones a Roberto D'Aubuisson y llegar a la presidencia de la República (22).

La neodependencia marcaba progresivamente la pauta de las relaciones entre San Salvador y Washington. Justamente lo que la orgullosa oligarquía salvadoreña había conseguido evitar durante tantos años. Pilotos norteamericanos realizaban misiones de reconocimiento sobre el territorio controlado por los rebeldes y transmitían la información y los objetivos a las unidades salvadoreñas. Más tarde se proporcionarían fortaleza volante AC-47 y helicópteros artillados al Ejército salvadoreño para desertizar las zonas bajo control rebelde. Las bajas entre la población civil aumentaron vertiginosamente. Pero era preciso desecar el lago para que se ahogara el pez. El pez, sin embargo, no moría. En el otoño de 1984 operaba en 12 de los 14 Departamentos de El Salvador. Y entre diciembre de 1938 y mayo de 1984, más de 1.000 soldados gubernamentales se rindieron a los insurgentes. Los que no se integraban a la guerrilla eran entregados a la Cruz Roja Internacional.

Casi el 40% de las armas enviadas por Washington al Ejército salvadoreño acababan en manos de los revolucionarios mediante venta o captura. Y sólo el 10% de los oficiales provisionales se reenganchaban al final de sus dos años de servicio obligatorio. La moral del Ejército salvadoreño no era precisamente alta.

Durante el mes de septiembre de 1984, el Presidente Duarte invita a la guerrilla a participar en conversaciones exploratorias de paz, a deponer las armas y a integrarse en el

proceso «democrático» del país. Dos rondas de conversaciones se celebrarían durante los meses de octubre y noviembre. Duarte ofreció una integración pacífica y sin represalias en las vías legales de participación política, que no podía garantizar, y la guerrilla exigió un reparto del poder, una expulsión de los elementos más notorios de la oficialidad del Ejército y una integración de los «comandantes» guerrilleros en el nuevo Ejército, que no correspondía al equilibrio real de fuerzas. Uno prometía lo que no podía garantizar y otro exigía condiciones propias de quien había triunfado en el campo de batalla. El fracaso de las conversaciones de la ciudad de La Palma no fue, pues, sorpresa para nadie (23).

Cara a las legislativas del 31 de marzo de 1985, los Estados Unidos regatearon a la Democracia Cristiana de Duarte los fondos que a través de la CIA habían otorgado en la anterior campaña electoral. Con tal actitud se trataba de frenar los posibles intentos de diálogo con la guerrilla, encauzar a la extrema derecha en la vía democrática y forzar una coalición entre la DC y el PCN, depositario de las esperanzas norteamericanas.

El FDR, por boca de Ungo, prometía que no obstaculizaría las elecciones si el Ejército respetaba las áreas liberadas. El Ejército anunció que continuarían las operaciones de limpieza en todo el país. El FMLN inició entonces una campaña de destrucción de cédulas de identidad y registros municipales en los 90 municipios bajo su control. Al igual que en las presidenciales anteriores, serias discusiones y profundas divergencias aparecían entre la rama política y el brazo militar de la guerrilla.

Las legislativas dieron el triunfo a la Democracia Cristiana de Duarte. Al mismo tiempo, los aviones espía norteamericanos, los helicópteros artillados y la creación de compañías de intervención rápida contrainsurgencia, comenzaban a proporcionar triunfos al Ejército salvadoreño. La «comandante» Nidia Díaz caía prisionera con un importante arsenal.

Duarte, tras estos éxitos relativos y su visita a Washington, no parecía tener prisa en abordar con la guerrilla la tercera ronda de conversaciones. Además, en el frente interno, parecía escindirse la alianza entre el PLN y ARENA. La guerrilla trataba mientras tanto de presionar al gobierno a la negociación asesinando a un Alcalde, secuestrando a siete, todos recientemente elegidos, e iniciando una serie de sabotajes económicos. De esta manera trataba de contrarrestar sus reveses frente al Ejército.

Pero Duarte no podía retrasar indefinidamente las promesas electorales: respeto a los derechos humanos, reforma agraria e intento de diálogo con la guerrilla.

El año 86 se inicia con la sombra del secuestro, en noviembre de 1985, de Inés Duarte, hija de Napoleón (24).

Al acercarse los dos años del mandato presidencial de Duarte, el desencanto era evidente. Con una crisis económica descontrolada, paralizado el diálogo interno, sin poder ganar la guerra ni avanzar en el proceso de reconciliación interna, se evidenciaba claramente que la Democracia Cristiana carecía del margen de maniobra necesario para encarar la situación. Duarte trató de recuperar parte del prestigio perdido lanzando en marzo de 1986 la oferta de conversaciones con el FDR-FMLN si simultáneamente el Presidente Ortega iniciaba conversaciones con la oposición antisandinista, incluyendo a la «contra».

Mientras tanto, la política económica del Gobierno suscitaba críticas no sólo en los sindicatos, sino también en los empresarios y en los grupos económicos vinculados a la oligarquía cafetalera, cuyas conexiones con el sector más conservador de las Fuerzas Armadas constituye un riesgo permanente de desestabilización del régimen. La fiscalización de la política exterior por parte de los Estados Unidos se hacía evidente en el mes de abril de 1986, cuando el Embajador volante para Centroamérica, Habib, presionó durante su visita a San Salvador para que Duarte no acudiera a la reunión de mayo de Presidentes centroamericanos en Esquipulas, Guatemala, ya que tal reunión daría legitimidad a Ortega, y para que viajase en su lugar a Estados Unidos y hablase en el Congreso apoyando la ayuda a la «contra» nicaragüense. Duarte, en un arranque de dignidad, se negó a ambas peticiones alegando razones de solidaridad centroamericana y añadiendo que preferiría dimitir antes que adoptar semejante actitud (25).

Duarte no había conseguido mantener su autoridad incólume. Su alianza con un Ejército de donde surgían en último término la mayoría de los escuadrones de la muerte, una guerra que nunca se acababa de ganar a la guerrilla, una austeridad económica que apretaba los bolsillos y estómagos de los consumidores, eran factores importantes en la pérdida de prestigio.

Guatemala, largo camino hacia la democracia

El sistema político guatemalteco, definido como «una dictadura militar disfrazada en la que la elección de un Presidente "disponible" se celebra cada cuatro años» continuaba su penosa marcha bajo la batuta de Lucas García. Su apariencia de fortaleza y rigidez, basada en su capacidad para resistir los ataques de la guerrilla, encubría en realidad una debilidad estructural de graves caracteres. Su base de apoyo se había venido empequeñeciendo a lo largo de quince años. Y la sistemática campaña de amedrantamiento de la izquierda y el centro, la supresión del sindicalismo y las matanzas de campesinos, no aportaban la tranquilidad ni la paz deseadas.

Guatemala se había colocado al margen de las naciones civilizadas. Sus únicos amigos eran la Argentina de los Generales, el Chile de Pinochet y la Sudáfrica del «apartheid». Israel rellenaba el vacío dejado por la Administración Carter en el suministro de armamento y en la prestación de asesoría técnica en la lucha antiguerrillera. Y el país del quetzal figuraba en los primeros lugares de las listas rojas de las organizaciones internacionales de supervisión de los derechos humanos.

El régimen guatemalteco, donde el General Ríos Montt había llegado al poder en 1982 tras unas inciertas elecciones en las que el ganador parecía ser el General Ángel Aníbal Guevara, no era ya capaz de imponer tan siquiera la «paz de los cementerios».

La guerrilla, cuyos efectivos se calculaban en 1981 en unos 3.000 hombres —frente a los 15.000 del ejército regular— creó en febrero de 1982 una organización cúpula de las distintas facciones, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), constituida por el EGP, FAR, ORPA y el PGT.

La nueva organización publicó unos puntos programáticos similares a los postulados del FDR-FMDN salvadoreño y al proyecto político de los sandinistas en Nicaragua. También en febrero de 1982 se formó el Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica (CGUP), frente civil compuesto por representantes de diferentes sectores sociales y corrientes ideológicas como el PSD, el FUR, indígenas, obreros, campesinos, cristianos e intelectuales.

En tales condiciones, el golpe del 23 de marzo de 1982 que alejó a Ríos Montt y asentó en el solio presidencial al General Mejía Victores, no era sino el resultado de un proceso de descomposición frente al desprestigio internacional y frente a la incapacidad del régimen para derrotar o controlar la resistencia popular.

Mejía potenció la lucha antiguerrilla recurriendo a las armas clásicas de la contrainsurgencia: aterrorizando y desplazando la población civil, arrasando la tierra, reasentando los desplazados en aldeas «modelos» y peinando el terreno con patrullas «civiles». Cerca de 50.000 muertos, miles de personas agrupadas en patrullas civiles, 20.000 campesinos enjaulados en las aldeas modelo, 50.000 refugiados en Méjico y Honduras y más de un millón de desplazados son cifras proporcionadas por la Conferencia Episcopal y elocuentes por sí mismas, en especial si tenemos en cuenta que Guatemala no llega a los ocho millones de habitantes.

Ante tamaño esfuerzo no es extraño que quedaran neutralizados los frentes guerrilleros de el Llano, Alta Verapaz y el área paracentral, produciéndose igualmente un desmantelamiento de la base de retaguardia que representaba la capital del país.

Conseguido el objetivo de estabilizar la insurgencia, el régimen de Mejías Victores se orientó hacia la meta de legitimación y democratización del sistema. Así se anuncia en 1984 que para el mes de julio de 1985 se celebrarían elecciones para una Asamblea Constituyente. Inmediatamente se desata una incontrolable ola de violencia que golpea especialmente a los sectores universitarios, sindical y campesino y recuerda los tiempos más siniestros del tétrico Lucas. Una vez más, las fuerzas del inmovilismo preparaban el clima del proceso electoral.

Pero el equipo en el poder se había hecho la idea de que, para atajar la situación económica caótica, unida a una insurgencia que no sólo desviaba recursos hacia la guerra, sino que empañaba la imagen internacional de Guatemala, era necesario promover la paz interna y la paz en el Istmo. Tal paz debía lograrse a través de una política independiente, sin tomar partido por la paz americana o la paz de Contadora, tratando de contentar a ambos para obtener el máximo provecho. Guatemala necesitaba la ayuda económica y militar de los Estados Unidos. Pero no quería correr el riesgo de indisponerse con Méjico, cuya colaboración era necesaria en la lucha contrainsurgencia, dada la presencia en territorio mejicano de cerca de 50.000 refugiados y la permeabilidad de la frontera.

Tales consideraciones son el trasfondo de la política diseñada por el Canciller Andrade denominada «neutralidad activa». Guatemala no se sumó al Documento de Tegucigalpa, reanudó relaciones diplomáticas con España, inició conversaciones con Gran Bretaña a propósito de Belice —cuya independencia en 1981 no había sido reconocida y había conducido a la ruptura de relaciones. Se trataba en definitiva de romper el aislamiento internacional.

El Relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Vizconde de Culross, visitó Guatemala en enero de 1985 declarando que los desaparecidos eran «cosa del pasado», y que el Gobierno de Mejía había mejorado la situación. El Arzobispo metropolitano, Penados del Barrio, refutó al Relator, y lo mismo hicieron los parlamentarios de una misión investigadora británica, Tony Llyd y Lord Averbury, que definieron a Guatemala como «una nación de viudas y huérfanos», afirmando que en treinta años de dictadura militar, más de 100.000 personas habían sido muertas y 38.000 habían desaparecido.

En el plano interno, la Asamblea Constituyente recibió fuertes presiones de las Fuerzas Armadas para que se constitucionalizara el Plan de Contrainsurgencia basado en la política de reasentamiento en Polos de Desarrollo.

La Comisión de Derechos Humanos de las N.U. presentó, en febrero de 1985, un proyecto de resolución sobre Guatemala que provocó el rechazo del Gobierno y su retirada de ese organismo. Mientras tanto, el Subsecretario norteamericano para Asuntos Latinoamericanos, Motley, anunció la propuesta al Congreso norteamericano de una cantidad de 68 millones de dólares para 1986, 25 para el sostenimiento de la Balanza de Pagos, 33 en programas de desarrollo y 10 en ayuda militar. Tal ayuda se fundamentaba en el proceso democratizador de Guatemala.

La Constitución, octava del país, fue aprobada y promulgada el 31 de mayo, estableciendo que entraría en vigor el 14 de enero de 1986 y «no perderá validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza». Los constituyentes eran sin duda hombres precavidos, pues se prevía incluso el golpe de Estado. Además, la Constitución convalidaba todas las acciones ejecutivas y legislativas efectuadas por los regímenes militares surgidos tras el golpe de Estado de 1982. También quedaban sancionadas las Patrullas de Autodefensa Civil, aunque no se obligaba —como venía sucediendo— a asociarse a las mismas a la población indígena.

Belice no figuraba por primera vez dentro del territorio de Guatemala. El régimen propuesto, claramente presidencial, constitucionalizaba la «independencia» del poder judicial y creaba una Corte de Constitucionalidad defensora del orden jurídico.

La Constitución, fruto de un consenso de todos los partidos políticos, incluidos los de la izquierda, representaba el primer paso para el retorno a un poder civil. Las elecciones, convocadas el 3 de junio, se celebrarían el 3 de noviembre, y en ellas se designarían Presidente, Vicepresidente, Diputados y corporaciones municipales.

Cara a las elecciones, los partidos con posibilidad eran: el movimiento de Liberación Nacional, con Mario Sandoval, de la ultraderecha; el Partido Democrático de Cooperación Nacional, de Serrano, igualmente de ultraderecha; la Unión de Centro Nacional, de Jorge Carpio, de la derecha, y la Democracia Cristiana Guatemalteca, del centro. El Comité Coordinador de las Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CA-CIF), se perfilaba como elemento perturbador, siempre decidido a animar a un militar a «salvar la patria».

Vinicio Cerezo (DCG) obtendría un 39% de los votos, y Jorge Carpio (UCH), el 20%. Cerezo sería ganador en la segunda vuelta y el primer Presidente electo de Guatemala en quince años.

Quedaba en pie la gran cuestión de si el nuevo Gobierno civil actuaría como cobertura del poder militar o si de verdad significaría el primer paso hacia un sistema democrático capaz de abordar los problemas del país con una dinámica nueva.

Honduras, portaaviones U.S.A.

Honduras, que reúne casi todas las condiciones que los libros de texto nos señalan como necesarias para que pueda surgir una revolución se convertiría en el espacio de tres años en base de la contrarrevolución.

Aquí, como en el resto del Istmo, la Administración Carter estaba decidida a establecer un gobierno civil. Tras una serie de entrevistas con altos oficiales norteamericanos, el General Policarpo Paz cumplió con su compromiso de garantizar elecciones para una Asamblea Constituyente en abril de 1980. Su recompensa consistió en un aumento significativo de la ayuda militar y económica y en su nombramiento como Presidente provisional del país, lo que le permitió vigilar la redacción de la nueva Constitución y el desarrollo de las elecciones destinadas a darle al país un Presidente civil.

El alto mando militar se preocupaba de lo que un poder civil pudiera significar en forma de investigaciones de la corrupción militar y consiguiente descrédito del instituto armado. Cuando se obtuvo el compromiso de que no se llevaría a cabo una investigación y se concedió a los militares el derecho a vetar los altos nombramientos del Gobierno el temor desapareció.

Los Partidos Nacional y Liberal seguían repartiéndose la escena política. Pero el Nacional, vinculado estrechamente al Ejército, tenía que pagar el precio de su larga permanencia a las puertas de los cuarteles. Le tocaba el turno al Liberal y a su líder, Modesto Rodas Alvarado. Al fallecer éste antes de las elecciones fue sucedido como jefe de partido por Roberto Suazo Córdova.

Rodas tenía un estilo precapitalista, rural y simple. Suazo, segundón y mal remedo, salpicaba sus discursos de arengas religiosas y citas bíblicas. El esperado voto de castigo al Partido Nacional dio el triunfo a Suazo en noviembre de 1981 tomando posesión de la Presidencia en enero de 1982 bajo la promesa de realizar una «revolución de la honestidad y el trabajo».

A los pocos meses de la toma de posesión, Suazo consiguió que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) escogiera como jefe al Coronel Álvarez, jefe de las Fuerzas de Policía (FUSEP), y cuyo decidido anticomunismo corría parejo con un carácter claramente autoritario. Al poco tiempo llegaba como Embajador norteamericano John D. Negroponte.

Álvarez y Negroponte se unirían en breve en una relación simbiótica que recordaba los mejores tiempos de la alianza con Somoza. Con la llegada del Presidente Reagan a la Casa Blanca era necesario comenzar a montar la estrategia de contención al sandinismo. Nadie mejor que el General —Suazo ascendió a Álvarez a los pocos meses— para tal labor. Mientras, la ayuda económica ascendía a 87 millones de dólares en 1982, y la militar pasaba a 32 millones. El 7 de mayo de 1982, Honduras accedió a la reforma del Convenio de Asistencia Militar de 1954 para permitir el acceso y ampliación de las pistas de aterrizaje de Palmerola, Golosón y La Mesa.

Gradualmente se iba diseñando un modelo de democracia que descansaba en tres pilares: Suazo, Álvarez y Negroponte. Un «ménage à trois». Y el Congreso Nacional se fue convirtiendo progresivamente en una cámara de aclamación donde los proyectos legislativos presidenciales ni siquiera eran discutidos.

Una serie de secuestros y asesinatos de miembros de familias prominentes, unido a una ola de asaltos a bancos, y el descubrimiento a comienzos de 1982 de varias «cárceles del pueblo» fueron los heraldos de la llegada a Honduras de militares argentinos y chilenos para entrenar y aconsejar a los hondureños en las tácticas de la «guerra sucia». La Doctrina de la Seguridad Nacional se adoptaba oficialmente y por primera vez en la historia hondureña comenzaban las desapariciones, los cementerios clandestinos y la represión sistemática de los focos de disidencia.

Con lo cual, los hondureños, que apenas se habían liberado de los militares a través de las urnas, se encontraron de pronto más amenazados que nunca por la represión militar. Las evidentes contradicciones de la opción «democratización con militarización» se ponían de manifiesto.

Los Estados Unidos triplicaban el número de sus asesores militares, instalaban dos radares operados por el Ejército norteamericano y la CIA, y enviaban 100 boinas verdes a la base de Puerto Castilla, en donde se estableció el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) para soldados salvadoreños y hondureños. Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Honduras comenzaron en 1981, sirviendo, mediante el mecanismo del «end-run», para proveer al Ejército hondureño y a la «contra» ayuda militar no autorizada por el Congreso norteamericano. Los equipos participantes en los ejercicios no regresaban en su totalidad a su lugar de origen. Simplemente se habían averiado, desgastado o extraviado.

Los ejercicios eran también buena ocasión para la construcción de infraestructura esencial, tal como campos de aterrizaje, carreteras estratégicas, trampas para tanques, centros de comando y logísticos, etc.

Parecía claro que los Estados Unidos transformaban progresivamente a Honduras en campo de entrenamiento de fuerzas militares estadounidenses y en zona de desplazamiento rápido con el fin de presionar política y militarmente a la guerrilla salvadoreña y al Gobierno de Managua. Un enorme portaaviones. El único del mundo propulsado por bananas.

Como también parecía claro que no era Honduras la prioridad de la política centroamericana de los Estados Unidos, sino El Salvador y Nicaragua. Honduras era un instrumento indispensable, allí tenía puestos los pies el Ejército norteamericano. Pero no los ojos.

La clase gobernante hondureña no parecía capaz de obtener una compensación adecuada al trabajo que, en Centroamérica, le había sido asignado a su país. Entregó su cuerpo, algunos hasta su alma, sin fijar claramente el precio. Y pagó su imprudencia al ser condenada a mendigar permanentemente. Cuando la Comisión Kissinger llegó a Tegucigalpa el gobierno de Suazo presentó la genial idea de que, como los Estados Unidos podrían estimar aconsejable estacionar permanentemente tropas en suelo hondureño, sería quizá conveniente retocar la relación bilateral transformando a Honduras en un protectorado como Puerto Rico.

No es extraño que el editorial del diario «Tiempo» de Tegucigalpa el 28 de julio de 1983 rezara: «Hemos perdido todo, incluso el honor.»

Al haber entregado todo lo que le interesaba a la Administración Reagan, libre utilización del territorio nacional —la clase gobernante tenía el inquilino instalado en casa y el alquiler en el aire. No le quedaba más remedio que jugar el juego.

Mientras tanto, Álvarez había tomado su papel demasiado en serio. Se lo había creído. Quería invadir Nicaragua ya. Negroponte tenía que frenarle, colmo de las ironías. Desinstitucionalizaba el Ejército al ignorar la democracia «sui generis» del CONSUFA, donde en teoría un hombre es un voto. Ninguneaba a sus compañeros de armas, adoptaba un tono cada vez más napoleónico. Y además, no ocultaba sus ambiciones políticas al presidir la APROH (Asociación para el Progreso de Honduras), grupo corporativo de derechas, de claros regusto fascistas, integrada por empresarios, militares, profesionales y profesores de universidad.

Álvarez amenazaba con resucitar el fantasma de Carías y, además, resultaba muy caro. Se calcula que el clan Álvarez, en dos años escasos de poder, consiguió unos «ahorros» cercanos a los treinta millones de dólares. Excesivo.

Los cuartos de bandera de los cuarteles adquirían un rancio olor a conspiración. Oficiales de rango intermedio maquinaban la defenestración de Álvarez y Suazo —el Presidente era culpable igualmente en grado de connivencia— y la instalación de un gobierno popular cívico-militar similar al del General López Arellano.

La participación a última hora de altos oficiales conservadores y el temor al cierre del grifo de la ayuda norteamericana diluyó los objetivos iniciales del golpe y salvó a Suazo de tener como compañero de viaje a San José, en un vuelo militar, al defenestrado Gustavo Álvarez. Era el 31 de marzo de 1984.

El golpe tomó por sorpresa a todo el mundo, incluido Negroponte. Desde entonces la oficialidad del Ejército hondureño es prioridad absoluta en la lista de preocupaciones de los muchachos de la CIA.

Álvarez dejaba en su estela cerca de 200 desaparecidos y un estilo, una manera de actuar, que el nuevo Jefe de las Fuerzas Armadas, López Reyes, intentó modificar.

Suazo Córdova, salvado in extremis por la «campana», creyó llegado su momento. Alejado Álvarez, quien se había convertido en el auténtico Presidente del país, anonadado Negro ponte, quien nunca se repuso de cómo fue posible que lo ocurrido pudiera acaecer sin su conocimiento y consentimiento, «Rosuco» intentó rellenar el vacío con su pintoresca y variopinta persona.

Político amamantado en los serrallos de la más rupestre escuela caciquil, Suazo pensó que gobernar consistía en impedir que los demás mandaran. Y, para ello, lo mejor era dividir, confundir, enfrentar. Asentado en la mayoría del Partido Liberal en el Congreso, en su control sobre el Tribunal Nacional de Elecciones, en la maquinaria administrativa de cedulación de los futuros votantes y en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sucumbió rápidamente a la tentación de prorrogar por dos años su mandato presidencial de cuatro.

Todas las armas eran buenas. Fraude, soborno, chantaje. Contra la oposición del Partido Nacional, y contra los correligionarios del Partido Liberal. El General López Reyes se creyó obligado a recordar en su mensaje navideño que el Ejército era respetuoso con los preceptos constitucionales. Entre los cuales, cuatro años de mandato presidencial, sin posibilidad de prórroga. «Rosuco» tiene un momento de desesperación. No era justo, después de todo lo que él había trabajado y maquinado. Pero no abandona la batalla. Simplemente cambia el punto de mira. Ya que no puede prorrogar por dos años su reinado, se convertirá en «fabricante del próximo Rey».

Los diputados liberales opuestos a los designios suazocordovistas se asocian con los nacionales y obtienen la mayoría en el Congreso. Una reforma a la Ley Electoral exigía a los partidos elecciones internas antes de designar sus candidatos presidenciales. Además, se reestructuraba la Corte Suprema de Justicia para devolver al Partido Nacional la legitimidad de su Ejecutiva—vendida hasta entonces a Suazo— e impedir la manipulación de las elecciones internas de los partidos. El Presidente veta la reforma electoral, impide la toma de posesión de los miembros de la nueva Corte alegando inconstitucionalidad y encarcela al nuevo Presidente de la Corte Suprema.

Si el Ejército no embarcó con vacaciones pagadas a Suazo Córdova en el transcurso de la crisis institucional, que duró dos meses, fue porque Negro ponte repitió de mil maneras: «El que se mueva no sale en la foto».

Pero al final fue el Ejército quien puso fin a la crisis. Instrumentando para ello a los Sindicatos. La amenaza de huelga general en un país que políticamente se encontraba en un callejón sin salida presentaba el nada halagueño panorama de poblaciones desabastecidas por falta de transportes, disturbios callejeros, violencia, represión y aguas turbias a la disposición de pescadores aventurados.

Convocados todos los jefes de fila de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, y en presencia de la Iglesia, se llegó al compromiso de que las diferentes facciones de los distintos partidos podrían presentar candidatos a las

presidenciales, saliendo elegido quien obtuviera mayor número de votos dentro del partido ganador. Es decir, que ganaría un partido, y dentro de él, quien obtuviera mayoría.

Suazo había sido derrotado. Ya no podría imponer al Partido Liberal un candidato a su gusto a quien, una vez elegido Presidente, manipularía a su parecer. Y el Ejército se presentaba ante la opinión como «salvador de la democracia» ante la ineptitud y el egoísmo de los políticos.

Se inicia el baile de los candidatos. Cuatro por el Partido Liberal, tres por el Partido Nacional y uno por los «testimoniales» Partido de Innovación y Unidad (PINU) y Demócratacristiano. El Liberal partía como favorito. No precisamente por los éxitos de la gestión del gobierno liberal de Suazo, cuyo balance era claramente negativo. Sino, más bien, como segundo voto de castigo al Nacional de pasado cuartelario, cerril y vendido a las fuerzas del ganadero latifundista, de la bananera voraz y del militar dispuesto a sacrificarse «por el bien de la patria».

José Azcona, hijo de padres españoles, despegaba con gran ventaja sobre el resto de los candidatos liberales. Antiguo Ministro de Obras Públicas de Suazo, pronto había chocado con las marrullerías y fraudes de «Rosuco», y presentado la dimisión. Después de tanta corrupción, su tarjeta de presentación más efectiva era la honestidad (26).

Un mundo de raíces rurales, de estirpe caciquil y de alto contenido hilárico, abandonaría la Presidencia hondureña el 27 de enero de 1986.

Azcona asumía la presidencia de un país donde la deuda externa alcanzaba el 50% del PIB, con un déficit presupuestario de casi la mitad de los ingresos estatales, un desempleo del 30% de la población activa y un subempleo que afectaba al 40%, unas exportaciones que no generaban suficientes divisas para financiar conjuntamente el servicio de la deuda y las importaciones y un analfabetismo del 50% de la población.

Un país que elevaba la ocultación a categoría oficial de política exterior al negar sistemáticamente la presencia de la «contra» en su territorio. Una presencia reportada, fotografiada, televisada. Y que, a su pérdida de credibilidad, añadía un creciente aislamiento del entorno cultural y humano que representa Latinoamérica. Un país con cerca de 70.000 refugiados en su territorio. Procedentes de Guatemala, 500; El Salvador, 20.000; y Nicaragua, 40.000.

Dado el escaso margen de votos con que Azcona llegó a la presidencia, y el triunfo individual en las elecciones de Callejas, el presindencialismo azconista carecía de un fuerte arrastre popular. Por ello se vio obligado a realizar un reparto del poder con el Partido Nacional, quien participa en el Gobierno con dos Ministros, en la dirección del Congreso Nacional y que tiene la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y los juzgados.

Poder, por tanto, compartido con el partido rival. Y reducido a una pequeña parcela del poder nacional por la sombra siempre real del Ejército y la presencia permanente del poder norteamericano.

La democracia con militarización en un país donde el poder civil se encuentra aprisionado por poderes fácticos adquiere así unas características muy precarias y una operatividad cuasiteórica.

Costa Rica. El faro se ladea

La década de los ochenta presencia en Costa Rica un progresivo relevo de los hombres que hicieron la revolución de 1948, un paulatino alejamiento de los nuevos «barones» del Partido Liberación Nacional de los ideales de estadistas como Figueres y Oduber, un creciente deterioro de las bases socioeconómicas sobre las cuales se ha construido la democracia «tica» y un gradual deslizamiento de la inicial simpatía por el sandinismo y respeto por la tradicional neutralidad hacia una clara hostilidad frente al FSLN y alineamiento con la postura intervencionista de los Estados Unidos en el país vecino.

Costa Rica se hacía menos democrática por el juego combinado de la erosión y endeudamiento económicos, y por la acción irritante de una desigualdad que potenciaba un agudo proceso de concentración de la riqueza. Menos pacífica por la conjunción del histórico sentimiento de hostilidad hacia Nicaragua, del desengaño y frustración que el sandinismo progresivamente fabricaba como subproducto, y por la constante manipulación de estos sentimientos por una Administración norteamericana decidida a condenar a la soledad al nuevo Gobierno de Managua.

Y Costa Rica se tornaba más dependiente por la acumulación de una deuda exterior, la mayor per cápita en Latinoamérica, sin la cual el Estado no hubiera podido mantener unas prestaciones que, junto con una numerosa clase media, había sido la llave de la estabilidad sociopolítica. Más dependiente de la Comunidad financiera internacional, es decir de los Estados Unidos.

Por otra parte, Costa Rica dejaba de ser el solitario faro democrático que, en los procelosos piélagos centroamericanos, marcaba el rumbo a sus turbulentos e inestables vecinos. Honduras, El Salvador y, algo más tarde, Guatemala, ingresaban al club de las naciones democráticas. Los «ticos» ya no podían practicar su deporte favorito: prodigar consejos y dar sesudas lecciones a sus incultos, atrasados y oprimidos vecinos.

Desde que el antiguo Comandante Cero, Edén Pastora, establece en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua el frente Sur de la contrarrevolución nicaragüense, ARDE, las relaciones entre ambos países conocen constantes momentos de tensión. Las persecuciones en caliente del EPS penetran en territorio «tico», el Presidente Monge y su Canciller, Gutiérrez, amenazan con recurrir al TIAR, denuncian los hechos ante la OEA, enfrían el inicial entusiasmo por el proceso de Contadora, se integran en el grupo de Tegucigalpa y prestan un oído cada vez más atento a las señales de Washington.

A lo largo del año 84 se va apreciando en el campo de la política interna una lucha por el poder dentro del partido gobernante, Liberación Nacional; el bloque de los tradicionales del partido, resistentes al cambio generacional, intentaban propiciar la llamada

«fórmula mágica» consistente en presentar a las elecciones de 1986 la candidatura de Figueres-Oduber. La magia del pasado frente a las incertidumbres del futuro. Al resultar impracticable dicha fórmula quedaba abierta la puerta para la llegada de un hombre nuevo.

El giro pro-norteamericano adoptado por la política exterior dificultaba mientras tanto la pretensión del Presidente Monge de constitucionalizar la neutralidad e influía negativamente en los intentos de pacificación regional.

La convención del partido Liberación Nacional decidió en enero de 1985 presentar como candidato a las presidenciales a Oscar Arias, antiguo Secretario de Organización del partido y cuya juventud y preparación garantizaban una nueva imagen, renovadora y moderna, al partido creado por Don Pepe.

El Presidente Monge frenó en febrero de 1985 la creciente influencia de los grupos más conservadores, partidarios del olvido de la neutralidad y el acercamiento a los Estados Unidos, expulsando del país a los conocidos dirigentes de la «contra» Calero y Chamorro, denegando permiso para que dicha organización celebrara una conferencia de prensa en San José y amenazando con expulsar a Edén Pastora si no respetaba la neutralidad de Costa Rica (27).

Sin embargo, bajo la presión combinada de los conservadores y de los Estados Unidos, Monge emprendía una labor de potenciación de la Guardia Civil Rural, profesionalizando el Cuerpo y dotándole de medios acorazados y aéreos, lo que equivalía a una militarización encubierta. En el campo económico, al deterioro de la situación se añadía el anuncio por Méjico de suspensión de los envíos de crudo al amparo del Acuerdo de San José y, sobre todo, la decisión de la United Brands de abandonar la explotación del banano en Costa Rica, poniendo en peligro la estabilidad de una zona del país tradicionalmente volátil.

Coincidiendo con la ambigua posición tomada con respecto al embargo norteamericano frente a Managua, no sumándose al mismo pero sin tampoco condenarlo, en el mes de mayo de 1985 llegan a Costa Rica 22 boinas verdes de Estados Unidos para entrenar a la Guardia Civil en tareas de contrainsurgencias y antiterrorismo. Monge declaraba que la neutralidad de Costa Rica significaba renuncia al desarrollo de la capacidad ofensiva y compromiso de fortalecimiento de la defensiva (28).

En las elecciones presidenciales celebradas el 2 de febrero de 1986, Óscar Arias resulta ganador con un 52,4% de los votos válidos frente al 45,7% del candidato de la unidad Socialcristiana, Rafael Calderón. El Partido Liberación Nacional salía reforzado, pues conseguía romper la tradicional alternancia en el poder y, por primera vez desde 1948, derrotaba a la oposición unida.

Por las mismas fechas llegan al país 180 ingenieros militares norteamericanos para la construcción de obras «civiles» en la zona fronteriza con Panamá. Tal iniciativa contradecía la voluntad contenida en el Acta de Contadora en el sentido de suprimir asesores extranjeros en los países centroamericanos y empañaba la neutralidad costarricense. Ello ocurría diez días después del triunfo de Arias, en cuyo programa figuraban insistentes

promesas de respetar la neutralidad del país. También coincidía con el anuncio de la normalización de las relaciones con Managua, poniéndose de manifiesto el deseo de compensar mutuamente el efecto negativo de ambas noticias.

El 12 de marzo de 1986 se firmaron unas bases para el establecimiento de una Comisión de vigilancia fronteriza con Nicaragua, quedando superado de este modo el incidente de Las Crucitas. Arias realizó declaraciones en las que criticaba la ayuda militar a la «contra» pero, para compensar sin duda, en la reunión de Presidentes centroamericanos celebrada en Esquipulas en mayo, criticó muy duramente la falta de pluralismo democrático en Nicaragua.

La ambigüedad, la cal y la arena, parecían fraguar el cemento de la actitud hacia Nicaragua y los Estados Unidos, cigüeña en torno al cual gira la política exterior de Costa Rica.

El viejo faro tico, iluminador del piélago del Istmo, sufría bajo el embate de los tiempos un desplazamiento a la derecha. El faro se había ladeado.

Factores de unidad y hechos nacionales diferenciales

Desde que en 1842 se consolida la independencia separada de los cinco centroamericanos queda flotando al aire el recuerdo de la vieja unidad de la época española. La reducida extensión geográfica de los países del Istmo, las frecuentes estancias como refugiados que la accidentada historia proporcionó en tantas ocasiones a considerables sectores de cada uno de los cinco, los numerosos enlaces familiares por encima de las fronteras, las constantes intervenciones en los asuntos del vecino, fueron factores de mantenimiento del sentimiento de cierta unidad.

Quizá por ello, las historias nacionales y el desarrollo socio-económico de todos ellos han observado pautas similares y conocidos moldes semejantes. Siendo esta la razón fundamental por la que, a lo largo de las páginas previas, se haya tratado en bloque la historia de las cinco ramas desgajadas del viejo Reino.

No deben sin embargo minimizarse los *hechos diferenciales nacionales*.

La historia de Guatemala, por ejemplo, sería incomprensible sin tener bien presente el hecho indígena, la realidad india, que ha impregnado desde la conquista hasta nuestros días un devenir histórico y un quehacer nacional con trazos especialmente fuertes. Al igual que la casi total ausencia de población indígena en Costa Rica es el dato causal esencial para explicar las especiales tonalidades del acontecer nacional tico.

Por ello se han calificado a sus respectivas clases políticas, en determinadas épocas históricas, como mayorales y patricios y, a sus distintos sistemas, como dictadura plebeya y república aristocrática.

En lo que respecta a los tres centroamericanos restantes, todos ellos de componente étnico mayoritariamente mestizado, el hecho diferencial es menos preciso.

El Salvador se distinguiría por lo reducido de su territorio, 23.000 kilómetros cuadrados, lo abultado de su densidad demográfica, comparable a la del Benelux, y el hecho de que su clase dirigente obtuvo las mayores cotas centroamericanas de concentración de riqueza y de autonomía frente al exterior, mientras que sus masas campesinas y trabajadoras desarrollaron unas dotes de laboriosidad, ingenio y resistencia que destacan entre sus vecinos. El país que fue escaparate de los beneficios de la Alianza para el Progreso se ha transformado en pocos años en el ejemplo a evitar, con una guerra civil de una virulencia y duración que a veces no es fácil comprender.

El retraso sería el dato esencial de Honduras. El tempus histórico hondureño siempre ha marchado con horas de retraso con respecto a la hora centroamericana. El atraso y la pobreza han sido sin embargo, por paradójico que parezca, antidotos eficaces contra las mordeduras de la subversión, el terrorismo y la guerra civil. Sorprendente, pero cierto. Y el país que reúne más condiciones para transformarse en laboratorio de una revolución pasa a ser base de la contrarrevolución. Ironías de una posición geográfica que coloca al país en el centro del Istmo, a caballo entre El Salvador y Nicaragua.

El nacionalismo a flor de piel podría quizá constituir el ingrediente más sólido del acontecer histórico de Nicaragua. La larga permanencia en el país de los marines norteamericanos y del clan Somoza, el más fiel aliado de Washington en la región, explicaría tal nacionalismo y su giro anti Estados Unidos. Y ayudaría a comprender ciertas dosis de incapacidad para valorar legítimas preocupaciones de los vecinos y cierto nivel de intolerancia frente a su disidencia interna. Tal nacionalismo podía llevar a la dirigencia sandinista a caer en las redes de una nueva dependencia traicionando de este modo sus promesas de futura independencia.

En el acontecer histórico centroamericano destaca, como ausente, a modo de testigo mudo, casi parte del paisaje, el indígena, sujeto pasivo del quehacer nacional. Sólo en épocas muy recientes el indio se ha insertado en Guatemala en un proyecto de transformación de su entorno social a través de la guerrilla.

NOTAS

(1) En julio de 1979, cuando las guarniciones de la Guardia se iban rindiendo una tras otras, se habían producido ejecuciones sumarias e incluso matanzas. Cerca de 1.000 personas habían perdido la vida en estas circunstancias*. El nuevo gobierno terminó rápidamente con las ejecuciones sumarias, pero se encontró con cerca de 8.000 prisioneros políticos, de los cuales casi 3.000 eran los odiados guardias somocistas.

Los juicios comenzarían en enero de 1980, corriendo a cargo de Nora Astorga la acusación del Estdo. El temor de subversión era grande, y los Comités de Defensa Sandinistas actuaban a nivel local como «orejas» del gobierno, es decir, como informadores.

(2) El PIB había descendido de 1,75 billones de dólares en 1977 a 1,3 billones de dólares en 1979, mientras que la inflación ascendió al 60% en 1979. Ello obligó al gobierno a incrementar los impuestos. La participación en gastos del sector público con relación al PIB fue calculada para 1980 en un 41% del total, proporción similar a la de Méjico o Brasil. Observamos, pues, que poco había de revolucionario en medidas tales como aumentar impuestos o pagar la deuda exterior. Sin embargo, inmediatamente se tomaron medidas en favor de los pobres. Los alquileres modestos

fueron reducidos en un 50% y los medianos en un 40%, al tiempo que se abordaba un ambicioso proyecto de construcción de viviendas como medio de reconstrucción de la infraestructura destruida por la guerra y de proporcionar empleo reduciendo un índice de desocupación de cerca del 40%.

(3) Antes del triunfo de la revolución, el portavoz más autorizado de los empresarios había sido Alfonso Robelo, que formó parte de la primera Junta. En 1980, el líder empresarial era Enrique Dreyfus, Presidente del Consejo Supremo de la Empresa Privada (COSEP), quien intentaba llegar a una vía de convivencia con el gobierno.

(4) Las más importantes eran los Comités de Defensa Sandinista (CDS), con una organización departamental y una cúspide nacional dedicada a labores asistenciales, a la vigilancia en el cumplimiento de las medidas gubernamentales y a la supervisión de mercados, dispendios de licores y prostitutas. Sus «constancias», otorgadas por el jefe de manzana, eran necesarias para obtener un visado, un trabajo, o una prestación. Su obligatoriedad para la obtención de visado, diseñada para impedir la salida del país de los somocistas, fue abandonada a comienzos de 1980.

(5) La segunda organización de masas en importancia era la Central Sandinista de Trabajadores, con 100.000 miembros, que convivía con la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), de inspiración cristianodemócrata, y la Confederación Unida de Sindicatos (CUS), afiliada a la ORIT. La CST organizaba seminarios donde se impartía ideología sandinista, vaga mezcla de nacionalismo y marxismo y, curiosamente, en el terreno puramente sindical, mantenía una férrea disciplina salarial al tiempo que promocionaba los índices de productividad, factores ambos que le colocaban en desventaja frente a la Central de Acción Unidad Sindical (CAUS), de inspiración marxista radical. Todos los periodistas en ejercicio estaban obligados a sindicarse en la Unión de Periodistas Nicaragüenses, filial de la CST, al tiempo que el cuerpo de profesores en su inmensa mayoría se afiliaron voluntariamente a la Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses (ANDEN).

La juventud sandinista 19 de Julio, la Asociación de Niños Sandinistas y la Asociación de Mujeres Sandinistas completaba el esquema de movilización popular con que el gobierno revolucionario trataba de organizar y motivar la población en las tareas de reconstrucción.

(6) Éstos incluían al Partido Social Demócrata de Montalván, el Partido Cristiano Social y el Partido Conservador Demócrata de Adolfo Calero, que junto al Movimiento Demócrata nicaragüense de Robelo, crearon el Frente Amplio de Oposición, al cual se adhirieron los sindicatos CTN y CUS. Mientras que Robelo y Montalván representaban fuerzas progresivas, Calero era esencialmente un hombre del antiguo sistema, a pesar de haber sufrido bajo su pariente político Somoza.

(7) Para Heinrich W. Krumwiede la definición de «democracia» aceptada generalmente en Latinoamérica no se basa únicamente en la tradición democrática liberal del mundo angloamericano o de Europa occidental, sino, también, en una poderosa tradición política hispánica con fuertes elementos organicistas, patrimoniales y corporatistas. Criterios tales como la separación de poderes, los equilibrios y los contrapesos, los partidos políticos, las elecciones, no son los únicos para definir una democracia, exigiéndose además otros de contenido social y económico tales como el desarrollo económico y la justicia social para una total comprensión de la democracia. El régimen sandinista daría así una clara prioridad a los criterios socioeconómicos sobre los políticos, no estando dispuesto a aceptar una democracia parlamentaria competitiva sino un sistema en el que se reserva un cierto espacio al pluralismo político, asegurando al mismo tiempo un papel hegemónico al FSLN. Por ello se califica a éste como «vanguardia» del pueblo, como «movimiento revolucionario», no como partido*.

(8) Un mes después del viaje de Enders, Reagan autorizó la ayuda encubierta de la CIA a la contrainsurgencia nicaragüense y las energías se concentraron en la articularción de un elemento de presión militar sobre Managua. Los Estados Unidos no formularon sus peticiones a Managua en un

documento escrito oficial ni después del viaje de Enders ni en 1982, cuando el nuevo Embajador Qaiton pidió el cumplimiento de las promesas de democratización en un papel que no llevaba cabecera ni marchamo oficial del gobierno de los Estados Unidos*. En septiembre de 1981, Enders envió a Managua un proyecto de declaración conjunta en la que los Estados Unidos se comprometían a no usar la amenaza o el uso de la fuerza si Nicaragua se comprometía en iguales términos con respecto a sus vecinos; pero la parte de la declaración relativa a temas de seguridad, intercambios culturales y ayuda económica no fue nunca presentada.

A finales de septiembre de 1981, Johnstone, Director de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado se entrevista con el Embajador nicaragüense Cruz y le lee un documento en el que se plantean las exigencias norteamericanas en temas de seguridad. Ese mismo día por la noche Johnstone telefonó a Cruz diciéndole que se olvidara del proyecto. Ahí se acabaron las negociaciones*. La administración norteamericana comenzó a percibir una pauta ininterrumpida de promesas rotas por Managua, y el Gobierno nicaragüense a atacar la política norteamericana en Centroamérica, al tiempo que alertaba sobre los preparativos de creación de la contrainsurgencia.

(9) Nace así la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). Con el mismo objetivo se crea el Programa Alimentario Nacional encargado de coordinar y extender los servicios estatales a los productores agrícolas de productos de consumo interno. La Ley de Reforma Agraria se aprobará en agosto de 1981 con la finalidad de restablecer la alianza con la burguesía agraria, a la que se respetan sus tierras si están bien explotadas, expropiándose únicamente las propiedades superiores a 500 manzanas (354 hectáreas) con esquemas de explotación ociosa. Se toman medidas para el control del uso de divisas, restringiendo la importación de bienes de lujo, se fomentan los convenios laborales, se prohíben las huelgas temporalmente.

Todas estas medidas tratan de racionalizar una alianza con un nuevo sector empresarial «chapiollo» (nacional) al que se anima a substituir al sector empresarial de élite (ligado a las transnacionales).

(10) Si no se llegó a tal extremo fue porque fallaban una serie de condiciones. Desde el punto de vista interno nicaragüense, el deterioro de la economía no alcanzaba los niveles de desgaste necesarios para provocar suficientes dosis de descontento y aplauso a una intervención exterior. Regionalmente, Guatemala y Costa Rica no mostraron entusiasmo en participar en una operación de saneamiento del sandinismo. Thomas Enders viajó a San José en octubre de 1982 para montar el «Foro pro-Paz y Democracia» —nueva versión de la Comunidad Democrática Centroamericana lanzada a comienzos del mismo año—, con representantes de Honduras, El Salvador, Colombia, Jamaica, República Dominicana y Belice. López Portillo y Herrera Campins lanzan mientras tanto la idea de un acuerdo global en Centroamérica, el Buró de Coordinación de los Países No-Alineados se reúne en Managua en enero de 1983 y, durante el 38 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nicaragua obtiene un puesto en el Consejo de Seguridad a pesar de los esfuerzos norteamericanos en favor de la República Dominicana. La batalla se planteaba en el terreno diplomático. Y las presiones por lograr una solución latinoamericana al conflicto centroamericano subían de tono.

No es aventurado suponer que la solidaridad mundial hacia Nicaragua o, cuando menos, la repugnancia a aceptar una solución de fuerza, fueron elementos importantes en el periodo de marzo de 1982 a noviembre de 1983 para impedir un tratamiento tipo Granada.

(11) La escalada de la contra provocó cambios profundos en la gestión económica del país. Los gastos militares, que no llegaban al 7% del presupuesto nacional en 1981, ascienden al 13% en 1982, al 19% en 1983, al 25% en 1984 y se aproximan en 1985 al 50%. Y de un ritmo de crecimiento del 5,3% en 1981 se pasó a un decrecimiento del 1,2% en 1982. El descenso del producto nacional no afectó fundamentalmente a las mayorías gracias a la consolidación de un sistema de distribución popular, del racionamiento y de la regulación de los precios de 23 bienes básicos. Pero a pesar de todo, el nivel de ingresos per cápita continuaba siendo más bajo que antes de la revolución.

(12) La campaña de desinformación se centraba en los Estados Unidos en torno al «contrato» que los Sandinistas habrían establecido con la OEA antes de la toma del poder. La realidad consistía en que el FSLN había enviado un télex al entonces Secretario General de la OEA el 16 de julio de 1979 diciendo que pensaban convocar «las primeras elecciones libres de este siglo» pero sin ninguna referencia a fechas ni al compromiso de establecer una «verdadera democracia».

(13) Siete Partidos anunciaron su intención de acudir a las elecciones: el FSLN, el Partido Socialista Nicaragüense (PSN), el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), el Partido Comunista de Nicaragua (PCN), el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista (MAP-ML), el Partido Conservador Demócrata (PCD) y el Partido Liberal Independiente (PLI). En vísperas de las elecciones se vislumbraban tres grandes alianzas: 1) el FSLN, que pensaba acudir en solitario presentando a Daniel Ortega y a Sergio Ramírez para la Presidencia y Vicepresidencia; 2) la oposición de derechas, que intentaba montar una alianza conservadora dirigida por Arturo Cruz; 3) los partidos alineados a la izquierda del FSLN, que intentaba negociar una coalición presentando a Virgilio Godoy como candidato.

(14) Con ocasión del encuentro del Buró de la Internacional Socialista (en Río de Janeiro el 1 de octubre de 1984) se reunieron el Comandante Bayardo Arce y el candidato de la CDN Arturo Cruz. Cuando parecía que se había llegado a un acuerdo de participación de la CDN en las elecciones surgió el escollo al negar Cruz que la CDN pudiera asegurar que las fuerzas de la contrarrevolución abandonarían la lucha y entregarían las armas. La CDN pidió un nuevo plazo de inscripción de candidatos al Consejo Supremo Electoral que le fue denegado.

(15) Las continuas incursiones del FDN desde sus bases hondureñas llevó a Managua a establecer a principios de 1985 un cordón sanitario de 250 kilómetros a lo largo de la frontera con un desplazamiento de cerca de 150.000 campesinos. La intención fundamental era impedir el abastecimiento y reclutamiento, forzosos en numerosos casos, y a abrir vías para la persecución en caliente de la contra hasta sus reductos hondureños.

(16) En mayo igualmente, la contra penetra en fuerza por la frontera Norte, con efectivos cercanos a los 5.000 hombres, y tras una semana de duros combates en los que el EPS empleó los helicópteros artillado soviéticos y dos batallones ligeros de infantería de lucha contrainsurgencia, lo que quedaba de la fuerza incursora regresó precipitadamente a sus bases hondureñas.

(17) El Arzobispo Romero declaraba que el poder real estaba en manos de los elementos más represivos del Ejército, que la ayuda norteamericana debiera ser interrumpida para no agravar aún más el conflicto y que los cristianodemócratas debieran abandonar la Junta, ya que su presencia cubría el carácter represivo del gobierno, particularmente en el extranjero. El Fiscal general de la República, Zamora, era asesinado en febrero de 1980 por atravesarse a predicar la reconciliación con la izquierda. Varios días antes, la estrella rutilante de la oligarquía salvadoreña, radicada en su gran mayoría en Miami, D'Aubuisson, había denunciado por la radio a Zamora como miembro oculto de la guerrilla. Y el Partido Cristianodemócrata, que había amenazado con abandonar la Junta si no se enjuiciaba a los autores del asesinato, permaneció en ella a pesar de que nadie fue llevado a los Tribunales. Sólo renunció Héctor Dada, quien abandonó el país inmediatamente temiendo por su vida.

(18) Carter pensaba que la ayuda militar sería la moneda de cambio que obligaría a la Junta a aceptar un programa de reforma agraria, con el cual la base de reclutamiento de la guerrilla desaparecería prácticamente. La reforma, anunciada en abril de 1980, comprendería tres fases, de acuerdo con la extensión de las haciendas expropiadas, que serían entregadas a cooperativas campesinas, finalizando con un programa de «tierra a quien la trabaje». La primera fase se llevó a cabo a un coste tremendo. Los hacendados expropiados recibieron su justiprecio que rápidamente fue transferido en gran parte a las cuentas abiertas en Miami. Otros acudieron a la subdivisión entre

familiares para evitar ser afectados. Algunos alquilaron las bandas de matones que pululaban alrededor de los cuarteles, y las muertes de campesinos aumentaron en proporción directa a las zonas donde la reforma debía llevarse a cabo.

(19) En enero de 1981 dos norteamericanos y el jefe salvadoreño del programa agrario serían asesinados en el bar del Hotel Sheraton de San Salvador, verdadera plaza fuerte contra los ataques de la guerrilla. El Ejército salvadoreño, autor del triple asesinato, que lo achacó a la oligarquía, intentó impedir una reforma que ponía al descubierto su nueva riqueza agraria y los medios corruptos para conseguirla. La segunda y tercera fase de la reforma agraria ni siquiera fueron iniciadas. Y entre 1978 y 1981, se calcula que unos 5 billones de dólares de capital privado tomaron el vuelo hacia Miami.

(20) La ayuda norteamericana mantenía a flote el país y prolongaba por tanto una guerra y un baño de sangre que ni la guerrilla ni el Ejército parecían poder ganar. La ayuda militar, que en 1980 ascendía a 6 millones de dólares, saltó a 35,5 en 1981 y a 82 en 1982. Y la ayuda económica se triplicó de 1980, 58 millones de dólares, a 1982, 189 millones de dólares. El Salvador recibía más ayudada per cápita que ningún otro país de Latinoamérica. Pero de 1980 a 1982 1.500 millones de dólares tomaron la ruta de los bancos norteamericanos huyendo del país.

(21) Los revolucionarios mientras tanto conocían momentos de disensión. Roque Dalto, jefe de una facción, sería asesinado en un ajuste de cuentas, y Cayetano Carpio, patriarca de la revolución, se suicidaría desesperado ante las dificultades y las disensiones. En octubre de 1982, la guerrilla lanzó una gran ofensiva al tiempo que ofrecía un «diálogo sin condiciones». Y mientras que el número de muertos ascendía a 35.000, la mayoría a manos de los escuadrones de la muerte, el FMLN entregaba los prisioneros hechos al Ejército a la Cruz Roja. El mayor logro del Ejército salvadoreño consistía en acobardar a la población a través del terror. Incluso el Embajador norteamericano Hinton diría en 1983 que una «mafia» del terror era responsable de 30.000 muertes*.

(22) En parte, la victoria de Duarte era una victoria norteamericana. La CIA pagó la publicidad, contribuyó a mantener la seguridad durante el proceso electoral y asesoró al Consejo Electivo Central. Casi nadie recordó el dato para la historia de que 15.000 personas habían sido muertas por las fuerzas de seguridad del Estado durante el período en que Duarte había ejercido previamente como Presidente. Además, el Gobierno norteamericano proporcionaba alrededor de un 30% del presupuesto del gobierno y por ello se había transformado en el nuevo socio de los militares, reduciendo el tradicional papel jugado hasta entonces por la oligarquía.

(23) Con un Congreso y un Tribunal Supremo dominados por la extrema derecha, el margen de maniobra de Duarte era realmente escaso, y su política de reconciliación nacional no tenía más posibilidades de éxito que las buenas intenciones de su autor. Y Duarte no tuvo más remedio que apoyarse progresivamente en el poder fáctico del Ejército, teledirigido a duras penas en este sentido por el superfáctico poder de la Embajada norteamericana. La tercera ronda de conversaciones guerrilla-gobierno, prevista para fines de enero de 1985, no llegó a celebrarse justamente por el aislamiento de Duarte con respecto a las fuerzas conservadoras, su dependencia del Ejército y la oposición de éste al diálogo con la guerrilla.

(24) Las concesiones que el gobierno tuvo que hacer a la guerrilla —liberación de prisioneros— contrastaron con la intransigencia observada en anteriores secuestros de funcionarios y oficiales. Ello, unido al «paquetazo», conjunto de medidas de estabilización y elevación de impuestos y precios, colocó en una situación extremadamente vulnerable a Duarte, con profusión de rumores golpistas y el único apoyo seguro del sector democristiano.

(25) Por las mismas fechas, la base aérea de Ilopango servía como punto de recepción de la ayuda destinada a la «contra». Suazo Córdova había querido castigar a los «gringos» por el triunfo electoral de su íntimo enemigo Azcona y había cerrado Toncontín y San Pedro Sula al tráfico aéreo con ayuda a la contrainsurgencia nicaragüense. Ilopango servía de escala entre los aerodromos norteamericanos y la base del Aguacate, en Honduras.

(26) Suazo, sin embargo, no cejaba. Su penúltimo truco consistió en comprar las voluntades de un numeroso grupo de diputados que, de manera totalmente anticonstitucional, debían intentar reformar la Constitución y anular el compromiso conseguido por las Fuerzas Armadas como salida de la crisis institucional. La broma, se decía, le costó a Suazo cerca de 10 millones de dólares. Alertadas las bases de los Partidos Liberal y Nacional, cercaron el recinto del Congreso Nacional y amenazaron con matar a los diputados que votaran a favor de la moción suazocordovista. La desertión del grupo de conspiradores-diputados comenzó inmediatamente. Al fin y al cabo no habían sido pagados para arriesgar sus vidas. La moción fue abortada y Suazo se quedó sin los supuestos 10 millones que, depositados en el Banco Central, pertenecían en realidad al pueblo hondureño.

Pero Suazo Córdova, genio y figura hasta la sepultura, se guardaba en la manga la última carta. De los candidatos del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas, promocionado por una hábil campaña televisiva a modo de detergente de efectos milagrosos e inmediatos, se había transformado en un serio rival de Azcona en la carrera presidencial. «Rosuco» decide un buen día marchar a la base norteamericana de Palmerola, donde solicita un paseo en helicóptero que, naturalmente le es inmediatamente otorgado, y una vez en el aire le indica al piloto norteamericano que tome el rumbo de Marcala, ciudad en la que en ese momento Callejas daba un mitin. Sobre la vertical de la ciudad se le indica al piloto que descienda y, desde una altura conveniente, el Presidente de la República vacía el contenido de dos sacas llenas de pasquines en los que se acusaba al candidato del Partido Nacional de ser un homosexual y de tener el «SIDA».

(27) Tales medidas eran tomadas después de superado el incidente de Urbina Lara quien, refugiado en la Embajada en Managua, había caído en circunstancias poco claras en manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses. San José consideró los hechos como una violación del derecho de asilo, practicó la política de «silla vacía» en las negociaciones de Contadora y llevó el incidente a la OEA.

(28) El 31 de mayo una patrulla de 21 guarías civiles es emboscada en la frontera de Nicaragua con el resultado de dos muertos y 11 heridos en lo que parecía ser un claro aviso de Managua sobre los riesgos de prestar el territorio a los hombres de Pastora.

Tal incidente, bien explotado por la prensa, reforzó el tradicional sentimiento antinica provocando manifestaciones ante la Embajada de Managua con quema de banderas. El antisandinismo se instalaba progresivamente a nivel de opinión pública. Nicaragua propone entonces la creación de una zona desmilitarizada entre ambos países bajo supervisión internacional y San José acepta la propuesta de negociación bilateral pero sin por ello retirar la demanda planteada al Consejo Permanente de la OEA por el incidente de Las Crucitas.

XI

¿Es posible la paz?

Abominad la boca que predice desgracias eternas,
abominad los ojos que ven sólo zodiacos funestos,
abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres,
o que la tea empuñan o la daga suicida.

Salutación del optimista. Rubén Darío.

Resurrección de Contadora

Desde que Contadora y el Grupo de Apoyo —constituido en Lima en noviembre de 1985 por Brasil, Argentina, Uruguay y Perú— presentaron un proyecto revisado de Acta Final de Paz en junio de 1986, las gestiones mediadoras entraron en una vía muerta a la que no fue ajena la táctica contadorina de fijar una fecha tope para la firma de los instrumentos de paz. Superada aquélla sin que el Grupo de Tegucigalpa y Managua se pusieran de acuerdo, no tanto por las cláusulas relativas al nivel de armamentos y a los instrumentos de verificación y control cuanto a la exigencia de procesos de reconciliación y democratización internos, los países contadorinos consideraron conveniente no desgastar inútilmente el proceso mediador convocando nuevas reuniones estériles si previamente no se producía algún hecho nuevo que alentara un cierto margen de esperanza. Desde junio de 1986, el proceso mediador quedó aletargado.

El 18 de diciembre de 1986, los grupos de Contadora y Apoyo deciden en Brasilia relanzar las gestiones mediadoras programando un viaje a las capitales centroamericanas por los ocho Cancilleres para el mes de enero de 1987. Los Secretarios Generales de la ONU, Pérez de Cuéllar, y de la OEA, Baena Soares, anunciaron inmediatamente su intención de sumarse al viaje, prestando de este modo el respaldo de la Organización Mundial y de la hemisférica a las gestiones pacificadoras del Grupo en un gesto de un caudal moral y simbólico indiscutible.

Una serie de hechos nuevos parecían indicar que el momento era apropiado para explorar las nuevas perspectivas de paz. Las elecciones legislativas estadounidenses habían conformado en noviembre una mayoría demócrata tanto en el Congreso como en el Senado. El EPS había incursionado a finales de noviembre en territorio hondureño en una operación que difícilmente podría calificarse de persecución en caliente de la contra sino, más bien, de búsqueda y destrucción de su retaguardia hondureña, produciéndose choques EPS-Ejército hondureño y posterior intervención de la aviación de Honduras. El semanario libanés Ash Shiraa daba a conocer al mundo que la Administración Reagan había enviado varios cargamentos de armas al archienemigo Ayatholla Khomeini con la esperanza de obtener la liberación de rehenes norteamericanos en manos de los shiitas libaneses. Armas por rehenes. Incumplimiento de la promesa de no negociar con los secuestradores. Y, para colmo, desvío de parte de los fondos, sólo parte, pues del resto aún no se sabe su destino, a la contra nicaragüense. El «Irán-gate» o el «contra-gate» había estallado. Y el fin de la transparencia presidencial, de la «Teflon-Presidency», no auguraba un futuro risueño a la política de acoso al sandinismo a través del mecanismo de la contra.

Pues habían sido los hombres del Presidente, el Almirante Poindexter, Consejero del Consejo Nacional de Seguridad y el Teniente Coronel Oliver North, pieza clave en tal operación y miembro de dicho Consejo, quienes habían dirigido un desvío de fondos que contravenía las asignaciones a tal fin del Congreso. ¿Cómo podía el Presidente Reagan no estar enterado de actos realizados por sus hombres más fiables en el Consejo Nacional de Seguridad? La sombra de la duda empañaba la cristalina transparencia del Presidente norteamericano más querido por su pueblo desde los tiempos de Dwight Eisenhower.

Si la Administración norteamericana había sido capaz de entrar en tratos con el archivillano Khomeini, ¿qué garantías existían de que no haría lo mismo en el futuro con los aprendices de villano sandinistas? Un escalofrío de temor sacude las atónitas filas del Grupo de Tegucigalpa. Los aliados centroamericanos de Washington, que ya tenían dudas sobre la eficacia del «tratamiento» contra para operar el derribo del sandinismo, comienzan entonces a alimentar serias sospechas sobre las garantías de continuidad del acoso a Nicaragua y a preocuparse ante la posibilidad de un hipotético arreglo directo Managua-Washington que ridiculizaría, por transformarla en futil, su hostilidad al régimen de los Comandantes.

Por otra parte, Managua lanzaba destellos de su voluntad de compromiso. No sólo mediante la liberación de Eugene Hasenfus, condenado a treinta años de prisión por transportar armas a la contrainsurgencia nicaragüense. Sino en el diseño de la nueva Constitución, en cuya redacción, mal que bien, participaban los partidos de la oposición y cuyo articulado consagraba el no alineamiento, la economía mixta y el pluralismo democrático. Satisfaciendo de este modo legalmente los compromisos iniciales de la Revolución y los objetivos declarados de la política norteamericana frente a Managua. Las relaciones con la Iglesia experimentaban mientras tanto una indudable mejoría.

Todos estos hechos prefiguraban un panorama cuyas posibilidades intentó calibrar el «Grupo de los 10» —Contadora, Apoyo y Secretarios de la ONU y OEA— en su gira centroamericana de enero de 1987. Sin resultados aparentemente alentadores. En Managua escucharon el deseo nicaragüense de superación de la crisis regional mediante la bilateralización de las soluciones. En las tres capitales del grupo de Tegucigalpa oyeron que la solución pasaba por la democratización del régimen de Managua. En Guatemala, el deseo de contribuir a la paz regional dentro del marco de la «neutralidad activa» diseñado por la diplomacia chapina. Y, en más de una capital centroamericana, un cierto nivel de suspicacia y frialdad ante la supuesta desgana del Grupo a presionar en Managua hacia la democratización y desmovilización.

Sin embargo, algo fundamental había cambiado en tierras norteamericanas. Si antes del «contra-gate» ya parecía difícil una intervención militar directa en Nicaragua, después del escándalo tal posibilidad parecía entrar en el terreno de lo improbable. Y, mientras tanto, la presión contra no producía el esperado ablandamiento del sandinismo, sino un empobrecimiento de la población paralelo a un «numantismo» del régimen; al tiempo que, en el campo de batalla, a cada intento de penetrar en número a territorio nicaragüense sucedía un descalabro y una persecución en caliente del EPS hasta su retaguardia hondureña. Todo ello sin conseguir enlazar con sectores de consideración de la población civil y, por tanto, sin un mínimo grado de aceptabilidad política. Una vía equivocada en definitiva, puesto que a cinco años vista, no producía resultados que guardaran proporción

con la importancia de los capitales económicos y políticos invertidos en la operación ni con los fines perseguidos.

Ante tal panorama parecería lógico esperar un giro de importancia en la línea seguida. El derribo del régimen sandinista a través de la contra parecía haber fracasado. Y, según la opinión mayoritaria de los agoreros, fracasaría en el futuro. Mientras tanto, los legítimos intereses de seguridad de los Estados Unidos en la región, cuyo resguardo pareciera ser el objetivo prioritario de la política norteamericana en la zona, quedaban disimulados tras exigencias de un pluralismo y una democratización internas de Nicaragua de difícil presentación, por rezumar intervencionismo, y de complicada exigencia puesto que el concepto de democracia, como la mayoría de las grandes ideas-fuerza, es bastante elástico e históricamente evolutivo.

No parecía sin embargo que la reacción inicial de Washington apuntaba hacia una reconsideración sino, más bien, a contrarrestar la sensación de fin de época y vacilación que progresivamente se fue instalando al calor de los hechos antes indicados. La respuesta de la Administración Reagan consistió en efecto en:

1. Días antes de la gira de los Diez, Phillip Habib y Elliot Abrams convocan en Miami al Canciller tico, señor Madrigal, donde éste expone que Nicaragua debe legitimar su sistema mediante elecciones libres si desea normalizar sus relaciones con Costa Rica. Abrams lanza a los cuatro vientos, como un nuevo plan de paz de Costa Rica, alternativo al de Contadora, lo que era un simple intercambio de puntos de vista sobre las posibilidades de pacificación, sorprendiendo al propio Madrigal e irritando al Presidente Arias, quien se aprestaba a recibir esos mismos días a la misión de los Diez.

2. Exige explicaciones al Secretario General de la OEA, Baena Soares, sobre la justificación y legitimación de su viaje a las capitales centroamericanas en compañía de los Cancilleres contadorinos, de Apoyo y Secretario General de la ONU, demostrando una vez más su desconfianza e incluso hostilidad a las gestiones del grupo mediador.

3. Envía a Phillip Habib no a las capitales centroamericanas, como previamente se anunció, sino a las del grupo de apoyo, menos Lima, y de la CEE con un mensaje: «You ain't seen nothing yet.» La política de la Administración sobre Centroamérica no variará un ápice, la contra conocerá éxitos importantes a partir de la ofensiva iniciada en enero, es inútil intentar convivir con o «civilizar» a un régimen como el de Managua, condenado a la desaparición por Washington. «No han visto nada todavía.»

4. Desplaza una escuadra con el mayor acorazado de su Flota, el «Iowa» a patrullar «en misión de paz» —concesión al lenguaje orwelliano— frente a las costas caribeñas de Centroamérica coincidiendo con la misión de los Diez.

5. Elliot Abrams declara el 23 de enero de 1987 que si se interrumpe el flujo de ayuda a la contra, la Administración no tendrá más remedio que intervenir directamente en Nicaragua —claro aviso a la nueva mayoría demócrata en el Congreso—, que Contadora no presiona a Managua para que democratice su régimen, que México, especialmente, está dispuesto a cualquier operación cosmética legitimadora y a cualquier arreglo que asegure la supervivencia del sandinismo, que Perú no debiera formar parte

del Grupo de Apoyo, pues la asistencia de Alán García a las ceremonias de promulgación de la nueva Constitución nicaragüense supone una toma de posición incompatible con la neutralidad exigible a un grupo mediador. Lenguaje desusado en los ámbitos de la diplomacia, destinada a desacreditar la gestión de Contadora y que provocó la siguiente respuesta del Canciller peruano, Allan Wagner: la Administración Reagan tiene miedo de que Contadora le eche a perder su guerra en Nicaragua.

La semilla de la duda estaba sembrada en las capitales del Grupo de Tegucigalpa. Y la renuncia a aceptar soluciones de fuerza, consolidada en las capitales comunitarias de la Europa occidental y potenciada entre los contadorinos y el Grupo de Apoyo.

La congénita debilidad e inseguridad de Honduras, la rebelión armada del FMLN en El Salvador y la extrema deuda pública de Costa Rica (4.500 millones de dólares) son elementos explicativos del por qué la semilla de la duda no floreció con mayor potencialidad. Pero se estaba llegando a un peligroso divorcio, a una trayectoria de colisión, entre las tesis de Washington y la gran mayoría de Latinoamérica, donde progresivamente se percibían intereses negemónicos más que preocupaciones democráticas. Lenguajes de apasionada defensa de Nicaragua, como el de Eduardo Galeano, se escuchaban con mayor frecuencia en los ámbitos latinoamericanos: «El acoso y el bloqueo, despiadados, crecientes, no ocurren porque en Nicaragua no haya democracia, sino para que no la haya. No ocurren porque en Nicaragua haya una dictadura, sino para que vuelva a haberla. No ocurren porque Nicaragua sea un satélite, triste peón en el tablero de las grandes potencias, sino para que vuelva a serlo. No ocurren porque Nicaragua difunda armas en los países vecinos, sino para que ya no pueda difundir ejemplo: su peligroso, contagioso ejemplo de independencia nacional y participación popular. Para aniquilar a Nicaragua es imprescindible desprestigiarla y aislarla. Los enemigos de la revolución la obligan a defenderse y después la acusan de defenderse. Quieren que Nicaragua no sea más que un cuartel: un vasto cuartel de hambrientos»¹.

Hay sin duda más de un Gobierno latinoamericano con escasas simpatías por el régimen sandinista. Pero más escasos sin duda eran los que aprobaban las actividades de la contra, interpretada como una banda armada contra un gobierno constituido.

Carlos Fuentes resume este sentir: «La democracia nunca entró en los cálculos de Washington durante los setenta años que dominó la política de Nicaragua, entre la caída de Santos Zelaya en 1909 y la de Anastasio Somoza en 1979. Disfrazar una obsesión por reestablecer una dominación como una cruzada democrática no es sino una hipocresía más. Todos los principios de la coexistencia hemisférica han sido gravemente vapuleados en el curso de esta locura»².

No es así extraño que si Washington, secundado por San José, San Salvador y Tegucigalpa, colocaba la democratización de Nicaragua en el arco de bóveda del edificio



¹ Eduardo Galeano, *Defensa de Nicaragua*. Nuevo Amanecer Cultural, 1 de noviembre de 1986.

² Carlos Fuentes, *U. S. should listen to Latin Americans*. The Miami Herald/International Edition, 7 de diciembre de 1986.

de la paz centroamericana, los Grupos de Contadora y Apoyo deseaban construirla sobre los sólidos cimientos de la independencia y la autonomía de los Estados. Se planteaba así una importante cuestión doctrinal consistente en saber si la falta de democracia justifica el irrespeto de la soberanía estatal. Al igual que la definición de los perfiles y los ámbitos de la democracia, puesto que si la defensa de un concepto justifica el desconocimiento de un principio es preciso delimitar claramente cuando se es o se deja de ser una democracia. Si las elecciones libres agotan la idea de democracia o si se exige además rotación de élites, reparto del bienestar, participación del pueblo, apego irrestricto a los derechos individuales a través de una judicatura respetada porque imparcial e independiente porque autónoma del Ejecutivo.

La cuestión es importante, porque así como el principio de la independencia nacional tiene unos perfiles más nitidamente delimitados, el concepto de democracia se presta a interpretaciones más o menos exigente y, por tanto, a un cierto grado de ambigüedad. Lo que, unido a la asimetría de fuerzas en presencia, puede teóricamente abrir la vía de la interpretación unilateral, interesada o abusiva, como justificación del desconocimiento del principio. Las relaciones internacionales podrían transformarse en una serie ininterrumpida de intervenciones en los asuntos internos de países teóricamente soberanos. Y nadie podría sentirse totalmente seguro puesto que el concepto de democracia, además de relativamente ambiguo, es históricamente perfectible.

Condiciones para un arreglo

La escena política centroamericana ha conocido un período de desdramatización desde que en enero de 1981, con los sandinistas en el poder, el FMLN lanzó su ofensiva «final» contra San Salvador y la Declaración franco-mexicana le reconoció prácticamente el «status» de beligerancia. No cabe duda de que la alerta roja ha cambiado de tonalidad, tiñéndose de color amarillo-naranja y que la teoría del dominó centroamericano, preludio de la totalitarización marxista de los países del istmo, ha perdido actualidad e incluso vigencia.

El FMLN ya no amenaza con entrar victorioso en los centros urbanos salvadoreños estableciendo un Gobierno revolucionario y potenciando los movimientos guerrilleros de Guatemala y la subversión en Honduras. Demuestra, eso sí, su enorme capacidad de supervivencia ante el acoso de un Ejército que recibe de los Estados Unidos una ayuda sólo comparable a la de Israel. Al igual que su habilidad para impedir la normalización de la vida económica y social en el país, provocando de rechazo enormes presiones de los sectores extremistas de derechas sobre el Gobierno del Presidente Duarte. Pero nadie, o casi nadie, espera su entrada victoriosa en San Salvador.

La democracia, con todas sus limitaciones, se asienta lenta y penosamente en Honduras y Guatemala. El historial de respeto a los derechos humanos algo ha mejorado bajo las presidencias de Azcona y Cerezo. Y en Costa Rica, el aumento de efectivos de la Guardia Nacional, la eclosión de grupos paramilitares y la movilización psicológica de una considerable parte de la población contra el sandinismo, no han llegado a afectar los sólidos cimientos del sistema político.

El desplome centroamericano bajo el embate revolucionario devenía progresivamente una figura apocalíptica de contenido retórico y uso partidista por los círculos contrarios a la normalización, desdramatización y pacificación de la región.

Todos los actores de la escena centroamericana tienen intereses objetivos en llegar a un arreglo.

Desde el punto de vista de Honduras, la permanente situación de tensión con Managua, constantes incidentes fronterizos debido a la presencia contra a lo largo de la frontera, y la existencia en su territorio de una «nueva Nicaragua», de donde han sido desplazados cerca de 12.000 hondureños, presenta evidentes peligros para la estabilidad del régimen. En primer lugar por la progresiva militarización de la vida interna y creciente papel que en ella asumen los militares, en detrimento del poder civil. En segundo término porque las bases de legitimación del poder van siendo erosionadas al haber quedado transformado el país en base de retaguardia de la contra y en enorme portaaviones de los Estados Unidos. En tercer lugar porque, aparte de los miles de refugiados de los países vecinos que acoge en su territorio, amén del considerable número de indocumentados nicaragüenses y salvadoreños, con su evidente peso en la delincuencia y el paro, existe un peligro latente de «libanización» si las bandas armadas de la contrainsurgencia nicaragüense quedan desprovistas de fondos por los Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas hondureñas nunca han demostrado entusiasmo en pelear codo con codo con los contras. Siempre sintieron desprecio hacia la escasa preparación, motivación, capacidad militar y orígenes de los cuadros militares de Calero y Bermúdez, especialmente después de los combates de marzo, octubre y diciembre de 1986, cuando el EPS penetró hasta 18 kilómetros en territorio hondureño pisando los talones a los restos maltrechos de las incursiones contras a Nicaragua.

Desde que Washington insistió en canalizar directamente todas las etapas del flujo de ayuda a la contra, los incentivos de la implicación directa quedaron aún más disminuidos.

Incluso en los momentos de mayor tensión, aun durante los incidentes armados con Nicaragua, se intercambiaron mensajes entre las Fuerzas Armadas hondureñas y el EPS en los que traslucía el deseo hondureño de no verse arrastrados a una confrontación directa. El CONSUFA formuló su doctrina al respecto en forma de silogismo:

- La guerra con Nicaragua no es su guerra.
- Si se meten, la pueden perder.
- Si se meten y la ganan, no la ganan ellos sino los Estados Unidos y la contra.
- Si la ganan, la pierden, porque la ayuda económica norteamericana abandonaría Honduras y se concentraría en la reconstrucción de Nicaragua.

Con el paso del tiempo era perceptible, por otra parte, un cierto grado de irritación ante las constantes presiones de Washington por involucrar a Honduras aún más en el conflicto, una cierta desilusión por las contraprestaciones recibidas y crecientes dudas sobre la seriedad, efectividad y continuidad de la política norteamericana en la región.

La insistencia norteamericana en que Honduras aislara diplomáticamente, e incluso rompiera relaciones diplomáticas con Nicaragua, encontraba especiales resistencias por

los graves problemas prácticos que se crearían entre dos países vecinos, especialmente con la Cancillería agobiada por dos procesos ante el TIJ, con El Salvador y Nicaragua, y una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro dato que aumentaba la inquietud hondureña radicaba en la aplicación por la Administración Reagan de la teoría del conflicto de baja intensidad. El uso de los contras como un arma de desgaste, destinada a erosionar lentamente al régimen sandinista, no podía satisfacer a Honduras, poco interesada en que un ejército rebelde se instalara indefinidamente en su territorio, especialmente teniendo en cuenta que nunca se recibieron garantías de reasentamiento de los contras por parte de Washington si, como parecía, no acababan por entrar victoriosos en Managua.

A pesar de que la presencia militar norteamericana en el país evitaba a Honduras cuantiosos gastos militares para contrarrestar la potencia del EPS, la ayuda económica recibida había estado por debajo de las expectativas y del desgaste de imagen y pérdida de inversiones sufridas por Honduras a causa de su papel en la crisis regional.

El deseo oculto de más de un político y de muchos hondureños consistía en obtener la salida de su territorio de los contras sin perder por ello la ayuda económica norteamericana ni la garantía de defensa en caso de agresión sandinista. Una garantía que, aun no siendo formal, pues a ello siempre se negó Washington, sería presumiblemente operativa, pues resultaba difícil creer que Washington dejaría escapar la oportunidad de intervenir militarmente en Centroamérica en defensa de sus aliados. Y por otra parte, difícilmente podría la Administración norteamericana, presente o futura, penalizar a Honduras económicamente mientras Nicaragua fuera un «peligro» o un mal «ejemplo», pues debilitar a Honduras sería contribuir a desestabilizarla y a potenciar las posibilidades de cambio en un sentido desfavorable a los intereses norteamericanos en la región.

En cuanto a *Nicaragua* se refiere, parecía evidente que, salvo para los sectores más radicales del FSLN, había un interés objetivo en terminar la guerra con la contra, reconstruir la economía y recrear un ambiente político menos crispado que, sin hacer peligrar el hegemonismo del FSLN, permitiera hacer concesiones y abrir espacios políticos a la oposición, recomponiendo la fachada democrática del régimen y normalizando las relaciones políticas y comerciales con los vecinos.

La creciente influencia de Daniel Ortega en 1987, y el correlativo opacamiento de Tomás Borge, podría augurar una correlación interna de fuerzas más favorables a la transacción.

La normalización regional tendría en *Guatemala* una influencia muy positiva. Vinicio Cerezo controlaba la situación en la capital, pero en el campo seguían mandando los militares, al amparo de una guerrilla que no acababa de desaparecer.

Guatemala se negó a alinearse con los Estados Unidos y el Grupo de Tegucigalpa en contra de Nicaragua. «Neutralidad activa» denominaba Cerezo la política regional de su país. Para la Administración Reagan dicha política representaba una tozudez obstruccionista a sus esquemas regionales y, en clara señal de desagrado, programó para 1987 una raquítica ayuda militar de dos millones de dólares que resaltaban comparados con los 115

millones para El Salvador y los 60 millones para Honduras. Al ofrecer una ayuda puramente nominal se estaba enviando un claro mensaje a quienes más ansiosamente la esperaban, los Generales, quienes contaban con unos 50 millones de dólares. Con lo cual se aseguraba un elemento adicional de presión del estamento militar sobre un poder civil apenas consolidado.

La pacificación regional beneficiaría claramente a *El Salvador*. Nunca conviene olvidar que la contra fue creada originalmente para impedir el tráfico de armas de Nicaragua hacia El Salvador; que, en sus momentos iniciales de triunfo, el sandinismo apoyó cuanto pudo al FMLN, y que todavía hoy en día, Nicaragua es zona de descanso y apoyo logístico para los cuadros guerrilleros salvadoreños, aun cuando el flujo de armas disminuyó sensiblemente hace ya años. La normalización regional pasa por la pacificación salvadoreña tanto como por la aceptabilidad del sandinismo, versión depurada, por los Estados Unidos y, en consecuencia, el Grupo de Tegucigalpa.

Los esfuerzos pacificadores del Presidente Duarte se verían claramente potenciados en una situación regional desdramatizada. Y los cuadros del FMLN podrían rebajar sus exigencias ante un panorama que, en el curso de los últimos años, había evolucionado desfavorablemente para los movimientos revolucionarios de la zona.

El fin de la guerra de la contra supondría para *Costa Rica* un nuevo clima regional favorable a los intercambios comerciales intrarregionales e inversiones internacionales, el fin de la amenaza de conflictos fronterizos por las actividades del BOS, Bloque Opositor del Sur, operando en torno a la frontera, y punto final a la doble presión de los Estados Unidos, para aumentar los efectivos de la Guardia Civil y conceder facilidades al BOS, y de los refugiados e ilegales nicaragüenses en territorio tico.

Cualquier esquema de paz en Centroamérica pasa necesariamente por Washington. Por razones tan múltiples como obvias. Pero también desde el punto de vista de los *Estados Unidos* hay elementos objetivos que presionan en favor de la paz.

Importantes sectores políticos norteamericanos habían llegado a la conclusión de que la política centroamericana de la Administración Reagan no era acertada y que era necesario cambiarla salvando la cara.

Tal política parecía en efecto ser fruto de un dilema: su objetivo era hacer tirar la toalla al sandinismo («say uncle») pero los medios empleados (no negociar y apoyar militarmente a la contra) no eran eficaces. Se descartó el único instrumento con ciertas garantías de éxito, la invasión directa, no ciertamente por falta de ganas, sino porque la opinión pública norteamericana no aceptaba tal solución quirúrgica. Existía, pues, una incoherencia entre el objetivo y los medios que sólo podía alterarse cambiando el objetivo —negociando con Managua— o los medios —lanzando una invasión— o ambos. Daba la impresión de que la política norteamericana seguía aplicándose por inercia y por ser la vía de menor resistencia, ya que el coste político de una modificación de objetivo o de medios sería superior al de mantener el curso.

Mientras, la Administración Reagan disponía progresivamente de más reducidos espacios de tiempo para salir del anterior dilema y su margen de maniobra se veía

reducido por acontecimientos como la victoria democrata en las elecciones al Congreso y, especialmente, el «contra-gate».

El objetivo declarado por el Presidente Reagan de hacer tirar la toalla al sandinismo en inalcanzable salvo en caso de una derrota militar aplastante del FSLN, pues ningún país puede refugiarse en el banquillo ante la presión de otro sin reconocer al mismo tiempo el sometimiento de su soberanía e independencia a los dictados de ese otro. Mucho menos aún los Comandantes sandinistas, cuyo común denominador más importante y, en el que mejor sintonizan con el sentir del pueblo, es un nacionalismo antigriego.

El FDN, cuyo encuadramiento dentro de una gran alianza opositora, el UNO, nunca funcionó, es un grupo que, políticamente, parece progresivamente más impresentable e irre recuperable. A pesar de los esfuerzos realizados no ha conseguido despojarse totalmente de su imagen de ex guardias somocistas, violadores de los derechos humanos y dispuestos a establecer en Nicaragua una dictadura anacrónica en medio de un baño de sangre. La participación de la CIA en su gestación y mantenimiento de su cordón umbilical minan su credibilidad como grupo netamente nicaragüense y le hace aparecer como instrumento norteamericano, simple fuerza mercenaria.

No parecía por tanto lógico descartar que, progresivamente, tomara cuerpo en Washington la idea de que, basar su enfoque de gran parte del problema centroamericano en una ineficaz presión militar sobre Managua a través de un instrumento desprestigiado, era un error.

El escándalo provocado por la venta de armas a Irán y posterior envío de parte de los fondos a la contra colocó a la Administración Reagan y supuso el fin de la «Teflon Presidency». El Presidente Reagan había tenido la suerte o la habilidad de quedar aparentemente incólume después de una serie de episodios altamente cuestionables como la retirada de los infantes de marina de Beirut, el canje de Daniloff por Zahkarov, la marcha atrás en los acuerdos logrados con Gorbachev en Reykjavik o las irregularidades puestas al descubierto tras la captura de Hasenfuss. En esta nueva situación de vulnerabilidad resultaba menos probable que el Presidente Reagan operara una «huida hacia adelante», aceptando el riesgo de una invasión de Nicaragua. La alternativa era continuar caminando la conocida senda de la ayuda a la contra, pero con un Congreso mucho más indómito, o cambiar de política.

Era muy difícil para la Administración Reagan operar un cambio en su política frente a Managua antes de valorar la eficacia en términos militares y políticos de la ofensiva contra iniciada con el nuevo año 1987, una vez recibido el primer tramo de 60 millones de dólares de los 100 votados por el Congreso. Esta ofensiva podía decidir la votación por el Congreso del segundo tramo de 40 millones de dólares y, más importante aún, el futuro de la contra y de la política norteamericana frente a Managua.

Perfiles de un posible marco de paz

En cualquier esfuerzo serio de búsqueda de un arreglo las partes deben rehuir las declaraciones retóricas y concentrarse en la consecución de los objetivos que realmente

interesan. Si ello implica una rectificación substancial en la línea seguida por cualquiera de las partes, debe darse a ese país o países una salida que le permita rectificarse sin perder la cara. Esto es válido tanto para los Estados Unidos o Nicaragua como para los aliados centroamericanos de Washington o la misma contra, a la que seguramente, en el marco de un hipotético arreglo, se le seguiría prestando apoyo norteamericano, aunque de naturaleza puramente moral.

Tratemos de indentificar lo que cada país podría obtener en el marco de tal arreglo.

I. Estados Unidos

El objetivo esencial de la política centroamericana de Washington consiste en reafirmar que la región continúa siendo una esfera de influencia norteamericana y que ningún país de la misma puede desmarcarse excesivamente ni elevar impunemente los costos de mantenimiento de sus intereses estratégicos en el área, Canal de Panamá incluido. Parecía evidente que, ante el hecho consumado de la revolución nicaragüense, esencialmente nacionalista y anti-gringa, los norteamericanos iban a tener que digerir un régimen político cuya seña de identidad más clara era la crítica abierta al sistema de dominación regional. Ahora bien, sin perder tales señas de identidad y consiguiente línea anti-imperialista, Managua podía y debía si quería conseguir el arreglo, evitar determinadas iniciativas que, sin afectar a la esencia de su sistema, entrarían en colisión con los intereses estratégicos en la zona que Washington considera prioritarios. Y cuya modificación, en último término, no estaba al alcance de los sandinistas ni de los cubanos ni los mismos soviéticos. En este sentido, Managua debía:

- Despejar completamente las dudas existentes sobre Nicaragua como santuario y fuente de aprovisionamiento material y moral de los movimientos guerrilleros y subversivos en Centroamérica.
- Desmantelar las instalaciones militares en su territorio no necesarias para sus propias Fuerzas Armadas pero susceptibles de ser utilizadas por fuerzas estratégicas cubanas o soviéticas, como puertos de aguas profundas o pistas de aterrizaje apropiadas para recibir aviones de alcance estratégico.
- Cancelar los acuerdos de cooperación militar estratégica con Cuba o la URSS y evitar alinearse sistemáticamente con estos países en los foros internacionales.
- Mantener, si así lo deseaba una actitud de fondo antinorteamericana en su política exterior, pero con menores estridencias y aceptando el hecho, como lo hace Méjico, de que los Estados Unidos también tienen intereses legítimos en la zona.
- Eliminar las medidas más abiertamente represivas de la libre expresión y dar un espacio a una oposición que sienta estímulos para no romper con el sistema. Más que despojar a los sandinistas del poder, los Estados Unidos debieran desear desactivar las espoletas que el sandinismo transporta como adherencia, potenciando las posibilidades de juego de la oposición conservadora. No se trataría de que el FSLN abandonara su poder hegemónico, sino de que respete las formas democráticas y reconozca que la oposición debe jugar un mayor papel en el sistema para aceptar la cancha. De nuevo el modelo mejicano podría ser útil a este respecto.
- Respetar el sistema económico mixto, tal como siempre prometió el FSLN, despejando las incertidumbres que sobre su futuro pesan.

En tales circunstancias, los Estados Unidos podrían encontrar una salida airosa a una política de apoyo a la contra que amenaza con llevarle a un callejón sin salida, donde el enfrentamiento con el sentir de América Latina ya no es una simple especulación, y en la que sus legítimos intereses en la zona no tienen suficientes garantías de salvaguardia. Una política que difícilmente puede dar frutos sería abandonada en favor de una solución que reconocería la legitimidad de parte de sus intereses en la zona, los prioritarios. Pasaría así de potenciar soluciones de guerra a patrocinar soluciones de paz, obteniendo el apoyo de una gran mayoría de países que, en la actualidad, cuando menos, no alcanzan a comprender la justificación ni el futuro de su actuación en la región.

No sería descabellado pensar que los Estados Unidos podrían llegar a aceptar una solución centrada en las anteriores condiciones. Si Nicaragua se compromete a no mantener una alianza estratégica y política con la URSS y Cuba, a no fomentar la subversión entre los vecinos, a mantener dentro del país unas mínimas formas democráticas, se estaría implícitamente reconociendo que en la actual Centroamérica no resulta realista desconocer los intereses vitales de los Estados Unidos. No por ello tendrían que quedar afectados los objetivos fundamentales de la revolución sandinista tal como el FSLN los ha reiteradamente presentado.

Llegar a un modus vivendi con Estados Unidos no es traicionar a Sandino quien, como sabemos, difícilmente podría ser calificado de marxista, como tampoco lo significó traicionar a Lenin por la URSS o a Mao por China.

Lo esencial es que las disputas sobre temas no esenciales no creen un entorno de recriminaciones mutuas donde un acuerdo equivale a una rendición y en el que no sea posible aprovechar las condiciones favorables para delimitar los aspectos substantivos del conflicto.

2. Nicaragua

La eliminación de la contra como un factor militar y político relevante, al perder el apoyo material de los Estados Unidos y sus aliados regionales, sería de gran importancia para Managua, ya que la desaparición de ese permanente irritante supondría la consolidación y normalización del régimen nacido de la revolución sandinista.

La ayuda económica internacional para reconstruir su economía tendría un interés fundamental para Nicaragua. Proveniente no sólo de los Estados Unidos, sino también de la CEE y de los miembros de Contadora y Apoyo. Un aspecto importante del arreglo consistiría en un Plan Marsall para Centroamérica, Nicaragua incluida, en el que los Estados Unidos participara activamente pasando de este modo de gran banquero de la guerra a patrocinador de la paz y el desarrollo en la región. La cancelación del embargo comercial y posterior reintegración de Nicaragua a su natural ámbito económico centroamericano, es decir a una zona de enorme influencia económica norteamericana, sería de gran importancia tanto para Nicaragua como para los Estados Unidos. Tal perspectiva daría a Washington una amplia gama de incentivos y penalizaciones que podría emplear según el tenor de sus relaciones con Managua. Tal como sucedió en Europa en

1947, dicho Plan operaría sobre la base de que los países del área dieran pasos importantes hacia la integración económica. La resurrección del Mercado Común Centroamericano podría responder tanto a los intereses de Washington, que vería así reforzada la reinserción de Managua en las instituciones de una región colocada bajo su esfera de influencia, donde el sistema económico es de economía de mercado y en la que los partidos moderados sienten una irresistible atracción a los vientos del Norte, como para Managua, que vería en esa reinserción una confirmación de su status como parte legítima de Centroamérica, obteniendo además facilidades para los intercambios comerciales con sus vecinos.

La ayuda y coordinación económica con sus vecinos permitirían abordar la reconstrucción del país. Tal como señaló Kissinger al predicar la distensión con la URSS, el aumento de los contactos comerciales colocaría en manos de Washington toda una serie de elementos de presión que podría utilizar según fueran las relaciones.

El arreglo permitiría a Managua recomponer sus relaciones en la región, cuyo deterioro actual no sólo crea problemas prácticos, sino que afecta profundamente a un país que, como el resto de los centroamericanos, está acostumbrado a unos contactos intensivos y fluidos con sus vecinos. Resulta difícil concebir que Nicaragua pueda cambiar sus profundas relaciones de hermandad con Honduras o Costa Rica por el pueblo «hermano» de Bulgaria. En el caso de Honduras, el arreglo podría incluir no sólo el problema de la contra, sino un conjunto de temas fronterizos pendientes en el Golfo de Fonseca y en los bajos de Serranilla.

De tanta importancia como el arreglo sobre los temas de fondo sería el que los Estados Unidos se comprometiera en el futuro a guardar las formas y tratar a Nicaragua como un país soberano. Nicaragua tendría la oportunidad de aparecer como un país razonable, abierto al diálogo y capaz de hacer concesiones cuando resulta necesario, pero decidido a defender su soberanía cuando se le presiona abiertamente, como en el caso de la actual política de apoyo a los contras. Los Estados Unidos aceptarían coexistir con un régimen formalmente anti-norteamericano, pero que, de hecho, habría llegado a acuerdos de fondo con Washington, respetando sus intereses estratégicos en la zona y reintegrándose en el sistema económico y político regional.

3. Honduras

El beneficio mayor para Honduras radicaría en la salida del país de la contra, en la desaparición de la «nueva Nicaragua» con su secuela de miles de desplazados hondureños y en la eliminación del riesgo de verse arrastrada a una guerra que no es suya, no desea y difícilmente puede ganar, pues una victoria bélica supondría una derrota económica.

Dentro de un esquema de arreglo, Honduras debiera recibir una ayuda especial —aparte de su cuota del Plan Regional— para reinsertar en zonas poco pobladas a grupos de contras y refugiados nicaragüenses que no quisieran regresar a Nicaragua. Al fin y al cabo un porcentaje elevado de los mismos, los niños nacidos en Honduras tienen derecho a la nacionalidad hondureña. La etnia miskita probablemente regresaría en su inmensa

mayoría. Y en cuanto a los cuadros de la contra, sería moralmente inaceptable que los Estados Unidos no los aceptara en su territorio, posiblemente Miami.

Nicaragua se comprometería formalmente a no emprender ninguna acción desestabilizadora de Honduras, quedando bien sentado que, en caso de incumplimiento de las seguridades dadas, Honduras se alinearía con cualquier proyecto norteamericano de represalias.

Las Fuerzas Armadas hondureñas, salpicadas de escándalos por implicaciones en los canales de distribución de ayuda a la contra y sometidas a una constante erosión por permitir la ocupación de parte de su territorio por fuerzas extranjeras, aparecerían como defensoras del honor nacional al devolver la bandera a la zona del país actualmente ocupada por la contra. Una parte importante del arreglo debiera prever un programa de modernización y tecnificación que permitiera compensar la ventaja numérica y la experiencia acumuladas en sus respectivos conflictos por los Ejércitos de El Salvador y Nicaragua. El mantenimiento de la superioridad aérea centroamericana de Honduras sería una parte importante de dicho programa.

Honduras, el más pobre y necesitado de inversiones extranjeras de la zona, sería el más beneficiado con la creación de un clima favorable a los intercambios e inyecciones monetarias procedentes del exterior.

4. El Salvador

Cualquier esquema de pacificación y normalización regional ayudaría indudablemente a El Salvador a salir de su situación de guerra civil.

El Presidente Duarte tiene que demostrar que es capaz de hacer respetar su autoridad a los militares y grupos afines de la extrema derecha, pues de modo contrario el proceso de asentamiento del poder civil y de encarnamiento de la democracia puede demorarse espacios de tiempo más propios de la Historia que de la Política.

El FMLN, a cambio de garantías substanciales de integridad física para sus miembros y en un marco de auténtica convivencia democrática, en el que la disidencia política encuentre salidas más razonables que su paso a la guerrilla, debiera prometer que está dispuesto a demostrar su madurez, su sentido de la responsabilidad y popularidad, su patriotismo en definitiva, aceptando dejar la sierra, abandonar el fusil y enarbolar la papeleta de voto.

Los grandes valedores del Presidente Duarte, la Administración norteamericana y la Internacional Demócratacristiana, debieran apoyar decididamente a aquél en una operación de recuperación del poder por los civiles, haciendo incluso jugar el retiro forzoso para los elementos más connotados del Ejército, pues en caso de no hacerse el esfuerzo, el poder civil seguirá siendo tutelado por el militar, las violaciones de derechos humanos continuarán y el apoyo al régimen perdería justificación moral.

5. Guatemala

La política de «neutralidad activa» seguida por Guatemala en el conflicto regional resultaría, dentro de un esquema de arreglo en el área, haber sido la línea de actuación correcta. Guatemala dejaría de ser penalizada por los Estados Unidos a través de la reducción sistemática de los volúmenes de ayuda. Y, en el campo interior, los efectos sobre la actividad de las guerrillas no podrían dejar de ser beneficiosos.

Cualquier progreso en la pacificación interior tendría una repercusión importante y directa sobre el poder y la autonomía que el estamento militar, el más poderoso, organizado y ensangrentado de Centroamérica, todavía conserva, especialmente en las áreas rurales. Con lo cual el poder civil saldría reforzado y la democracia potenciada.

Tanto aquí como en Honduras y El Salvador es urgente institucionalizar y racionalizar el poder del Estado. Particularmente mediante la creación de un auténtico Poder Judicial independiente, competente y estable, y una Administración pública políticamente neutral, estable e instruida. De otro modo, el Estado seguirá siendo en cierta medida propiedad del partido y, dentro de éste, del clan ganador en las elecciones.

6. Costa Rica

Los beneficios fundamentales para Costa Rica serían más bien de tipo económico, ya que es el desajuste de su Balanza de pagos y el enorme monto de su deuda pública el mayor problema del país. La economía tica ha sido tradicionalmente una de las más dinámicas de la región, con un alto porcentaje de participación de su sector exterior en el componente final de su PIB. La paralización de las inversiones exteriores como consecuencia del clima regional y la disminución del comercio intrarregional han sido duros golpes para una economía volcada tradicionalmente hacia el exterior. Cualquier plan de reactivación regional tendría efectos muy beneficiosos para la difícil situación económica local.

Pero incluso desde una perspectiva política, Costa Rica tiene mucho que ganar internamente de la pacificación regional. Contribuiría en efecto a descrispas una situación interna de alta movilización psicológica contra el sandinismo, de la cual se han aprovechado ciertas organizaciones paramilitares en un momento en que ni las prestaciones sociales del Estado ni la distribución equitativa de la propiedad de la tierra cumplen a cabalidad su función tradicional de colchón protector de las tensiones sociales.

* * *

En 1987-88 existían, sin duda, condiciones objetivas favorables a un arreglo regional. Una de las mayores premisas para salir de la situación y crear un ambiente propicio al diálogo exigía a los Estados Unidos prescindir de un claro tono de arrogancia, a Nicaragua olvidar tonalidades de país tercermundista, y a los centroamericanos, especialmente los del grupo de Tegucigalpa, tomar más en consideración sus intereses nacionales a largo plazo y actuar en consecuencia.

Costa Rica, con el Plan de Pacificación Regional Arias, y Guatemala, con su política de neutralidad activa, demostraron que los países centroamericanos pueden tomar en sus manos el futuro de la región.

A menos de un año de su toma de posesión, Arias comprendió que la línea de su predecesor, Monge, quien dejó construir en Costa Rica una pista secreta de aprovisionamiento para la «contra», ejercer toda clase de actividades políticas públicas a la dirigencia contrarrevolucionaria y presionar libremente y sin resistencias al Embajador norteamericano Lewis Tambs y al Jefe de Estación de la CIA, Tomás Castillo, ponía en grave peligro la neutralidad y buen nombre tradicionales de Costa Rica.

El Plan de Paz Arias trataba de ejercer sobre Managua una presión política, no una amenaza militar, para celebrar nuevas elecciones controladas internacionalmente, sin autorizar por ello las de noviembre de 1984, se dejara participar en ellas a todas las formaciones políticas de la oposición nicaragüense, se negociara un armisticio y se celebraran negociaciones Gobierno-Oposición, sin incluir en ésta a la «contra». Y aunque este último punto, junto con el cese inmediato de la ayuda a la «contra», descalificaban dicho Plan para la óptica de Philip Habib y Elliot Abrams, Arias ofrecía a Washington una salida airosa del avispero de la «contra» y una posibilidad de recambio a una política centroamericana, cuya supervivencia era un albur diario y cuyo éxito, cada día más, un espejismo inasequible.

La inicial reacción norteamericana al Plan Arias, en el que jugó un papel importante el Senador Christopher Dodd y el Partido Demócrata, fue de apoyo público pero, como por casualidad, El Salvador y Honduras se encargaron de realizar observaciones sobre los «ajustes» o «enriquecimientos» a que debiera someterse dicho Plan para ser viable. En conclusión, tales ajustes apuntaban hacia la «ablación de los atributos» del proyecto pacificador, acabando, por ejemplo, con la automaticidad del fin de la ayuda a las fuerzas irregulares e incorporando a éstas a la mesa de negociación.

En el caso de El Salvador parecía evidente la preocupación sobre las repercusiones que el Plan Arias podría tener sobre el cordón umbilical de la ayuda norteamericana. Como también parecía evidente que, tras años de agitación centroamericana, el gran problema de la pacificación regional era El Salvador más bien que Nicaragua, ya que la paz de este último país dependía fundamentalmente de la voluntad de Washington, mediante el cese de la ayuda a la «contra», mientras que en el caso de El Salvador no hay quien controle al FMLN y, por tanto, le pueda imponer soluciones.

En cuanto a la motivación de las observaciones de Honduras, existía una lógica preocupación en cuanto a la verificación y control del equilibrio militar regional, que el Plan pretende, y con respecto a las garantías de cese de toda actividad de exportación de la revolución sandinista. Pero, en la óptica del Gobierno de Tegucigalpa, el más fiel aliado de Washington en la región, el objetivo fundamental consistía en no hacer peligrar la ayuda norteamericana. Y, a pesar de los triunfos demócratas en el Congreso y Senado norteamericanos y del debilitamiento que las investigaciones del Irán-gate ocasionaron a la Administración Reagan, Tegucigalpa no parecía capaz de sacar ventaja al nuevo equilibrio de fuerzas políticas en Estados Unidos y se aferraba al objetivo de continuar siendo el más firme aliado regional de la Administración Reagan.

Esta Administración seguía empeñada en ganar la batalla legislativa de la ayuda a la «contra», frente a un Congreso y Senado de mayoría demócrata, como si tal batalla fuera la decisiva para obtener el fin del sandinismo. Seis años de experiencia de la escasa eficacia de la «contra» en tal sentido no parecían contar.

A menos de un año de su toma de posesión, el Plan de los Trece de la CIA, Tomás Castillo, ponía en grave peligro la estabilidad y buen nombre tradicional de Costa Rica.

El Plan de los Trece tenía de singular rasgo, además de su presión política, no una intención militar, para establecer nuevas estructuras controladas internacionalmente, sin depender por ello de la ayuda de la CIA. Se debía participar en ellas a todos los niveles políticos de la oposición nicaragüense, se debía organizar un movimiento y se debía crear una organización Gobierno-Oposición, sin incluir en ésta a la «contra». Y siempre con el mismo punto de partida con el que empezamos de la ayuda a la «contra», la reconciliación de los Planes de los Trece de Philip Hahn y Elio A. Gómez. A las oficinas de Washington una vez más se le atribuyó la iniciativa y una posibilidad de reconciliación a una política centroamericana, cuya supervivencia era un deber diario y cuyo éxito, más allá de un optimismo inabundante.

La inicial reacción nicaragüense al Plan de los Trece, en el que jugó un papel importante el senador Christopher Dodd y el Partido Demócrata, fue de apoyo público pero, como por costumbre, El Salvador y Honduras se abstuvieron de revelar opiniones sobre los asuntos o vertimientos y sus demás contenidos. El Plan para ser viable, en la práctica, necesitaba que se estableciera una relación de los intereses del proyecto con los intereses de la oposición, con la participación del fin de la ayuda a las fuerzas rebeldes y el apoyo a la masa de la oposición.

En el caso de El Salvador, pocas veces se evidencia la preocupación sobre las repercusiones que el Plan de los Trece tenía sobre el cordón umbilical de la ayuda estadounidense. Como también pocas veces se evidencia que, tras años de gestión, el Plan de los Trece de la oposición regional en El Salvador más bien que Hahn y Gómez, ya que la paz de este último país dependía fundamentalmente de la voluntad de Washington, mediante el caso de la ayuda a la «contra», mientras que en el caso de El Salvador, no hay quien controle el FICLA y, por tanto, se pueda imponer soluciones.

En cuanto a la motivación de las operaciones de Honduras, existe una lógica, producción de armas y la verificación y control del equilibrio militar regional, que el Plan de los Trece y con respecto a la garantía de que de toda actividad de exportación de la revolución sandinista, para en el caso del Gobierno de Tegucigalpa, el más del siglo de Washington en la región, el objetivo fundamental consistía en no hacer peligrar la ayuda nicaragüense. Y a pesar de los años de experiencia en el Congreso y Senado de Washington, y del delicado momento que se vivía en el momento del inicio de la operación.

NOTA

Las condiciones para la paz regional aventuradas en este capítulo descansaban sobre la situación centroamericana de 1986-87, y podían, por tanto, ser útiles en la medida en que aquella no variara sustancialmente.

XII

El Plan Arias o cómo es posible la paz

Toda mi ilusión la he puesto
en la espera de un mañana.
¿Cómo vendrás? ¿Adornado
de blanca flor de retama
o de flor de pensamiento
que de luto se engalana?

Josefina de la Torre

Crónica de un proceso de pacificación

La firma por los cinco Presidentes centroamericanos en Esquipulas el 7 de agosto de 1987 de un compromiso de pacificación de la región, supuso un hecho político de importancia.

En primer lugar, por el dramatismo que rodeó la firma. Escasas horas antes, la Administración Reagan había lanzado sobre la mesa de Guatemala su propio plan de paz, amenazando con diluir en un mar de confusiones las propuestas concretas, estudiadas durante meses, del Plan Arias. Pero, en lugar de producir una ceremonia de la confusión, el Plan Reagan fue desconocido y, en un curioso efecto «boomerang», incentivó el deseo centroamericano de llegar a un acuerdo. Días más tarde, el Embajador volante norteamericano para Centroamérica, Phillip Habib, dimitió al no conseguir autorización presidencial para explorar las posibilidades de llegar a un arreglo bilateral con Nicaragua. Con lo cual se evidenciaban las fisuras que, al más alto nivel, existían en Washington sobre cómo reaccionar ante la nueva situación creada con la firma del Esquipulas II.

Un día antes de la firma, el Canciller nicaragüense D'Escoto, se mostraba inflexible sobre la disposición de Managua a aceptar su parte del compromiso. Al siguiente día, Daniel Ortega estampaba su firma.

Pero el elemento más importante fue quizá ver a los cinco pequeños Estados centroamericanos, tomar las riendas de su destino y, en un arrebatado de voluntarismo, decidir por sí y ante sí, que estaban dispuestos a arreglar sus diferencias sin imposiciones externas. El espíritu morazánico brilló aquel día con luz propia e iluminó las firmas de los mandatarios de las cinco ramas desgajadas del viejo tronco de la Capitanía General de Guatemala.

También intervino en el ánimo de los Presidentes centroamericanos un cierto pragmatismo. Después de años de guerra civil en El Salvador, de guerrilla en Guatemala y de guerra sucia de la «contra» en Nicaragua, la solución de los conflictos no parecía vislumbrarse. Mientras tanto, los demócratas ganaban el control del Congreso y el Senado, y la Administración Reagan, con menos de dos años de mandato por delante, se veía debilitada por las salpicaduras del «Irán-Gate». Y el propio plan Reagan preveía la posibilidad de un diálogo directo Washington-Managua. ¿Por qué no examinar entonces con Managua las posibilidades de una paz regional, sacando a Centroamérica de la violencia, la atonía inversora y la pobreza creciente?

El Plan Arias aspiraba a poner fin a los conflictos entre la «contra» y el gobierno de Managua y a la rebelión de las fuerzas de izquierda contra los gobiernos de El Salvador y Guatemala. También pretendía acabar con las tensiones fronterizas, las restricciones a las libertades políticas y la intervención de las superpotencias en la región. Amnistía para los alzados en armas, comisiones nacionales de reconciliación, elecciones libres y no utilización del territorio nacional para hostigar al vecino completaban el cuadro de exigencias.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los cinco eran los responsables de poner a punto las medidas concretas que cada país debía tomar para la ejecución del Plan de Paz. En un plazo de noventa días, es decir, al 5 de noviembre de 1987, se realizaría una primera evaluación del camino recorrido a cargo de una Comisión internacional integrada por los centroamericanos, los contadorinos, el Grupo de Apoyo, la OEA y la ONU.

Es decir, calendarización de los compromisos, supervisión internacional y simultaneidad en la ejecución a cargo de cada país. Éstas eran las claves del Plan de Paz conocido como Esquipulas II y cuya paternidad nadie discutió a Arias, aunque algún día se conocerá el decisivo papel que jugó en su gestación el Senador demócrata Christopher Dodd.

No cabe duda de que los principales escollos donde podría naufragar el Plan se encontraban en Nicaragua y en los Estados Unidos.

Era mucho lo que Nicaragua debía hacer para demostrar la sinceridad de sus intenciones aperturistas y democratizadoras: amnistía, salida de los asesores extranjeros, reapertura de «La Prensa», fin de los tribunales populares, pleno ejercicio de la actividad política por todos los ciudadanos y fin del estado de emergencia. Como igualmente era fundamental el papel de la Administración norteamericana. Una Administración que parecía intentar conciliar el agua y el fuego al felicitar públicamente por la firma del Plan y anunciar simultáneamente el mantenimiento de la ayuda a la «contra».

Como indicaba el editorial del diario «El País» de Madrid el 17 de agosto de 1987, «si Nicaragua se presenta el 5 de noviembre con su casa barrida podrá exigir que los demás adecten la suya, y habrá obligado a los centroamericanos, al resto de América Latina, a Europa y al Congreso de los Estados Unidos a clamar por la suspensión de la ayuda a los rebeldes antisandinistas».

La puesta en práctica del Plan no pudo comenzar sin embargo con peores augurios. Prevista una reunión de cancilleres centroamericanos en San Salvador para la tarde del 19 de agosto de 1987, el Ministro hondureño López Contreras prefirió quedarse en Tegucigalpa para acudir a la ceremonia de despedida del Embajador de Colombia, General José Gonzalo Forero, acreditando en su lugar hasta la mañana del día siguiente, en que acudió a San Salvador, a un simple asesor de Cancillería sin ningún poder negociador y, menos, decisivo. La reunión no pudo hacer más que declararse constituida en Comité Ejecutivo, negándose Honduras a formar los comités especiales para el cese de la ayuda a los rebeldes, amnistía, alto el fuego y reconciliación. Pero, con ser poco halagüeño este comienzo, más ominosa aún fue la respuesta de López Contreras a una pregunta sobre las bases «contra» en Honduras, negando su existencia. A esta táctica se añadió por Tegucigalpa la interpretación de que, en Guatemala, Honduras no había asumido obligaciones internacionales nuevas. Ante tales hechos podría concluirse —como lo hizo el

editorial del diario «Tiempo» de Tegucigalpa el 22 de agosto de 1987— que «el Gobierno de Honduras se está quedando completamente solo en el entorno centroamericano».

Sin embargo, la Comisión de verificación sería creada el 22 de agosto en Caracas. Podría decirse que Honduras, atenzada entre el contradictorio deseo de no desmarcarse de su entorno latinoamericano y no indisponerse con la Administración norteamericana, no pudo resistir la presión de la reunión ni el sentido de urgencia que la presidió ante el temor de que la Administración Reagan pudiera enterrar el proceso pacificador consiguiendo del Congreso fondos para la «contra» antes del plazo del 5 de noviembre. Había, no obstante, una ironía fundamental en este tema: para tener posibilidades de conseguir la aprobación de tales fondos, la Administración Reagan no podía oponerse frontalmente a un Plan de Paz que eliminaba a la «contra» como factor militar sin llegar a admitirla como factor político de la pacificación. Un plan de paz que, según Peter Davis —The New York Times, 24 de agosto de 1987— era más bien un ruego de los centroamericanos a su Emperador: «Por favor, no nos obligue a continuar matándonos.»

No es por tanto extraño que no se atacara el plan en sí, como meritorio esfuerzo en pos de la pacificación, sino que se insistiera en sus graves lagunas. Parecía que los elementos más duros de la política centroamericana en Washington se encontraban atenzados por el doble temor de que Managua pudiera cumplir su parte de los compromisos en los plazos previstos y que, a pesar de todo, el sandinismo, aunque edulcorado o «mejicanizado», pudiera subsistir como fuerza política hegemónica en Nicaragua.

Aunque la interpretación de sus motivos era por supuesto absolutamente libre, parecía evidente que los destellos procedentes de Managua a lo largo de agosto y septiembre de 1987 apuntaban hacia un cumplimiento de los compromisos de Esquipulas II. Mientras tanto, la Administración Ragan se empeñó en su defensa a ultranza del dudoso peón de la «contra», anunciando que solicitaría 270 millones de dólares para las huestes de Calero y Bermúdez. Antes del plazo del 5 de noviembre, y, por tanto, de saber si Managua cumplió o no.

Lo que muchos dudaban y otros tantos ansiaban, el cumplimiento por Managua, comenzó a tomar cuerpo a lo largo de septiembre. Medidas tales como la reapertura de La Prensa sin censura previa, el regreso de los sacerdotes expulsados, admitir al Cardenal Obando —el mayor crítico de la Revolución— en la Comisión Nacional de Reconciliación, la reapertura de Radio Católica y el anuncio de un alto el fuego, unilateral y en determinadas zonas, constituían en su conjunto una clara tendencia al cumplimiento.

Por otra parte, la Guerrilla del FMLN aceptaba negociaciones con Duarte, según los términos de Esquipulas II, para el 5 de octubre.

Se planteaba entonces, en términos más que teóricos, indagar sobre la actitud de Washington ante un cumplimiento de Esquipulas II por Nicaragua. El propio Presidente Reagan aclararía esta incógnita al declarar que el Plan de Paz tenía fallas importantes y no satisfacía los intereses norteamericanos en la región.

El lenguaje de los intereses, por crudo y cínico que parezca, es mucho más inteligible y digerible que el de las grandes frases en torno a la democracia y sus virtudes, ya que supone colocarse en un terreno mensurable y aspirar a unos objetivos claramente identificables. La comprensión y aceptación de la línea Reagan en Centroamérica sufrió desde sus comienzos de una falta de manifestación pública de los auténticos intereses que Washington deseaba salvaguardar en la región.

Se colocó como meta de tal política el loable propósito de consolidar la democracia allí donde había algo que consolidar e instaurarla claramente «a las bravas», allí donde faltaba. Nunca se atrevió la Administración Reagan a confesar públicamente que las comunicaciones interoceánicas a través del Canal, las vías marítimas aledañas y la seguridad estratégica de la región constituían los objetivos básicos a conseguir en el istmo. Temiendo verse tachados de cinismo o de practicar la denostada línea de la «Realpolitik», los hombres de Reagan prefirieron colocar como meta de sus aspiraciones hermosos propósitos democratizadores y bellas cruzadas contra la «tiranía totalitaria del sandinismo». Más que una hipocresía, se trató de un error. La acción de la Administración Reagan en Centroamérica no fue comprendida en algunos casos y fue rechazada en otros. Los ideales humanísticos, cuando corren a cargo de una superpotencia, suelen despertar celos. Nadie sabe de qué modo podrán llegar a afectarles.

Ningún aliado europeo de los Estados Unidos y ningún país latinoamericano —salvo Cuba— hubiera podido, por ejemplo, ver con malos ojos poner fin a un supuesto o real intrusionismo militar soviético en el área. Pero cuando se observa a un país como Nicaragua salir de una dictadura familiar de varias décadas es difícil, a pesar de los errores acumulados, aceptar el postulado de que dicho país necesita prioritariamente una democratización. Entre otras razones porque la democratización que, sin duda, necesita es consecuencia en alta medida del entorno de bloqueo y guerra que se ha introducido en el interior del país desde 1982.

Por ello, cuando el Presidente Reagan mencionó en septiembre de 1987 los «intereses» norteamericanos, convenía no olvidar que lo esencial de tales intereses era de índole estratégica. Y que, en tal terreno, Managua debía, si quería la normalización, tranquilizar la inquietud de Washington al respecto. Asesores militares extranjeros, ausencia de pistas capaces para bombarderos de largo alcance e inexistencia de puertos útiles para submarinos soviéticos serían los tres vectores de dicha tranquilización.

Ahora bien, de seguirse insistiendo en el objetivo de la democratización, ¿qué garantías ofrecía Esquipulas II? La única, que el totalitarismo convive difícilmente con la libertad de expresión, asociación, la economía de mercado y la existencia de opciones alternativas. En tal sentido, Nicaragua malamente podría consolidar la vía marxista-leninista tras el cumplimiento del Plan de Paz. Pero tampoco éste suponía la desaparición del sandinismo, al menos como fuerza política inicialmente mayoritaria. ¿Sería tal supervivencia aceptable para los objetivos de la democratización? Una vez más se observaba cómo el cumplimiento de este objetivo declarado de la Administración Reagan era altamente problemático.

La existencia de dudas sobre las intenciones últimas del sandinismo o sobre un brusco cambio de curso, paralizando el proceso democratizador, parecía justificada. Pero cuanto

más largo fuera el camino recorrido por Managua hacia un sistema democrático más difícil sería el regreso. Y entre la credibilidad y la hostilidad se encuentra un amplio espacio intermedio que la Administración Reagan parecía desconocer.

Como dijo el Presidente Arias, «la ayuda militar a la "contra" ha sido la principal excusa de los sandinistas para todo cuanto han hecho en el pasado —abolir las libertades individuales y el pluralismo—, transformando Nicaragua en una sociedad más dictatorial». Pero es que, además, ¿cómo podía tomarse una línea de actuación gubernamental que dejaba en manos de un grupo tan discutible como la «contra» unos intereses tan legítimos e importantes como los intereses estratégicos de los Estados Unidos en Centroamérica?

El Plan de Paz Reagan, o mejor aún Wright-Reagan, admitía la negociación directa Washington-Managua y cuando Ortega aceptó esta negociación, fue rechazada indicando entonces Washington que prefería un acuerdo regional de paz. Pero cuando el proceso de pacificación regional comenzó a funcionar, Washington dio claras señales de no desear un arreglo negociado que permitiera la supervivencia del Gobierno sandinista. Sin explorar a fondo la posibilidad de que tal arreglo satisficiera las preocupaciones de seguridad norteamericanas en la región. O de llegar directamente con Managua a un acuerdo en tal sentido.

Desde Thomas Enders a Phillip Habib, pasando por el ex Embajador en Tegucigalpa, John Ferch, han sido ya varios los funcionarios norteamericanos que tomaron en serio el interés de Reagan en llegar a un acuerdo negociado y, posteriormente, desilusionados, dimitieron, fueron «dimitidos» o solicitaron el traslado. Tal pareciera que, para los funcionarios del Departamento de Estado en temas latinoamericanos a las órdenes del joven y ambicioso Elliot Abrams, hablar de pacificación regional en Centroamérica llegó a constituir objetivamente un riesgo para su profesión.

A los destellos de esperanza procedentes de Managua a lo largo de septiembre de 1987 se sumaban en octubre la apertura de las primeras negociaciones en tres años entre el Gobierno de Napoleón Duarte y la guerrilla salvadoreña y, por primera vez en veintisiete años, entre el Gobierno de Vinicio Cerezo y la guerrilla guatemalteca.

La delegación gubernamental salvadoreña, integrada por el Presidente Duarte, el Ministro de Defensa General Vides Casanova, el Ministro de Planificación, Chávez Mena, el de Cultura, Rey Prendes, el Viceministro de Seguridad López Nuila, los empresarios Rodríguez y Bloch y el sindicalista Grande Preza, se reunió con la del FMLN, formada por Leonel González, del FPL; Guillermo Ungo, del FDR; Handal, del PCS; Zamora, del FDR; Guardado, del FPL; Meléndez, del ERP, y Oquelí y Villacorta, del FDR. Sede, la Nunciatura Apostólica de San Salvador, en presencia del Nuncio Francesco de Nittis y del Arzobispo Rivera y Damas.

Las conversaciones en Madrid entre el Gobierno y el URNG, cuyos efectivos parecían reducidos a unos 2.000 guerrilleros, un tercio de los que contaban a comienzos de la década, se iniciaron con la declaración del Ministro guatemalteco de Defensa, General Gramajo, asegurando que el Ejército no respetaría el alto el fuego unilateral anunciado por la guerrilla durante el transcurso de las negociaciones.

El escaso entusiasmo de los Ejércitos salvadoreños y guatemalteco a dialogar con las guerrillas era sólo comparable a las resistencias del Ejército hondureño a constituir la Comisión Nacional de Reconciliación. Sin embargo, era indudable que los acuerdos de Esquipulas II habían «legitimado» a los Gobiernos centroamericanos y colocado en una posición subordinada a los grupos insurgentes —incluida la «contra».

Otro signo alentador de pacificación regional consistió en el acuerdo de creación del Parlamento centroamericano conseguido por los cinco Vicepresidentes regionales en Guatemala el 3 de octubre de 1987. El Parlamento constaría de 20 delegados de cada país, se reuniría un mes al año y se ocuparía de profundizar las relaciones culturales, económicas y políticas entre los cinco. Su modelo es el Parlamento Europeo de la Comunidad Económica Europea.

Después de dos días de conversaciones en San Salvador, ambas partes decidieron el 6 de octubre constituir una comisión de ocho miembros, cuatro por cada bando, con el fin de intentar obtener un alto el fuego antes del 7 de noviembre.

El Presidente Reagan, en su intervención del 7 de octubre ante la OEA expuso una lista de exigencias a Managua para no solicitar del Congreso 270 millones de dólares para la «contra». Conviene contrastarlas con las de Esquipulas II para apreciar las diferencias:

ESQUIPULAS II	REAGAN
<i>Elecciones</i>	
Elecciones periódicas libres según el calendario constitucional de cada país. Para Nicaragua las municipales en 1988 y las presidenciales en 1990.	Fechas antes la Casa Blanca había filtrado que las presidenciales habrían de celebrarse en fecha indeterminada pero bastante antes de 1990. Sin embargo, Reagan no precisó fechas en su discurso.
<i>Ayuda militar</i>	
La ayuda a las fuerzas rebeldes, incluida la «contra», terminaría el 5 de noviembre.	La ayuda cubana y del bloque soviético a Managua acabaría en igual fecha.
<i>Alto el fuego</i>	
Los sandinistas tendrían que tomar «todas las medidas necesarias para lograr un alto el fuego concertado».	Managua tendría que negociarlo con la «contra» y, mientras se logra, ésta seguiría siendo suministrada, vía aérea, dentro de Nicaragua, con medicinas, alimentos y diversos para su supervivencia.
<i>Amnistía</i>	
Sería declarada y la «contra» tendría «libertad en toda sus formas», quedando impreciso si podrían presentarse a las elecciones.	Amnistía completa, repatriación abierta y todos los derechos, incluido el de presentarse a las elecciones.
<i>Prisioneros políticos</i>	
No tratado específicamente aunque la amnistía debería por deducción aplicarse a los mismos.	Liberación de todos los prisioneros políticos.
<i>Fuerzas armadas</i>	
Nicaragua y sus vecinos tendrían que negociar reducciones no determinadas, en fechas no precisas, de sus respectivos niveles.	Reducción del tamaño y potencia del EPS para equilibrarlo con el de sus vecinos.

ESQUIPULAS II

REAGAN

	Comités de defensa
No se examinan.	Desmantelamiento.

Libertades

Nicaragua se comprometería a promover una «democracia auténticamente pluralista», lo que implicaría todas las libertades.	Libertad completa de prensa, reunión, culto, sindicación, economía libre y respeto derechos humanos.
---	--

Observamos en el Plan Reagan:

1. Una insistencia por asegurar a la «contra» un espacio político en la futura Nicaragua sólo comparable al paralelo esfuerzo de Carter de 1979 con respecto a la Guardia somocista.
2. Una velada intromisión en el calendario electoral nicaragüense.
3. Una amenaza de renovar ayuda masiva a la «contra», de difícil ejecución con una mayoría demócrata en el Congreso que apoyaba a Esquipulas II.
4. Una crispación personal del Presidente, quien, ante los avances de Esquipulas II veía peligrar su victoria sobre el sandinismo. Un plan de paz que no aseguraba la desaparición del sandinismo, aún poniendo en marcha un proceso que podía conducir a tal fin y que, además, provocaba la desaparición de la «contra», no era aceptable para el Presidente.
5. Una mayor preocupación por asegurar un futuro hegemónico sobre Nicaragua que en garantizar los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

Por su parte, el Presidente Ortega, desde Nueva York, donde había acudido a Naciones Unidas, declaró en respuesta a tal discurso que estaría dispuesto a considerar la retirada de los asesores militares cubanos y del bloque soviético mediante una negociación directa con los Estados Unidos. Y en cuanto al alto el fuego añadía —el mismo día en que se establecían tres zonas de alto el fuego unilateral en Jinotega, Nueva Segovia y Nueva Guinea— que no tendría inconveniente en discutirlo con los comandantes de operaciones de la «contra», pero nunca con sus líderes, para quienes la guerra era un «modus vivendi» desde sus cómodas residencias de Miami.

El 12 de octubre de 1987, Óscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en pro de la pacificación regional. No se podía subrayar de modo más claro el rechazo de la comunidad internacional por las soluciones de fuerza y, de modo lateral aunque obvio, por la línea de la Administración Reagan. Si ya era difícil antes del premio que el Congreso aprobara la renovación de la ayuda a la «contra», después de éste parecía altamente problemático.

El mayor problema para Managua a medida que se acercaba la fecha del 5 de noviembre parecía centrarse en la negociación del alto el fuego con la «contra». Tanto el

Presidente Duarte, durante su visita a Washington el 14 de octubre, como el propio Óscar Arias, solicitaban claramente la apertura de tales negociaciones, directamente en el primer caso o a través de Monseñor Obando en el segundo. Igualmente se manifestaba el Presidente Azcona durante su visita a Washington a finales de octubre.

Ello colocaba a la defensiva al sandinismo después de la cresta de ola sobre la que había navegado desde la firma de Esquipulas II.

Y, sin embargo, parecía claro que la Administración Reagan consideraba la negociación Managua-contra como su última baza para conseguir del Congreso la aprobación de ayuda suplementaria para la «contra». Al igual que como un certificado, otorgado por Managua, de la respetabilidad de una fuerza con unas credenciales y una ejecutoria tan discutidas a nivel internacional. Además, y en el hipotético supuesto de que Managua aceptara negociar con la «contra» sería razonable esperar alguna forma de acomodo de su dirigencia en la futura Nicaragua pacificada; con lo cual la Administración Reagan se aseguraría una palanca interior en la nueva Nicaragua y, de paso, se desembarazaría del problema de encontrar salida para los contingentes por ella creados, armados y mantenidos. No, no sería Miami el destino de los cuadros y oficiales de la «contra», sino Nicaragua. Una nueva Nicaragua por supuesto, donde fuera imposible la repetición de la historia de los «montagnards» de Laos.

En la misma longitud de onda parecía situarse el Presidente Azcona, cuando en entrevista concedida al Chicago Tribune el 18 de octubre de 1987, declaraba: «Honduras va a cumplir con su parte escrupulosamente y la única parte estaría relacionada con los contrarrevolucionarios, pero no nos cuesta cumplir, porque si hay reconciliación en Nicaragua, si hay amnistía general, si hay un cese al fuego negociado, si hay todas las libertades, la "contra" no tiene ninguna razón de ser.» Es decir, que la «contra» debía regresar a Nicaragua dentro del marco de una Nicaragua democratizada y, si no regresaba la «contra», la culpa no sería de Honduras sino de Nicaragua.

Para la segunda mitad de octubre parecían percibirse en Washington síntomas de cambio consistentes fundamentalmente en una reevaluación de las posibilidades de cesar la ayuda militar a la «contra» ante un alto el fuego negociado en Nicaragua. Tal negociación Managua-cúpula «contra» abriría la vía para una posterior negociación Managua-Washington, viniendo, pues, a ser esta última un como a modo de premio de la primera. Ello supondría un relativo triunfo de los pragmáticos sobre los ideólogos, de los moderados sobre los militantes, y de la línea de Michael Armacost, Subsecretario del Departamento de Estado, sobre la de Elliot Abrams, gran patrón de los asuntos interamericanos.

Los grandes vectores de dicho cambio serían, en primer término, los informes de la CIA reconociendo que la feroz ofensiva de la «contra» a lo largo de 1987 sólo habría conseguido ventajas tácticas pero nunca supuesto una amenaza estratégica sobre la dirigencia sandinista. La posibilidad de una derrota en el Congreso, ante la petición de renovación de ayuda a la «contra», en especial después de la concesión del Premio Nobel a Óscar Arias, sería la segunda gran causa. Y, finalmente, la sensación de cansancio perceptible en la Casa Blanca ante un tema en el que siempre surgían nuevas dificultades para cumplir las promesas de la campaña electoral —destrucción pura y simple del sandinismo— o, incluso, de la reelección —obligarle a «arrojar la toalla».

El gran proyecto inicial de Reagan para Centroamérica —consolidar la democracia salvadoreña como modelo de democracia regional y obligar al sandinismo a tirar la toalla mediante la presión militar de la «contra»— no había tenido precisamente éxito.

A finales de octubre de 1987, la moral de la «contra» estaba claramente afectada. Cuatrocientos indígenas miskitos se habían acogido a la amnistía de Managua a comienzos de mes, el reclutamiento disminuía sensiblemente y las deserciones aumentaban. No contribuía precisamente a elevar su ánimo la filtración de noticias de Washington en el sentido de que se estaban preparando planes de emergencia para retirar a la «contra» del combate ante una más que posible negativa del Congreso a reanudar la ayuda o ante un alto el fuego efectivo. Mediados de noviembre sería la fecha límite que la «contra» podría continuar siendo operativa sin nuevos suministros, y, de no recibir éstos, se impondría el reagrupamiento en un enclave cercano a la frontera con Honduras donde, al menos, sus efectivos pudieran ser alimentados y mantenidos en reserva de «mejores» tiempos bélicos que, quizá, nunca llegarían.

La desmovilización y reubicación de la «contra», tema hasta entonces ignorado, comenzaba a salir a la luz pública. Nicaragua, bajo el esquema de la amnistía; Honduras, mediante adquisición con «mordida» de la nacionalidad catracha, y los Estados Unidos, para unso «happy few», parecían repartirse el destino de los hombres de la «contra» ante el supuesto de una desmovilización. El Senador demócrata por Florida, Bob Graham, gran defensor de la ayuda a la «contra», declaraba al periodista Alfonso Chardy que Sweetwater, en Florida, era uno de los lugares preseleccionados (The Miami Herald, 25 de octubre de 1987).

El 26 de octubre de 1987, el señor Anaya, Presidente del Comité de Derechos Humanos de El Salvador, cae asesinado en la capital. Con él eran ya siete los Presidentes de tal organización asesinados en los últimos años en el país. Nadie dudó un instante quienes eran los autores intelectuales del asesinato, qué perseguían con él y dónde se había fraguado el crimen. Los sectores militares encapuchados, los grandes muñidores del crimen institucionalizado, los jefes de fila de los escuadrones de la muerte, podían respirar tranquilos. A un precio «ínfimo», una mera vida humana, conseguían paralizar la segunda reunión negociadora del Gobierno y la guerrilla, programada para la primera semana de noviembre en México. También, recordaban a Duarte y a la población salvadoreña, que no debían hacerse ilusiones con Esquipulas II, que la ejecución de sus compromisos seguía corriendo a cargo de personas cuyo sentido de la ética y el honor admitía, en nombre del «patriotismo», el tiro en la nuca como argumento supremo de la discusión y como destino probable de los alzados en armas que se acogieran a la amnistía.

No, El Salvador no había cambiado casi nada desde los trágicos comienzos de la década. Y Duarte, aún con todas sus dosis de buena voluntad, no controlaba la situación.

El 27 de octubre se reunían en San José los cinco Cancilleres centroamericanos para examinar la puesta en práctica de Esquipulas II. Y, particularmente, los temas más espinosos como la amnistía, el alto el fuego, la democratización, cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a las insurgentes y no uso del territorio de un Estado para agredir a otro.

El Canciller hondureño López Contreras pretendió, sin demasiado éxito, vender a sus colegas una interpretación de la simultaneidad que pudiera calificarse de simultaneidad «a posteriori» puesto que, según la misma, Honduras no estaba obligada a nada mientras Nicaragua no hiciera prácticamente todo (amnistía, alto el fuego negociado con la «contra» y marco plenamente democrático para la oposición). Sólo entonces, Honduras estaría obligada a expulsar o anular militarmente a la «contra». Tal curiosa versión de la simultaneidad olvidaba que la «contra» era un factor que dificultaba el proceso pacificador y que, como tal, debía desaparecer al mismo tiempo que el resto de los obstáculos.

El 31 de octubre, el Presidente Ortega viajó a Moscú con motivo del 70 aniversario de la Revolución Soviética. Este viaje, así como las palabras de Bayardo Arce —«de ningún modo, en lugar alguno, con o sin intermediarios, habrá nunca un diálogo político directo o indirecto con la jefatura contrarrevolucionaria»— suponían un jarro de agua fría para Arias y todos cuantos ansiaban éxito al proceso pacificador. Los halcones de Washington, enmudecidos por la firma de Esquipulas II, saltaban literalmente de alegría ante la posibilidad de achacar al sandinismo el fracaso del Plan de Paz y conseguir ayuda adicional del Congreso, salvando así *in extremis* una línea política condenada según todos los pronósticos. Parecía, en efecto, que tanto Elliot Abrams como José Sorzano, especialista latinoamericano del Consejo Nacional de Seguridad, habían apostado el cuello a que Nicaragua nunca firmaría el Plan. Cuando Managua lo firmó la Administración norteamericana se encontró descolocada y sin plan alternativo. Ésta sería una razón válida para explicar el relativo opacamiento de Abrams a partir de Esquipulas.

Desde entonces, la Administración Reagan pasó de una escasamente entusiasta alabanza pública del Plan a una consideración del mismo como «fatalmente viciado», mientras que privadamente se expresaban temores de permanencia del sandinismo aun cumpliendo con Esquipulas II.

Parecía claro que los enemigos de Esquipulas II se aferraban a la negativa de Managua a conceder una amnistía «completa» y a «negociar» con la «contra» el alto el fuego como vía de escape para declarar que Managua no había cumplido. Sin embargo, tal pretensión presentaba sus fallas: 1) Esquipulas II obligaba textualmente a los Gobiernos a «iniciar un diálogo con los grupos "desarmados" de oposición política interna y con quienes se hubieran "acogido a la amnistía"». 2) También indicaba que los Gobiernos centroamericanos «se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para conseguir un alto el fuego concertado "dentro del marco constitucional"». 3) El calendario final para saber si el Plan fracasó o triunfó no se cerraba el 5 de noviembre sino el 5 de enero de 1988, y la evaluación del fracaso o éxito correspondía a los Presidentes centroamericanos, entre los cuales descollaría la estatura moral de Óscar Arias. No sería, pues, la Administración Reagan quien pusiera la calificación final a Esquipulas II, sino los países de Centroamérica.

Había, sin embargo, seriedad y fundamento en la argumentación de que un alto el fuego no negociado, no «concertado» según la terminología de Esquipulas II, no era garantía de un cese efectivo de las hostilidades, aunque este punto era utilizable no sólo frente a Managua, sino también con respecto a San Salvador —donde el FMLN se negaba a negociar con el Gobierno tras el asesinato de Anaya— y a Guatemala —donde Vinicio Cerezo cedía a la presión del Ejército y declaraba que era supérfluo, pues no había guerra en Guatemala—. Casi nadie parecía fijarse sin embargo sino en Managua.

Hasta tal punto que parecía que, de no negociar, aunque indirectamente, con la dirigencia «contra», Ortega bloquearía el proceso pacificador. Quienes deseaban la paz, Óscar Arias el primero, se mostraban particularmente exigentes, pues eran conscientes de que con un cese negociado de hostilidades y una amnistía, Tegucigalpa no tendría argumentos para oponerse al desarme, desmovilización, reubicación y expulsión de los «contras». Además, no era lo mismo abordar una negociación «política» con la «contra», asegurándole un papel en el futuro de Nicaragua, que iniciar conversaciones «técnicas» destinadas exclusivamente a poner fin a su guerra «sucia». Y, por otra parte, si la «contra» había sido la justificación de los excesos totalitarios del régimen, de la militarización de su sociedad y del catastrofismo de su economía, no era fácil comprender que el FSLN se negara a poner fin a la guerra acudiendo a distinciones entre Comandantes militares —interlocutores válidos— y dirigencia política —inaceptable— o entre fuerzas mercenarias e insurreccionales.

La situación económica de Nicaragua era francamente preocupante, su abastecimiento de petróleo dependía de una Unión Soviética que lo suministraba con cuentagotas y la procura de alimentos se transformaba en un albur diario.

Parecía que a Ortega, a su regreso de Moscú, no le quedaba otra alternativa que hacer alguna concesión de importancia para insuflar vigor a un proceso pacificador que llegaba al 5 de noviembre con peligrosos síntomas de agotamiento.

El 5 de noviembre se producen varios hechos de importancia considerable para el proceso de pacificación.

Daniel Ortega, recién desembarcado de Moscú, anunció ante una multitud de casi medio millón de nicaragüenses, que estaba dispuesto a «concertar» con la «contra» el cese de las hostilidades acudiendo a la mediación del Cardenal Obando. Los enemigos de Esquipulas II, los reticentes, tibios y los «temerosos de la paz» quedaban, una vez más, desconcertados. Habían apostado, en primera instancia, por la no firma por Managua; después, por su incumplimiento; y, sin embargo, «eppur si mouve», Managua estaba cumpliendo. ¿Dónde presionarían en el futuro para demostrar la culpabilidad de Managua?, ¿en la ausencia de amnistía «completa»? ¿en las carencias al final del estado de emergencia?, ¿en la falta de acuerdo para llegar al cese de las hostilidades? Sin embargo, ni Duarte ni Cerezo habían «concertado» el alto el fuego con sus fuerzas insurreccionales y habían optado por ceses unilaterales.

El segundo hecho consistió en las noticias procedentes del Comité de Apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos en el sentido de que, en el programa de ayuda civil y militar para Centroamérica en 1988, El Salvador y Honduras sufrían importantes recortes mientras que Guatemala y Costa Rica salían indemnes o con mínimas disminuciones. El Partido Demócrata, dueño de la orientación del Congreso y del destino de los fondos gubernamentales para ayuda exterior, señalaba claramente sus preferencias y premios de buena conducta, y su desagrado y reprobación ante la falta de control por el poder civil o excesivo servilismo a los designios de una Administración republicana.

Las actitudes de apoyo a la línea pacificadora eran financiadas. Las de cuestionamiento sistemático, incapacidad para superar los temores de sus institutos militares a la «amena-

za» de la paz o de reticencia a cumplir su parte de los compromisos, descapitalizadas. Se cumplían así las veladas amenazas que los numerosos peregrinos demócratas por la región durante el último año habían dejado traslucir: no se unzan al carro de la Administración Reagan ni boicoteen nuestros esfuerzos en pro de la paz, pues se lo haremos pagar caro. Sin embargo, la «ayuda-adición», el horror a llevar la contraria a «la Embajada», la pereza mental en la búsqueda de alternativas y la falta de comprensión de la estructura del poder en Washington, llevaron a los penalizados —El Salvador y Honduras— a entregarse a la Casa Blanca ignorando a Capitol Hill. Y si El Salvador podía presentar su guerra civil como justificación, Honduras, pieza clave del dispositivo estratégico norteamericano en el área y base de sustentación de la «contra», no se atrevió nunca a explorar las posibilidades de contribuir a una paz con desarrollo regional y se plegó a la consigna de limitarse a ser un espacio, un territorio, por donde transitaban libremente Ejércitos extranjeros: el norteamericano en constantes maniobras, la «contra» ocupando y controlando porciones enteras del territorio nacional y, a veces, el EPS en operaciones de seguimiento y destrucción de las bandas de Calero y Bermúdez. Triste papel para la patria de Morazán, paladín de la fraternidad y unidad centroamericanas.

Igualmente, el 5 de noviembre, el Comité de Apropiaciones del Congreso estadounidense aprobó un paquete de 3,2 millones de dólares de ayuda no letal para la «contra», utilizable hasta el 16 de diciembre, es decir, 90.000 dólares diarios para mantener a flote esta fuerza a un coste aproximado de nueve dólares hombre/día sobre la base de 10.000 combatientes.

El mismo 5 de noviembre, el Comité ad-hoc del Congreso en el tema Irán-«contras» aprobaba en Washington su informe final concluyendo que el personal del Consejo Nacional de Seguridad había violado las disposiciones legales que prohibían conceder ayuda militar a la «contra» durante el periodo investigado. El Presidente Reagan era considerado responsable último por las acciones de sus subordinados.

Siempre el 5 de noviembre, día cargado de acontecimientos, Duarte anunció la liberación de 427 prisioneros políticos, quince días de plazo a las fuerzas del FMLN para acogerse a una amnistía mediante abandono de las armas, y un cese de hostilidades del Ejército salvadoreño en todo el territorio excepto en los casos en que fuera atacado. Tales medidas eran anunciadas el mismo día en que Monseñor Rivera intentaba convencer en México a la dirigencia FDR-FMLN para que volviera a la mesa de negociaciones con el Gobierno. El país había sido prácticamente paralizado durante tres días por un paro del transporte mediante el cual el FMLN protestaba por el asesinato de Anaya y manifestaba su poder político y control territorial.

La reacción de la Administración Reagan y de la dirigencia «contra» a la decisión de Ortega fue exactamente la misma: la presión de la «contra» había obligado a la cúpula sandinista a aceptar la intermediación del Cardenal Obando para entablar negociaciones de alto el fuego. Ergo la política de Reagan estaba triunfando. Además, aunque tales conversaciones fueran indirectas y limitadas a los aspectos técnicos del cese de las hostilidades era inevitable que, antes o después, se transformaran en conversaciones directas y de naturaleza política, otorgando estatura política a la «contra».

El aire triunfalista trataba de encubrir que Managua retomaba la iniciativa del proceso, descolocando a quienes apotaban por el incumplimiento, anulando virtualmente

cualquier posibilidad de renovación de la ayuda militar para la «contra» y situando la bola en la cancha norteamericana. Claramente así lo veía Óscar Arias al anunciar que si Managua aceptaba negociaciones haría un gran esfuerzo ante Washington para la reapertura de negociaciones bilaterales con Nicaragua. La presión se alejaba, pues, de Managua y se aproximaba a Washington.

El nivel de cumplimiento de Esquipulas II al 6 de noviembre era el siguiente:

Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
Innecesario.	Unilateral.	<i>Alto el fuego</i> Inexistente.	Innecesario.	Anunciado diálogo indirecto.
Innecesaria.	Inaplicable en parte por desaparición presos políticos.	<i>Amnistía</i> Inaplicable en parte por desaparición presos políticos.	Inaplicable en parte por desaparición presos políticos.	Anuncio liberación 981 presos políticos.
Innecesaria desde 1986.	Prometida.	<i>Prohibición uso territorio por guerrillas.</i> Prometida.	Promete hacerlo cuando «contras» no tengan justificación.	Niega apoyo al FMLN aunque es zona descanso y apoyo en comunicaciones para guerrilla salvadoreña.
Innecesaria.	Afirma es innecesaria.	<i>Cese ayuda guerrillas.</i> Afirma es innecesaria.	Ayuda continúa y, además, lo justifica.	Niega ayuda y CIA no ha sido capaz aportar pruebas decisivas.
Innecesaria.	Levantado estado sitio.	<i>Democratización.</i> Permitida entrada pequeño grupo exiliados.	Continúa represión v. activistas sindicales, estudiantes y políticos.	Apertura «La Prensa» y «Radio Católica», permitidas manifestaciones a oposición. Falta autorización reapertura unas 20 estaciones radio.
Innecesario.	4.000 exiliados procedentes Honduras.	<i>Regreso exiliados y refugiados.</i> Un puñado de los 100.000 refugiados en México y Honduras.	No previsto para los cerca de 500 exiliados políticos.	Pendiente del cese de las hostilidades.

Diríamos, a grandes rasgos, que Costa Rica nada tenía que hacer, pues cumplía de partida todos los requisitos de la pacificación. Nicaragua mucho, y mucho hizo. Honduras igualmente mucho, y no hizo más que establecer una Comisión de Reconciliación. Y que El Salvador, Guatemala y Honduras anunciaron amnistías inaplicables en gran parte por «desaparición» de sus eventuales beneficiarios.

No dejaba por ello de resultar irónico que el Presidente Azcona declarara el 9 de noviembre al Senador Dodd, de visita en Tegucigalpa, que se mostraba preocupado por la

«falta de cumplimiento» de Esquipulas II por Nicaragua, «especialmente porque no han quitado el estado de emergencia ni decretado una amnistía completa».

Sin embargo, el Senador Dodd, poco impresionado, respondía que en caso de un cese de hostilidades en Nicaragua la «contra» no debía pretender visado para Miami, pues no lo obtendría, sino regresar a Nicaragua para emprender la lucha política. Igualmente anunciaba Dodd que, ante una perspectiva de paz, los Estados Unidos, junto con otros países, debían montar un Programa Económico de Cooperación, un mini Plan Marshall para Centroamérica.

Y George Schultz indicaba que los Estados Unidos estaban preparados para discutir con Nicaragua en un marco regional, aceptando las negociaciones bilaterales después del cumplimiento del Plan Arias por Nicaragua.

No eran estas perspectivas halagüeñas para Honduras, siempre obsesionada por un hipotético arreglo directo Washington-Managua que supusiera el cuestionamiento de la ayuda económica norteamericana, peligro para los intereses defensivos de Honduras y aparcamiento en territorio catracho de miles de «contras» armados, reticentes al «adiós a las armas» y al regreso a Managua.

El Canciller López Contreras, en entrevista concedida en Washington el 10 de noviembre a Radio HRN de Tegucigalpa, pretendió justificar el incumplimiento hondureño sobre dos bases erróneas:

1. El plazo para el cumplimiento de los procedimientos de Guatemala se cerraba el 5 de noviembre.

2. Como el compromiso de cese el fuego por Nicaragua no se cumplió el 5 de noviembre, Honduras no estaba obligada a cumplir y, por tanto, podía seguir apoyando a la «contra». Sin embargo, como sabemos, ni el plazo se cerraba al 5 de noviembre ni, por tanto, se podía acusar a Managua de incumplimiento en tal fecha; ni, mucho menos, justificar una falta de cumplimiento propia con un supuesto incumplimiento ajeno.

Tal actitud corría pareja con el intento hondureño de impedir el acceso de la CIVS a ciertas zonas e instalaciones —las de la «contra»—, y con su insistencia en retrasar la inspección hasta las fechas más remotas.

¿Cómo era posible que se adoptasen tantas reservas y cautelas por las simples «incursiones esporádicas» de la «contra» en Honduras? —versión oficial de su presencia en el país—. ¿Habría que concluir que las incursiones significaban presencia y que el término esporádico había de entenderse como permanente? El Senador Dodd, en una de sus numerosas visitas a Tegucigalpa, demostró sus altas dosis de sentido del humor cuando, respondiendo a un interlocutor hondureño que le preguntaba sobre el destino final de la «contra» en una perspectiva de pacificación dijo: «No se preocupen ustedes, como repetidamente manifiestan las autoridades hondureñas, no hay "contras" en el país; por tanto, no tienen ustedes ningún problema.»

La mediación del Cardenal Obando obligaba mientras tanto a la Casa Blanca a un cambio de táctica. Tanto Schultz como Reagan dejaban entender, el 9 de noviembre, que

los Estados Unidos podrían reanudar las conversaciones con Managua, interrumpidas en 1984, aunque dentro del marco subregional centroamericano en un primer momento. Schultz incluso insinuaba la posibilidad de reunirse con Ortega aprovechando la estancia de éste en Washington para asistir a la Asamblea Anual de la OEA. La perspectiva de desempolvar la vieja «two-track approach» o «carrot-and stick approach» de los tiempos de Enders surgía en lontananza.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba el 12 de noviembre por 94 votos contra dos y 48 abstenciones una resolución que exigía a los Estados Unidos acatar una decisión del TIJ de 27 de junio de 1986 pidiendo poner fin a su apoyo a la «contra». El Embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, General Vernon Walters, calificó tal votación de «irrelevante disgresión al proceso de pacificación centroamericano» y reiteró la posición estadounidense de negar la competencia al TIJ en la disputa con Nicaragua por tratarse ésta de naturaleza política. A lo que la Embajadora nicaragüense, Nora Astorga, contestaba: «¿Quién dio a los Estados Unidos el derecho a otorgar patente en materia de democracia? ¿Quién ha dado a los Estados Unidos el derecho a cometer agresiones? Una excusa tras otra. Un acto ilegal tras otro. El uso del nombre de Dios en vano. Y muerte y destrucción para aquellos que deseamos vivir en paz.»

El alto el fuego unilateral establecido por Duarte en El Salvador era roto el día 11 por el Ejército al atacar a la guerrilla en San Antonio de la Cruz, en la provincia de Chalatenango, pues, según el General Blandón, Jefe de Estado Mayor, los rebeldes amenazaban la seguridad de dos presas hidroeléctricas. Tal noticia, unida al progresivo abandono de la Comisión Nacional de Reconciliación por tres de sus miembros proyectaba un panorama poco optimista sobre las perspectivas de pacificación en El Salvador.

Daniel Ortega y los líderes «contra» dialogaban separadamente el día 12 con Jim Wright, representante de la Cámara, horas antes de la llegada a Washington del Cardenal Obando. Tales conversaciones causaban asombro, consternación e indignación en la Casa Blanca, consciente de que progresivamente perdía el control de una situación cada vez más fluida.

La intervención de Wright mostraba el grado de aislamiento al que estaba llegando la Casa Blanca en su política centroamericana. Como el mismo Wright dijo, «Mucha gente entre los habituales de la Casa Blanca no desean un arreglo negociado, sino una solución militar» y, explicando su intervención en el diálogo cruzado con Ortega y la cúpula «contra», añadió: «Alguien tiene que estar dispuesto a abrir la puerta, el oído y la mente y eso es lo que intento hacer con el fin de ayudar a caminar el proceso de pacificación.»

Una primera conclusión sobre la intervención de Wright indicaría que la diplomacia aborrece el vacío y que, después de años de búsqueda de una solución militar, la política de Reagan sobre Nicaragua conducía claramente al vacío. En su habitual alocución de los sábados, Reagan indicó, criticando a Wright, que los Estados Unidos no tenían ningún papel que jugar en «un conflicto nicaragüense que debiera ser resuelto por los nicaragüenses». Tales palabras después de siete años de guerra no declarada contra Nicaragua eran, según editorial del 17 de noviembre del «New York Times», no sólo una «tontería», sino, más bien, una «insultante tontería».

El 13 de noviembre, y desde Washington, Daniel Ortega propone, con la mediación del Cardenal Obando, un «alto el fuego, desarme, amnistía e integración a la vida civil de las fuerzas irregulares». En esencia el plan preveía diferentes zonas de concentración de los «contras» desde el 5 de diciembre al 5 de enero de 1988, fecha en la que la CIVS debería certificar el cumplimiento de la exigencia de alto el fuego. El EPS suspendería sus operaciones ofensivas en todo el territorio nacional quince días antes de la entrada en vigor del alto el fuego para permitir a la «contra» el acceso a las zonas de concentración con garantías para su seguridad, donde sólo podrían recibir ayuda no militar a través de una agencia o institución neutral elegida de mutuo acuerdo. Al final del plazo, la «contra» entregaría las armas en presencia de la CIVS, la Comisión de Mediación y la Comisión de Reconciliación Nacional, quedando automáticamente acogidos a la amnistía y pudiendo participar en la vida política nicaragüense quienes así lo hicieren. Se facilitaría el reasentamiento en otros países a quienes no desearan permanecer en Nicaragua. Una vez que la CIVS certificara que los territorios de los países vecinos de Nicaragua —léase Honduras— ya no eran utilizados por la «contra» y ésta no fuera ya asistida tanto dentro como fuera de la región —léase Estados Unidos— entonces el gobierno de Managua aplicaría plenamente la amnistía y revocaría el estado de emergencia.

La postura oficial norteamericana, consistente en considerar la ayuda a la «contra» como palanca que forzó a Nicaragua a firmar Esquipulas II y como seguro contra el riesgo de incumplimiento sandinista, se veía así confrontada con la línea de Managua según la cual eran justamente tal ayuda y la complicidad de Honduras las causantes de que no se pudiera aplicar la amnistía completa y el levantamiento del estado de emergencia.

Para quienes habían apostado todo al incumplimiento, culpabilización y satanización de Managua, las cosas comenzaban a ponerse crudas. La realidad —*éppur si mouve*— era que Managua estaba cumpliendo.

Quien menos preparado parecía ante la «amenaza de la paz» era Honduras, que había caminado el proceso pacificador a remolque, claramente desmarcado del resto de los centroamericanos. Así lo dejaba entender Vinicio Cerezo el 12 de noviembre en su visita a Azcona, a quien más o menos dijo que cada país debía cumplir con su parte de Esquipulas II y dejarse de denostar al vecino por su supuesto incumplimiento. «La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio», titulaba su editorial en el diario «Tiempo» de Tegucigalpa el agudo Manuel Gamero.

No, Honduras no se había preparado para la paz, a pesar de las insistentes advertencias en tal sentido de distintos sectores internos y, en especial, la burguesía ilustrada de los Bueso, Bográn, Rosenthal, agrupados políticamente en la corriente ALIPO y, periodísticamente, en el diario «Tiempo». Pero es que, además, ni siquiera podía hacer valer sus contribuciones al proceso de pacificación, como el cierre en la primera semana de noviembre de las oficinas de propaganda de la «contra» en Tegucigalpa, pues ¿cómo sería posible que la «contra» hubiera tenido una oficina de prensa y propaganda en el país cuando la línea oficial consistió siempre en negar su presencia permanente en Honduras? La perspectiva de una paz no era, paradójicamente, demasiado halagüeña para Honduras. ¿Qué diría por ejemplo la CIVS si visitaba el Departamento de El Paraiso o la base de El Aguacate, o si se le negaba el acceso para inspección de un territorio y una infraestructura de mando a disposición de la «contra», según el saber de prácticamente todo el mundo?

Una vez establecida la paz, con una «contra» desmovilizada, sin guerra que pelear y con las armas en la mano, ¿no se transformarían los «luchadores de la libertad» en los «palestinos» de Honduras? Y, ante el mismo supuesto, ¿seguiría fluyendo en igual cantidad y al mismo ritmo la ayuda de los Estados Unidos?

Nada de esto parecía preocupar a López Contreras cuando, el día 12, pronunció su discurso en la XVII Asamblea General de la OEA. Enumeró, en efecto, un semidecálogo de las acciones que Nicaragua debía adoptar para contribuir al proceso de pacificación —la paja en el ojo ajeno— y omitió hablar de cuánto había contribuido Honduras al mismo —la viga en el propio—. También anunció la disposición de su Gobierno a pedir la retirada de los soldados norteamericanos de territorio hondureño si Nicaragua prescindía de los asesores militares del bloque soviético y aceptaba negociaciones para reducir el nivel de armamentos y efectivos militares en Centroamérica. Teniendo en cuenta lo arduas y largas que suelen ser tal tipo de negociaciones, las palabras del Canciller hondureño presagiaban más bien una invitación a la permanencia en Nicaragua y Honduras de elementos militares extranjeros.

La responsabilidad última por esta falta de visión recaía, lógicamente, en el Presidente Azcona y su Gobierno. Sin embargo, la realidad era más compleja. No existía propiamente hablando un Gobierno, pues Azcona no reunía nunca a su Gabinete, sino que despachaba separadamente con cada uno de sus Ministros y éstos sólo coincidían en actos oficiales o sociales. En lugar de un inexistente Consejo de Ministros, las decisiones realmente importantes del país eran tomadas por el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente de la República, el Ministro del ramo, el Jefe de las Fuerzas Armadas y cinco altos oficiales. Un organismo donde el Ejército dominaba al poder civil en la proporción de seis a dos. La realidad del poder en un régimen de democratización con militarización o de democracia vigilada (por su propio Ejército, naturalmente) no podía quedar mejor reflejada que en la composición y actuación del Consejo de Seguridad Nacional.

Durante el mes de octubre, Honduras respondió en San José al juicio que se le seguía por la desaparición de cuatro ciudadanos ante la Corte Interamericana de Justicia. Era así el primero de los siete países latinoamericanos que, habiendo aceptado la competencia de dicho tribunal en materia de derechos humanos, era enjuiciado ante el mismo. Y aunque los hechos se remontaban a la ominosa época de Álvarez Martínez, nada añadían al buen nombre del país. En dicho juicio actuó por la acusación el Doctor Ramón Custodio, Presidente del Comité Hondureño de Derechos Humanos de Honduras. Y si las amenazas a su vida eran ya fuertes antes del juicio, después de éste fueron agobiantes.

A principios de noviembre, la Conferencia Episcopal hondureña había publicado un comunicado alertando sobre la persecución de que eran objeto varios sacerdotes católicos en el estricto cumplimiento de su ministerio y de la defensa de la dignidad y libertad personales. Y Monseñor Santos, Obispo de Santa Rosa de Copán, declaraba el día 13 que en Honduras no existía un auténtico poder judicial, se negaban los derechos más elementales del pueblo bajo la excusa de la amenaza del comunismo, los encarcelamientos sin orden judicial y las torturas para arrancar confesiones eran moneda corriente, y las acusaciones de subversión trataban de encubrir la lucha del pueblo por sus más elementales derechos.

Verdaderamente daba la impresión de que, tanto en el frente interno como en el externo, Honduras no estaba preparada ante la «amenaza de la Paz».

Sin embargo, parecía evidente que, tal como dijo el Senador Christopher Dodd, se estaba llegando a un punto de no retorno. Una pluma tan conocida en temas centroamericanos como la de Alfonso Chardy daba cuenta el 15 de noviembre en *The Miami Herald* de que el Jefe de Personal de la Casa Blanca, Howard Baker, y George Schultz, habían comenzado a montar desde Esquipulas II un delicado proceso para desatascar a la Administración Reagan del sumidero centroamericano. Se trataba en definitiva de operar el cambio de una línea de acción que reposaba básicamente en la financiación de la «contra», hacia la potenciación de arreglos negociados entre «contra» y sandinismo y entre Washington y Managua. Pero era preciso obrar casi imperceptiblemente sin que Reagan y sus duros tuvieran la oportunidad de cargarse el proyecto. Por tal razón se intentaba «vestir el muñeco» de la opción negociada como una consecuencia lógica del «éxito» de la Administración, puesto de manifiesto desde que Ortega aceptó negociar con la «contra» y, de este modo, «tiró la toalla». Era preciso enderezar la política centroamericana y tener éxito en la solución negociada antes de la elección presidencial en noviembre de 1988 o, al menos antes del fin de la presidencia Regan en enero de 1989.

El mayor problema para el nuevo proceso consistía en convencer a Reagan y a su gente de que el régimen sandinista, a pesar de la «victoria» de la Administración, sobreviviría a esa misma Administración. Los hombres más procontra en Washington, Elliot Abrams y José Sorzano principalmente, quedaban por supuesto totalmente al margen del proyecto.

Y era preciso, entre otras razones, porque el prestigio de la Administración venía siendo socavado por las salpicaduras del Irán-contras. El informe final del Comité del Congreso sobre el tema acusaba personalmente a Reagan de fomentar un clima perjudicial para el sistema democrático norteamericano y favorable a la potenciación de un gobierno subterráneo, irresponsable ante el Congreso. Teniendo en cuenta que la motivación de los hechos encausado obedecía supuestamente al deseo de establecer la democracia en Nicaragua, resultaba cómico que los Casey, Poindexter y North, hubieran minado, en curioso efecto «boomerang», los cimientos del sistema democrático norteamericano. La eventual ignorancia presidencial de la trama no excusaba su responsabilidad y, de ser real, sólo indicarían una falla en el liderazgo presidencial.

El Cardenal Obando presentó en Miami, el 15 de noviembre, la propuesta de 11 puntos de Ortega a Adolfo Calero, Aristides Sánchez y Azucena Ferrey, regresando el mismo día a Managua, donde era esperado en el aeropuerto por el Vicepresidente Sergio Ramírez, signo indudable de la nueva consideración del prelado nicaragüense por las autoridades de su país.

Mientras tanto, quedaba clausurada en Washington la XVII Asamblea General de la OEA con el rechazo abrumador por parte de latinoamericanos y caribeños de una iniciativa presupuestaria norteamericana que pretendía crear una fuerza internacional de paz que diluiría el carácter latinoamericano del plan de Esquipulas en su importante faceta de inspección y verificación.

El Arzobispo Rivera prevenía el día 16 de noviembre contra la escalada de terror desatada coincidiendo con el avance de Esquipulas II resucitando un estilo típico de los años setenta pero que desde la llegada al poder de Duarte en 1984 parecía extinto. Para la extrema derecha el experimento «democrático» auspiciado desde el exterior había sin duda fallado.

A estas alturas del tramo pacificador, parecía claro que la paz en Nicaragua era una posibilidad realista. Pero en El Salvador y Guatemala la situación era diferente.

Duarte, político por excelencia, había captado que colocándose en la cresta de la enorme ola deseosa de paz limitaba las intromisiones del Ejército en su autoridad y colocaba a la defensiva a las Fuerzas del FDR-FMLN. Una población, agotada, horrorizada, desangrada por la guerra civil, era una buena base sobre la cual afianzar unos poderes tan constitucionales como teóricamente el doble embate del Ejército y la guerrilla. Pero el Ejército contaba con una poderosa base reclutada en el sector empresarial, cafetalero y comerciante, y las fuerzas del FMLN recibían importantes apoyos de la base campesina y ciertos sectores obreros que la transformaba en factor esencial de cualquier solución negociada de la guerra civil. Después de tantos años, 65.000 muertos y casi 3.000 millones de dólares de ayuda norteamericana, pareciera que la Declaración Franco-mexicana de 1981, ante la que se rasgaron las vestiduras tantos defensores del orden establecido, había pegado en diana.

Por supuesto que un fracaso del esfuerzo pacificador de Esquipulas II en El Salvador no tenía por qué significar el toque de difuntos para el sistema salvadoreño. El tinglado podía mantenerse en pie mientras siguiera fluyendo masivamente la ayuda norteamericana. Pero ¿cuántos años tardaría Washington en cerciorarse de que la «democratización con militarización» había fracasado, salía muy cara y «la aurora no apuntaba tras la larga y negra noche»? Una eventual pacificación en Nicaragua, con su inevitable «dignificación» del sandinismo, convenientemente reciclado y acicalado, de tal modo que la «amenaza totalitaria» desapareciera de Centroamérica, al menos como factor importado ¿no afectaría de alguna manera al leit motiv de defensa de la democracia frente a la dictadura que, por sí solo, había justificado la riada de dólares que financiaban el esfuerzo de guerra? ¿No llegaría entonces el momento de explorar las posibilidades de democratización sin más adjetivaciones que respeto a la dignidad humana, garantías judiciales en tal sentido y militares dentro del ámbito de sus cuarteles? El proceso de concienciación sería sin duda arduo. El de ejecución, espinoso. Pero, ¿cuántos años más estaría dispuesto Washington a seguir financiando un esfuerzo de guerra tanto más intenso cuanto alejado de una eventual solución política?

No caminaban mucho mejor las cosas en Guatemala. Las conversaciones de Madrid, las primeras entre Gobierno y guerrilla tras veintisiete años de insurgencia, habían supuesto el reconocimiento de una situación que, aunque sólo fuera por su larga trayectoria, merecía un levantamiento de acta. La decana de la guerrilla centroamericana recibía así su certificación oficial de estado civil. Pero Vinicio Cerezo no conseguía del Ejército autorización para explorar a fondo las posibilidades de reinserción en la vida civil de un movimiento guerrillero que, por su sola existencia, aunque disminuida y acosada, justificaba el mantenimiento de los temas de «seguridad» como coto cerrado de un Ejército que no parecía dispuesto al repliegue táctico a los cuarteles de invierno. Guerrilla

y Ejército, represión y provocación, parecían necesitarse mutuamente, mientras que el poder del Gobierno civil llegaba no más allá de los suburbios de la ciudad de Guatemala. El decano de los Congresistas, José García Baner, del Partido Unión del Centro, cuyo líder Jorge Carpio era hermano del Vicepresidente de la República, dimitía como diputado el 17 de noviembre alegando el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y calificando de «farsa» la democracia en el país.

El 23 de noviembre, varios días después de que hubieran regresado a El Salvador Guillermo Ungo y Rubén Zamora, Presidente y Vicepresidente del FDR, tras varios años de exilio, Duarte anuncia que las investigaciones sobre el asesinato de Monseñor Romero en 1980 señalaban a Roberto d'Aubuisson como autor intelectual del mismo, pasando así por primera vez al ataque contra el complejo de oficiales y empresarios extremistas, es decir, el nervio y el músculo de ARENA. Teniendo en cuenta el momento del anuncio, Duarte parecía perseguir tres objetivos: eclipsar el impacto psicológico del regreso al país de Ungo y Zamora, demostrar entereza y fuerza suficientes como para acusar al líder de la extrema derecha y, finalmente, debilitar a ARENA al comienzo de la campaña electoral para la renovación de la Asamblea Nacional.

No eran muchas las posibilidades de enjuiciar a d'Aubuisson teniendo en cuenta su inmunidad parlamentaria y la práctica judicial de negarse por temor a sentar en el banquillo a los derechistas sospechosos de asesinatos políticos. Incluso podía preverse una agudización de la campaña terrorista para mostrar que la acusación no desanimaba a los pistoleros de la noche. Pero Duarte, al confirmar lo que tanta gente sospechaba desde hacía años, desacreditaba política y humanamente a quien estuvo a punto de ser elegido Presidente en 1982, colocando a la defensiva a las fuerzas de la extrema derecha.

Y mientras el informe final del Congreso norteamericano, sobre el tema Irán-«contras» concluía que Reagan estaba implicado en obtener ayuda militar cuando la enmienda Boland prohibía tal ayuda, aparecían síntomas de que el Ejército hondureño estudiaba la posibilidad de retirar su apoyo a la «contra». Sus razones serían dos. A pesar de los 284 millones de dólares recibidos de Estados Unidos en los últimos seis años y la promesa de 12 cazas F-5E, los militares hondureños habían visto disminuir sus posibilidades de enriquecimiento personal con el manejo de la ayuda para la «contra» al calor de las investigaciones del comité especial del Congreso norteamericano encargado del tema. Y, razón segunda, ante una desmovilización de la «contra», desapareciendo así la primera línea de defensa de Honduras frente al sandinismo, los elementos pensantes uniformados de Tegucigalpa pensaban recibir de Washington no sólo la ayuda militar tradicional, sino la que había correspondido a la «contra».

La cúpula «contra» porfiaba mientras tanto por adquirir estatura mediante una negociación política directa con la dirigencia sandinista. Su contra-propuesta ofrecía un alto el fuego a partir del 8 de diciembre a cambio de una amnistía completa, el fin del estado de emergencia, un respeto total a los derechos y libertades, el fin del servicio militar obligatorio y de los Comités de Defensa y la integración de los efectivos de la «contra» y del EPS para constituir un nuevo Ejército nacional.

No se quedaba precisamente corto su envite negociador.

El conflicto centroamericano había provocado en sus orígenes el deseo de encontrar una solución regional —Contadora—. La posterior adhesión a tal proyecto del Grupo de Apoyo aglutinaba en una causa común a ocho países al sur del Río Grande, que sumaban el 80% de la población de Iberoamérica y trataban de mantener vivo el espíritu bolivariano. El 26 de noviembre de 1987, dichos países se reunían durante tres días en Acapulco para discutir una variedad de temas desde la deuda exterior al conflicto centroamericano.

Era ésta la primera ocasión en la historia de la región en que ocho Jefes de Estado se reunían por decisión independiente, con una agenda propia y sin participación de los Estados Unidos. Ello daba a la reunión un cierto aire de fronda, una dimensión política indudable y un carácter de OEA paralela, autónoma.

Después de tres días, los ocho decidían reunirse anualmente, crear un mecanismo de consultas mutuas —sin presencia norteamericana—, diseñar una estrategia para la reincorporación de Cuba a la OEA —ausente desde la expulsión de 1961—, intentar la reorganización de esta organización —dominada por los Estados Unidos con la ayuda de los pequeños países anglófonos del Caribe— y, en cuanto a Centroamérica, lanzar un programa de cooperación económica de emergencia al que invitaban a unirse a la CEE. Se trataba en definitiva de una seria advertencia a un sistema interamericano de relaciones tradicionalmente dominado por Estados Unidos y de una declaración de intenciones de rebelión contra el hegemonismo a escala continental.

Tal intención se manifestaba claramente en los siguientes puntos. El punto 22 de la declaración de Acapulco indicaba: «La paz en nuestra región está profundamente ligada al respeto a los principios de libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.» En vista de lo cual, el punto 27 formulaba un llamamiento a «los Gobiernos con intereses y vínculos en la región para que contribuyan genuinamente a este proceso y respeten los principios de no intervención y libre determinación...». El punto 29 indicaba que «están en juego no sólo la consolidación de la democracia y el desarrollo con libre determinación de los pueblos centroamericanos, sino también los intereses nacionales de nuestros países».

Y los Ocho formaban parte de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), cuyas conclusiones serían decisivas en la evaluación del cumplimiento de Esquipulas II. La CIVS, en informe confidencial del que pudo hacerse la UPI, indicaba el 1 de diciembre que Honduras no estaba dispuesta a aceptar la inspección hasta que Nicaragua hubiera acordado un cese el fuego con la «contra», decretado una amnistía más amplia y establecido una verdadera democracia. Una vez más el argumento esgrimido era el de la simultaneidad, concepto que significaría en Tegucigalpa que Managua debía sacarle las castañas del fuego a Honduras, liquidar a la «contra» mediante un cese de hostilidades y un regreso masivo a su país, antes de que Tegucigalpa se dejara investigar. Después de la simultaneidad a posteriori, la investigación igualmente a posteriori. Una lógica aplastante. Y ello ocurría a pesar de las repetidas advertencias de mandatarios, como Sanguinetti y Alan García, quienes acudieron a Tegucigalpa en ruta hacia o de regreso de la reunión de Acapulco.

Los problemas de verificación, control y simultaneidad, que acabaron por paralizar a Contadora, se volvían a erguir en la ruta hacia la paz.

Los esfuerzos pacificadores recibían un apoyo significativo con la visita a Nicaragua y Costa Rica el 27 de noviembre de Alfonso Guerra, Vicepresidente del Gobierno español, la de más alto nivel de un político europeo occidental en ocho años de sandinismo. Declaró Guerra que era justo reconocer que Nicaragua había tenido la mayor iniciativa dentro de los centroamericanos, siendo el país que mejor había cumplido hasta la fecha los acuerdos de Esquipulas. Parecía lógico que, tras tales declaraciones, su entrevista con el Cardenal Obando fuera breve y fría, máxime cuando Guerra se negó a entrevistarse con la cúpula «contra» en Costa Rica, y que tanto el diario «La Prensa» como la prensa norteamericana en general silenciaran o intentaran minimizar la importancia de su visita.

Esta reafirmaba el apoyo español al proceso pacificador y, en tal contexto, a las medidas tomadas por Managua para abrir el régimen a un mayor pluralismo, creando así las condiciones para la reinserción en la vida civil de los alzados en armas. También demostraba el deseo español de interesar a la Europa comunitaria en una estabilización democrática de la región a través de una participación generosa en cualquier plan de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica.

En la primera semana de enero de 1988, la CIVS visitó los países centroamericanos precedida escasos días antes por el asesor del Consejo Nacional de Seguridad, General Powell, y por Elliot Abrams quienes, en claro tono intimidatorio, dejaron caer que si el Congreso permitía el colapso de la contra los cuatro países centroamericanos no encontrarían fácilmente ayuda económica adicional para afrontar las dificultades creadas por una Nicaragua liberada de la presión contra. La inspección de la CIVS se redujo a entrevistas con funcionarios de los distintos gobiernos y con personalidades de la oposición. No se trató pues de una verificación sobre el terreno sino, más bien, de una serie de conversaciones sin duda interesantes, pero difícilmente tanto como una inspección directa. Verificación por tanto oral pero no ocular. En su reunión de Panamá el 12 de enero con los cinco Cancilleres centroamericanos, la CIVS recomendó una extensión de los plazos para el cumplimiento de los compromisos, un nuevo sistema de inspección más efectivo que la simple entrevista, estimando que Nicaragua había dado más pasos hacia la pacificación que el resto de sus vecinos y que los Estados Unidos debían cesar su ayuda a la «contra».

A medida que se acercaba el 15 de enero de 1988 parecía apuntar el deseo de varios Jefes de Estado centroamericanos de no asumir la responsabilidad histórica de dar por finalizado el proyecto de pacificación regional. Arias, padre del Plan y flamante Premio Nobel, por razones obvias. Ortega, porque la pacificación suponía la mejor garantía frente a la renovación de la ayuda a la «contra» y el aislamiento internacional. Duarte, porque su lucha por afianzarse frente a las derechas, Ejército y FMLN, exigía la posibilidad de paz. Cerezo, opacada la neutralidad activa chapina por el éxito del Presidente tico y deterioradas sus relaciones con el Ejército desde Esquipulas II, parecía más dudoso. Sólo Azcona se mostraba claramente renuente a alargar plazos, aunque el temor a quedar en posición de 4 v. 1 podía provocar sorpresas.

El Plan Arias podía, pues, tener posibilidades de supervivencia. Si recordamos que una de sus principales claves consistió en la calendarización de los compromisos, ello

suponía el riesgo de caer en un proceso de «contadorización» o alargamiento *sine die* de sus expectativas. Riesgo por supuesto mucho menor que el de cerrar puertas y ventanas a la luz de la esperanza abriendo así la caja de los truenos bélicos. Máxime teniendo en cuenta que entre el fin de la presidencia Reagan y el comienzo del fin de la excusa «contra», utilizada por Managua, existía una conexión evidente.

Extender la vigencia del Plan Arias, aproximarla al máximo al recambio en la Casa Blanca en enero de 1989 suponía minimizar el factor paralizante de la «contra», limitar sus posibilidades de financiación y, por tanto, de existencia, descubriendo de paso qué había de cierto en el argumento sandinista de que aquélla impedía la amnistía completa y el fin del estado de emergencia.

La reunión presidencial de San José terminaba el 16 de enero de 1988, después de día y medio de áridas discusiones, con el comunicado siguiente:

«Los Presidentes han recibido las conclusiones del informe de la CIVS, preparado de acuerdo al numeral II de Esquipulas II, con reservas señaladas por algunos de ellos.

Los Presidentes reconocen el esfuerzo y el ingente trabajo de la Comisión a la que agradecen su dedicación y esfuerzo para coadyuvar al cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II.

Los Presidentes encomiendan a la Comisión Ejecutiva para que al recibirse el informe general lo examine haciendo las recomendaciones pertinentes.

Los Presidentes ratifican el valor histórico y la importancia del Acuerdo de Esquipulas II, cuya concepción y espíritu hoy reconocen y reiteran como vitales para el logro de la democratización y la pacificación de la región.

Por no estar satisfecho enteramente el cumplimiento de los compromisos de Esquipulas II, se comprometen a satisfacer obligaciones incondicionales y unilaterales que obligan a los gobiernos a un cumplimiento total e inexcusable. Dentro de éstas se encuentra el diálogo, las conversaciones para la concertación del cese de fuego, la amnistía general y, sobre todo, la democratización, que necesariamente incluye el levantamiento del estado de excepción, la libertad de prensa total, el pluralismo político y el no funcionamiento de tribunales especiales. Los compromisos enunciados que no se han cumplido por los gobiernos, deberán ser cumplidos inmediatamente en forma pública y evidente.

El cumplimiento de los acuerdos del Documento de Esquipulas II comprende compromisos cuya observancia por los gobiernos es objeto de una imprescindible verificación específica, particularmente el cese de la ayuda a los grupos irregulares, el no uso del territorio para apoyar a los mismos y la libertad efectiva de los procesos electorales que deberán ser verificados por la Comisión Nacional de Reconciliación, dándole especial importancia a la elección del Parlamento centroamericano, todos como un elemento indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región.

La Comisión Ejecutiva, integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados centroamericanos, tendrá la función principal de verificación, control y segui-

miento de todos los compromisos contenidos en el Procedimiento de Guatemala y en la presente declaración.

Para ello, gestionará la cooperación de Estados regionales o extrarregionales u organismos de reconocida imparcialidad y capacidad técnica, que han manifestado su deseo de colaborar en el proceso de paz de Centroamérica.

Igualmente, el cumplimiento de Esquipulas II implica el seguimiento de obligaciones que comprenden una estrategia ya establecida, como es la regulación del armamentismo y los acuerdos de seguridad y desarme.

Expresamos nuestro reconocimiento a la comunidad internacional por el apoyo político y financiero que ha comprometido para impulsar proyectos regionales, orientados a alcanzar el desarrollo económico y social de Centroamérica, como objetivo directamente ligado con la tarea de lograr preservar y consolidar la paz, ya que siendo económicas y sociales las causas primigenias de este conflicto, no es posible alcanzar la paz sin desarrollo.

Los Presidentes, conscientes de su responsabilidad histórica frente a sus pueblos, reafirman su voluntad de cumplimiento en la forma expresada, que estiman irrenunciable e inalterable, prometiendo cumplir lo pendiente en forma inmediata sin reticencias ni soslayo, conscientes de que serán sus pueblos y la comunidad internacional quienes juzgarán el cumplimiento de las obligaciones contraídas de buena fe.

Suscribimos la presente declaración, agradeciendo al pueblo de Costa Rica y a su Presidente, el doctor Óscar Arias Sánchez, la hospitalidad brindada que nos permitió el marco adecuado para la celebración de esta reunión.»

En resumen, los Cinco reafirmaban que cumplirían de inmediato con los compromisos de Esquipulas II incondicional y unilateralmente, poniendo fin a la gestión de la CIVS. En su lugar, los cinco Cancilleres deberían reunirse en breve para organizar los nuevos mecanismos de verificación.

La sorpresa de la reunión fue el anuncio de Daniel Ortega de que suspendería el estado de emergencia, iniciaría un diálogo directo con la «contra», sobre el cese el fuego en un primer momento, y liberaría a los presos políticos, incluidos los ex guardias somocistas, decretando una amnistía total. También anunció que a lo largo de 1988 se celebrarían elecciones para el Parlamento centroamericano y enviaría una carta personal al Presidente Reagan para procurar el diálogo bilateral en atención a las afirmaciones de la Administración norteamericana prometiendo negociar con los sandinistas si éstos aceptaban, como era el caso, negociar con la «contra».

Mucho era lo prometido por Ortega, quien además se comprometía a no apoyar a quienes conspiraban contra los gobiernos de la región-alusión al FMLN. Promesas a cumplir en quince días hábiles, fecha a partir de la cual Reagan anunció que solicitaría al Congreso mayor financiación para la «contra», despreciando olímpicamente la voluntad manifiesta de cinco Jefes de Estado teóricamente soberanos y el sentir de sectores mayoritarios de la comunidad internacional y de su propio país.

Mucho quedaba por cumplir a El Salvador y Guatemala, quienes implícitamente se encontraban obligados a reanudar las interrumpidas negociaciones con los movimientos insurgentes.

Y mucho, y muy importante, la obligación de Honduras de tomar las medidas para neutralizar a los «combatientes de la libertad».

Honor a quien honor merece. Difícilmente se hubiera llegado a Esquipulas II sin la larga, callada, paciente labor de Christopher Dodd ni los espectaculares desplantes de Jim Wright, némesis demócrata ambos de la fijación antisandinista del Presidente Reagan y del latente hegemonismo centroamericano de su Administración.

Si Nicaragua cumplía sus compromisos de San José nadie podría entonces culpar al vecino de sus problemas internos. Éstos serían eso, problemas internos. Si El Salvador y Guatemala no podían ofrecer garantías de respeto a la vida y espacio político adecuado a sus movimientos insurgentes, los alzados no se desalzarían, la insurgencia continuaría. Como problema interno de El Salvador y Guatemala. Si Honduras no hacía acopio de auténtico coraje morazánico para resistir presiones y neutralizar las bandas de la «contra», su democracia *in fieri* quedaría descoyuntada y la pacificación regional abortada.

El sí dubitativo no servía en el caso de la Administración Reagan. Sólo quedaba confiar en las dotes de persuasión de políticos como Christopher Dodd y en la sensatez del Congreso y Senado norteamericanos.

La fijación antisandinista de Reagan y su precio hemisférico

Cuando Reagan fue electo Presidente, la plataforma electoral del Partido Republicano consideraba Iberoamérica como un área de interés primordial para los Estados Unidos, prometiendo una política nueva y fuerte en las Américas que enderezara el «precipitado declive» que su influencia había experimentado durante la Administración Carter. Siete años más tarde parece sin embargo imponerse la impresión de que las relaciones hemisféricas de Washington se encuentran en su punto más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y su influencia, en claro signo menguante del Río Grande a la Patagonia.

Síntomas de tal declinar serían: 1. La firma de Esquipulas II el 7 de agosto de 1987 por los cinco Presidentes centroamericanos, ignorando el plan regional de paz Reagan-Wright. 2. La reunión de Acapulco de diciembre de 1987, en la que ocho países iberoamericanos excluían a los Estados Unidos y solicitaban la readmisión de Cuba en la OEA. 3. La derrota a comienzo de 1987 de una intensa campaña de la Administración Reagan para consguir la condena de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las NU. 4. En abril de 1987 fue rechazada por sus socios una propuesta de Washington pretendiendo alterar el procedimiento de concesión de préstamos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el sentido de sopesar cada voto estatal en función de su contribución al capital del Banco, lo

que hubiera otorgado a los Estados Unidos un poder de veto fáctico. 5. En julio de 1987, los delegados iberoamericanos condenaron en la OEA las ingerencias norteamericanas en Panamá para tratar de conseguir la marcha del General Noriega, Jefe de las Fuerzas Armadas del país.

La fijación antisandinista de la Administración Reagan, contrastada con el escaso interés por los 400.000 millones de dólares de la deuda latinoamericana, sería una de las principales causas del crepúsculo de la influencia norteamericana.

Por otra parte, muchas de las principales iniciativas hemisféricas de la Administración Reagan han fallado o han quedado estancadas.

Por ejemplo, un documento del Consejo Nacional de Seguridad de 1982 consideraba como objetivo a conseguir a corto plazo la eliminación de la influencia cubano-soviética en el hemisferio. Cinco años más tarde, la mayoría de los países iberoamericanos han mejorado o reanudado sus relaciones con Cuba, varios han invitado a Mikhail Gorbachov, y Panamá ha concedido a la Aeroflot derechos de aterrizaje, estando considerando otorgar a la Marina Mercante soviética facilidades de reparación en unos astilleros situados en la antigua zona del Canal.

De igual modo, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe no produjo el esperado relance de los intercambios comerciales, y de los 350 millones de dólares de ayuda, 128 fueron destinados, en un claro programa contra-insurgencia, a El Salvador, un país sin costa en el Caribe y, por tanto, difícilmente caribeño.

En Centroamérica, el antisandinismo virulento ha provocado una progresiva militarización de los débiles e inciertos procesos de democratización, potenciando el peso específico de los estamentos militares a costa de un poder civil que, en demasiadas ocasiones, parece más bien un agente de relaciones públicas del poder militar. Y, sin embargo, a pesar de los 500 millones de dólares recibidos por la «contra», ésta parece tan lejos como siempre de conseguir resultados de importancia, al tiempo que aumenta la oposición del Congreso a continuar financiando una inversión claramente arriesgada.

Los factores que habrían contribuido al declive de la influencia hemisférica estadounidense serían, según el conocido periodista Alfonso Chardy (*The Miami Herald*, 27.12.87) los siguientes:

- La toma de partido a favor de Gran Bretaña en 1982 durante la guerra de las Malvinas.

- La invasión de Granada en 1983 cortocircuitando a la OEA y recurriendo en su lugar, en búsqueda de respaldo moral, a una organización caribeña prácticamente desconocida.

- Las presiones sobre países como Méjico y Panamá para obligarles a alinearse con la política norteamericana en Nicaragua.

- Evaluaciones políticas erróneas como apostar por la no firma de Esquipulas II por Nicaragua o por las intenciones democratizadoras en Haití del Teniente General Namphy, posteriormente cabeza visible de los ataques criminales que anegaron en un baño de sangre la fiesta de las urnas.

- La congelación de la ayuda norteamericana. Durante los dos últimos años la ayuda

norteamericana para toda Latinoamérica ha ascendido a 1.200 millones de dólares, de los cuales Centroamérica ha recibido 1.000.

— Mayor competencia económica. Japón y la CEE han alcanzado cuotas cada vez mayores de penetración del mercado iberoamericano. Mientras, las inversiones norteamericanas descendían en Méjico de un 52% en 1981 a un 35% en 1986, y de un 42% a un 34% en el mismo período en Argentina.

— Falta de apoyo de una opinión pública interna que progresivamente muestra incompreensión u oposición a la política norteamericana en Iberoamérica.

Una política cargada de ideología, granular, que ha supuesto el arrinconamiento de los especialistas de carrera y la promoción de la lealtad dogmática. Razón por la cual, quienes rechazan el declinar de la influencia norteamericana en el hemisferio, arguyen que bajo la presidencia de Reagan ningún país americano ha caído bajo las garras del comunismo. Este argumento supremo—de indudable simpleza— olvida que el anticomunismo declarado, principio inspirador de la línea antisandinista, ha descartado métodos menos cruentos y más aceptables de salvaguardar los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el región. Aceptables por todo el mundo y, especialmente, por sus vecinos hemisféricos.

Todo ello conduce a un ocaso paulatino de la Autoritas y a su creciente divorcio del Imperium.

La Paz se negocia en Managua

El 23 de febrero de 1988, la Cámara de Representantes votó por 219 v. 211 contra la idea de renovar la ayuda a la «contra». La línea de la Administración Reagan quedaba destrozada, la «contra» desautorizada. Desde 1982, el Congreso había votado 15 veces el tema de la renovación de la ayuda, y el cansancio era evidente. El escándalo Irán-«contra» había añadido gotas de amargura a un cock-tail ya de por sí agri dulce. De nada había servido que Reagan rebajara su petición inicial de 270 millones a 36,2 con sólo 3,6 millones de ayuda militar. Y de poco le valía la simbólica victoria obtenida en el Senado, 51 votos contra 48.

Una nueva sesión negociadora entre la dirigencia sandinista y la «contra», con la mediación del Cardenal Obando, terminaba en la ciudad de Guatemala sin ningún resultado el 19 de febrero.

El 29 de febrero se reunía en Hamburgo San José IV, con asistencia de los europeos comunitarios, los centroamericanos y los contadorinos. Dos documentos fueron firmados. Político el primero, en el cual la CEE daba todo su respaldo moral al proceso pacificador de Esquipulas II, mostrando su disponibilidad a participar en su verificación, control y seguimiento. Económico el segundo, comprometiéndose fondos para un plan de acción inmediata (combate de la hambruna ocasionada por la sequía, repatriación de refugiados y creación del Parlamento centroamericano— y para un Plan de reactivación económica plurianual, después de concluida la pacificación regional, para el cual la Comunidad dejó entender que estaría dispuesta a contribuir con un tercio de la financiación total.

En un medio hipnotizado por el dólar, acostumbrado a mirar solamente hacia los Estados Unidos, la cooperación europea, desprovista de toda hipoteca de dependencia, adquiría una nueva dimensión política y económica y señalaba un claro apoyo a los esfuerzos de pacificación regional.

El proceso de negociación del alto el fuego entre Managua y la dirigencia «contra» conoía, mientras tanto, un desarrollo interesante al anunciar Daniel Ortega que su Gobierno estaba dispuesto a conversaciones directas, sin la mediación del Cardenal Obando, y en territorio nica, proponiendo la localidad de Sapoá, cerca de la frontera con Costa Rica.

La percepción del cumplimiento de los compromisos de Esquipulas comenzaba a variar. Arias lanzaba una acusación indiscriminada de incumplimiento. Y el New York Times indicaba en su editorial del 11 de marzo de 1988: «Nicaragua ha ido más lejos que Guatemala, Honduras y El Salvador en el cumplimiento del Plan Arias de pacificación. Aunque tardíamente y a regañadientes, los sandinistas están negociando directamente con su enemigo jurado, la "contra". En Managua hay una mayor diversidad de opinión escrita y hablada que en los otros tres países democráticos. Por supuesto que a los sandinistas no les gusta mucho la democracia y han hostigado y encarcelado a sus oponentes políticos, pero no se asesina impunemente a las figuras de la oposición, como ocurre vergonzosamente en El Salvador, Guatemala y Honduras.»

El Congreso norteamericano rechazaba el 3 de marzo de 1988 una nueva petición de ayuda para la «contra». De carácter humanitario exclusivamente y propiciada por los demócratas, tal ayuda, una vez aprobada, hubiera cerrado durante meses a la Administración y a los republicanos la posibilidad de montar un paquete con componentes militares. Por ello, su derrota en el Congreso, con votos demócratas y republicanos, no supuso precisamente una victoria para el sandinismo.

El 6 de marzo, el EPS inicia una operación en gran escala contra las bases de la «contra» a ambos lados del Río Coco, frontera entre Honduras y Nicaragua, en su confluencia con el Río Bocay, provincia de Jinotega. Desde que el 29 de febrero la CIA tuvo que cesar, al quedarse sin mandato, sus vuelos de aprovisionamiento en el interior de Nicaragua, grupos cada vez más numerosos de irregulares, faltos de munición y alimentos, se veían precisados a regresar a su retaguardia hondureña en busca de pertrechos y alimentos. Un gran almacén, un importante puesto de mando, un hospital de campaña y dos pistas de aterrizaje a ambos lados del Coco completaban el cuadro de los objetivos militares del EPS. Se trataba además de asestar un golpe psicológico a la «contra» cara a las negociaciones directas con la misma el 21 de marzo en Sapoá.

Cerca de 5.000 soldados transportados en helicópteros y aviones Antonov limpiaron, en menos de una semana, a los «contras» de una zona donde éstos se habían establecido hacía casi un año.

La Administración Reagan reaccionó a los pocos días. El EPS no se había detenido en el Río Coco y amenazaba la infraestructura logística contra dentro de territorio hondureño. El Embajador Everett Briggs tarda veinticuatro horas en convencer a un Azcona reticente a solicitar una ayuda de emergencia que Washington estaba decidido a enviar a toda costa.

Un comunicado oficial de la Cancillería hondureña oficializaba la petición en la noche del día 16 de marzo.

Un doble juego de acuerdos tácitos funcionaba una vez más. El EPS, como de costumbre, había avisado a los militares de Tegucigalpa de sus intenciones de limpieza de «contras» en el área, dando seguridades sobre los objetivos limitados y antiinsurgencia de su incursión. La luz verde llegó con el habitual lenguaje de: «Denles verga a esos cabrones.» No es precisamente amor lo que el militar hondureño siente por las bandas de la «contra».

Washington estaba seguro de obtener una petición de ayuda hondureña. Pero Azcona no especificó el tipo de ayuda que, según el acuerdo tácito, debía solicitar ante la incursión sandinista. Fue Washington quien decidió el envío de 3.200 soldados en lo que se presentaba como un ejercicio de despliegue rápido pero que, en realidad, perseguía lanzar un claro aviso al EPS para paralizar su ofensiva y salvar la capacidad y unidad de la «contra», mostrar al Congreso que la suspensión de la ayuda era interpretada por Managua como una invitación a golpear a la «contra» y dramatizar la situación con la amenaza latente de una intervención.

Pero algo fallaba en todo el esquema: credibilidad. Mucha gente recordaba la incursión de Semana Santa de 1986 y cómo fue la misma manipulada por la Administración para arrancar más ayuda del Congreso (véase pág. 112). Las similitudes eran grandes. Las sospechas, fuertes.

Por su parte, y coincidiendo con el envío de tropas a Honduras, un gran jurado acusaba a O. North, J. Poindexter, J. Secord y A. Hakim, los hombres del Presidente en el escándalo Irán-«contras». Extraña coincidencia.

Honduras, una vez más, se enteraba a través de Washington de que había sido «invadida» por los sandinistas y contemplaba atónita la llegada de miles de efectivos que acampaban a una prudente y razonable distancia de la zona conflictiva. ¿Para qué habían venido entonces? ¿Para qué sería su Ejército Nacional si ante una incursión extranjera había que solicitar ayuda a los gringos? ¿No era todo montaje de un escenario conocido de antemano?

Sí, por supuesto que la aviación hondureña intervino en dos ocasiones lanzando bombas sobre la zona conflictiva, a ambos lados de la frontera. Pero, como reconoció el propio Azcona con maravillosa ingenuidad: «Avisamos con suficiente tiempo» (de la entrada en acción de los cuatro Super Mystère y los dos F-5). Para que los soldados del EPS pudieran retirarse y no sufrieran bajas. Para que pudiera continuar el juego. Pues, como añadió Azcona: «Nosotros no vamos a darle mayor relieve que lo que tiene el problema.»

El precio pagado por Honduras era elevado. Nicaragua anunciaba su decisión de reavivar la demanda ante el TIJ, en vía muerta desde la firma de Esquipulas II, por la presencia «contra» en el país. La petición de ayuda de Azcona era cuestionada como anticonstitucional al no haber consultado ni avisado al Congreso. Las Fuerzas Armadas hondureñas aparecían nuevamente como un Ejército del que protegerse en tiempos de paz y al que proteger en tiempos de guerra. Incredulidad, cansancio y sentimiento de

dignidad nacional ofendida eran compartidos por amplias capas de la ciudadanía hondureña.

Además, y como si nada hubiera pasado, la dirigencia «contra» se sentaba en Sapoá el 21 de marzo con Humberto Ortega, estableciéndose una tregua mientras durasen las conversaciones, e incluso el Cardenal Obando, reducido ahora su papel al de testigo, se declaraba optimista.

Varios países de Contadora, Apoyo y europeos (España), habían criticado el arribo de tropas norteamericanas, y Honduras se negaba a aceptar en su territorio la visita de una inspección fronteriza de la ONU, solicitada por Nicaragua. Hasta los más crédulos dudaban de la «invasión», la «drôle de guerre» y el «matar las moscas a cañonazos».

Y, en cuanto a Reagan, el uso de la prerrogativa presidencial, al enviar tropas de combate a Honduras, subrayaba que, tras siete años de pelea con el Congreso, el Senado y la opinión pública, el pueblo norteamericano se negaba a ver a los Sandinistas como una amenaza y a la «contra» como una solución. En una encuesta de opinión del New York Times/CBS en enero de 1988 sólo un 24% apoyaba mayor ayuda militar para la «contra».

Incluso en la misma Honduras, «eppur si muove», se levantaba una oleada de críticas contra la manipulación de la soberanía nacional y la falta de consulta al Congreso para solicitar ayuda a los Estados Unidos. Mociones del Partido Liberal y de la Democracia Cristiana solicitaban explicaciones, crecía la opinión de que la llegada de tropas norteamericanas era anticonstitucional, se pedía insistentemente su salida del país y el prestigio de Azcona quedaba seriamente afectado. A la impresión de una invasión sandinista sucedía la sensación de una invasión gringa.

Y mientras tanto caía el telón, llegaba la hora de la verdad en El Salvador. En las elecciones del 20 de marzo, Arena obtenía 30 de las 60 diputaciones al Congreso y 178 de los 262 concejos municipales, entre ellos la Alcaldía de San Salvador. Desaparecía la respetabilidad democrática de Duarte y su mayoría demócrata-cristiana, e llegaban a la antesala del poder un hombre —d'Aubuisson— y una formación política —Arena— cuya trayectoria auguraban mayor violencia, destrucción y guerra. La derecha reaccionaria frente a la izquierda revolucionaria del Farabundo Martí. La política norteamericana, articulada en torno al proyecto democratizador y reformista de Duarte, caía hecha pedazos. El Farabundo Martí no había entrado victorioso en San Salvador, era cierto, pero la paz, después de tantos años de guerra, de tanta sangre derramada, tantos millones de dólares gastados, parecía un espejismo inalcanzable.

Tres días de conversaciones en Sapoá producían el 23 de marzo una tregua durante sesenta días a comenzar el 1 de abril. La «contra», conservando sus armas, aceptaba reagruparse en determinadas zonas recibiendo sólo ayuda humanitaria a través de agencias neutrales. Managua se comprometía a una completa libertad de prensa, a negociar un espacio político para los alzados y a conceder una gradual amnistía política. Una Comisión de Verificación, con el Cardenal Obando y el Secretario de la OEA Baena Soares, quedaba encargada de vigilar el cumplimiento de los términos de la tregua.

Alfredo César, antes del inicio de las conversaciones, había dicho que el futuro de la «contra» no se jugaría al albur de si el Congreso concedía o no más ayuda, sino, más bien, sobre la base de Nicaragua, «nuestra patria, nuestro futuro». No era así extraño que la dirigencia «contra» aceptara la médula del plan sandinista: vincular una gradual amnistía de los presos políticos al paulatino desarme de las bandas rebeldes.

Se llegaba así al colmo de las ironías. Mientras Reagan luchaba en Capitol Hill por conseguir ayuda para la «contra», incluida la militar, la dirigencia «contra» renunciaba en Sapoa a la militar, aceptaba que su distribución fuera obra de agencias neutrales y firmaba una tregua previa al desarme e inserción en la vida política. Es decir, que mientras Regan mantenía el discurso de la guerra, sus «freedom fighters» avanzaban con éxito en el diálogo de la paz. La política «contramericana» del Presidente corría el riesgo de quedarse sin peones. La centroamericana, sin objetivos.

Casi simultáneamente, el 1 de abril, demócratas y Republicanos se ponían de acuerdo en el Congreso norteamericano y por 345 contra 70 aprobaban un paquete de ayuda humanitaria de 47,9 millones de dólares, de los cuales 17,7 para los niños nicaragüenses mutilados, 10 para la OEA en sus labores de supervisión y 2,5 para la AID, encargada de distribuir los 17,7 de alimentos, medicinas y ropas para la «contra».

Por primera vez desde el comienzo de la guerra sucia, en marzo de 1981, la CIA perdía el control de la ayuda, quedando su papel relegado al de simple consejero de la AID. Managua sería advertida con antelación del plan de viaje y ruta de cada vuelo de aprovisionamiento sobre las zonas de alto el fuego y que, al quedar bajo control de organizaciones neutrales, ya no podrían proceder de las islas del Cisne hondureñas. Es decir, que por irónico que pudiera parecer, los sandinistas tendrían un papel en el suministro a sus enemigos los «contras». Con el fin de afianzar el pleno control de la AID, se excluía al Departamento de Estado, es decir a Elliot Abrams, de todo papel substancial en la entrega de la ayuda.

El pobre y ancilar papel de Honduras, soporte territorial de la «contra», quedaba reducido a una nada política. Managua, tras el envío de los 3.200 soldados norteamericanos, revivía la demanda en La Haya contra Honduras por permitir bases «contra» en su territorio y, después del acuerdo de Sapoa, la retiraba nuevamente, apostando claramente por la desaparición negociada de las bandas irregulares y, por tanto, de sus bases hondureñas. Sin contar, por supuesto, con la colaboración catracha.

El 5 de abril, el hondureño Ramón Mata Ballesteros, famoso por su rocambolesca fuga de la cárcel de máxima seguridad de Bogotá dos años antes, supuesto miembro del clan de Medellín, quien tras seis meses de prisión en Tegucigalpa, donde estaba acusado del crimen de los esposos Ferrari, había sido exculpado y liberado, fue apresado por la policía militar hondureña y entregado a los agentes de la DEA, quienes inmediatamente lo hicieron llegar a la prisión de Marion, Illinois, para responder de varios cargos, entre ellos el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, ocurrido en Méjico en 1985.

En poco más de un año de residencia hondureña, Mata y sus inversiones daban de comer a cerca de 25.000 familias, su casa era lugar de peregrinaje de los menesterosos y sus fiestas, centro de reunión de los poderosos, militares incluidos. En un país hambriento

de liderazgo y doliente de pura hambre, Ramón Mata ascendía para muchos a la categoría de Robin Hood.

Su entrega a una potencia extranjera violaba claramente el artículo 102 de la Constitución de 1982. Pero la suerte de Mata estaba sellada desde que, en octubre de 1987, la DEA obtuvo las pruebas de que varios altos oficiales hondureños estaban implicados en el narcotráfico y que el clan de Medellín estaba utilizando Honduras como trampolín hacia el mercado norteamericano. Desde entonces, en especial desde que James Lemoyne publicó el «scoop» en el New York Times, la DEA supo que obtendría su codiciada presa pagando a cambio, eso sí, el precio de la impunidad para los militares hondureños implicados.

Así fue entregado Mata. Sin embargo, una lucha sorda por el poder venía incubándose dentro de las Fuerzas Armadas hondureñas. Su jefe, General Regalado, debía haber cedido su puesto a un oficial más joven hacía ya meses. Pero se atrincheraba en su puesto cerrando el paso al ascenso de promociones más jóvenes.

El 6 de abril, una manifestación ante el Congreso Nacional quemaba públicamente copias de la Constitución después de que, a lo largo del día, diputados, jueces de la Corte Suprema, hombres de la calle, hasta el propio Canciller, hubieran manifestado que la entrega de Mata había sido irregular.

La oficialidad joven vio la ocasión de arremeter contra el pacto de impunidad cerrado por los narcomilitares con la DEA y, de paso, descabalar a éstos de los puestos de mando. La cúpula, por su parte, deseaba dar un aviso a Washington para que se respetara el pacto de entrega. Una conversación en la mañana del día 7 con el derechista Rector de la Universidad, Oswaldo Ramos, aseguraba una arenga incendiaria de éste a los estudiantes y la puesta en movimiento de cerca de 3.000 personas. Se trataba de recorrer el centro de la ciudad y de desviar la manifestación, más tarde, hacia la Embajada norteamericana, con la intención de que el Coronel Riera Lunatti, jefe de la FUSEP, la ahogara en sangre. Pero Riera es advertido a tiempo de la trampa y deja hacer. Más de dos horas y media pasaron desde que la manifestación llegó al anejo de la Embajada (sede de la AID, Consulado y USIS) hasta que los primeros efectivos militares llegaron a protegerla. Para entonces, más de 30 vehículos estacionados en el patio habían sido quemados —por manos expertas—, el edificio seriamente dañado —unos seis millones de dólares de pérdidas— y cinco manifestantes muertos por disparos salidos de la misma manifestación, infiltrada por personas interesadas en que hubiera sangre y fuego.

El Embajador Everett Briggs se esforzó durante esas dos horas y media en encontrar por teléfono a quien, civil o militar, fuera capaz de hacer cesar el asedio y destrozo de su Embajada, amenazando incluso con llamar las tropas norteamericanas de Palmerola. Nadie estaba en su puesto, nadie se responsabilizaba, hasta que, consumado el destrozo y las cinco muertes, el General Regalado ordenó a Riera que intervinieran las fuerzas de la FUSEP. Entonces, en dos minutos, la manifestación se disolvió sin oponer ninguna resistencia.

¿Quiere esto decir que la manifestación no fue auténtica? Que duda cabe que hubo infiltración, manipulación. Pero negar la existencia de un sentimiento generalizado de

indignación nacional por lo que la entrega de Mata suponía de violación a la Constitución y de sumisión a los «gringos» sería negar la evidencia. Más que un estallido, sería más adecuado calificarla de despertar nacionalista. Ser blanquito, guero y de ojos claros, pasó de la noche a la mañana a constituir motivo de preocupación y hasta de peligro. «Gringos, devuélvannos a Mata», «Azcona a España (para no volver), Mata a Honduras». Azcona tuvo que suspender su proyectado viaje a Italia y España.

Tanto va el cántaro a la fuente, tanto se tiró de la cuerda, que la doméstica, la sufrida, la paciente Honduras, al fin se rebeló, convencida de ser manipulada, utilizada, basureada.

La DEA consiguió a Mata. Pero el Departamento de Estado se encontraba con un hecho imprevisto: hasta la pobre Honduras se permitía el lujo de disponer de reservas de nacionalismo antigriego. Quién lo hubiera pensado. Y lo más grave, ¿cómo recomponer la unidad del Ejército hondureño? ¿Respetando el pacto de impunidad para los narcomilitares, cómplices de la quema de la Embajada, o animando un golpe de barracas que podría descontrolarse y terminar en golpe de Estado?

Y, ¿cómo conseguir un mínimo de respetabilidad y credibilidad para un Presidente Azcona, a quien abandonaban todas las corrientes del Partido Liberal, su asesor económico Jaime Rosenthal, y que había demostrado una clara alergia a la asunción de responsabilidades?

El panorama se presentaba confuso y el fantasma del golpe proyectaba su sombra sobre el más fiel aliado regional de la Administración Reagan.

Mientras tanto, y tras una reunión negociadora en Managua entre Gobierno y dirigencia «contra», se llegaba a un acuerdo de delimitación de siete zonas de internamiento de los alzados, pretendiendo éstos autonomía para recibir ayuda humanitaria y alegando el Gobierno que la entrega, de acuerdo con Sapoá, sólo podría correr a cargo de organizaciones neutrales. Y la Administración Reagan, secundada una vez más por Azcona, comenzaba el 18 de abril a entregar, vía AID, ayuda humanitaria a la «contra» en sus campamentos hondureños, a los que cerca de 2.000 efectivos se habían replegado en las últimas semanas en procura de alimentos. Ello, indicaba Baena Soares, iba en contra de Esquipulas II y de Sapoá. Ortega protestaba por este incumplimiento ante la ONU y la OEA.

Otra indicación de la obediencia hondureña fue la decisión de Tegucigalpa el día 24 de reavivar la demanda nica contra Honduras en el TIJ, so pretexto de que «no podía vivir en la incertidumbre sobre el retiro definitivo o no de la demanda ante tal foro». Espectáculo insólito el de un acusado que pone en marcha el mecanismo de su propia acusación.

La «contra» se escindía. Bermúdez y Aristides Sánchez se rebelaban contra el Directorio Civil negándose a aceptar las conversaciones de paz de Managua, varios «comandantes», un tercio de los 46 más o menos, se separaban de Bermúdez y aceptaban la pacificación. Amenazas de muerte, huidas, capturas e incomunicaciones, comenzaban a ser formas habituales de relación del Comandante en jefe de la FDN con sus subalternos. No precisamente el mejor de los ambientes para mantener una moral de combate en una fuerza irregular.

La cólera de Washington por la quema de su Embajada en Tegucigalpa se manifestaba bloqueando los desembolsos de la AID, cortando las regulares y periódicas entrevistas de Everett Briggs con Azcona y el General Regalado y desaconsejando a sus ciudadanos viajar a Honduras. La situación de carencia de divisas era tan dramática y el marasmo económico tan inevitable que Tegucigalpa advertía veladamente a Taiwan: o 150 millones de dólares o apertura de relaciones diplomáticas con Pekín.

La conclusión importante a sacar de la situación hondureña era clara. Después de siete años de «democratización con militarización, doctrina de la seguridad nacional y conflicto de baja intensidad» en un país en vías de democratización se había llegado a una situación tan lógica como previsible: una Presidencia civil desprestigiada, aislada, percibida como entreguista y vendepatrias y unas Fuerzas Armadas todopoderosas, soberbias y casi «norieguistas», rebeldes, por autosuficientes, a los dictados de su protector norteamericano. ¿Cómo reafirmar el incierto proceso democrático sobre estas bases?

El 28 de abril se inició en Managua una nueva ronda de negociaciones entre Humberto Ortega y el Directorio «contra». A pesar de que el Gobierno prometió una nueva ley electoral y la creación de un tribunal electoral, llegándose a acuerdos parciales en varios de los puntos de la agenda, no se firmó ningún alto el fuego. Los alzados pretendían continuar recibiendo armas en los enclaves, que las autoridades sandinistas abandonaran los mismos, se negaban a aceptar a la Cruz Roja como vehículo de entrega de la ayuda, a liberar a los civiles secuestrados y a formular una demanda conjunta a Washington para el cese del embargo comercial aplicado a Nicaragua desde mayo de 1985. Se manifestó una divergencia entre una línea dura sostenida por Bermúdez, presumiblemente alentado por Elliot Abrams, y la línea del Directorio Civil, más propicia a la firma del alto el fuego.

Mientras tanto, en El Salvador, la Democracia Cristiana celebraba una Convención del partido el 29 de abril para elegir candidato a las presidenciales de 1989. Boicoteada por el grupo de Chávez Mena y del propio Presidente Duarte, quien deseaba una candidatura de compromiso y unidad, el favorecido fue el empresario Rey Prendes, de autoridad moral cuestionada por amplios sectores de sus correligionarios. El partido de la reforma, la pacificación y la democratización, parecía encaminarse hacia el «harakiri». Su rival, Arena, hacía la victoria. Y el FMLN, hacía una mayor justificación de su lucha y más amplia potenciación de su base de reclutamiento.

La escisión dentro de la cúpula «contra» conoía, en la primera semana de mayo, episodios de elevado dramatismo en Tegucigalpa. Varios «comandantes» opuestos a Bermúdez eran apresados por el Ejército hondureño y expulsados hacia Miami, se producían choques armados entre facciones adversas en el Departamento hondureño de El Paraíso, cundía la escisión. Y, en homenaje al «nuevo lenguaje» de Orwell, el alto mando hondureño publicaba un comunicado indicando que su intervención, a todas luces parcial hacia Bermúdez, tenía por objeto preservar la neutralidad hondureña en la disputa e impedir choques violentos en su capital.

La «contra», que siempre sufrió de falta de liderazgo, faccionalismo y escasa coherencia política, no pudo resistir la presión de las negociaciones de Managua ni la falta de suministros —donde no hay harina todo es mohina—. La autoridad de Bermúdez,

discutida desde tiempo atrás, era en mayo frontalmente rechazada por el «comandante» Diógenes Hernández, quien contaba con el apoyo de varios colegas y una tropa leal de 2.000 combatientes instalados desde hacía dos semanas en San José de Yamales, Honduras, a 35 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Hernández era apoyado por Adolfo Calero, deseoso de reafirmar su menguante autoridad en el Directorio Civil de la Resistencia Nacional. Y Calero resistía las presiones norteamericanas hacia la conciliación, pues conocía los detalles de cómo la Casa Blanca, la CIA y otras agencias habían dado la vuelta a las restricciones del Congreso para suministrar a la «contra» cuando estaba prohibido hacerlo. Tal información, filtrada a la prensa, sería demoledora. Es decir, «contras» contra «contras», rebelión dentro de la rebeldía, una «recontra». Todo ello en plena negociación con Managua. Una verdadera catástrofe para la línea contraamericana de Elliot Abrams.

El 3 de mayo se reúnen en San José los Ministros de Economía de Centroamérica, para coordinar un plan de reactivación económica regional a presentar a Naciones Unidas. Sus líneas básicas: impulsar nuevamente el Mercado Común Centroamericano, reforzar financieramente al BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), acentuar los programas de inversión social (refugiados, vivienda y analfabetismo) y creación de un fondo regional para ayudar a digerir el servicio de la deuda externa del istmo. La AG de las NU aprobaría por consenso el 12 de mayo un programa de desarrollo económico destinado a promover la paz y la democracia en la región con el objetivo de movilizar 4.300 millones de dólares, de los cuales 2.600 para corregir los desequilibrios del servicio de los 18.000 millones de la deuda externa centroamericana, que absorbía la mitad de las exportaciones de la región.

No se indicaba cómo se recaudarían los fondos (aunque la CEE, Japón y Canadá, habían mostrado su disponibilidad) ni el plazo de vigencia del programa. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña expresaron reservas por la exhortación a una ayuda masiva para aliviar la deuda regional, y Washington, que se abstuvo en la votación, no se comprometió a contribuir al plan aduciendo que su ayuda bilateral a cada país de la zona era ya considerable. No indicó, sin embargo, que el grueso de su ayuda se había destinado a financiar la guerra. Dada la actitud de la Administración Reagan hacia Esquipulas II no era extraña su reacción ante un programa que, dirigido por el ex Canciller colombiano Ramírez Ocampo, pretendía diversificar las fuentes de ayuda y reforzar las posibilidades de solución regional para Centroamérica.

El 11 de mayo, dos batallones guatemaltecos se levantaron contra el Gobierno e iniciaron una marcha hacia la Capital. Ante la falta de apoyo de sus colegas, el Ministro de Defensa, General Gramajo, no tuvo problemas en convencer a los amotinados en deponer su actitud. Ésta era producto de un temor y un desencanto. Temor por parte de empresarios y políticos de extrema derecha, atemorizados por el aumento impositivo y los esfuerzos por iniciar una modesta redistribución de tierras. Ello era grave en un país con altísimas cuotas de concentración de la propiedad, bajísimos tipos impositivos y reducidísimos niveles salariales. Descontento doble por parte de la oficialidad: ante la posibilidad de un Gobierno civil que, mediante medidas populares, pudiera menoscabar el tradicional rol predominante del Ejército, y ante la reducida ayuda militar que los Estados Unidos, contra lo esperado en los cuarteles, había proporcionado al Gobierno de Vinicio Cerezo. Bien es verdad que la línea de «neutralidad activa» seguida por aquél en el conflicto centroamericano era considerada en Washington escasamente recompensable.

La conjunción del temor de unos y el descontento de otros explicaba el origen del intento de golpe. Pero lo grave era que, persistiendo las causas, podrían producirse los mismos efectos en el futuro. El primer Gobierno civil de Guatemala en treinta años se veía, como en el pasado, emplazado por quienes se empeñaban en aplazar la Historia.

El 13 de mayo, Diógenes Hernández, el «comandante» Fernando, era apresado por el Ejército hondureño en Tegucigalpa, donde había acudido para dialogar con Pedro Joaquín Chamorro y Azucena Ferrey, miembros del Directorio Civil contra, y embarcado en un avión rumbo a Miami. Las expulsiones de Honduras de los disidentes a Bermúdez y la distribución selectiva de los alimentos, el hambre, parecían ser los mecanismos «disuasorios» de la rebeldía. Sin embargo, el Frente Sur se solidarizaba con el «comandante» Fernando, y Bermúdez no se atrevía a acudir a Yamales, donde se encontraban las tropas disidentes. El Ejército hondureño se convertía en guardaespaldas de Bermúdez, aislaba 50 kilómetros cuadrados en El Paraíso, donde el flujo de «contras» procedentes de Nicaragua no cesaba de aumentar. La cúpula militar hondureña —que había entregado al nacional Ramón Mata y protegía al extranjero Bermúdez— pensaba sin duda que, mediante tal colaboración, apaciguaría la cólera de Washington y le convencería de que no era necesario introducir cambios en su composición. No se explicaría de otro modo el hecho de que, en momentos en que la AID mantenía congelados sus desembolsos, el «Embajador» cesaba sus visitas a Azcona y al General Regalado, la sumisión a los deseos de Elliot Abrams en el plano regional se mantenía a niveles difícilmente superables. Como si nada hubiera ocurrido el 7 de abril. Como si las relaciones entre ambos países no tuvieran por qué verse afectadas por bagatelas como la quema del anejo de «la Embajada».

El 16 de mayo, José Sorzano, jefe del departamento latinoamericano del Consejo Nacional de Seguridad, frustrado por lo que consideraba un interés decreciente de la Administración hacia los «contras» e irritado por sus continuos choques con Negro Ponte, Subdirector del Consejo, presentaba su dimisión. Abrams quedaba cada vez más aislado como representante de la defensa a ultranza de la «contra» frente a quienes comenzaban a considerar la Resistencia Nacional como una empresa a liquidar o, al menos, en período de amortización de pérdidas. La línea «pragmática» del Consejo, a la que curiosamente se había adherido el conocido «halcón» Negro Ponte —o tempore o mores— no descartaba la idea de reducir los efectivos «contra» a 2.000 hombres estacionados permanentemente en la zona hondureña cercana al Río Bocay como una espina clavada en el costado de Nicaragua. Todo ello en el supuesto de consolidación y permanencia del sandinismo y como manera de que Reagan pudiera abandonar la Presidencia sin que nadie le acusara de que había abandonado a sus «freedom fighters».

El Directorio Civil de la «contra» llegaba el 15 de mayo al final de su mandato profundamente dividido: Calero y Chamorro, opuestos a Bermúdez; Sánchez y A. Ferrey, a su favor, con Alfredo César en el fiel de la balanza. Condiciones favorables para una completa autonomía de Bermúdez, responsable ahora únicamente frente a sus patronos de la CIA. Mientras tanto, los miskitos refugiados en Honduras salvaban todos los obstáculos y amenazas e iniciaban un regreso masivo hacia la reintegración en la Moskitia nicaragüense.

La situación no era demasiado halagüeña en El Salvador. La división interna de la DC paralizaba al Gobierno de Duarte, el poder real se decantaba más claramente que nunca a

favor de los militares, aumentaban los asesinatos de los escuadrones de la muerte y los actos de sabotaje del FMLN. Y el candidato de Arena a las presidenciales de 1989, Alfredo Cristiani, prometía mayor independencia de los Estados Unidos y un sistema de Gobierno inspirado en el régimen de Pinochet.

Para la segunda quincena de mayo parecía claro que el Plan Arias había tocado fondo.

Ni en Guatemala ni en El Salvador se había avanzado apenas hacia la pacificación. Una amnistía de la que sólo pudieron favorecerse un limitado número en comparación con el de desaparecidos y/o aparecidos en la barranca, unas conversaciones sin resultado alguno con la insurgencia, parecían constituir el historial de cumplimiento en ambos casos.

El perfil del cumplimiento hondureño era tal que, más bien, pudiera hablarse del grado de incumplimiento catracho. Nunca dejó la «contra» de utilizar sus centros logísticos, bases, almacenes, hospitales y puestos de mando instalados en territorio hondureño. Simplemente, hubo un cambio de táctica. A la negativa oficial de presencia «contra» en el país en los tiempos del locuaz y pintoresco Canciller Paz Barnica sucedió la postura de que un Ejército poco numeroso no podía cubrir una frontera tan amplia como la línea divisoria con Nicaragua. Ésta fue la tónica empleada por el difuminado y esquivo López Contreras.

Sólo en Nicaragua se habían hecho serios esfuerzos por llegar a la pacificación interna. Y, tras más de dos meses de negociaciones con la «contra», ésta había abandonado casi en masa el territorio nica acudiendo a Honduras atraída por la entrega inmediata de abastecimientos. Una entrega contraria a la letra y el espíritu de Sapoa, ya que no suponía ni el desarme de quien la recibía ni su internamiento. La Iglesia hondureña se había prestado a supervisar su reparto sin medios ni garantías de inspección real y sin que cuatro de los seis Obispos se enteraran de la decisión. Mgr. Hernández, auxiliar del anciano Obispo de Tegucigalpa, Mgr. Santos, había convencido a éste después de haber sido a su vez convencido sin dificultad por su hermano de Orden Salesiano Mgr. Obando.

Las negociaciones entre el Gobierno de Managua y la «contra» quedaban seriamente afectadas por el retorno a Honduras de unos 5.000 combatientes. Al quedar en Nicaragua nada más que unos 2.000, sólo a éstos sería aplicable cualquier eventual acuerdo de alto el fuego. La negociación había sido vaciada de contenido humano. Y los «comandantes» partidarios de la misma eran apresados y expulsados hacia Miami por el Ejército hondureño.

La dirigencia sandinista estaba indignada. Había soportado con relativa deportividad la continua sumisión hondureña a los dictados de Washington y su consecuente entorpecimiento a Contadora y Esquipulas. Pero, sacar a la «contra» de Nicaragua con el reclamo del abastecimiento inmediato y decidir la balanza a favor de Bermúdez en su disputa interna, eran las gotas de agua que rebasaban el vaso de la paciencia. La conclusión era clara. Nada podía esperarse ya de Honduras.

Después de que 5.000 «contras» hubieran ocupado una zona de 150 kilómetros cuadrados (Las Trojes, Capire, Yamales), López Contreras contestaba a la nota de protesta de su colega nica, D'Escoto, asegurando que: «El Gobierno de Honduras no está

permitiendo a los "contras" el uso de su territorio como base de agresión contra Nicaragua y, ciertamente, no con el apoyo directo o indirecto de las Fuerzas Armadas de Honduras.» Señalemos incidentalmente en la respuesta Lópezcontreriana una curiosa disparidad entre actitud gubernamental y actuación militar al igual que una abismal diferencia de opinión con Stephen Kinzer y Noel Leiva, corresponsales del New York Times y Tiempo, quienes pudieron burlar los controles de carretera establecidos por el Ejército hondureño, penetrar en la nueva «contralandia» e informar sobre cuanto allí vieron.

Esquipulas no existía. La tentación nica de asestar un golpe final a la «contra», en Nicaragua y en Honduras, era fuerte. Y el rencor hacia Honduras no auguraba relaciones fluidas en el futuro. A su temible vecino cuscatleco, Honduras parecía hacer lo posible por sumar un airado contiguo nica. Quedando en posición de «sandwich». Confiando en una perpetua protección «gringa» a varios meses de unas elecciones presidenciales en Estados Unidos donde, aún en caso de triunfo republicano, no estaba asegurada la continuidad de la línea de acoso y derribo del sandinismo. Sin cubrirse por tanto las espaldas.

La reunión negociadora del 26 de mayo en Managua fue especialmente reveladora. El jefe de la delegación «contra» fue Alfredo César. Adolfo Calero, perdedor de la última lucha por el poder, no asistió. Y Enrique Bermúdez acudía como jefe discutido del FDN después de su precaria victoria sobre los «comandantes» disidentes.

La propuesta «contra» contenía una promesa de abandono de las armas a cambio de una reforma política tan amplia y revolucionaria que poco o nada quedaría en pie de la revolución sandinista. Todo ello a un plazo inmediato. Como indicó Bermúdez: «No vamos a abandonar las armas y esperar más tarde la llegada de la democracia. La democracia tiene que llegar primero.»

La primera reacción sandinista consistió en calificar tal propuesta como provocativa e inaceptable, señalando que desbordaba el marco del acuerdo de Esquipulas y la tregua del 23 de marzo de Sapoa.

Sin embargo, al segundo día de negociaciones, Humberto Ortega indicó que el Gobierno estaba decidido a contestar a cada uno de los puntos de la lista de exigencias presentada por Alfredo César: reducir el control del Partido Sandinista sobre el Ejército y la policía, disminuir el papel de los Comités de Defensa Sandinistas, así como el de otras organizaciones de masas, posibilidad de que algunos «comandantes» de la «contra» pudieran incorporarse al Ejército como oficiales, mayores derechos para los sindicatos, garantías procesales en los juicios, garantías para la libertad de expresión y reunión, sistema de educación sin inductación ideológica.

Todos los demás puntos políticos serían tratados en el marco del diálogo nacional con los partidos.

En definitiva, lo que empezó como una reunión que tenía indicios de ser la última, acabó siendo la sesión más constructiva e importante de todas las celebradas entre ambos bandos, quienes decidieron volverse a reunir en Managua para el 7 de junio.

El espectáculo de un Bermúdez, representante de los tiempos de Somoza e instrumento de los planes de la CIA, sentado en la delegación «contra», no dejaba de ser inusitado. Y que el Gobierno de Managua no rechazara de plano sino recibiera con ánimo de compromiso propuestas que significaban abandonar el control de instrumentos tan útiles como el Ejército, la policía y las organizaciones de masas, era algo insólito.

La paz se negociaba realmente en Managua.

Mientras tanto, la Comisión Ejecutiva, que debiera haberse reunido en Tegucigalpa el 17 de mayo, parecía entrar en dilación indefinida después de una ineficacia irremediable. El proceso de pacificación del Plan Arias tocaba fondo y parecía poco probable que los cinco Cancilleres se pusieran de acuerdo para montar una inspección (CIS) a cargo de Alemania, Canadá y España. ¿Qué interés podía tener Tegucigalpa en que se inspeccionara no ya su frontera con Nicaragua y zonas aledañas, sino las mismas calles de la capital, repletas de «contras»?

Claro que, como indicaba López Contreras en una reunión sobre la pobre imagen de Honduras en el mundo, la contra no tenía una presencia en el país reconocida «oficialmente». Ergo, no existía. Un viejo político mejicano señaló, hace años, que vivir fuera del Presupuesto Nacional era vivir en el error. El Canciller hondureño venía a completar la idea al insinuar que la verdad sólo es tal cuando aparece en las páginas de la Gaceta Oficial.

* * *

Cambio de actores: exit Reagan

Después de la atonía prolongada a lo largo del verano y otoño de 1988 en los esfuerzos centroamericanos por hacer avanzar el proceso pacificador, el 30 de noviembre se reunió en Méjico la Comisión Ejecutiva de los cinco Cancilleres lográndose dos resultados de interés. Una carta al Secretario General de Naciones Unidas le solicitaba con carácter urgente gestionar la conformación de un mecanismo imparcial de verificación, control y seguimiento *in situ* del cumplimiento de los compromisos relativos al cese de ayuda a grupos insurreccionales y fuerzas irregulares y al no uso del territorio para apoyar a los mismos. La carta mencionaba a España, Canadá y República Federal Alemana como miembros escogidos de dicho grupo. La celebración de una cumbre presidencial en San Salvador el 15 de enero era el segundo logro.

Recibida muy positivamente en los medios políticos internacionales, la reunión de México fue celebrada como una posible vía de desbloqueo del proceso de Esquipulas. Posteriormente, sin embargo, el Presidente Arias enviaría una carta a sus homólogos centroamericanos pidiendo el aplazamiento de la cumbre para el 13 de febrero en base a una serie de razones: la incógnita que suponía la nueva política centroamericana que desplegaría la inminente Administración Bush, la cumbre latinoamericana de Caracas con motivo de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, la necesidad de una reflexión más profunda sobre las modalidades de la verificación.

La realidad es que la mayoría de los centroamericanos estaban esperando destellos positivos o, al menos, ausencia de señales negativas del equipo de Bush para aceptar la celebración de la cumbre. Ello coincidía con un claro cansancio de la comunidad internacional ante los continuos aplazamientos y/o falta de cumplimiento de los compromisos de Esquipulas.

Daniel Ortega fue el prestidigitador que, en la cumbre de San Salvador los días 13 y 14 de febrero de 1989, sacó de la chistera un conejo blanco de considerables proporciones. Dentro del proceso de democratización y reconciliación nacional de su país, Ortega anunciaba reformas en la legislación electoral y en la relativa a libertades de expresión, información y opinión pública. Se abriría un período inicial de cuatro meses para la preparación, organización y movilización de los partidos después del cual y durante seis meses se iniciaría la actividad legal para dar paso a su final a elecciones para la Presidencia, Vicepresidencia, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldías y Palamento Centroamericano. Las elecciones se llevarían a cabo el 25 de febrero de 1990 a más tardar. Un Consejo Supremo Electoral, con representación equilibrada de la oposición, sería el organismo de supervisión del proceso electoral.

Los Presidentes, a iniciativa de Honduras, se comprometían a elaborar en un plazo máximo de noventa días un plan conjunto para la desmovilización, repatriación o reasentamiento voluntarios de la contra y sus familias y se reafirmaban en su petición de Esquipulas II en el sentido de que los Gobiernos regionales o extraregionales que abierta o secretamente proporcionaban ayuda a las fuerzas irregulares o movimientos insurreccionales en el área cesaran inmediatamente tal ayuda con la excepción de la ayuda humanitaria que contribuyera a los fines del acuerdo de San Salvador.

Con apenas un mes de Casa Blanca, la Administración Bush fue sorprendida fuera de guardia por el acuerdo, inmediatamente interpretado como una desmovilización de la contra de sus bases hondureñas a cambio de elecciones libres en Nicaragua. Los Presidentes habían fallado en encontrar un mecanismo de verificación y ejecución obligatoria suficientemente eficaz para Nicaragua porque el mismo hubiera sido igualmente eficaz y, por tanto, intolerable, para los poderosos intereses de los militares y de las derechas en El Salvador, Honduras y Guatemala. El acuerdo ponía en efecto el acento del proceso pacificador regional en Nicaragua. Triunfo póstumo de la Administración Reagan que, si fracasó en descabalar a los sandinistas, triunfó en que la democratización nicaragüense fuera aceptada por casi todo el mundo como la piedra de toque de la paz regional. Aunque los demás países de la región necesitados de democratización no recibieran similar emplazamiento.

No habían secado aún las firmas de los Presidentes en el documento de San Salvador cuando la Administración Bush inicia el contraataque, manifestando serias dudas sobre el mismo y anunciando que intentaría mantener la «ayuda humanitaria» para la contra que expiraba el 31 de marzo. Parecía, sin embargo, tal como editorializaba el New York Times el 26 de febrero, que siempre que Washington cesaba de prestar atención a Centroamérica, las partes en conflicto aprovechaban para dar un paso adelante hacia la paz. En parecido orden de ideas se manifestaba la Oficina de Contabilidad General del Congreso (General Accounting Office) al indicar en un informe publicado el 8 de marzo que la política centroamericana de Washington en los últimos ocho años no había propiciado democra-

cias estables o crecimiento económico en la región, sino que había auspiciado el hegemonismo de las fuerzas militares locales a costa del poder de los dirigentes civiles.

El enviado especial para Centroamérica, Busby, recorre a mediados de marzo la región con el siguiente mensaje: dejen permanecer los contras hasta que Nicaragua haya cumplido sus promesas, necesitamos zanahorias y estacas, incentivos y desincentivos. La desmovilización de la contra, una vez realizada, tendría carácter irreversible. Las promesas de democratización de Ortega eran susceptibles de dilaciones o reducciones. Precedentes no faltaban al respecto. Ello explicaba en parte la razón de la insistencia de Washington por mantener a la contra en situación de disponibilidad. Como una especie de póliza de seguros contra una eventual marcha atrás en las promesas de democratización de Nicaragua. La segunda razón norteamericana para mantener viva a la contra sería explicada por el Presidente en funciones del Consejo de Ministros de la CEE y Ministro de Asuntos Exteriores de España, Francisco Fernández Ordóñez, después de su entrevista en Washington con el nuevo Secretario de Estado Baker: el reasentamiento de los rebeldes necesitaba tiempo. O lo que es lo mismo, se intentaba evitar la desbandada y la huida en tromba de los «freedom fighters» y familiares hacia las fronteras norteamericanas. Donde, evidentemente, no les aguardaba el cartelito de «welcome».

Arias, de visita en Washington, se declaraba sumamente satisfecho del acuerdo bipartidista alcanzado por la Administración Bush el 24 de marzo, que enterraba el hacha de la guerra entre el Gobierno y el Congreso y mantenía viva a la contra por un año. El aval de Arias y el bipartidismo en Washington se asentaban sobre una realidad no declarada pero de gran importancia. La opción militar de los tiempos de Reagan había quedado descartada. La situación económica de Nicaragua era catastrófica y si sus destellos económicos tenían luminosas señales de SOS, sus gestos políticos apuntaban claramente hacia la reconciliación y la democratización. Por las mismas fechas, Ortega amnistiaba a 1.933 ex guardias somocistas, quedando en prisión únicamente 39 especialmente connotados.

Y una línea de acción norteamericana potenciada por el bipartidismo y asentada en la ausencia de intervención armada no era susceptible de despertar sospechas ni recelos. Ni en el resto de América Latina ni en Europa.

Una Europa que, en menos de una década, había comenzado a jugar un papel en Centroamérica de relieve y solidez. En el San José V celebrado en la ciudad hondureña de San Pedro Sula los 27 y 28 de febrero de 1989 —comunitarios, centroamericanos y contadorinos nuevamente reunidos— Fernández Ordóñez indicó por la Presidencia comunitaria que desde 1984 la CEE había triplicado la cifra de cooperación comunitaria con la región, que en 1988 ascendió a 135 millones de dólares, mientras que la cooperación individual de los Estados miembros superaba los 350 millones de dólares. Añadiendo que Centroamérica tenía la oportunidad histórica —acuerdo de San Salvador— para dar la imagen de un conjunto de países capaces de llegar por sí mismos a soluciones políticas para sus problemas.

El 19 de marzo, las elecciones de El Salvador, celebradas en ambiente de guerra, son ganadas por Arena. Dado el descrédito del reformismo demócratacristiano y el escaso apoyo dado por el FMLN a sus aliados de Convergencia, el ganador no podía ser sino un

partido inciertamente demócrata y dudosamente cristiano. La reinserción de las fuerzas guerrilleras mediante una amnistía y la disminución de su base mediante el reformismo social se abandonaban a favor de una línea de confrontación sin concesiones, treguas ni más salida que la victoria o la derrota. Situación querida y deseada por la cúpula del FMLN y de Arena.

El 13 de abril, Bush recoge el fruto del bipartidismo y su primer triunfo en la escena internacional al votar el Congreso —309 v. 110— y el Senado —89 v. 9— la concesión de 49,7 millones de dólares para mantener viva, y fija, a la contra, salvo para regresar a Nicaragua. Se cerraba una página de la historia. La guerra de la contra había terminado. Éste era el estado de ánimo de numerosos congresistas y la intención con que votaron al mantener viva una fuerza tan desacreditada y oxidada como la contra.

Parecía evidente que Bush había decidido abandonar la guerra como instrumento de su política centroamericana y que, carente del celo ideológico procontras de su predecesor, intentaba alterar el comportamiento sandinista a través de la presión económica y diplomática, con la cooperación del resto de los centroamericanos y el asentimiento o, al menos, desistimiento, del resto de los países latinoamericanos y de los aliados europeos. La nueva Administración ya no aspiraba a derribar al sandinismo. Se conformaba con desvirtuarlo. Claro que su libertad de acción se encontraba limitada por tres factores importantes. El acuerdo de San Salvador en febrero entre los cinco Presidentes cerrando las bases contra en Honduras a cambio de elecciones libres en Nicaragua era el primero. El escándalo Irán-contra, vivo y coleando aún a través del juicio contra Oliver L. North, aumentaba las suspicacias del Congreso a toda implicación de contenido militar. Y, finalmente, la victoria de Arena en El Salvador, hacía prever un continuo forcejeo con el Congreso para mantener a flote al país mediante una ayuda que sería críticamente examinada ante los más que probables excesos de los hombres de d'Aubuisson.

El mayor logro de esta línea de acción sería, quizá, que calaba en el mundo la idea de que la democratización de Nicaragua era la piedra angular de la pacificación centroamericana. Sin importar la fragilidad, las carencias y las amenazas internas al resto de los sistemas políticos centroamericanos. Después del desasosiego de la época Reagan, y del temor a ver nuevos ensayos del «libretto» de la intervención armada a cargo de la Compañía de marines, parecía imponerse el realismo, se desdramatizaba la situación regional centroamericana y, de pronto, el resto de América Latina, los aliados europeos, el propio Gorbachov, se dan cuenta de que Centroamérica está muy cerca, necesita a, depende de los Estados Unidos, y de que éstos deben continuar siendo el jugador estrella en la región una vez obetenida la promesa de que se respetará la regla básica de la no violencia en el juego. Así de sencillo. Pasado ya el tiempo de la amenaza comunista o teoría del dominó a las puertas de Tejas, los juegos de la guerra, ya no había más excusas para que Nicaragua no diera posibilidades a la oposición para acceder al poder en un proceso electoral abierto y con igualdad de oportunidades. Paradójicamente, la ausencia de amenazas se transformaba en la gran amenaza para las adherencias totalitarias del sandinismo.

Y en cuanto al resto de los centroamericanos se imponía también un claro realismo. Lo básico, lo esencial, era que se respetaran los derechos humanos básicos, la vida, y se promocionasen las bases sobre las cuales la democracia deja de ser una fría y transparente

urna donde depositar un voto cada cuatro años transformándose en vivienda, despensa, escuela, hospital, trabajo, promoción social. Ardua tarea imposible de abordar sin ayuda exterior y sin cambios en la relación Norte-Sur. Tarea no para mañana. Pero el mundo es perfectible.

Epílogo

Un día todos sabemos
hacer justicia. Tan bien como el rey hebreo
la hizo Sancho, el escudero,
y el villano Pedro Crespo.

Romero Solo. León Felipe Camino

El pasado colonial de la vieja Capitanía General tuvo una importancia muy desigual en las cinco unidades que constituyeron el antiguo Reino de Guatemala. Los latifundios y las tierras comunales se repartían en cantidades similares el agro de la Capitanía. Donde las colectividades indígenas tuvieron un importante peso demográfico —Guatemala y, en menor medida, El Salvador—, el indio disponía de tierras suficientes, mediante los ejidos y las comunes, para mantener una vida económica relativamente independiente en el marco de la autosuficiencia. Independencia relativa por el sistema de repartimiento u obligación del indio de acudir a trabajar, mediante pago de un salario reducido, una semana de cada cuatro, a las haciendas criollas.

Tal panorama cambia radicalmente después de la Independencia a partir de la segunda mitad del pasado siglo. El café substituye gradualmente a la grana y el añil como eslabón de enlace con el mercado mundial. La tierra aumenta vertiginosamente de valor por la insaciable sed de la nueva infusión del mundo. Y los vientos liberales consideran al finquero del café como pionero de un nuevo modelo de sociedad, progresista y abierta al mundo. Se desamortizan entonces las propiedades de la Iglesia y se suprimen las tierras comunales de los indios en la certidumbre de que era necesario promocionar un propietario individual, innovador, capaz de revalorizar la tierra. Y se lanza al mundo de las rancherías y las migraciones estacionales una masa ingente de indios, desposeídos y anonadados. Los reglamentos de jornaleros, las leyes de vagancia, los mandamientos y la habilitación fueron los mecanismos de disponibilidad de una abundante mano de obra semiservil y casi gratuita por una clase hegemónica renovada, donde el color «blanquito» de la tez ya no era regla por la gran cantidad de mestizos que supieron ascender a la categoría de criollos cafetaleros.

La nueva clase dirigente cafetalera acumuló beneficios con la exportación del café, pero no supo abordar un proyecto de desarrollo nacional, «hacia adentro», al estilo europeo o norteamericano. Careció de capacidad de previsión de la conveniencia de promocionar un mercado nacional, una masa consumidora. Los nuevos ricos de mostrador, de lonja y casa de préstamos, así como sus socios latifundistas, monopolizaron el poder político e imprimieron su impronta económica durante más de medio siglo, en un clima de increíble autonomía si lo comparamos con el actual. Desde la disolución de la Federación en 1841 hasta la llegada de las bananeras al cerrarse el siglo nada se interpuso en su poder. Centroamérica fue entonces verdaderamente independiente. Pero sus clases dirigentes no fueron capaces de superar el monocultivo, de movilizar las ingentes masas campesinas en proyectos de integración nacional tanto económica como políticamente, ni de prever lo que con el tiempo se llamaría deterioro de los términos de intercambio para los productores de materias primas.

El siglo XX presencia en Centroamérica un primer ensayo de actividad transnacional en forma de compañía bananera. Las bananeras llegaron con promesas de construcción de ferrocarriles, apertura de puertos, desarrollo de regiones inhóspitas. Las promesas fueron cumplidas, pero sólo en parte. Y se crearon economías de «enclave», al margen de la vida económica nacional, donde el dólar circulaba como moneda oficial para adquirir productos extranjeros, que entraban al país sin pagar impuestos (en «tiendas de raya»). Y supusieron, tras la consolidación inicial, que exigió fuertes inversiones, unas exportaciones de utilidades muy superiores a las inversiones de despegue, así como una importante merma en la recaudación fiscal, ya que el sector bananero fue liberado del pago de impuestos.

Pero, más importante aún que estos rasgos, las bananeras penetraron cual elefante en el frágil establecimiento centroamericano, manipulando civiles y militares y contribuyendo a crear una mentalidad parasitaria y ancilar en su clase política, vinculando aún más sus economías al modelo de economías de «postre», dependientes de producciones, transportes y precios incontrolables.

Dos partidos, conservador y liberal, monopolizaron la escena política desde la Independencia en los momentos en que la cancha no era ocupada por un caudillo militar. Pero, aún entonces, el juego político fue extremadamente cerrado, accediendo a él un número muy reducido de personas pertenecientes a determinadas familias. El modelo censitario decimonónico adquiría en Centroamérica el matiz de «cosa nostra» para unos pocos y el de «cosa ajena» para la gran mayoría.

Cuando el nivel de insatisfacción popular alcanzaba tonos amenazantes, como ocurrió tras la depresión de 1929 y caída en vertical de los precios del café, siempre surgía cabalgando en lontananza un líder con las espuelas ajustadas y los calzones bien puestos. La quirurgia militar fue el tratamiento de choque aplicado a las crónicamente enfermas sociedades centroamericanas. Tratamiento efectivo en un medio predominantemente rural, moteado de caciques y «capillas», donde quien sabía leer era llamado «licenciado» y quien sabía escribir «iba para Ministro». Un medio donde «quien se movía no salía en la foto». La de los esponsales con el poder. Donde un fatalismo tropical asciende cual verde lepra y donde el ciclo vital corre parejo y depende del ritmo estacional del cafetal, la bananera, la gran dehesa, la minúscula milpa. Mundo de peones y hacendados, braceros y «gringos», somnolencia y marginación. Casi Macondo.

Tal mundo despierta de una siesta secular bien aprovechada. El «creced y multiplacaos» aplicado a conciencia. El campo ya no absorbe las nuevas multitudes y las ciudades se llenan de «ranchitos», villas miseria, abrochándose con cinturones de pobreza. El proyecto de desarrollo elitista tropieza con los escollos de las expectativas crecientes defraudadas y la carencia de un mínimo de bienestar colectivo. A la tradicional apatía y somnolencia sucede un fermento de agitación, una desazón, un comecón que se extiende sobre el tejido social.

No es, sin embargo, de la pobreza y la marginación de donde surgen las ondas que agitan la inmóvil horizontalidad de las aguas centroamericanas. Cuando Castro llega al poder en Cuba prometiendo dignidad e independencia, un escalofrío de placer recorre la espina dorsal de considerables tramos de la sociedad latinoamericana. Las ínclitas razas ubérrimas, cachorros del viejo león, contemplan atónitas el desafío al águila calviblanca

que ha establecido un orden con pretensiones milenaristas, un «novus ordo seclorum». John F. Kennedy, visionario y mago, promete a Latinoamérica un futuro compartido donde el águila perdería el peso terrenal de las garras y, aligerado el peso, su vuelo, remontado, ascendería a alturas desconocidas de fraternidad y de progreso. La Alianza para el Progreso cautivó imaginación, movilizó capital y esfuerzos y, finalmente, defraudó. Especialmente a quienes más ilusión pusieron en sus promesas y con mayor impaciencia aguardaron sus frutos: los estudiantes.

La riqueza prometida, cuyo reparto desentumecería las artríticas articulaciones centroamericanas, aprovechó a unos pocos y simplemente rozó a las nuevas multitudes. A la antigua dicotomía hacendados-peones, sucedía ahora un perfil más nítido y visible de ricos-pobres. Y a la revolución de las expectativas crecientes, la desilusión del todo-sigue—igual— y esto-no-tiene-remedio.

Ni la democracia censitaria ni la agro-exportación de productos de sobremesa son marcos apropiados para compartir responsabilidades de gobierno ni repartir una riqueza dependiente de unos precios que, a veces, no daban para cubrir apenas gastos, y otras, las menos, agudizaban la imaginación en cómo gastar el maná llovido del cielo de Chicago. A las crecientes demandas de mayor protagonismo político, a las exigencias de participación más amplia en los beneficios, sucedió un período de incertidumbre inicial y, más tarde, una convicción. No se podía tolerar que se cuestionaran los cimientos de la sociedad centroamericana. Se estaba a favor o en contra de la democracia, de la libertad individual y las leyes del mercado, o de la opresión y tiranía del nuevo Moloch que, en forma de colectivización, se había instalado en Cuba.

A partir de entonces, los espacios políticos se cierran, la subversión se instala, al terrorismo de grupo responde el terrorismo de Estado, y al Presidente civil suceden celosos militares de «color quebrada» con luminosas ideas sobre el sistema democrático y la economía de mercado aprendidas en las aulas de Fort Bragg y la Escuela de las Américas de Panamá.

Grupos cada vez más numerosos de estudiantes, líderes sindicales, políticos del cambio, toman la ruta del monte y la clandestinidad a medida que demasiados de sus compañeros emprenden la «escondida senda» sin retorno de la tortura recóndita y el cementerio clandestino.

La pobreza y marginación habían adquirido caracteres tan naturales en tierras centroamericanas como la alternancia climática entre época de seca y lluvias. Pero se prometió un poco de sol con lluvia y de lluvia con algo de sol. Y a la seca, reseca, siguió el ciclo fatal, predeterminado, del agua torrencial. Esto era intolerable. Promesas incumplidas. Esperanzas defraudadas. Un engaño descomunal. Y para que todo no siguiera igual era preciso derribar todo y partir desde la nada.

Las élites centroamericanas se asustan. Acostumbradas a enviar sus hijos a estudiar y sus dólares a producir a los Estados Unidos, transmiten ahora un mensaje categórico a su vecino del Norte. O se actúa con determinación frente al terrorismo y la subversión o El Salvador, Guatemala, Nicaragua caerán irremediabilmente por la pendiente que conduce a La Habana ante la sonrisa complacida de Moscú.

Centroamérica y el Caribe están cerca de los Estados Unidos y lejos de la Unión Soviética. Una cercanía histórica, económica y estratégica. Desde que Castro invitó a los soviéticos a penetrar en el «patio de vecindad» de los Estados Unidos, los sucesivos gobiernos de Washington intentaron impedir por todos los medios nuevas incursiones rusas en el área. Pero los problemas se acumulaban en la zona. Problemas de exigencia de mayores cuotas de participación económica, de mayor transparencia en la cabalística vida política, de un más amplio protagonismo en el quehacer nacional, de transformación de la «cosa nostra» en cosa pública. Problemas sin solución, salvo en Costa Rica, el faro solitario de Centroamérica.

A medida que aumentan la insatisfacción y las exigencias de muchos, crece el temor a la incógnita del cambio en las élites y se recurre al enquistamiento numantino y al uso de la violencia, no ya contra la subversión, sino, cada vez más frecuentemente, frente a la mera disidencia.

El fin de la dinastía Somoza no alarmó sobremanera a las clase dirigentes centroamericanas. Al fin y al cabo, la rapacidad del clan Somoza había reducido peligrosamente la capacidad de iniciativa del empresariado nicaragüense, amenazado a la larga con ser un subcontratista de los negocios de la familia. Todos recibieron con alegría la gran final somocista. Incluso el Presidente Carter, quien únicamente intentó en vano preservar del antiguo régimen lo que, desde su punto de vista, garantizaría la aceptabilidad del nuevo, la Guardia Nacional. Al fin de cuentas —se decía Carter—, las guerrillas sandinistas no eran más que partidas de desharrapados, jóvenes carentes de cultura y experiencia que no sabrían qué hacer con un poder poco menos que llovido del cielo.

Hubo un momento en que pareció que tanto los vecinos de Nicaragua como los Estados Unidos podrían convivir con el sandinismo. Un momento. Viejas amistades anudadas en la guerrilla serrana, antiguas solidaridades centroamericanas de estirpe «morazánica» y jóvenes ambiciones revolucionarias a escribir la Historia del istmo a punta de fusil llevaron a los comandantes sandinistas a pensar que lo ocurrido en Nicaragua no era sino el prólogo de un episodio centroamericano cuya segunda página llevaba el nombre de El Salvador. Apenas asentados en las poltronas del poder, los jóvenes «comandantes» echaron una generosa mano a sus compañeros del Frente Farabundo Martí de El Salvador. Esta «generosidad expansiva» selló su suerte.

Nada valieron desde entonces sus promesas de respeto del pluralismo político, la economía de mercado y el no alineamiento. Promesas tantas veces demoradas como sólo parcialmente cumplidas. Un nuevo espíritu puro y duro, mesiánico y romántico, pletórico de confianza y añorante de un pasado de poder incontestado, ha recorrido los Estados Unidos. Ronald Reagan escenifica el nuevo sentir. Sentir que, con respecto al sandinismo, se resume en un «y como no queremos que Nicaragua se convierta en una segunda Cuba, vamos a aplicar a Nicaragua el tratamiento que ya dimos a Cuba».

El problema consistía desde entonces en aumentar la eficacia del tratamiento cubano, pues Fidel Castro y su florida barba, ya canosa, atestiguaban una indudable falta de adecuación en la receta. Si el diagnóstico norteamericano acepta desde entonces una sintomatología tumorífera, varían las calificaciones en cuanto a su carácter benigno o maligno. Y por otra parte, el síndrome norteamericano del Vietnam, sumado al síndrome

latinoamericano al desembarco de marines, origen remoto del intento mediador de Contadora, han actuado, al igual que la falta de entusiasmo de los socios europeos de los Estados Unidos por las soluciones de fuerza, como factores disuasorios en el uso de la cirugía de extirpación. La transformación de la disidencia interna al sandinismo en una fuerza armada, la «contra», era una solución de recambio a la intervención directa por los Estados Unidos que no excluía, sino, más bien, exigía la negociación al sandinismo.

La «contra» vendría a jugar un papel substitutivo para algunos y compensatorio para otros de los principales actores en juego.

Para la Administración Reagan, la «contra» era un substitutivo de la intervención directa. Las magníficas dotes de vendedor del Presidente norteamericano no fueron capaces de operar el milagro de convencer a su opinión pública de la necesidad de intervenir directamente en Nicaragua. Una de las oposiciones más consistentes procedía sistemáticamente del Pentágono, conocedor de que una operación Nicaragua sería muy distinta de la excursión a Granada, exigiendo unos medios y un coste que el pueblo norteamericano no estaba dispuesto a pagar. Todo, además, para ocupar precariamente los centros urbanos e instalar de nuevo a la dirigencia sandinista en su auténtico baluarte, fuente de legitimidad revolucionaria, la sierra.

En lo que respecta a Honduras, la «contra» compensaba el escaso interés que el país, por sí mismo, despertaba en Washington —cuyos pies estaban firmemente asentados en tierras hondureñas pero cuya vista apuntaba hacia Managua y San Salvador—, substituyendo lo que debiera ser una ayuda por el valor intrínseco o los méritos propios del país por otra que reflejaba el pago del alquiler y la instrumentación a favor de los planes norteamericanos en la región. Honduras recibía una ayuda económica impensable sin la presencia de la «contra», el estamento militar veía potenciados sus medios y su peso en la balanza interna de poder, y la oficialidad bien situada adquiría una oportunidad única de enriquecimiento inusitadamente rápido participando en la distribución de fondos destinados a los «guerreros de la libertad». El más importante producto hondureño de exportación, que antaño fue el banano, fue desplazado hogaño por la soberanía nacional.

La oficialidad «contra» no debía temer al paro, desaparecido ya su antiguo patrón Somoza. Buenos sueldos, familia a buen recaudo en Florida y establecimiento de un perímetro de varios cientos de kilómetros cuadrados dentro de Honduras, la nueva Nicaragua, de donde desplazaron todo vestigio de autoridad y, después, de población hondureña. Consiguieron sus objetivos, liberar territorio, pero éste no era nicaragüense sino hondureño. El objetivo nicaragüense fue substituido por el hondureño y el empleo en un Ejército nacional por el honor de participar en una «cruzada» sin fronteras.

La dirigencia sandinista ha utilizado sistemáticamente a la «contra» como justificación de las carencias y deficiencias económicas y de la escasa concesión de espacio político a la oposición interna. El esfuerzo bélico, la obsesión de seguridad en términos puramente militares, a pesar de los continuos vapuleos que han propinado a las incursiones contras en Nicaragua y de que oficialmente la contrainsurgencia no representaba una amenaza militar seria, substituían así los esfuerzos por encontrar un lugar bajo el sol para aquellos nicaragüenses que no aceptaban el sesgo de la Revolución. Seguridad militar en lugar de coexistencia, de seguridad política.

No parecería por tanto exagerado «lamentar» que, ya que el genial invento de la contra satisfacía a los principales actores del juego, sus perspectivas de futuro arrojaran tantas dudas.

«Contradora» consiguió retrasar el ritmo y enfriar los entusiasmos depositados en «Contadora». Pero no empañó su imagen ni alteró el hecho de que, por largo tiempo, se trató del único esfuerzo razonable de búsqueda de un arreglo entre las exigencias de Washington y las urgencias de Managua.

Si Nicaragua se veía obligada a «tirar la toalla», América Latina podía verse tentada a «liarse la manta».

Al fin y al cabo, si lo que la Administración Reagan buscaba era la seguridad hemisférica frente al intrusionismo soviético en Nicaragua o garantías de no agresión sandinista a sus vecinos, Contadora hubiera podido conseguirlo sin dificultades insuperables. Pero si lo que perseguía «Contradora» era la derrota pura y dura del sandinismo, no su progresivo encuadramiento en fórmulas más democráticas de convivencia, ningún país latinoamericano podría sentirse en el futuro asegurado contra el riesgo de que su manera de operar los cambios y transformaciones sociales pudiera ser antagonizada y truncada por los designios de Washington.

Nicaragua pasaría a ser para América Latina el vecino del viejo refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.

Casi 200.000 personas, de un total de 27 millones, habían perdido la vida en los últimos diez años en los diversos conflictos que ensangrentaban la geografía del istmo. En la grácil cintura de América, alta es la noche, el zopilote, nunca ahito, siempre espera. Morazán ya no vigilaba.

Y mientras tanto, la guerrilla se enquistaba en Guatemala, subsistía a duras penas el poder civil aquí y en El Salvador, donde el Farabundo Martí ya no marcaba tantos goles, y el Presidente Duarte veía desvanecerse su proyecto a un ritmo paralelo al progresivo crecimiento de su cáncer, Honduras se inquietaba al quedar en primera línea del frente anti-Managua, con cerca de 10.000 «contras» armados y una nueva Nicaragua dentro de su territorio, y Costa Rica, tan neutral y desmilitarizada, se sumaba a la campaña de exigencias al sandinismo.

Los vecinos de Nicaragua, como a toque de rebato, le exigían la democratización si quería normalizar sus relaciones en el istmo. Tal exigencia por el Grupo de Tegucigalpa no dejaba de ser curiosa. Que Costa Rica la reclamara era lógico pues su historial político tenía a su haber la más vieja tradición de democracia de América Latina, una vez interrumpida la trayectoria de Chile y Uruguay. Pero que El Salvador y Honduras se sumaran a la exigencia no lo parecía tanto. Ambos países apenas habían estrenado gobiernos civiles en 1982. Gobiernos civiles que, en el marco de la democratización con militarización, escasamente controlaban a sus institutos armados. El Salvador concretamente no había dejado de estar en el punto de mira de las organizaciones internacionales que supervisan la observancia de los más elementales derechos humanos, esencialmente la vida. Y en Honduras, aun superada la época del General Álvarez, los jueces no tramitaban

las demandas de «habeas corpus» ante detenciones ilegales, los cuerpos paramilitares todavía «desaparecían» ocasionalmente, y las autoridades civiles se encogían de hombros ante tales hechos explicando, con voz sigilosa, que se trataba de asuntos de seguridad y, por tanto, competencia de los militares.

En Nicaragua se han cometido abusos y errores, pero los desaparecidos-aparecidos-en-la-cuneta nunca constituyeron una escena de la vida cotidiana ni marcado una pauta de las fuerzas de seguridad.

¿Qué clase de democracia se exigía a Nicaragua, entonces? ¿La que se agota prácticamente introduciendo una papeleta de voto en una urna cada cuatro años? ¿O la que alimenta, educa, cura, reparte bienestar y responsabilidad a su población? Porque si se trataba de esta última especie, la democracia era un objetivo exigible a Nicaragua, sin duda, pero también a El Salvador, Honduras o Guatemala. Y difícilmente podía exigirse a Nicaragua algo de lo que se carecía.

Pareciera que, para la Administración Reagan, los límites de la aceptabilidad y, por tanto, de la tolerancia de los sistemas centroamericanos fueron trazados en función de la sumisión más que de la democratización. Es decir, que un régimen se volvía inaceptable, intolerable, en la medida en que se desmarcaba de la línea de observancia y pretendía dejar de vivir en el patio trasero de los Estados Unidos, viniendo a ser la falta de democracia un argumento utilizado y una carencia a corregir sólo cuando coincidía con un firme deseo nacional de enderezar la humillante y parabólica curva implícita en toda relación de dependencia.

Nicaragua cometió el pecado de querer mudarse del patio de vecindad de la dependencia norteamericana. Arriesgándose a nuevas vecindades e insólitas dependencias. Y amenazando de paso los intereses estratégicos de la potencia hegemónica. Se hizo así reo de desacato a la autoridad. Culpable de atentar contra el orden establecido. Y sobre todo, un mal ejemplo que podía encender los espacios centroamericanos —poblados de «atónitos palurdos sin danzas ni canciones», pero con hambre y pasiones— como la yesca ardiente abrasa la hierba reseca en el estío.

Asfixia económica, acoso militar, satanización regional y erosión internacional a cargo de una poderosa maquinaria de comunicación social no quebrantaron, sin embargo, la voluntad de supervivencia del sandinismo, aunque sin duda achicaron su base de sustentación popular. Pero también Reagan y sus hombres se dejaron más de una pluma en el camino hacia Managua. Y la «transparente Presidencia» —teflon Presidency— se fue opacando a un ritmo acompasado al gradual empobrecimiento y soledad de Nicaragua.

Unos y otros pagaron su precio. Y llegó un momento en que los cuatro vecinos centroamericanos de Nicaragua llegaron a la conclusión de que el acoso no producía el derribo del sandinismo, sino el empobrecimiento del istmo, la atonía inversora y huida de capitales, la militarización de sus débiles e inciertos procesos de democratización, sangre sin razón, dolor sin solución. Y las cinco ramas desgajadas del viejo tronco se volvieron a juntar en Esquipulas, reverdeciendo el remoto árbol de la unidad centroamericana.

Sucedió en agosto, a la sombra del umbrío y venerado Cristo de los Milagros del vetusto santuario chapín. Los cuatro Presidentes aceptaron las ideas de su colega tico, Óscar Arias, y firmaron un plan de paz que venía a ser una segunda declaración de independencia de Centroamérica, una manifestación de su deseo de descolonización del área, un certificado de mayoría de edad política. Dosis equilibradas de esperanzada reflexión, de razonada desilusión, de voluntariosa improvisación, fueron los ingredientes de una decisión de importancia singular en la vida del istmo y, más allá de la grácil cintura de América, en el entero Continente colombino.

Retoñaron en Iberoamérica las esperanzas que florecieron con el nacimiento de Contadora y que se habían venido ajando con su progresivo agostamiento.

Y al desconcierto inicial en Washington sucedió la realización de que algo había cambiado en Centroamérica sin conocer muy bien por qué. Sin saber qué hacer. Aferrándose a rehacer el conocido camino de la contra. Sin atreverse a abrir nuevas sendas de diálogo directo con Managua ni, mucho menos, a potenciar la negociación de fin de la guerra civil en El Salvador.

Algo había cambiado en Centroamérica. El deseo de paz había llegado a un punto de inflexión. El de hastío, al de saturación. Y al ser la paz deseo generalizado de todos, todos tenían que pagar por ella.

Porque la paz no tiene precio.

Pero efímera sería la paz y futil el ejercicio de lograrla sin atacar a fondo los raíces últimas de la conflictividad centroamericana, sin enfrentar decididamente las raíces de la pobreza estructural y la desigualdad social, de la magra productividad de unas economías de «postre» que apenas generan riqueza que repartir sino, más bien, pobreza a maquillar acudiendo a la limitación de la natalidad como medio de acabar no con la pobreza pero sí con el peligroso crecimiento del número de pobres. El lugar más fácil y barato de acabar con la guerrilla es el útero, se ha dicho con crudeza.

No puede cristalizar la paz en Centroamérica sin un ataque a fondo contra las causas de su miseria. Sin el rayo de esperanza que proyecta un cierto desarrollo. La creación de riqueza es tarea inaplazable. Un esquema de reparto más justo, inexcusable.

Para quienes intentaron racionalizar el conflicto centroamericano como una excrecencia de la rivalidad Este-Oeste, con causalidad exógena al área, el tratamiento sólo podía recetar la cirugía de extirpación. Pero un sector no menos autorizado de opinión siempre pensó que su origen radicaba en la desigualdad, desequilibrio, disparidad entre un Norte bien servido y un Sur desabastecido, reflejado en unas estructuras sociales tan desiguales como escasamente participativos sus sistemas políticos.

La miseria primero. La subversión, después.

Por supuesto que, dada la reducida capacidad centroamericana de generación de fondos, todo proyecto de desarrollo regional debía partir forzosamente de la financiación externa. Veintisiete millones de habitantes no es una gran cifra. Pero lo importante sería

calcular el monto de la inversión no en función de lo escaso de la población, sino de lo reducido de sus perspectivas dentro de los actuales esquemas de agroexportación.

La Comunidad internacional no podría permanecer al margen de la financiación del esfuerzo de paz. España, por razones obvias, siempre mostró su voluntad de constituirse en punta de lanza del interesamiento europeo. La Comunidad Económica Europea ya ha señalado su disposición. Los Grupos de Contadora y Apoyo, su compromiso. Japón no permanecería al margen. Y los Estados Unidos, después de haber contribuido durante años al financiamiento de la guerra, tendrían una oportunidad de oro para erigirse en banqueros de la paz.

El balance que levantaron los Presidentes centroamericanos el 15 de enero de 1988 concluyó que los logros de Esquipulas II excedieron sus carencias. Comisiones nacionales de reconciliación, amnistías parciales pero importantes, apertura de un diálogo con los grupos de oposición armada, eran logros cuya importancia no se podía minimizar.

Mucho quedaba por hacer. Y, en gran medida, el quehacer pendiente corría a cargo de países ajenos a la zona. Un gran obstáculo era el temor de Honduras a disminuir el nivel de protección y tutela norteamericanos. Pero quizá el gran valladar fuera El Salvador donde, a pesar de las cualidades del Presidente Duarte y de la calidad de su intento reformista, el Gobierno civil ocupaba un espacio residual al de la guerrilla y la extrema derecha. Parecido problema, en escala más reducida, al de Vinicio Cerezo en Guatemala.

En cuanto a Nicaragua, el inicial ímpetu revolucionario, expansivo y desestabilizador, dejó paso a un espíritu de realismo y compromiso, abierto a la negociación de mutuas seguridades con sus vecinos. A partir del 16 de enero de 1988, Managua acepta dialogar con la contra. A la tregua suceden conversaciones de cese el fuego, y al diálogo puramente militar, negociaciones de contenido político. Todo ello dentro de un clima de apertura de medios informativos a favor de la oposición y de concesión de cierto espacio político, todavía limitado, para la disidencia.

Al cerrarse el mes de mayo de 1988, mucho se había avanzado en Managua en el camino hacia la paz. Ni en El Salvador ni en Guatemala el Gobierno disponía de margen de maniobras para negociar a fondo con la guerrilla o adelantar substancialmente en la senda de la reconciliación nacional. Y en Honduras, abandonada toda apariencia de poder civil, la cúpula militar, cuarteada por rencillas internas y amenazada por la cólera de Washington tras la quema de su Embajada, hacía hasta lo imposible para satisfacer al «tigre gringo». Nada podía esperarse de quienes sólo aspiraban a no perder la silla.

Si la paz se instalaba en Nicaragua, se trataría de una paz aislada. Poco se había adelantado en El Salvador o Guatemala. Prácticamente nada en Honduras. Y, en los tres países, la conjunción de asedio al Gobierno por las fuerzas golpistas y de descrédito de los respectivos sistemas, presagiaba un futuro incierto para el proyecto «democratización con militarización» y del que sólo parecía haber tenido éxito una militarización rotunda a expensas de una democratización permanentemente incierta.

La segunda mitad de 1988 se consumió en un compás de espera para el proceso pacificador. Un letargo impuesto por el final de la era Reagan e incertidumbres de la

nueva Administración y que fue sonoramente interrumpido en San Salvador el 14 de febrero de 1989. Desmovilización de la contra a cambio de elecciones libres en Nicaragua fue el clarinazo que despertó de su sopor la escena política centroamericana. Pareciera que, cuando Washington bajaba la guardia, tal como había ocurrido con la alternancia en la Casa Blanca, los centroamericanos daban un paso arriesgado hacia la paz. Decididamente, no se les podía dejar solos, debió pensar más de un miembro de la Administración saliente.

La nueva Administración declara que es preciso mantener viva a la contra hasta que Nicaragua haya cumplido sus promesas de democratización. Nadie, salvo la propia Nicaragua por supuesto, se opuso virulentamente a tal supervivencia. Al fin y al cabo, para lo que servían... Además, Bush daba señales inequívocas de que enterraba el hacha de la guerra. Con su propio Congreso y con Nicaragua. De que la opción militar de Reagan, siempre en el aire como amenaza permanente, quedaba descartada. Prácticamente todo el mundo estaba dispuesto a conceder a los Estados Unidos el papel de jugador estrella en la región siempre que respetara la regla de no violencia en el juego.

E inopinadamente, como por arte de encantamiento, la ausencia de amenazas se convertía en la mayor amenaza para las adherencias totalitarias que, cual pez rémora del tiburón, habían acompañado al sandinismo.

Poco importaba lo precario de la democracia en El Salvador, Honduras o Guatemala, y la urgencia de consolidar y profundizar sus sistemas. Tal tarea podía esperar. Lo que ya no podía demorarse por más tiempo era la democratización de Nicaragua al difuminarse su imagen de pequeño y digno país tercermundista presto a ser engullido por las fauces amenazadoras del imperialismo. Quizá, después de todo, lo que se pretendía era que Costa Rica dejara de ser el faro luminoso de la sombría noche centroamericana y que Nicaragua pudiera erguirse en un próximo futuro como un segundo modelo de libertad y justicia, como un remanso de paz y convivencia en el área. Dentro, todo ello, del más fraternal y solidario espíritu morazánico.

La Pax Romana consistía en el orden que el Imperio imponía al orbe sometido. Era una paz de vencedores. Desde entonces, casi siempre, la paz se ha impuesto como subproducto de una victoria.

La Pax Centroamericana que pretende Esquipulas es obra de vencidos. Vencidos por la pobreza, la dependencia, la guerra. Por ello se trata de un empeño insólito. Audaz. Esperanzador.

Una esperanza para los pueblos centroamericanos henchidos de dolor. Centroamérica, «cinta central, América angostura», debe verse libre de correa o de cadena. Para poder moverse cadenciosamente, al vivo ritmo de su marimba. Centroamérica ha proyectado en ocasiones la imagen de un conjunto de países capaces de llegar por sí mismo a soluciones políticas para sus problemas. Cuando ha tenido la oportunidad de demostrarlo. Cuando le han dejado.

Llegados a este punto finaliza el presente intento de racionalización de la problemática centroamericana. Creo que tú, lector, que has tenido la paciencia de sufrirlo, lo mereces.

Formulo un ruego final. Deseo un doble patriotismo a ese reducido grupo de pequeños Estados centroamericanos, la «grácil cintura de América»: nacional y morazánico; por tanto, regional e iberoamericano y, por ello, continental. Para caminar con valentía la senda de la pacificación. La regional y la nacional. Cada cual su tramo. Cada quien su espacio. Sin olvidar jamás que son parte de una nación más grande, de un universo más amplio y de un ilustre linaje, el de las «inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda».

ABREVIATURAS

General

AFL-CIO	American Institute for Free Labor Development.
CONDECA	Cosejo Defensivo Centroamericano.
ILO	International Labor Organization.
MECA	Mercado Común Centroamericano.
OEA	Organización de Estados Americanos.
ODECA	Organización de Estados Centroamericanos.
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica.
SIECA	Secretaría Integración Económica Centroamericana.

Guatemala

AEU	Asociación de Estudiantes Universitarios.
AGUAPA	Asociación Guatemalteca de Productores de Algodón.
ANACAFE	Asociación Nacional del Café.
CACIF	Consejo de Agricultores, Comerciantes, Industriales y Financieros.
CADEG	Comando Anticomunista de Guatemala.
CAN	Central Auténtico Nacional.
CGTG	Confederación General de Trabajadores Guatemaltecos.
CNT	Central Nacional de Trabajadores.
CNUS	Comité Nacional de Unidad Sindical.
CTF	Confederación de Trabajadores Federados.
DCG	Democracia Cristiana Guatemalteca.
EGP	Ejército Guerrillero de los Pobres.
FAR	Fuerzas Armadas Rebeldes.
FASGUA	Federación Autónoma Sindical de Guatemala.
FPP	Frente de Participación Popular.
FRENU	Frente Nacional de Unidad.
FUR	Frente Unido de la Revolución (antes URD).
INTA	Instituto Nacional de Transformación Agraria.
MANO (blanca)	Movimiento Anticomunista Nacional Organizado.
MLN	Movimiento de Liberación Nacional.
MR-13	Movimiento Revolucionario del 13 de Noviembre.
NOA	Nueva Organización Anticomunista.
OPRA	Organización del Pueblo en Armas.
PAR	Partido de Acción Revolucionaria (Arévalo)

PGT	Partido Guatemalteco de los Trabajadores (Comunista)
PID	Partido Institucional Democrático.
PR	Partido Revolucionario.
PRA	Partido Revolucionario Auténtico.
PSD	Partido Socialista Democrático.
URD	Unión Revolucionaria Democrática (después FUR).

El Salvador

ANDES	Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños.
ANEP	Asociación Nacional de Empresa Privada.
BRP	Bloque Popular Revolucionario.
CRM	Coordinadora Revolucionaria de Masas.
ERP	Ejército Revolucionario del Pueblo.
FAPU	Frente de Acción Popular Unida.
FARN	Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional.
FDN	Frente Democrático Nacionalista.
FDR	Frente Democrático Revolucionario.
FECCAS	Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños.
FENASTRAS	Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños.
FMLN	Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.
FPL	Fuerzas Populares de Liberación.
FUSS	Federación Unida de Sindicatos Salvadoreños.
ISTA	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
LP-28	Ligas Populares 28 de Febrero.
MNR	Movimiento Nacional Revolucionario.
ORDEN	Organización Democrática Nacionalista.
PCES	Partido Comunista de El Salvador.
PCN	Partido de Conciliación Nacional.
PDC	Partido Demócrata Cristiano.
PPS	Partido Popular Salvadoreño.
UCA	Universidad Centroamericana (Jesuitas).
UDN	Unión Democrática Nacionalista (ligada al PCES).
UGB	Unión Guerrera Blanca.
UND	Unión Nacional Opositora.
UTC	Unión Trabajadores del Campo.

Honduras

ALIPO	Alianza Popular (facción del Partido Liberal).
ANACH	Asociación Nacional de Campesinos de Honduras.
CGT	Confederación General de Trabajadores.
COHEP	Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
CONSUFA	Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.
CTH	Confederación de Trabajadores de Honduras.
DIN	Departamento de Investigaciones Nacionales (policía Secreta).

FECORAH	Federación de Cooperativas Agrarias de Honduras.	UNO
FENAGH	Federación Nacional de Agricultura y Ganaderos de Honduras.	URB
FESITRAN	Federación Sindical de Trabajadores del Norte.	
FMLH	Frente Morazanista de Liberación de Honduras.	
INA	Instituto Nacional Agrario.	Costa Rica
OSOS	Organización Secreta de Oficiales Subalternos.	
PCH	Partido Comunista de Honduras.	CGT
PDCH	Partido Demócrata Cristiano Hondureño.	CDT
PL	Partido Liberal.	PC
PN	Partido Nacional.	FAC
PR	Partido Revolucionario.	PLN
PS	Partido Socialista.	PU
SITRASFCO	Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruit Co.	PRU
SITRATERCO	Sindicato de Trabajadores de la Tela Road Co.	
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras.	
UNC	Unión Nacional de Campesinos.	

Nicaragua

AMNLAE	Asociación de Mujeres Nicaragüesas Luisa Amanda Espinoza.
ANDEN	Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses.
ANS	Asociación de Niños Sandinistas.
ATC	Asociación de Trabajadores del Campo.
CAUS	Central de Acción Unidad Sindical.
CDS	Comité de Defensa Sandinista.
CGTI	Confederación Generalde Trabajadores Independientes.
COSEP	Consejo Superior de la Empresa Privada.
CST	Central Sandinista de Trabajadores.
CTN	Central Trabajadores de Nicaragua.
CUS	Confederación Unida de Sindicatos.
FAD	Fuerzas Armadas Democráticas.
FAO	Frente Amplio de Oposición.
FPN	Frente Patriótico Nacional.
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional.
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria.
JS-19	Juventud Sandinista 19 de Julio.
MDN	Movimiento Democrático Nicaragüense.
MPS	Milicia Popular Sandinista.
MPU	Movimiento Pueblo Unido.
PCD	Partido Conservador Demócrata.
PCS	Partido Cristiano Social.
PLI	Partido Liberal Independiente.
PPCS	Partido Popular Cristiano Social.
PSD	Partido Social Demócrata.
UCA	Universidad Centroamericana (Jesuitas).
UDEL	Unión Democrática de Liberación.
UDN	Unión Democrática Nicaragüense (anticomunista).

